AMÉRICA LATINA SIGLO XXI

¿UNA REVOLUCIÓN EN MARCHA?



Osvaldo Coggiola

INDICE

INTRODUCCIÓN

Con el inicio del nuevo siglo, América Latina volvió paulatinamente a ser uno de los centros de la atención política mundial. La emergencia de una nueva "ola de izquierda" en el continente no es un fenómeno episódico, pues hunde sus raíces en el fracaso, económico y político, de los regímenes llamados neoliberales, y expresa la crisis de la política mundial del imperialismo dominante, los EEUU. En la raíz del fenómeno encontramos la continuidad y profundización de la crisis mundial de la producción capitalista, y la reacción, desigual pero enconada, de las masas latinoamericanas a la degradación de sus condiciones de existencia sociales y nacionales.

Es significativa la reacción del renombrado (y conservador) historiador inglés Niall Ferguson a los recientes cambios políticos latinoamericanos, comparándolos con la atención que la prensa mundial dispensa a acontecimientos como las caricaturas "anti-islámicas" dinamarquesas: "(Estas) son un desvío de una tendencia histórica mucho más importante. Los EEUU se fijan en el mundo musulmán, mientras la región que queda mucho más cerca de casa está solapadamente escapando al control americano. 'Quién perdió América Latina?', es la pregunta que el próximo candidato demócrata a la presidencia de los EEUU está legítimamente capacitado a hacer".

Y continua: "Desde la elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela, en 1998, hubo una drástica erosión de la influencia de los EEUU al sur del Río Grande... Desde el 11 de septiembre más de un siglo de política externa consistente de los EEUU se fue por la ventana. Este es el gran hecho del 2006, y nadie le está prestando atención. Los nuevos regímenes en América Latina son retrocesos a los viejos tiempos de la economía anti-global... (Las caricaturas) parecen justificar la prioridad a la 'guerra larga' contra el terrorismo islámico. ¿Pero figurará en los libros de Historia? Lamento, mi apuesta es por la pérdida de América Latina".[1]

Jorge Castañeda buscó calmar los ánimos (asustados) de los portavoces del conservadorismo capitalista, afirmando que, en realidad, hay dos izquierdas en liza en la actual América Latina: la primera "con raíces radicales, está hoy moderna y abierta", la segunda es "cerrada y fuertemente populista". Ni hace falta decir a quién se refiere. Y concluye recomendando al gobierno de los EEUU (del que Castañeda es casi un consejero declarado) "una acción más osada, un abordaje de estadista", que consistiría en "fomentar la izquierda correcta", "distinguir entra la izquierda sensata y la irresponsable, apoyar a la primera y contener a la segunda".[2] Para George Bush, que destrabó las negociaciones sobre ALCA usando al presidente brasileño Lula, y que ya tomó nota de su papel moderador (así como de Kirchner) en Venezuela y Bolivia, esto no debe ser ninguna novedad.

Kenneth Maxwell, un historiador inglés que se asoció al *establishment* político norte-americano en tiempos de Bill Clinton, criticó el abordaje simplista de Castañeda, caracterizándolo como "perezoso", "instrumental", y hasta de "versión sofisticada de la vieja idea del *eje del mal*", adaptada para "gringos liberales" (sic). Estaríamos, para Maxwell, viviendo un "viraje histórico (cuando) nuevas coaliciones y nuevos discursos políticos emergen". Para Maxwell, lo que sucede en Bolivia no se deja pensar como una victoria de la "mala izquierda", sino que seria "un verdadero terremoto", debido al

[1] FERGUSON, Niall. Quer uma encrenca histórica? Olhe para o Sul. *Los Angeles Times / O Estado de S. Paulo*, 15 de febrero de 2006.

[2] Ver: CASTAÑEDA, Jorge. Bem me quer, mal me quer. *Folha de S. Paulo*, Caderno Mais! 28 de mayo de 2006; e Latin America's turn to the left. *Foreign Affairs* vol. 85, n° 3, Nueva York, mayo-junio de 2006.

acceso al poder de la “mayoría indígena”. La realidad latinoamericana no sería “binaria y simplista”, sino “complicada e, infelizmente, imprevisible”.[3]

El inefable ex presidente Fernando Henrique Cardoso terció en el debate. En busca de originalidad, recusó la existencia de un viraje a la izquierda en América Latina, diciendo que hay sólo, “en algunos países, un anti-americanismo con un retorno gradual al populismo”, contrapuesto a la “integración política de América del Sur con base en la democracia política y la economía de mercado” (que el propio FHC habría prohijado en sus ocho años de mandato).[4]

El portugués Durão Barroso, presidente de la Unión Europea, abandonó por un momento la flema diplomática de su cargo para alertar que, en América Latina, se está viviendo una onda populista “nefasta”, consistente en “la simplificación de problemas complejos y la manipulación de instintos negativos”, en lo que sería un retorno a un “pasado de nacionalismo extremo, de populismo, de caudillismo” (para el portugués, el nacionalismo latinoamericano habría sido el equivalente del fascismo europeo).[5] La confusión reinante en los voceros del establishment es real, y refleja la división existente en la “comunidad internacional”(de los negocios) a respecto de América Latina.

Las cuestiones fundamentales de la crisis latinoamericana escapan a todos ellos, evidenciando las limitaciones e intereses de clase de sus puntos de vista. El marco histórico reciente de la radicalización política en América Latina fue la crisis revolucionaria desatada en Argentina a partir de diciembre del 2001, que combinó una clara bancarrota capitalista con una reacción excepcional y organizada de las masas, de alcance histórico. En su rastro se produjeron la victoria electoral de Lula y el PT en Brasil, en finales del 2002; las insurrecciones populares en Bolivia, en 2003 y 2005, la elección de Evo Morales en ese país; la radicalización del proceso venezolano que, gracias a la importancia petrolero-energética del país caribeño-sudamericano, ganó proyección continental y mundial; la continuidad, en fin, de la lucha guerrillera en Colombia, sólo nombrando los fenómenos más importantes.

Los primeros meses del nuevo siglo, sin embargo, ya habían sido testigos de una agudización de la lucha de clases, de crisis políticas de fondo y de una febril intervención política de los EEUU. El levantamiento indígena-campesino en Ecuador que provocó la salida de Mahuad; la larga y combativa huelga de los estudiantes de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma) en México; las fracturas en el movimiento de Hugo Chávez en Venezuela, en las filas del ejército y en el propio gobierno; las grandes movilizaciones obreras y populares contra Fujimori en Perú; las masivas movilizaciones de campesinos sin tierra en Brasil y en Paraguay; las huelgas generales y la movilización de los piqueteros en la Argentina; la “guerra del agua” en Cochabamba (Bolivia), que rápidamente se convirtió en una rebelión nacional, extendiéndose a los campesinos, al movimiento obrero, a los estudiantes y hasta a las bases policiales, que se sublevaron en La Paz; la rebelión contra la privatización de la electricidad en Costa Rica, y la pueblada contra los *tarifazos* en Honduras; todas estas movilizaciones y crisis políticas formaron un cuadro radicalizado en América Latina, ya en el año 2000.

---

[3] MAXWELL, Kenneth. Fora do eixo. *Folha de S. Paulo*, Caderno Mais! 28 de mayo de 2006.

[4] CARDOSO, Fernando H. Esquerda e populismo na América Latina. *O Estado de S. Paulo*, 4 de junio de 2006.

[5] DURÃO BARROSO, José Manuel (entrevista). Europa teme populismo nefasto na América Latina. *Folha de S. Paulo*, 3 de junio de 2006.

La ola de movilizaciones populares no enfrentaba dictaduras militares sino a los regímenes democratizantes diseñados por el imperialismo y los explotadores locales. Es en estos procesos que han surgido las formas de organización más avanzadas de las masas para la lucha, como los parlamentos en Ecuador y de la Coordinadora en Bolivia; o en los piquetes en Argentina. La extraordinaria lucha de los estudiantes de la UNAM, en México, que desde mediados de 1999 mantuvo paralizada a la UNAM por más de diez meses se sostuvo en torno al CGH (Comité General de Huelga), entre otros ejemplos.

Ya en el nuevo siglo, se verificó una amplia oleada de lucha obreras, campesinas, indígenas y populares, con epicentro en la convulsionada región andina, pero que abarcó a otros países: Costa Rica, Paraguay, Argentina, un nuevo levantamiento indígena en Ecuador a principios de febrero; el paro general del 22 de marzo de 2001 en Colombia; la incesante agitación en Bolivia; los importantes paros petroleros, del acero y los maestros que marcaron el fin de la paz social en Venezuela; la virtual agonía del gobierno y la masiva movilización campesina en Paraguay...

En algunos de los procesos más agudos surgieron nuevas formas de organización y métodos radicalizados de lucha: en Ecuador, sobre la base del gran levantamiento campesino e indígena del 21 de enero del 2000 se conformó un Parlamento Popular. En Bolivia, la Coordinadora por el Agua y la Vida centralizó la rebelión de Cochabamba y en septiembre del 2000 un nuevo levantamiento campesino conmovió al país. En Argentina, los masivos paros generales y el ascendente movimiento de desocupados "piqueteros", generalizando el arma de los piquetes y cortes de ruta, mostraron la extensión de la protesta.

Las masas comenzaban a labrar con sus propias manos peldaños en la construcción de una subjetividad superior para el movimiento obrero y popular. Para el marxismo revolucionario, la esencia del problema radica en la preparación subjetiva del proletariado y sus aliados para hacer frente a las tareas que le plantea la época: las tareas de la revolución obrera y socialista a escala mundial. Nuestro momento histórico se caracteriza por la contradicción extremadamente aguda entre la madurez de las condiciones objetivas el agotamiento de las posibilidades históricas del capitalismo y la polarización de la sociedad entre explotados y explotadores- y el retraso del factor subjetivo.

Esto no es nuevo: la conciencia de la sociedad siempre queda rezagada con respecto a las condiciones objetivas del desarrollo, y esto lo vemos reflejado a escala gigantesca en el destino del proletariado. Es ante las grandes convulsiones que sufre la humanidad periódicamente que, al quedar al desnudo la necesidad aguda, profunda e impostergable, de la revolución. El factor subjetivo puede revolucionarse y ponerse en línea con las necesidades históricas. La subjetividad no es un simple reflejo del desarrollo automático de las condiciones objetivas. El movimiento obrero y de masas necesita avanzar en su preparación material e ideológica durante las etapas anteriores a la revolución.

Hoy, sin embargo, en el retraso de la conciencia respecto a la existencia pesan gravosamente las secuelas de décadas de domínio reformista y stalinista, nacionalista y socialemócrata, y las derrotas consecuentes, sobre la clase obrera internacional, la subordinación de las viejas organizaciones dirigentes al orden burgués. Los trabajadores llegan a tener escasa confianza en sus propias fuerzas.

En los sectores más conscientes y activos no son visibles la revolución social como perspectiva ni la colosal fuerza social y política que representa en potencia el proletariado junto al conjunto de las masas oprimidas. Las corrientes marxistas revolucionarias poseen poca influencia. La renovación de la conciencia de clase de la

clase obrera y los explotados es un proceso difícil, desigual y contradictorio, no exento de derrotas y fracasos.

Por este camino, el movimiento obrero deberia avanzar en la reconstrucción en un sentido revolucionario del conjunto de sus organizaciones, sus métodos de acción, su ideología y su conciencia, en la selección de una nueva dirección, que le coloquen en las mejores condiciones posibles para los futuros enfrentamientos decisivos de la lucha de clase.

Desde el punto de vista de la lucha de clases, atravesamos una etapa preparatoria a nivel internacional, en la cual no predomina todavía el enfrentamiento abierto entre la revolución y la contrarrevolución (aunque van reuniéndose las condiciones materiales para una eclosión superior). La clase obrera no ocupa el centro de la escena política, no hay aún una amplia radicalización socialista revolucionaria, aunque los procesos más agudos plantean cada vez más la alternativa entre revolución y contrarrevolución.

¿Qué muestran las grandes luchas de masas a que hemos asistido en América Latina? Un rasgo de gran importancia es que algunas de sus expresiones más avanzadas muestran cómo, en los grandes procesos de movilización social, se hace sentir la necesidad de formas más amplias y democráticas de organización para la lucha y de métodos más radicales de acción. En estas tendencias se manifiesta la inclinación de las masas a tomar en sus propias manos los problemas más acuciantes, a encarar los grandes problemas nacionales, a liberarse de la sumisión a los mecanismos normales de dominación de la burguesía y su Estado.

Estas experiencias apuntan hacia un enfrentamiento de clases mucho más desarrollado, de la autoorganización y la democracia directa para la lucha. De esta manera, las han comenzado a sembrar valiosos jalones todavía parciales, inacabados, en el camino de una recomposición progresiva de su subjetividad revolucionaria.

En cuanto al método, hay dos grandes líneas de interpretación: una visión concibe las acciones espontáneas de las masas como pasos primitivos o elementales de protesta, sin continuidad o perspectiva propias, que deberán dejar el lugar a formas más elevadas e institucionalizadas de lucha, entendido esto como el accionar sindical, por un lado, y político - parlamentario o municipal - por otro.

Esa concepción es funcional a las necesidades de las direcciones reformistas y populistas, amarradas desde hace mucho (o recientemente) a la sobrevivencia del régimen capitalista. Otra visión asigna una primacía unilateral a la espontaneidad. Se impacta de manera impresionista, tomando estas formas en sí mismas, como algo dado. Esta línea interpretativa, corporificada en la teoría de los "nuevos movimientos sociales" (NMSs), es funcional a las concepciones autogestionarias, basistas, no dilucida sus contradicciones internas ni el papel de las direcciones existentes y es contraria a desarrollar su potencial revolucionario.

Desde el último tercio de los años 1990, América Latina se ha convertido en un laboratorio de fenómenos sociales y políticos, al calor de la tendencia ascendente de la lucha de clases. En la base están las profundas transformaciones económicas y sociales que impuso la penetración imperialista durante la década precedente. En las alturas, la crisis política y la creciente inestabilidad que invade a la región, socavando a los regímenes políticos y llevando a la ingobernabilidad que temen tanto la burguesía y el imperialismo. Este es el terreno en que sectores avanzados de las masas latinoamericanas están realizando una importante acumulación de experiencias política y de lucha.

Hay un vasto y profundo proceso de emergencia de los oprimidos y una intensificación de la lucha de clases, que ha abierto situaciones prerrevolucionarias en varios países,

como en Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay o Argentina, con levantamientos de rasgos insurreccionales como los de Ecuador y Bolivia, y múltiples manifestaciones de protestas y movilización social.

El campesinado y las masas indígenas del continente protagonizan un vasto ascenso desde México a Chile, desde Colombia a Brasil, que ha fortalecido y renovado a poderosas organizaciones de masas, desde el MST brasileño a la CONAIE en Ecuador o la FNC en Paraguay. Hoy este proceso tiende a combinarse con luchas urbanas y obreras, como muestran Argentina y Bolivia.

Vastos sectores populares participan de este proceso, desde pequeños productores amenazados por la ruina, sin techo, a capas medias que se movilizan tras reclamos democráticos. Diversas luchas estudiantiles, desde México a Chile, muestran la inquietud en sectores de las nuevas generaciones.

A diferencia de las décadas de 1980 y 1990, los procesos de mayor radicalización tienen por teatro ahora a América del Sur. Esta está compuesta por doce países, dentro de un espacio contiguo, con 360 millones de habitantes, cerca del 67% de toda América Latina y el equivalente al 6% de la población mundial. Su población es mayor que la de EEUU (293 millones), su territorio, cerca de 17 millones de km2, es el doble del territorio estadounidense (9,6 millones de km2), posee una de las mayores reservas de agua dulce y biodiversidad del mundo, e inmensas riquezas minerales, pesca y agricultura.

Un nuevo movimiento obrero comienza a dar sus primeros pasos al calor de los procesos de movilización social y crisis política, si bien la clase obrera no ha entrado aún en escena como fuerza social autónoma, es parte de este proceso. Desde Costa Rica y Colombia hasta Argentina y Uruguay se han registrado paros nacionales, así como centenares de huelgas, luchas de resistencia o movilizaciones parciales, mostrando las tendencias a su recuperación luego de años de duros golpes bajo la ofensiva capitalista.

Una nueva generación comienza a despertar a la vida política, en las luchas universitarias y estudiantiles como en México y Chile, en las movilizaciones democráticas como en Perú o Paraguay, o reflejando al movimiento juvenil anticapitalista internacional que irradia desde los países centrales. En ella, buscando respuestas profundas a la crisis general de la sociedad, se incuban los elementos de una nueva vanguardia que da sus primeros pasos hacia la radicalización política.

Esto se expresó abiertamente en los levantamientos en Ecuador y Bolivia y en la gran lucha contra el Combo energético en Costa Rica. En las grandes acciones, que concitan la energía y espontaneidad de las masas, se expresan las tendencias a superar la fragmentación y dispersión en las filas de la clase obrera y de las masas pobres, así como a la convergencia del campo y la ciudad, planteando de hecho la necesidad de la alianza obrera y campesina.

En los levantamientos, rebeliones, bloqueos de caminos y enfrentamientos con las fuerzas represivas, en la lucha por el control del territorio que implican los bloqueos o en el embrión de autodefensa que son los piquetes, se manifiestan las tendencias hacia la insurrección revolucionaria.

Pero el imperialismo maniobra políticamente para capear el temporal, que es un aspecto de su crisis política mundial. Aprovecha, para ello, la calidad y los defectos de las nuevas direcciones políticas, los errores políticos y la insuficiencia teórica e ideológica de las nuevas vanguardias luchadoras. El análisis de la dinámica política reciente del continente se impone, entonces, como cuestión impostergable para la superación de los nuevos impasses políticos de la revolución latinoamericana.

1. ENTRE LA "DÉCADA PERDIDA" Y LA GLOBALIZACIÓN

El cuadro de grandes crisis políticas y profundas movilizaciones de masas en América Latina es la consecuencia de los devastadores golpes que asestara la crisis mundial a las débiles economías latinoamericanas y a sus sometidos regímenes políticos. La caída de los precios de las materias primas y el retiro de los capitales especulativos que inundaron el continente en la década de 1990 provocaron recesiones, elevadas tasas de desempleo, devaluaciones y quiebra de los sistemas fiscales y bancarios.

En relación a las materias primas, el detrioro de los términos de intercambio, entre 1960 y 1995, fue el siguiente para diversos productos: estaño (-50,9%), tabaco (-73,6%), te (-80,1%), café (-41,7%), cobre (-24,7%), algodón (-43%), cacao (-57,9%), zinc (-26,9%), banana (-46,1%), azúcar (-24,2%).[6] Según las Naciones Unidas, la relación entre los precios de la canasta de productos exportados por el "Sur" y los importados del "Norte" pasó del índice 100 en 1980 al índice 48 en 1992. Así, si en 1980, 100 unidades del Sur eran intercambiadas por 100 unidades del Norte, en1992, esas mismas 100 unidades del Sur permitían comprar solamente 48 unidades del Norte. Para los 15 países de renta media fuertemente endeudados - Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, México, Marruecos, Nigeria, Perú, Filipinas, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia - las pérdidas totales debido al deterioro de los términos de intercambio se elevaron, en el período 1981-1989, a US$ 247,3 mil millones.[7]

La consecuencia fue una acelerada pauperización de las masas latinoamericanas: un informe de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y Caribe) señalaba que "aunque entre 1990 y 1997, la pobreza de la región disminuyó del 41 al 36%, la crisis del bienio 1998/99 hizo retroceder esos índices, y agudizó la desigualdad social en el continente".[8]

La caída de los precios internacionales de los productos agropecuarios y las recesiones internas, que cerraron los mercados para la producción agraria, explican el gran desarrollo del movimiento de lucha campesino, en países como Ecuador, Colombia, Bolivia y Paraguay.

El retroceso económico fue tan agudo que arrastró a los países considerados como modelos por el propio imperialismo: "El aspecto más perturbador de la declinación de Perú y Bolivia es que hasta hace poco esos países eran vistos como ejemplos relativamente exitosos. Ambos adhirieron a la doctrina económica liberal, privatizaron industrias estatales, liberalizaron el comercio y siguieron políticas fiscales y monetarias austeras".[9] Incluso la excepcional recuperación de los precios del petróleo no pudo sacar a Venezuela y a Ecuador, grandes exportadores de crudo, del marasmo económico.

La crisis golpeó con todas sus fuerzas a los raquíticos regímenes políticos de la región. Los partidos tradicionales en los países más débiles casi desaparecieron (APRA y Acción Popular en Perú; COPEI y Acción Democrática en Venezuela; liberales y conservadores en Ecuador). Lo mismo sucedió con el MNR y el MIR en Bolivia y, hasta cierto punto, con el Partido Colorado paraguayo. El derrumbe del PRI mexicano, previo a su derrota en las elecciones presidenciales, formó parte del mismo proceso.

En 1990, todos los indicadores económicos de América Latina manifestaban el estancamiento de las fuerzas productivas sociales. El ingreso *per capita* cayera a los niveles de 1970; en la década de 1980, el crecimiento económico estuvo atrás del

[6] THE WORLD BANK. *World Resources*. Nueva York, 1998.

[7] TOUSSAINT, Eric. *A Bolsa ou a Vida*. San Pablo, 2002, p. 144.

[8] *Gazeta Mercantil Latinoamericana*, San Pablo, 22 de mayo de 2000.

[9] *Financial Times*, Londres, 26 de abril de 2000.

crecimiento demográfico; la inversión cayó de 25% del PIB en los años 1970, a 16,5 % en 1987; la deuda externa total subió de US$ 100 mil millones en 1980 a US$ 420 mil millones en 1990; la producción de alimentos se redujo absolutamente en 17 de 23 países latinoamericanos entre 1981 y 1987.

AMÉRICA LATINA: DESEMPLEO Y TASA MEDIA DE CRECIMIENTO 1990 – 2001 (TASAS ANUALES)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	1990-2000	2000-2001
Países del Norte														
Costa Rica	5,4	6,0	4,3	4,0	4,3	5,7	6,5	5,9	5,4	6,0	5,3	5,8	-0,2	9,4
Guatemala	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
El Salvador	9,9	7,5	8,7	9,9	7,7	7,6	7,7	7,5	7,6	8,0	6,6	...	-4,3	...
Honduras	6,9	7,1	5,1	5,6	4,0	6,6	6,6	5,2	5,8	3,7	...	...	-2,8	...
México	2,7	2,7	2,8	3,4	3,7	6,3	5,5	3,7	3,3	2,5	2,2	2,4	-2,4	9,1
República Dominicana	...	19,6	20,3	19,9	16,0	15,8	16,7	15,9	14,3	...	15,3	...	-3,4	...
Países del Sur														
Argentina	7,3	5,8	6,7	10,1	12,1	18,8	18,4	15,7	12,9	15,1	15,4	17,2	7,2	8,6
Bolívia	7,2	5,9	5,5	5,9	3,1	3,6	4,2	4,4	...	8,0	7,6	...	0,3	...
Brasil	4,3	4,8	4,9	5,4	5,1	4,6	5,4	5,7	7,6	7,7	7,1	6,2	5,1	...
Chile	7,4	7,1	6,2	6,4	7,8	6,6	5,4	5,3	6,4	9,7	9,2	9,5	2,2	3,3
Colômbia	11,0	10,8	11,2	9,1	9,9	9,0	11,6	13,4	15,9	19,9	17,2	18,7	5,1	8,7
Paraguay	6,6	5,1	5,3	5,1	4,4	5,6	9,2	6,4	13,9	9,4	10,0	...	4,2	...
Peru	8,5	5,8	9,4	9,9	8,8	7,9	7,9	8,4	8,2	8,3	7,0	9,5	-1,7	35,7
Uruguay	9,2	8,9	9,0	8,4	9,2	10,8	12,4	11,6	10,2	11,8	13,9	15,6	4,0	13,2
Venezuela	11,0	10,1	8,1	6,8	8,9	10,3	11,8	11,4	11,3	14,9	13,9	13,9	2,4	0,0

Fuente: OIT (2001).

La llamada "década perdida" de 1980 (que fue también la década de la "transición democrática")[10] también dejó, como saldo en América Latina, un retroceso social sin precedentes.[11] Este no fue revertido en la "década de la globalización", la última década del siglo XX.

De 1989 a 1999 el número de desempleados aumentó en 11,1 millones, con la tasa de desempleo abierto saltando de 4,8% da PEA a 9,2%, según la OIT. Caiu também o emprego assalariado. En 1989, 57,8% del total de la ocupación latinoamericana eran asalariados. En 1999, ese porcentaje había caído a 51%, con la pérdida de 4,7 millones de empleos, siendo 3 millones sólo en el sector industrial. El ingreso *per capita* medio de los latinoamericanos, en relación a los norteamericanos, era de 33,5% en 1980, cayendo a 22,9% en 1990, y a menos de 20% en la virada del siglo. En 2000, más del 36% de las familias latinoamericanas (220 millones de personas) vivía abajo de la línea de pobreza.

[10] Ver: MIDDLEBROOK, Kevin J. e Carlos Rico. *The United States and Latin America in the 1980s*. Contending perspectives of a decade of crisis. Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1986.

[11] Sobre el costo social de las llamadas "reformas neoliberales", ver: KON, Anita et al. *Costos Sociales de las Reformas Neoliberales en América Latina*. Caracas. FCES/UCV e Prolam/USP, 2000.

Los cuadros que siguen atestiguan que, a pesar de las caídas de la pobreza absoluta en algunos países, se verifica la persistencia, o aumento en algunos casos (siendo Argentina el más notorio) de la indigencia económica, y el aumento general de la inseguridad laboral y asistencial.

POBLACIÓN POBRE E INDIGENTE NA AMÉRICA LATINA (1980-1997), EN CIFRAS TOTALES (MILES) Y EN PORCENTAJE

	Pobres			**Indigentes**		
	Total	**Urbana**	**Rural**	**Total**	**Urbana**	**Rural**
1980	135.900	62.900	73.000	62.400	22.500	39.900
1990	200.200	121.700	78.500	93.400	45.000	48.400
1994	201.500	125.900	75.600	91.600	44.300	47.400
1997	204.000	125.800	78.200	89.800	42.700	47.000

Fuente: CEPAL. *Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe*. 1999.

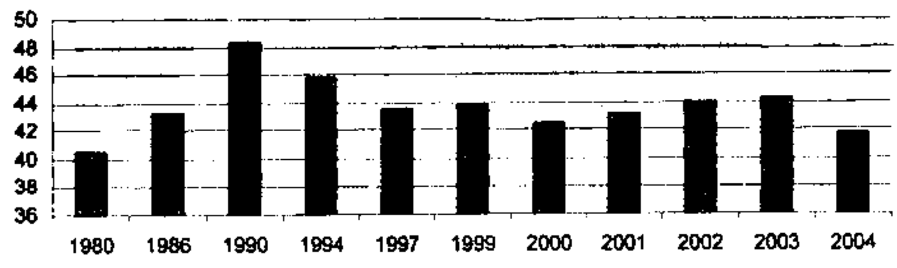
	Pobres			**Indigentes**		
	Total	**Urbana**	**Rural**	**Total**	**Urbana**	**Rural**
1980	35	25	54	12	9	28
1990	41	36	58	18	12	34
1994	38	52	56	16	11	34
1997	36	30	54	15	10	31

MAGNITUD DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA EN AMÉRICA LATINA
(PORCENTAJES 1990-1999)

País		Familias debajo de la	Familias abajo de la
	Ano	línea de pobreza	línea de indigencia
Países del Norte			
Costa Rica	1990	23,7	9,8
	1999	18,2	7,5
Guatemala	1998	53,5	28,0
El Salvador	1995	47,6	18,2
	1999	43,5	18,3
Honduras	1990	75,2	54,0
	1999	74,3	50,6
México	1989	39,3	14,0
	1998	38,0	13,2
República Dominicana	1997	32,4	12,8
Países del Sur			
Argentina	1994	12,3	2,1
	1999	16,3	4,3
Bolívia	1989	-	-
	1999	54,7	32,6
Brasil	1990	41,4	18,3
	1999	29,9	9,6
Chile	1990	33,3	10,6
	1998	17,8	4,7
Colombia	1991	50,5	22,6
	1999	48,7	23,2
Paraguay	1994	42,4	14,8
	1999	51,7	26,0
Peru	-		
	-		
Uruguay	1990	11,8	2,0
	1999	5,6	0,9
Venezuela	1990	34,2	17,7
	1999	44,0	13,9

Fuente: *Panorama Social da América Latina 2001* - CEPAL (2001).

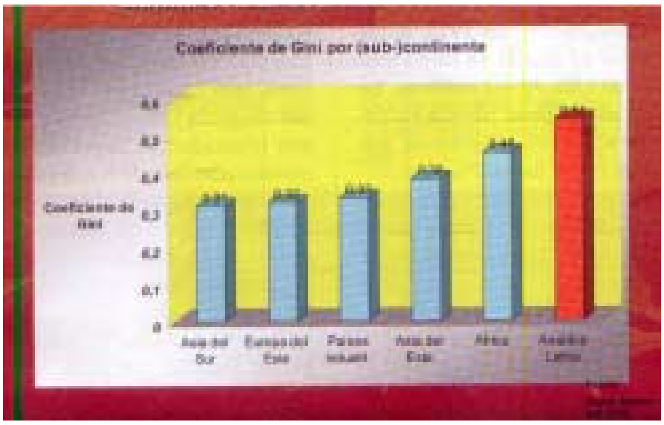
AMÉRICA LATINA: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ABAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA



AMÉRICA LATINA: CONTRIBUCIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL, SEGÚN FORMA DE INSERCIÓN LABORAL 1990-2000 (PORCENTAJES)

	Sector Informal			Sector Formal	
Países/Años	Total	Servicio doméstico	Empresas pequeñas	Empresas	Total
América Latina					
1990	29,2	17,6	34,7	80,6	66,6
2000	26,9	23,1	29,3	79,0	64,2
Países del Norte					
Costa Rica					
1990	51,7	40,0	55,9	88,6	78,5
2000	46,7	38,7	49,9	86,5	74,9
México					
1990	12,7	4,2	15,3	72,9	58,5
2000	14,1	11,7	14,8	82,1	66,4
Países del Sur					
Argentina					
1990	24,9	7,8	38,1	86,2	61,9
1998	21,7	6,3	26,4	70,9	55,8
Brasil					
1990	38,7	24,9	45,8	86,1	74,0
1999	32,3	27,1	36,8	82,0	67,0
Chile					
1990	59,0	51,7	63,6	86,3	79,9
2000	50,9	53,8	44,9	81,2	62,8
Colombia					
1990	25,7	12,5	27,1	77,2	62,6
2000	31,6	31,2	31,8	82,2	66,1
Peru					
1990	22,1	17,3	23,6	66,6	53,6
2000	15,4	16,8	14,8	67,7	50,0
Uruguay					
1990	63,6	44,8	73,0	88,9	82,6
1999	94,4	95,2	93,8	97,8	97,0
Venezuela					
1995	22,7	17,6	23,6	81,0	70,6
2000	28,1	30,3	27,6	81,3	69,9

El coeficiente Gini, que mide la llamada “desigualdad social” y la concentración de ingresos, muestra a América Latina en la peor situación mundial:



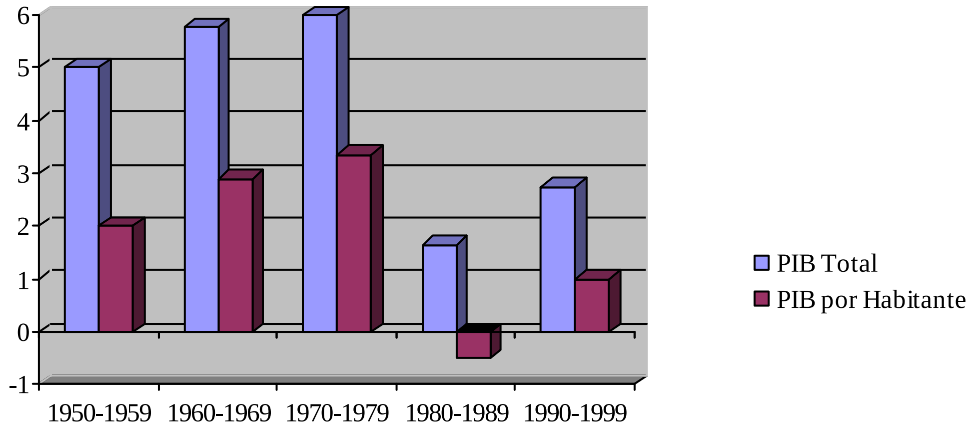
A partir de mediados de 1991 el fenómeno del ingreso de capitales extranjeros alcanzó toda América Latina. La entrada líquida total de capitales, que era en 1989 de 9,3 mil millones de dólares pasó a ser de 60,8 mil millones de dólares en 1992. Ese mismo fenómeno aconteció en Asia. Sin embargo, había un importante deterioro de la participación latinoamericana en el comercio mundial. Aun así, la década de 1990 culminó con el crecimiento más rápido del volumen de las exportaciones reales de la historia regional (8,9% entre 1990 y 1999) al que contribuyó especialmente la notable expansión de las exportaciones mexicanas. Se produjo también una diversificación, desigual, tanto en términos de productos como de destinos. Esta, sin embargo, no alteró decisivamente la dependencia estructural de los ingresos provenientes de los productos básicos y materias primas.

América Latina tuvo un débil desempeño económico durante los años 1990, si consideramos la necesidad de compensar la grave caída del producto (–1,0%) durante los años 1980. Además, se han acentuado los grados de divergencia entre los países y las subregiones del área. La zona más negativamente afectada ha sido el conjunto formado por América Central y el Caribe Latino, y especialmente, la Región Andina. Si tomamos los datos de crecimiento del PIB *per cápita* real calculados por CEPAL a partir de valores de 1995, se puede apreciar una cierta tendencia positiva durante la década de 1990, que se corrobora con la tasa promedio anual de 1,5% para el conjunto de la región entre 1991 y 2000.

Esa tendencia tuvo dos momentos de inflexión, el primero en el año 1995, marcado por el llamado "efecto tequila" de fines de 1994, que desde México arrastró al conjunto de la región. El segundo fue el año 1999, esta vez causado por la caída de los mercados asiáticos durante el año anterior, y que afectó principalmente al Cono Sur y a la Región Andina. Ambas situaciones, que llevaron a tasas negativas (-0,4% y –0,9% respectivamente), reflejan que la región continuó siendo muy vulnerable tanto a las contracciones de la demanda mundial como a la volatilidad de los flujos de inversión de cartera.

Comparando la tasa promedio de 1,5% anual de crecimiento económico, para 1991-2000, con series históricas, han existido promedios muy superiores para algunas décadas anteriores a 1980. Un cálculo dedicado al período 1928-1980 con base en precios en dólares de 1970, al tipo de cambio oficial, señala una tasa de crecimiento del PIB *per cápita* de 2,1%, a pesar de las terribles secuelas de la primera mitad de la década de 1930, fruto de la Gran Depresión.

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE EN AMÉRICA LATINA (1950-1999)



La literatura económica concede rendimientos aún superiores al ciclo llamado de "substitución de importaciones", incluso por sobre el 5% para el período 1945-72. Según la CEPAL, los países en desarrollo necesitarían incrementar sostenidamente su PIB *per cápita* en términos reales a tasas iguales o superiores al 4% anual para reducir significativamente la brecha con los países llamados "desarrollados". La crisis, en realidad, significó un gran incremento de la brecha económica entre América Latina y las metrópolis imperialistas, sin tener en cuenta la profundización de las divergencias entre países y subregiones. En general, el promedio de 1,5% de crecimiento para los años 90 no es señal de "despegue" después de la enorme caída de alrededor del –1% experimentada en la década precedente. El crecimiento logrado en los años 90 mal alcanza a compensar la grave caída de los años 80, un balance en general muy discreto.

Crecimiento: Tasa Promedio Anual					
	Cono Sur	México	Región Andina	América Media Latina	América Central/Caribe
1981-1990	-0,3	-0,2	-1,5	-0,9	-1,5
1991-2000	2,2	1,7	0,8	1,5	1,4

Hubo además diferencias notables en el desempeño entre sub-regiones durante la década de 1990. Sometido a fluctuaciones mucho mayores, se aprecia el desempeño de México, después de la crisis de 1995, y de la implantación del NAFTA (en 1994). América Central y el Caribe continúan en una situación de crisis económica sostenida desde 1980 hasta la actualidad, así como la Región Andina que, gracias a los ingresos del petróleo, ha tenido históricamente y debiera tener tasas de crecimiento muy superiores.

Perú y Bolivia muestran grandes fluctuaciones, y en el caso de Bolivia, una tendencia decreciente en los últimos años. La situación de Ecuador, Colombia y Venezuela es aún peor. Estos tres países muestran una década de virtual estancamiento o franca crisis, que contribuye a acentuar aún más el retroceso vivido en la década de 1980, con considerables tasas negativas durante 1998 y 1999. El significado de la evolución del PIB *per cápita* regional es mucho peor, si consideramos que entre 1970 y 1999 América Latina ha quedado rezagada respecto a regiones que a comienzos de la década de 1960

tenían una renta media inferior (países árabes, Europa del Este y Asia Oriental), superando actualmente sólo a África y a Asia Meridional.

Con respecto a la "reestructuración productiva", se dice que la región ha generado tres patrones básicos de especialización. El primero se distingue por el dinamismo de las exportaciones manufactureras con altos componentes de insumos importados, orientadas primordialmente hacia los Estados Unidos (este patrón es el que destaca en México, Centroamérica y algunos países del Caribe).

El segundo conjuga el predominio de exportaciones primarias o industriales de uso intensivo de recursos naturales hacia fuera de la región, con un comercio intra-regional más diversificado ("modelo" dominante en los países sudamericanos). Finalmente, en Panamá y en algunas economías pequeñas de la Cuenca del Caribe, se empezó a consolidar la exportación de servicios financieros, turísticos y de transporte, cuya aparición tuvo lugar a mediados de la década de 1980.

La *productividad total de los factores* redujo dramáticamente su ritmo de crecimiento desde un 0,7% promedio entre 1965-70 a un -2,4% promedio de 1981-90, y sólo volvió a mostrar un 0,4% promedio en 1991-95. Entre los mismos períodos, la productividad del trabajo varió desde un 3,2% a un -1,3% para finalmente recuperarse en un 1,1%. Del mismo modo, la región perdió impulso en términos de competitividad entre 1996 y 1999, especialmente en el caso del Área Andina, y se sitúa muy por debajo no sólo del Sudeste Asiático sino también de los "países emergentes" del Asia Meridional.

No se observaron impulsos que llenasen la brecha relativa abierta con otras "regiones emergentes" del planeta. Por último, tanto en riesgo financiero como económico se observa que hacia 1998 la región era más vulnerable que el Sudeste Asiático y menos vulnerable que el Asia Meridional. Internamente, los países del Área Andina presentaban mayor riesgo económico, pero los del Cono Sur presentaban elevadas tasas de riesgo financiero, encareciendo cada vez más el financiamiento externo.

2. EXPORTACIONES, DEUDAS Y LUCROS

En el comercio, mientras que el Cono Sur y América Central han logrado incorporar alguna proporción de productos industriales en sus exportaciones, la Región Andina ha mantenido inalterable su dependencia a una estructura exportadora fundamentalmente primaria, lo que ha estimulado mayores dosis de "vulnerabilidad externa". Si en el seno de la OMC se negoció la "ampliación del libre comercio", simultáneamente, los países desarrollados se dotaron de un agresivo proteccionismo que afectó, fundamentalmente, a las ramas en las que América Latina y el Caribe son fuertes exportadoras.

Importancia de los Estados Unidos en los distintos mercados de bienes (a)

Productos básicos (b)		Productos Manufacturados (b)	
Alimentos y tabaco		*Insumos industriales*	
Carne	9.0	Alcoholes	13.4
Trigo	1.9	Compuestos minerales orgánicos	24.8
Arroz	3.7	Oxidos	17.3
Maiz	3.3	Pigmentos	11.8
Cereales y harinas	14.1	Productos farmacéuticos	14.4
Legumbres frescas o congeladas	16.3	Fertilizantes	11.2
Nueces y frutas secas	16.5	Productos polimerización	11.0
Azúcar	10.0	Pesticidas	10.4
Café	25.2	Cuero (611)	9.4
Cacao	21.0	Manufacturas cuero (612)	13.5
Bebidas alcohólicas	24.6	Productos caucho	21.9
Tabaco manufacturado	3.8	Madera laminada	21.7
Semillas y frutas oleaginosas	3.1	Papel	18.6
Materias Primas Agropecuarias		Fibras textiles	7.9
Madera simplemente trabajada	32.2	Productos de algodón	20.4
Pulpa y desperdicios papel	16.1	Productos refractarios	14.9
Algodón	2.0	Vidrio	18.2
Minerales		Piedras semipreciosas	22.6
Plata	29.4	Pellets de hierro	22.1
Cobre	13.2	Hierro y acero formas primarias	22.9
Níquel	20.2	Planchas de acero (673)	19.0
Aluminio	17.9	Planchas de acero (674)	12.9
Plomo	15.7	Tubos de acero	16.3
Zinc	21.8	*Bienes de Capital y de Consumo final*	
Estaño	21.1	Herramientas metálicas	22.9
Mineral de hierro	6.9	Equipo doméstico base metálico	28.2
Minerales de metales básicos	17.4	Maquinaria procesamiento de datos	29.8
Energía		Accesorios oficina	26.5
Carbón	5.0	Maletas	26.5
Petróleo crudo	25.7	ropa de hombre	29.7
Derivados del petróleo	16.4	Ropa de mujer	32.3
Gas natural	13.8	Ropa no elástica	31.5
		Calzado	31.0
		Juguetes	36.0

(a) Según su participación en las importaciones mundiales de 1998.

(b) Sobre la base de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI) a nivel de tres dígitos.

Fuente: CEPAL, *"Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe. 2000-2001"*

Sobre el 34% y el 48% de las exportaciones a Japón, de Honduras, Costa Rica y Ecuador, pesan restricciones cuantitativas y derechos de temporada; entre un 61% y un 66% del valor de las exportaciones latinoamericanas de productos textiles y siderúrgicos a los Estados Unidos, está sometido a medidas no arancelarias de algún tipo; finalmente, y por lo que concierne al acceso al mercado de la Unión Europea, el 76% de las importaciones de textiles encuentran restricciones en el marco del Acuerdo Multifibras y el 56% de las de hierro y acero está sujeto a precios básicos de importación.

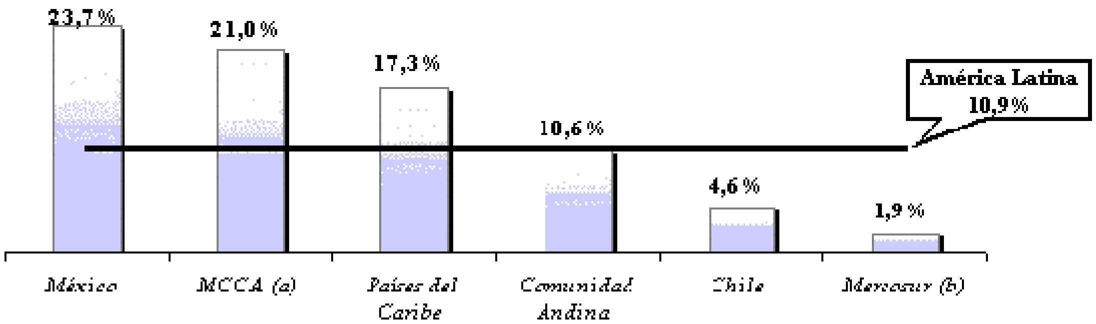
La dependencia de las exportaciones de América Latina del mercado norteamericano tiene su contrapartida por el lado de las importaciones: en el 2000, el 51% de las importaciones regionales provinieron de los EEUU. Las mencionadas importaciones

intraregionales alcanzaron el segundo lugar del total con un 15%, la Unión Europea representó un 14%, Asia (incluyendo Japón) un 12,2%. Y si se considera el origen territorial de las importaciones regionales, Brasil y México dominan el escenario. Mas, si excluye a México, las importaciones norteamericanas llegan sólo a un 27%, incrementándose las importaciones intra-regionales a un 30%, las europeas representan un 18% y las asiáticas un 14%. México, con su integración a la economía de Norte América, ha asumido una posición cada vez más distante de la realidad del resto de los países latinoamericanos.[12]

La participación en el PIB de las exportaciones latinoamericanas hacia los EEUU es determinante para muchos países de la región: México 23,7%, Mercado Común Centroamericano 21%, países del Caribe 17,3%, Comunidad Andina 10,6%, Chile 4,6% y MERCOSUR 1,9%, de acuerdo a datos de la CEPAL para el año 2000. Para comprender de mejor manera la importancia de los EEUU para el comercio exterior de América Latina, se puede observar la significación de dicho mercado para una serie de productos básicos y manufacturados, muchos de los cuales son básicos dentro del comercio exterior latinoamericano, y cuyos precios experimentaron un acelerado deterioro en el año 2001.

La disminución de la actividad económica norteamericana se proyecta al resto del mundo, tanto por la vía del comercio exterior como por efecto de bruscas fluctuaciones en las bolsas de valores, cuyas variaciones y caídas estarían procesando una reducción de la burbuja financiera internacional. Además, a nivel mundial se sufren los efectos de la larga y profunda recesión japonesa, así como de la desaceleración relativa de la economía europea, que tiene una mayor solidez propia gracias a que su dinamismo proviene de su mercado interno.

GRUPOS DE PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
PARTICIPACIÓN DE SUS EXPORTACIONES A LOS EEUU EN SU PIB



(a) Mercado Común Centroamericano (b) Mercado Común del Sur
Fuente: CEPAL, *"Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe. 2000-2001"*

El país que más depende de un sólo mercado es México, cuyas exportaciones a los EEUU significan el 88% del total, mientras que Chile presenta una mayor diversificación: EEUU 16%, América Latina y el Caribe 22%, Unión Europea 22%, Asia (incluyendo Japón) 29%. Brasil es otro país con un comercio diversificado:

[12] ACOSTA, Alberto. Retos de la *glocalización* para América Latina. *La Insignia*, Madrid, enero del 2003.

América Latina el Caribe 24%, EEUU 24%, Unión Europea 24%, Asia (incluyendo Japón) 12%.

Los países de la Comunidad Andina y del MCCA tienen una elevada dependencia del mercado norteamericano, 51% y 45% respectivamente, aunque sin llegar a los niveles de México. La fuerte dependencia en la región de la economía norteamericana es evidente. La desaceleración experimentada desde inicios del año 2001 generó una fase recesiva con diversos grados de intensidad en las distintas economías.

El crecimiento de las importaciones, con el acceso renovado a la financiación externa, se produjo a una mayor velocidad que el de las exportaciones, lo que ha tenido como consecuencia la ampliación del déficit comercial, que Alcanzó niveles similares a los de la década de 1970, y el consecuente deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Sólo en el quinquenio de 1991 a 1996 las importaciones desde Europa se incrementaron en un 130% mientras que las exportaciones a dichos mercados únicamente progresaron en un 13%. Del mismo modo, las exportaciones latinoamericanas al Este de Asia han crecido desde 1990 a una tasa anual del 9% frente al *ratio* de crecimiento del 25% anual de las importaciones.

Principales destinos de las exportaciones en el 2000

(en porcentajes)

América Latina y el Caribe			
CON MÉXICO		**SIN MÉXICO**	
América Latina y el Caribe	16%	América Latina y el Caribe	29%
Canadá	2%	Canadá	1%
Estados Unidos	60%	Estados Unidos	32%
Unión Europea	10%	Unión Europea	17%
Japón	2%	Japón	4%
Asia	3%	Asia	6%
Otros	6%	Otros	12%

MERCOSUR		COMUNIDAD ANDINA		CHILE	
América Latina y el Caribe	34%	América Latina y el Caribe	23%	América Latina y el Caribe	22%
Canadá	1%	Canadá	1%	Canadá	1%
Estados Unidos	20%	Estaos Unidos	51%	Estados Unidos	17%
Unión Europea	24%	Unión Europea	10%	Unión Europea	24%
Japón	3%	Japón	2%	Japón	14%
Asia	7%	Asia	3%	Asia	15%
Otros	11%	Otros	10%	Otros	7%

Fuente: CEPAL, *"Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe. 2000-2001"*

La inversión extranjera directa, en volumen, ha tendido a disminuir. Así, en el período 1970-1979, el 60% del flujo promedio anual mundial se canalizó hacia las economías "periféricas", mientras que en el quinquenio 1986-1990 dicho porcentaje bajó hasta el 34%. Mientras que, en los años 70, Brasil captó más de la mitad de la inversión extranjera directa que recibió América Latina, en la primera mitad de los 80, su participación cayó al 34%.

México mantuvo una participación relativamente constante. Después de la guerra de las Malvinas, hubo retiros de capital inglés en Argentina aunque, en términos generales,

Japón y Europa ganaron terreno en el conjunto de los países. Así mismo, en Chile hicieron su aparición nuevos inversionistas como Nueva Zelanda, Arabia Saudita y Australia y, en Centroamérica, irrumpieron con fuerza los capitales coreano y chino (taiwanés). Se operó también una pérdida de importancia relativa del sector industrial como destino de la inversión extranjera. Además, el capital invertido tuvo muy baja renovación y registró, consecuentemente, un significativo retraso tecnológico.[13]

Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en la materia, los países latinoamericanos que más se acercan a los niveles de Estados Unidos (66,10 líneas telefónicas por cada cien habitantes) son Uruguay con un *ratio* de no más de 27 líneas telefónicas por cada cien habitantes, Costa Rica y Argentina con veinte sobre cien. En el otro extremo, Haití no llega a abastecer ni en una línea telefónica a cien de sus habitantes mientras que Nicaragua y Honduras no disponen de más de cinco líneas para el mismo número de personas. Brasil, incluso en el ya lejano 1965, contaba con más líneas telefónicas por cada cien habitantes que Corea o Taiwán.

Los países asiáticos han cuadruplicado e, incluso, quintuplicado sus instalaciones en comparación con Brasil; los "tigres asiáticos" superan a toda la región latinoamericana. La demanda de computadores personales ha aumentado en los últimos años debido a la disminución de sus precios: aún así, la brecha que separa a los países de Latinoamérica y el Caribe de las naciones más desarrolladas de la OCDE sigue siendo elevada (a pesar de que el número de ordenadores conectados a Internet en la región aumentó con más rapidez que en cualquier otro lugar del mundo, multiplicándose el número de usuarios de la red por catorce veces durante el período comprendido entre 1995 y 1999.

América Latina manifiesta debilidades que van agrandándose de manera proporcional al nivel de incremento de las exigencias inherentes a la velocidad y la adaptabilidad ante el cambio científico y tecnológico. Así, por ejemplo, su población activa no supera, en promedio, el nivel de la enseñanza primaria (apenas posee una media de 5,4 años de escolarización), la misma que tenían Hong Kong, Taiwán, Corea y Singapur hace treinta años.

En cuanto a la educación superior, ésta continuó ofreciendo una cobertura restringida a pesar de la expansión experimentada en las últimas cuatro décadas. Si, además, tomamos en consideración las magnitudes que se utilizan hasta el momento para medir las habilidades, hallamos que mientras en los EEUU el *ratio* de licenciados en ramas de ingeniería, informática y matemáticas es de 815 por cada millón de habitantes, en América Latina (sin considerar los países del Caribe), no supera los 227.

Del mismo modo, el examen de otras variables propuestas por José Joaquín Brunner, como la participación de la región en el mercado tecnológico mundial (que supone menos de un 2% frente al 43,5% norteamericano o el 23,7% de los países del Asia y el Pacífico), el porcentaje de gasto público que el total de América Latina destina a ciencia y tecnología (I+D) (inferior al 2% del gasto total mundial) o la aportación a escala

[13] Son varios los factores que influyen en la expansión de las tecnologías de la información (aparte del tamaño y renta de la población). Los indicadores del *World Times Information Society Index* engloban de forma bastante comprehensiva distintas magnitudes para evaluar el nivel de integración a la "sociedad de la información" tomando en consideración diversas dimensiones. Según esta medición, los países latinoamericanos ocupaban posiciones de la mitad hacia abajo, demostrándose, además, para los países mejor situados dentro de la región, una tendencia a descender posiciones. Se estima que la región latinoamericana demoraría entre quince y veinte años para converger en materia de líneas telefónicas, base de la infraestructura de comunicaciones, con el nivel inferior de los países industrializados. La evidencia empírica demuestra que, aún cuando la velocidad de crecimiento de la red de telecomunicaciones sea bastante pronunciada, la brecha en el abastecimiento telecomunicacional es un factor determinante de atraso económico.

mundial de autores científicos o de patentes registradas, muestra el crecimiento de la mencionada brecha.

Como en el caso de las exportaciones, en la década de 1990 se ha experimentado un auge en la inversión extranjera directa, resultado de las políticas iniciadas en los años anteriores, y de nuevos impulsos entre los que cabe destacar la desregulación de sectores de uso intensivo de recursos naturales, el aprovechamiento de acuerdos de libre comercio o la reestructuración de los sectores productivos. Esto no resultó en la ampliación de la capacidad productiva de la región, sino en un crecimiento acelerado de la participación de las empresas extranjeras en la producción y las ventas como consecuencia de las numerosas fusiones y adquisiciones, por un lado, y privatizaciones, por el otro, que han tenido lugar.

Finalmente, la situación financiera de los países de la región puso de manifiesto la alta volatilidad de los mercados financieros latinoamericanos, así como su vulnerabilidad, evidenciada en el "contagio" que sufrieron los países latinoamericanos y del Caribe, a mediados de 1997, de la crisis que asoló al Asia oriental, provocando una crisis financiera mundial y, en América Latina, desencadenando recesiones en prácticamente todos los países.

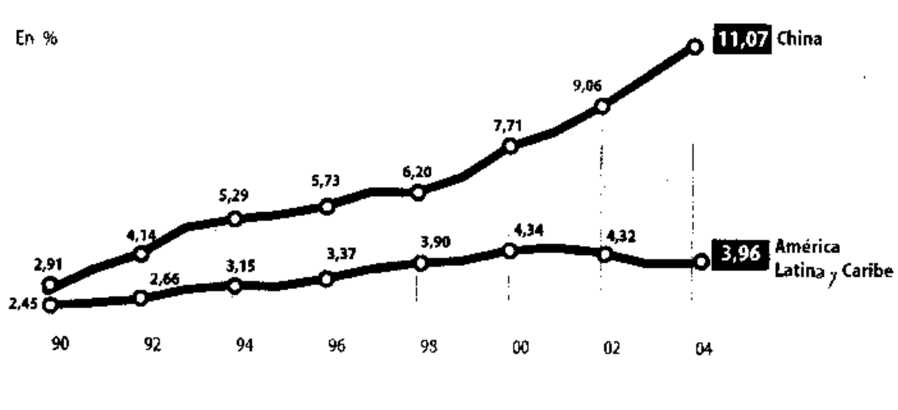
El agravamiento de la dependencia y vulnerabilidad financiera de América Latina tiene raíces históricas mediatas e inmediatas. A lo largo del siglo XX las bases del capital imperialista norteamericano adquirieron un carácter mundial, pero nunca perdieron su base latinoamericana, que fuera su verdadera "plataforma de despegue". Durante el zenit económico del imperialismo yanqui, em el *boom* económico del segundo pós-guerra (1950-1965) los flujos mundiais de capital norteamericano, y los beneficios obtenidos sobre el mismo, tuvieron la composición siguiente:

Inversiones y Lucros de los Estados Unidos (1950-1965)

	Europa	Canadá	América Latina	Resto del Mundo
A) Flujo de inversiones directas de los EEUU	8.1	6.8	3.8	5.2
B) Ingreso sobre ese capital transferido a los EEUU	5.1	5.9	11.3	14.3
Beneficio Líquido (B – A)	-2.6	-0.9	7.5	9.1

Cifras en miles de millones de dólares.

PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS

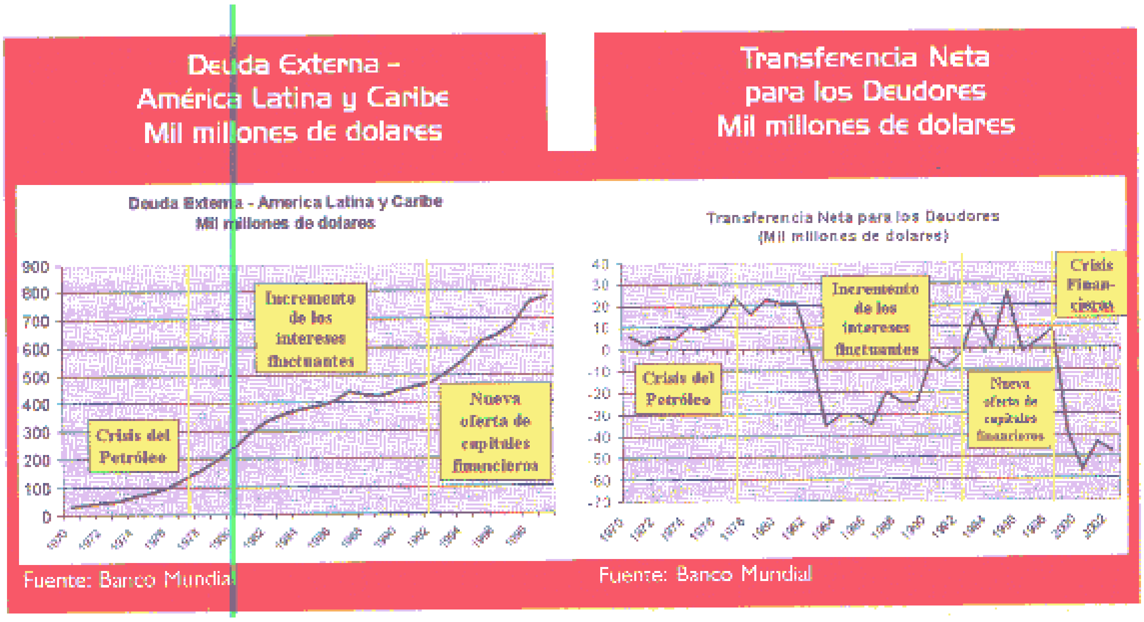


El conjunto de América Latina, responsable por 12% de las exportaciones mundiales en 1950, pasó a 5,4% en 1975, y a 4% en 1990. En la década de 1980, en apenas tres años (1981 a 1983) América Latina pagó 81,7 mil millones dólares de servicio de la deuda, el doble de lo pagado durante los años 1970. En 1982, México no consiguió continuar a pagar su deuda, y declaró moratoria. Los banqueros privados internacionales interrumpieron los créditos nuevos para los países deudores. El FMI pasó a ser un gerente de los países endeudados, utilizando as "cartas de intenciones" para implementar los "programas de ajustes".

Con la crisis capitalista mundial iniciada en la década de 1970, la extorsión financiera substituyó crecientemente a la inversión directa como fuente de lucros para el capital financiero internacional, en primer lugar norteamericano. Esto fue favorecido políticamente por las medidas adoptadas para salir del resultado desastroso en que concluyeran los "treinta años gloriosos" (en realidad, como máximo, 25) del capitalismo mundial. Bajo las reglas del FMI, que se establecieron en la conferencia de Bretton Woods, hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, los tipos de cambio se determinaron a una paridad respecto del dólar, y las fluctuaciones alrededor de esa paridad se limitaron a un margen mínimo. Lo que ocurrió es que el dólar no se sujetó a esa restricción porque al gobierno de los EEUU se le encomendó comprar oro, cuando así lo requirieran los demás países, a un precio fijo por onza.

Sin embargo, en agosto de 1971 EEUU suspendió la convertibilidad del dólar con el oro, otras monedas impusieron un recargo del 10% a las importaciones, y tomaron otras medidas dirigidas a eliminar sus déficit de balanza de pagos. Después siguió un período en el que se permitió flotar algunas monedas importantes, pero sujetas a regulaciones de control de cambios para mantener los movimientos del tipo de cambio dentro de ciertos límites (lo que fue llamado de "flotación sucia"). En 1971 se acordó un reajuste de las tasas de cambio que permitiría una devaluación del dólar de alrededor del 5%, tomando en cuenta un promedio sobre todas las otras monedas, a cambio de un aumento en el precio del oro a 38 dólares por onza, y de la eliminación del recargo a las importaciones. Aquí también se acordó un margen de fluctuación.

A pesar de la "crisis de la deuda", en los años 1980 la deuda externa continuó a crecer exponencialmente en toda América Latina. Al final de 2001, según un informe da SELA (Secretaria de Estudios Económicos de América Latina), la deuda externa alcanzó US$ 784 mil millones, US$ 30 mil millones más que en 2000, con tendencia para superar US$ 800 mil millones. En el proceso de "ajuste internacional", la contrapartida de los superávits externos acumulados por la OPEP en el período 1974/1981, de aproximadamente US$ 400 mil millones, no se dio en las balanzas de pagos de los países industrializados, sino fundamentalmente en las cuentas externas de la periferia capitalista. Las estadísticas demuestran que la deuda externa de América Latina creció a partir de la necesidad de reinvertir las superganancias generadas por el alza en los precios de petróleo en los anos 1970. Con el alta de las tasas de interés, en los anos 1980, los pagos de la deuda fueron mayores que los préstamos. En los anos 1990, ocurrió una nueva oferta de capital financiero (para permitir los pagos de la deuda de los anos 1980), y la deuda creció más. La deuda externa de Latinoamérica era de US$ 32.528 millones de dólares en 1970. Desde 1971 hasta 2002 la transferencia neta a los acreedores (pagos menos préstamos) fue de US$ 192.769 millones de dólares, y pese a eso la deuda en 2002 estaba siuada, en las estimaciones más modestas, en más de US$ 727 mil millones.



América Latina fue la punta avanzada de un proceso mundial:



Durante la crisis de la deuda iniciada en 1982, los gobiernos latinoamericanos adoptaron una actitud de capitulación ante los acreedores. Desde agosto de 1982, y ante la suspensión provisional del reembolso de la deuda mexicana, los acreedores, con la complicidad de los gobiernos latinoamericanos, supieron sacar provecho de la situación. Todas las interrupciones en los pagos duraron menos de un año y nunca fueron decididas de manera concertada por varios países. En consecuencia, los acreedores privados pudieron realizar jugosos negocios, y el FMI logró recuperar con intereses las sumas puestas en cada caso a disposición de los deudores para que pudieran honrar los compromisos internacionales y continuaran o retomaran los reembolsos.

Los gobernantes y las clases dominantes de América Latina, aceptaron las exigencias de los gobiernos acreedores, en primera instancia de la administración estadounidense, y aplicaron medidas económicas que desembocaron en una recolonización de sus países. Según Joseph Stiglitz, ex primer vice presidente y economista en jefe del Banco Mundial, Premio Nobel de economía 2001, “el país se enfrenta una crisis y el FMI le dice que, si quiere más dinero, tiene que hacer tal cosa. Hay incluso una farsa permanente, que consiste en que el país redacta una carta de intención, en la que detalla lo que piensa hacer, y la envía al FMI; pero es el FMI el que le ha dicho previamente lo

que tiene que escribir. En el FMI no hay más que un país que tenga el derecho de veto: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos".[14]

El caso más acentuado, por sus repercusiones catastróficas y revolucionarias en el inicio del siglo XXI, fue el de Argentina. Desde que el país inició los contactos con los bancos acreedores, a partir del lanzamiento del denominado "plan de convertibilidad" de marzo-abril de 1991, hubo una demorada y tensa ronda de negociaciones. Finalmente, se anunció un acuerdo con los representantes de las instituciones financieras para la reestructuración de la deuda externa argentina con la banca privada, el 7 de abril de l992, en el marco del "Plan Brady", que implicaba una "quita" sobre los montos adeudados, descuento que favorecería al país y era la condición para encontrar una salida al saldo del endeudamiento.[15]

La banca concordó en debatir una la "quita" o reducción del monto global del endeudamiento, si no se investigase su origen, como en su momento fuera propuesto. Es justamente la garantía de no-investigación del monto real de la deuda original, lo que otorgó un carácter ficticio a la "quita". El gobierno argentino presentó como una "conquista" la obtención del descuento, repitiendo lo que ya habían afirmado previamente los gobiernos mejicano, venezolano, costarricense, que entonces ya habían establecido sus propios "acuerdos Brady". La "quita" fue del 35%, y no superó lo negociado anteriormente con México, y ella solo se aplicó a una parte muy reducida de la deuda. La "quita" en el monto principal de la deuda sólo era factible si las autoridades aceptaban continuar pagando un interés variable en el futuro, fijado por los acreedores. Este era el aspecto leonino de toda la operación de endeudamiento, a la cual quedaron atados los denominados países periféricos: contratar un préstamo sin saber su costo porque éste es determinado, cada seis meses, por el prestamista a través de la LIBOR (tasa interbancaria ofrecida en el mercado londinense, dominado por las grandes corporaciones financieras del planeta). Los bancos aceptaban la reducción del monto original de sus "créditos", pero el país continuaba pagando un interés imprevisible, totalmente dominado por sus propios acreedores.

Otro aspecto decisivo de las negociaciones sobre la deuda para "cerrar" el acuerdo del "Plan Brady" tuvo que ver con los llamados intereses atrasados, los que se debían como consecuencia de las moratorias de hecho en las que se había incurrido en el pasado. Los acreedores exigían, en relación a este punto, un pago "cash". El depósito "cash" a los bancos se elevó a 700 millones de dólares, la Argentina se endeudó en 300 millones de dólares para que el Citibank y sus socios tuvieran la inmediata disponibilidad de tales fondos. El pago de los aproximadamente 30.000 millones de dólares envueltos en la negociación del Brady redundarían en un pago total de poco menos que el doble de tal monto: 53.674 millones de dólares en treinta años. Los montos involucrados en la negociación realizada en el contexto del "Brady", eran apenas una parte del endeudamiento público, sin considerar los restantes pasivos externos, vinculados a préstamos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, del Club de Paris y, por otro lado a los títulos nominados en dólares emitidos por el gobierno. A lo que era necesario sumar los pasivos internos, la deuda pública contraída en moneda nacional.

A partir de la crisis de los años 1970, se produjo un enorme drenaje de recursos de los países semicoloniales a las metrópolis imperialistas por medio del pago de la deuda

[14] *El País*, Madrid, 23 de junio del 2002.

[15] RIEZNIK, Pablo. La deuda eterna: el "Plan Brady" o la pequeña historia de una gran entrega. *Razón y Revolución* nº 2, Buenos Aires, primavera de 1995.

externa. La hipertrofia especulativa se transformó en proceso de explosión. Las "quiebras corporativas" mostraron el "exceso" de capacidad ociosa y de fuerzas productivas. En el campo de las telecomunicaciones, de la industria automotriz o siderúrgica, en el de los grandes servicios de transporte o de energía, en las industrias de punta de la informática o la biotecnología, en el sistema bancario, el escenario es siempre el mismo: sobreacumulación, sobreinversión, sobra de empresas, sobra de capitales que ya no pueden valorizarse a una tasa de beneficio compatible con su necesidad de reproducción.

La caída del coloso yanqui planteó un proceso de crisis, la burguesía yanqui comenzó a desconfiar de la capacidad de su gobierno para enfrentarlo. Las bancarrotas empresarias y bursátiles transforman la estafa en monumental. En el país de Bush, 80 millones de norteamericanos conservan sus ingresos en acciones en la Bolsa. Los fondos de pensión-jubilación están quebrando. Se ha abierto una nueva etapa en la crisis mundial, la economía mundial se está "argentinizando". Algunos años atrás, cuando la Bolsa pasó los 10.000 puntos, el endeudamiento sin precedentes del capital norteamericano; la sobrevaluación del dólar por la demanda para la especulación; el enorme resultado negativo de la balanza comercial yanqui, el endeudamiento de los consumidores, la sobreinversión" y, por sobre todo, el aumento de las acciones no era una consecuencia del aumento de las ganancias de las empresas.

El centro de la crisis mundial se encontraba ya en los Estados Unidos, la acumulación de sus agudísimas contradicciones preparaba un estallido que sería tanto más destructivo cuanto más tardara en producirse. Las empresas norteamericanas, en un lapso de siete años (1992-1999) pasaron de un superávit financiero de 520.000 millones de dólares a un déficit financiero de 480.000, la llamada “expansión del siglo” tuvo lugar como consecuencia de un hipotecamiento, sin precedentes en el siglo, del capital norteamericano: la ganancia efectiva que resultó de la aplicación de ese endeudamiento no permitió levantar la hipoteca adquirida.

La crisis en los EEUU ya arrastraba, en los años 1990, a su “primer socio” latinoamericano, México. El peso mexicano sufrió sucesivos ataques especulativos. El secretario de Hacienda del gobierno de Vicente Fox, Francisco Gil, efectuó declaraciones en las que reconoció los paralelos entre la economía mexicana y la argentina. Lo dijo poco después de que el Estado mexicano vendió una de sus últimas "joyas", su participación accionaria en el Bancomer, el mayor banco del país.

La crisis mexicana de 1995 produjo una división inédita en la burguesía norteamericana, porque el Congreso norteamericano se rehusó a votar los créditos necesarios para rescatar a México, o para que lo hiciera el FMI. La crisis exigió una intervención extraordinaria del poder ejecutivo de los EEUU, con sus reservas financieras estratégicas. La excepcionalidad de este socorro puso de manifiesto que la especulación internacional no cuenta con un “prestamista de última instancia”, capaz de intervenir para proceder a rescates de capital en gran escala. Entre la crisis mexicana y mediados de 2002 el capital mundial conoció una serie de crisis financieras enormes, que provocaron una desvalorización sin precedentes del capital financiero

El acuerdo firmado por Brasil en 1994, a su vez, teniendo como base los principios del Plan Brady, resultó en moderados descuentos en la deuda del sector público con los bancos comerciales extranjeros, pero también un aumento significativo de los pagos. Durante el primer mandato de FHC (Fernando Henrique Cardoso) (1995-98) Brasil desembolsó cerca de 126 mil millones de dólares en pago de intereses y amortización de la deuda externa. El desembolso líquido subió de 8,2 mil millones de dólares en 1995, a 15,2 mil millones de dólares en 1999. La nueva moneda, el real, fue artificialmente

valorizado por un largo período. Entre 1995 e 1999, las importaciones (más baratas) superaron las exportaciones (más caras), generando un déficit comercial acumulado de 24,7 mil millones de dólares.

Las privatizaciones, aunque produciendo una caída contable en la deuda interna, aumentaron la deuda externa: en Brasil, ellas rindieron US$ 63,6 mil millones. Aun así, la deuda externa pasó de US$ 123,9 mil millones en 1991, para US$ 236 mil millones en marzo de 2002, sin hablar en el aumento de las remesas de lucros y dividendos para el exterior, y otras formas disfrazadas de remesa de capitales (CC5). Entre 1991-99 fueron remetidos al exterior 27,3 mil millones de dólares.

Parte considerable del capital que entró en Brasil se destinó a la especulación y adquisición de patrimonio ya existente, no resultando en nueva inversión. La deuda externa, que estaba en 148 mil millones de dólares en 1994, fue a 234,6 mil millones de dólares en 1998; en este mismo período, fueron pagados US$ 126 mil millones a los acreedores. Para empeorar, se registró un bajo crecimiento comparativo de la economía brasileña respecto a otros “países emergentes” de potencial similar. La agencia de clasificación Moody´s divulgó un informe analizando el crecimiento del país sudamericano, mostrando que mientras Brasil creció un promedio de 2,2% en los últimos cinco años, los otros países en desarrollo crecieron en media 4,12% anual.

Según la CEPAL, el PIB brasileño creció 22% por ciento entre 1996 y 2005, mientras que el PIB mundial se expandió 40,8 % en el mismo período. En 2005, Brasil creció 2,3%, frente a 9% de China, y un promedio de 5% entre los emergentes.

En toda América Latina, transferencias masivas de propiedades, riqueza, beneficios, intereses y pagos por regalías fluyeron hacia Estados Unidos y la Unión Europea. Las más lucrativas empresas públicas, de un valor superior a los 350.000 millones de dólares, se privatizaron sin tener en cuenta sutilezas constitucionales, y acabaron en manos de corporaciones multinacionales y bancos estadounidenses, españoles y de otros países europeos. El saqueo llevado a cabo por las empresas y los bancos transnacionales entre 1975 y 2000 ascendió a más de 950.000 millones de dólares.

También en Argentina, luego del "Brady", la dependencia financiera con el exterior se agravó. La deuda aumentó y la carga de sus servicios se hizo más gravosa. Y a la deuda externa "normal" era necesario agregarle las obligaciones de remesas de divisas al exterior, que surgen de la libre disponibilidad de los lucros que tienen garantizadas las empresas extranjeras que fueron beneficiadas con el remate a precio vil de las ex empresas del Estado. Entregaron títulos desvalorizados (con el argumento de que así se disminuiría el endeudamiento) y ahora tenían la garantía del envío de dólares "frescos" al exterior.

Esto anticipó que el celebrado "Plan Cavallo", que sirvió de modelo a planes semejantes en América Latina (en primer lugar, el Plan Real del Brasil, hasta ahora patrimonio común de casi todas las corrientes políticas del país, inclusive “de izquierda”) sucumbiría como resultado de sus propias contradicciones.

3. TRATADOS DE "LIBRE" COMERCIO Y ACUERDOS BILATERALES: LA BANCARROTA DE LA BURGUESÍA LATINOAMERICANA

En la virada del siglo, la política norte-americana para América Latina navegaba en medio a las iniciativas destinadas a profundizar la colonización económica, con vistas a profundizar una hegemonía política continental que los EEUU pudiesen utilizar como arma decisiva en la disputa mundial inter-monopolista, principalmente contra el bloque europeo y Japón.

En la actualidad, existe un conjunto de tratados de regulación de las relaciones comerciales internas de América Latina, y de ésta con el mundo:

1. Acuerdos regionales y subregionales

+ ALADI, Asociación Latino-Americana de Integración: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.

+ CAN, Comunidad Andina de Naciones: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela.

+ CARICOM, Comunidad y Mercado Común del Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas (miembro de la Comunidad pero no del Mercado Común), Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Surinam Trinidad y Tobago; miembros asociados: Anguilla, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas; Islas Caimán, Islas Turks y Caicos.

+ MCCA, Mercado Común Centro-Americano: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua.

+ Grupo de los Tres: Colombia, México, Venezuela

+ MERCOSUR, Mercado Común del Sur: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay; miembros asociados: Chile, Bolivia.

+ MERCOSUR - Colombia, Ecuador, Venezuela (vigencia prevista: 1/7/2004)

+ TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte: Canadá, Estados Unidos de América, México.

+ Tratado Tripartito: Guatemala, Honduras, El Salvador

2. Acuerdos bilaterales Grupo-Estado

+ CAN - Chile
+ CAN - Cuba
+ CAN - México
+ CARICOM - Colombia
+ CARICOM - Venezuela
+ CARICOM - República Dominicana
+ Centroamérica - Colombia (en negociación)
+ Centroamérica - Chile
+ Centroamérica - Estados Unidos (vigencia prevista: 1/1/2005)
+ Centroamérica - México
+ Centroamérica - Panamá
+ Centroamérica - República Dominicana
+ MERCOSUR - Bolivia
+ MERCOSUR - Chile
+ MERCOSUR - Cuba
+ MERCOSUR - México

3. Acuerdos bilaterales Estado-Estado

+ Argentina - Chile
+ Argentina - Venezuela
+ Bolivia - Chile
+ Bolivia - México
+ Brasil - Perú
+ Brasil - Venezuela
+ Canadá - Chile
+ Chile - Colombia

+ Chile - Ecuador
+ Chile - México
+ Chile - Perú
+ Chile - Venezuela
+ Colombia - Honduras
+ Colombia - Nicaragua
+ Costa Rica - Argentina
+ Costa Rica - Colombia
+ Costa Rica - México
+ Costa Rica - Uruguay
+ Costa Rica - Venezuela
+ República Dominicana - Costa Rica
+ Ecuador - Argentina
+ Ecuador - México
+ Ecuador - Paraguay
+ Ecuador - Uruguay
+ El Salvador - Colombia
+ Estados Unidos - Chile
+ Estados Unidos - Colombia (en negociación)
+ Estados Unidos - Costa Rica (ratificación pendiente)
+ Estados Unidos - República Dominicana (vigencia prevista: 1/1/2005)
+ Guatemala - Colombia
+ México - Nicaragua
+ Panamá - Colombia
+ Panamá - Costa Rica
+ Panamá - República Dominicana
+ Panamá - El Salvador
+ Panamá - Guatemala
+ Panamá - Honduras
+ Panamá - México
+ Panamá - Nicaragua

4. Los 34 Estados participantes en la negociación del ALCA

Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominica, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.[16]

En 1990, el entonces presidente de los EEUU, George Bush, anunció la llamada "Iniciativa para las Américas", abriendo una agenda de discusión para avanzar en la “liberación del comercio” desde Alaska hasta Tierra del Fuego, proponiendo la remoción de las barreras arancelarias que dificultaban el libre movimiento de capitales en el resto del continente. La firma del TLC entre EEUU, México y Canadá en 1994, fue un primer triunfo del imperialismo norteamericano.

En las “maquiladoras” que surgieron de ese tratado, 5 millones de niños menores de 14 años trabajan. Esas empresas, de 1999 à 2000, crecieron 13,4% y ocupan 1,3 millones de mexicanos. Esa industria responde por 47% del total de las exportaciones mexicanas. Los salarios, sin embargo, encogieron: en 1994, eran en promedio US$ 2,10 por hora en la industria, cayendo para US$ 1,90 por hora en 1999. El ingreso individual cayó 40% en promedio.

Un aspecto decisivo del TLC es la cuestión energética, factor decisivo, como es notorio, en toda la política exterior mundial, inclusive bélica, de los EEUU, en los últimos 15 años. Los conflictos en Oriente Medio, Asia Central y Venezuela, son los más

[16] EMMERICH, Gustavo Ernesto. Tratados de libre comercio y acuerdos de complementación o integración económica vigentes y en negociación en América. *Araucaria*, Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, n º 11, México, primer semestre de 2004.

espectaculares. Poca atención ha merecido la política de los EEUU para América del Norte. Para evaluar los planteamientos de integración energética de América del Norte es preciso observar las dificultades que ha estado teniendo el gobierno estadounidense para abrir nuevas zonas a la exploración y explotación de petróleo crudo y gas natural dentro de sus fronteras.

Las reservas de los EEUU han llegado, sobre todo en las áreas en explotación desde hace tiempo, a un proceso de declinación final. Sólo la perforación en las zonas profundas del Golfo de México, cuya explotación es relativamente reciente, permitiría un aumento en la producción; pero ese aumento, en general, no basta para contrarrestar la tendencia declinante de la producción en Estados Unidos, sino que sólo la atenúa.

Las áreas en exploración y en explotación ya cubren casi plenamente la parte del Golfo de México al norte de la frontera marítima con México, desde el punto en que esa frontera toca tierra hasta una línea, casi norte-sur, cercana al estado de Florida. Son las aguas que están frente a los estados de Texas, Louisiana, Mississipi y la mayor parte de Alabama. Desde 1997 ha estado en discusión la explotación de una zona, al este de la anterior, sin éxito. La otra zona nueva en proceso de decisión está en Alaska.

El camino que se plantea como la opción inmediata por quienes lo quieren desarrollar es un gasoducto bajo el Mar de Beaufort, en el Ártico, hasta la desembocadura del río Mackenzie en Canadá, para de allí seguir un largo trayecto hacia Estados Unidos. A medida que estos proyectos se ven limitados, retrasados o frenados, la atención del gobierno y de las empresas petroleras del norte se fija en las aguas profundas del Golfo, pero al sur de la frontera, a las que los gobiernos mexicanos hasta el momento asignaron el presupuesto necesario para su exploración y explotación por PEMEX (estatal de petróleo mexicana).

En diciembre de 1994 se realizaba la Primera Cumbre de las Américas, en Miami. En esta reunión los 34 países del hemisferio occidental deciden concluir, antes del 2005, las negociaciones para la creación del ALCA. La Segunda Cumbre de las Américas tuvo lugar en abril de 1998 en Santiago de Chile y dio inicio efectivo a las negociaciones.

Allí se formó la "estructura" de negociación, contando con una Presidencia de las Negociaciones rotativa cada 18 meses; una Comisión de Negociaciones Comerciales (CNC); y nueve Grupos de Negociación, que son 1) Acceso a Mercados; 2) Inversiones; 3) Servicios; 4) Compras Gubernamentales; 5) Solución de Controversias; 6) Agricultura; 7) Derechos de Propiedad Intelectual; 8) Subsidios, Anti-Dumping y Medidas Compensatorias; y 9) Políticas de Concurrencia. Se creó una Comisión Tripartita formada por el BID, el CEPAL y la OEA, en carácter de apoyo analítico y asistencia técnica al proceso de negociación.

La propuesta de ALCA se concentró en particular en los servicios financieros (bancos, seguros, jubilación, teléfonos, etc.) y en la propiedad intelectual. Pero cuando Clinton pidió autorización al Congreso norteamericano para llevar adelante las negociaciones por la llamada "vía rápida" (*fast track*), los congresistas yanquis se opusieron. ¿La razón? Que el Congreso no estaba dispuesto, en contrapartida, a abrir el mercado norteamericano a los productos latinoamericanos o a que los productos europeos y asiáticos pudiesen ingresar a EEUU vía América Latina.

EE.UU. trataba de imponer sus pretensiones comerciales a China y al resto de los países asiáticos, aprovechando la crisis económica y financiera de Japón y del sudeste asiático. Habiendo avanzado ya en el acuerdo con China, los EEUU retomaron su ofensiva en América Latina. Como planteó en su momento Henry Kissinger (en mayo de 1998), "un área sudamericana de libre comercio está claramente emergiendo bajo el liderazgo de Brasil. Para los EEUU, el éxito económico del ALCAsignificaria, básicamente, el

acceso al mercado brasileño, y a las franjas de los mercados latinoamericanos hoy ocupados por Brasil". El ex canciller norteamericano también planteó la importancia del ALCAcomo un freno a los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea.

Las reuniones de ministros comenzaron a tentar implementar los objetivos del ALCA: la 1ª fue junio de 1995, en Denver, EEUU; la 2ª tuvo lugar en marzo de 1999, en Cartagena, Colombia; la 3ª en mayo de 1997, en Belo Horizonte, Brasil (aquí la patronal de los países americanos organizó un Foro Empresarial que se integró oficialmente a las negociaciones); la 4ª fue en marzo de 1998, en San José de Costa Rica, y dictaminó el final de la etapa preparatoria; la 5ª reunión se realizó en noviembre de 1999, en Toronto, Canadá. Venezuela expresó abiertamente sus objeciones, considerándola como parte de una tentativa hegemónica de los EEUU.

El ALCA(Area de Libre Comercio de las Américas) fue concebido como la expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC-NAFTA), firmado en 1994 entre Canadá, EEUU y México, a todo el hemisferio. El NAFTA es una marco institucional de los monopolios de los EEUU para atar a Canadá y convertir a México en un apéndice de la economía yanqui, como mercado cautivo, proveedor de petróleo y otras materias primas, y sobre todo, como plataforma de mano de obra barata mediante el régimen de las maquiladoras. Mediante este Tratado, la economía mexicana fue subordinada e integrada casi completamente a los Estados Unidos, país con el que México realiza el 75 por ciento de su comercio.

La frontera norte mexicana, donde se localiza el cordón de la industria maquiladora -las "fábricas del sudor" o *sweatshops*, como les llaman los activistas norteamericanos- es la zona industrial que permite a la patronal norteamericana extraer ganancias impresionantes del trabajo esclavo de los obreros mexicanos, basado en los altos ritmos de productividad, la contratación individual y temporal, el incremento del trabajo femenino y juvenil con menos derechos laborales, y salarios equivalentes al 10 por ciento del pagado a los trabajadores en Estados Unidos. Para esto, los monopolios y los gobiernos de ambos lados de la frontera han contado con la "asistencia" de dirigentes sindicales que responden abiertamente a las empresas.

Se estima que más de un millón de puestos de trabajo se perdieron en los EEUU debido a las re-localizaciones de compañías en México para sacar provecho de su regulación laboral más débil (flexible, retrógrada, etc.) Estos trabajadores encontraron nuevamente trabajo, con menos seguridad, y salarios que eran, en promedio, el 77% de lo que cobraban anteriormente. A pesar de las promesas de desarrollo económico en México, sólo la región fronteriza vio incrementada su actividad industrial. Pero este pequeño incremento no trajo prosperidad. Más de un millón de mexicanos trabajan por menos del salario mínimo de $3,40 por día ahora que antes del NAFTA, y durante el período de aplicación del NAFTA, ocho millones de mexicanos pasaron de la clase media a la pobreza.

A su vez, el Mercosur es una "integración" que fue impulsada bajo el comando de las transnacionales instaladas en Brasil y Argentina y de los grandes grupos locales. De la mano de la "apertura económica", la "desregulación" y las privatizaciones, es un intento de ampliar los estrechos mercados nacionales, logrando "economías de escala" apetecibles para el gran capital.[17] En 1997, la deuda externa de los cuatro países

[17] Hay una vasta bibliografía sobre el tema: PINTO DE ALMEIDA, Elizabeth Accioly. *Mercosul e União Européia: estrutura jurídico-institucional*. Curitiba, Juruá, 2002; ALMEIDA, Paulo Roberto. *Mercosul: fundamentos e perspectivas*. Brasília, Editora Grande Oriente do Brasil, 1998; BARRAL, Welber. *O Brasil e a OMC: os Interesses Brasileiros e as Futuras Negociações Multilaterais*. Florianópolis, Diploma Legal, 2000; BONFIGLIO JR., Paulo L. Integração Hemisférica: a ameaça da ALCA ao

integrantes del Mercosur era de 331,7 mil millones de dólares, equivalente a 50% de toda la deuda externa de América Latina, con Brasil y Argentina como responsables por la mayor parte. La deuda externa mundial corresponde a cerca del 5% del *stock* de capital financiero existente en el mundo: 2, 37 billones de dólares, según cálculos de Eric Toussaint.

Dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) el porcentaje de exportaciones interregionales representó en el 2000 un 13%, en la Comunidad Andina de Naciones un 8,8%, en el Mercosur alcanzó un 21,1%, en el Mercado Común Centroamericano llegó a un 22,4% y en la Comunidad del Caribe (CARICOM) fue de 17,7%.

Las tendencias en cada uno de estos bloques han sido inestables desde 1990, aunque con un crecimiento en todos los casos durante toda la década, con evoluciones notables en algunos como en el Mercosur, en el cual la participación intra-regional saltó de un 8,9% a 21,1%, explicable en gran medida por el creciente grado de complementariedad entre Argentina y Brasil, en tanto el primero de los dos países perdió aceleradamente toda posibilidad de incursionar en la producción y exportación de manufacturas por efecto de la rigidez cambiaria (convertibilidad) y la acelerada apertura comercial.

Se puede concluir que la geografía es todavía determinante en las relaciones comerciales internacionales, más allá de los notables avances tecnológicos en el campo de la comunicación y el transporte. Esta certeza, sin embargo, se ha visto relativizada en el ámbito financiero, en donde se ha registrado una casi desaparición de las distancias económicas; esto, entre otros factores, explica la consolidación de una economía financiera global. La mayor movilidad de bienes y servicios, sin hablar de capitales, contrasta con las limitaciones existentes en el flujo de la mano de obra.

Para los imperialismos yanqui y europeo, el Mercosur es una plataforma privilegiada por el volumen de los negocios que permite y porque no está dispuesto a que ese enorme mercado sea acaparado por la competencia asiática y japonesa o por sectores yanquis y europeos rivales. En calzados, por ejemplo, las divergencias no son entre "argentinos y brasileños": cuando el gobierno argentino aprobó una resolución para trabar las importaciones de calzados desde Brasil, "lideradas por Grimoldi, dueña de 60 comercios en la Argentina, Lady Stork y Piccadilly-Distrinando, las distribuidoras de marcas como Nike, Adidas y Reebok, reclamaron ante la Justicia argentina".[18]

Mercosul. *Anais do VI Encontro de estudantes e Graduados de Relações Internacionais CONESUL*. Santa Cruz de la Sierra, 2000; GOYOS JR., Durval de Noronha *A OMC e os Tratados da Rodada do Uruguai*. San Pablo, Observador Legal, 1995; GUIDOLIN, Benedito. *Mercosul e Blocos Econômicos*. San Pablo, STS, 1999; PINHEIRO GUIMARÃES, Samuel. *ALCAe Mercosul: riscos e oportunidades para o Brasil*. Brasília, IPRI/FUNAG, 1999; CORRÊA LIMA, Sérgio Mourão. *Tratados Internacionais no Brasil e a Integração*. San Pablo, San Pablo: Editora LTR, 1998; BASTO LUPI, Ande Lipp Pinto. *Soberania, OMC e Mercosul*. San Pablo, Aduaneiras, 2001; MACHADO, João Bosco. *Mercosul: processo de integração: origem, evolução e crise*. San Pablo, Aduaneiras, 2000; THORTENSEN, Vera. *OMC – Organização Mundial do Comércio: as Regras do Comércio Internacional e a Rodada do Milênio*. San Pablo, Aduaneiras, 1999.

[18] "Los EEUU están interesados en debilitar las inversiones españolas en América Latina para recuperar su hegemonía en dicho mercado. La herramienta que tienen para ello es implacable: el FMI. ¿O alguien es tan cándido como para pensar que el Departamento del Tesoro habría dejado pudrir la situación en Argentina, Brasil o Uruguay si el principal banco extranjero en Latinoamérica fuera el Chase Manhattan Bank en lugar el BSCH o el BBVA?": esas fueron las conclusiones de un seminario sobre "Iberoamérica y las empresas españolas", organizado por el Banco Santander Central Hispano.

En la evolución del Mercosur, se constata un creciente volumen de intercambio entre los miembros del bloque, y una aceleración de las desigualdades económicas y demográficas:

Participación Porcentual de cada País en la Población Total del Mercosur								
País/Año	**1960**	**1970**	**1980**	**1990**	**1995**	**1997**	**1998**	**1999**
Brasil	74,09	76,73	78,10	78,79	78,82	78,79	78,84	78,83
Argentina	21,35	19,15	18,03	17,31	17,21	17,20	17,13	17,11
Paraguay	1,84	1,88	2,00	2,25	2,39	2,46	2,47	2,51
Uruguay	2,72	2,24	1,87	1,65	1,58	1,55	1,56	1,55
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: *Statistical Yerbook for Latin America and the Caribbean*. 1975 edition. New York: United Nations, 1976, p. 62; *Idem*, 1997 edition, New York: United Nations, 1998, p. 169; *Idem*, 1999 edition, New York: 2000, p. 171.

Participación porcentual del PIB de cada país en el PIB total del Mercosur								
País/Año	**1960**	**1970**	**1980**	**1990**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**
Brasil	55,36	60,09	68,20	73,19	71,06	69,38	70,24	69,45
Argentina	38,32	35,22	29,28	24,17	26,27	28,01	26,99	27,73
Paraguay	1,12	1,04	0,75	0,96	0,96	0,91	0,86	0,85
Uruguay	5,20	3,65	1,77	1,68	1,71	1,70	1,91	1,97
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: *Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean*. 1983, New York, United Nations, 1984, pp. 196-197; *Idem*, 1997, New York, United Nations, 1998, pp. 184-185; *Idem*, 1999, New York, United Nations, 2000, p. 195.

En Paraguay, todavía bajo el gobierno de González Macchi, bajo la inmensa presión de los campesinos marchando hacia Asunción y la amenaza de una huelga general indefinida, el Senado terminó anulando la privatización telefónica. El FMI amenazó con cortar la "asistencia financiera" a Paraguay. La rebelión popular es la consecuencia directa del derrumbe de Paraguay, cuy a endeble estructura sufrió un golpe demoledor con la crisis argentina: no sólo las exportaciones paraguayas a Argentina cayeron un 50% sino que, además, se incrementaron las exportaciones argentinas, provocando un profundo deterioro comercial; la devaluación del guaraní fue fulminante y la corrida bancaria, que había comenzado antes de la de Argentina, se agravó como consecuencia de que muchos de los bancos paraguayos tenían activos (acciones y depósitos) en Argentina. La devaluación uruguaya y la crisis brasileña significaron un golpe demoledor para Argentina. De un golpe, estos mercados volvieron a "cerrarse" para las exportaciones argentinas.

Rápidamente pudieron comprobarlo los negociadores argentinos en la llamada "ronda automotriz del Mercosur", que fracasaron en su intento de elevar el cupo de exportaciones automotrices argentinas a Brasil. Es que, según explicaron los funcionarios brasileños, la prioridad del gobierno brasileño por estas horas pasa por demostrar ante los acreedores internacionales su capacidad de repago de la deuda, lo que les impediría elevar su saldo comercial desfavorable con Argentina.

Pero por las mismas razones Argentina necesitaba desesperadamente aumentar sus exportaciones a Brasil. Los intereses "nacionales" de las burguesías de Argentina y de Brasil llevaron a su propia creación, el Mercosur, a la ruina. La reducción del comercio en todas las direcciones (las importaciones argentinas provenientes de Brasil y Uruguay cayeron el 70%) es la manifestación del definitivo hundimiento del Mercosur.

¿Cómo podría sostenerse en el cuadro de una recesión, de devaluaciones competitivas y de un colapso financiero común a todos sus miembros? Todo este cuadro de desintegración del Mercosur explica también que Brasil comenzara a negociar una zona de libre comercio con los países andinos (Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela) y con México, sin pedir el acuerdo argentino y en clara violación del Tratado del Mercosur. Brasil firmaría con esos países la posibilidad de comerciar con un arancel inferior al arancel externo común del Mercosur, que es del 35%.

Los países andinos o México podrían vender, entonces, en Brasil a precios más bajos los mismos productos que provee la Argentina. Apenas los EEUU anunciaron que habían comenzado las negociaciones con Chile para conformar una "zona de libre comercio" con el NAFTA, y para darle "un ímpetu adicional a las negociaciones para el ALCA", estalló una fenomenal crisis política en el Mercosur. No sólo porque con esa decisión Chile retrocedía al planteo de incorporarse en forma plena al Mercosur, sino porque rápidamente los gobiernos de la Argentina y Brasil entraron en choque en torno a la respuesta que debía darse a la decisión chilena.

El Mercosur, el bloque comercial de las burguesías del Cono Sur, se fue muriendo de muerte natural,[19] como consecuencia de la quiebra de cada uno de sus integrantes. Su crónica inestabilidad demostró su inviabilidad, su incapacidad para hacer frente a una crisis mundial en forma autónoma y unida. En las épocas de vacas gordas, todo el mundo es socio; el asunto es seguir siéndolo en la tormenta. El Mercosur es una unidad parcial de ciertos grupos de monopolios, principalmente de la industria automotriz, controlada por capitales norteamericanos y europeos. Ha servido para desangrar fiscalmente a la Argentina y a Brasil, ya que han pagado con exenciones de impuestos o subsidios cifras superiores a las invertidas por esos monopolios del automóvil. La crisis mundial está jugando un efecto desintegrador de este acuerdo capitalista.

Algunos medios capitalistas y también de la izquierda se dedicaron a la defensa apasionada del Mercosur, con la certeza de que era un medio de defensa contra la propuesta norteamericana de crear un mercado libre desde Alaska a Tierra del Fuego. Fernando Henrique Cardoso llegó a posar de antiimperialista. La unidad comercial de algunos monopolios automotrices o lecheros, en especial norteamericanos, llegó a ser convertida en la unidad nacional que planteara Bolívar.

Precisamente por su naturaleza estrechamente capitalista, el Mercosur no pudo hacer frente autónomamente a la crisis. Sus gobiernos aplicaron los planes del FMI, y no vacilaron en recurrir a las recetas más extremas de éste. Ya han procedido a despedir masivamente a los obreros y a aumentar los impuestos al consumo.

En la industria automotriz, tanto Brasil como Argentina disponen de regímenes de privilegio (subsidios, reserva de mercado, cuotas, etc.) que vencieron en el año 2000. Se había establecido, que a partir de esa fecha, el comercio quedaría liberalizado con un arancel común del 20%. Las automotrices norteamericanas y europeas, que han acaparado para sí toda la región, quieren un arancel de importación. Y la posibilidad de importar a la mitad de ese arancel, 17,5%, los autos de sus casas matrices.

Al mismo tiempo, proponen que la importación de autopartes se pueda hacer con un arancel del 12 al 16%, para armarlas dentro del Mercosur. Todo esto pone de relieve que la llamada industria automotriz, en el Mercosur, es una armaduría de piezas y

---

[19] "El Mercosur está en una etapa de retroceso. Fue un gran éxito en los primeros cuatro años, de 1991 a 1994, pero a partir de ese entonces no se ha hecho prácticamente nada", dijo Elbio Baldinelli, diretor da *Fundación Banco de Boston*.

componentes importados, sin ningún valor agregado local, que vende los autos con un sobreprecio del 40 al 60%.

Esta posición de las terminales automotrices choca abiertamente con los autopartistas y demás proveedores, en especial los siderúrgicos. En Argentina, la siderurgia está monopolizada por Techint-Siderar-Siderca que, además, ha ido acaparando parte de la siderurgia latinoamericana porque posee la planta Tamsa en México y Sidor en Venezuela, y tiene acuerdos accionarios con algunas siderúrgicas brasileñas, como Usiminas. En el Mercosur, el negocio siderúrgico está dominado por cuatro grupos. "Techint tiene un pacto con Usiminas para no entrometerse en el mercado del otro", dicen las automotrices.

Las prebendas otorgadas para que las grandes automotrices se radicaran en la región provocaron sangrías imparables tanto en Argentina como en Brasil. Entre 1992 y 1997, las automotrices obtuvieron en la Argentina una renta extraordinaria, por subsidios, de 5.250 millones de pesos, porque pudieron importar autos terminados y autopiezas con aranceles preferenciales, y vender los autos que producían en el Mercosur con una protección de casi el 35%.[20] Como las automotrices dicen que invirtieron 5.000 millones de dólares, resulta que toda la inversión que se acreditan los pulpos corresponde al dinero de los consumidores.

Para aprovechar a fondo estas rentas, las automotrices importaron a más no poder, a tal punto que entre 1992 y 1998 el déficit comercial del sector fue de 17.000 millones de dólares. Esto explica la crisis del sector autopartista, desplazado por la importación. Es decir que el déficit externo y el déficit fiscal argentino se explican, en gran parte, por todos estos colosales beneficios otorgados a las automotrices. Ahora, con las arcas vacías, tanto el gobierno de la Argentina como el de Brasil quieren eliminar esos aranceles preferenciales. La respuesta de las terminales automotrices fue clara: si hacen eso, levantamos las inversiones y nos concentramos en Brasil (algo que ya están haciendo), donde procederían a una fuerte racionalización de la industria autopartista.

Todos los países subsidian la producción azucarera. Esto significa que el precio interno es caro y que la exportación se hace a precios irrisorios. Para defenderse de la importación, todos los países tienen aranceles altos. En verdad, el Mercosur apenas sirvió para contener durante unos pocos años la crisis argentina gracias a la demanda especulativa impulsada por el Plan Real y a las suculentas prebendas y subsidios que ofrecieron los gobiernos de ambos países a costa de las finanzas públicas y de una mayor deuda externa.

Ese proceso especulativo estuvo limitado a algunas industrias, como alimentos, petróleo y autos. El Mercosul era una falsa unión de países hipotecados; no existía integración económica sino prebendas para los grandes pulpos, especialmente los automotrices; esos subsidios profundizarían la bancarrota de los países de la región.

Que la Argentina y Brasil tengan regímenes monetarios diferentes no constituye la causa da crisis del Mercosur, más bien es su expresión. La devaluación en Brasil y la deflación en la Argentina tienen el mismo efecto de abaratar las exportaciones, pero ninguno de los dos consigue aumentarlas debido al abarrotamiento de mercancías y de capitales en el mercado internacional. Es claro que el Mercosur ha fracasado, pero no por la discrepancia entre sus políticas económicas, sino porque su naturaleza capitalista ha acentuado la vulnerabilidad de la Argentina y Brasil ante la economía capitalista internacional.

---

[20] IEFE. *Costos y Perspectivas de la Industria Automotriz.* Buenos Aires, mayo de 1999

Los dos países ingresaron con el Mercosur en la calesita de la especulación financiera internacional, sin una base industrial ni una inserción independiente en el mercado mundial capaz de sostenerla y canalizarla. La experiencia del Mercosur, tentativa de las burguesías más fuertes de América del Sur para obtener un acceso independiente al mercado mundial, sin quebrar las bases del dominio imperialista, demuestra que la ruta del desarrollo de los países atrasados no es su adaptación al mercado mundial, sino la estatización de los grandes medios de producción bajo la dirección de la clase obrera y con un régimen de planificación económico-social.

4. INTEGRACIÓN MONOPOLISTA Y DESINTEGRACIÓN NACIONAL

Los intereses de los EEUU en apresurar la instauración del libre comercio encuentran sus bases materiales en la profundización de las disputas inter-imperialistas por los mercados, o dicho de otra manera, en la penetración masiva del capital extranjero en América Latina, que se convierte aún más en escenario de la competencia entre los gigantes del capital mundial. El dato más espectacular hoy de esta competencia lo constituye el colosal proceso de fusiones y adquisiciones que está transformando el elenco de las grandes transnacionales.

Los grandes grupos económicos locales, algunos de los cuales mueven varios miles de millones de dólares (como en Brasil, México o Argentina), son pigmeos comparados con estas monstruosas corporaciones que operan a escala de todo el globo, manejan decenas de miles de millones de capital y emplean a cientos de miles de trabajadores. El ALCAes la estrategia que busca desplegar el imperialismo norteamericano para continuar y afianzar aún mas el dominio de sus monopolios sobre el continente americano. De hecho, entre 1990 y 1997 América Latina ha sido el mercado más dinámico para EEUU, recibiendo el 20% de las exportaciones norteamericanas, mientras Japón y Asia Oriental reciben sólo un 25% en conjunto. Esto le ha permitido enjuagar una parte de su déficit comercial con Japón y Europa. Un estudio de CEPAL afirma que "EEUU es el principal inversor en América Latina y el Caribe".[21]

Las razones de los yanquis son muy simples: no quieren abrir el mercado norteamericano a los productos del sur del continente, en plena crisis de sobreproducción internacional. Exigen sí la apertura de América Latina sin la reciprocidad que exigen los burgueses latinoamericanos. Por eso concentran su presión en la apertura de los mercados financieros y de las telecomunicaciones, para proceder a partir de aquí a una completa colonización económica. El problema es, sin embargo, un poco más complejo.

Ocurre que el imperialismo norteamericano está logrando imponer sus pretensiones en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio y a los países del este de Asia, aprovechando, en este último caso, el desmoronamiento de sus economías. Por eso ha desplazado a un segundo plano el objetivo de crear una fortaleza competitiva contra los imperialismos de Europa y Japón a partir de una integración continental desde Alaska a Tierra del Fuego. Es fácil concluir que apenas la crisis mundial agudice todavía más los enfrentamientos entre los grandes capitalistas de los diversos países, el congreso norteamericano diseñará una política para absorber rápidamente a América Latina.

De una u otra forma, el destino del Mercosur estaba sellado, pues sucumbiría a las imposiciones que se fraguaban al nivel internacional, o lo haría ante la presión final del imperialismo yanqui. De cualquier modo, el Mercosur entró en una fase más álgida de su crisis. En todas las ramas de la producción, como autos, siderurgia, energía, papel, calzado, textiles, los choques se suceden a diario. Las pugnas son de tal magnitud que los gobiernos no consiguen arbitrar entre las posiciones en pugna. Fiat versus Ford, Techint contra Usinor, son algunos de los protagonistas de esta contienda que promete resolverse a sangre y fuego.

El destino del Mercosur ha pasado a depender más que nunca de un arbitraje internacional. Pero no de un arbitraje imparcial, porque lo que quiere el árbitro es

[21] "Las empresas estadounidenses se concentran en la industria manufacturera y en los servicios (telecomunicaciones y energía). Así en el sector manufacturero aprovechan ciertas ventajas (bajos salarios, proximidad geográfica y acceso privilegiado al mercado estadounidense) para incrementar su capacidad de competencia en su propio mercado y enfrentar a las empresas asiáticas" (CEPAL. *La cambiante presencia de las compañías transnacionales en América Latina*. 1998).

imponer una mayor apertura comercial y financiera que favorezca la instalación de capitales internacionales que luchan por el mercado mundial. Hay, por otro lado, no un árbitro solo sino dos y hasta tres (Japón), con intereses divergentes.

Por último, el rediseño internacional afectaría a muchos capitalistas menores en EEUU y Europa, o sea que plantea una depuración capitalista en las metrópolis. Antes de todo esto, sin embargo, EEUU y la Unión Europea deben decidir el desenlace de la crisis de pagos de Brasil y la Argentina. En resumen, el derrumbe del Mercosur responde a tendencias revolucionarias que se pondrán de manifiesto como consecuencia de ello. Un fracaso del arbitraje yanqui-europeo marcaría el inicio de una dislocación del comercio internacional.

COMÉRCIO INTRA MERCOSUL
Importaciones y exportaciones entre los 4 países – miembros (en millones de dólares)

1995	**28,416**
1996	**34,182**
1997	**41,171**
1998	**40,822**
1999	**30,583**
2000	**35,336**
2001	**30,537**
2002	**23,000***

** estimativa*

Fuente: CEI (Centro de Economía Internacional)

Habría razones estratégicas para el interés de EEUU en América Latina: el petróleo, el agua, la biodiversidad y el espacio vital propio. EEUU ha redefinido el papel del petróleo, y ya no lo considera sólo una materia prima, sino, expresamente un elemento de interés vital para la seguridad nacional de EEUU. Por ello el petróleo de Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina y México es clave, es como "una reserva doméstica que hay que asegurar para cualquier eventualidad". En América Latina está la tercera parte de las reservas de agua potable del Mundo y se ubican básicamente en dos grandes cuencas: una en torno al Amazonas (que incluye el acuífero Guaraní) y la otra en la cuenca de Chiapas, en México. Ciudades muy importantes de EEUU como Los Ángeles y San Diego en breve se van a quedar sin agua "porque el Río Colorado cada vez tiene menos caudal y en unos años será un arroyo".

Para los EEUU las alternativas son dos: traer el agua de Canadá o traerla de México. Por lo tanto el agua es estratégica por partida doble, y América Latina es una región muy rica en agua. Así se explica el Plan Puebla Panamá. La tercera razón é la biodiversidad, en América Latina están presentes el 40% de todas las especies animales y vegetales existentes en el planeta, casi la mitad. Ello es un elemento fundamental cuando se ha desatado una verdadera carrera por descifrar el código genético de las especies y buscar aplicaciones comerciales a la genética.

Los grandes laboratorios de EEUU y de Europa están patentando los códigos genéticos y por eso EEUU hace tanto énfasis en la defensa de la Propiedad Intelectual. Por una lado descifran los códigos genéticos, luego los patentan, introducen masivamente los transgénicos por ejemplo en la agricultura y luego cobrarán a los agricultores y a los países por utilizar las especies que tendrán registradas. Esto ya está ocurriendo, aún en pequeña escala en México. Para os EEUU América Latina es su "espacio vital" y pretende mantener un dominio territorial "absoluto sin disputa". Uno de los elementos estratégicos es el Plan Colombia para la región pero se complementa con el

mantenimiento de las bases militares que hoy tienen en Puerto Rico, Guantánamo, Honduras, Panamá, Ecuador, Bolivia. Os EEUU quieren por lo menos tres bases más: una en la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay; otra en la zona de la Amazonia en Alcántara y una tercera en la zona de influencia de Venezuela.

Con el ALCA se pretendieron hacer realidad los objetivos que EEUU ha querido imponer a todo el mundo a través del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI). Dicho Acuerdo fue rechazado por la Organización Mundial de Comercio (OMC) por considerarlo "opuesto a los principios soberanos de los países". EEUU desearia, a través del ALCA, eliminar en toda América Latina y el Caribe (con excepción de Cuba), las tarifas arancelarias y no arancelarias, así como obtener acceso a las compras gubernamentales, y poder realizar inversiones en cualquier sector de las economías latinoamericanas. Se quiere la apertura total en sectores estratégicos y en el servicio financieros. Es decir, el ALCA no solo comprende un área de libre comercio, sino que también están comprendidos los servicios, el sector financiero, las compras gubernamentales y las inversiones. Todo aquello que represente obtención de ganancias para el gran capital internacional debe ser liberalizado y des-regulado. Este proceso comenzó desde hace tiempo. Lo que se pretende es su institucionalización, su profundización y, en consecuencia, su irreversibilidad.

En resumen, el tratado que suscribirían los presidentes de 34 países de América para conformar el ALCA no es libre comercio y es mucho más que "libre comercio". Según el valor del PIB total del conjunto de esas 34 naciones, para 2002, EEUU fue el 78,7%, Brasil el 6%, Canadá el 5,5%, y los otros 31 países, entre todos, apenas sumaron el 9,8% restante. Colombia, aunque ocupe el sexto lugar, no es ni un dólar de cada cien de los que se producen anualmente en el continente. EEUU es, asimismo, el 63% de las importaciones, el 55% de las importaciones y, en términos de consumo es, con un ingreso por habitante que septuplica al de México, decuplica al de Brasil y es más de 15 veces el de Colombia, el centro de las compras hemisféricas. Finalmente, por cada dólar que Colombia vende en el exterior, los EEUU venden 150.

Cuando se analiza el comercio exterior estadounidense, se encuentra que, en primer lugar, adquiere recursos naturales, como petróleo, cobre, carbón, aluminio y estaño, y frutos tropicales como café, banano, cacao, azúcar de caña y flores, frutas, follajes y forestales tropicales, entre otros. Es decir, productos que elaboran y exportan las tres cuartas partes de los países signatarios del acuerdo. EEUU tendría a su completa disposición una amplia gama de proveedores que competirán entre sí para Alcanzar el publicitado "acceso al mayor mercado del mundo".

El otro renglón que los EEUU más compra es el de los bienes de consumo final. Vale la pena observar que tales bienes corresponden a productos fabricados bajo el sistema de ensamble como en México, como las maquilas centroamericanas y, recientemente, las mercaderías del ATPDEA. Todos ellos tienen un elemento común: el grueso de los insumos o las partes que los componen, ha sido suministrado por los EEUU y el valor que se agrega corresponde al de una envilecida mano de obra. En el caso de México las materias primas semielaboradas equivalen al 97% del valor de la mercancía. También Norteamérica provee los equipos para las labores de estas fábricas que ha montado allende sus fronteras con el encanto de la fuerza de trabajo barata. He aquí otra fuente de competencia entre los pobres: la célebre competitividad regida por los bajos salarios.

En efecto, para el caso de la industria manufacturera en 1999, el salario por hora en Chile y Brasil era un séptimo del de EEUU, el de Cosa Rica un octavo, el de República Dominicana y el de El Salvador era un noveno, el de Panamá, México, Colombia y Paraguay era un onceavo y el resto de ahí para abajo. Resulta, entonces un gran negocio

enviar los pedazos para que los obreros del sur del Continente los junten a la barata. Pero resulta mejor negocio si además rivalizan entre ellos por quién lo hace con mayores privaciones y menores remuneraciones; en fin, por quién es capaz de aguantar más hambre. El ALCAtraerá consigo una forma especial de competencia, de las muchas que se dan en la confrontación de la globalización, será la competencia entre menesterosos para poder subsistir en el marco del modelo económico norteamericano, ésta es la más dañina de las competencias.

Por tal razón se ha caracterizado al Acuerdo como "una sopa de anzuelos". El capítulo Acceso a Mercados prescribe el libre comercio, en todas sus modalidades, tanto para las mercancías terminadas como para las partes que las componen, para las camisas terminadas y, así mismo, para las mangas, los puños y el cuello, es "maquila a la carta". El de agricultura trata ante todo de la libre "comercialización de productos agrícolas" con lo cual los productores quedan a merced del reducido grupo de multinacionales de este tipo de comercio las que se moverán a sus anchas llevando de un lugar a otro lo que más sea de su conveniencia y supeditando la producción rural a ese tráfico con lo cual, además, las naciones correrán el riesgo de dejar de producir los alimentos para su población, comprometiendo su "soberanía alimentar". Lo anterior se sentiría con mayor rigor en los países tropicales, como Colombia, en los que habría una derrota fija en cereales, incluido arroz, oleaginosas, leche, pollo y papa, entre los más destacados.

También se sabe que los subsidios a los productos agropecuarios norteamericanos, pero también canadienses y aun brasileros, continuarán inmodificados y sujetos, como reza el borrador del ALCA, a lo que se disponga al respecto en la OMC. Este instrumento que se presenta como una ingenua subvención o a lo sumo como una "distorsión comercial", es mucho más: es un arma estratégica de control político para derrotar la producción alimenticia en los países más débiles, incrementando su vulnerabilidad, es mucho más que economía, como lo dice el propio George W . Bush: "¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable. Y por eso, cuando hablamos de la agricultura norteamericana, en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional". Los subsidios son entonces "bombas inteligentes", se pueden catalogar como verdaderas armas de destrucción masiva.

La realidad de la economía mundial de hoy tiene poco que ver con "mercados libres", y todavía menos con un mundo "globalizado", en cualquiera de sus variantes. El mundo está hoy dividido en tres imperialismos que compiten y cooperan entre sí, dirigidos por los EE UU, que incluyen la Unión Europea y Japón. Frente a los países oprimidos, su naturaleza se disfraza con una retórica "neoliberal" o de "mercado libre". La esencia consiste en la protección imperial por parte del Estado de los capitalistas nacionales que no son competitivos y la apertura forzada de los mercados del Tercer Mundo en condiciones perjudiciales para los otros competidores. Entre los sectores más protegidos y subsidiados por el Estado está la agricultura, en la que los responsables políticos gastan decenas de miles de millones de dólares, euros y yenes, directa e indirectamente, subvencionando a productores y exportadores, y estableciendo al mismo tiempo una gran variedad de medidas protectoras, desde cuotas explícitas a las importaciones agrícolas a las llamadas "preocupaciones sanitarias" destinadas a reducir o excluir las importaciones provenientes de países competidores y del Tercer Mundo.

El sistema ha devastado al campesinado de la periferia capitalista mundial. En primer lugar, las subvenciones permiten a los agro-exportadores vender más barato que los productores agrícolas del Tercer Mundo, mediante las subvenciones de la electricidad, el agua, los programas de extensión, etc., provocando así la bancarrota de millones de

campesinos. Las importaciones de alimentos baratos producidos por los agricultores -subvencionados, y supuestamente "más eficientes"- de EE UU, han echado de sus tierras a más de dos millones de campesinos mexicanos y brasileños en los años 90.

A la vez que los EE UU y la UE subvencionan en gran medida a sus exportadores de alimentos y granos, el FMI y el Banco Mundial exigen a los países latinoamericanos recortes presupuestarios y libre comercio, lo que conduce a drásticas reducciones de los presupuestos destinados a la agricultura, y a la inundación de esos mercados con importaciones baratas subvencionadas.

Las cuotas, explícitas y encubiertas, que la UE y los EE UU imponen a sus importaciones agrícolas perjudican a los agro-exportadores potenciales que, a su vez, reducen la utilización de mano de obra rural, incrementando la pobreza rural. La naturaleza no recíproca de las reglas de comercio aceptadas por los países de América Latina revela la naturaleza "colonizada" de éstos. Los Estados colonizados desempeñan un papel crucial en la retirada de obstáculos a las importaciones extranjeras, la reducción del crédito y de la financiación inversora en el sector rural (a excepción de algunos sectores especializados que complementan la agricultura de la UE y de EE UU).

Además de drenar los recursos del campo para cumplir con las exigencias de los banqueros de la UE y de EE UU en materia de deuda externa, el Estado colonizado desempeña otros papeles cruciales: la vigilancia de los campesinos desplazados y de los trabajadores rurales indigentes, la desnacionalización de la propiedad de la tierra y la privatización de sectores específicos.

Y, en cuanto a los reglamentos, los de política de competencia y solución de controversias, crean un nuevo sistema jurídico a través del ALCA, otorgando carácter de sujeto, en el derecho internacional, a los grupos corporativos; y un nuevo código de "economía procesal" y "pronto arreglo", para hacer justicia privatizada, que lo complementa. Esas herramientas facilitan a los aprovechadores del ALCA actuar con absoluta seguridad y plenas garantías (Robert Zoellick, representante comercial de EEUU, no cesa de repetir que "el capital es un cobarde, que no va sino donde se siente seguro").

Finalmente, merece referencia el capítulo de Propiedad Intelectual. En él, bajo distintas formas de propiedad como patentes, marcas registradas, derechos de obtentos, de autor y de protección especial, se crea una renta de monopolio a los inventores. Y, aunque este mecanismo se publicita como defensa de la invención nacional, no puede olvidarse que en este terreno sí que ocurren las llamadas "asimetrías".

En 1996, por ejemplo, EEUU tenía registradas 218.642 patentes en su sistema, el más importante del mundo y del ALCA. La IBM registró, en 1998, 2.657 patentes, más de 7 por día calendario y las cinco empresas más importantes del sector de biotecnología agrícola poseen de manera directa o indirecta cerca del 50% de las patentes del sector. EEUU es el 40% del presupuesto anual mundial de investigación y desarrollo y tiene superávit de varios miles de millones de dólares por ese concepto.

La cuestión de la propiedad intelectual es especialmente perjudicial para los países de ingreso medio y bajo en áreas tan sensible como la salud, al imponerse la propiedad intelectual sobre las fórmulas de los medicamentos para males como VIH, cáncer, hepatitis y otros. También sobre la nutrición al decretarse sobre las semillas y agroquímicos, la Monsanto posee el 91% de las patentes de la semilla de soja, y sobre el desarrollo industrial al estar vigente para los descubrimientos técnicos y científicos por muchos años. En el ALCA, América Latina ingresaria al mundo de la cotización de las rentas de monopolio así constituidas, donde se configura el más absurdo de los mercados: una oferta única con una demanda que mientras más consume de un bien,

contrario a las leyes más elementales de la racionalidad económica, más tendrá que pagar.[22]

"Al manipular el juego del comercio global en contra de los agricultores de los países en desarrollo, Europa, EEUU y Japón están en esencia derribándole a patadas la escalera del desarrollo a alguna de la gente más desesperada del mundo. Esto es moralmente depravado… Con nuestras acciones estamos cosechando pobreza alrededor del mundo… La hipocresía exacerba el atropello. Los EEUU y Europa dominan el arte de forzar las economías abiertas de las naciones pobres a la importación de bienes y servicios industriale. Resulta que la globalización puede ser una avenida de una sola vía. Después de todo lo que en realidad estará en discusión, no obstante la soporífera jerga comercial, es si una economía globalizada tiene o no espacio para los más pobres agricultores del mundo".[23]

Desde el punto de vista político, la "democracia" latinoamericana no sólo se adaptó, sino que fue funcional, al proceso de entrega nacional acentuado desde la década de 1980. Para William I. Robinson, profesor de sociología de la Universidad de California, la política externa de los EEUU, de "promoción de la democracia" tenía, en realidad, otra denominación: *poliarquía*. Se trataba de una forma de dominación combinada entre consenso y coerción, que fue estructurada para servir como contención a los movimientos populares en los "países en desarrollo".

En los años 1980, hubo un gran cambio estratégico de la política externa norteamericana. A remolque de la "crisis de autoridad" de los años 1970, los jefes de la Casa Blanca y del Pentágono decidieron redefinir su estrategia – el control directo mediante la fuerza de regímenes dictatoriales daría lugar, justamente, a la "promoción de la democracia". La actitud norteamericana, notaron en aquel momento, estaba creando condiciones para la explosión de revoluciones populares, especialmente en América Latina. La revolución sandinista, en Nicaragua, en 1979, habría sido, por lo tanto, la expresión más evidente de ese proceso.

Surgió entonces la Fundación Nacional para la Democracia – *National Endowment for Democracy* (NED), creada oficialmente como entidad sin fines lucrativos en 1982. La NED recibe recursos del Departamento de Estado y funciona como intermediaria – en conjunto con las fundaciones de los partidos demócrata y republicano – *National Democratic Institute* (NDI) y *National Republican Institute* (NRI), respectivamente – entre el núcleo del poder de los EEUU e innumerables organizaciones, entidades y grupos de la "sociedad civil" (conglomerados mediáticos, sindicatos, jóvenes, centros de investigación, etc.) de países periféricos, que actúan en la base de las sociedades con el objetivo de fragilizar a los movimientos de lucha.

De esa forma, el gobierno norteamericano concretizó su cambio de táctica. "Eso no quiere decir que las acciones militares, los embargos y otras intervenciones directas hayan sido descartadas", subrayó Robinson, autor de varios libros sobre el tema. Según él, existirian tres categorías de países, y para cada uno de ellos los EEUU definieron estrategias específicas de actuación. Las acciones con relación a Cuba, Venezuela y Bolivia, serían de desestabilización directa. En Ecuador, en Colombia y en El Salvador, la regla escogida habría sido la de la desmovilización de los movimientos vía entidades de la sociedad civil. El tercer grupo sería formado por países como África del Sur e Irak, donde la presencia de los EEUU es físico-militar.

---

[22] SUÁREZ MONTOYA, Aurelio. Crítica al Área de Libre Comercio para las Américas. *InvestNews*, Bogotá, 2003.

[23] *The New York Times*, 20 de julio de 2003

5. VIGENCIA DE LA CUESTIÓN AGRARIA: LA LUCHA DE LOS "SIN TIERRA"

En el cuadro de la "década perdida" se produjo una revitalización del movimiento campesino en diversos países latinoamericanos, del cual la lucha de los "sin tierra" del Brasil se transformó en símbolo internacional. La vigencia renovada de la cuestión agraria en América Latina testimonió, contra teóricos "posmodernos" y "globales", la incapacidad histórica del capitalismo para resolver los problemas elementales de la constitución de la nación en los países atrasados, y aún más de integrarlos armónicamente en un supuesto "capitalismo global". La cuestión agraria en el Brasil no sólo retomó los problemas irresueltos del pasado colonial e imperial, sino que planteó su reformulación bajo las condiciones de la era imperialista del capital y de su crisis mundial.[24]

En Brasil se verificó, desde el comienzo de su vinculación al mercado mundial, el predominio de la gran propiedad, a través del latifundio, ya que no hubo límites para las concesiones de tierras. Solamente a fines del siglo XVII, en 1695, una carta regia, recomendaba no conceder a cada morador más de cuatro leguas de largo por una de ancho. Dos años después, esa extensión fue restringida a sólo tres leguas de largo por una de ancho. En el siglo XVIII se fijaron nuevas disposiciones. En 1729, una provisión limitó las concesiones de sesmarias a tres leguas de largo por una de ancho, o a tres de ancho por una de largo, o a una legua cuadrada. Fue éste el límite que predominó a partir de entonces, pero ya para esta época las tierras de Brasil se hallaban completamente ocupadas. Extensas sesmarías, aunque escasamente pobladas, tenían propietario conocido.

El latifundio, como vasta extensión de tierra adquirida a la espera de su valorización, y cuya principal función es la especulación inmobiliaria y no la producción agrícola, también fue característica de la América española. La despoblación posibilitó la formación de extensas propiedades del grupo étnico dominante. La escasez de mano de obra, junto a la abundancia de tierra, generó la utilización de esta última como forma de garantizar la primera. Se institucionalizó el minifundio (posesión de minúsculas extensiones de tierra) en el interior del latifundio, para asegurar mano de obra barata y constante. A la par de ese proceso, se vio la minifundización de la periferia de la formación social.

La consecuencia fundamental de la despoblación, es que el trabajo, y no la tierra, pasó a ser el factor de producción más escaso. Las instituciones claves de la Colonia fueron aquellas que garantizaban trabajo y no las que garantizaran tierra. En esa situación, el trabajo libre tendría que ser necesariamente bien remunerado. Dada la condición histórica de que el trabajo manual era poco aceptable para los peninsulares y dada la desigualdad fundamental en el sistema de fuerzas, debida a las diferencias de armamento y entrenamiento, la esclavitud se impuso como la solución lógica. Las instituciones de la Colonia obedecieron a ella, que no derivó de las características intrínsecas del tipo de actividad económica —minería, plantación de azúcar— sino del hecho de que el trabajo era el factor escaso de la producción. El área cultivada fue tremendamente reducida, dándose origen al latifundio improductivo y, en las regiones más apartadas de los centros consumidores y de las rutas de transporte, las tierras fueron simplemente abandonadas, ya que su valor como bien de producción o bien de inversión era cero.

[24] Ver: COGGIOLA, Osvaldo. Brasil: la cuestión agraria y la lucha del MST. *En Defensa del Marxismo* n° 22, Buenos Aires, enero de 1999

Cuando el Brasil se tornó independiente, junto al resto de América Latina, las bases de su atraso ya estaban echadas: "La irrelevancia de América Latina a mediados del siglo XIX era incontestable. A pesar de ser, fundamentalmente, una exportadora de productos agrícolas, en contraste con Europa que se industrializaba, su producción agrícola era una fracción de la europea. La producción total europea, en 1850, era por lo menos 30 veces superior a la latinoamericana". Esto pese a que "aunque la participación de América Latina en el comercio mundial haya declinado claramente —de 11% en el siglo XVIII a 5,1% al final del siglo XIX— en términos absolutos las exportaciones latinoamericanas aumentaron mucho".[25] En el caso brasileño, las exportaciones se decuplicaron durante el siglo XIX. La independencia, en realidad, consolidó la estructura latifundista y, con ella, las propias bases del atraso: "Desde el siglo XVII, Portugal tiene una colonia principal: Brasil. Y el Africa portuguesa se convierte más en colonia de Brasil que de la madre patria, para la cual no constituye sino una subcolonia. En efecto, Guinea y Angola y, hasta cierta época, Africa Oriental, fueron los abastecedores de esclavos del Brasil. No podían vivir sin éste, ni éste sin ellas".[26]

Si en un país latifundista la democracia plena —ciudadanía para todos los habitantes— no tenía raíces, en uno latifundista y esclavista, menos todavía. En los conflictos internos de las clases poseedoras brasileñas se cuestionaba la esclavitud, la distribución de la renta nacional y hasta las características del sistema político, pero no la base de la economía nacional: el latifundio, del cual todos (hacendados y señores, comerciantes y burocracia estatal) sacaban provecho. El latifundio no se vio afectado sino consolidado por la independencia. Según Emilia Viotti de Costa, "como toda la extensión del latifundio no se utilizaba con fines comerciales, el propietario podía mantener un cierto número de arrendatarios ligados a la economía de subsistencia, lo que creó una red de relaciones personales entre arrendatarios, propietarios y la Corona. Esto contribuyó a aumentar el prestigio personal del propietario, dado que poseía poder sobre los hombres libres que vivían en sus tierras y también sobre sus esclavos".[27]

La economía de exportación primaria, agilizada por la independencia (quiebra del monopolio colonial) consolidó el latifundio. En vez de favorecer el acceso a la tierra y a la pequeña propiedad (como la *Homestead Act* en los EEUU), la Ley de Tierras de 1850 favoreció a la gran propiedad. La ley norteamericana propiciaba la ocupación de tierras, la brasileña la dificultaba. Los medios tradicionales de acceso a la tierra, co-propiedad, arriendo, ocupación, fueron proscriptos, las tierras no utilizadas volvieron al Estado que, por su parte, vendía las tierras por un precio más alto.

En los EE.UU. la ocupación de tierras (sobre todo del Oeste) fue resuelta, por la presión de la burguesía industrial del norte, en favor de la pequeña propiedad (y por lo tanto, de la ampliación del mercado interno), en Brasil fue resuelta en favor del latifundio (o sea de la reducción del mercado interno), por la ausencia de una burguesía industrial o de una clase social suficientemente fuerte como para luchar contra el latifundio (como los granjeros de EEUU), inexistentes en la época colonial. La ausencia de esa clase hace que el latifundio sea una fuente estrecha de acumulación capitalista y no la extensión en sí de la propiedad agraria (si no fuera así, la estructura latifundista de vastas regiones norteamericanas habría impedido el desenvolvimiento del capitalismo industrial en los EEUU).

[25] DILLON SOARES, Glaucio Ary. *A Questão Agrária na América Latina* Rio de Janeiro, Zahar, 1976, pp. 27-39.

[26] MAURO, Frédéric. *Nova História e Novo Mundo.* San Pablo, Perspectiva, 1982.

[27] VIOTTI DA COSTA, Emília. *Da Monarquia à República.* San Pablo, Difel, 1966.

En el siglo XX el desarrollo brasileño experimentaría todas las dificultades vinculadas a "la desproporción creciente entre la industria, de desarrollo formidable, y la agricultura, atrasada", en la palabras de Bujarin (*La Economía Mundial y el Imperialismo*). La agricultura fue la primera rama productiva que entró en la crisis crónica típica de la era de los monopolios, como ya constataba Kautsky, a inicios del siglo, en el clásico *La Cuestión Agraria*: "Desde hace 20 años, los economistas liberales nos profetizan el próximo fin de la crisis agraria. Y sin embargo, cada día aumenta, se agrava y se extiende el mal. No hay que ver en ello un fenómeno pasajero sino un fenómeno constante, una verdadera revolución político-económica". Las posibilidades de acumulación a partir de la capitalización de la renta agraria están desde ahora limitadas crecientemente por la caída progresiva de los precios agrícolas internacionales (el "deterioro de los términos de intercambio"), y por la exigüidad del mercado interno de los países exportadores de productos agrarios pues, como ya notaba Kautsky, "no es en el proletariado obrero donde el capitalismo industrial busca su más importante mercado sino en la masa no proletaria, ante todo la campesina".

El poder de los propietarios agrícolas descansa en la renta absoluta de la tierra. La distribución en cuotas proporcionales de la ganancia que se forma en la agricultura es impedida por la propiedad de la tierra, la cual, siendo un monopolio, pretende para sí una parte de dicha ganancia y se apropia de la diferencia entre valor y costo de producción. La propiedad de la tierra hace, por lo tanto, aumentar el precio de los productos agrícolas (no su valor) en una cantidad igual a la renta absoluta, que viene a constituir una especie de impuesto que recae sobre toda la sociedad.

El atraso de la agricultura en relación con la industria constituye una de las manifestaciones fundamentales de la *ley del desarrollo desigual* del capitalismo, y no se desprende de la naturaleza del suelo sino de las relaciones sociales. La renta absoluta puede ser eliminada en el régimen capitalista mediante la nacionalización de la tierra. La nacionalización, aboliendo la propiedad privada, no eliminaría la renta diferencial sino que la transferiría al Estado, mas permitiría, con la supresión de la renta absoluta, reducir el precio de los productos agrícolas en una magnitud igual a la de la renta absoluta. Aboliendo el monopolio de la propiedad privada de la tierra, haría posible un mayor desarrollo de la agricultura: por eso fue defendida aun por economistas burgueses.

La burguesía no tuvo la osadía de nacionalizar la tierra, pues el ataque contra la propiedad privada de la tierra hubiera resultado peligroso para las otras formas burguesas de propiedad. Además, el capitalista industrial se vinculó como clase a la propiedad privada de la tierra. No puede haber, pues, un movimiento burgués serio a favor de la nacionalización de la tierra por la simple razón de que ninguna clase social actúa contra sí misma. Ricardo no tomó en consideración la renta absoluta; aún más, la negó, admitiendo sólo la renta diferencial. La formación de la renta absoluta está vinculada al hecho de que a causa del atraso de la agricultura respecto de la industria, la composición orgánica del capital agrícola es más baja que la del capital industrial. En la agricultura, la cuota del capital variable (salarios) es proporcionalmente más alta que en la industria. Como consecuencia de esto, en la agricultura la plusvalía es más elevada que la media, y el valor de los productos es, en general, superior.

La renta absoluta es común a todos los terrenos, independientemente de su localización o calidad. Dejada de lado la inferioridad de la composición orgánica del capital, la propiedad del suelo solamente crearía renta dentro de la especulación. Así, toda renta fundiaria deriva del monopolio, y "la única barrera al superbeneficio agrícola es el mercado. La tierra bajo la forma de monopolio de cantidad limitada explica la renta

absoluta. Bajo la forma de monopolio de calidad diferenciada, explica la renta diferencial. El mecanismo social que crea la renta es unificado y el superbeneficio agrícola, único. Las dos formas de renta tienen la misma causa, el monopolio relativo de la tierra".[28] Para Lenin, "la teoría de la renta presupone que toda la población agrícola haya sido dividida completamente en latifundistas, capitalistas y trabajadores asalariados, lo que es el ideal del capitalismo, pero no la realidad".[29]

El desarrollo capitalista, aun atrasado, implica una transferencia del poder del latifundista a la burguesía, en la medida en que "gran parte de la producción campesina es absorbida por el arriendo y diversos tipos de acuerdo para compartir la cosecha. No obstante, la explotación del campesinado no se limita a los terratenientes; diversos grupos sociales comparten la producción campesina a través de la renta, los intereses sobre préstamos, los impuestos, etc. Los términos del comercio desfavorable para el productor campesino transforman el intercambio de mercado en otro canal de explotación del campesinado por parte de la sociedad urbana en general. El capital generado en la agricultura es, frecuentemente, absorbido por el sector terciario urbano, con una nueva burguesía urbana tomando a su cargo gran parte de la función de los terratenientes tradicionales. Gran parte de los intermediarios cumple funciones en la economía política de las sociedades campesinas. Representan a los terratenientes (inspectores, etc.) o a las grandes organizaciones burocráticas (compradores, recaudadores de impuestos). En algunos casos son ‘empresarios libres’. Sin embargo, no se trata de simples mediadores, agentes honestos entre los diferentes grupos sociales y poderes. Su posición social entre los poderosos y los oprimidos hace que sus tendencias explotadoras se dirijan contra los campesinos como una cuestión de hecho".[30]

La forma más transparente de sumisión de la agricultura al capital está en la agroindustria. Es una situación de monopolio, donde un conjunto de productores agrícolas independientes se sitúan como proveedores de insumos frente a monopolios industriales. No es el capital industrial invertido en la producción agrícola sino la subordinación de la agricultura para transformar el proceso de reproducción del capital industrial. La producción capitalista en la agricultura posee especificidades: la importancia del factor natural, la tierra, el mayor tiempo de rotación del capital y la dificultad de compatibilizar el flujo de gastos con el de ingresos determinan un tipo diferente de financiamiento en relación con el industrial.

En Brasil, hasta 1950, la necesidad de capital dinero en la agricultura era pequeña debido a la desmonetización parcial de la producción: relaciones de producción atrasadas, bajo nivel técnico, producción de diversos insumos dentro de la propia unidad productiva. Para algunos cultivos existían fuentes de financiamiento diferenciadas con institutos estatales (azúcar, café), pero no líneas de crédito especiales para el conjunto de la agricultura. Con el desarrollo capitalista, la necesidad de capital dinero acompañó el uso creciente de herramientas e insumos en la producción.

Surgen, entonces, los financiamientos subsidiados del Banco del Brasil, de los bancos oficiales y particulares, junto con la tecnificación y la eliminación de los cafetales viejos y deficitarios de San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais. El programa de erradicación del café, completado en los años ‘60, eliminó los cafetales antiguos, de baja productividad y calidad, carentes de mercado. Fueron expulsados, de las fazendas, los

---

[28] VERGOPOULOS, Kostas. *A Questão Agrária e o Capitalismo*. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977, p. 94.

[29] LENIN Vladimir I. *O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia*. San Pablo, Nova Cultural, 1988.

[30] SHANIN, Theodor. *Naturaleza y Lógica de la Economía Campesina*. Barcelona, Anagrama, 1976, p. 34.

colonos residentes, acabando con el sistema de colonato que imperara durante setenta años, después de la abolición de la esclavitud (1888). Lo mismo sucedió en el Nordeste, donde la modernización tecnológica expulsó a los moradores para 'recuperar' las tierras en que producían sus propios alimentos: surgen los 'clandestinos', o bóias-frias. En la década del '60, también, comenzó, en el Amazonas, la expulsión de posseiros y *seringueiros* (productores independientes de caucho). En 1965, se creó el Sistema Nacional de Crédito Rural: con créditos subsidiados, se aseguró que parte de las captaciones bancarias fuese hacia la agricultura, garantizando el uso de insumos modernos y la articulación de los propietarios rurales con la industria y la agroindustria.

En la década del '60, surgió, en la economia brasileña, un departamento productor de insumos agrícolas y, con ello, la industrialización de la agricultura, que pasó a operar como un ramo industrial. Simultáneamente, en toda América Latina, se redujo proporcionalmente la fuerza de trabajo agrícola: en 1950, la población económicamente activa en la agricultura representaba 54,7% del total; en 1970, 40%, y en 1980, 34,9%. La población que vivía de la agricultura era, al final de la década del '80, de 126 a 130 millones de personas: 30-40 millones en Brasil, 25-30 millones en México, 10 millones en Colombia. La fuerza de trabajo era de 40 millones, incluidos los pequeños propietarios y los trabajadores sin tierra.

La concentración de la producción hizo surgir los monopolios agrícolas. La renta de la tierra se fue fundiendo con el lucro del monopolio. La explotación del campesino se da a través de la venta de productos con precio (alto) de monopolio y la compra a precios artificialmente rebajados; el surgimiento de una capa de intermediarios capitalistas, que lucran a expensas del trabajador rural y del urbano; la ruina de los campesinos durante las crisis, cuando se ven obligados a vender sus tierras a precios ínfimos. Monopolios industriales y bancos se benefician a través de los altos precios de los productos industriales, de la duras condiciones de crédito, con el Estado contribuyendo vía altos impuestos. Los campesinos se endeudan, viven precariamente, pierden tierras y bienes, concluyendo por engrosar las filas del proletariado (agrícola o industrial).

El excedente pasó a ser retenido por los oligopolios, vía elevación de los precios de los insumos (producción) y atribución de costos mayores a la comercialización (circulación). Los pequeños productores no pueden formar un fondo de acumulación. Sus productos deben ser baratos, para garantizar el poder de compra del trabajador industrial y de servicios, que no es beneficiado por aumentos salariales.

En los años 1970, como consecuencia de los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) hubo varios megaproyectos de inversión, en cuyo cuadro se situaron los proyectos de agricultura irrigada para el Nordeste, con vistas a atenuar las disparidades regionales y las "desigualdades sociales". Su resultado fue apenas una redistribución monopolista. La política de crédito rural subsidiado ilustró la 'triple alianza' entre industrias, bancos y latifundios. Sólo los grandes propietarios tienen acceso al crédito, en los programas más ventajosos, porque sólo ellos pueden comprar los insumos requeridos: tractores, abonos y agrotóxicos en gran escala, cosechadoras, etc. Los bancos ganan haciendo el préstamo y también lucran los fabricantes industriales de esos insumos.

En toda América Latina, el desarrollo capitalista reforzó el latifundio: "El área media de los establecimientos varía entre 8 hectáreas (ha) en la República Dominicana y 379 en Bolivia... En Argentina, Chile y Brasil, las áreas medias son superiores a 100 ha (368, 227 y 112)".[31] El concepto de área media deforma la realidad, al contrapesar el peso del

[31] DIEGUES JÚNIOR, Manuel. *Establecimientos Rurales en América Latina.* Buenos Aires, Eudeba, 1967, p. 87.

latifundio con los numerosos minifundios, ambos valiendo una unidad en el cómputo del promedio. En Brasil, en 1978, las grandes explotaciones superiores a 1.000 ha, representando 1,8% del total, ocupaban 57% del área total, con 3.200 propiedades gigantes que reunían 102 millones de ha, tres veces más que el área de 2 millones de minifundios. En 1989, 6.700 latifundios tenían el mismo número de hectáreas (más de 127 millones) que 4.166.000 pequeños productores. En cuanto a la participación en la renta agrícola, el 1% más rico tenía 10% en 1970, y 30% en 1980, mientras el 50% más pobre tenía 22% en 1970 y sólo 15% diez años después.[32]

Mientras la producción per capita de alimentos básicos disminuía en relación con 1964, aumentaba la exportación de productos agro-industriales, y también la pobreza de toda la población, especialmente en las áreas rurales (73% abajo de la línea de pobreza en 1990). Junto a los latifundios, los minifundistas agrupaban 3.200.000 activos, más del 20% de la fuerza de trabajo agrícola, con 1.400.000 unidades productivas.[33] El desarrollo capitalista no eliminó el atraso agrario y el desarrollo desigual, al contrario, lo aumentó. Mundialmente, la agricultura usa 69% del agua disponible, la industria 23% y las residencias 8%. En los países atrasados, la agricultura llega a usar 80% del agua, con gran uso de agrotóxicos y fertilizantes, que contaminan los ríos. En Brasil, además, el Sudeste representa 59,2% del PBN, con San Pablo que produce 35,4% (44% de la producción industrial), en un área relativamente pequeña del territorio brasileño. Otro índice del parasitismo latifundista: según el INCRA (Instituto Nacional de la Colonización y Reforma Agraria), los minifundios representaban 72% de las propiedades en 1972, pero ocupaban 12% del área total y, aun así, eran responsables por casi 50% del área plantada con productos básicos de alimentación (arroz, porotos, habas, mandioca y maíz) y también por más de 30% del área plantada con productos de transformación industrial.

En cuanto al inmenso Nordeste, la política estatal la especializó en frutas y vegetales de exportación. El semi-árido nordestino es la mayor área semi-árida tropical del mundo, con condiciones ideales de agua, luz (más de tres mil horas de sol anuales) y calor (temperaturas altas y regulares entre 25 y 30 grados, con baja humedad relativa del aire) para aquellas culturas. La disponibilidad hídrica se debe a que los ríos nacen en lugares más húmedos y se dirigen para el NE. El resultado de décadas de megaproyectos es que el NE es hoy la segunda región más poblada del país, con el mayor porcentaje regional de población rural, con el menor producto per capita, y la mayor "concentración de renta" (polarización social): el producto bruto per capita del NE equivale al 47,2% del promedio brasileño.

La dictadura militar fue la época de oro del latifundio: en 1978, las explotaciones de más de mil hectáreas (1,8% de los inmuebles catastrados) ocupaban 57% del área total. La expansión del área total catastrada entre 1967 y 1978 fue de 47.700.000 ha, de los que correspondían a las explotaciones gigantes (más de 10.000 ha)... 45 millones (más de 95% de la expansión de la frontera agrícola en la década)! El "superlatifundio", 3.200 propiedades gigantescas, reunió 102 millones de hectáreas, una superficie semejante a la del Perú, Bolivia o Colombia (y superior a casi todos los países de Europa Occidental, considerados separadamente).

El Estado fue el agente de ese avance, a través del crédito rural, que llegó a alcanzar un monto semejante al valor total de la producción agraria, y del que fue sistemáticamente excluido el 80% de los propietarios rurales (4 millones). En el millón restante, persiste

[32] CUT (Central Única dos Trabalhadores). *Cartilha de Política Agrícola.* San Pablo, 1989, p. 91.

[33] GRAZIANO DA SILVA, José. *Questão Agrária*. San Pablo, Brasiliense, 1994, p. 75.

la desigualdad: los "menores" (50%) recibían 7,4% del crédito (1969) y 5,2% (1979), mientras que los "mayores" (apenas 1%) recibieron 25,7% en 1969 y 38,5% en 1979: los 5% "más ricos" aumentaron, en ese período, su participación en el ingreso rural de 27,7% a 42,2%, una orgía latifundista. El desarrollo desigual llegó al máximo: "De los poco más de 362.000 tractores producidos en la última década, 78.800 fueron al estado de San Pablo, 70.700 a Río Grande do Sul. Paraná, Minas, Santa Catarina y Goiás se distribuyeron 40 mil tractores entre 1970 y 1980, con el resto distribuido entre los otros estados. Lo mismo ocurrió con el uso de fertilizantes químicos y agrotóxicos, que se concentra en el Sur: 73,6 kilos por hectárea para el Brasil, en promedio, pero 180 kilos para el estado de San Pablo".[34]

Además de suministrar mano de obra barata para los monopolios industriales, por la expropiación de los pequeños productores, el latifundio crea el minifundio (porque el desarrollo industrial nunca acompañó la velocidad de la concentración agraria): "Monopolizando parte importante de las tierras, siempre las más fértiles y accesibles, la población rural expulsada debe dividir una parte ínfima, la menos fértil, la más accidentada y distante. Los minifundios son también producto de la desintegración de los grandes dominios que agotaron la tierra mediante técnicas depredadoras, y se fragmentaron. La microexplotación es el complemento funcional del latifundio. Da a su propietario lo que no es producido en el latifundio, pero no en cantidad suficiente para sobrevivir, lo que lo ata a su parcela y al mismo tiempo lo obliga a emplearse en el gran dominio. El minifundio contribuye a fijar la mano de obra que el gran propietario precisa para realizar la agricultura comercial".[35]

El desarrollo capitalista implicó también la fijación de relaciones precapitalistas, de producción familiar, o sea, es el desarrollo del atraso: en 1950, los miembros no remunerados de la familia eran 54,8% de la población ocupada en la producción agropecuaria (casi 11 millones de personas); en 1975, ya eran 80,5% (de un total bastante superior a 20 millones). En la década del ‘80, salarios y precios recibidos por los agricultores se mantuvieron casi constantes, mientras el precio de la tierra se duplicó.[36]

El minifundio y la producción familiar crecieron en el cuadro de la peculiaridad brasileña de la constante expansión de la frontera agrícola. Los establecimientos basados en trabajo familiar (en el Brasil, hasta 20 ha) pasaron de 3,2 millones en 1970 a 4,3 millones en 1980. En el mismo período, los posseiros (sin título legal de propiedad) pasaron de 811 mil a casi 900 mil: es el campesino expulsado el que fue hacia áreas inhabitadas (la mata), o sea, que no emigró a la ciudad ni fue absorbido como asalariado por la *fazenda*.

La gran propiedad capitalista es básicamente especulativa e improductiva, lo que contribuye a la carestía de la vida, la estrechez del mercado interno y el bloqueo consecuente de las fuerzas productivas: el valor de la producción capitalista es apenas 24,4% del producto agrícola; el de la pequeña producción, que cultiva 32,5 millones de hectáreas (66,2% del área cultivada total) era de casi 51% del producto agrícola total, a finales de la década del ‘80. El crecimiento agrícola en la fase del ‘milagro’ quedó muy atrás del industrial (menos del 5% anual) y se concentró en las áreas de exportación, reduciendo relativamente la oferta interna de alimentos: en 1966/67, las exportaciones

[34] GRAZIANO NETO, Francisco. *Questão Agrária e Ecologia*. San Pablo, Brasiliense, 1985, p. 46.

[35] TOPALOV, Christian. *Estruturas Agrárias Brasileiras.* Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1978, p. 63.

[36] IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). *Censos Agropecuários*, años 1950, 1960, 1970 y 1975.

no llegaban a 12% de la producción agrícola, mientras en 1973 ya eran responsables por casi 19%. En la década del ‘70, la población urbana creció a un ritmo del 4,5% anual, muy superior al de la oferta alimentaria.

Así se explica que, mientras el valor y el volumen de la producción agraria crezcan, el salario real caiga junto al nivel de vida. En 1968, el consumo de arroz por habitante era de 49,5 kg anuales, en 1978 de 47. En el mismo período, el feijão (frijol) cayó de casi 27 kg a 21, y llegó a 18,3 en 1979. En 1971, el salario medio mensual adquiría 46 kilos de carne bovina, o 69,3 de carne avícola, o casi 43 de porcina; en 1979, 28,7, 50,2 y 28,6, respectivamente.[37]

El predominio social de la producción familiar no es un índice de su superioridad frente a la capitalista: "Esos establecimientos, de escasa productividad, albergan a la aplastante mayoría de la población rural bajo condiciones de vida muy precarias. La salida del asalariamiento en la economía rural es muy estrecha cuantitativamente, y muy precaria en materia de condiciones de vida y trabajo".[38] La reproducción de toda la fuerza de trabajo (urbana y rural) queda entonces comprometida: en términos de disponibilidad para el consumo humano, hubo una caída de 20% por habitante-día, siendo las peores en feijão (ítem básico) y mandioca. En 1965, la disponibilidad calórica por habitante-día era de 3.148; en 1967 de 3.033; en 1979, de 2.986.[39]

La valorización del capital de la burguesía agraria, cada vez más ligada a la realización de la plusvalía en el mercado mundial, estrecha sistemáticamente el mercado interno: entre 1977 y 1983, la producción de alimentos por habitante cayó más de 25%, mientras que los exportables crecían 7%, con la caña de azúcar creciendo casi 57%. El crecimiento de este último rubro, basado en el programa de alcohol (para sustituir la nafta) fue una monumental operación de saqueo del Estado por los usineiros y los bancos: en 1980, los financiamientos eran otorgados con tasas del 25% anual, contra una inflación del 110%. El barril-equivalente de alcohol era producido a un costo de 72,5 dólares, en el mismo momento en que la gasolina de mejor calidad era vendida a 40 dólares el barril en Rotterdam.[40]

El alcohol era crecientemente exportado para obtener divisas para el pago de la deuda externa: atraso agrario, obsolescencia industrial, déficit público, deuda externa e interna, e inflación, estaban unidas en una cadena, en cuyas puntas se encuentra siempre el capital financiero internacional. Esto explica todas las distorsiones que hacian y hacen de la Petrobrás la vaca lechera no sólo de los barones del alcohol sino también de las empresas extranjeras del sector petroquímico. La inversión estatal no escapa a las leyes del mercado capitalista, que en período de contracción convierte al activo inmovilizado por el Estado en un peso muerto para la valorización del capital en su conjunto (de ahí la ola de privatizaciones), esto porque la inversión estatal, canalizando los flujos de inversión, nunca sometió a una racionalidad a la inversión capitalista: al contrario, aquélla siempre estuvo sometida a la anarquía propia del ciclo del capital.

Históricamente, la burguesía se propuso resolver la "cuestión agraria" para quebrar el dominio político de las oligarquías, valorizar el conjunto del territorio nacional y contener las sistemáticas revueltas campesinas. El Estatuto de la Tierra y del Trabajador

---

[37] PASSOS GUIMARÃES, Alberto. A estrutura produtiva da agricultura brasileira. *Novos Rumos* nº 6/7, San Pablo, 1988; e IBGE. *Anuário Estatístico*, 1980.

[38] DELGADO, Guilherme C. *Capital Financeiro e Agricultura no Brasil*. San Pablo, Icone, 1985, p. 233.

[39] HOMEM DE MELO, Fernando. *O Problema Alimentar no Brasil*. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1983, p. 223.

[40] GIANNETTI, Eduardo. *Proálcool, Energia e Transporte*. San Pablo, FIPE, 1981, p. 158.

Rural, promulgado por el golpe de 1964, se proponía, en las palabras de Delfim Netto, "un plan de integración nacional que representa la conquista de un nuevo país, dentro de la nación brasileña. Vamos a empujar la frontera para conquistarlo".[41] El balance histórico de la burguesía es un completo fracaso en la eliminación del latifundio, promover el acceso democrático a la tierra y generalizar las relaciones capitalistas: "La remuneración de la fuerza de trabajo en el agro asume hasta hoy formas no capitalistas o precapitalistas de asalariamiento indirecto, parcial o en especie; el colonato de la cafecultura paulista, diversos tipos de aparcería o arrendamiento, así como otras modalidades semejante de subordinación".[42]

La Revolución de 1930 programó "reducir al mínimo posible todas las formas de latifundio, especialmente en las fajas de territorio próximas al litoral y a las vías de comunicación", creando una legislación impositiva y de desapropiación que quedó en el papel. Nacieron después "las iniciativas reformistas, radicales o moderadas, que se redujeron durante décadas a una dimensión retórica con proliferación de propuestas disueltas en los canales de circulación del poder, olvidadas en los programas, mensajes de gobierno, discursos públicos y comisiones parlamentarias".[43] La fusión de la burguesía industrial con la oligarquía agraria se dio bajo la égida del capital financiero internacional, que se transformó en uno de los mayores latifundistas (con las propiedades agrarias de las multinacionales, o el Proyecto Jari).

El 'Estatuto' de la 'Redentora' multiplicó el trabajo por pieza (*empreitada*) del *bóia-fria*, al tiempo que la expansión de la frontera "hacia áreas donde la mano de obra es escasa y se recrean formas diversas de esclavitud, incompletas pero incuestionables", con "tasas altísimas de renta de la tierra, exorbitantes en cualquier país capitalista desarrollado".[44] Lejos de ser una variante específica del capitalismo ('salvaje'), el caso brasileño constituye una variante extrema de las características parasitarias que rigen mundialmente al capital financiero. La evasión impositiva es típica del latifundio: durante la dictadura alcanzó 72% del Impuesto Territorial Rural (ITR) —cifra que será superada por la 'democracia'— representando apenas 0,044% del valor de las propiedades rurales. Casi 67% de los propietarios de mas de 10 mil hectáreas ignoraban al ITR.[45]

Se afirma que, en la Constituyente de 1988 los capitalistas "modernos" "fueron derrotados en la definición del papel de la tierra en la Constitución".[46] En realidad, la Constituyente apenas sancionó el entierro de la reforma agraria, con la connivencia de los "modernizadores". El régimen militar había promovido un remate de las tierras públicas, entre latifundistas, empresarios del Centro-Sur y multinacionales. So pretexto de estímulo a la inversión, redujo el impuesto a los réditos en el campo en un 50% e hizo la vista gorda a la evasión del ITR. Los efectos de esas medidas fueron drásticos y rápidos. Pueden constatarse si se compara la forma en que se distribuyeron las tierras

[41] *Apud* MORAIS, Fernando et al. *Transamazônica*. San Pablo, Brasiliense, 1970, p. 56.

[42] SZMERCSÁNYI, Tamás. O desenvolvimento da produção agropecuária (1930-1970). In: FAUSTO, Boris (org.). *História Geral da Civilização Brasileira*. Tomo III, vol. 4 (O Brasil Republicano), San Pablo, Difel, 1984, p. 171.

[43] CAMARGO, Aspásia. A questão agrária: crise de poder e reforma de base. In: FAUSTO, Boris (org.). *História Geral da Civilização Brasileira*. Tomo III, vol. 3 (O Brasil Republicano), San Pablo, Difel, 1984, p. 125.

[44] GORENDER, Jacob. *Gênese e Desenvolvimento do Capitalismo no Campo Brasileiro.* Porto Alegre, Mercado Aberto, 1987, p. 54.

[45] *Folha de S. Paulo*, 14 de mayo de 1989.

[46] RIOETT, Riordan. Brazil's transition to democracy, *Current History* 88 (536), marzo 1989, p. 118.

nuevas a lo largo de varios años, en las zonas pioneras, dentro de todo el país. Entre 1950 y 1960, el 84,6% de tales tierras fueron ocupadas por establecimientos agrícolas que tenían un máximo de 100 hectáreas, y sólo el 15,4% representó a los establecimientos con más de 100 hectáreas. Entre 1960 y 1970, cuando ya estaban vigentes el Estatuto de la tierra y la política de incentivos fiscales para el desarrollo de la Amazonia, se incorporó el 35% de esas tierras a establecimientos con menos de 100 hectáreas contra un 65% a establecimientos con más de 100 ha. Finalmente, sólo un 0,2% de tierras nuevas se destinaron a establecimientos con menos de 100 hectáreas, mientras que el 99,8% se destinó a los de más de 100 hectáreas (el 75% de esta última área fue ocupada por establecimientos con más de 1.000 hectáreas).

Como resultado, no más de 50 mil personas (2,6% de los propietarios) quedaron dueños de 286 millones de hectáreas cultivables (47% del total). En consecuencia, de 600 millones de hectáreas cultivables, apenas 40 son cultivadas; se creó un caos jurídico en relación con la posesión de la tierra, con títulos fraudulentos equivalentes a 3 o 4 veces el área existente; hubo un principio de disgregación del Estado, pues en las zonas en conflicto, jagunços armados asumieron la represión, con sus financiadores latifundistas organizándose nacionalmente en la UDR (Unión Democrática Ruralista); la lucha de los *posseiros* y de los sin tierra se tornó nacional y explosiva.

Bajo esas condiciones, el gobierno de transición decretó el PNRA (Plan Nacional de Reforma Agraria) para evitar la descomposición de la situación y resolverla a través de decretos-ley. La izquierda burguesa (“moderna”) se prestó al juego, asumiendo el MIRAD (Ministerio de la Reforma Agraria) y el INCRA, defendiendo el "choque capitalista", contra el "patrimonialismo". Nélson Ribeiro calmó a los latifundistas —"el Brasil es una sociedad capitalista, la invasión de propiedad es un crimen"— alertándolos sobre "las razones políticas que tornan impostergable la reforma agraria". El PNRA preveía el asentamiento de 1,4 millones de trabajadores hasta 1989: un defensor del plan admitió que "en los años ‘70, 15 millones fueron expulsados del campo. En los próximos 15 años, que es cuanto va a durar la reforma, otros millones serán expulsados por la dinámica capitalista de la agricultura".[47] El presidente Sarney, sin embargo, decretó la desapropiación de apenas 23% del área prevista. Uno de los responsables por el PNRA (jefe del INCRA) concluyó que fue un fracaso total. Menos de 50 mil familias recibieron su lote, en condiciones precarias. Con cuatro ministros en dos años (todos “de izquierda”) el gobierno de la “democracia” enterró de hecho la reforma por el decreto-ley de 23 de octubre de 1987. El año siguiente, la Asamblea Constituyente se limitó a sancionar lo sucedido.

Desde el inicio de la República (1889), los conflictos agrarios estuvieron en el centro de la lucha de clases en Brasil: "La República no fue inmune a la lucha por la tierra, con características diferenciadas, debido a los cambios habidos en la sociedad, que fortalecieron el poder local de los coroneles, agudizando el deseo de apropiarse de nuevas tierras, sometiendo a las poblaciones y aumentando las tensiones sociales. Hubo fuertes luchas en la Iª República, con los coroneles engrosando y mejorando el armamento de sus jagunços para dominar a los pequeños productores, moradores de sus propiedades, y para disputar espacios territoriales y políticos a sus competidores".[48]

Las luchas agrarias fueron el telón histórico de las luchas generales de los explotados. De los quilombos antiesclavistas a las revueltas antigubernamentales del pasaje hacia el

---

[47] GRAZIANO DA SILVA, José. *Para Entender o PNRA.* San Pablo, Brasiliense, 1985.

[48] CORREIA DE ANDRADE, Manuel. *A Questão Agrária e as Formas de Luta dos Camponeses pela Posse da Terra*, mim., sdp., p. 10.

siglo XX (quebra-quilos, Canudos, Contestado) se verifica el rechazo a la presencia del Estado en las relaciones sociales, destinada a reglamentar, contra los sectores dominados, la creciente mercantilización de las relaciones económicas, la valorización de la tierra y la unificación del mercado interno. Era la rebelión de clases ligadas a formas precapitalistas de producción, que no conseguían superar el nivel local, ni presentar sus intereses como nacionales.[49]

En la primera mitad del siglo XX, el eje fue la lucha por la posesión de la tierra, subordinando al conflicto entre patrones y asalariados rurales, frente a la expropiación provocada por el avance del latifundio. Conflictos violentos permanecieron localizados, no se transformaron en nacionales: "Los pequeños propietarios buscaron organizarse en cooperativas y sindicatos, luchando en torno de los precios agrícolas, de los intereses bancarios, como manera de preservar la propiedad familiar. Los posseiros han luchado por la regularización de su situación jurídica, por el respeto a sus posses, por su no traslado a otras áreas. Los arrendatarios y aparceros por el reconocimiento de sus derechos, abriendo procesos judiciales, postergando desalojos, insistiendo en su derecho de permanencia: luchan básicamente por su autonomía y libertad".[50]

En la década de 1940, el campesinado comenzó a adoptar formas sindicales de organización: en 1946 se crea un sindicato en Campos (Río de Janeiro) seguido de otros en Bahia, Pernambuco y San Pablo. "La agricultura de exportación (caña, café, cacao) que exige elevado número de trabajadores, sobre todo en los períodos de zafra, concentró la inversiones de capital, cuya acumulación implicó la sustitución de las viejas relaciones de moradía por el trabajo asalariado, en un proceso acentuado en los años ‘50, cuando crece la zona cañera y la expulsión de la mano de obra residente en las grandes propiedades. Esta proletarización, iniciada con la expropiación de los foreiros y moradores, contribuyó para la formación de entidades de clase, como las Ligas Campesinas, a mediados de la década del ‘50, y los sindicatos rurales, al comienzo de la década siguiente".[51]

En 1940, había más de 200 mil posseiros; en 1960, 356 mil; llegando en 1980 a 900 mil. En 1959, en un balance de la ULTAB (sindicato rural organizado por el PCB) se relacionan 122 organizaciones independientes, con 35 mil trabajadores rurales, y 50 sindicatos, con 30 mil.[52] Fue, sin embargo, "con las Ligas Campesinas, en las décadas del ‘50 y ‘60, que la lucha ganó dimensión nacional".[53] Rompiendo con la ULTAB, formularon propuestas de movilización y autodefensa armada, pero no consiguieron romper (así como el propio movimiento obrero) con la política nacionalista de la época, y fueron derrotadas por el golpe de 1964: "La fuerza de la Ligas se reveló una realidad decepcionante. Sólo una pequeña resistencia fue intentada por algunos líderes populares con trabajadores rurales y foreiros del NE, rápidamente vencida por la represión. Las Ligas, con la sindicalización rural, estaban en decadencia".[54]

De cualquier modo, el periodo de la “democracia populista” marcó un salto en las luchas agrarias. De 1955 a 1964, el movimiento campesino se extendió por todo el país,

---

[49] COGGIOLA, Osvaldo. Movimentos operários e socialistas na transição da Monarquia à República. *Estudos* nº 12, San Pablo, FFLCH-USP, julio de 1989.

[50] SOUZA MARTINS, José de. *Os Camponeses e a Política no Brasil*. Petrópolis, Vozes, 1986, p. 144.

[51] PANDOLFI, Lia. Nordeste: movimentos sociais. *Terra Firme* nº 2, Río de Janeiro, 1985.

[52] BASTOS, Élide Rugai. *As Ligas Camponesas.* Petrópolis, Vozes, 1984.

[53] OLIVEIRA, Ariovaldo U. de. *A Geografia das Lutas no Campo*. San Pablo, Contexto, 1988, p. 25.

[54] NAVARRO DE TOLEDO, Caio. *O Governo Goulart e o Golpe de ’64.* San Pablo, Brasiliense, 1984, p. 110.

en Maranhão, Goiás, Paraná, San Pablo, Bahia, Pernambuco, Paraíba, con características propias en cada estado. El movimiento fue debilitado por las luchas entre partidos e instituciones, como la Iglesia Católica, el PCB, las Ligas Campesinas, el Movimiento Sin Tierra, así como de personalidades, como Francisco Julião, Padre Melo, Padre Crespo, Gregório Bezerra, etc. La lucha, inicialmente política, degeneró hacia el exterminio de líderes y trabajadores, como Pedro Teixeira. En áreas como el oeste de Maranhão, el este de Pará y el Bico de Papagaio, en el actual Tocantins, hubo gran matanza de trabajadores.

Luego se produjo el viraje de la Iglesia hacia los conflictos agrarios: "Su gran temor era que los comunistas estuvieran preparando la guerrilla en el campo, situación que no era posible porque desde 1958 la política del PCB era de alianza con la burguesía nacional y otros sectores, con el fin de combatir el imperialismo y promover la concretización de una etapa democrático-burguesa dentro del desarrollo brasileño. No fue hasta 1965 que la Iglesia tomó una posición menos ambigua con relación al problema del latifundismo al admitir que la expropiación, con fines de lograr una reforma agraria, no constituiría un atentado al derecho de la propiedad mientras la indemnización fuera justa, ya sea en dinero o en títulos".[55]

La represión, violenta, fue diferenciada: las Ligas fueron barridas, la CONTAG (sindicato creado en 1963) fue intervenida durante 4 años (64-68), el trabajo sindical posterior se ajustó al Estatuto de la Tierra y al del Trabajador Rural, promulgados por los militares. Después de una década de retroceso, los conflictos pasaron a multiplicarse: a partir de 1974, hay conflictos rurales en todos los estados, y los posseiros llegaron a ser 1,05 millones en 1985, al mismo tiempo que el avance grileiro creaba una situación jurídicamente insustentable: Tancredo Neves, ya elegido presidente, decía que "en el sur de Pará nadie aguantaba más, había que hacer la reforma porque nadie sabía quién era el dueño de la tierra".

El proletariado rural pasó de 124.341 personas en 1970 a 1.511.774 en 1976 (17% de los trabajadores rurales),[56] afectando a los estados industriales. Un trabajador migrante de la expansión latifundista nordestina, "sobreviviente de la alta mortalidad infantil, poco desarrollado física e intelectualmente, marginalizado en la periferia de las ciudades, en condiciones precarias, sin saneamiento básico, que se levanta a las 4 de la mañana, se alimenta mal, usa el alcohol como fuente de energía, es transportado en camiones mal adaptados, sin contrato de trabajo regular, sin asistencia médica ¡—el *bóia-fria* es ante todo un fuerte—!".[57] Con la lucha de este sector superexplotado, la cuestión agraria golpea las puertas de la ciudad, poniendo la alianza obrero-campesina al alcance de la mano: la huelga de Guariba (en Riberão Preto, estado de San Pablo, la "California brasileña") en 1984, la ocupación de la hacienda Annoni en Río Grande do Sul el mismo año, fueron hitos de ese proceso.

Surgieron entonces los primeros congresos nacionales de trabajadores sin tierra, que dan origen al MST, en Curitiba y Brasilia, así como se incrementa la participación campesina en los congresos de la CUT (Central Unica de Trabajadores, surgida en 1983). "El MST ponía el dedo en la llaga y quebraba la aparente unidad en torno de la reforma agraria. El Estatuto de la Tierra no resolvía el problema creado por los latifundios modernos, como en Ribeirão Preto: representaba la política de

---

[55] SOUZA MARTINS, José de. Luchas agrarias em Brasil. In: Pablo González Casanova (org.). *Historia Política de los Campesinos Latinoamericanos*. México, Siglo XXI, vol. 4, 1985, p. 67.

[56] SINGER, Paul. *Dominação e Desigualdade*. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1981, p. 129.

[57] DUTRA DE OLIVEIRA, José E. Bóias-frias: uma realidade brasileira. ACIESP nº 30, San Pablo, CNPq, 1981.

modernización del latifundio, pues diseñaba como ideal a la empresa rural".[58] La cuestión agraria cambiaba su carácter de clase.

Contrariando todos los pronósticos acerca de la democracia como calmante de los conflictos de clase, la Nova República fue el teatro de su agudización: en 1986, 768 conflictos implicaron 567 mil personas en un área de más de 10 millones de hectáreas. En ese año y en 1986, 524 trabajadores murieron en conflictos, contra poco más de 50 en 1982, con la UDR latifundista usando abiertamente métodos de guerra civil. El gobierno de la 'democracia' hizo su opción: habiendo reconocido oficialmente la existencia de 12 millones de labradores sin tierra, y de 170 millones de hectáreas ocupadas por latifundios improductivos, de las que 10 millones en situación de conflicto implicando casi 90 mil familias, desapropió apenas 620 mil hectáreas, dando posesión de poco más de 130 mil a 5 mil familias, cifras ínfimas frente a la magnitud del problema.

Según Thomas Skidmore, el papel de la Iglesia en la cuestión agraria, especialmente en el Amazonas, en el Centro-Oeste y el NE (que motivó la expulsión y hasta el asesinato de varios padres extranjeros) se debe a que "otras instituciones de la sociedad civil estaban ausentes o no podían funcionar eficientemente".[59] Esta descripción oculta la profunda crisis de la Iglesia Católica, que se dividió verticalmente (CNBB) y horizontalmente (Comunidades Eclesiásticas de Base, CEB) en torno de la crisis brasileña, luego de haber prestado todo su apoyo al golpe militar de 1964. Ya en las huelgas obreras de 1978-1980, la izquierda católica jugó un papel moderador e intermediario entre el movimiento y el poder militar, al tiempo en que era colocada crecientemente bajo fuego cerrado del Vaticano, lo que hizo pronosticar a un especialista que "sería sorprendente que ganasen más espacio (dentro de la Iglesia)".[60]

El MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) surgió de una doble crisis: la del trabajo agrario de la Iglesia (Pastoral de la Tierra y CEBs) y del sindicalismo conciliacionista de la CONTAG, mayoritario en la década del '70. Teóricamente, eran miembros de la CONTAG todos los que no son empleadores rurales, o sea, los asalariados, los pequeños productores, aparceros y arrendatarios, hasta los propietarios minifundistas. En la práctica, en cambio, sucedió otra cosa. Según João P. Stédile, principal dirigente del MST, "el MST existe hace más de 15 años. En un primer período (1979-1983), de retomada de la lucha por la tierra, ocurrieron ocupaciones y movilizaciones en muchas regiones, pero aisladas entre sí. Después de un proceso de mutuo conocimiento y articulación, se constituyó un movimiento nacional, con la realización de un encuentro nacional, en enero de 1984, en Cascavel (Paraná), con representantes de 16 estados".[61]

En el Documento Político Básico del MST se insistia en la importancia de la Iglesia en ese origen: "Tuvo un papel no sólo de apoyo o de aliada sino de dirección de las luchas. La CPT (Comisión Pastoral), sus agentes, padres y hasta obispos, por su trabajo de concientización, capacidad intelectual e influencia de masas, y su vínculo directo con las luchas, asumieron durante cierto tiempo la dirección". Dos ocupaciones, en 1979, dieron nombre al MST: "Por causa del Movimiento de Agricultores Sin Tierra (Master) de Brizola y el PTB, la prensa local dijo: ¡los sin tierra volvieron! Funcionó: fue la

[58] AKCELRUD, Isaac. Reforma Agrária. San Pablo, Global, 1989, p. 59.

[59] SKIDMORE, Thomas. *Brasil: de Getúlio a Castelo.* Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988, p. 576.

[60] MAINWARING, Scott. *Igreja Católica e Política no Brasil (1916-1985).* San Pablo, Brasiliense, 1989, p. 280.

[61] STÉDILE, João Pedro. A luta pela Reforma Agrária. *Revista ADUSP* nº 9, San Pablo, junio 1997.

prensa que nos bautizó. Esas dos ocupaciones originaron el MST, el 7 de setiembre de 1979. En 3 o 4 meses, los agricultores fueron asentados y fue una gran victoria".[62]

No fue un movimiento local sino nacional, el cual pasó al margen del sindicalismo conciliacionista existente: "Las luchas que marcaron el origen del MST fueron las ocupaciones de las glebas Macali y Brilhante, en Ronda Alta (Río Grande do Sul) en 1979; la ocupación de la estancia Burro Branco, en Campo Erê (Santa Catarina) en 1980, el mismo año del conflicto en Paraná entre 10 mil familias y el Estado, por causa de la inundación de tierras con la construcción de Itaipú; en San Pablo, la lucha de los posseiros de Fazenda Primavera en Andradina, Castilho y Nova Independência; en Mato Grosso do Sul (Naviraí y Glória de Dourados), miles de arrendatarios desarrollaban una intensa lucha de resistencia al desalojo. Otras luchas acontecían en Bahia, Río de Janeiro y Goiás".[63] Fue la lucha en San Pablo la que dio al MST notoriedad nacional: "El descubrimiento del Pontal de Paranapanema por el MST, una enorme área de asentamiento, con lugar para 25 mil familias, donde la propiedad no está siendo disputada en tribunales (pues ya fue probada la ilegalidad de la ocupación por los actuales hacendados) sino solamente el valor de la indemnización, trajo al MST a San Pablo, le dio cuerpo social y nitidez a los ojos de las elites políticas. El MST nació nacionalmente a partir de un hecho estadual".[64]

A 13 años de su fundación formal, el MST estaba organizado en 21 estados, donde ya asentó en ocupaciones de áreas ociosas a 138 mil familias, con 3,7 salarios mínimos mensuales promedio (el promedio brasileño es de 3,82 salarios mínimos por familia). De acuerdo con el MST, hasta 1996 se realizaron 1.564 asentamientos, ocupando un área de 4.870.171 ha, con 145.712 familias. Según Stédile, "la reforma agraria sólo será posible en el marco de la lucha contra el neoliberalismo, el imperialismo y la dependencia del capital. Con un nuevo modelo de desarrollo nacional: nacional, porque atiende a todos los brasileños; popular, porque atiende las necesidades básicas de todo el pueblo".

Al mismo tiempo que privilegia la acción directa, hasta transformarse en sinónimo del radicalismo intransigente en el Brasil, el MST planteó su lucha en el marco de la Constitución de 1988, que legisló, como vimos, en favor del latifundio: "Concordamos con lo que establece la Constitución. Aunque mucha gente diga que el Estatuto de la Tierra era más avanzado, y lo era, si el gobierno realiza un proceso masivo de desapropiaciones, se debe respetar lo que establece la Constitución. Las mejorías deben ser pagadas en dinero, pues se presume que han sido fruto del trabajo. Es una medida justa, pero es necesaria una buena inspección... La tierra se paga en 15 años, con títulos de la deuda pública. Habrá 15 cuotas, lo que también es justo, porque la sociedad precisa tiempo para aumentar la producción y recuperar esos valores. Aceptamos esos criterios", disse Stédile, principal dirigente del MST.

Los títulos indexados de la deuda pública son una gigantesca operación de saqueo del Estado por toda la burguesía (no es un secreto que existen muchos latifundistas interesados en semejante ‘expropiación’). Limitar ‘constitucionalmente’ la lucha por la tierra no es sólo una astucia ‘legalista’ sino que la encuadra en los límites del régimen político existente. Pero éste ya probó su incapacidad de realizar la reforma agraria, así

---

[62] STÉDILE, João Pedro. O MST e a questão agrária. *Estudos Avançados* 11 (31), San Pablo, IEA-USP, 1997.

[63] FERNANDES, Bernardo M. Formação, especialização e territorialização do MST. In: João P. Stédile (org.). *A Reforma Agrária e a Luta do MST*. Petrópolis, Vozes, 1997, p. 134.

[64] NAVARRO, Zander. Sete teses equivocadas sobre as lutas sociais no campo. In: João P. Stédile (org.). *Op. Cit.*, p. 120.

como su hostilidad a los explotados de la tierra. Sarney (1985-1990) fijó el objetivo de asentar 1,4 millón de familias, pero sólo lo hizo con 90 mil, en una hipótesis optimista, o sea 6% de su objetivo (insuficiente). Collor (1990-1992) prometió 500 mil, pero frenó la inscripción de nuevas tierras y las desapropiaciones: sólo 23 mil familias recibieron nuevos títulos. Itamar Franco (1992-1994) prometió menos todavía: 20 mil en 1993 y 60 mil en 1994, y benefició a apenas 12.600 en los dos años. Fernando Henrique Cardoso (FHC) prometió en campaña 400 mil títulos, que redujo a 260 mil después de elegido, y se quedó atrás también de esa cifra: 42.912 en 1995, 62.044 en 1996, 21 mil en 1997.[65]

Stédile critica las mentiras ocultas por las de por sí limitadas cifras oficiales: "Se suma toda la historia del Brasil, desde Getúlio Vargas, el primero que colonizó oficialmente, hasta hoy. Las cifras indican proyectos de colonización, que no tienen nada que ver con asentamiento: hay consenso en que hay 150 mil familias asentadas en los últimos 15 años, todas como producto de la lucha, en ningún caso por iniciativa del gobierno". También el PT plantea una reforma en el cuadro del desarrollo capitalista, "articulada con una política de desarrollo territorial y complementación agroindustrial (que) constituye una opción para la dinamización político-económica del interior, de las ciudades pequeñas que gravitan en torno de la economía agraria: 3.300 municipios con menos de 25 mil habitantes" (hay en Brasil poco más de 5.000 municipios).[66]

Sometido a la influencia eclesiástica y del propio PT, el MST se definió como "movimiento no institucional", lo que significa que no planteó una alternativa política general. Al no hacerlo, la reforma agraria, inclusive los asentamientos conquistados por la acción directa, pasan a depender del visto bueno del propio gobierno, o sea, de la liberación de créditos rurales de todo tipo, incluidos los de la reforma agraria, así como numerosos programas complementarios (Procera, PRONERA, etc.). En las condiciones de crisis económica, los gastos sociales son sistemáticamente cortados, y lo que queda es usado como elemento de chantaje sobre el movimiento agrario. La consigna del MST es "ocupar, resistir, producir". A medida que se llega a la última fase, el crédito pasa a ser esencial.

Stédile defiende que "el pequeño productor no puede competir con las grandes propiedades exportadoras, pero no es incompatible con ellas". El MST propone entonces que la pequeña propiedad sea estimulada a producir alimentos, e integrada a pequeñas y medias agroindustrias. Pero este año, la Coordenación Nacional del MST denunció, en setiembre, lo que cabe esperar de la política oficial: "El gobierno gastó apenas 28% del presupuesto aprobado para la Reforma Agraria. Ahora, comprometido en garantizar los elevados beneficios de los bancos, el gobierno retira 181 millones de la Reforma, 14% de todo el presupuesto. Nunca pensó en cortar el pago de intereses, el envío de dólares para el exterior, el pago de las deudas interna y externa. Siempre quiere cortar gastos sociales".

En cuanto al Pronera, el presupuesto garantizaba proyectos de educación de jóvenes y adultos en 1.538 asentamientos, con 100 mil alumnos, en colaboración con 39 universidades. Los cortes del último ‘paquete’ retiraron 90% de los recursos. Sólo 3 millones de reales serán ejecutados, lo que alcanza para alfabetizar 7 mil trabajadores, en vez de 100 mil. Pero en el mismo ‘paquete’, FHC autorizó la renegociación de la deuda de los grandes ‘productores’, con alargamiento de los débitos en 20 años y rebaja

---

[65] DAVID, B.A. Atlas dos beneficiários da Reforma Agrária. In: João P. Stédile (org.). *Op. Cit.*, p. 52.

[66] TAVARES, Maria da Conceição. A questão agrária. *Folha de S. Paulo*, 27 de abril de 1997.

de las tasas de interés, así como que 100% de los recursos tomados por los bancos para la agricultura sean usados para comprar títulos públicos con corrección cambial.

Bajo el gobierno "socialdemócrata", el capital promovió una verdadera anti-reforma agraria, acelerada por la propia crisis económica. En 1985, había (según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) 23,4 millones de personas ocupadas en el campo, número que cayó a 16,6 millones en 1996. En el mismo período, el número de establecimientos agrícolas cayó de 5,8 millones a 4, 98 millones: casi un millón menos, de los que 600 mil fueron en el sector mayoritario de la agricultura familiar (con menos de 10 hectáreas). El INCRA, a su vez, registra 300 millones de hectáreas improductivas, pero el ITR de 1997, con previsión de 1,2 millones de reales, recaudó sólo 200 millones (¡menos de una coca-cola por hectárea improductiva!). Entre 1985 y 1995 fueron eliminados 5,24 millones de puestos de trabajo en el campo, y en 1996 (FHC) 1,5 millón: bajo FHC también fueron suprimidas 400 mil pequeñas propiedades (para un total de 600 mil en toda la década).

En 1997, Brasil pasó a importar U$S 7,5 mil millones de productos agrícolas (antes producía 90% del trigo que consumía, ahora 66%): actualmente cultiva 7,1 millones de hectáreas menos que en el inicio de la década del '90. Bajo FHC, el área plantada cayó de 38,5 a 35,7 millones de hectáreas (menos del 7,2%): entre 1994 y 1997, los precios recibidos por los agricultores aumentaron 37,5%, mientras que los insumos aumentaron 60,1% (la renta agrícola cayó 59%). El Pronaf (programa de apoyo a la agricultura familiar) liberó 2,5 mil millones, para una demanda de 4 mil millones.

La concentración agraria avanzó como nunca en toda la historia contemporánea, aprovechando la crisis agrícola y la caída del precio de la tierra (del 40-50% bajo el Plan Real). Ligado a esto está el avance de los grupos paramilitares de los latifundistas, ahora más integrados con la policía: bajo FHC, fueron ya asesinados más de 150 trabajadores agrarios, con dos masacres, la de Corumbiara (11 muertos) y la Eldorado dos Carajás (19 muertos). Nadie fue preso, como también sucedió con el asesinato de dos líderes del MST en Pará (abril de 1998), continuación de la masacre de Eldorado, pues encabezaban 550 familias que estaban juntándose a otras 690, sobrevivientes de la masacre que se encontraban en el asentamiento Palmares. Y FHC, con sus supuestos 100 mil asentados, se proclamó el campeón de la reforma agraria.

No es de extrañar que la lucha agraria haya sido más importante que nunca bajo FHC, ahora ya como movimiento nacional organizado, como nunca antes: el MST, originario del Sur, pasó a tener más de 50 mil familias asentadas en el NE. Sus marchas, especialmente la que concluyó con la ocupación de Brasilia el 17 de abril de 1998 (en el primer aniversario de la masacre de Eldorado), con más de 100 mil personas, se transformaron en el canal de protesta de toda la población explotada del país.

Es frente a la cuestión agraria que el Frente Popular orquestado alrededor del PT se reveló como una tentativa de estabilización burguesa, al punto de ahuyentar a una parte del electorado petista. En el programa de la *União do Povo-Muda Brasil*, de 1989, el capítulo significativamente titulado "Paz en el Campo" propone asentar 1 millón de familias e irrigar un millón y medio de hectáreas, en 4 años, previendo un costo de U$S 12-15 mil por familia asentada (indemnizaciones mediante) sin contar gastos en salud, educación e infraestructura.

Todo esto estaba por detrás de las necesidades objetivas inmediatas, de la explosividad de la situación agraria y de los propios reclamos del MST: asentamiento de 4 millones de familias, créditos de U$S 18 mil por familia, pagables en 20 años (y no en 7), desapropiación inmediata de toda tierra improductiva con potencial agrícola, cobro en tierras de todos los grandes deudores de la Sudene (Superintendencia de Desarrollo del

Nordeste), frentes de trabajo en el NE para 2 millones de personas, controladas por comunidades y sindicatos, aumentos salariales y canasta familiar para todas las familias. El programa petista no era claro siquiera acerca de los medios necesarios para su reforma: en la práctica, el PT privilegió, durante la campaña electoral, las relaciones con la moderada Contag (ahora afiliada a la CUT); su Encuentro Nacional Extraordinario rechazó la moción presentada por la izquierda de legalización de las ocupaciones de tierra ya realizadas.

Toda la política de la reforma agraria “legal” tiene una base falsa, no sólo por la falsedad de los números de FHC sino porque también es falsa la base de cálculo: "El Censo Agropecuario de 1985, del IBGE, apuntó la existencia de 24,5 millones de hectáreas productivas no utilizadas, grandeza sustancialmente diferente a la del INCRA".[67] El uso del ITR como medio de limitar el latifundio improductivo se ha revelado ridículo: la pequeña y mediana propiedad siempre han pagado más impuesto que la grande; en 1994, menos de 40 millones de reales (U$S 32 millones) fueron recaudados con ese impuesto.

Los trabajadores rurales forman casi 40% de la población económicamente activa, en sus diferentes categorías. Sobreviven 5 millones de establecimientos familiares, que producen la mayor parte de lo que el mercado interno consume. El sector agrícola produce 50 mil millones de dólares (12% del PNB). La caída de 27% de los precios ha perjudicado a los pequeños agricultores, pues éstos producen para el mercado interno, lo que se agravó con el Mercosur, que eliminó tasas de importación para productos más baratos de los tres socios del Brasil. Hay también 6 millones de asalariados en el campo, temporarios o permanentes, sometidos a migraciones y abandono de sus familias.

Una investigación realizada en la UERJ (Universidad Estadual de Río de Janeiro) demostró que más de la mitad de los habitantes rurales vive por debajo de la línea de pobreza (menos de un cuarto de salario mínimo —25 dólares— por cabeza). Son 18.756.494, 3,4 millones de familias de pequeños propietarios, aparceros, medieros, asalariados y trabajadores sin remuneración, 53% de los habitantes del campo: en estados como Ceará, Paraíba y Piauí, suman más de 70% de la población rural.

Frente a ello, la estrategia del MST está frente a un impasse objetivo, por su dependencia frente al Estado en el crédito rural (y su consecuencia ‘combativa’, la ocupación de bancos de crédito agrícola y edificios del INCRA), ínfimo frente a la miseria aplastante, del que no se sale promoviendo el ‘cooperativismo socialista’ en los asentamientos, definido como "la cooperación que nace con el objetivo del autosostén y para intervenir en el mercado (esfera de la circulación), iniciando su liberación del transportista (camionero) y del intermediario (comerciante)".[68]

Tampoco se resuelve planteando que "nuestra gran diferencia es sobre los objetivos económicos, políticos y sociales en las cooperativas, que es cuestión de principios internos" (organización de los cooperativistas en núcleos, distribución democrática de los excedentes). Ni planteando "en términos de organización espacial y geográfica las agrovillas, que permiten la urbanización y facilitan las inversiones sociales en luz eléctrica, agua potable, en escuelas más próximas de los niños".[69] Cerca de 900 escuelas primarias, 1.500 profesores, 300 monitores de alfabetización, 35 mil niños y adolescentes, representan la estructura educacional del MST.

---

[67] GRAZIANO, Francisco. *Qual Reforma Agrária?* San Pablo, Geração Editorial, 1996, p. 77.

[68] MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). *Uma Concepção de Desenvolvimento Rural*. s.d.p., p. 28.

[69] STÉDILE, João Pedro. Entrevista. *Universidade e Sociedade* nº 13, San Pablo, s.d.p., p. 57.

En la práctica, en los sectores cooperativos más antiguos, ya se desarrollan relaciones asalariadas con los campesinos llegados más recientemente. "Nuestro futuro está ligado a la agroindustria", sostuvo José Rainha, símbolo del MST, en relación con la cooperativa más desarrollada, la Cocamp (del Pontal de Paranapanema), que ha recibido créditos para instalar una fábrica de frutas elaboradas, otra lechera y otra de procesamiento de granos, y que espera plantar 2 millones de pies de café en 1999, transformando al Pontal en la principal región cafetera del estado.

Con la reelección de FHC, en 1998, y la crisis económica, estas perspectivas comenzaron a hundirse, con lo cual el MST rompió la tregua establecida con el gobierno y recomenzó las invasiones: un ingenio en Pernambuco, tres haciendas en el NO de Paraná y otras tres en el Pontal de Paranapanema. Una investigación demostró, que la gran mayoría de los asentamientos entre 1994 y 1997 fue consecuencia de invasiones: de 352 en San Pablo, Pernambuco, Goiás, Espíritu Santo, Paraná, Santa Catarina y Mato Grosso do Sul, 304 fueron de invasiones y sólo 48 de iniciativa del gobierno federal.[70]

La crisis mundial y la catástrofe económica brasileña acentuaron la lucha de clases, llevando el conflicto agrario a una situación explosiva, que repercutió en el movimiento obrero. Las luchas campesinas en Brasil fueron, en las décadas de 1980 y 1990, la clave de la radicalización obrera y de la existencia de corrientes clasistas en su seno.

---

[70] *O Estado de S.Paulo*, 12 de octubre de 1998.

6. EL PLAN COLOMBIA Y LA FALACIA DE LA "NARCO-GUERRILLA"

Para imponer sus objetivos a escala continental, los EEUU debían llevar adelante una intervención política, diplomática y militar a gran escala. Definieron públicamente una "amenaza", en este caso, la "narcoguerrilla" (las FARC colombianas) y el "populismo" (en especial la alianza entre los indígenas y los militares medios ecuatorianos) para justificar esa intervención en nombre de la "democracia".

El propio presidente Clinton dio la puntada inicial, afirmando que "el populismo y el narcotráfico son un riesgo para el sistema democrático". Le siguió su Secretaria de Estado Madeleine Allbright, quien sentenció que "las democracias latinoamericanas están en peligro". A los pocos días, las "amenazas" a la "democracia latinoamericana" (una singular categoría que excluía al venezolano Chávez, elegido por el sufragio popular, pero incluía al ecuatoriano Álvaro Noboa, designado a dedo por el alto mando militar) se habían convertido en un tema recurrente de la prensa norteamericana.

Pero lo que tuvo lugar desde el 2000 en América Latina fue una explosión democrática y social: las movilizaciones y los reclamos de los "sin tierra" de Brasil; la justicia y los impuestos de las FARC colombianas frente a las masacres del ejército y de los escuadrones de la muerte apañados por el presidente Pastrana y sus impuestazos contra el pueblo; la lucha por el agua en Bolivia, más democrática después de la pueblada que impidió su privatización y la triplicación de sus tarifas; los reclamos de tierra de los indios ecuatorianos, o el reclamo de pan y trabajo de los piqueteros del norte argentino. Las crisis políticas y las irrupciones de masas en América Latina no estaban poniendo en riesgo a la democracia sino a los regímenes fondomonetaristas.

En el corazón de la crisis latinoamericana se encontraba Colombia, el régimen político más débil y convulsionado de la región. En el plano económico, su situación era de catástrofe: "Colombia atraviesa la peor recesión de su historia, con desempleo récord del 20% (según las propias cifras oficiales que ocultan, y mucho, la verdadera dimensión de la desocupación). La fuga de capitales ha devaluado al peso hasta su nivel más bajo y la Bolsa de Bogotá ha batido todos los récords bajistas. Pero lo que marca una sorprendente medida de la rapidez de la actual descomposición de Colombia es la caída de la cotización de sus bonos de deuda externa, que se negocian a niveles similares a los de los más riesgosos mercados emergentes. El gobierno de Pastrana pretende salir de esta crisis mediante un programa fondomonetarista de impuestazos, reforma de la previsión social y recorte de gastos públicos; en otras palabras, se encamina a desatar una rebelión popular en las grandes ciudades".[71]

Es un objetivo explícito de los EEUU garantizar el acceso preferencial del capital yanqui a los recursos estratégicos del hemisferio especialmente en la región andino amazónica (petróleo, gas, minerales y maderas), y aprovechar las oportunidades de negocios que tienen los megaproyectos estratégicos de integración del continente como la Gran Red Intermodal de Transporte, el Sistema de Telecomunicaciones por satélite y cableados y la producción de energía.

En la cuestión colombiana están planteados: el canal alterno a Panamá en el Chocó colombiano (Atrato-Truandó); la red fluvial suramericana (SARS-IFSA) que uniría el río Orinoco con los ríos Negro, Amazonas, Madeira, Mamoré-Guaporé, Paraguay, Tietê, Paraná y de La Plata; y permitiría el transporte desde Venezuela hasta Buenos Aires; la comunicación desde el delta del Amazonas con el Océano Pacifico, a través del río Putumayo atravesando los Andes en su punto mas angosto y bajo para llegar por

---

[71] OVIEDO, Luis. Colombia: con una consigna de poder, la situación sería revolucionaria. *Prensa Obrera* nº 715, Buenos Aires, 25 de mayo de 2000.

autopistas al puerto de Tumaco (Nariño) en Colombia y a San Lorenzo (Esmeraldas) en Ecuador; el dominio de la zona llamada de las 5 fronteras: (Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela) en donde se halla una bolsa de petróleo compartida, y en la actualidad explotada, por estos países, con oleoductos transandinos destinados a los puertos de Tumaco y Esmeraldas; la Carretera Marginal de la Selva que desde el Perú llegue a Surinam; el control de la Región en donde nacen los grandes ríos que dan origen a la reserva de agua más importante del planeta en el Gran Amazonas: ríos Caquetá, Putumayo, Apaporis y Vaupés en Colombia, Napo en Ecuador y Marañon y Ucayalli en Perú.

El Plan Colombia, después llamado *Iniciativa Regional Andina*, tuvo su origen en el gobierno de Andrés Pastrana que, elegido presidente en 1998, presentó ante el Congreso de Colombia el Plan de Desarrollo que por mandato de la Constitución debía hacer aprobar. Este Plan (elaborado en inglés por el gobierno de Estados Unidos, y titulado *Plan for Peace, Prosperity and the Strengthening of the State*) reemplazaba sutilmente la formulación que antes se venía haciendo de "lucha contra las drogas", por la fórmula más acorde con lo anteriormente expuesto de "Guerra contra las Drogas". Su versión definitiva fue expuesta a principios del 2000.

Los 7 mil millones de dólares que originariamente costaba, se planeó financiarlos mediante un aporte del gobierno de los EEUU de 3 mil millones, y los restantes 4 mil millones de dólares, por el de Colombia (80% mediante endeudamiento externo y 20% por el ajuste fiscal y los impuestos en un proceso controlado por el Fondo Monetario Internacional). La financiación proveniente de lo que se llamó la Mesa de Aportantes, no se pudo realizar, y su condición más onerosa consistía en que 70% de su coosto iría para el gasto militar, dejando demostrado que era un plan de guerra que, con la justificación propagandística de combatir el terrorismo y las drogas narcóticas, tenía el verdadero objetivo de derrotar a la insurgencia guerrillera colombiana que se encuentra precisamente en el área en donde se iniciaría el Plan.

Para cumplir este objetivo, se propuso también reestructurar radicalmente el Ejercito colombiano mediante una operación llamada de "Reingeniería", para ponerlo bajo órdenes directas del Comando Sur del Ejército de EEUU, a la par de asegurar el dominio y el control militar de la zona, mediante un gran dispositivo de bases militares continentales. La primera fase de su ejecución se realizaría en el Departamento colombiano del Putumayo, para luego irlo ampliando en una segunda etapa al Sureste y al Centro, finalizando en tres años con el control militar de todo el país.

El dispositivo mayor de bases militares de EEUU que entraron a reemplazar a las del Canal de Panamá, tiene su centro en la importante Base Aeronaval de Manta en Ecuador, ubicada a orillas del Océano Pacífico, a la espalda de la ya descrita bolsa petrolera de las cinco fronteras, asistida por la Base holandesa de Curazao y las Bases de Liberia en Costa Rica y Sotocano en Honduras, las que a su vez están protegidas y apoyadas por otras, que amplían el anillo de la cadena militar: Tres Esquinas, Larandia y Puerto Leguizamo, en el Putumayo colombiano, coordinadas por los gigantescos y sofisticados radares del Guaviare y el de Leticia en el Río Amazonas. En Perú se proyectaba usar la Base de Iquitos, y en el Brasil, la de Alcántara (en un proyecto de alquiler que desató un escándalo en Brasil), cerca de Manaos, que cuenta con las bases satélites de Tabatinga, enfrente de Leticia y Yavaraté en el Río Negro.

En el Plan teníamos una combinación de guerra química, mediante fumigaciones masivas sobre cultivos de coca, del veneno llamado glifosato (los colombianos lo llaman *glifosfacho*), y de guerra biológica mediante la aspersión indiscriminada del "hongo mata-coca" que es una manipulación genética del Fusarium Oxysporum,

descubierto en una intoxicación masiva en la antigua Unión Soviética. Además del incremento de las operaciones militares abiertas, y de las acciones encubiertas realizadas por los paramilitares y los mercenarios de corporaciones privadas de EEUU (como la *DynCorp*, también operante en Ecuador) contratados por el Departamento de Estado y constituidos en verdaderas puntas de lanza del Plan.

Recordemos que, aparte de los incalculables negocios generados en la industria química mundial que produce el comercio de los precursores químicos para la extracción del alcaloide cocaína, de los 500 mil millones de dólares que deja su comercialización en las calles de las grandes ciudades estadounidenses, en las que se calcula que existen cerca de 23 millones de adictos a los narcóticos, y en otras ciudades del llamado Primer Mundo, tan solo llega 2% a las manos de los colonos y campesinos productores y pequeños transportadores; un 13 % llega a las mafias colombianas que financian las operaciones de los grupos paramilitares y las campañas presidenciales, y el restante 85% de los beneficios, es lavado en los bancos que tienen sus sedes en Miami, Las Vegas y demás paraísos fiscales.

Mientras tanto, en el sufrido territorio del Putumayo, cada día 46 personas abandonaban sus hogares a causa de la "guerra contra las drogas", lo que da un promedio mensual de 604 personas, que para el año 2001 fue de 17.143 personas, las que llegaron expulsadas a los cinturones de miseria de las grandes ciudades colombianas a unirse a los dos millones de desplazados que ya dejaba el conflicto en el país.[72]

La debilidad del gobierno colombiano, por otro lado, se puso en evidencia cuando fracasó en su intento de cerrar el Parlamento y convocar a una Asamblea Constituyente, o en la abierta oposición del Ejército al 'diálogo de paz' de Pastrana con la guerrilla. En ese momento, y hasta hoy, el Estado colombiano no domina su territorio, no sólo porque se entregó una "zona desmilitarizada" a las FARC en el sur del país y otra al ELN en el norte. Otra parte importante de su territorio está en manos de los paramilitares, que escapan al control del gobierno pero que están asistidos por los militares.

Donde la descomposición del régimen político colombiano se puso en evidencia de una manera más aguda fue en los territorios dominados por las FARC. Inicialmente, el gobierno y la guerrilla habían acordado que las autoridades civiles de la "zona desmilitarizada" (alcaldes, jueces, etc.) seguirían en sus puestos, aun cuando su autoridad fuera meramente formal. Este compromiso con la continuidad de la formalidad jurídica del Estado respondía a la orientación (de las FARC) de no quebrar en forma revolucionaria el orden actual sino de modificarlo a partir de sus propias bases. Pero en poco menos de un año, las FARC anunciaron que pondrían en pie su propio sistema judicial, un "impuesto revolucionario" y hasta una especie de aduana interna. La razón es que el poder del Estado se había desvanecido, obligando a las FARC a llenar ese vacío.

Los pasos de la diplomacia norteamericana en la región andina, el respaldo a Noboa y la dolarización ecuatoriana; la convalidación del fraude de Fujimori en Perú; el apoyo más o menos abierto al candidato opositor a Chávez en Venezuela y los acuerdos militares establecidos con los países de la región, en especial con Brasil, estaban dictados, en última instancia, por las necesidades que planteaba su intervención político-militar en la crisis colombiana.

El Senado norteamericano aprobó una financiación de 1.300 millones de dólares para el Plan Colombia, promovido por el gobierno de Pastrana para erradicar las plantaciones

[72] PINZÓN SÁNCHEZ, Alberto. Operación geoestratégica global de EEUU para anexar a América Latina. In: *www. altercom. org*.

de coca en el sur del país, en el territorio dominado por la guerrilla de las FARC. Esta financiación, que seria utilizada para la compra de helicópteros de combate y para el pago de asesores militares norteamericanos que entrenarán ‘batallones antidroga’ colombianos, constituye la mayor partida del presupuesto estadounidense destinada a un país latinoamericano en la última década. El Plan Colombia también fue respaldado por la Unión Europea.[73]

El Plan Colombia estableció la fumigación con pesticidas de vastas zonas con plantaciones de coca y amapola y el hostigamiento militar a plantadores y traficantes. Pero, en la medida en que el operativo se desarrollaría en las áreas dominadas por las FARC, en Washington no era un secreto que los objetivos primarios serian las FARC y el menos conocido Ejército de Liberación Nacional (ELN). El “arma secreta” de la intervención yanqui en Colombia era la utilización de empresas militares privadas norteamericanas para entrenar y dirigir a las tropas colombianas.

El espectro de Vietnam y, sobre todo, el sonado fracaso en Somalia habian obligado al Pentágono a diseñar una “guerra aséptica”. EE UU aportaba el dinero para que el país receptor adquiera las armas estratégicas - como los helicópteros - por medio de una especie de *leasing*, manejaría la inteligencia y las comunicaciones, y contrataría con empresas privadas el entrenamiento de tropas y la dirección de las acciones militares.

El espectáculo de la vuelta a casa de los militares, envueltos en bolsas de polietileno, que tanto temía el Departamento de Estado, se evitaria de ese modo. Los que cayesen serian “profesionales” que luchaban a cuenta de su propio bolsillo, y no podrían ser vinculados a una fuerza militar orgánica. Una figura conocida en la historia como mercenario. Tampoco podrían esos asesores ser acusados de violar los derechos humanos, puesto que trabajan por su cuenta y riesgo.

Los EE UU caminaban en dirección de un nuevo modelo de intervención, que manejaba la inteligencia, la movilidad y el dinero sin comprometer en las operaciones a sus clásicos *marines*; e inclusive, sin necesidad de apelar a las tradicionales alianzas con otros países para disfrazar sus intervenciones militares. El ex Secretario de Estado Henry Kissinger, en su libro *¿Necesita EE UU una política exterior?*, criticó ácidamente el esquema. Argumentó que los EE UU no se dieron cuenta de que la intervención en Vietnam fue creciendo imperceptiblemente haciendo imposible todo retroceso.[74]

La cuestión de la “narco-guerrilla” merece un esclarecimiento. En 1973, Richard Nixon fue el primer presidente estadounidense en declarar una guerra abierta contra “la amenaza de las drogas” conformando la DEA (Administración del control de Drogas). En 1990 George Bush anunció la creación de un “cartel antidrogas” que actuaría conjuntamente con los gobiernos de Bolivia, Colombia y Perú. Fue en dos regiones que se concentró la acción anti-narcótica: Asia y Sudamérica, y de los ocho países elegidos se hizo énfasis en Afganistán, máximo cultivador de amapola y en Colombia, máximo cultivador de coca. Cada plan trazado y puesto en práctica por los EEUU había sido diseñado y presentado por organismos internacionales (PNUFID, BID, FMI, BM, etc.). Normalmente estos planes encubren su verdadero propósito.

El Plan Colombia, centrado en los territorios limítrofes, tenia objetivos centrales, establecidos con anticipación, referidos al macro-proyecto diseñado por la CAF (Corporación Andina de Fomento) desde 1970, e impulsado por el BID (Banco

---

[73] OVIEDO, Luis. América Latina: cuadro de situación. *En Defensa del Marxismo* n° 28, Buenos Aires, octubre de 2000.

[74] BOWDEN, Mark. Los planes militares de EE UU en Colombia. *El País*, Madrid, 8 de julio de 2000.

Interamericano de Desarrollo), denominado “Plan de Acción de Infraestructura Regional en América del Sur”, cuyo objetivo es la integración y articulación física de todos los países de América del Sur (con vías férreas, carreteras, vías fluviales). Y también a la reactivación en la exploración y producción petrolera y de gas en el país, especialmente en la zona donde se inició el Plan Colombia: en el Putumayo, considerada como región de grandes yacimientos. Bajo las plantaciones de coca y con control insurgente se hallan dos ricos yacimientos de petróleo (Proyecto Orito y Proyecto Sur) y el Proyecto bloque de exploración río San Miguel, los que necesitan de “limpieza” para ser explorados.

Colombia se había convertido, luego de la desarticulación de los “carteles” de Medellin y de Cali y de seis años de fumigación masiva intensa a las plantaciones de coca, en el primer país cultivador simultaneo, en gran medida, de coca; en menor escala, de amapola con tendencia al incremento y más bajo aun de marihuana. Es el principal productor y exportador en el mundo de clorhidrato de cocaína y en menor medida de opio. No ha sido un país catalogado como consumidor.

El ataque químico a la producción de drogas ilícitas en Colombia remonta a más de veinte años, cuando el *paraquat* y el glifosato fueron utilizados como plaguicidas de excelencia. Desde diciembre del 2000 el gobierno colombiano se lanzó a una fumigación masiva con el defoliante glifosato.[75] Con un considerable entrenamiento y financiamiento de los Estados Unidos, el ejército de Colombia realizó un agresivo ataque por aire y tierra contra las plantaciones de coca en el país. Estados Unidos estableció que su rol seria proteger a los aviones fumigadores y destruir los laboratorios donde se procesaba la pasta básica de cocaína.

Aviones entrenados para volar casi al ras, equipados con fumigadores y protegidos por batallones de elite desde tierra fumigaron, hasta febrero del 2001, 30.000 hectáreas en cuatro regiones de las provincias colombianas de Caquetá y Putumayo. Se estima que en ambas provincias se producían tres cuartos de la coca colombiana. Esta operación multimillonaria buscaba terminar con al menos la mitad de las plantaciones de coca hasta el 2005, y con ella una fuente de financiación para la guerrilla. Funcionarios norteamericanos proveyeron a las autoridades colombianas con mapas satelitales que ayudaban a detectar los campos de coca. Vistas aéreas de los campos fumigados muestran plantaciones que alguna vez fueron verdes, convertidos en pálidos y marrones.

Juntamente con las plantaciones de coca fueron fumigados campos de yuca, porotos, cebolla, ajo, papas, maíz y otros cultivos tradicionales, dañando también los cultivos alternativos de los campesinos que habían abandonado el cultivo de amapola. El hecho de que hayan destruido sus fuentes naturales de alimentos condena a los pobladores al hambre y a su desplazamiento forzado hacia otras regiones. Los campesinos fueron expuestos continuamente y sin escapatoria a las fumigaciones masivas. El Departamento de Salud de la Provincia de Putumayo recibió constantes denuncias de los pobladores, que estaban sufriendo vómitos, diarrea, urticaria, ojos rojos y dolores de cabeza, oído y estómago. Entre los niños, sobre todo, se evidenciaban otras reacciones alérgicas en la piel.

El gobierno colombiano se justificó señalando que los campesinos habían tenido oportunidad para firmar acuerdos para evitar la erradicación desde el aire. A cambio de

[75] En California, donde los médicos están obligados a reportar el envenenamiento por plaguicidas, se ubicó al glifosato en tercer lugar entre las 25 causas más importantes de enfermedad o daño debido a pesticidas, en un periodo de 5 años en la década de 1980, pues causó irritación en los ojos y en la piel. En 1966 la empresa que lo fabricaba, en un acuerdo fuera de la corte en el Estado de Nueva York, acordó retractarse sobre la pretensión de que el producto era “seguro, no tóxico, inofensivo y libre de riesgos”.

arrancar sus plantas de coca cada familia recibiría 1.000 dólares, en ganado y comida (¡). Un aspecto del plan aprobado en Washington ("En los últimos dos años, Pastrana, o miembros de su gabinete, han hecho 46 visitas a Washington y cerca de cincuenta congresistas y senadores estadounidenses han ido a Colombia")[76] es que estaba condicionado a la utilización de "micoherbicidas", producidos por hongos, desarrollados por varios gobiernos y empresas privadas, con el objetivo de combatir cultivos de drogas consideradas ilícitas.

En esta "lucha biológica" primeramente se habló de la utilización en la Amazonia colombiana de preparados específicos de esta especie fúngica. Esto provocó respuestas enérgicas de académicos, investigadores y organizaciones sociales. El propio Ministro de Medio ambiente colombiano explicó las razones que tuvo para decir "no" al hongo y anunció otras alternativas. Aclaró que el gobierno no aceptaría la aplicación de agentes externos y que para el control biológico de la coca se estudiaran "alternativas criollas".[77]

El imperialismo intervenía en la región andina para cerrar todos los potenciales focos de crisis, porque era plenamente conciente de que un desborde de la situación en Colombia podría arrastrarlo a un nuevo Vietnam. Este temor explica la enorme demora del Senado norteamericano para aprobar el Plan Colombia, las sistemáticas negociaciones y revisiones a que fue sometido, y las limitaciones y resguardos con que finalmente salió aprobado.

La primera de dichas limitaciones es que la selección del personal militar colombiano que integraría los batallones antidroga seria realizada por los propios norteamericanos: en la primer selección fueron dejados fuera una media docena de militares que habían sido juzgados por "violaciones a los derechos humanos", lo que revelaba el intento de reconstruir no sólo militar sino también políticamente al Ejército colombiano. El Senado norteamericano también puso un límite al número de asesores norteamericanos, para que su intervención no escalase hasta convertirse en una guerra abierta, como sucedió en Vietnam. Lo que quebró las últimas resistencias y reticencias del Senado norteamericano para aprobar una intervención que planteaba el peligro de la vietnamización del conflicto, fueron las evidencias de la completa debacle del gobierno de Pastrana y las limitaciones de las negociaciones de paz.

El objetivo estratégico del plan financiado por norteamericanos y europeos era recuperar el control del Estado sobre los centros de producción de coca, lo que significaba reconstruir al Ejército como pilar del Estado. El Plan Colombia era una réplica de la política de Ralph Giuliani (intendente de Nueva York) de "tolerancia cero": una escalada represiva bajo la cubierta de las "instituciones democráticas", anticipando la política de "terrorismo democrático" de George W. Bush a partir del 2001.

---

[76] *The Wall Street Journal*, Nueva York, 23 de junio de 2000.

[77] Colombia, la narcotización de sus procesos. *http://www.geocities.com/manesvil/narcotic.html*; Glifosato: the deadly herbicide. *http://www.pearson-college.uwc.ca/pearson/ensy/mega/esmega99/laura/glif.htm*; Las víctimas de la guerra química en Colombia. *Clarín*, Buenos Aires, 2 de febrero de 2001; Grupo Civil de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia en Ecuador. Peligros del uso de *Fusarium oxysporum* en fumigaciones previstas por el Plan Colombia. Consecuencias en Ecuador. *http://www.geocities.com/Eureka/Network/2251/plancolombia2.htm*; GONZALEZ POSSO, Dario. Guerra biológica en Colombia. Las falacias del "control biológico". *http://www.asambleaporlapaz.f2s.com/documentos/PlanColombia-GuerraBiologica.html*; PAZ MARTE, Salvador. Armas biológicas: una muestra de la criminalidad del Plan Colombia. *http://home1.swipnet.se/~w-3481/sept_2/0922_criminal.html*.

El apoyo financiero y político de los países de la Unión Europea al Plan Colombia constituyó una seria derrota política para las FARC. La guerrilla colombiana intentó interesar a las potencias europeas en la financiación de un plan de erradicación de los cultivos de coca y amapola alternativo al patrocinado por Pastrana y los norteamericanos. El planteo de las FARC, que preveía el control de la sustitución de cultivos por parte de las potencias imperialistas europeas, suponía el pleno respeto a las “relaciones internacionales”, es decir a la opresión de la inmensa mayoría de los países por un puñado de grandes potencias imperialistas, y por lo tanto a la propiedad privada y a la continuidad jurídica de los Estados.

La ocasión para un planteo de esa naturaleza parecía inmejorable: los europeos habían criticado en más de una oportunidad el "enfoque puramente militar de la política anti-drogas norteamericana"; por otra parte, la propuesta de las FARC les daba a las diplomacias europeas un ‘protagonismo’ que hasta entonces no tenían en un área dominada exclusivamente por la diplomacia norteamericana. Pero, pese a ello, los europeos rechazaron ostentosamente el convite de las FARC.

En el mes de junio de 2000, se reunieron en la selva colombiana los representantes de las FARC con enviados de todos los gobiernos de la Unión Europea, de Japón, de México, de Brasil y hasta del Vaticano. Allí, las FARC presentaron un plan de substitución de plantaciones (en lugar de las fumigaciones promovidas por los norteamericanos) que debería ser financiado por los gobiernos europeos. El plan presentado por las FARC fue rechazado de plano por los países de la UE, que sólo se mostraron dispuestos a estudiar la financiación de un plan de esta naturaleza que estuviera respaldado por el gobierno colombiano.

A pocas semanas de haber rechazado ese plan alternativo, las potencias de la UE resolvieron respaldar y financiar al Plan Colombia y a Pastrana. La derrota política de las FARC no podía ser más completa. Todo esto confirmó las limitaciones de la política de "negociaciones de paz" de la guerrilla colombiana. En este cuadro continental, estas negociaciones podían arrojar, en el mejor de los casos, resultados similares a los acuerdos de Contadora en América Central de la década pasada, que sólo sirvieron para encubrir la capitulación de los grupos guerrilleros ante el imperialismo y que no resolvieron ningún problema social de las masas.

El nuevo presidente Álvaro Uribe empezó su mandato "jugando fuerte": estableció por decreto el "estado de conmoción interna" (estado de sitio) que le otorga superpoderes represivos y legislativos por un plazo de 9 meses; anunció la incorporación de 10.000 efectivos a la policía y la creación de dos brigadas militares de 3.000 soldados; puso en marcha un programa para organizar un ejército de un millón de informantes "antiguerrilla" en las zonas rurales, y envió al Congreso un proyecto de ley para plebiscitar la reducción del número de parlamentarios.

Del lado de las FARC, estaban fuertemente armadas, cuentan con decenas de miles de hombres y una implantación muy fuerte en las zonas rurales; crearon milicias urbanas (que encuadrarían hasta 5.000 efectivos) las que "celebraron" la asunción de Uribe bombardeando el palacio presidencial. Una operación de esta envergadura, realizada en una ciudad militarizada y con miles de efectivos, dejó en claro el progreso de las FARC en el terreno urbano. Uribe, un poderoso hacendado y connotado miembro del *establishment* político colombiano, llegó al gobierno luego del fracaso de las "negociaciones" del ex presidente Pastrana con la guerrilla. Las FARC respondieron a la ruptura de Pastrana defendiendo una vez más la línea del proceso de paz, reclamando su reapertura cualquiera fuese el ganador de los comicios.

La amenaza de boicot a los comicios posteriores a la ruptura no dio lugar a acciones de envergadura contra ellas. El "proceso de paz" fue interrumpido para salvarlo de su fracaso y especialmente para impedir el vacío de poder que amenazaba en los últimos meses al gobierno de Pastrana. Los yanquis, mientras tanto, encubrían su intervención directa con una "privatización" creciente de la guerra, o sea, con mercenarios y el apoyo de la industria bélica yanqui al Ejército colombiano y a los paramilitares, sin pasar por el Pentágono (esto ya había ocurrido en la guerra de los Balcanes).

Pero el Estado colombiano no dominaba la totalidad de su territorio; por lo tanto no recaudaba impuestos ni brindaba servicios educativos o sanitarios. Su ejército, pese a ser el que, después de Israel y Egipto, recibía más ayuda militar de los Estados Unidos, era "reducido", débil, "manifiestamente inepto" en el combate y en el espionaje.

Habiendo sufrido humillantes derrotas a manos de los guerrilleros, no ejercía el monopolio de la represión estatal. El aparato del Estado está penetrado hasta los tuétanos por el narcotráfico, que también financia, junto con los ganaderos, a los paramilitares. Colombia tiene un ejército de campesinos pobres a los que se envía a combatir a una guerrilla campesina en defensa del régimen político de los terratenientes. En Colombia, 2.300 hacendados (uno de ellos Uribe) poseen 40 millones de hectáreas; 2,5 millones de campesinos pobres apenas poseen 4,5 millones de hectáreas. Los terratenientes y la burguesía no quieren enviar a sus hijos a la guerra ni redistribuir las tierras; sin una cosa ni la otra, el Estado colombiano no podrá tener un "ejército fuerte".

Por la misma razón, el millón de "informantes" rurales sólo podía ser reclutado mediante la coerción estatal, que no llegaba a todo el territorio. Con una deuda externa del 50% de su PBI y una recaudación fiscal en baja, el FMI le exigía a Uribe el despido de miles de empleados públicos y una "reforma previsional", altamente impopulares. Es decir que Uribe se planteaba la cuadratura del círculo: librar una guerra y aumentar el gasto militar, al mismo tiempo que se paga la deuda externa y se pega un "ajustazo" contra el pueblo. Los paramilitares se habían fracturado. Su propio jefe, Carlos Castaño, denunció que las "autodefensas unidas" se han convertido en bandas descontroladas que actúan al servicio del narcotráfico. La descomposición de los paramilitares alejaba todavía más las posibilidades de que el Estado monopolizase la represión.

Uribe continuó el "Plan Colombia" para "combatir al narcotráfico". Pero la economía colombiana giraba en torno a los ingresos provenientes del narcotráfico; cualquier intento de desarticularlo provocaría un descalabro económico mayúsculo que "desfinanciaría" la guerra contra las FARC. Si Uribe resultaba incapaz de contener las contradicciones, la "cuestión colombiana" sobrepasaría sus fronteras y se convertiría en una cuestión continental, con una intervención todavía más directa del imperialismo norteamericano.

La intervención militar imperialista planteaba, como lo advirtió la Iglesia, el desplazamiento de decenas de miles de campesinos y el agravamiento de la guerra civil. La fumigación envenenaría la tierra y el agua y no sólo destruiría las plantaciones de coca sino también todo tipo de cultivo y el ganado, obligando a los campesinos a abandonar sus tierras. No se plantea la sustitución de la coca porque el monto de dinero necesario para ello seria fabuloso, además del problema ulterior de encontrar mercados para la producción emergente.

El Plan Colombia puso en evidencia la completa incompatibilidad entre las necesidades del desarrollo agrícola de Colombia y la agricultura mundial dominada por los monopolios capitalistas, y entre las reivindicaciones más elementales de los campesinos y los monopolios mundiales que pretenden monopolizar sus tierras. Expuso, por lo tanto, las limitaciones de la política de las FARC.

7. LA INSURRECCIÓN ECUATORIANA

Utilizando sus recursos, el imperialismo logró, hasta un cierto punto, contornear el escenario de crisis política aguda que América Latina vivía en 2000. Después de la impresionante insurrección de campesinos e indios en Ecuador, el nuevo presidente Noboa logró pasar sus primeros y cruciales meses en el poder y dar los primeros pasos de su programa de dolarización; el peruano Fujimori logró sortear la crisis planteada por el fraude electoral; en Paraguay, el aborto del golpe "oviedista" de mayo de 2000, y la propia detención de Lino Oviedo en Brasil, dieron un poco de aire al debilísimo gobierno del González Macchi; las elecciones mexicanas fueron ganadas por el pro-imperialista Fox, candidato de un partido clerical devenido agente del 'liberalismo' yanqui.

La intervención política imperialista en el continente fue de la mano de una intervención militar que no se limitó a Colombia. Una serie de acuerdos marítimos y aéreos permiten a las fuerzas armadas de los Estados Unidos vigilar las costas y los cielos de Centroamérica; y lo mismo sucede con Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Venezuela fue el único país de América del Sur que no aceptó estos "sobrevuelos" de su espacio aéreo y el patrullaje de sus aguas territoriales por los norteamericanos, lo que llevó al general Barry McCaffrey, jefe militar norteamericano de la lucha antidrogas en América del Sur, a definirlo como "un agujero negro" para los Estados Unidos en la región.

Nada de este despliegue militar tuvo que ver con el promocionado combate al narcotráfico (con los cielos colombianos y caribeños siendo constantemente sobrevolados por la fuerza aérea norteamericana, nada impidió que decenas de aviones cargados de droga despegasen diariamente de Colombia y se paseasen libremente por todo el Caribe) sino con el control político-militar de un continente en ebullición. Frente a la crisis latinoamericana, el imperialismo norteamericano puso en juego sus recursos políticos, diplomáticos, financieros y militares. Pero tuvo que hacerlo al calor de la propia crisis, empíricamente, bajo los golpes de la movilización de las masas, del hundimiento de los regímenes políticos e incluso del fracaso de las salidas que él mismo había montado con anterioridad.

La profundidad que alcanzó la crisis ecuatoriana, por ejemplo, obligó a Estados Unidos a aceptar una dolarización a la que se oponía. El descalabro económico y la corrupción llevaron a las severas crisis políticas que determinaron las caídas de los gobiernos de Bucaram (1997) y Mahuad (2000), al interinato de Fabián Alarcón, nacido de una componenda dentro del Congreso Nacional, y al gobierno de Gustavo Noboa, que asumió en el ministerio de Defensa Nacional. El desarrollo fue entonces el germen de un acercamiento entre militares e indígenas. Los sucesos de enero del 2000 no implicaron necesariamente una articulación política entre el movimiento indio organizado y los grupos militares.

El intento de Mahuad de evitar la quiebra del sistema financiero llevó al colapso a la economía ecuatoriana. La crisis bancaria estalló como consecuencia del reflujo de los créditos internacionales provocado por el derrumbe asiático de 1997, el hundimiento del fondo de inversiones norteamericano LTMC de 1998 y la devaluación brasileña de comienzos de 1999. Durante el período anterior, los bancos ecuatorianos se habían endeudado fuertemente en el exterior (entre 1992 y 1997, la tasa media de crecimiento de la deuda bancaria con el exterior fue del 46%).

El gobierno de Mahuad, un rehén político de los grandes banqueros, intentó zanjar la crisis mediante una masiva emisión monetaria: entre 1998 y 1999, el Estado ecuatoriano transfirió a los bancos recursos por unos 1.400 millones de dólares, el equivalente al 12% del PIB. Mientras tanto, el pago de los intereses de la deuda externa consumía el

54% del presupuesto nacional. En setiembre de 1999, apoyado por el FMI, Mahuad declaró la cesación de pagos de una parte de la deuda externa (bonos Brady). El rechazo de los especuladores internacionales abrió las puertas a la fuga de capitales y a la acelerada devaluación de la moneda nacional, cuyos principales impulsores y beneficiarios fueron los propios bancos: al igual que en Brasil, los bancos transformaron en dólares la liquidez que les transfería el Banco Central. Frente a la hiperinflación y a la hiper-devaluación, Mahuad congeló los depósitos bancarios a comienzos del 2000, agudizando la ya profunda recesión existente (el PIB cayó 8% en 1999).

Cuando Mahuad decretó la dolarización, el 9 de enero de 2000, la economía ecuatoriana había colapsado. Mahuad, sin embargo, no fue la única víctima del fracaso del plan fondomonetarista de la moratoria ecuatoriana. Junto con el manejo de los préstamos a Rusia, posteriormente reciclados por la burocracia a los bancos occidentales, la cuestión de la cesación de pagos ecuatoriana fue uno de los motivos que llevó a la renuncia anticipada de Michel Camdessus al frente del FMI en diciembre de 1999.

Un conjunto de entidades financieras internacionales, como *Merril Lynch* o *Chase Manhattan*, habían declarado públicamente su cerrada oposición al proyecto de dolarización de Mahuad, predecesor de Noboa. En la misma dirección se habían pronunciado hombres claves del capital financiero y del Estado norteamericano, como Alan Greenspan, jefe de la Reserva Federal (Banco Central) norteamericano.

La dolarización fue "un acto de desesperación" (según otra la definición del ministro de Finanzas de Mahuad, Alfredo Arizaga) dictado por el colapso de la moratoria de los bonos Brady, auspiciada por el FMI. El *default* ecuatoriano formaba parte de una estrategia que pretendía forzar a los acreedores a hacerse cargo de parte de los quebrantos, en el marco de una nueva arquitectura financiera internacional. Pero los acreedores no aceptaron compartir la carga: rechazaron violentamente el planteo ecuatoriano e iniciaron una fuga de capitales que llevó al derrumbe de la economía y a la caída de Mahuad.

La crisis ecuatoriana llegó a tal profundidad que cuestionó la propia existencia del Estado Nacional. Ecuador es un país históricamente dividido entre la sierra (Quito) y la costa (Guayaquil), donde reside una poderosa burguesía que ha levantado, en diversas oportunidades, planteos separatistas. Apenas la "junta de salvación nacional" anunció que asumía el poder, voceros de la burguesía costeña replantearon vivamente la perspectiva de su separación. Pero lo fundamental es que el colapso económico desató una movilización de masas impresionante, que tumbó al gobierno y dejó a las masas dueñas de la sede del poder.

Movilizaciones regionales, con direcciones diversas, pero donde aparecía cada vez más la organización campesino-indígena con un papel hegemónico, convergieron en una movilización nacional casi espontánea y motivada por el desastre económico, que se adueñó de las calles de la capital, de los símbolos del poder político y hasta del propio Palacio de Gobierno, que fue literalmente abandonado por las fuerzas represivas en desbandada . Las masas, los campesinos en primer lugar, se encontraron dueñas de un poder político que prácticamente les cayó en el regazo debido a la descomposición del capitalismo ecuatoriano y del propio Estado. Mahuad se fue, finalmente, volteado por una rebelión indígena apoyada por una fracción de los mandos militares medios. El coronel Lucio Gutiérrez, en representación de estos últimos, integró la Junta Provisional, integrada también por el presidente de la confederación indígena y un ex presidente de la Corte Suprema, que tomó el poder para cedérselo inmediatamente a los altos mandos.

En los días posteriores a los acontecimientos, se conocieron detalles de las entrevistas mantenidas por la dirección de la CONAIE (Confederación Indígena de Ecuador) con el alto mando militar, en particular con el general Mendoza. La revuelta indígena comenzara el 15 de enero, con la convocatoria de los parlamentos populares. Simultáneamente, los dirigentes indígenas organizaron una serie de reuniones con el alto mando militar en las que plantearon la idea de tirar abajo los tres poderes del Estado.

Personalidades políticas influyentes y militares de alto rango figuraron entre los principales actores de esos acontecimientos. La rebelión fracasó cuando la dirección del movimiento indigenista y los oficiales jóvenes del ejército le confiaron el poder a la plana mayor militar, demostrando con ello sus limitaciones políticas.

Pero esa crisis cobró también un alcance estratégico también para la situación en Venezuela y, sobre todo, en Colombia. Una victoria revolucionaria de la insurrección indígena-militar habría fortalecido a Chávez y, al mismo tiempo, debilitado las posibilidades de una intervención militar en Colombia. Venezuela rechazó el apoyo militar norteamericano al gobierno de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. El fracaso de la moratoria ecuatoriana respaldada por el FMI amenazaba con poner en crisis a toda la política norteamericana para la región andina. Esta perspectiva explica la intervención directa y personal del propio Clinton en el derrocamiento de la "junta de salvación nacional" y su reemplazo por Noboa.

Rápidamente, entre amenazas de sanciones y "un aislamiento peor que el de Cuba", Clinton y el Departamento de Estado norteamericano armaron un frente entre el alto mando y todas las fracciones del gran capital ecuatoriano para deshacerse de los indígenas y su Junta. El alto mando militar se hizo del poder sin disparar un solo tiro ni derramar una gota de sangre; le bastó apoyarse en la confianza que depositó en él la dirección campesina.

Así, el ministro de Defensa de Mahuad, el general Mendoza, reemplazó en la Junta al coronel Gutiérrez para renunciar inmediatamente y traspasar el gobierno a Noboa. Los norteamericanos, y el coro de gobiernos latinoamericanos adictos, calificaron a este segundo cuartelazo como “triunfo de la legalidad”. Los indígenas, derrotados, se retiraron a sus pueblos, y el movimiento huelguístico refluyó.

La devaluación había desatado una inflación cercana al 100% anual, mientras que la brusca reducción del dinero en circulación agravaba la recesión y el desempleo. Además, se estableció la eliminación de los subsidios al combustible (lo que duplicaría su precio), la masiva privatización de las empresas públicas y una reforma laboral flexibilizadora. El gobierno de Noboa, con el pleno respaldo del FMI y de la diplomacia norteamericana, fue extremadamente cuidadoso en la aplicación de este plan, por temor a provocar nuevos levantamientos populares. Los tarifazos fueron aplicados en varias etapas, y cada uno de ellos parcialmente compensado con aumentos de salario.

En mayo de 2000 fueron obligados a renunciar el ministro de Finanzas, Jorge Guzmán, y el presidente y el vice del Banco Central, que reclamaban la duplicación, de un solo golpe, del precio de los combustibles.. Al mismo tiempo, para cerrar la fractura del Ejército, Noboa impulsó la amnistía de los coroneles implicados en el levantamiento de enero. Mientras tanto, fracasaron la huelga docente, que duró 46 días, y la primera huelga general convocada por los sindicatos urbanos y el movimiento indígena (la CONAIE se negó a apoyar activamente la huelga general, a la que sólo dio su "apoyo moral").

La confianza política de la CONAIE en el alto mando militar llevó a la derrota del movimiento indígena en Ecuador, en enero. La base de esta confianza se encontraba en

el planteo, típicamente frentepopulista y anti-revolucionario, de "unidad de los opositores". En su primera aparición pública como miembro de la "junta de salvación nacional", Antonio Vargas, principal dirigente de la CONAIE, declaró que "queremos invitar a los empresarios de buena fe, a los honrados, a los banqueros honrados para que participen de este gobierno. Lo único que queremos es que de hoy en adelante no se le robe al país. Basta de robos. Queremos un Ecuador sin ladrones".[78]

Después de la derrota de enero, la dirección de la CONAIE persistió en el mismo rumbo. En las elecciones municipales de mayo, formó un frente con partidos patronales (como el del ex presidente Rodigo Borja) y militares "progresistas". En el principal centro político del país, esta alianza estuvo encabezada por un general retirado, Francisco Moncayo, que fue nada menos que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas durante la guerra entre Ecuador y Perú en 1995. Moncayo ganó con el 53% de los votos y se perfiló como candidato para las elecciones presidenciales de 2002. La política de la dirección indígena sirvió para potenciar como representante popular a uno de los hombres de confianza de la burguesía ecuatoriana.

Los aliados no le aportaron nada a la CONAIE en términos de movilización o de apoyos populares: la alianza ganó sólo en aquellos lugares donde el movimiento indígena es fuerte (la sierra, algunas provincias de la Amazonia y la capital de Esmeralda, provincia limítrofe con Colombia), pero perdió en la costa.

Sin embargo, los aliados pusieron a la cabeza de la coalición sus hombres y su programa. Para el dirigente indígena Miguel Lluco, "la unidad compromete a todos los que participan en esta tendencia, al movimiento indígena y a los movimientos sociales, a realizar un trabajo cada vez más pluralista, olvidando sectarismos", o sea, la subordinación de los reclamos sociales de las masas explotadas al "pluralismo", es decir, a la convivencia con los "empresarios y banqueros honrados" a los que hacía mención Vargas en su discurso de enero.

En consonancia con ello, la CONAIE abandonó los llamados a la movilización (como ya señalado, se negó a acompañar el paro general convocado por los sindicatos urbanos contra Noboa) y se enfrascó en una estrategia puramente parlamentarista: reunir firmas para que se convocase un plebiscito sobre la dolarización. La dolarización no logró reducir la inflación galopante ni sacar al país de la recesión. Peor aún, con una crisis bancaria irresuelta (el 65% de los activos bancarios fueron tomados por el Estado para evitar su quiebra), Ecuador liquidó las posibilidades de remontarla haciendo uso de una política monetaria.

Con la dolarización, y dada la enormidad de la deuda pública, Ecuador liquidó también las posibilidades de realizar una política fiscal. Noboa tendría que comenzar un programa de privatizaciones masivas, desde la electricidad a los bancos. La deuda externa ecuatoriana Alcanzó en 2000 los 16.000 millones de dólares, 137% del PIB. Los aportes comprometidos por el FMI alcanzaban sólo 300 millones hasta abril de 2001, mientras que los vencimientos de la deuda externa superaban los 900 millones, se volvía a plantear la perspectiva de una cesación de pagos.

Al final de 2002, sin embargo, el coronel Lucio Gutiérrez ganó las elecciones presidenciales en el primer turno, aunque con menos del 21% de los votos. Conocidos los resultados, Gutiérrez llamó a un "gran acuerdo nacional", y aseguró que, en caso de llegar a la presidencia, realizaría "un gobierno amplio y de puertas abiertas". También prometió mantener en principio la dolarización y dejó en claro que Ecuador cumpliría con todos sus compromisos.

---

[78] *Pulsar*, La Paz, 21 de enero de 2000.

Eso explica en gran parte que, en el segundo turno, Gutiérrez obtuviera el 54%, derrotando al ya mencionado Álvaro Noboa, dueño de la mayor fortuna del Ecuador y de la cuarta mayor empresa mundial de exportación de bananas. Un tercio de los votantes se abstuvo. La victoria de Noboa amenazaba convertir a Ecuador en una gigantesca plantación bananera, para el enriquecimiento de su dueño. Lucio Gutiérrez ganó las elecciones presidenciales de Ecuador, acompañado sólo por sus ex compañeros de armas y de la aventura golpista que protagonizó junto con los indígenas el 21 de enero de 2000 en contra del presidente Jamil Mahuad.[79]

Con ellos y con simpatizantes de los "movimientos sociales" había empezado a fraguar la *Sociedad Patriótica 21 de Enero*, que lo llevó al poder. Con propuestas simples, inspiradas en los motivos de la revuelta contra Mahuad: "derrotar a los políticos de siempre"; "traer a los banqueros fugados a Miami"; "castigar a los corruptos", un conjunto de ofertas fáciles y una estratégica alianza con el poderoso movimiento indio *Pachakutic*, fueron suficientes para derrotar no sólo al empresario bananero más rico del país, Álvaro Noboa, sino también a los más connotados líderes históricos de la política ecuatoriana: Rodrigo Borja, Oswaldo Hurtado, León Roldós, al Partido Roldosista (Abdalá Bucaram) y a la derecha empresarial representada por el Partido Social Cristiano.

El coronel Gutiérrez surgió como detonante, con la alianza electoral entre Sociedad Patriótica 21 de Enero, el partido de los militares jóvenes en retiro, y *Pachakutic*, brazo político del poderoso movimiento indio. En el nuevo gobierno, Gutiérrez atenuó las consignas respecto a temas como la revisión del convenio de la Base militar de Manta con Estados Unidos; la no intervención del país en el conflicto colombiano; la revisión del proceso de dolarización; el rechazo al ALCA. El presidente electo se esforzó por marcar distancias con el venezolano Hugo Chávez, y por demostrar "una ecuanimidad insospechada ante la comunidad internacional, ante los empresarios interesados en una reactivación económica que sostenga el equilibrio de la dolarización y ante los otros grupos políticos".[80]

Gutiérrez participó, como vimos, del derrocamiento del presidente Mahuad a principios del 2000. Llegó al gobierno con los votos de las organizaciones campesinas y de partidos de izquierda y centroizquierda, pero adelantó que iba a gobernar para los banqueros y el gran capital. En una gira por Estados Unidos realizada entre la primera y segunda vuelta dfe las lecciones presidenciales, Gutiérrez se ganó el apoyo de los inversores internacionales. El director para América Latina del banco *Crédit Suisse-First Boston* lo calificó como dueño de "ideas y objetivos muy apropiados, renovadores y pragmáticos".[81] En Estados Unidos, Gutiérrez se comprometió a "reforzar la dolarización", a acordar con el FMI, a establecer una férrea "disciplina fiscal", a "atraer la inversión externa", a "cumplir todas las obligaciones internacionales" y a mantener la estratégica base aérea de Manta en manos de los militares norteamericanos.

---

[79] Gutiérrez se forjó una carrera militar exitosa dentro de la "tendencia profesionalista" del Ejército: es ingeniero civil y tiene varias licenciaturas en deportes, alta gerencia y administración de empresas. Su acercamiento a la política se produjo cuando fue jefe de la casa presidencial durante el fugaz gobierno de Bucaram (agosto de 1996 a enero de 1997) y luego edecán militar del interino Fabián Alarcón (1997-1998), que le siguió. Aunque su nombre saltó a la fama por los sucesos del 21 de enero, sus compañeros de armas sabían de sus posiciones frente al gobierno de Mahuad cuando éste se propuso recortar los gastos militares luego de firmar la paz con Perú (octubre de 1998), al cabo de un conflicto territorial que duró más de 150 años y provocó diversos conflictos armados, el último en 1995.

[80] GARCÍA GALLEGOS, Berta. Un coronel contra la "vieja política". *Le Monde Diplomatique* n° 43, Edición Cono Sur, Buenos Aires, enero de 2003.

[81] *Financial Times*, Londres, 22 de noviembre de 2002.

Nada cambiaria, entonces, en Ecuador, de la mano de Gutiérrez, que encontraría la excusa perfecta en el dominio del Congreso por parte del Partido Socialcristiano. Las organizaciones campesinas y de izquierda que lo apoyaron no podían, esta vez, alegar que no sabían lo que iba a suceder. A inicios del 2003, Gutiérrez viajó a Washington para presentar ante el gobierno y los grandes grupos petroleros norteamericanos su propuesta de apertura a la inversión externa en el sector petrolero y, en particular, el desarrollo de nuevos emprendimientos en la región amazónica. En reunión con el presidente Bush definió a Ecuador como un "aliado estratégico de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo". Esta afirmación era por demás significativa en boca del presidente de un país limítrofe de Colombia, donde el imperialismo norteamericano propiciaba un plan de guerra interna con la excusa del "narcotráfico y el terrorismo".

Pero el objetivo central de la visita de Gutiérrez a Washington era otro: la entrega del petróleo. En la reunión con Bush no sólo ofreció la "apertura petrolera a las inversiones externas" sino que fue a fondo: anunció que "Ecuador quiere ofrecer a Estados Unidos un permanente flujo petrolero si las dificultades internacionales se acentúan". Las "dificultades internacionales" no eran otras que la guerra que Bush se aprestaba a lanzar contra Irak; es decir que el "nacionalista" González se declaró dispuesto a sostener el "esfuerzo de guerra" imperialista.

Los cien primeros días del gobierno de Gutiérrez alcanzaron para mostrar el acelerado desbarranque pro-imperialista del "nacionalista" e "indigenista" ecuatoriano. El primer objetivo del nuevo gobierno fue establecer un nuevo acuerdo con el FMI, algo en lo que había fracasado el anterior gobierno de "transición". El acuerdo firmado por Gutiérrez era de un entreguismo inigualable: concentraba más de la mitad de los recursos presupuestarios, incluidos los excedentes de las exportaciones petroleras, para el pago de la deuda externa. Además, se comprometió a avanzar en la privatización de la telefonía y de la energía eléctrica, así como también en una "reforma previsional" que congelase los haberes. Al mismo tiempo, estableció el "tarifazo permanente", al decretar el ajuste mensual de las tarifas de energía y combustibles.

En mayo del 2003, Gutiérrez sorprendió a todos cuando reclamó "mayor ayuda" para el colombiano Uribe y el Plan Colombia. En la cumbre del Grupo Río, realizada en Cuzco, Gutiérrez reclamó "una salida militar si los rebeldes de las FARC no aceptasen un cese del fuego". Gutiérrez permitió que los norteamericanos continuasen utilizando la estratégica base aérea de Manta, desde donde operaban naves militares norteamericanas que participaban en el Plan Colombia.

Las organizaciones indigenistas que llevaron a Gutiérrez al gobierno criticaron abiertamente el giro pro-imperialista. "El presidente de Ecuador ha abandonado los postulados políticos iniciales que permitieron el respaldo de los indígenas a su candidatura", declaró Blanca Chancoso, dirigente de la CONAIE. La dirigente no sólo rechazó el acuerdo con el FMI sino que, además, reclamó que fiel a su compromiso de campaña, Gutiérrez revisase los acuerdos sobre la base de Manta, el Plan Colombia y el ALCA.

Por su parte, una asamblea extraordinaria de la Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), realizada a fines de abril de 2003 en Quito, resolvió "declarar la oposición frente al gobierno, por aplicar las recetas del FMI". La CONAIE, sin embargo, participaba directamente en el gobierno de Gutiérrez a través de dos ministerios clave, el de Agricultura y el de Relaciones Exteriores. Es decir que, como canciller, un representante de la CONAIE era el directo responsable político de las relaciones de Ecuador con los Estados Unidos, con el Plan Colombia y el gobierno

de Uribe, y de la utilización de las bases militares ecuatorianas por militares norteamericanos.

A cinco meses de la asunción de Gutiérrez, las ilusiones comenzaron a disiparse, y el pueblo ecuatoriano comenzó a movilizarse contra el gobierno. Primero fueron los estudiantes secundarios, que organizaron una gran manifestación en repudio al acuerdo con el FMI y en reclamo del boleto estudiantil. Luego los maestros realizaron una huelga nacional de 20 días, por aumentos salariales, que incluyó cortes de ruta y ocupación de edificios públicos. En su fase culminante, la lucha docente fue apoyada por una huelga de hambre de 200 maestros, padres y estudiantes.

Cuando la huelga docente se acercaba a su desenlace, estalló la huelga de los trabajadores petroleros estatales, en repudio a la concesión al capital privado de los cuatro principales yacimientos estatales. La huelga fue una de las mayores de la historia de la petrolera estatal y los propios dirigentes sindicales se declararon sorprendidos con la radicalización de las bases". El "anti-neoliberal" Gutiérrez reprimió con saña la huelga: los pozos y refinerías fueron ocupadas por los militares y la dirección sindical fue sometida a juicio por "terrorismo y sabotaje". Finalizada la huelga, Gutiérrez removió a la cúpula militar, que se había negado a involucrar a la institución armada en el desalojo y apresamiento de los dirigentes petroleros al margen de los procedimientos legales.

Otros sectores de trabajadores, como los de la salud y los judiciales, realizaron huelgas parciales, preparatorias de medidas de carácter general. Al mismo tiempo, también creció el repudio al gobierno entre los campesinos e indígenas. Las primeras luchas obreras y populares contra el gobierno de Gutiérrez tuvieron lugar en un cuadro de crisis económica creciente. La recaudación fiscal entró en un retroceso agudo y el déficit de la balanza comercial era mayor que el que había generado la crisis de 1999, que tuvo como consecuencia la insurrección que terminó derrumbando al gobierno de Mahuad.

El elemento contradictorio era que los explotados salían a la lucha contra el gobierno, pero bajo direcciones políticas que apoyaron su ascenso y que, incluso, integraban su gabinete, como la CONAIE y el maoísta Movimiento Popular Democrático (MPD), con fuerte peso en las centrales sindicales. Estas organizaciones caracterizaban al gobierno de Gutiérrez como "un gobierno en disputa", entre el "bloque imperialista" y el "bloque popular". Su orientación era presionar al gobierno para que cambiase de rumbo y cumpliese sus promesas electorales. La CONAIE/Pachakutik lo intentó por la vía de presionar para obtener más cargos gubernamentales; el MPD recurrió, incluso, a impulsar limitadamente la movilización popular.

Pero las limitaciones de esta política rápidamente saltaron a la vista. Ante el descontento de las bases campesinas, que ponía en riesgo la unidad de la CONAIE, la central campesina retiró su apoyo al gobierno, aunque manteniendo los cargos gubernamentales. El MPD, por su parte, bloqueó la posibilidad de que la huelga petrolera confluyera con la del sindicato docente (dirigido por el mismo MPD), y se abriera así la perspectiva de una huelga general. Para las organizaciones populares y de izquierda se planteaba una alternativa inevitable: encabezar la lucha frontal contra el gobierno pro-imperialista o integrarse a su política.[82]

[82] GUREVICH, Luis. Ecuador, "aliado estratégico" de los Estados Unidos. *Prensa Obrera* nº 795, Buenos Aires, marzo de 2003.

8. MÉXICO: DE CHIAPAS AL *TEQUILAZO*

Mientras se preparaba para intervenir en la selva colombiana, el imperialismo norteamericano festejaba la victoria del candidato del Partido de Acción Nacional (PAN), Vicente Fox, un ex gerente de la Coca-Cola, cuyo programa era establecer un acuerdo monetario con los Estados Unidos y privatizar el petróleo. El imperialismo había logrado imponer, de manera indolora, una salida democratizante de derecha a la crisis mexicana. Este resultado no parecía fácil en un país donde la desigualdad salarial y regional se había incrementado en los años 90 más que en cualquier otro país de América Latina, donde los salarios reales cayeron el 19% en 1995-2000, y donde el 43% de los mexicanos vive con menos de dos dólares por día; en un país donde la crisis de Chiapas no había sido resuelta y donde se desarrolló una enorme huelga universitaria y una enorme lucha de la juventud explotada; en un país donde la oposición al PRI estuvo encabezada durante años por el centroizquierdista PRD (Partido de la Revolución Democrática), que gobernaba el Distrito Federal.

Mucho menos cuando el partido llamado a terminar con el *priato* (el PAN, Partido de Acción Nacional) estuvo durante décadas integrado al régimen del PRI y canalizaba las presiones de la Iglesia. El norte mexicano, pro-norteamericano y petrolero, es la guarida tradicional de una derecha de tipo tejano, el grupo de Monterrey: ese grupo capturó el PAN, un partido tradicionalmente anti-liberal, para catapultar a uno de sus hombres, Fox, a la presidencia.

La derrota electoral del PRI fue el producto de un largo deterioro político. En las últimas décadas, bajo los gobiernos de Echeverría, López Portillo y De la Madrid, el régimen daba indicios de agotamiento, agravado con la situación económica del fin de la década del 70, que culminó con la crisis de la deuda externa de 1982. La crisis se precipitó bajo el gobierno "cleptocrata" de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), cuando el despacho presidencial se transformó en un mostrador del narcotráfico. El hermano del presidente, Raúl, pasó de jefe del abastecimiento en narcótico del país a agente de la empresa que permitió a los carteles de Tijuana y Guadalajara el monopolio del acceso al mercado norteamericano de drogas.

Después de la crisis de 1982, México entró en un período de "reestructuración del Estado", que implicó la reorganización económica, apertura del mercado nacional, eliminación de barreras comerciales, eliminación de controles de precios y subsidios, privatización de las empresas públicas y propiedad del Estado, reducciones al gasto de las políticas sociales, libre cambio de la moneda, así como amplias reformas políticas y una modernización administrativa. El principal propósito de las reformas impulsadas en México fue el de desarrollar una amplia base competitiva del sector exportador de bienes no tradicionales. México ingresó al GATT en 1986 y se convirtió en un exportador de manufacturas. La privatización de las empresas propiedad del Estado y la desregulación económica fueron las estrategias adoptadas, a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, continuadas con Salinas de Gortari y también con Zedillo.

En la crisis de 1982, la nacionalización de la banca fue el evento que provocó la ruptura del bloque empresarial hegemónico y sus representantes, los políticos y gobernantes del PRI y las fracciones del gran capital. Con la nacionalización de la banca, los capitalistas mexicanos que se sintieron "traicionados" rompieron la alianza con la burocracia política y redefinieron la estrategia para su recomposición, con la privatización de empresas estratégicas del sector público, muchas de las cuales fueron adquiridas por inversores extranjeros que penetraron en todos los sectores de la economía, con alta concentración del capital en pocas corporaciones.

En 1987 la inflación alcanzó el 159% y un crack en la bolsa devoró a ahorradores. En el interior del PRI, un grupo disidente formó la Corriente Democrática, que luego se escindió para formar el Frente Democrático Nacional. El Presidente Miguel de la Madrid fue el primero en soportar interpelaciones en su último informe de gobierno. El 6 de julio de 1988 Salinas alcanzó el poder en medio de una crisis generalizada. Con Salinas se liquidaron las empresas paraestatales, se aceleró la apertura de la economía, se firman tratados de libre comercio con Chile, Estados Unidos y Canadá, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, y Bolivia. Las reformas al Artículo 27 de la Constitución permitieron las inversiones privadas y extranjeras en el campo mexicano. El Estado mexicano durante el salinismo permitió la transferencia de empresas públicas a grupos financieros con los que tenían complicidades políticas.

Entre 1982 y 2000, la deuda externa de México casi triplicó (pasando de 57 mil millones de dólares a 157 mil millones) mientras el país pagó a sus acreedores 8 veces lo que debía (según el Banco Mundial, México reembolsó 478 mil millones de dólares). Entre los acreedores se encuentran capitalistas mexicanos que poseen una parte de los créditos gracias a los capitales que han colocado en los mercados financieros extranjeros.

México fue el segundo privatizador de América Latina en la década de 1990, cuando el gobierno transfirió a particulares activos por 31.458 millones de dólares, 20.4 % de la venta total de empresas de propiedad del Estado en Latinoamérica. Las privatizaciones alcanzaron un monto de 3.160 millones de dólares en 1990, para aumentar a 11.289 millones en 1991, y sumar 6.924 millones de dólares en 1992. Para junio de 1992, el gobierno había privatizado 361 de alrededor de 1200 empresas propiedad del Estado.

Las privatizaciones hechas en 1993 representaron 2.131 millones de dólares, en 1994 fueron de 766 millones y en 1995 sólo de 167 millones de dólares. En 1996 aumentó a 1.526 millones de dólares, en 1997 creció a 4.496 millones y en 1998 la venta fue por 999 millones de dólares. Un informe del Banco Mundial señaló que entre 1990 y 1998 las privatizaciones de empresas públicas alcanzaron un monto de 154. 225 millones de dólares, cantidad apenas inferior al saldo de la deuda externa total de México, de 159.959 millones de dólares en 1998.

Fueron privatizados bienes en aeropuertos, ferrocarriles y en el sector energético, la industria petrolera y eléctrica. Los programas de privatización redujeron el empleo a la mitad, mientras que la producción se incrementó en un 54,3% a pesar de la significativa reducción en inversiones. El 17 de diciembre de 1993 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Tratado de Libre Comercio con México. La crisis del PRI condujo a los asesinatos del candidato a la Presidencia de la República y del Secretario General del Partido.

El asesinato del candidato oficial a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, la exposición pública de las actividades de Raúl, con la complicidad de su hermano, la rebelión de Chiapas en enero de 1994, sirvieron para terminar de minar al PRI. El final comenzó con la tentativa de Ernesto Zedillo (presidente 1994-2000) de “moralizar” el ya desgastado partido. Zedillo arribó a la presidencia, pero después de 21 días se enfrentó con la peor crisis económica en la historia de México. La abolición del “dedazo” –indicación del sucesor por el jefe de Estado en ejercicio- abrió espacio para la indicación “democrática” de Jaime Labastida, via congreso partidario. Zedillo creó el IFE (Instituto Federal de Elecciones) supuestamente inmune al PRI, para rehacer el registro electoral, fiscalizar las elecciones, inhibir fraudes y coacciones, compra de votos y abusos de propaganda electoral, admitiendo la participación de observadores extranjeros.

La pobreza aumentó del 36 al 38 por ciento del total de los hogares mexicanos en 1994 al 45 a 47 por ciento en 1998. Entre 1994 1998, los hogares mexicanos que vivían debajo de la línea de pobreza, con un ingreso mensual no mayor a 560 pesos a valor constante de abril de 1994, aumentaron de 69 a 76 por ciento del total. En términos generales, los investigadores coinciden en que la pobreza aumentó en más del 5 por ciento durante el sexenio de Zedillo. Esto redunda en la formación de una sociedad con grandes contrastes, donde 20 millones de mexicanos (20% de la población total), viven en condiciones de pobreza extrema y más de 40 millones (40% de la población), viven por debajo de la línea de pobreza.

El Banco Mundial presentó cifras en las que 42 millones de mexicanos tenían niveles salariales por debajo de los veinte pesos diarios. Entre 1974 y el 2000, el salario real de los trabajadores tuvo un deterioro acumulado del 72%. Tan sólo durante el gobierno de Zedillo se presentó una fuerte pérdida acumulada cercana al 50 por ciento de los salarios reales. El 64,5% de la población percibía dos salarios mínimos, insuficientes para obtener los mínimos nutricionales; 40% de los hogares mexicanos son sostenidos por las mujeres con ingresos inferiores a los de los hombres hasta por un 20 por ciento. Más de la mitad de mexicanos en edad de trabajar se empleaba en el sector informal de la economía.

Después de l982 el crecimiento del producto interno bruto cayó: para el período comprendido de 1982 al 2000, el PIB por habitante creció 0,3% en promedio anual. El desarrollo regional también fue desequilibrado, los mexicanos con más bajos ingresos per capita se concentran en siete Estados del Sureste del país, que representan menos del 10% del PIB, mientras que con una población similar, seis Estados del Norte generaban 23% de la riqueza nacional.

Así surgió, como "salvador de la patria", el tecno-burócrata de la Coca Cola Vicente Fox, que alquiló al PAN y lo alió al PV (Partido Verde), coalición apoyada por el clero derechista, intelectuales "de izquierda" como Jorge Castañeda y políticos de centroizquierda, que esgrimían el pretexto de que Fox era la única chance de alejar al PRI del Estado. Y Fox respondía: "El elector quiere democracia, salir de la PRIsión en la que está desde 1929". Su victoria fue preparada por el propio PRI en crisis.

A través de la victoria de Fox, el imperialismo yanqui consiguió digitar la crisis del PRI e imponer un recambio político surgido de su propio riñón. En lugar del camino clásico de reconvertir hacia sus intereses a los partidos nacionalistas o centroizquierdistas que capitalizan el descontento popular, como lo hicieron con el peronismo y Menem y luego con la Alianza (en especial el Frepaso) en Argentina, o con el PS de Lagos en Chile, en México consiguieron que la derecha se convirtiera en la alternativa política democrática directa.

Los círculos del gran capital yanqui lograron, primero, comprar o alquilar un partido históricamente clerical, es decir anti-liberal, y ponerle al frente un ejecutivo de la propia tropa, Fox, un ex-gerente de la Coca Cola. Pero Fox, un llanero solitario, solamente pudo rivalizar con la enorme maquinaria estatal del PRI gracias a la enorme caja de campaña que le proveyeron esos mismos mentores yanquis y sus asociados mexicanos que operan en el norte del país.

La izquierda y los analistas políticos mexicanos se apresuraron a declarar la victoria del PAN como el "fin del corporativismo" o, según Adolfo Gilly (historiador ex-trotskista, después ideólogo del PRD "cardenista"), "la disgregación del régimen del partido de Estado", o sea, la democracia, más allá de la victoria derechista: "El factor de fondo de la victoria de Fox está más allá de la mercadotecnia y las alianzas de ocasión. Reside en un desplazamiento hacia el conservadurismo y la derecha política de un sector

significativo de la sociedad mexicana, que abarca hoy más que ese 20% conservador tradicional que siempre votó por el PAN. Las reformas salinistas, correlato de reformas similares en otros países dentro del Consenso de Washington, contribuyeron a producir cambios socioeconómicos y en parte culturales. Es notable el voto joven por Fox, no sólo de la juventud dorada que aparecía en sus mitines, sino también de otros a quienes la Revolución Mexicana y los rituales del Estado de la revolución no les dicen nada, mientras el acartonamiento institucional y la gran mentira del PRI sólo les causan rechazo".

La insurrección campesina de Chiapas, iniciada en 1994, condicionó como la sombra de un gigante el proceso político mexicano. Desde 1994 surgió en el sur mexicano (Chiapas), en la Selva Lacandona, la más importante rebelión campesina desde la revolución de 1910-1917. Lejos de amainar de inmediato, ella fue el punto de partida de una agudización nacional de la lucha de clases, que tuvo un punto culminante en la huelga de la UNAM de 1999-2000. Ésta duró más de diez meses, y provocó una importante polarización política nacional, que convergió con la lucha del EZLN y otras de los trabajadores, campesinos y jóvenes, como la huelga de la Volkswagen (declarada ilegal por los tribunales), la huelga del personal de compañías aéreas, que casi provocó la ocupación militar y el uso de la ley de emergencia nacional, la huelga de los trabajadores del azúcar, de la fábrica de ómnibus DINA así como la huelga del STUNAM (sindicato de profesores y no docentes de la UNAM) por 50% de aumento salarial.

La crisis mexicana, en realidad, remonta sus raíces mucho más atrás, como expresión de la crisis mundial del capitalismo. México estuvo, en 1982, en el centro de la "crisis de la deuda", que expresó el agotamiento del sistema financiero internacional, y agudizó el desarrollo sin precedentes de la especulación financiera mundial. El imperialismo descargó su crisis en los países atrasados, en especial América Latina, aprovechando la obsecuencia de las burguesías continentales: con el Plan Baker redujo de 200% a 121% la relación capital propio/préstamos de los 15 países más endeudados.

Pero eso no bastó: con el posterior Plan Brady, bajo pretexto de reducir la deuda externa en 10 mil millones de dólares, México aumentó su deuda interna en US$ 30 mil millones, cayendo en la recesión, el retroceso industrial, el desempleo y la concentración agraria especulativa (los campesinos sin tierra pasaron de ser un millón y medio a 6 millones, o 60% de la fuerza de trabajo agraria, durante la década de los años 80).[83] Como demostró Henri Favre, seria imposible entender la insurrección zapatista sin el deterioro económico provocado por la crisis del mercado mundial de materias primas, en especial del café (principal producto de exportación de Chiapas) durante la llamada "década perdida".[84]

En México, grandes crisis económicas ocurrieron en 1976, 1982, 1987 y 1994-95, que se volvieron repetitivas y se intensificaron, con inflación, déficits en la balanza de pagos, devaluación, fuga de capitales, desempleo creciente y poder de compra declinante. La "agenda neoliberal", que propuso los "programas de ajuste estructural y estabilidad", se impuso como condición para negociar las "crisis de la deuda" mexicana de 1982, 1987 y 1994-95 por los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.

[83] Cf. COGGIOLA, Osvaldo. La crisis mexicana y la guerrilla zapatista. *En Defensa del Marxismo* nº 10, Buenos Aires, diciembre 1994; y : América Latina: mudanças políticas recentes. *Estudos* nº 18, San Pablo, Universidad de San Pablo, diciembre 1990.

[84] FAVRE, Henri. Chiapas 1993: intento de análisis de una situación de insurrección. *Cuadernos Americanos* nº 91, México, UNAM, enero-febrero de 2002.

En 1996, las inversiones públicas y privadas en México se mantuvieron debajo de los niveles de los años setenta y ochenta.

Según estimaciones de la CEPAL, la pobreza se incrementó de 40,5 a 45,5 millones de mexicanos, de los cuales 26 millones, principalmente indígenas y campesinos, vivían en la miseria. Las contradicciones se polarizaron: "Cuando el modelo económico seguido hasta ahora en México logra generar crecimiento, lo hace acompañado de una creciente concentración del ingreso y un incremento de la pobreza entre los estratos más pobres…la crisis del 94 produjo un empobrecimiento brutal de la población…a partir de 1996, cuando se empieza a recuperar la economía, el ingreso se vuelve a concentrar".[85]

La "globalización" fue vista como la gran salida, aprovechando la vecindad mexicana con los EEUU, lo que permitió montar "maquiladoras" en la frontera norte, una plataforma de exportación basada en "la baratura de la mano de obra" (o sea, en la super-explotación), y reciclar la economía mexicana en función de la exportación, pasados los efectos de la recesión de 1982-83. México exportaba poco más de US$ 18 mil millones en 1980 (contra 8 mil millones de Argentina y 20 mil millones del Brasil), pero consiguió pasar a US$ 117,5 mil millones en 1998 (más que una sextuplicación, a precios corrientes) contra 25 mil millones de Argentina y 51 mil millones del Brasil. Sólo en 1998, México vendió al exterior más que el Mercosur y Chile juntos. De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC), la diferencia (a favor de México) fue de US$ 22,5 mil millones.

El crecimiento exportador – basado también en una enorme "racionalización" productiva - no amenguó la polarización social, al contrario (75 millones de mexicanos, 75% de la población, viven en situación de pobreza absoluta), tampoco el éxodo de mano de obra "negra" hacia el campo y – cada vez más - hacia la industria del sur estadounidense (los "lomos mojados"), ni la concentración agraria. Todo esto llevó al fracaso los programas paliativos de "modernización" agraria implementados antes y durante el salinato.

La crisis económica se transformó en crisis política, obligando al PRI, en 1988, a un monumental fraude en las elecciones presidenciales para impedir la victoria del PRD de Cuauhtémoc Cárdenas, un partido surgido de una escisión del propio PRI, encabezada por Cárdenas y Vicente Muñoz Ledo. Carlos Salinas de Gortari, presidente electo, promovió la mayor entrega nacional de la historia, al mismo tiempo que la más grande corrupción en un país que ya ostentaba los records mundiales en la materia, lo que concluyó en la prisión de su hermano Raúl, y en la transformación del propio presidente el prófugo de la justicia, después de terminado su mandato.

En enero de 1994, cuando la firma del TLC (Tratado de Libre Comercio) con los EEUU se aprestaba a consagrara la "internacionalización" de la economía mexicana, se produjo el levante de Chiapas, encabezado por el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional). El alzamiento consagró el fracaso de las políticas de *aggiornamento* del régimen político, complemento necesario exigido por el imperialismo para la 'integración norteamericana' de México, en especial del Pronasol (Programa Nacional de Solidaridad) dirigido principalmente al estado de Chiapas, que llegó a ser saludado como un gran éxito por los sociólogos...exactamente en la víspera del levantamiento.

El alzamiento, a su vez, reconocía su propia historia, pues resultó de la continuación, y la superación, de la lucha que, iniciada en la primera mitad de los 70 (el Congreso Indígena de San Cristóbal de 1974 es un punto de referencia obligado) se extiende en

[85] GONZÁLEZ AMADOR, Roberto y CASTELLANOS, Antonio. El crecimiento causó concentración de riqueza y más pobres. *La Jornada*, México, 21 de agosto de 2000.

los años siguientes hasta conformar un verdadero proceso de rebelión popular en el estado de Chiapas. En este período se forman organizaciones campesinas independientes de todo tipo, que cubren los terrenos de la demanda agraria, de la defensa de los derechos humanos, de la reivindicación gremial y sindical, y de diversas exigencias relativas a la producción, el abasto y la comercialización.

El alzamiento zapatista explotó en 1994, en el exacto momento de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre México y los EEUU (NAFTA). Las limitaciones de su dirección política eran un producto de la historia de la izquierda mexicana, en una de sus vertientes, el maoísta FLN, que se transformó en EZLN. El desarrollo de la insurrección verificaría los límites del zapatismo, que pasó, a partir de la Convención Nacional Democrática (CND) de 1995, a apoyar la candidatura presidencial del perredista Cárdenas, con el que pretendía construir un "Movimiento de Liberación Nacional" (MLN).

Al conciliar con esa izquierda burguesa, y no abrir una alternativa propia, el EZLN también fue entrando en un impasse, que llevó al fracaso al MLN y a las negociaciones con el gobierno, que concluyeron con una masacre perpetrada por el ejército en febrero de 1995. La Convención Nacional Democrática llamó a "los mexicanos honestos" a un "cambio democrático y pacífico", y luego el EZLN llamó a votar "contra los candidatos del PRI y sus equivalentes, excluyendo a quienes no están de acuerdo en probar la vía electoral", y defendiendo un "gobierno de transición", que debería "salir del proceso electoral", de "los candidatos que hay". Luego, el dirigente del EZLN, Rafael Guillén, conocido como subcomandante "Marcos", envió una carta a "los empresarios mexicanos honestos", desmintiendo "la idea de que el cambio democrático en nuestro país traerá inestabilidad económica, desconfianza de los inversionistas, etc.".

En esas condiciones, el PRI volvió a ganar las elecciones presidenciales de agosto de 1994 aunque, por la primera vez, con menos de la mitad de los votos: Ernesto Zedillo, su candidato, obtuvo 48% de los votos, contra más de 30% de Diego de Cevallos, del PAN. La sorpresa más grande fue, sin embargo, que Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD, el verdadero vencedor de 1988, quedó en último lugar, lejos de los dos candidatos derechistas. A fines de ese año, la crisis económica explotó, inaugurando el "efecto tequila", que conmovió mundialmente a los "mercados".

Dos años después de la privatización del sistema bancario mexicano, México fue forzado a devaluar su peso en diciembre de 1994, lo que repercutió en una crisis económica caracterizada por una volatilidad creciente en la tasa de cambio, la devaluación del peso seguida por una crisis del sector financiero y el rescate para salir del apuro. La caída de la Bolsa Mexicana de Valores significó la pérdida de la mitad de su valor, y los precios de las acciones para las principales compañías mexicanas que cotizan en Wall Street cayeron el 75% en pocos meses. Sin embargo, la crisis más profunda en los mercados financieros ocurrió después de que se había resuelto la devaluación y la crisis de incumplimiento de pagos.[86]

El paquete de préstamos del Fondo Monetario Internacional a México en 1995, fue una recompensa a la corrupción de los préstamos bancarios con más riesgos. La privatización de los bancos en beneficio de grupos financieros surgidos instantáneamente y con complicidades con inversionistas y dirigentes políticos, fue para aprovechar el financiamiento de los organismos internacionales destinado al rescate de

[86] México no se recobró porque su sistema financiero débil se fortaleció con la intervención del FMI, sino porque se benefició con el incremento de exportaciones a Estados Unidos como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el crecimiento acelerado de la economía vecina.

la crisis de la deuda. Sólo el 16 de diciembre, entre US$ 2,5 y US$ 3 mil millones dejaron México; de US$ 25 mil millones que México tenía como reservas a mediados de 1994, sólo quedaron US$ 6 mil millones a fin de año.

El Banco Central aumentó las tasas de interés de 13% para 17%, aun así el 19 de diciembre, mil millones de dólares se fugaron; en nueve días, US$ 8 mil millones abandonaron el país. El peso mexicano perdió en una semana 40% de su valor. En febrero de 1995, se anunció un socorro financiero de US$ 50 mil millones para salvar al peso mexicano. Bill Clinton tuvo de argumentar que era la única manera de impedir un colapso general del sistema financiero internacional, con consecuencias apocalípticas para la economía mundial y norte-americana.

Aún así, tuvo que sacar US$ 20 mil millones del fondo del Tesoro de los EEUU (*Federal Reserve*). El resto fue recaudado por el FMI (US$ 8 mil millones), los restantes US$ 22 mil millones fueron aportados por Japón, Canadá y los principales países de Europa Occidental. Fue la mayor operación de salvataje financiero mundial desde el Plan Marshall.

En diciembre de 1994 el "tequilazo" financiero, derribando el peso, evidenció la debilidad y el parasitismo del "crecimiento exportador", llevó a la quiebra a miles de empresas y a la supresión de 800 mil empleos, obligó a un inédito préstamo directo de los EEUU (US$ 50 mil millones) para evitar un descalabro del sistema financiero internacional, lo que provocó una crisis en las relaciones poder ejecutivo-parlamento en la propia metrópolis. La polarización social y política se acentuó con la crisis: de ahí la prisa de Clinton en socorrer a México, dado el carácter prerrevolucionario de la situación en su frontera sur.

La devaluación duplicó el precio de las importaciones de alimentos: en 1996 la penuria mundial de cereales nuevamente duplicó el precio del maíz y el trigo, bases de la alimentación mexicana. El gobierno Zedillo continuó favoreciendo al sector exportador (ya favorecido por la devaluación) en detrimento de los productos de consumo interno (la producción de cereales cayó 20%) lo que motivó un nuevo éxodo rural hacia las ciudades y hacia los EEUU.

9. EL FOX Y LAS UVAS

La crisis económica tuvo un efecto devastador. El PIB cayó un 7%, la inflación subió de 7% a 51%. Del total de personas ocupadas en 1996 (35 millones 200 mil) 11,5% no recibían salario, 19,7% menos que el salario mínimo (3 dólares por dia), 29,5% entre uno y dos salarios mínimos, 25,2% entre dos y cinco salarios, y sólo 9,5% más que cinco salarios mínimos, lo que significa que 31% de los trabajadores no recibían el mínimo para cubrir los gastos alimentarios básicos. Los salarios reales se habían reducido 67% entre 1982 y 1993: con la incorporación al NAFTA, sufrieron una nueva caída de 19%, entre 1994 y abril de 1997. El salario mínimo, en pesos de 1994, era de casi 41 pesos diarios en 1982: en 1997 apenas superaba los 11 pesos (una caída de 72% en quince años).

El respiro ganado no frenó la crisis política interna. En febrero de 1996, el gobierno Zedillo, con la intermediación de la Iglesia, celebró con el EZLN los Acuerdos de San Andrés de Larrainzar sobre los derechos indígenas en Chiapas. En julio, el EZLN promovió el primer encuentro internacional "contra el neoliberalismo" que inauguraría, en los años sucesivos, una seria de peregrinaciones de la izquierda europea y norteamericana por el sur mexicano, que la izquierda mexicana bautizó sarcásticamente como *zapatours*. Los Acuerdos de San Andrés, sin embargo, quedaron como letra muerta, lo que fue denunciado inclusive por el presidente de la comisión mediadora, la Cocopa (Comisión Parlamentaria de Concordia y Pacificación).

La situación económica se fue deteriorando: entre 1982 y 2000, la deuda externa de México casi se triplicó (pasando de 57 mil millones de dólares a 157 mil millones) mientras el país pagó a sus acreedores 8 veces lo que debía (según el Banco Mundial, México reembolsó 478 mil millones de dólares). El pago de la deuda externa mexicana representa una enorme transferencia de ingresos de los trabajadores y de los pequeños y medianos productores hacia los capitalistas poseedores de títulos de la deuda externa.

Entre los acreedores se encuentran capitalistas mexicanos que poseen una parte de los créditos gracias a los capitales que han colocado en los mercados financieros extranjeros. Después de la crisis de 1994-1995, las transferencias de México hacia el exterior han sido enormes, peores que en los años de 1982-1986. Según el Banco Mundial, entre 1986 y 2000, México recibió 140 mil millones de dólares en préstamos y reembolsó 210 mil millones, es decir que transfirió hacia sus acreedores 70 mil millones de dólares más de lo que recibió. El reembolso de la deuda pública externa se hizo en detrimento de los gastos sociales (educación, salud, vivienda) y de la inversión pública: el gobierno dedicaba el 30% del presupuesto público al pago de la deuda externa.

Pese a eso, la crisis del régimen del PRI llevó a buena parte de la izquierda a referirse a una "revolución democrática". Era, en verdad, un cuadro de descomposición político-gangsteril del régimen -después del asesinato del candidato presidencial del PRI Colosio, se produjo el del secretario general del partido, Ruiz Massieu– una descomposición del *priato*, a la que un vasto arco político, englobando desde los representantes del imperialismo hasta, curiosamente, algunos "trotskistas", comenzó a llamar de "revolución democrática". En junio de 1997, en las primeras elecciones para gobernador del Distrito Federal, el PRD venció con Cuauhtémoc Cárdenas, con 48% de los votos: en las legislativas, el PRI perdió la mayoría de la Cámara de Diputados (pasando de 300 a 234 escaños), con el derechista PAN yendo de 119 a 124 y, sobre todo, el PRD de 64 a 126, además de 8 nuevos diputados "verdes".

Una de las estrellas intelectuales del país declaró que "México está viviendo un momento de euforia, tan feliz como el de la entrada en la capital de Francisco Madero, en 1911, después de la caída de Porfirio Díaz y 30 años de dictadura. El PRI perdió la

jefatura del gobierno en el DF (el mayor centro urbano del mundo), la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y dos estados más, que se suman a los cuatro ya gobernados por el PAN. Más de la mitad del país es gobernada, actualmente, por la oposición".[87]

El verdadero contenido de la "democratización" fue dado por "la ruptura de los acuerdos de San Andrés (con el EZLN), la formación de los escuadrones de la muerte, la militarización de Chiapas, una estrategia de contra-insurgencia que provocó más de doscientos asesinatos en dos años".[88] El gobierno de Zedillo, asesorado directamente por el imperialismo, combinó la "negociación" con las provocaciones, que culminaron en varias masacres, explorando a fondo las debilidades políticas de la dirección zapatista. Mientras el gobierno de Zedillo dio vía libre para la militarización de la región, el accionar del Ejército cobró características independientes (preanunciando la militarización general del país), y el imperialismo intervino directamente a través del trabajo de zapa realizado en la región por las sectas protestantes.

En diciembre de 1997, todo culminó con la masacre de Acteal, cuando decenas de campesinos fueron muertos, las bases zapatistas fueron cercadas, y millares de habitantes de Chiapas fueron obligados a migrar para evitar el hambre y la persecución. Al mismo tiempo, sin embargo, el levantamiento del sur cobró características nacionales, con la reactivación de viejos grupos guerrilleros (por ejemplo, el EPR, en el estado de Guerrero), la formación de un "zapatismo civil" (FZLN) en las ciudades, y el surgimiento de corrientes sindicales vinculadas al zapatismo. Comenzó inclusive un trabajo de organización de los trabajadores mexicanos en el sur de los EEUU, donde éstos no sólo realizan tareas agrarias descalificadas, sino que son también un porcentaje creciente de los trabajadores urbanos industriales y de servicios de la metrópoli.

En el propio PRD, las elecciones internas se realizaron bajo un intenso fraude, lo que llevó a su anulación. La "revolución democrática" emitió su canto de cisne a finales de 1997, cuando el PAN rompió con el bloque opositor y se alió con el oficialista PRI para aprobar, en el Parlamento, el presupuesto nacional para 1998. Posteriormente, el PAN sería factor decisivo en el blanqueo de la corrupción priista, en especial de los fraudes cometidos en la privatización de 18 bancos en 1991-92 (Fobaproa) evaluados en 100 millones de dólares.[89] El PRD colaboró reprimiendo las luchas obreras en el DF y, principalmente, en la represión de la huelga universitaria de 1999-2000, cuando efectivos federales invadieron brutalmente el *campus* de la UNAM, después de las manifestaciones que habían reunido 200 mil personas en la plaza del Zócalo (detuvieron a 998 estudiantes).

Principalmente, el PAN y la "izquierda moderna" del PRD manifestaron su acuerdo de principios, con divergencias secundarias, con el proceso privatizador llevado adelante por Zedillo (el PRD, en especial, privatizó el suministro de energía eléctrica en el Distrito Federal):[90] el "bloque opositor" de la "revolución democrática" se transformó, en pocos meses, en "bloque oficial" del bonapartismo "neoliberal". La continuidad de las luchas se enfrentó no sólo al priato, sino también a la burocracia perredista, en momentos en que el "charrismo" sindical priista comenzó a hacer agua por todos lados, lo que sucedió en las luchas de los electricistas del SME contra las privatizaciones, que hicieron levantar cabeza al SUTERM en todo el país, luego de 25 años de retrocesos,

[87] FUENTES, Carlos. A morte do medo. *O Estado de S. Paulo*, San Pablo, 13 de julio de 1997.

[88] LEMOINE, Maurice. Nouvelles guérrillas dans le Guerrero mexicain. *Le Monde Diplomatique*, París, noviembre 1998.

[89] BALP, José. Anatomía del megafraude. *Umbral* nº 12, México, marzo de 1999.

[90] ROCHLIN, James F. *Redefining Mexican "Security"*. Society, state, and region under NAFTA. Boulder, Lynne Riener Publishers, 1997.

bajo el control burocrático de la CTM (central sindical mexicana). Petroleros, azúcar, telefónicos, también iniciaron importantes procesos de lucha. El descontento comenzó a crecer en los sindicatos "independientes", controlados por el PRD.

En el cuadro del "gran acuerdo" tácito PRI-PAN-PRD, se aisló cada vez más la lucha de Chiapas, que pasó a tener más vigencia como centro de "turismo revolucionario" internacional. Los representantes del gobierno pusieron el desarme del EZLN como condición para la negociación, lo que fue recusado por los zapatistas, que reivindicaron la salida de las tropas de los territorios ocupados con 40 mil soldados. Con la presión del ejército, los zapatistas perdieron sus principales bases de operación (Guadalupe Tepeyac, la cañada Patihuitz, San Miguel, La Garrucha, El Prado, La Sultana). Refugiados en las montañas, se contactaban con sus bases de apoyo a través de La Realidad, nueva puerta de entrada del "territorio zapatista", con algunas comunidades de Los Altos de Chiapas. De allí salían las caravanas de la Cruz Roja que escoltaban a los comandantes del EZLN para las negociaciones.

No obstante, en las elecciones presidenciales del 2000, el "subcomandante Marcos" y el EZLN insistieron en su apoyo a Cárdenas y al PRD, el que declaró que daría el Ministerio de Asuntos Indígenas para "Marcos", con máscara pasamontañas incluida. El PRD acabó obteniendo 16% de los votos, un desastre para quien había vencido realmente las elecciones de 1988, una debacle que se mide por el hecho de que fue del propio PRD que surgieron presiones para que Cárdenas desistiese de su candidatura a favor del "candidato Coca Cola", Vicente Fox, del PAN.

En el sexto informe de gobierno de Zedillo, el diputado Batres lo acusó de pretender ser un “Robin Hood al revés, toda vez que expropia a los pobres para darle a los ricos…”. Los gobiernos neoliberales, afirmó, han actuado de manera “desalmada, nada los conmueve y sus grandes obras son sus negocios, que en unos cuantos años permitieron enriquecer a unos cuantos”.[91] Pero lo insólito fue que las mismas fracciones parlamentarias del PRI abandonaron la vieja costumbre de salir en defensa de su presidente, para criticarlo, reconociendo yerros e ineficiencias de su gestión.

Se mencionó la disfuncionalidad que alcanzó la burocracia del aparato administrativo, con altos niveles de corrupción e ineficiencia, con una estructura autoritaria y vertical que sólo respondía a las decisiones presidencialistas pero mostraba su incapacidad para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. A este tipo de organización de la administración pública, “obedece la generación de muchas obras inútiles y un enorme dispendio. Y, no pocas veces, un sector construye lo que otro destruye. Los mexicanos sólo sabemos de los ‘elefantes blancos’ por la danza de millones de pesos. Los beneficios tangibles son nulos o pobres cuando los hay”.[92]

Fox obtuvo la victoria con más del 43% de los votos -el PRI perdió su primera elección presidencial en un siglo- siendo inmediatamente felicitado por Bill Clinton, y por intelectuales mexicanos como Enrique Krauze, quien juró ante el *Time Magazine* que "México finalmente se tornó una democracia". El PRI perdió la Presidencia, el gobierno de Morelos (que, junto a Guanajuato, mantenido por el PAN, fueron los únicos estados en disputa), la mayoría en ambas cámaras, y no consiguió representantes en las Delegaciones Políticas, pasando a ser minoría en el Parlamento del Distrito Federal.

El PRI perdió la presidencia, el gobierno de Morelos (que, junto a Guanajuato, mantenido por el PAN, fueron los únicos estados en disputa), la mayoría en ambas

[91] RODRÍGUEZ LÓPEZ, Leticia. PRD: falló Zedillo. *El Financiero*, México, 2 de septiembre de 2000.

[92] BARBOZA RODRÍGUEZ, Porfirio. Innovar la administración pública. *El Financiero*, México, 15 de septiembre de 2000.

cámaras, y no consiguó representantes en la Delegaciones Políticas, pasando a ser una minoría ínfima en el Parlamento del Distrito Federal. El PRI conservó sin embargo el gobierno de 20 estados y de 1832 de los 2419 municipios del país. Sin embargo, se decía que con el cambio de partido en el poder terminaba la era del PRI, con 22 presidentes del mismo partido que cubren un período de 71 años, miembros de la "familia revolucionaria", con un estilo de gobernar patrimonialista, donde investidura y bienes públicos atribuibles al cargo público se consideraban propiedad personal.

El programa de Fox venía, en realidad, a completar el programa del ex presidente Salinas de Gortari, de la "segunda generación de reformas", después de la desregulación financiera y comercial y las grandes privatizaciones: privatizar la educación, desmantelar la seguridad social, imponer la regresividad del sistema impositivo y la flexibilización laboral (reformando la Ley Federal del Trabajo), destruir los contratos colectivos, y debilitar el sindicalismo controlado por el PRI, para promover el ataque a todas las conquistas sociales e incrementar la superexplotación (aumentando la competitividad mexicana en el "mercado global"). Reformas al artículo tercero de la Constitución para introducir la "libertad de la enseñanza" y con ello la posibilidad de dar la oportunidad a la educación religiosa en las escuelas. En suma, la profundización del "modelo del libre mercado", religión incluida. La descomposición del sistema político mexicano fue la principal causa de que con Fox surgiera un nuevo populismo "anti-partidos".

Pues resultó paradójico que en un país donde más del 60% de la población era pobre, ganase las elecciones un partido de derecha que postulaba la profundización del "modelo neoliberal", responsable del aumento de la pobreza. La llegada de Fox al poder, según Fazio, "coincide con la consolidación de un proceso de concentración y oligopolización económica y centralización política en la toma de decisiones, y expresa que las formas anteriores de representación clientelar y corporativa fueron desplazadas por formas de representación directa que se habían venido manifestando de manera larvada. Asistimos a un proceso de regresión neo-oligárquica, en el sentido de que los grupos propietarios ejercerán directamente la dominación - aunque lo hagan por medio del Estado -, remplazando a una parte de la alta burocracia gubernamental y eliminando a la antigua mediación conciliatoria representada por la 'clase política' priísta".[93]

La llegada de Fox, según Krauze, fue el resultado de "una búsqueda directa, inmediata, empresarial al poder. Vinos de nueva mercadotecnia en viejos odres de caudillismo…un caudillismo plebiscitario con ribetes mesiánicos, muy peligroso en un país al que le costó mucho la separación entre la iglesia y el Estado". Fox era el primer presidente empresario surgido de las elites locales que se revelaban contra el centro del país, representante de la opción de la "corriente electoralista" de las elites empresariales dentro del PAN, especialmente la denominada de la fracción del Norte o "Grupo Monterrey", con el que tenía vínculos estrechos y que se expresaba en la corriente pragmática o "neopanismo", opuesta a la doctrina y a la ortodoxia tradicionales.

Según el ex líder y dos veces candidato panista, Pablo Emilio Madero, "el eventual triunfo de Vicente Fox Quezada en la elección presidencial coronaría el acuerdo de un grupo de empresarios que en 1982 decidieron, en una reunión en Cd. Juárez, Chihuachua, infiltrar y controlar al Partido Acción Nacional (PAN) para obtener intereses particulares. Un virtual ascenso del neopanismo al poder constituye un grave riesgo para México porque imperaría el principio pragmático del interés personal y no

[93] FAZIO, Carlos. En gestación, un nuevo poder: la meta, el Estado empresarial. *La Jornada*, México, 26 de agosto de 2000.

del bien común, y una vez como gobierno los vencería la tentación del autoritarismo para eliminar a opositores, lo que generaría desaliento nacional ”.[94]

Cuauhtémoc Cárdenas, candidato presidencial del PRD, llamó "delincuente electoral" a Fox. La respuesta de Jorge Castañeda, asesor de Fox después de haberlo sido de Cárdenas en las elecciones presidenciales de 1994, fue la siguiente: "Yo le conseguí dinero a Cuauhtémoc de la Fundación Novib de Holanda en 1992 y 1993. Yo llevé a Cárdenas con Danielle Mitterrand a la Fundación France Liberté para recaudar fondos. Pedí dinero para Cárdenas en seis fundaciones europeas: Limade, de Bélgica; Novib, de Holanda; France Liberté, de Francia; Konrad Adenauer, Neumann y Ebert, de Alemania".[95] Esos aportes, junto con Castañeda, fueron a parar a la campaña de Fox.

El arribo de los empresarios al Estado mexicano significaba el desplazamiento de los políticos del poder formal. En otras palabras, lo que cambia es el poder formal, porque el poder real permanece inalterable. El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios dejaba de ser un grupo de presión ante el poder del Estado, para convertirse en el interlocutor de los empresarios frente al gobierno federal, y para determinar las decisiones económicas y políticas nacionales. Es decir, la toma directa del poder político por los grupos conservadores que detentaban el poder económico. El nuevo “Estado de empresarios” se planteaba administrar eficientemente el orden existente para garantizar al capital transnacional las mejores condiciones para sus inversiones en México. El presidente intercambiaba la palabra cliente por la de ciudadano. A los indios, irrespetuosamente, Fox les ofrecía “*vocho*, *changarro* y tele” como respuesta a siglos de rebeliones.

El auge económico del país en que recibía estaba “sostenido por factores coyunturales escondidos en las cuentas macroeconómicas como el elevado precio del petróleo, la entrada de divisas que ha abaratado el dólar, y la dinámica de la economía de Estados Unidos, puede cambiar su tendencia y hacer pagar los costos a toda la sociedad mexicana cuando esté en curso el gobierno de Fox. Entre ellos estaría un ajuste del tipo de cambio, aumento en la inflación, mayor desequilibrio externo e incapacidad para resolver el tema de la pobreza”.[96]

Vicente Fox pudo derrotar a la maquinaria política del PRI, herida pero todavía formidable, gracias a los enormes recursos políticos y financieros aportados por el gran capital norteamericano y sus asociados del norte de México. Fox se apropió de la demagogia de centroizquierda y ganó para su campaña a algunos de sus más promocionados intelectuales, como Jorge Castañeda, ex asesor estrella del PRD, aunque la colaboración entre ambos venía de lejos.

El propio Castañeda informó que "Fox participó en la serie de encuentros convocados desde 1996 por Roberto Mangabeira Unger y el que suscribe, a los que asistieron una treintena de políticos y académicos latinoamericanos de centro y de izquierda. La adopción por la campaña de Fox de posiciones, definiciones y ubicaciones coincidentes con las tesis centrales de los documentos programáticos redactados en esas reuniones bastaría para pensar que una victoria electoral de Fox sería altamente benéfica para México".[97] Estos respaldos le permitieron a Fox reclutar ampliamente entre la

---

[94] RUIZ MEZA, Pablo. De ganar Fox, caería en la tentación del autoritarismo. *El Financiero*, México, 26 de junio de 2000.

[95] *El País*, Madrid, 26 de junio de 2000.

[96] CASTELLANOS Antonio, GONZÁLEZ Roberto y LOMAS Emilio. Factores coyunturales sostienen el auge económico. *La Jornada*, México, 4 de septiembre de 2000.

[97] CASTAÑEDA, Jorge (entrevista). *El País*, Madrid, 31 de mayo de 2000.

intelectualidad centroizquierdista, en la pequeño-burguesía acomodada, entre los tradicionales votantes del PRD e, incluso, en su propio aparato (Vicente Muñoz Ledo, uno de los principales dirigentes del PRD, respaldó públicamente la candidatura de Fox).

“El hábil empalme entre el centroizquierda y la derecha se manifestó en la capital, donde el electorado votó al PRD para la gobernación y al PAN de Fox para la presidencia. Pero es en Chiapas donde se percibe todo el Alcance de esta trama. En ese Estado convulsivo, se formó una alianza de ocho partidos, con el derechista PAN y el centroizquierdista PRD, para participar en las elecciones a gobernador. El candidato, Carlos Salazar, le sumó al rejunte su calidad de dirigente del PRI y su obediencia protestante”.[98]

Y se advertía que existía una fuerte preocupación porque “se han presentado ciertos signos de amenaza y peligro en los gobiernos estatales de extracción panista, como en los casos de Jalisco, Chihuahua y Nuevo León. Los gobiernos panistas en estos Estados han dejado antecedentes negativos de represión a organizaciones civiles críticas relacionadas con la defensa de los derechos humanos, laborales, políticos y ciudadanos, y una falta de respuesta institucional ante situaciones de violencia cuando se buscaban compromisos. Esta huella hace suponer la existencia de un perfil amenazador del gobierno de Fox”.[99]

El PRD retrocedió significativamente como consecuencia de la captura, por parte del derechista Fox, de sus votantes, de sus aliados e incluso de una parte de su militancia. La derrota electoral sumió al centroizquierdista PRD en una crisis aguda. En unos pocos días, renunciaron su secretario general y cinco miembros de su Comité Ejecutivo. Hasta el propio liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, fue cuestionado. Ni la victoria derechista ni la crisis del PRD deberían extrañar; en primer lugar porque fue la propia centroizquierda la que le dio a Fox aire de demócrata, y en segundo lugar porque los *sponsors* financieros que en el pasado respaldaron al PRD esta vez se inclinaron por la salida derechista.[100]

---

[98] ALTAMIRA, Jorge. Un Fox en el gallinero. *Prensa Obrera*, Buenos Aires, 27 de julio de 2000.

[99] VARGAS-HERNÁNDEZ, José G. La transición económica y política del estado mexicano en el umbral del siglo XXI: del estado empresario al 'estado de empresarios'. *Colección de Papers Instituto Internacional de Gobernabilidad*. Paper Nº 37. *http://www.iigov.org*.

[100] Sobre la victoria del PAN y Fox, y la nueva etapa política mexicana, ver: ABASCAL Y MACÍAS, Rafael. Reingeniería del gobierno foxista. *El Financiero,* México, 30 de septiembre de 2000; BECERRIL, Isabel. Gobierno foxista, amigable, pero mantendremos la distancia: Coparmex. *El Financiero*, México, 15 de septiembre de 2000; CHÁVEZ, Víctor. El gabinete de Vicente Fox. *El Financiero*, México, 30 de septiembrede 2000; FAZIO, Carlos. Fox, el primer presidente empresario. *La Jornada*, México, 28 de agostode 2000; GRIER, Robin M. Political cycles in nontraditional settings: theory and evidence from the case of Mexico. *The Journal of Law and Economics*. Washington, Volume XLIII (1), abril de 2000; IGLESIAS, Nydia. Fox abroad: visions of the future. *Review of the Economic Situation of Mexico*. Nueva York, Volume LXXVI, n° 897, septiembre de 2000; INCLÁN, Isabel. Política y economía: México no es Coca-Cola, pero la experiencia empresarial ayuda. *El Financiero*, México, 21 de agosto de 2000; JIMÉNEZ LAZCANO, Mauro. Fox: una nueva forma de hacer las cosas. *Macroeconomía* n° 86, México, 15 de septiembre de 2000; LOMAS, Emilio. La verdadera herencia de Zedillo. *La Jornada*, México, 4 de septiembre de 2000; MUÑOZ, Alma E. Fox, tercer momento salinista de la economía neoliberal. *La Jornada*, México, 13 de Julio de 2000; ORTÍZ PINCHETTI, José Agustín. Informe final. *La Jornada*, México, 3 de septiembre de 2000; REYES HEROLES, Federico. Adiós a los dioses. *Reforma*, México,25 de julio de 2000; SOTO, Luis. Agenda confidencial. *El Financiero*, México, 15 de septiembre de 2000; TOURAINE, Alain. La prioridad fue la ruptura del viejo sistema. *La Nación*, México, 16 de julio de 2000.

Las elecciones confirmaron que el “partido de la izquierda moderna” que proclamaba ser el PRD no era más que una cáscara vacía: parecido cada vez más al PRI de antaño, en los Estados que gobierna, como Nayarit, Zacatecas, Tlaxcala, el PRD debió su victoria a candidatos *priistas* disidentes y al aparato local del PRI del cual éstos mantuvieron el control (el PRD fue, originalmente, una escisión del PRI). En muchas otras regiones, no es más que una etiqueta que pueden utilizar los grupos más diversos. En Chiapas, por ejemplo, en las elecciones municipales de 1998, una disidente del PAN, salida de la más reaccionaria elite local, y que arrastraba una sólida reputación de racista, se presentó como candidata del PRD a la intendencia de San Cristobal.

¿Cómo pensó el PRD remontar la crisis? Ofreciéndose como aliado parlamentario del derechista Fox. Después de haberlo calificado como "fascista", Cárdenas declaró que "no apostamos al fracaso del gobierno" y planteó "una negociación madura" con Fox. Comentando la noticia del "ablandamiento" de la posición del PRD frente al nuevo gobierno mexicano, un vocero del capital financiero sostuvo que "esta rama de olivo que le ofrece el partido centroizquierdista a Fox, ofreciéndole negociar reformas políticas vitales, será una considerable ayuda para Fox",[101] que no había logrado obtener una mayoría parlamentaria. Las "reformas vitales" de Fox eran la privatización del petróleo y la unidad monetaria con los Estados Unidos.

El ataque a todas las conquistas sociales para incrementar la superexplotación (aumentando la competitividad mexicana en el “mercado global”) era tan vital para Fox como la privatización, ya proyectada, de la electricidad y el petróleo, para pagar las monumentales deudas externa e interna (ésta había más que duplicado en los tres años precedentes a la elección de Fox, 1997-2000), y los intereses del préstamo de 1994, que llevaron al extraordinario episodio de que el Citibank se recusase a recibir el cancelamiento anticipado de su crédito de dos mil quinientos millones de dólares, pues le conviene mucho más recibirlo en cuotas con intereses. Fox planteó transformar la asociación económica con los EEUU y Canadá en un equivalente a la Unión Europea, lo que significa que la política monetaria mexicana sería decidida por la banca central norteamericana. Esta virtual dolarización de México estará acompañada por la privatización de la energía y del petróleo, y por la completa flexibilización del régimen laboral.

La expectativa de Fox era que una masiva incorporación de capital norteamericano, consecuencia de la armonización del régimen legal y monetario con el tutor norteño, retenga la fuerza de trabajo y limite la inmigración ilegal a los EEUU. A ello se refirió cuando dijo que su propósito era lograr un acuerdo de libre movilidad de las personas entre los países del Acuerdo de Comercio de América del Norte. El mayor motivo de regocijo para los yanquis fue que se hubiese logrado dar una salida de derecha de este alcance a la crisis del PRI, en el marco de las elecciones regulares. Fox declaró que “en la reforma del Estado, hay que evitar los extremismos ficticios”. Esto significa que quedaría en el papel la promesa básica de Fox de eliminar la estratosférica evasión impositiva y la superlativa corrupción, la “mordida”, que según caculos modestos cuesta a los cofres públicos 9,5% del PIB, o 53 mil millones de dólares anuales.

Fox ordenó el retiro de 1.500 soldados del cerco al EZLN, prometiendo un "acuerdo de paz" (los solados se limitaron a volver a sus barracas, mientras otros 60 mil permanecieron en sus posiciones). El EZLN puso, como condiciones para la paz, el retiro del ejército y la aprobación de la Ley de Derechos y Cultura Indígena, que era apenas uno de los seis puntos de la mesa de debates con el gobierno del PRI. Vicente

---

[101] *Financial Times*, Londres, 25 de julio de 2000.

Fox saludó la "nueva actitud, nuevo modo de pensar, del EZLN". En febrero del 2001 se inició la marcha pacífica del zapatismo de Chiapas a México DF, que culminaría en un gran acto público, el 11 de marzo. Luego, se volvió a la situación anterior. Lo que pretendía Fox era un acuerdo con intervención directa del gran capital (el encargado de formular el "plan económico" para Chiapas fue Alfonso Romo, amigo de Fox, uno de los mayores capitalistas mexicanos, y una de las más grandes fortunas del mundo), para valorizar los inmensos recursos naturales de la Selva Lacandona: 25% del agua superficial del país (45% del suministro hidroeléctrico), reservas petrolíferas e importantes yacimientos de uranio.

La "transición" foxista puso a prueba la teoría de la revolución mexicana, y evidenció las limitaciones de la concepción que ha sido común a todas las fracciones de la izquierda en general, sintetizada en la formulación de *La Revolución Interrumpida*, de Adolfo Gilly: "La revolución socialista nace de esta revolución (la de 1910-17), viene dentro de ella e interpenetrada con ella, es su continuación y su culminación. La revolución mexicana fue comenzada e interrumpida. Hay que insistir: ¡Completar la revolución mexicana! ...cuyo nacionalismo se orienta hacia las ideas socialistas -como ya sucedió en el cardenismo- y que tiene en las empresas estatizadas una base material que la sostiene y la genera incesantemente: es toda la población trabajadora de México la que comparte, de uno u otro modo, la idea verdaderamente nacional de que no hay que hacer una nueva revolución, sino continuar y completar la que fue interrumpida al final del período de Cárdenas".

La historia ha demostrado que para superar las limitaciones de la revolución de Villa y Zapata es necesario una nueva revolución, con otra clase a su cabeza, con otra dirección. La izquierda mexicana ha sido tributaria de la idea de que la revolución socialista sería la evolución natural del nacionalismo radical - se ha derechizado con la evolución de éste - al que reivindicó como propio y reivindica hasta en la denominación de sus organizaciones políticas.[102] El cardenismo, en sus diversos avatares, demostró

[102] La naturaleza moderna de las rebeliones rurales la confirma la revolución campesina mexicana de 1910. México había avanzado más en términos de integración en los mercados mundiales, de penetración por el capital extranjero y de formación y difusión de la ideología liberal, en el período del porfiriato. Las formas brutales y salvajes de tortura y control del trabajo, retratadas gráficamente en las novelas de B. Traven, no eran parte de un orden dinástico arcaico, sino el medio para maximizar el beneficio de los modernos capitalistas de Europa, América del Norte y Ciudad de México. La trayectoria de la revolución mexicana resalta las tremendas potencialidades revolucionarias del campesinado y su debilidad estratégica, particularmente en relación con la cuestión del poder del Estado. Aunque el campesinado formó la espina dorsal de todos los ejércitos revolucionarios, sus intereses económicos básicos sólo hallaron expresión en algunos ejércitos regionales, en particular el zapatista. Aunque los ejércitos campesinos tuvieron éxito en el derrocamiento del poder establecido, recurrieron constantemente a "ejercer presión" sobre el próximo régimen político basado urbano con el fin de alcanzar pactos políticos. El Estado se convirtió en un lugar de "mediación" entre las demandas de la burguesía y las del campesinado, no un recurso estratégico que hubiera de configurarse de nuevo y transformarse al servicio de una economía política que reflejase una nueva economía basada en el campesino independiente. En los momentos álgidos de la movilización revolucionaria campesina, el Estado burgués respondió con concesiones, legislación radical y promesas. Cuando las fuerzas sociales burguesas y el ejército consiguieron reagruparse y se debilitó el campesinado, el Estado procedió a la reversión de las reformas o a su no- ejecución. A lo largo de todo el siglo XX, fue característico el fenómeno consistente en movimientos colectivos campesinos movilizados contra el Estado, que desplazando a los detentores del poder obtenían concesiones a través de la presión sobre el Estado, sin por ello cambiar la configuración de clase de éste. El campesinado, por su carácter de clase contradictorio (mitad propietario, mitad proletario), no tuvo ni pudo tener un programa propio e independiente para tomar el poder: los *kulaks* (campesinos ricos) arrastraban al campesinado a una alianza con la burguesía, mientras que los campesinos pobres, se inclinaban hacia al proletariado. Sólo el proletariado fue capaz de aglutinar detrás suyo a todas las clases oprimidas y cumplir así con las tareas de la revolución. Los ejemplos de Cuba y

que el nacionalismo de base pequeño burguesa evoluciona hacia la conciliación con el imperialismo, actualmente con una base democratizante. La crítica radical de esa concepción debería ser una de las bases teóricas para la formulación de un programa transitorio hacia la revolución obrera y campesina, latinoamericana e internacional.

En 2001, el costo financiero de la deuda pública interna y del Fobaproa-Ipab representó 131 mil millones de pesos mexicanos (14 mil millones de dólares). El total de la deuda pública interna y externa superó los 150 mil millones de dólares (mitad interna, mitad externa). En dólares, el costo de esa deuda representó en 2001 alrededor de 43 mil millones de dólares: una hemorragia de recursos hacia los capitalistas nacionales y extranjeros acreedores. El tesoro público dedicaba 2,5 veces más dinero al pago de la deuda que a la educación pública en un país en el que hay 32,5 millones de mexicanos analfabetos, y más de la mitad de la población vive bajo la línea de pobreza.

La venta de empresas públicas implicó una pérdida de soberanía nacional y el dinero de las privatizaciones sirvió para asegurar el pago de la deuda pública interna y externa. En el 2001, el banco estadounidense Citigroup se apoderó de Banamex, y en el 2002 el Banco Bilbao Vizcaya ganó el control completo sobre Bancomer. La situación económica en México se agravó: pérdida de 500.000 empleos desde que empezó la nueva crisis económica en EEUU (destino de 90 % de las exportaciones mexicanas), caída del Producto Interno Bruto en 2001.

El precio del petróleo, como el de otras materias primas, cayó, lo que redujo los ingresos fiscales del gobierno con los que se pagaba la deuda externa. Las presiones contra el peso aumentaron nuevamente en el 2002; las salidas de capitales se aceleraron. Y las maquilas, las cadenas de montaje de capital extranjero, que crearon más de un millón de empleos, constituyendo el segundo generador de divisas después del petróleo, perdieron competitividad. La razón es simple: los obreros mexicanos ganan tres dólares y medio por hora, y los chinos o indios, cuarenta centavos.[103]

Pero en México, supuestamente beneficiado por el NAFTA, el peso mexicano sufrió un nuevo ataque especulativo que lo llevó a su nivel más bajo desde el ascenso de Vicente Fox al gobierno, en junio del 2000. La principal causa de preocupación, reconocIÓ un diario financiero, son "sus estrechos lazos con la economía norteamericana". México no logró superar el devastador golpe provocado por la recesión en los EEUU. Cuando América Latina se hundía, el "ancla" que debía "salvar" a México -su integración comercial con EEUU- lo empujaba al abismo.

México lo confirman con exactitud. En el primer caso, la dirección revolucionaria que se terminó imponiendo no sólo consumó la revolución nacional sino que, para defenderla, se expandió al plano social, y terminó consumando una revolución socialista. En México, por el contrario, la dirección burguesa, que finalmente preponderó, liquidó la revolución.

[103] *El País*, Madrid, 23 de junio del 2002.

10. LA INSURGENCIA DE LOS ANDES: DE LA "GUERRA DEL AGUA" AL *AREQUIPAZO*

También en Perú, la "democracia" norteamericana se vio obligada a actuar bajo el fuego de los acontecimientos e incluso a rehacer su política sobre la marcha. Las grandes movilizaciones populares desatadas por el fraude montado por Fujimori en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, permitieron que el imperialismo forzara la realización de una segunda vuelta. Pero este operativo fracasó, por la intransigencia de la camarilla fujimorista (que recurrió en una escala aun mayor a los métodos del fraude) y por la debilidad política del propio candidato opositor Alejandro Toledo, que no se presentó al segundo turno. Como reconoció en ese momento un funcionario del Departamento de Estado norteamericano, Toledo le entregó la elección a Fujimori..

Toledo, un ex funcionario del Banco Mundial, pudo competir con el enorme aparato fujimorista gracias a los fondos aportados por los grandes capitalistas norteamericanos, coordinados por Baruch Ivcher, propietario de canales de TV intervenidos por Fujimori, y por Elliot Abrams, secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos en la época de Reagan y figura del *establishment* imperialista. Precisamente, uno de los puntos principales del programa de Toledo, tras la muletilla de la libertad de prensa, era "la devolución de los canales a sus legítimos dueños".

Como Fox en México, Toledo fue la figura elegida por la diplomacia norteamericana para darle una salida democratizante de derecha a la crisis del régimen de Fujimori. A los ojos de los voceros del gran capital, como declararon los representantes del Banco Santander Central Hispano, en Lima, "lo ocurrido en los últimos cuatro años (es que) el gobierno no puede continuar a fondo con su programa de reformas de mercado". Una expresión del agotamiento del ciclo privatista era el retroceso de las inversiones externas, que cayeron abruptamente de 499 millones de dólares en los primeros tres meses de 1999 a sólo 62 millones en el mismo período de 2000. El papel que el imperialismo reservaba a Toledo era reabrir este ciclo privatizador. Pero la manipulación política de las masas resultaba mucho más dificultosa y peligrosa para el imperialismo porque en Perú, a diferencia de México, las masas estaban en la calle.

Aunque en las primeras horas después de la segunda vuelta la diplomacia norteamericana declaró "inválido" el resultado electoral, rápidamente dio marcha atrás y reconoció el triunfo de Fujimori. La Organización de Estados Americanos (OEA) planteó entonces un cronograma de democratización aceptado tanto por los oficialistas como por los opositores. Así, Fujimori asumió su tercer mandato con el reconocimiento pleno del imperialismo norteamericano y del conjunto de los regímenes democratizantes latinoamericanos. El rápido giro de la diplomacia norteamericana hacia el reconocimiento de Fujimori fue, también, una evidencia de sus propias divergencias, porque para el Pentágono, la CIA y la DEA, Fujimori debía ser respaldado por su papel en "la guerra contra la subversión y el narcotráfico".

Pero el cronograma de democratización de la OEA entró rápidamente en crisis. La camarilla fujimorista se negó a desprenderse del jefe del Servicio de Inteligencia, Vladimiro Montesinos, sindicado por la oposición como el verdadero cerebro del régimen,[104] lo que llevaría en breve al colapso de su gobierno, y a la fuga de Fujimori

[104] En una pintoresca descripción del personaje, Germán Castro Caicedo así lo describió: "Cuando el dictador peruano Juan Velasco Alvarado resolvió hacerle la guerra a Pinochet, Montesinos era oficial del ejército y cargaba el maletín del general que determinó la compra de un inmenso arsenal a la Unión Soviética. Pero la información de lo que iba adquiriendo el Perú llegaba primero a la embajada de Estados Unidos que al Consejo de Ministros. Tras la caída del dictador, Montesinos falsificó un permiso del ejército y se escapó a Washington, invitado por el gobierno de Estados Unidos. El agregado militar

del país, como un vulgar criminal.. La izquierda democratizante peruana, a su vez, desapareció políticamente después de haberse alineado con Toledo en la segunda vuelta.

En Bolivia, en los años 1980, la hoja y la pasta de coca pasaron a ser el principal producto de exportación, convertida en un cultivo de gran escala que por primera vez vinculó los campesinos bolivianos al mercado mundial. Las tierras dedicadas al cultivo de coca aumentaron 10 veces de 1977 a 1987 y la producción aumentó de 1.800 a 50.000 toneladas. A fines de la década, docenas de miles de trabajadores, la mayoría ex mineros sin trabajo después del colapso de la producción de estaño, inundaban las regiones cocaleras para la cosecha y la producción de la pasta. A comienzos de 1990, Bolivia era el segundo productor de coca del mundo, con una exportación de $1,6 billones al año y el 15% del mercado norteamericano. Una de cada cinco personas trabajaba en la coca.

Washington, con el pretexto de la "guerra contra la droga", comenzó sus intervenciones en la región andina, hasta delinear lo que seria llamado de *Iniciativa Andina*, equivalente para la región peruano-boliviana del Plan Colombia. La verdad es que el propio imperialismo convirtió la cocaína en un pilar clave de la economía boliviana. A comienzos de la década de 1980, la CIA abrió nuevas rutas para la importación de cocaína de Colombia a Estados Unidos y, como consecuencia, cocaína barata inundó muchas ciudades. Las ganancias financiaron a la contra nicaragüense, que luchaba contra el gobierno sandinista. El nuevo auge de coca también transformó la región andina, especialmente Perú y Bolivia.

En esa misma época, la crisis económica internacional afectara a Bolivia por su extrema dependencia del mercado mundial de minerales. Entre 1980 y 1985, su producción económica disminuyó un 17%, el desempleo se duplicó y la tasa de inflación alcanzó un 24.000%, la mayor del mundo. El nivel de vida se desplomó. En 1985, el estaño perdió la mitad de su valor: 80% de los 28.000 mineros perdieron su trabajo y el gobierno subió el precio de la canasta básica drásticamente para pagar la deuda externa. La esposa de un minero dijo: "Hasta los ratones se van porque no hay nada de comer. Lo único que tenemos es pan y agua de sultana [una bebida hecha con la cascarilla del café]".

El mercado mundial arruinó la economía de estaño y abrió nuevas oportunidades para la venta de cocaína. Para la clase dominante boliviana, la cocaína era el salvador que les permitiría seguir pagando la deuda. En 1980, el general narcotraficante Luis García Meza tomó las riendas del poder con un golpe militar. Michael Levine, ex agente de la DEA, informó que grandes traficantes de cocaína financiaron el "golpe cocalero" de García Meza. A cambio, les permitió escoger al encargado de la policía nacional y los servicios de inteligencia: el coronel Luis Arce Gómez. Así un pequeño grupo de capitalistas bien conectados se apoderó de la economía cocalera.

Oficialmente, el Departamento de Estado y la DEA condenaron esos sucesos y suspendieron relaciones diplomáticas con el gobierno de García Meza. Pero Levine dice

---

peruano comprobó allí sus entrevistas con Robert Hawkins en el *Office of Current Intelligence* de la CIA. A su regreso fue apresado y expulsado del ejército. La embajada estadounidense en Lima pidió excusas al gobierno peruano por el incidente. Se desplegó el tiempo. Montesinos llegó al poder, inventó la guerra con el Ecuador y se gastó 4.000 millones de dólares en un arsenal de chatarra en Bielorrusia y Ucrania y él se hinchó los bolsillos de dinero. Y cuando pasó el ruido se quedó mirando en un mapa la frontera con Colombia, el río Putumayo, levantó los brazos: "¡Dios!", exclamó en presencia del analista de 'inteligencia' más cercano a él durante los últimos ocho años. Hoy en el Perú muy pocos admiten haber conocido al Doc -como le dicen a Montesinos en el Perú-, y cuando alguien lo hace y accede a contar historias -como lo hizo el analista- dice: "Si usted revela mi nombre seré hombre muerto"". Como otros, Montesinos también fue un hijo renegado de la CIA...

que, tras bastidores, la CIA facilitó su golpe para estabilizar el país con una "bonanza cocalera". También dice que los bancos estadounidenses lo apoyaron aplazando el pago de la deuda. En 1982, la crisis de la dictadura y la resistencia popular terminaron con el gobierno de García Meza; en 1983, bajo el gobierno civil de Lidia Gueiler, Estados Unidos reanudó la ayuda y firmó un acuerdo "para combatir la droga". Todo eso coincidió con un *boom* en la economía cocalera. Estados Unidos redobló su intervención militar en la región con el pretexto de la "guerra contra la droga". En 1983, financió la creación de *Umopar*, una nueva fuerza policial rural, que rápidamente se ganó mala fama por su brutalidad y corrupción. Por primera vez, tropas estadounidenses participaron en una operación en Bolivia para "combatir el narcotráfico", provocando una protesta de 20.000 personas en La Paz.

En 1987, Estados Unidos inició la "Operación Snowcap", con la supuesta meta de cortar en un 50% la producción de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia. Llegaron "boinas verdes" (para entrenar a la policía, ayudar a la DEA y espiar), una unidad especial de la Patrulla Fronteriza y unidades del Servicio de Guardacostas y de los *Navy Seals* (para patrullar los ríos). Se llevaron a cabo operaciones parecidas en Perú. A mediados de la década de 1980 la cantidad de cocaína que llegaba a Estados Unidos aumentó, en gran medida por las operaciones de la CIA. Un estudio de 1992 del parlamento boliviano documentó que durante los años 1980 la CIA estaba muy metida en la producción de cocaína en Huanchaca. "El verdadero rey de la cocaína es Estados Unidos", dijo Roberto Suárez, el principal *narco* del país. "Aquí el traficante es el gobierno, allá es el sistema. Todo mundo está metido, del Departamento de Estado a la CIA".

En 1991, Washington envió 56 asesores militares para entrenar a dos batallones del ejército en una base a 95 kilómetros al norte de Santa Cruz. El 60% de los detenidos en las enormes "operaciones antidroga" fue amenazado, y el 44% fue torturado o golpeado. En una redada murieron siete campesinos, entre ellos una joven de 13 años y un bebé de seis meses de edad. Los campesinos que cultivaban vivían en casuchas de adobe a lo largo de caminos de tierra. Una de cada seis familias tiene agua corriente o inodoro. El promedio de vida es de 50 años. A pesar de que la gran mayoría de la población de Bolivia es campesina, el país tiene que importar comida, que muchos no pueden comprar. El 85% de la población vive debajo del nivel oficial de pobreza. Según estadísticas de la ONU, la mitad de los niños de 2 a 5 años sufren los efectos de la desnutrición. Hay pocas escuelas o servicios médicos.

Una y otra vez, las luchas populares fueron aplastadas con armas *Made in USA*. En diciembre de 1996, la policía y el ejército atacaron a los mineros que tomaron las minas en Amayapampa y Capacirca, en el norte de Potosí. En un sitio de varios días, mataron a 12 e hirieron a docenas. Los mineros peleaban con el nuevo dueño de las minas, la corporación Vistagold de Denver. Pero la situación política dio un giro, que tuvo características revolucionarias, a partir del levantamiento popular del mes de abril de 2000, desencadenado por el aumento de las tarifas del agua en la ciudad de Cochabamba. La rebelión popular se extendió a los cocaleros del Chapare y a otras organizaciones campesinas y de trabajadores de diferentes ciudades.

En abril, la ciudad de Cochabamba fue literalmente ocupada por campesinos, "regantes" y habitantes de las barriadas pobres, organizados por la *Coordinadora del Agua y la Vida*, liderada por Oscar Olivera. El motivo inmediato de la lucha era la oposición a los aumentos abusivos del agua corriente, decretados por la compañía privada Aguas del Tunari (del nombre del río de la región), sucursal de la francesas *Lyonnaise des Eaux*. Rápidamente el reclamo superó la oposición a los aumentos, para exigir la re-nacionalización de la explotación y distribución de ese recurso básico para la vida. Las

masas retomaron los viejos métodos de lucha del campesinado y los mineros bolivianos, consagrados por una experiencia secular, cortes de ruta, bloqueos de caminos. El centro de la ciudad pasó a ser literalmente controlado por la coordinadora. Desde Cochabamba, un esbozo de poder obrero, campesino y popular se ofrecía como ejemplo al país entero. No obstante, la antigua izquierda boliviana poco tuvo que ver con esos acontecimientos.

Ese giro de las masas se profundizó y generalizó con el alzamiento nacional de septiembre, motorizado por las organizaciones campesinas, las cuales en alianza con los colonizadores, los cocaleros del Chapare, los trabajadores del magisterio rural y urbano, los gremiales (cuenta-propistas), los transportistas y otros sectores populares, paralizaron completamente al país durante casi un mes, bloqueando todas las rutas, sitiando todas las grandes ciudades, doblegando los intentos de las fuerzas represivas por quebrar los piquetes y bloqueos y, finalmente, obligando al gobierno a recular, imponiéndole la mayoría de las demandas reivindicativas. Este giro de los explotados aceleró el derrumbe del gobierno de Banzer y la descomposición del régimen político democratizante inaugurado en 1982 con el gobierno de Siles Zuazo.

El alzamiento de los explotados expresó la rebelión ante el hundimiento del país provocado por las políticas entreguistas y hambreadoras de los sucesivos gobiernos patronales, que desde 1985 (con el Decreto 21.060) enajenaron todo el patrimonio público y los recursos naturales a los grandes monopolios internacionales, y llevaron a Bolivia a la mayor crisis social de su historia. Con el gobierno de Banzer, la crisis económica y social llegó a una situación terminal. Banzer apostó a la política de llevar a fondo la erradicación de la coca en la zona del Chapare a cambio de ayuda para promover cultivos alternativos y el perdón de una parte de la deuda externa.

Esa política fracasó por completo. El Estado boliviano quebró, obligado por el FMI y el Banco Mundial a aplicar permanentes ajustes contra los trabajadores. Pero también fracasó la política de producciones alternativas en el Chapare. El valor bruto que arrojaban los cultivos sustitutivos Alcanzaba el 30% de los que dio la hoja al Chapare en su mejor momento, esto a pesar de que en ese momento las plantaciones legales representaban 110 mil hectáreas (en 1989 eran 30.000, o sea menos que las plantaciones de coca). Según denunció Evo Morales, estos cultivos sólo sirvieron para enriquecer a unos cuantos.

A todo esto se sumó la caída del comercio con el Mercosur y el impacto negativo de la caída de los precios mundiales de las materias primas. La exportación de azúcar, que en 1994 Alcanzó a 35 millones de dólares, llegó apenas a 2,5 millones en el 2000. La caída de los precios mundiales de las materias primas hundió a la producción agrícola. En el caso del petróleo, el aumento del precio mundial ha redundado en fabulosos superbeneficios para las petroleras extranjeras; sin embargo, el Estado boliviano recibía un monto muy inferior al que recibía en 1993, cuando la producción era mucho menor debido a la rebaja de las regalías e impuestos.

Se calcula que el Estado venía recibiendo, en promedio, un 50% menos de fondos desde la privatización de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), y este fue uno de los factores que llevaron a las finanzas públicas a un estado de completa insolvencia. Paralelamente, la población estaba pagando un precio interno de los combustibles más elevado que el precio internacional, cuestión que ha sido uno de los detonantes que empujaron a los transportistas a sumarse a la sublevación campesina.

En este sentido, el planteo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), señalando que había que negociar con los EEUU no sólo condonaciones de la deuda sino otro tipo de actividades que permitan generar una economía alternativa, pero orientada tanto al mercado interno como al internacional, mostraba el callejón sin salida

de la burguesía boliviana, completamente sometida a los designios colonizadores del gran capital imperialista, en particular del norteamericano.

La cuestión de la tierra se transformó en el problema más explosivo. Según un estudio del Centro de Estudio para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el 7% de los propietarios rurales, los que tienen acceso a capital y recursos tecnológicos, concentran el 93% de las tierras, especialmente en el oriente. En cambio, el 93% de los propietarios, que son mayoritariamente pequeños campesinos, poseen sólo el 7% de las tierras y las cultivan intensamente. Otro estudio señaló que en las últimas décadas el fraccionamiento de la tierra en el Altiplano habría Alcanzado un ritmo promedio de unos 16.000 minifundios nuevos por año.

Los campesinos pasaron a emigrar en masa a las grandes ciudades, la migración de occidente a oriente se ha convertido en un proceso permanente e irreversible, lo cual se explica porque los bajísimos ingresos obtenidos en la producción agrícola obligan a los campesinos, especialmente a los varones y jóvenes, a migrar a las ciudades, donde se incorporan al sector informal y obtienen un ingreso complementario. Esta migración a las grandes ciudades creó una sobreoferta de mano de obra, usada por los capitalistas para hundir a fondo las condiciones de vida de los trabajadores urbanos, reduciendo sus salarios e imponiendo condiciones de flexibilización (explotación) extremas (trabajo sin contrato, jornadas superiores a 8 horas).[105]

Entre 1985 y 1992 se observó que la agudización de la fragmentación de la propiedad de la tierra promovió una intensificación en el uso de los suelos que desembocó en procesos frecuentes de degradación, erosión y pérdida de fertilidad. El resultado es que las condiciones de vida de las masas rurales son en muchas regiones inferiores a la de los países más pobres de África. Así, el 67% de la población no cuenta con baño, inodoro o letrina; el 40% se abastece de agua de río o acequia; el 74% carece de luz eléctrica; la pobreza afecta a 8 de cada 10 campesinos, y 6 de cada 10 no alcanzan a conseguir siquiera lo necesario para su alimentación.

La masacre de Tolata y Epizana en 1974, precisamente bajo la dictadura militar que presidía Banzer desde agosto de 1971, potenció el surgimiento de un movimiento campesino de orientación katarista, que años después pondría en pie a la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que se transformó, bajo el liderazgo de Felipe Quispe, el *Malku*, líder de los campesinos del Altiplano, en el canal del alzamiento popular. Quispe señaló que la rebelión de abril fue un primer ensayo en la lucha por la captura del poder político por la mayoría indígena de Bolivia, en su propósito de instalar un Estado indígena. La rebelión de septiembre habría sido el segundo ensayo, hacia la toma del poder.

Las insurrecciones populares de abril y septiembre de 2000 proyectaron, en Bolivia, tres tendencias políticas básicas en el movimiento de los explotados: 1) La corriente indigenista, encabezada por el dirigente de la CSUTCB Felipe Quispe Huanca, que se concretó políticamente en la organización del Movimiento Indígena Pachakuti; 2) La corriente "autogestionaria", teniendo como principal ideólogo a Álvaro Garcia Linera,[106] y un papel dirigente en la Coordinadora del Agua de Cochabamba, a través de Oscar Olivera.

---

[105] BLANCO, Daniel. Los dos alzamientos que conmovieron a Bolivia. *En Defensa del Marxismo* n° 29, Buenos Aires, enero de 2001.

[106] Actual vicepresidente de Bolivia, bajo el gobierno de Evo Morales y el MAS, al que Garcia Linera se incorporó en época reciente.

Los cuadros dirigentes de esta corriente y de la anterior estaban unificados anteriormente en el EGTK (Ejército Guerrillero *Tupaj Katari*); 3) Una corriente hacia la independencia clasista, con fuerza en sindicatos fabriles de La Paz y en otros sectores del país, que se expresó de modo incompleto y hasta centrista (sin plantear la cuestión de la dirección revolucionaria, el partido, vital frente a la influencia de las otras corrientes), principalmente en el "bloque sindical anti-neoliberal". La tendencia política de Evo Morales, ASP, con un papel dirigente en la lucha de los cocaleros del Chapare, ya existía con mucha anterioridad a los acontecimientos del año 2000.

La decisión de crear el Movimento Indígena Pachakuti (MIP) llevó a una crisis en el movimiento campesino, en el que un ampliado nacional de campesinos, realizado en Oruro, decidió suspender al Mallku por "grave traición y por violar todo el contenido del Estatuto Orgánico de la CSUTCB". Se aprobó también la suspensión de los dirigentes Germán Flores, Felipe Machaca y Macario Hilaquita. Los delegados de ocho departamentos aprobaron intervenir la sede de la Confederación de La Paz "para evitar el retorno de Mallku".

Como sea, Mallku fue tratado como el mismísimo demonio por la gran prensa durante el conflicto de septiembre, y llamó la atención que el reaccionario cotidiano católico *Presencia* afirmase que "ahora, con el MIP, el esfuerzo tiene su origen en las bases, en las masas propiamente, de abajo hacia arriba. Bien orientado, despojándose de sectarismo y exclusiones, de elementos míticos e ilusorios, el movimiento podría ser un intento exitoso".

El Movimiento Pachakuti fue fundado en Peñas, el mismo lugar donde fue muerto el líder indígena Tupaj Katari, defiende el "nacionalismo aymara", por la autodeterminación nacional aymara, quechua y chiriguano-guaraní, y el control de recursos naturales. Se diferencia de otras vertientes del nacionalismo aymara, el katarismo (el vicepresidente de Gonzalo Sanchez de Lozada, del anterior gobierno MNR fue un representante de dicha corriente) más integracionista, de asimilación al estado boliviano: el MIP plantea la perspectiva de autoderminación aymara en choque no solo contra el estado boliviano sino contra la *K´ara* burguesía.

El MIP se organizó en base al liderazgo verticalista y "carismático" de *Mallku*, cóndor en aymara, que más que un pseudónimo es un título de dirección y de lucha adjudicado a los líderes indígenas. En su ideología expresa que la lucha en Bolivia no ha variado en nada fundamental desde la conquista y colonización del ex-imperio inca por los españoles, dando inicio a una resistencia y lucha secular de las etnias originarias (quechuas y aymaras, fundamentalmente) contra los colonizadores *k´aras* (blancos extranjeros), que hoy opondría a las "naciones originarias" contra el imperialismo y sus agentes nativos (la K´ara burguesía y los k´aras en general). El objetivo de la lucha seria la restauración del *Q´ullasuyu*, debido a los elementos comunitarios, proto-socialistas, que ya existían en el antiguo ayllu del incario.

Todo el planteo reposa en una idealización de la historia de las comunidades. En el incario, los elementos comunitarios del ayllu estaban integrados en un sistema opresivo de castas al servicio del estamento superior, los incas: la leyenda del "comunismo incaico" ya ha sido deshecha por la investigación histórica objetiva . El Tahuantinsuyu se asentaba sobre una economía esencialmente agraria, cuya unidad constitutiva era el *ayllu*, conjunto de descendientes de un antepasado común, transformado luego en unidad territorial. El ayllu -que tuvo existencia anterior a los Incas- subsistió bajo la dominación de estos y, con diversas alteraciones, se prolongó a través de la conquista española, la colonia y la República, hasta nuestros días. Supone la propiedad en común de una determinada extensión de tierra, con una distribución periódica del suelo en lotes

(*tupus*) entre cada miembro de la comunidad con cargas de familia, quien lo explota individualmente.

La explotación de clase (opresión social) se desdobló, como no podía dejar de ser bajo el capitalismo, en opresión racial (racismo), pero ésta ha sido y es, bajo el dominio del capital, un instrumento de aquella. En la historia, esto se manifestó como completa ignorancia de la historia indígena después de la colonización. Así sucedió en Bolivia en la guerra civil de 1898-99, con la masacre de la rebelión aymara del cacique Pablo Zárate Willka. En el censo oficial de 1900, se afirmaba sin cortapisas - y con esperanza oligárquica - que se asistía a "un fenómeno digno de llamar la atención: el desaparecimiento lento y gradual de la raza indígena". Frente a esas formulaciones, "la IV Internacional destaca como un ejemplo la persistencia de oposición de las masas de Bolivia a la dominación clerical católica, y llama a convertirla en una bandera que sirva a la participación de millones de indígenas en la revolución social y de ningún modo para reivindicar un particularismo étnico que no tiene futuro positivo bajo el capitalismo"[107].

La revolución de abril de 1952, y la consecuente reforma agraria de 1953, a pesar de distribuir la tierra y eliminar los elementos serviles en las relaciones agrarias, no resolvió el problema agrario ni el de la opresión racial, o sea, no resolvió las tareas democráticas básicas pendientes en el altiplano y en América Latina. La revolución reflejó el impasse histórico de la Bolivia atrasada, mas ya integrada a la economía mundial (desde 1929, la industria del estaño sufría una regresión sistemática, y la economía un estancamiento crónico).

En los prolegómenos de la revolución de abril, la que habría de ser su dirección dejó claro los límites que le impondría: en la "guerra civil" de 1949, en Cochabamba, "hubo escrúpulo entre los dirigentes del MNR sobre la conveniencia de desatar un movimiento campesino cuyas consecuencias eran imprevisibles". En esas condiciones, la reforma agraria (contrariamente a la leyenda creada por el nacionalismo) afectó marginalmente a la comunidad agraria.

En las fórmulas confusas del pachakutismo, la abundancia de referencias filosóficas oculta la ausencia de un programa de reivindicaciones campesinas, de expropiación del latifundio constituido después de la reforma agraria de 1953, y hasta de las reivindicaciones concretas que podrían garantizar el desarrollo autónomo de las comunidades agrarias y de las naciones originarias --sin hablar de los medios a través de los cuales ese desarrollo entroncaría con la lucha de clases, en especial con la lucha de la clase obrera, que ha tenido históricamente en Bolivia un desenvolvimiento que ha sido ejemplar para el resto de los países de América Latina. La proscripción de la izquierda en el Movimiento Indígena Pachakuti apareció, en este marco, como un síntoma inequívoco.

En el grupo encabezado por Alvaro Garcia Linera la política integracionista aparecía más claramente formulada: "El conflicto en el altiplano es la contradicción entre culturas comunitarias y otra cultura mercantil y colonial con un estado sobrepuesto y aparente. La guerra hormiga y los bloqueos también fueron resultado de un proceso de acumulación y recomposición política que todavía está en su fase de expansión, o como dijo uno de sus dirigentes, en una fase de ensayo general. Hay indicios de una recomposición política en el seno de la CSUTCB, sobre todo en su liderazgo y en las relaciones entre esa dirigencia y las comunidades. Hay una política más autónoma de las

---

[107] ALTAMIRA, Jorge. Tesis Programáticas para la IV° Internacional. *Em Defensa del Marxismo* n° 33, Buenos Aires, abril de 2004.

comunidades". En Bolivia no habría un conflicto de clases, sino de "culturas". La "autogestión" se revelaba decisivamente como la versión "radical" del democratismo liberal.

Proponer el reemplazo del "Estado monocultural y monolingüe" por una "democracia multicultural y multilingüe", una "democracia indígena", era sustentar al Estado burgués, defensor de las relaciones sociales de propiedad y explotación que empujaron a las mayorías nacionales bolivianas a la miseria y la opresión. El "indigenismo" concluía en que el régimen burgués democratizante podría compatibilizarse con la "rebelión aymara", a condición de la participación en el poder político (y en sus prebendas) de la burocracia de las organizaciones indígenas. La "democracia multicultural" tendría su ejército y su policía, es decir organismos de represión del pueblo en defensa de la "democracia" y defendería la vigencia de la propiedad privada.

En Bolivia, sin embargo, estaba planteado un conflicto de clase de dimensiones gigantescas, movilizando a todas las capas de la población explorada, que ha traído al escenario histórico las contradicciones acumuladas a lo largo de siglos de estado colonial y semicolonial (incluida la opresión racial). En el levantamiento de 2000, Quispe llevó a la CSUTCB a liderar un bloque intersindical, junto a colonizadores, cocaleros, transportistas e incluso sindicatos tradicionales de los trabajadores, como el del magisterio rural y urbano. La CSUTCB planteó en el inicio del alzamiento la consigna de "fuera Banzer", y el llamado a elecciones generales o a una Asamblea Constituyente; sin embargo, este planteo fue posteriormente dejado de lado, limitándose a desplegar los reclamos sectoriales que se integraron en el bloque intersindical.

El movimiento indigenista ha oscilado, históricamente, entre una tendencia que ha impulsado la rebelión para imponer la creación de un Estado aymará, y las tendencias que han buscado integrarse al régimen capitalista. Hay movimientos de carácter conciliador, como la Confederación Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), con preponderancia en el oriente, o el Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), los cuales plantean diversas reivindicaciones de carácter indigenista y campesino, pero sostienendo que para conquistarlas se debía participar del "Diálogo Nacional" con Banzer, o sea la vía de la concertación con los explotadores y el gobierno explotador.

Estos grupos rechazaban que la ley INRA (ley que crea el Servicio Nacional de Reforma Agraria) pueda ser derogada, pues sostienen que esa ley los ha beneficiado. La ley INRA fue sancionada en 1996 bajo el gobierno del MNR, y presentada como una ley de arbitraje entre los reclamos de los indígenas y campesinos y los terratenientes; pero en realidad era una simple fachada bajo la cual se legitimaba y consolidaba el latifundio, hasta el punto que la propia Iglesia tuvo que denunciar que se han tomado varias decisiones a favor de los más poderosos, desvirtuando incluso las previsiones de la ley.

En el 2000, "la lucha de las masas campesinas rompió con la metodología tradicional de las marchas pacíficas y de los bloqueos por pocos días que sólo servían para llamar la atención. El bloqueo no se pareció a los aplicados en los últimos años. No fue tímido; se mostró contundente. No cruzó las carreteras; se extendió por el largo de las rutas. No fue agresivo y sin argumento; exhibió coherencia. El bloqueo, en realidad, llegó a superar a las protestas de Genaro Flores e hizo recordar a Fausto Reinaga, a Zárate Wilka y Tupac Katari, los líderes que los aymaras tienen como referentes históricos. Evolucionó de un hecho social a una proyección política".[108]

[108] *La Razón*, La Paz, 8 de octubre de 2000.

Los dirigentes campesinos impusieron sus propios métodos hasta en las negociaciones. Monseñor Juarez, que dirigió gran parte del encuentro, cortó varias veces las intervenciones campesinas. Sin embargo, el siguiente orador volvía a repetir la perorata que había sido interrumpida por el religioso. Pero más importante aun era que los dirigentes campesinos no aprobaban nada sin consultar, eran responsables ante sus bases. Uno de los dirigentes adelantó que una vez concluidas las negociaciones, los representantes departamentales debían presentarlas a sus bases, las que deberían tomar una determinación final.

Al calor de la lucha, en varios pueblos funcionaron los Cabildos Abiertos, suerte de asambleas populares en donde las masas deliberaban, votaban sus reivindicaciones y tomaban decisiones de lucha para arrancarlas. En la ciudad de Cochabamba, ya en el primer alzamiento, como hemos visto, se puso en pie la Coordinadora del Agua, que reunió al Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar, la Federación de Regantes y la Federación de Fabriles, y posteriormente se sumaron los campesinos cocaleros, los universitarios, juntas vecinales y el magisterio.

Esa Coordinadora adoptó como vía la acción directa y desestimó los canales de mediación y concertación; rebasó a las instituciones formales locales y provocó una de las más espectaculares movilizaciones, paralizando la ciudad y zonas aledañas tras los reclamos de rechazo al aumento de las tarifas del agua, la modificación de la ley que privatizaba el agua, y el alejamiento de la empresa transnacional (Aguas del Tunari) beneficiaria de toda esa política entreguista: "Después de abril, la Coordinadora termina adoptando una postura supra regional de protagonismo político, trascendiendo a sus meras demandas regionales; así apuntó a objetivos estratégicos como la renuncia de Banzer, el cierre del Congreso y el llamado a una Asamblea Constituyente".[109]

Se gestó entonces una especie de “frente popular”, con la intención de colocar a las organizaciones de las masas en lucha detrás de una estrategia de colaboración con los partidos y el régimen capitalistas. Este frente estaba motorizado por el PC, el Frente de Salvación Nacional dirigido por Manuel Morales Dávila, el Partido Socialista, el Partido Alianza Laborista de Izquierda Nacional (ALIN), que reúne a los seguidores del asesinado general Torres, y la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas, que ya se ha organizado como partido político. El propósito de estas organizaciones es la formación de un "Frente Político Amplio Antineoliberal", que surgiría de una coordinación de fuerzas dirigidas por el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional de la Soberanía y la Dignidad.

Durante el alzamiento, estas organizaciones sacaron un pronunciamiento al que sumaron a la Coordinadora del Agua y la Vida de Cochabamba y a los Cocaleros del Chapare que dirige Evo Morales. En ese pronunciamiento reclamaron la renuncia de Banzer y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Sin embargo, toda la actividad de estas organizaciones no estaba colocada en la lucha por el derrocamiento de Banzer, sino en juntar los 43.000 afiliados necesarios para obtener la personería y presentarse a las próximas elecciones. El planteo de la Asamblea Constituyente es levantado como un planteo constitucionalista, tomando como modelo la nueva Constitución venezolana.

La clase obrera estuvo relativamente ausente en el levantamiento de 2000. La COB, dirigida por una burocracia afín a los partidos que integran la coalición de gobierno, se mantuvo paralizada. Sin embargo, en el seno de los trabajadores, tanto de la minería como de los fabriles, se vivió un clima de deliberación producto de la conmoción que provocó el alzamiento y del hecho de que se hiciera recular al gobierno. En el seno de la

[109] *La Razón*, La Paz, 5 de octubre de 2000.

COB actuó un bloque opositor autodefinido como "bloque antineoliberal". En su plataforma de lucha, significativamente estaba ausente un planteamiento de poder, sin tampoco alusión alguna al planteo de la Asamblea Constituyente que fue levantado por todos los movimientos de lucha en el alzamiento.

El POR (Partido Obrero Revolucionario) repitió una vez más el mismo discurso y los mismos planteos abstractos que realiza haya o no haya un ascenso, haya un levantamiento o una situación de reflujo. Llamó a la insurrección armada y a luchar por la dictadura del proletariado. Sin embargo, el magisterio urbano, que tenía a varios dirigentes poristas a la cabeza de la lucha, demoró en integrarse al bloque intersindical que impulsaba la CSUTCB, que era el único marco para la centralización de la lucha. El POR no tuvo y no tiene una consigna para unificar la lucha de los obreros y los campesinos. Levanta sus reivindicaciones sectoriales para llamarlos a sumarse a la conducción del proletariado, cuando éste, por un lado, estuvo agazapado en el último alzamiento, y cuando los que tomaron la iniciativa de la lucha eran las organizaciones campesinas.

El POR había anunciado públicamente, antes del alzamiento que tuvo como una de sus vertientes al magisterio urbano, que sus dirigentes debían renunciar a sus puestos en la dirección de los gremios del magisterio, cuando precisamente una de las características de la lucha del magisterio fue el cuestionamiento de las bases a los sectores burocráticos e izquierdistas conciliadores (PC), que quisieron casi en el inicio levantar la lucha a cambio de la primera oferta del gobierno. El planteo del POR era liquidacionista y expresión de su degeneración sectaria.

El gobierno de Banzer, más debilitado que nunca, continuó siendo sin embargo la única carta del imperialismo norteamericano para ejecutar sus planes de colonización del país. Bolivia entró en el siglo XXI hundida en la peor crisis de su historia, como un laboratorio de la disolución de la sociedad capitalistas. Al compás de ello se descomponen las instituciones del Estado. A los levantamientos se sumó un importante sector de la policía, y entre las FF.AA. se conoció la existencia de una corriente que agitó que los militares no debían reprimir a los bloqueos. En contraste, otro sector ha agitado, junto a una agrupación fascista, la necesidad de un baño de sangre para terminar con los alzamientos y los bloqueos.

Lo peculiar en la situación boliviana era que las masas en lucha eran sectores oprimidos no proletarias. Los campesinos, los gremiales (cuentapropistas) que representan al 66% de la población económica activa, de los cuales la mitad están como subempleados, han logrado un grado muy importante de organización, al igual que algunos sectores laborales urbanos y rurales, como el magisterio. Todos ellos fueron los grandes protagonistas de los alzamientos del 2000. La clase obrera estuvo fuera de escena. LA COB y la Federación Minera, copadas por una camarilla que actúa como chaleco de fuerza en la dirección de los sindicatos, maniatando al movimiento obrero.

Después de la “guerra del agua” del 2000, la burocracia sindical y la izquierda democratizante montaron a las apuradas un "Acuerdo Político Antineoliberal", que actuó como bombero. Los dirigentes de la lucha contra la privatización del agua en Cochabamba, los llamados "autogestionarios", evolucionaron hacia gestores del capital: uno de sus principales dirigentes, Oscar Olivera, viajó a Estados Unidos a gestionar créditos para montar una "empresa autogestionaria".¡Cómo si el problema fuera la forma jurídica de la propiedad y no la quiebra de una empresa obligada a expoliar a los consumidores (obreros y campesinos) para hacer frente a sus acreedores!

Después de la "guerra del agua" de Cochabamba, la crisis política y la perspectiva de una nueva y más profunda insurrección popular no dejanron de crecer. El gobierno dictó

el estado de sitio y fue desobedecido. El foco de tensión de Cochabamba se extendió rápidamente a casi todo el país. Llegó a Lahuachaca y Achacachi, con batallas campesinas que devolvían las balas con piedras y eran la expresión de odios feroces y de estados de desesperación que podían haberse transformado en un caos sangriento y definitivo para el país. El estado de sitio nació muerto y puso en duda la propia autoridad del Estado. La “anarquía” llegó inclusive a la policía y pudo llegar al ejército, “pilar del orden y la seguridad”.

Desde entonces, el gobierno de Banzer (ADN) no paró de recular. El estado de sitio, previsto durante noventa días, fue levantado desapués de poco más de una semana. El contrato de privatización del abastecimiento de agua en Cochabamba (ciudad que se encuentra en el centro del "eje estratégico" de la economía boliviana: Santa Cruz-Cochabamba-La Paz) con la multinacional Aguas del Tunari, fue roto.

No sólo fue sustituida la mayoría del gabinete, sino también las directorías de Comibol (minas) y de los ferrocarriles. Las tentativas de establecer un "pacto de gobernabilidad" con el MNR a través del "Diálogo Nacional" fracasaron. La ADN de Banzer entró en proceso de descomponsición abierta. El MNR, a su vez, criticó al oficialista MIR (Paz Zamora), que posaba como si fuese oposición a Banzer, aunque participaba de su gobierno con ocho ministros (*La Razón* pidió que el dirigente histórico del MIR, Oscar Eid, envuelto en un caso notorio de corrupción, renunciase a la vida pública).

Y, en el movimiento obrero y popular, ya no se trataba sólo de la "Coordinadora de agua" de Cochabamba: surgió una "Coordinadora de luz" en Villazón (punto de la frontera con Argentina); el 20 de junio de 2001 venció el ultimátum de los ‘cocaleros’ del Chapare para que el gobierno paralizase la erradicación de las 5 mil hectáreas de coca remanentes; en la policía, un sindicato clandestino y un comité de vigilancia de esposas y familiares controlaban el pago del aumento salarial concedido en abril ; el gobierno admitió el pago de indemnizaciones a los familiares de los muertos, a los heridos y a los presos del levantamiento de abril; desde todos los sectores conservadores se criticó "el evidente fracaso del Plan de Reactivación Económica lanzado por el gobierno en abril".

El objetivo de una lucha nacional por derribar a Banzer y a todo su gobierno (ADN, MIR, UCS, NFR) fue bloqueado por las direcciones de las masas, en especial de la COB, que en abril demoró seis días para decretar una paralización nacional de 24 horas, cuando la lucha en Cochabamba ya contaba cinco muertos y se había extendido nacionalmente. El APA ("Acuerdo Político Anti-neoliberal") montado a las apuradas por la burocracia sindical, la izquierda democratizante (PCB, PS, ASP, etc.), el prefecto de La Paz, Juan del Granado (del ex oficialista MSM, los ‘sin miedo’) y sectores del MNR, no era sólo una versión empeorada de la UDP de la década del 80: era un bombero directo de las luchas en curso.

La presión por una transición pacífica del régimen de Banzer fue comandada directamente por los EEUU, que intervinieron directa y cotidianamente a través del chantaje financiero (con un préstamo de 120 millones de dólares para "combatir las drogas") y de las “soluciones” para los problemas de agua y energía vía ONGs. Los "autogestionarios", con un lugar dirigente en la Coordinadora de Cochabamba (con Oscar Oliveira), eran opuestos a cualquier lucha política nacional en nombre de la "muerte de los antiguos sindicatos obreros" y del elogio de un nuevo "lenguaje capaz de llegar a las clases medias y altas de la sociedad": "La propuesta de la Coordinadora de una empresa autogestionaria demolió la falsa dualidad entre el privatismo y el estatismo

que había guiado las propuestas políticas contemporáneas".[110] La empresa autogestionaria se viabilizaba, sin embargo, con créditos internacionales, que Oliveira fue a buscar a los EEUU, dentro del llamado “tercer sector”.

En Perú, en junio de 2002, Arequipa, su segunda ciudad en importancia, fue el epicentro de una gigantesca y victoriosa *pueblada* contra la privatización de las empresas regionales de energía eléctrica que se extendió por todo el sur del país, hasta Cuzco, Puno (en la frontera con Bolivia) y Tacna (en la frontera con Chile). Con la huelga general indefinida, piquetes y barricadas, cortes de ruta, ocupación de edificios públicos y una sostenida movilización callejera, los explotados del sur peruano derrotaron a la policía, primero, y al estado de sitio y al ejército después. La represión salvaje, que dejó dos muertos y cientos de heridos, no pudo frenar la pueblada que le impuso al gobierno de Alejandro Toledo el congelamiento de la privatización, el levantamiento del estado de sitio y hasta un público pedido de "disculpas" del presidente a la población reprimida.

La profundidad de la rebelión popular se explicó no sólo porque para el “peruano medio”, la privatización no sólo significa corrupción sino también tarifas más altas y pérdida de empleos: este era el balance de la década de Fujimori y sus privatizaciones. Se explicaba, además, por el derrumbe económico del sur peruano como consecuencia de la política de Fujimori, que ahora continuaba Toledo: su industria y su comercio más importantes fueron copados por extranjeros; el resto desapareció; el desempleo y la miseria se hicieron enormes. Por sus objetivos y sus métodos de lucha, la pueblada de Arequipa empalmó con la "guerra del agua" de Cochabamba, contra la privatización del agua, y con la pueblada de los campesinos paraguayos que, con cortes de ruta y una marcha a Asunción, impidieron la privatización de la telefonía.

La victoria de la rebelión popular fue un golpe mortal para Toledo, ya que la privatización era, como en Paraguay, una "condición" del FMI para acceder a nuevos préstamos que alejaran la perspectiva de la cesación de pagos. el “arequipazo” asestó un duro golpe al gobierno de Alejandro Toledo. La rebelión popular con epicentro en la ciudad de Arequipa, que se extendió por todo el sur peruano, obligó al gobierno a anular la privatización de las empresas eléctricas de la región.

Perú se sumaba al proceso de la rebelión continental de los piqueteros argentinos, los caceroleros uruguayos, los campesinos paraguayos, los sin tierra brasileños. La victoria de la rebelión popular fue un golpe mortal para Toledo, ya que la privatización era, como en Paraguay, una "condición" del FMI para acceder a nuevos préstamos que alejaran la perspectiva de la cesación de pagos. La pueblada de Arequipa puso en el primer plano, como norte estratégico de la movilización obrera y popular peruana, la consigna "¡Fuera Toledo!". Un mes después, cayó el gabinete de ministros, incluido el hombre del City Bank, Pedro Kuczynski.

El propio Kuczynski había declarado que el derrumbe de Argentina ponía fin a la "experiencia privatizadora" en toda América Latina. La vigorosa lucha popular de Arequipa puso de manifiesto este agotamiento de una manera irrefutable. La caída del gabinete era bastante más que un simple "recambio". Kuczynski "era percibido como una garantía de una política responsable en el gasto público y como impulsor de las privatizaciones". El hombre del FMI, además, era partidario de postergar las elecciones municipales y regionales que deben realizarse antes de fin de año. Cuando la pueblada de Arequipa puso al orden del día la consigna de que se vaya Toledo, la postergación de las elecciones hubiera provocado un nuevo estallido popular.

[110] *La Razón*, La Paz, 23 de abril de 2001.

Toledo intentó obtener el apoyo parlamentario del APRA de Alan García: echó a los dos ministros más cuestionados por el APRA y designó como canciller a un ex ministro de García, pero el partido aprista, que temía verse envuelto en el imparable hundimiento de Toledo, negó toda alianza con el gobierno. Las combinaciones y maniobras parlamentarias no sacarían adelante a un gobierno quebrado por la movilización y el odio popular. En menos de un año, Toledo agotó las expectativas que los explotados peruanos habían depositado en él.

11. DE MENEM AL ARGENTINAZO

Después de la catástrofe hiper-inflacionaria en que concluyó, en 1988, el gobierno radical (UCR) de Raúl Alfonsin, que sucediera a la trágica y asesina dictadura militar de 1976-1983, el peronismo retornó al poder en Argentina, en elecciones casi plebiscitarias. El llamado "menemismo" inauguró una larga década de adaptación de la política argentina al capital financiero internacional y a los dictámenes del FMI y el Banco Mundial. El ejercicio del poder político por una camarilla de ladrones y criminales (asesinatos incluidos) encabezada por Menem, no debe hacer olvidar la complicidad del *establishment* capitalista nacional e internacional con su gobierno, así como de la mayoría de los partidos políticos.

La "nueva" política exterior argentina de Carlos Saúl Menem tuvo como meollo la concepción denominada "realismo periférico", que consideraba que los países periféricos como Argentina, debido a la disparidad de fuerzas, solamente perdían, y continuarían perdiendo, en caso de que continuasen confrontando con los EEUU, aisladamente o participando de grupos como el Movimiento de los No Alineados. La estrategia internacional más provechosa para esos países sería reconocer su inferioridad, alinearse irrestrictamente con las políticas americanas y adoptar con entusiasmo el "modelo económico neoliberal". Esta "estrategia" (por llamarla de algún modo) permitiría a la Argentina evitar represalias y convertirse en un aliado preferencial de los EE.UU. en la región, recuperar su credibilidad internacional como país "de hecho europeo" y hasta obtener la soberanía sobre las Malvinas, objeto de la guerra de 1982 que provocó, entre otros factores, el colapso de la dictadura militar.

El canciller argentino, Guido di Tella, se tornó cómicamente célebre por una frase acerca de las deseadas "relaciones carnales" de la Argentina con los EEUU. En esa estrategia, las relaciones con el Brasil tendrían dos caras: primero, atraer a Brasil para adherir a las reivindicaciones estratégicas americanas vitales y así cooperar con la política americana y, segundo, aprovechar la apertura del mercado brasileño propiciada por el Mercosur, sin perder de vista el objetivo de integrarse al mercado americano, como procuró hacer a través de su candidatura aislada al ALCA, y al sistema militar americano, donde llegó a obtener el status de "aliado extra OTAN", llegando a participar de la operación "Tempestad en el Desierto" del gobierno de George Bush contra Irak.

El largo período menemista en Argentina, en la década de 1990, no alumbró sólo privatizaciones y un nivel inédito de corrupción gubernamental, que alcanzó rasgos folclóricos y trágicos (incluyendo el lavado de dinero del narcotráfico, que pasó a ser un tema recurrente de los compositores del *rock* argentino, un movimiento cultural de masas en el país). Alumbró también un nuevo período de la lucha de clases y la radicalización política, del que fue expresión más que deformada la victoria electoral de la Alianza (Unión Cívica Radical más "izquierda" peronista e izquierda democratizante ex stalinista), encabezada por el radical De la Rua y su vice peronista, "Chacho" Álvarez, en el 2000. La creciente descomposición del régimen político menemista, producto de la gigantesca crisis económica nacional y mundial, planteó no sólo la oportunidad sino la necesidad objetiva de las masas de intervenir activamente en la lucha de clases.

Los estallidos populares que se sucedieron a lo largo y ancho del país expresaron la necesidad de intervención en defensa de los derechos y conquistas más elementales de los trabajadores. En este escenario, la cuestión del poder empezó a aparecer en primer plano. Baste recordar los asaltos a los supermercados durante el período hiperinflacionario alfonsinista, para advertir una diferencia cualitativamente

significativa: desde el Santiagueñazo de 1993 (en la provincia de Santiago del Estero), las rebeliones populares se dirigieron directamente a los distintos centros de poder del estado. Esto implicaba, sin duda alguna, una politización de los conflictos y un avance en la conciencia de clase de las masas. En 1993, en pleno apogeo del “menemismo”, un levantamiento provincial en Santiago del Estero concluyó con la toma y quema de las sedes de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Provincial. En 1997 una especie de revolución similar se produjo en la provincia de Neuquén, inaugurando un fenómeno que desde entonces se extendería hasta convertirse en un emblema de la lucha popular, los cortes de ruta. Comenzó a aparecer entonces, un particular invento argentino cuya denominación recorrió el mundo: el *piquetero*.

El camino que desembocó en la Plaza de Mayo en diciembre de 2001 fue delineado por el Santiagueñazo de 1993 y luego por los Cutralcazos, Tartagalazos, Jujeñazos, las luchas provinciales de Tucumán, Jujuy y Corrientes, los sucesivos levantamientos en el norte de Salta, los *piquetazos* de La Matanza y el Gran Buenos Aires, las Asambleas Nacionales Piqueteras y su plan de lucha, las ocupaciones de empresas, las grandes movilizaciones de masas. Ha sido toda una década de lucha excepcional del pueblo argentino, de organización, de debates políticos y de levantamientos populares.

El Santiagueñazo marcó el nacimiento de una nueva época en Argentina, porque fue la consecuencia del agotamiento del Plan Caballo (de convertibilidad), que sólo pudo sobrevivir creando y produciendo nuevos Santiagueñazos, y porque le mostró al conjunto de los movimientos reivindicativos de la Argentina el camino de la huelga general, de la acción callejera, de la ocupación de edificios, de las asambleas populares y del poder. En junio de 1996, durante toda una semana, la ruta 22 fue cortada por los piqueteros de Cutral Co y Plaza Huincul, que rechazaron a la Gendarmería y obligaron al gobierno a ceder frente a numerosas reivindicaciones. La pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul fue preparada por las numerosas movilizaciones que, desde hacía un año, venían protagonizando las organizaciones de desocupados de la provincia.

Mayo-julio de 1997: Cutral Co, Tartagal, Jujuy, Cruz del Eje. En el curso de 45 días, estallaron enormes *puebladas* en las provincias de Neuquén, Salta, Jujuy y Córdoba, en las que se movilizaron y lucharon decenas de miles de piqueteros. Su rasgo común fue, en primer lugar, la dominación política sobre el movimiento de masas que ejercían sectores patronales y pequeñoburgueses a través de las llamadas "multisectoriales" y la política con que los enfrentó el gobierno menemista: fracasada la represión, combinó la oferta de "planes Trabajar", con las manipulaciones políticas de las "multisectoriales" y la Iglesia para desarmar a los movimientos de lucha.

La envergadura que estaba tomando el movimiento de las puebladas fue uno de los factores decisivos para el nacimiento de la Alianza, que se produce con un objetivo concientemente antipiquetero. Como dijo Alfonsín: "para canalizar la protesta", es decir para castrar sus tendencias a la independencia política. El sistemático incumplimiento de los acuerdos llevaría a los piqueteros a nuevos levantamientos populares, para lo cual debería alumbrarse una nueva dirección política. La etapa final del menemismo se desarrolló bajo el signo de enormes luchas provinciales: Jujuy, Tucumán y, sobre todo, Corrientes, donde los empleados públicos y todo el pueblo explotado se movilizaban contra la liquidación de sus condiciones de vida por las camarillas patronales. La ocupación de los puentes que unen Corrientes con Chaco eran el símbolo de la pueblada correntina. Allí golpeó el gobierno "progresista" de la Alianza, el cual desató una violentísima represión que dejó varios muertos. La salvaje represión en Corrientes marcaba el completo agotamiento del "progresismo" como fuerza reformista o de afirmación de la independencia nacional, casi antes de comenzar.

ELa Alianza terminó como había debutado: asesinando trabajadores. En diciembre de 1999 y en mayo de 2000, en todo el norte de Salta se vivieron dos puebladas excepcionales. Por su masividad, por su determinación para enfrentar la represión (que en el caso de la pueblada de mayo de 2000 llegó a expulsar a la Gendarmería de Mosconi) y, sobre todo, porque a su frente estuvo una dirección clasista que había superado políticamente a las "multisectoriales" y se encaminaba a convertirse en una dirección política del conjunto de las masas explotadas del norte salteño. En las puebladas del norte salteño se perfilaba el carácter obrero, clasista y piquetero de la oposición política que debió enfrentar durante los dos años de su mandato el gobierno aliancista.

A mediados de octubre de 2000, comienza el gran corte de La Matanza, que rápidamente se extiende a todo el Gran Buenos Aires. Paralelamente, estalla una nueva pueblada en el norte salteño: fue la primera expresión general de la "Argentina Piquetera". El movimiento de cortes de ruta que se extendió por todo el Gran Buenos Aires tampoco era "espontáneo": fue preparado por asambleas y deliberaciones en las que participaron decenas de organizaciones piqueteras, que se habían construido durante los últimos tres años.

El gobierno de la Alianza echó lastre concediendo varios miles de "planes Trabajar", cuyo cumplimiento efectivo debería ser más tarde impuesto por nuevas movilizaciones. En el norte de Salta, la reacción popular ante el asesinato del trabajador Aníbal Verón fue fulminante: el pueblo echó a la Gendarmería y ocupó la comisaría de Mosconi. La Policía fue obligada a huir en desbandada. El intento represivo fracasó rotundamente: no puede quebrar a la dirección piquetera clasista que había dirigido los últimos cortes. Esta dirección convocará, poco después, un Congreso piquetero que estableció un programa completo de reorganización social de la provincia y de la nación.

Poco después se reunió la I° Asamblea Nacional Piquetera, que fue un verdadero Congreso de trabajadores ocupados y desocupados, que reunió movimientos de lucha de todo el país. Votó un plan de lucha de cortes escalonados y una movilización a la Plaza de Mayo que fue excepcionalmente masiva. Después de la Asamblea Nacional Piquetera, los cortes de ruta, las movilizaciones y las ocupaciones continuaron extendiéndose por todo el país, incluyendo a creciente sectores de la clase media (estudiantes, pequeños comerciantes).

La lucha piquetera de los desocupados, los obreros ocupados e incluso las capas medias de la población (que recurrían a los métodos de lucha de los piqueteros) signaron las últimas semanas del gobierno de la Alianza. Las ocupaciones de Zanón en Neuquén, de los edificios de Telefónica y Telecom en la lucha contra los despidos, de las plantas cordobesas que despedían a sus trabajadores y las grandes movilizaciones de masas, como las de Córdoba y Neuquén, estaban señalando una nueva fase del ascenso de la lucha popular ante el agravamiento de lacrisis. Contra todo esto se estrellaron Cavallo y De La Rúa. Fue la experiencia de lucha de casi una década la que convenció a los explotados de que había que marchar a los centros del poder político y movilizarse contra las instituciones del “Estado democrático”, para hacer valer la soberanía popular.

Esto último no significa que el conjunto de los trabajadores hubiese llegado a la conclusión de la necesidad de tomar el poder, ni mucho menos. Significa que las propias condiciones objetivas del derrumbe capitalista colocaban en el centro del debate la cuestión del poder y que era la obligación de todo partido que se reclamase revolucionario intervenir en los conflictos con un programa que apunte a la organización independiente de la clase obrera y, estratégicamente, a la toma del poder.

Lo acertado o no de las distintas caracterizaciones y, por lo tanto, la orientación de la lucha de clases pueden ser la diferencia entre la victoria y la derrota del proletariado.

En enero de 2001 un escándalo de sobornos explotó en el parlamento argentino. Los sobornos tenían un objetivo específico: que pasara una ley de reforma laboral abiertamente repudiada por los trabajadores argentinos en dos masivos paros generales. Y el soborno no fue "demasiado", comparado con lo que pudo haber corrido cuando se aprobaron otras leyes, como las privatizaciones bajo el período "menemista". Entel (teléfonos) se había privatizado en 8.400 millones de dólares; Aerolíneas Argentinas, en 2.250, Gas del Estado, en 3.320 millones; YPF (petróleo) se hizo por 20.000 millones de dólares. Pocos días después de las denuncias sobre las coimas para aprobar la ley anti-laboral, surgieron nuevas denuncias acerca de sobornos para aprobar la extensión de la concesión para la explotación del yacimiento petrolero más rico del país en beneficio del pulpo Repsol.

La causa general de todo este proceso de descomposición política era el fracaso de los planes económicos (en primer lugar, el derrumbe del Plan Cavallo y del régimen de convertibilidad, adoptado a inicios de la década de 1990), la imparable declinación de la producción y la enorme tensión social que generaba el crecimiento de la pauperización de las masas. Las evidencias del empantanamiento del gobierno aliancista (de la Alianza, elegido en 2000), y la disgregación del peronismo, eran anteriores al escándalo. La experiencia de los últimos veinte años volvía a confirmar que la entreguista burguesía nacional, y el régimen capitalista, eran incapaces de viabilizar un régimen efectivamente democrático.

La renuncia del vicepresidente Chacho Alvarez expresó que el gobierno de la Alianza, como planteo estratégico, no había resistido una experiencia de gobierno. El pacto entre los representantes del "progresismo" pequeño burgués y los viejos mascarones del capitalismo nativo naufragó sin remedio. La mimetización criolla de la 'tercera vía' de Tony Blair y Cia. concluyó en un fiasco todavía más vertiginoso que la original. "Chacho" renunció sin romper el pacto de gobierno. Dio un paso al costado para sortear las contradicciones insalvables de la camarilla presidencial con la base electoral que había llevado a la Alianza al gobierno. La renuncia de Alvarez fue un último recurso para evitar el hundimiento del gobierno y la convocatoria a elecciones generales anticipadas.

El desmoronamiento político del gobierno aliancista estaba vinculado a la cesación de pagos de Argentina. Para conseguir fondos para hacer frente a los pagos de la deuda externa, el gobierno argentino había tenido que colocar bonos de deuda pública entre los bancos locales y las AFJP (fondos privados de jubilación) a tasas del 16% anual, o sea 10 puntos por encima del 6% que pagan los títulos del Tesoro norteamericano, es decir un 170% más caro. La colocación se interpretó como un preludio de la declaración de bancarrota. El conjunto de la deuda pública era superior a los 160.000 millones, con vencimientos por capital e interés en el 2001 de cerca de 30.000 millones de dólares. La deuda externa privada, que era virtualmente nula en 1990, ascendía ya a los 60.000 millones de dólares, en 2001.

El 65% de la deuda privada estaba contraída por los bancos. El hecho de que los bancos se encontrasen mayoritariamente extranjerizados no significaba que se financiasen con recursos de sus casas matrices, como se sostuvo a la hora de entregarlos a manos extranjeras, porque incluso esas casas matrices eran las mayores deudoras en el mercado mundial. La desnacionalización había potenciado, y no atenuado la posibilidad de una bancarrota financiera. Estas sucursales, en virtud de las regulaciones bancarias internacionales, no estaban habilitadas para obtener un socorro del exterior a partir del

momento en que las consultoras internacionales aumentaron la calificación de riesgo de Argentina como consecuencia de su deuda elevada y de la concentración de su pago en el corto plazo.

El incremento de la tasa de interés norteamericana liquidaba las posibilidades de las políticas de ajuste deflacionario en América Latina. La devaluación brasileña de 1999, y la dolarización ecuatoriana fueron la manifestación aguda de la completa crisis del llamado modelo neoliberal. La causa precipitante de la crisis argentina era la generalización de la insolvencia de importantes monopolios de nivel internacional, que pagaban por sus propias deudas una sobretasa de interés del mismo rango que los llamados países emergentes. En el plano internacional, crecen los ceses de pagos de las grandes empresas, cuya relación deuda/patrimonio superaba el 100%. La deuda argentina representaba entre un cuarto y un quinto de toda la deuda comercializable de los países emergentes.

Si Argentina no cumpliera con sus obligaciones, el efecto resultante podía eclipsar el pánico financiero producido por la cesación de pagos de Rusia, en 1998. Se ponía al desnudo la conexión de la bancarrota argentina con la tendencia a la bancarrota generalizada del capitalismo "global" - en primer lugar del más desarrollado y parasitario, el norteamericano -, y también el carácter histórico de la crisis. Esta no se limitaba a una u otra modalidad del capital, no se restringía a las particularidades de este o aquel país o de este o aquel régimen político, sino que era el resultado de la maduración del conjunto de las relaciones sociales. Los "inversores" se preparaban para lo peor. Según Neil Dougall, economista de *Dresdner Kleinwort Wasserstein*: "La devaluación parece ya una realidad y también parece inevitable el cese completo de los pagos de la deuda durante un largo período". Todos comprendían que la devaluación era inevitable, lo mismo que el no pago de la deuda.

Se tuvo que recurrir a un "blindaje" financiero organizado por el FMI para contener la cesación de pagos. Pero el carácter internacional de la bancarrota argentina estaba diciendo claramente que no podía ser superada por un rescate financiero preventivo, porque incluso en el mejor de los casos seguían en pie todos los factores fundamentales de la crisis, en especial la tendencia a la cesación de pagos de numerosos monopolios capitalistas y de otras naciones altamente endeudadas. Esto explica la demora en la definición del "blindaje".

El problema más serio que tenían por delante los explotadores capitalistas iba más allá de una crisis financiera terminal. Estaban condicionados a la emergencia de la *Argentina piquetera*. El piquete obrero fuera el gran protagonista de la huelga general del 23 y 24 de noviembre del 2000. Fue el principal elemento de la huelga, ya que obligó a levantar los servicios ferroviarios y a cerrar decenas de supermercados en todo el país. Fueron los piquetes y los cortes de ruta de los desocupados en La Matanza, en el sur del Gran Buenos Aires, y el gran piquete que llevó a la pueblada de Tartagal y Mosconi, en el norte del país (Salta) después del asesinato del piquetero Aníbal Verón, los que abrieron la tendencia hacia la huelga general.

El *piquete* recuperaba y desarrollaba a una escala nunca vista antes, un método de lucha histórico de la clase obrera y una tradición del proletariado argentino. El piquete hace su aparición en los cortes de ruta de los desocupados pero también aparece en los grandes conflictos obreros, como la lucha de Atlántida o la lucha de la pesca en Mar del Plata. El piquete tiene la gran virtud de que transforma la adhesión a una huelga, de pasiva y hasta rutinaria, en conciente. La diferencia no es menor porque equivale a preparar a los trabajadores para poner en pie su propio gobierno. Un gobierno de trabajadores significaría una participación sin precedentes históricos del trabajador en la cosa

pública. Los demócratas repudiaban los piquetes pretendiendo ignorar que eran los piquetes los que gestaban la verdadera ciudadanía.

El papel central de los piquetes en las grandes movilizaciones estaba indicando el surgimiento de una nueva camada de dirigentes y de nuevas direcciones. La maduración política de estos se manifestaba, también, en resonantes conquistas anti-burocráticas de sindicatos. Noviembre del 2001 terminó con el presagio de que una gran pueblada estaba en curso. El derrumbe de la Alianza en las elecciones de octubre; el agotamiento económico y los enfrentamientos en el seno de la burguesía sobre la "salida" ante el derrumbe; y el crecimiento de las movilizaciones obreras, piqueteras y populares en todo el país, ponían en evidencia que en la Argentina de fines del 2001 se planteaba abiertamente una crisis de poder.

Ante un movimiento de lucha popular en ascenso, la burguesía y el imperialismo se encontraban divididos sobre las alternativas para enfrentar la cesación de pagos y la quiebra. Tomaba cuerpo un frente devaluacionista - integrado por la burguesía "productiva", el peronismo, la burocracia sindical moyanista y hasta el propio Tesoro norteamericano - cuya amplitud contrastaba con la impotencia de los instrumentos políticos de que disponía, el Congreso y los gobernadores, incapaces de dar una salida al hundimiento del régimen aliancista. A fines de noviembre, el gobierno aliancista era un gran cero político, que subsistía gracias a la división de los capitalistas sobre el *default* y la devaluación, y a la división del peronismo.

Noviembre terminó con grandes movilizaciones y marchas en el interior - en Córdoba, Neuquén, Tucumán y Entre Ríos - en las que de una manera creciente se abría paso la consigna votada, a instancias del Partido Obrero (PO),[111] por la Asamblea Nacional Piquetera: "Fuera De La Rúa, Cavallo y los gobernadores del FMI". A comienzos de diciembre el gobierno aliancista estaba terminado. Su continuidad era cuestionada por el FMI y el Tesoro norteamericano, que se rehusaron a girar fondos comprometidos; la burguesía devaluacionista conspiraba en las sombras para imponer una sucesión política en sus propios términos; el PJ anunciaba su intención de convocar una Asamblea Legislativa.

La imposición del "corralito" (congelamiento de los depósitos bancarios) fue la confirmación de la completa bancarrota económica y del derrumbe de los negocios

[111] El PO, nacido en la segunda mitad de la década de 1960, mantuvo su actividad poítica durante toda la era de la dictadura de 1976-1983. En la década de 1990, PO eligió dos diputados para la Asamblea Constituyente de Santa Cruz, la provincia más al sur, obteve 150 mil votos en la provincia de Buenos Aires, eligió a su principal dirigente, Jorge Altamira, como Legislador de la Capital Federal, y obtuvo cuatro cargos electivos (diputados y concejales) en las elecciones municipales y legislativas del 2001. La batalla electoral del PO fue en el sentido de promover la unidad revolucionaria de la izquierda, con el MST (una de las fracciones del MAS) el MAS y hasta el PC (que se encuentra junto al MST en la llamada “Izquierda Unida”), habiendo conseguido resultados importantes en diversas ocasiones. Lo más importante fue el papel dirigente obtenido por el PO en diversos sectores del movimiento obrero, por ejemplo, en gráficos (PO dirigió la más importante ocupación de fábrica de la década del 1990, la de Editorial Atlántida) y sobre todo en el movimiento mayoritariamente compuesto por desocupados (Argentina posee la más alta tasa de desempleo del planeta) conocido como *piqueteros*. Los acontecimientos de finales del 2001 no tomaron al PO de sorpresa, al contrario, fuera la única organización de izquierda que previera, en los meses previos, la probable caída de De la Rua-Cavallo, y la eclosión de una situación revolucionaria. Desde 1996, el PO propuso una campaña internacional por la refundación de la IV Internacional. El PO planteó esta campaña a diversos agrupamientos internacionales trotskistas, incluida la LIT. El PO en ningún momento cejó en su empeño internacionalista, participando de modo independiente en el Foro de San Pablo, convocado por el PT del Brasil y el PC cubano, rompiendo con aquel cuando se recusó a excluir a uno de los partidos que decretara el Estado de Sitio y la persecución de militantes sindicales en Bolivia.

capitalistas. La Argentina entró oficialmente en cesación de pagos luego de que el gobierno incumplió con el servicio de 28 millones de dólares de una emisión de bonos denominada en liras y con vencimiento en 2007. Al colapso económico debía seguirle, el colapso político del régimen. Pero las conspiraciones políticas de la burguesía no salían de las sombras porque todos los sectores capitalistas temían una explosión popular.

La veían venir de la mano de los 20.000 trabajadores que marcharon en Córdoba contra De la Sota y de los miles que salieron a enfrentar el gobierno represivo de Sobisch en Neuquén, en la ocupación de la fábrica Zanón en Neuquén, y del Edificio Costanera de Telefónica (en Buenos Aires), por sus trabajadores y en las movilizaciones de Emfer y Aceros Bragado, en la movilización de los trabajadores de la cultura, de los docentes universitarios y de los trabajadores del Teatro Colón y, sobre todo, en la movilización de cinco mil piqueteros en la Capital, por iniciativa del Polo Obrero (vinculado al PO) y el MTR (Movimiento Teresa Rodríguez) entre otras organizaciones piqueteras.

Las manifestaciones en el interior tenían un carácter de masas: un *cordobazo* contra De la Sota (gobernador peronista de Córdoba) y una sostenida huelga de empleados estatales, que terminó convirtiéndose en una virtual huelga por tiempo indeterminado en Neuquén fueron los puntos más altos de las primeras semanas de diciembre. También fue muy alta la movilización piquetera del 5 de diciembre, convocada por el Polo y el MTR bajo la consigna "Por una Navidad sin hambre, Fuera De La Rúa-Cavallo" que tuvo un carácter nacional. Además de la importantísima movilización en Capital, hubo manifestaciones piqueteras en Córdoba, Tartagal y Tucumán.

El Partido Obrero, reunido el fin de semana del 8/9 de diciembre, caracterizaba que la crisis de poder que enfrentaba la Argentina era una expresión de la descomposición de las propias relaciones sociales capitalistas que llevaba a la quiebra de los regímenes políticos existentes y del Estado. Ponía de manifiesto la impotencia de las alternativas políticas, expresadas en un Congreso "incapaz de autoconvocarse al término de las sesiones ordinarias" y en el compromiso del PJ, el Frepaso, el ARI y el Polo Social (representantes de la “oposición”, inclusive “de izquierda”), a instancias de la Iglesia, en la terminación del mandato presidencial. Y resaltó el crecimiento de la movilización popular y sus perspectivas. Una parte de las masas ya estaba protagonizando movilizaciones cuya envergadura remitía al *cordobazo*.[112]

La provincia de Neuquén, por su lado, iba por el camino de una huelga general que, mediante la intervención de los obreros de Zanón, ha hecho pie en la industria. Había una tendencia a la ocupación de fábricas y el reclamo de la estatización de las que cerraban o despedían se iba haciendo popular. La rebelión popular y las crisis en las provincias se perfilaban como los detonantes de una próxima etapa. La crisis de poder, que culminaba la experiencia capitalista iniciada en 1989 con el menemismo y el proceso político monopolizado por peronistas, radicales y frepasistas, confirmaba el acierto de la necesidad de una Asamblea Constituyente para reorganizar política y socialmente al país quebrado por la burguesía.

La tendencia a la rebelión popular se manifestaba en todos los poros de la sociedad. Pocos días antes de la pueblada, la CTA, una de las centrales sindicales, convocó una "consulta popular" que concitó la atención de dos millones de personas pero que fracasó manifiestamente en Córdoba y Neuquén, las dos provincias que se encontraban a la

[112] Jornada obrero - popular del 29 de mayo de 1969, en Córdoba, que inauguró una nueva etapa política, caracterizada por las insurrecciones populares en diversas ciudades del país, siendo el inicio del fin de la dictadura militar instaurada em 1966, y del retorno del peronismo al poder em 1973.

cabeza de la rebelión popular. Mientras la CTA planteaba que "el próximo paso es la discusión del presupuesto", los trabajadores marchaban en las calles y manifestaban frente a los supermercados y a los centros de poder político.

También se manifestó en el paro convocado por la CGT, que sólo logró tener fuerza allí donde, como Neuquén, Córdoba, Telefónica, empalmaba con la tendencia de lucha en curso. El paro de la "CGT Moyano", la otra central sindical, fue políticamente impotente (por la división de la burocracia y por el carácter de conciliación con la patronal que le imprimió Moyano y por su negativa a continuarlo). La conclusión fundamental de la huelga era que el paro general aislado, resuelto desde arriba, se había agotado como instrumento parcial o deformado de lucha, no es capaz de dar cuenta de la situación de las masas, e incluso, está en contradicción con la tendencia a la rebelión popular que ya había comenzado.

Se comenzaban a destacar otras formas de lucha como las ocupaciones de empresas, las movilizaciones a los supermercados, las marchas políticas y las huelgas indefinidas y parciales provinciales. Una conjunción de estos movimientos, inevitable a medida que se acentuaba la descomposición económica y la política desorganizadora del gobierno, deberáa llevar a la huelga política de masas y a una nueva organización de masas de los explotados. El PO definía, el 20 de diciembre, que "la tarea del momento es organizar los piquetes - de obreros, de desocupados, de pequeños comerciantes y profesionales - y las asambleas populares que los reúnan a todos ellos".

En medio a la gigantesca movilización, un conjunto de partidos de izquierda emitió un comunicado en común:

Las organizaciones abajo firmantes, frente a la profundización de la crisis política, económica y social hacen un llamado a movilizarse en forma independiente el miércoles 12 y organizar el paro activo el jueves 13, para enfrentar esta verdadera catástrofe que se descarga sobre los trabajadores y sectores populares y proponer una salida alternativa, obrera y popular, a la crisis.

Frente a la nueva fuga de capitales el gobierno responde confiscando el salario del pueblo trabajador y perjudicando a los pequeños ahorristas. Se está provocando la bancarrota económica generalizada que agrava brutalmente la miseria social. Arreciarán los despidos y suspensiones masivas, se agrava el festival de bonos provinciales para el pago de salarios y se plantean nuevos ajustes a través del presupuesto 2002. Frente al agotamiento de la convertibilidad, tanto la salida devaluacionista que proponen la UIA y otros sectores patronales como la variante de dolarización, significan un nuevo y feroz ataque a los trabajadores y el pueblo. Los impulsores de ambas variantes están por mantener el nefasto Déficit Cero.

A pesar de la tregua que las centrales sindicales le han dado al gobierno hasta este momento, las luchas del pueblo trabajador han crecido. Es necesario respaldarlas y desarrollarlas hasta derrotar el ajuste, a todo este modelo y sistema en crisis y al gobierno que lo sustenta. Y es necesaria una salida distinta para el país incompatible con el actual sistema, sostenido por la Alianza y el PJ, y que exprese una transformación de fondo.

Llamamos a concretar ya la convocatoria a la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, junto a los sectores populares saqueados por el sistema.

Por una alternativa obrera y popular: Fuera De la Rua Cavallo. No al FMI - No al pago de la deuda - Nacionalización de la banca - Reestatización de las AFJP - Apoyo a todas las luchas de los trabajadores - Por un plan de lucha nacional progresivo y escalonado hasta derrotar este sistema - Libertad a Ali, Castells y demás presos. Desprocesamiento a los luchadores

Partido Obrero, Izquierda Unida (PC, MST), Movimiento Independiente de Jubilados y pensionados, MAS, PTS, FOS

A esa altura del proceso político, resultaba claro que el gobierno De La Rúa-Cavallo acabaría sus días como consecuencia de la rebelión popular. Un recambio del parlamento sería una consecuencia subordinada de los acontecimientos que habían escapado a su control. La fase final de la "pueblada" comenzó el miércoles 19 de diciembre, en el mismo momento en que De La Rúa anunció el "estado de sitio". Decenas de miles salieron a la calle y avanzaron hacia el Congreso y de allí a la Plaza de Mayo. Los medios que calificaron esta movilización como 'pacífica' y de 'clase media' pasaron por alto que se trataba de la manifestación más subversiva que se podía imaginar: primero porque convalidaba todas las manifestaciones populares de ese día y del anterior, contra los supermercados, contra la municipalidad de Córdoba, en el Banco Provincia y la casa de gobierno de La Plata; segundo porque salía a quebrar el "estado de sitio", o sea la máxima expresión de la violencia del Estado capitalista, y por lo tanto, salía a quebrar al propio gobierno.

La "clase media" se había hecho piquetera, un giro que era el resultado de un largo proceso de experiencia política y que ya se había manifestado con anterioridad, aunque en forma parcial, en la lucha de Aerolíneas, en los cortes de calles contra las inundaciones y en la aplastante derrota sufrida por Franja Morada (agrupación vinculada a la UCR) en las universidades. Allí ya se escuchó la consigna que se convirtió en el programa político de la movilización y que el pueblo en la calle habría de imponer al día siguiente: "¡Que se vayan todos!".

El jueves 20 se completó la obra iniciada no ya el miércoles por la noche, sino en todos los días previos. Hubo una continuidad de objetivos políticos y de protagonistas. La "violencia" comenzó en la propia madrugada del jueves, cuando la policía gaseó a la multitud que llenaba la Plaza de Mayo, precisamente porque la multitud "pacífica" había marchado para derrocar al gobierno y no estaba dispuesta a retirarse hasta ser satisfecha. En esa madrugada se produjeron cientos de detenciones y el primer asesinato en el centro de la Capital. Las patotas de la Federal y de la Side ya comenzaban a poner en funcionamiento la misma modalidad cobarde que unas horas después sería su "marca registrada". De La Rúa comenzaba a irse de la misma forma en que había asumido: asesinando a trabajadores. Debutó con los asesinatos en el puente de Corrientes, terminó con los asesinatos en Plaza de Mayo y el Congreso.

Después de los gases y las detenciones, grupos de manifestantes ocuparon Plaza de Mayo, rodeados por la Guardia de Infantería y la Policía Montada. La renuncia de Cavallo, ministro de economía, no calmó los ánimos: ahora eran los trabajadores y los explotados los que querían más. En las primeras horas del jueves, Mestre y Mathov, políticos radicales aliados de De la Rua, conspiran con los jefes policiales: la orden era "despejar la Plaza de Mayo". Sabían que la movilización era imparable. Ya no les alcanzaba el "estado de sitio": los asesinatos, los heridos, las detenciones ilegales, las torturas y la reaparición de los "grupos de tareas" eran entera responsabilidad política de estos "demócratas" aterrorizados.

Pero el salvajismo de la represión entonces convenció al pueblo, todavía más, de que había que echarlos, que había que pelear hasta que se fuesen. A las diez de la mañana, recomenzó la represión: detenidos, apaleados, gaseados. Pero ya hay miles que marchan a la Plaza. En cada esquina, grupos de manifestantes, con pañuelos en el rostro para aminorar los efectos de los gases, tiran piedras y arman barricadas en torno al Obelisco y al Teatro Colón, por donde venían las columnas que habían partido de Congreso. La caballería carga contra las Madres de Plaza de Mayo y las golpea rebenque en mano.

La batalla se había generalizado desde antes del mediodía: se luchaba en la Avenida de Mayo y en las dos diagonales que convergen hacia Plaza de Mayo. Las piedras enfrentaban a los gases, a las balas de goma, a la caballería, a las motos y a los hidrantes. En un ambiente irrespirable por los gases, grupos de jóvenes y de no tan jóvenes avanzan, chocan, retroceden, se reagrupan y vuelven a avanzar. En medio de la barbarie policial, el heroísmo y la solidaridad del pueblo no tenía límites. En las refriegas, eran atacados los bancos y otras empresa; su lista era un verdadero índice de los saqueadores de la nación (Citibank, Fiat, HSBC Bank, Banco Comafi), de la corrupción de los políticos patronales (Banco Provincia) y hasta de los símbolos de la explotación capitalista, (como los McDonald's). No hubo saqueos en ninguno de estos casos; contra todo lo que dice la prensa, no se trababa de "vándalos" sino de una explosión de la furia popular contra los verdaderos saqueadores de la Argentina.

A primera hora de la tarde, la batalla alcanzó su punto máximo. Los manifestantes intentaban entrar en la Plaza de Mayo desde Avenida de Mayo, la dos diagonales, las calles del microcentro, desde San Telmo y desde el Bajo, región vecina al Río de la Plata. Rodeaban la Plaza; volaban piedras y se armaban barricadas; a los gases se oponía el humo de las fogatas y los incendios. El Partido Obrero, después de chocar con la policía en el Congreso, marchaba hacia la Plaza por la Diagonal Norte, junto con otros partidos de izquierda y sindicatos combativos. Frente al edificio de YPF, la columna resistía a pie firme la carga de la montada y la hace huir bajo una lluvia de piedras.

Cerca de las 17 horas, una gruesa columna de *motoqueros* hizo su entrada, una vez más, en esta oportunidad por Diagonal Norte. Fueron vivados por los manifestantes y se dirigieron directamente hacia la Plaza de Mayo. Fueron brutalmente reprimidos: dos son asesinados; otros son heridos. A partir de las 18, después de conocerse la renuncia de De La Rúa, la mayoría de los manifestantes refluye. Con las calles adyacentes a la Plaza dominadas por la policía, tienen lugar nuevos asesinatos a sangre fría. Al caer la noche, había caído también el gobierno. Hay más de 3.000 detenidos, cientos de heridos y 33 muertos. Pero el pueblo ha triunfado: no sólo ha volteado a un gobierno odiado; ha abierto una nueva etapa en la historia argentina.

El domingo 16 de diciembre, Jorge Altamira celebrara en un acto público el inicio de la rebelión popular y expuso la política del Partido Obrero en la semana que terminaría con el *argentinazo*: "Estamos frente a una crisis histórica del capitalismo, que no empezó ayer ni hace tres meses. Por eso no hay solución ni con la dolarización, ni con la devaluación, ni con el default. La única solución es nacionalizar la banca, establecer el control obrero, dejar de pagar la deuda externa y que los trabajadores en el gobierno fijen el rumbo de la República Argentina… El pueblo argentino ya ha reaccionado. Cualquiera que conozca la historia de los últimos veinte años sabe que cuando frente a una crisis de esta naturaleza se producen la movilizaciones que hay en Neuquén, las tomas de fábrica que hay en Neuquén, las movilizaciones de Córdoba, la ocupación de Telefónica y de Telecom, los cacerolazos de la clase media, los cortes de ruta de los desocupados, sabe que el levantamiento popular contra este régimen ya ha comenzado en las últimas semanas y se va a desenvolver todavía más profundamente en las próxima. El proceso de lucha popular ya ha comenzado. El planteamiento del Partido Obrero es la necesidad de que cada movimiento popular, sea un cacerolazo, sea una ocupación contra los despidos, se convierta en la ocasión de una Asamblea Popular del barrio, del distrito o de la provincia. Que se formen comisiones, se elijan delegados, que gente que sale a la calle a protestar arme una Asamblea Popular que concentre la soberanía del pueblo, que sea el lugar donde se tomen las decisiones. Que a partir de las Asambleas Populares en cada lugar del país, se arme una Asamblea Popular provincial o

nacional que coordine el movimiento de lucha del pueblo argentino, contra los explotadores y los saqueadores."

En la represión del jueves 20 se aplicó la metodología de terrorismo de Estado. Mientras la policía uniformada descargaba andanadas de gases y balas de goma y atropellaba con la caballería, el centro estaba repleto de patotas de civil, que se movilizaban en autos sin identificación. Aparecían de improviso, bajaban de sus autos, disparaban con armas de fuego y balas de plomo y huían dejando muertos o heridos. Otras veces, arrastraban a algún manifestante hasta el auto. También había grupos a pie, de civil, mezclados con la muchedumbre, que de repente detenían a los golpes a algún manifestante que quedaba aislado. Varios detenidos, como Eduardo de Pedro denunciaron haber sido torturados en la Plaza de Mayo con picanas eléctricas "portátiles"; sin excepción, los detenidos fueron brutalmente golpeados.

"Han vuelto a la Plaza a secuestrar gente; son los mismos secuestradores del régimen militar", dijo el diario italiano *La Reppublica*, el 22 de diciembre. Estos "grupos de tareas" fueron los responsables de los primeros asesinatos de la tarde, que tuvieron lugar muy lejos de la Plaza de Mayo: dos manifestantes fueron asesinados a sangre fría en Bernardo de Irigoyen y Rivadavia (a diez cuadras de la Plaza) a las tres de la tarde; uno de ellos con dos balazos. Eran los mismos que asesinaron manifestantes frente al Mercado del Plata cerca de las 19 horas, cuando De La Rúa ya había renunciado y los manifestantes comenzaban a retirarse. Los responsables políticos de estos asesinatos todavía están libres.

12. REVOLUCIÓN O DISOLUCIÓN NACIONAL

Las Asambleas Populares y el Bloque Piquetero Nacional, desde entonces protagonistas centrales de la lucha de clases del país, son los hijos del *argentinazo* del 19-20 de diciembre de 2001. Las Asambleas nacieron al calor de la movilización popular y florecieron como hongos en la semana posterior al Argentinazo. Hicieron su debut en la pueblada que terminó volteando a Rodríguez Saá, presidente peronista nombrado por el parlamento, que sucedió a De la Rua, una semana después. El Bloque Piquetero fue la consecuencia de la delimitación política provocada por el Argentinazo y de la conducta ante la rebelión popular de las direcciones que hasta entonces habían actuado en común en la Asamblea Piquetera. Para el 20 de diciembre, la Asamblea Piquetera había convocado a una manifestación en el Congreso para marchar a Plaza de Mayo. Los acontecimientos llevaron a que el movimiento piquetero pudiera aparecer como la dirección política natural de un proceso de rebelión popular que lo había tenido como su principal protagonista.

Pero horas antes, el mismo 19, cuando el levantamiento popular era evidente, el dirigente D'Elía anunció que la FTV-CTA, sector piquetero peronista, no participaría en la concentración convocada con anticipación por la Asamblea Piquetera porque rechazaba la consigna que ésta había aprobado - "Fuera De La Rúa, Cavallo y los gobernadores del FMI"; pretendía que sólo se extendiera a Cavallo pero no a De La Rúa con la excusa de que era "golpista". La CCC, vinculada al PCR (Partido Comunista Revolucionario), a su vez, aunque criticó a la FTV-CTA, también desistió de marchar al Congreso y a Plaza de Mayo y llamó a realizar acciones locales (lejos de los centros de poder político) porque se oponía al reclamo de la marcha de expulsar también a los gobernadores, algo sintomático de su posterior apoyo crítico a Rodríguez Saá y de su acuerdo con Duhalde en torno a los Consejos Consultivos.

La Asamblea Piquetera, como movimiento, como programa y como perspectiva, estuvo presente en la pueblada por la intervención del Polo Obrero, del MTR y de otras organizaciones piqueteras que la integraban y de los partidos de izquierda que la apoyaban. Las mismas que en un plenario realizado el sábado 22 constituyeron el Bloque Piquetero Nacional.

El corresponsal de *The Guardian*, el sábado 22 de diciembre, decía lo siguiente: "Una calma espectral reina en los devastados distritos comerciales de Buenos Aires, la promesa de cambio en la dirección parece que ha calmado la rabia popular que estalló ante las medidas de austeridad de la administración. Cuando regresó esta calma relativa es cuando se levantó el estado de sitio". Con el défault de 260 mil millones de dólares, el "secuestro" de los depósitos bancarios, la casi disolución del capitalismo argentino, 2002 fue un año de catástrofe económica, con una caída del PIB sin precedentes. Al final de 2002, el producto bruto por habitante en la Argentina seria inferior al del final de los años 1960. En 2002 se produjo una completa depresión: las evaluaciones más moderadas midieron una caída de la economía superior al 10%; después de una recesión continuada desde finales de 1998.

Un retroceso de semejante magnitud sólo se asemeja a los resultados de una destrucción bélica, y sólo admite comparación, en la historia reciente, con la catástrofe acontecida en la ex URSS, provocada por el proceso de restauración capitalista. Ambos casos, el argentino y el ruso, son emblemáticos. El segundo, porque fue presentado originalmente como el renacimiento mismo de la historia y, al mismo tiempo como su culminación. Mientras el viejo país de la propiedad estatizada sucumbía definitivamente, Argentina emergía en el horizonte como el modelo más perfecto de la "nueva economía", aquella que según sus mentores superaría las imperfecciones de su propio pasado, en particular

aboliendo el comportamiento cíclico del capitalismo, terminando, por lo tanto, con las crisis y alumbrando un sendero de ganancias y actividad en perpetuo ascenso.

Bastaba para ello con brindar garantías irrestrictas para el movimiento del capital: desregulando, desestatizando, liberando de toda barrera y aún asegurando con el poder del Estado la bendita y segura movilidad del capital. El economista Cavallo, el artífice e ícono del régimen de Menem, que subió al gobierno en 1989, regaló entonces al mundo la “convertibilidad”, que cumplía la función de aparecer como el sinónimo mismo de la nueva era: la Argentina representaba la perfección de las posibilidades del cálculo económico para el dinero mundial, puesto que cualquier resultado de un negocio al interior del generoso suelo argentino quedaba al mismo tiempo, cristalizado en dólares, la divisa planetaria.

La Argentina de Menem y Cavallo se transformó así en el símbolo mismo del “modelo neoliberal”, del llamado “consenso de Washington”, en suma, del capitalismo. En el ámbito nacional e internacional, durante el primer lustro de los años 90, la economía argentina y los frutos de la convertibilidad se presentaban como evidencia misma de la novedosa realidad. Inclusive en las trincheras del llamado “progresismo” se admitía, al menos, la “lucidez” y capacidad del mentado Cavallo para dar una salida al capitalismo nativo (el mismo progresismo centroizquierdista convocaría al mismo ex ministro para integrar el gobierno de la Alianza, presidido por Fernando de La Rúa, a principios del 2001).

Detrás de las cifras de “crecimiento” de los primeros años de la administración Menem, se escondían contradicciones irresolubles y hasta ficción contable, que fueron transitoriamente alentadas por la coyuntura del mercado de capitales internacional, el estímulo a la especulación financiera, el proceso de privatizaciones -que no fue otra cosa que una enorme confiscación del patrimonio nacional “a precio de banana”- y por la reestructuración de la deuda externa. Pero no es menos cierto que todas las metas de política económica fueron llevadas hasta un extremo prácticamente completo en términos del recetario capitalista moderno. Por esto mismo, porque triunfó, porque dio todo lo que podía dar, el estrépito de la caída es ahora tan brutal.

Se puso de relieve así, no la limitación de tal o cual medida o política económica, sino del sistema capitalista como tal. Lo prueba el hecho de que la bancarrota definitiva correspondió, no al gobierno centro derechista de Menem, sino a su sucesor “centro izquierdista”, impulsado por el Frepaso y su líder Chacho Alvarez, un partido “progresista”, que subió al poder con un planteamiento político similar al que formulaba la dirección mayoritaria del PT en Brasil. Por este motivo, esa misma dirigencia del PT saludó en su oportunidad la victoria de la denominada Alianza sobre el neoliberalismo menemista como si se tratara de una conquista suya.

El primer “éxito” de Menem-Cavallo fue la comentada reestructuración de la deuda que, según el abordaje convencional, reinsertó a la Argentina en el contexto internacional. Recordemos que, cuando Menem accedió a la presidencia, la economía nacional se encontraba paralizada, en cesación de pagos, y la desorganización productiva y comercial progresaba en un contexto hiperinflacionario. La cuestión fue resuelta mediante lo que se conoció como la solución al endeudamiento en los términos del Plan Brady (nombre del entonces secretario del Tesoro de los Estados Unidos): la circulación económica fue retomada, la actividad comenzó a expandirse, los vínculos comerciales y financieros con el exterior fueron restablecidos. Parecía que el problema de la deuda externa había desaparecido.

Bajo el gobierno Menem, al pasar compulsivamente a los trabajadores a las llamadas Administradoras de Fondos de Jubilación Privada (AFJP), el estado tuvo que asumir el

costo del pago a los jubilados que eran financiados con esos fondos, provenientes del descuento de los salarios del personal activo y con los aportes patronales. Estos fueron reducidos “para estimular el empleo (pero la desocupación progresó como nunca hasta alcanzar casi un 50% de la población económicamente activa, si se considera el desempleo abierto y el llamado desempleo encubierto).

El presupuesto público se convirtió así en un gigantesco subsidio al capital financiero. Del total del gasto estatal, casi un 40% era destinado al sistema jubilatorio y hasta un 20% adicional se destinaba a cubrir los intereses de la deuda pública, que se incrementaba. Esto no podía concluir sino en una fantástica bancarrota. El dinero público fue enajenado en proporciones gigantescas para financiar el negocio de los grupos privatizadores (incluidas algunas corporaciones nacionales) y el de los acreedores de la deuda dolarizada .

Se trataba de una bancarrota capitalista, que tenía como contrapartida una expropiación sin precedentes de la población trabajadora, una destrucción similar de fuerzas productivas, y que concluía con una suerte de auto descomposición del sistema económico, y una expropiación que se extendía a buena parte de la clase propietaria. Lo ilustraba las imágenes de la enorme degradación de las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos, así como de su pauperización, alcanzando a casi la mitad de la población que vive bajo la línea de pobreza. La situación argentina fue un caso paradigmático del proceso de autodisolución que acompaña la naturaleza misma del régimen económico y social, que es la manifestación particular de un fenómeno general, una manifestación concentrada de una crisis de alcance mundial, que expresa el agotamiento profundo de la forma social de producción capitalista.

En varias partes del mundo comenzaron campañas de solidaridad con el pueblo argentino, consistentes en la recolección de alimentos para paliar la situación de extrema pobreza. ¡Pero la Argentina nadaba en un mar de alimentos! En el año 2001 tuvo la mayor cosecha agrícola de toda su historia. La industria se encontraba con una capacidad ociosa también sin precedentes. En el parque automotriz metal-mecánico localizado en la provincia de Córdoba, la industria funcionaba desde mediados del 2001 sólo una semana por mes. Un cuadro desolador de máquinas paradas y obreros desocupados.

Desde principios del 2001 se fugaron del país alrededor de 25.000 millones de dólares en reservas y depósitos, se estima que en el exterior los grandes propietarios del país posean activos por una cifra que supera los 100.000 millones de dólares. Esa fuga se produjo por el quebranto del proceso de sobre-acumulación, sobre-inversión y sobreproducción. La “pesificación” de los depósitos en dólares, adoptada a comienzos de febrero de 2002 por el gobierno de Duhalde, fue un intento por licuar la deuda de los grandes grupos económicos, que no podrían subsistir si sus pasivos en dólares tuvieran que ser saldados en la divisa norteamericana. ¿Quién pagó esa “transferencia de ingresos”? Lógicamente, los pequeños y medianos ahorristas y las finanzas públicas. El FMI se negó a subsidiar esas maniobras, pretendiendo que una parte entera de los propietarios nacionales y extranjeros rivales fuese liquidada, a favor de la penetración de los capitales norteamericanos. Entonces sí habría “ayuda”.

El detonante de la situación de Argentina fueron las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando la población movilizada en una manifestación de alcance nacional (con epicentro en la histórica Plaza de Mayo) produjo la caída inmediata de un gobierno bajo la presión misma de la insurgencia popular, un gobierno dirigido por un partido afiliado a la Internacional Socialista. Un protagonista clave del “Argentinazo” fue la

clase media “porteña” (de Buenos Aires), la misma que hegemonizó la movilización electoral que llevó a de La Rua y a Chacho Alvarez al poder.

Esa clase media porteña, implacablemente agredida por su propio gobierno, se insurreccionó el 19 y 20 de diciembre, cuando de La Rúa pretendió establecer el Estado de Sitio en el país. Una medida dirigida precisamente a neutralizar a esa misma clase media, a asustarla con los saqueos crecientes que asolaban en el país, con los “pobres” y “hambrientos” que amenazaban las normas de convivencia “democrática” y hasta la pequeña propiedad de productores y comerciantes. En cambio, la clase media se unió a los “pobres” y “saqueadores” y ganó multitudinariamente las calles, cacerola en mano, para echar el Presidente.

Los piqueteros, emergentes de las filas de la desocupación masiva que creció como mancha de aceite en los últimos diez años, son en su inmensa mayoría, ex obreros. Muchos de ellos con experiencia sindical y de lucha previa. Los que levantaron ciudades enteras en el norte argentino en los últimos años, como en Salta, en el extremo noroeste del país, son ex trabajadores de la empresa petrolera estatal que pasaron del reclamo de subsidios al desocupado a la reivindicación de puestos de trabajo genuinos en las empresas privatizadas, formulando inclusive planes de reorganización social y económica de las zonas devastadas por la política confiscatoria de los gobiernos. En noviembre del 2000 una huelga general, convocada por las centrales sindicales, dominadas por burocracias vinculadas a las cliques dirigentes del Estado, fue tomada por los piqueteros.

La Argentina *piquetera*, la Argentina de los piquetes y las cacerolas necesitaba otra política. Había sonado una hora decisiva para la agotada burguesía nativa, para las clases dirigentes históricas, sus partidos y programas. Nada seria como antes. La discusión sobre si Argentina contagiaría a sus vecinos ocupó el centro del escenario. El *tequilazo* mexicano de 1995 y la devaluación brasileña de 1999 fueron anticipos que mostraban el camino hacia el derrumbe. Argentina fue el eslabón siguiente, pero podría haber sido cualquier otro.

Lo que hundía a América Latina no era el simple "contagio" argentino sino las contradicciones del capitalismo mundial. América Latina se hundía bajo el peso de la deuda externa y la crisis de sobreproducción mundial, el vaciamiento financiero, productivo y comercial, el hundimiento de las monedas y los sistemas bancarios, la recesión y la quiebra de empresas. América Latina no enfrentaba una "crisis regional"; la crisis latinoamericana era una de las manifestaciones de la agudeza de la crisis del capitalismo mundial.

Seis meses después del argentinazo, la devaluación uruguaya y el derrumbe brasileño daban un golpe demoledor a Argentina. Esos mercados volvieron a "cerrarse" para las exportaciones argentinas y desaparecieron los supuestos "efectos reactivadores" que sus mentores atribuyeron a la devaluación del peso en enero. Rápidamente pudieron comprobarlo los negociadores argentinos en la llamada "ronda automotriz del Mercosur", que fracasaron en su intento de elevar el cupo de exportaciones automotrices argentinas a Brasil.

La prioridad del gobierno brasileño pasaba por demostrar ante los acreedores internacionales su “capacidad de repago de la deuda”, lo que les impediría elevar su saldo comercial desfavorable con Argentina. Pero, precisamente por las mismas razones -demostrar la capacidad de repago de su deuda- Argentina necesitaba desesperadamente aumentar sus exportaciones a Brasil. Los intereses "nacionales" de las burguesías de Argentina y de Brasil llevaban a su propia creación, el Mercosur, a la ruina. La recesión en curso en Brasil, desde fines del 2001, explicaba la caída del 25% de las

exportaciones argentinas a Brasil en los primeros cinco meses del 2002, a pesar de haber sido "abaratadas" por la devaluación.

Como en 1982, cuando estalló la "crisis de la deuda" después de que México entrara en cesación de pagos, en América Latina se cerraba un ciclo. El Tesoro norteamericano y el FMI tuvieron una política perfectamente definida, enunciada en forma clara por Paul O'Neill, secretario del Tesoro de Estados Unidos: "no hay más salvatajes", "no hay más rescates para Argentina, ni para Brasil, ni para nadie". La debacle agudizó la lucha intra-capitalista por la centralización del capital, la consolidación, el desplazamiento de los más débiles, por la apropiación de las empresas quebradas, la captura de los mercados, la disputa por los despojos.

Pero, así como la crisis de 1982 fue la carta de defunción de las dictaduras de la década de 1970, el colapso latinoamericano comenzó a marcar el fin de los regímenes democratizantes. Se abría en el continente una etapa de furiosa lucha de clases, de caída de regímenes políticos, de golpes y contragolpes del imperialismo, de giros nacionalistas de las burguesías nacionales, y, por sobre todo, de una impetuosa irrupción del movimiento de las masas explotadas en defensa de sus condiciones de vida.

Después del argentinazo, el interregno comandado por Rodríguez Sáa (gobernador de San Luis) fracasó, dando lugar a una salida de crisis, con el gobierno Duhalde (ex gobernador de Buenos Aires). Fue un gobierno votado por la Asamblea Legislativa convalidando un golpe de estado. La Asamblea actuó como títere de un pacto previo y en ésta, nadie denunció la existencia de este golpe de estado.

El gobierno Duhalde fue la alianza entre el gobierno norteamericano y la burguesía industrial, y se sostuvo hasta 2003 sobre la base de la devaluación, un presupuesto austero y el pacto con el FMI.[113] Esto supuso la consumación del *default*, con la quiebra parcial de la banca europea y argentina, tenedora de gran parte de los títulos de la deuda externa, en beneficio de la banca norteamericana. Y también un ataque demoledor contra las masas a través de la devaluación, al mismo tiempo manteniendo el "corralito" sobre los depósitos sin plazo alguno de devolución.

La crisis revolucionaria argentina se proyectó sobre toda la política hemisférica de los EEUU:[114] "La crisis de Argentina representa un nuevo desafío para los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, de lograr un pacto de libre comercio en el Hemisferio Occidental... la tercera economía latinoamericana enfrenta una grave crisis económica y política, además de una cuantiosa deuda externa. El nombramiento de Eduardo Duhalde, senador del partido peronista, como *quinto presidente de Argentina en menos de dos semanas* ha suscitado interrogantes sobre el compromiso a largo plazo del país con la apertura de mercados. En un discurso a la legislatura argentina después de su nombramiento, Duhalde se comprometió a 'terminar con un modelo (económico) agotado que ha sumido en la desesperación a la enorme mayoría de nuestro pueblo', y prometió defender enérgicamente los intereses nacionales mientras Argentina se integra más en la economía mundial. Esto podría complicar el objetivo del gobierno de Bush de concretar el plan de un Area de Libre Comercio de las

---

[113] Duhalde anunció que para sacar al país de una recesión de 42 meses con alto nivel de desempleo, su gobierno decidia poner fin a "décadas de una alianza del poder político con el sector financiero" y en su lugar construir "una nueva alianza basada en el Estado y las empresas productivas nacionales. La comunidad productiva es la que debe gobernar el país".

[114] "Todo parece indicar que Argentina, que ha sido el mejor aliado de Estados Unidos durante más de una década, adoptará una política exterior más independiente tras la inauguración del presidente Eduardo Duhalde" (OPPENHEIMER, Andrés. Del neoliberalismo al neonacionalismo. *El Nuevo Herald*, Miami, 3 de enero de 2002).

Américas (ALCA), que abarque desde Canadá hasta Chile, para el 2005. Previamente, Argentina había sido uno de los mayores propulsores de ese proceso”.[115]

La deuda pública externa del país era, entonces de US$141,000 millones. La crisis argentina desataba una crisis del sistema financiero internacional.

La crisis argentina planteó un estado de disolución nacional. Con el *défault* se llegó a aventar el canje de la Patagonia contra la deuda externa pública argentina, especulándose con la posibilidad de una cesión completa o bien de una suerte de *leasing*. El MIT (Massachusetts Institute of Technology) lanzó un trabajo al respecto, firmado por el economista Rudiger Dornbush. Se mencionó la irrupción en la zona de la sociedad canadiense IMA Exploration, y las tierras adquieridas por Douglas Tompkins, empresario estadounidense y fundador de *Patagonia Land Trust*. Pero la verdadera iniciativa al respecto le pertenecía a Norman Bayley, un lobbyista estadounidense.

En Francia se informó acerca de la indiferencia del gobierno de Buenos Aires, dispuesto a “ceder esta inmensa región a los Estados Unidos y su bancos para borrar su deuda colosal”: “Rico por su petróleo y su agua dulce, el Sur argentino excita codicias”.[116] “Ya sea para criar ovinos como Benetton (700.000 has), pescar truchas como Ted Turner (4.400 has.) o como Joe Lewis (14.000 has.), o hacer fiestas con sus asociados de Planet Hollywood (Schwarzenegger, Willis y Stallone), aun hay un paquete de estancias en venta en la Patagonia".

La misma fuente informaba que “la Península Valdés se ha convertido en inabordable. Los ingleses de la Fundación Ecológica World Land Trust, no obstante, compraron allí la estancia La Esperanza, 7.000 has con vista a las ballenas por 2,8 millones de euros (o sea 400 euros por hectárea)”. La enorme y despoblada provincia de Santa Cruz, también figuraba como un tentador aviso en Libération, proporcionando una lista de adquisiciones increíblemente extensas y a precios de remate: “La estancia La Costa (38.500 has. Con 35 km de costa sobre el Atlántico) está puesta en venta en alrededor de un millón de euros, o sean 26 euros la hectárea. Completa, es decir con galpón de esquila, generador de electricidad, 23 molinos de viento para bombear agua, 3 jeeps, varias casas y sobretodo 15.000 ovinos”. El periodista sabía que el Banco Nación y el Provincia tenían hipotecas en la pampa húmeda sobre 14,5 millones de hectáreas, que rematadas tenían grandes posibilidades de caer en manos extranjeras.

El gobierno de Duhalde había contratado como asesor a Norman Bayley, “miembro de la Fundación Americana Potomac y de la Comisión Trilateral” favorable al cambio de tierra por deuda. La *Patagonia Land Trust* (PLT), a su vez, es una estructura privada dedicada a comprar tierras que luego destina a la conservación del medio ambiente. Esta empresa es dueña de 300.000 hectáreas en el sur de Chile y compró grandes extensiones en Argentina. La firma - administrada por el millonario norteamericano Douglas Tompkins - pagó 15 millones de dólares para comprar también bosques en Corrientes y en el Delta del Paraná. Su principal emprendimiento en Argentina es Monte León, 62.750 hectáreas en la costa de Santa Cruz. La empresa compró también las propiedades cercanas a Monte León, las estancias El Rincón y Dor-Aike, y es dueña de 100.000 hectáreas en los Esteros del Iberá. Tomkins adquirió otras 100.000 hectáreas en Corrientes y 4.000 en el Delta. Las tierras serían administradas por DRT Investment LLC y Vacas LLC, dos empresas del magnate norteamericano. La Argentina (y Chile) son semicolonias.

---

[115] PALMER, Doug. La crisis argentina es un reto al ALCA: la ruptura con su modelo económico conspira contra el libre comercio hemisférico. *El Nuevo Herald*, Miami, 4 de enero de 2002.

[116] *Libération*, Paris, 5 de marzo del 2003.

13. LA EMERGENCIA DEL CHAVISMO EN VENEZUELA

Después del “caracazo” de 1989, una insurrección popular contra la degradación de las condiciones de vida de las masas, que dejó un saldo de casi 300 manifestantes muertos, el sistema político venezolano, basado en el bipartidismo AD (Acción Democrática) – COPEI (demócratas cristianos), entró en picada.[117] Carlos Andrés Pérez, figura señera de la socialdemocracia internacional, presidente y dirigente de AD, acabaría con sus huesos en la cárcel como responsable por un sistema de corrupción capaz de dar vergüenza al político más derechista. La corrupta oligarquía venezolana asistía al fin de la farra de los “petrodólares”.

Acción Democrática era un partido que intervino en varios procesos revolucionarios en la década de 1940, sus dirigentes fueron exiliados y perseguidos. Participaron en una gran insurrección popular en enero de 1958, apenas un año antes de la victoria de la revolución cubana. La juventud universitaria era toda *adeca*. Los derechistas acusaban a Rómulo Betancourt, presidente del partido, de comunista, pero pertenecía a un partido del tipo de los que, en América Latina, nacieron con la Reforma Universitaria de Córdoba del año 1918: el APRA del Perú, la Acción Democrática y el radicalismo argentino.

El otro partido importante en Venezuela era COPEI, el partido de la Iglesia. La democracia cristiana era la otra vertiente, que en el pasado había tenido características franquistas, falangistas (en la década de 1930). Luego, en la posguerra, en la Iglesia empieza a emerger un movimiento demócrata cristiano que busca tener características populares. En los años 1970, Acción Democrática nacionalizó el petróleo venezolano. A partir de los años 80, éstos dos partidos se derrumbaron; aplicaron los planes del FMI, ajustes, desangre de la población. En 1992 el coronel Chávez dio una suerte de golpe de Estado, con coroneles y tenientes coroneles; cuando el pueblo se enteró del levantamiento salió a las calles y se produjo una insurrección popular.

La reacción de toda América Latina, frente a la tentativa de Chávez de llegar al gobierno a la cabeza de un insurrección popular; fue “apoyar la democracia”, inclusive de Fidel Castro, que en una carta dirigida al presidente Carlos Andrés Pérez lo saludó por haber logrado derrotar el golpe. La emergencia del chavismo en Venezuela fue la expresión del derrumbe de la dominación política tradicional de la oligarquía y del imperialismo, y un de un planteamiento que quería alterar las características sociales y políticas de Venezuela sobre bases capitalistas, no sobre bases socialistas.

La crisis se extendió a todas las instituciones del país, incluido el Ejército. Uno de sus oficiales de mayor prestigio, Hugo Chávez Frías, intentó un golpe militar nacionalista en 1992, que fracasó, entre otros motivos, por la intervención directa de los EEUU, y también fue encarcelado, pero después de haber abierto una expectativa política nueva entre los explotados. Puesto en libertad, pasó a actuar políticamente, hasta configurar una corriente política que adoptó el nombre de MVR (Movimiento por la Quinta República), a la cabeza de la cual vencería las elecciones presidenciales de 1998.

Los acontecimientos de 1989 fueron un divisor de aguas en la historia contemporánea de Venezuela. A partir de ese momento, se creó un gran “vacío de referentes políticos”, una descomposición total y creciente del régimen político. Los partidos tradicionales,

[117] En 1989, apenas algunos días después de la asunción de Carlos Andrés Pérez, de la Acción, a la presidencia de Venezuela, el pueblo salió a las calles de Caracas para expresar su repudio al paquete económico, un duro plan de ajuste, de acuerdo a los modelos exigidos por el FMI. La violenta serie de disturbios y saqueos culminó con casi 300 muertos y el ambiente de descontento recrudeció de tal modo que llevó al teniente-coronel Hugo Chávez, comandando cerca de 300 efectivos, a intentar un golpe de Estado el 3 de febrero de 1992.

los partidos del “Pacto de Punto Fijo”, que puso fin a la dictadura de Rojas Pinilla en 1958, habían sucumbido bajo la corrupción y el vacío programático. Por otro lado, la izquierda institucional de la época (MAS) estaba demasiado integrada al sistema del “Pacto de Punto Fijo”, y la izquierda guerrillera había sido desarticulada, por sus políticas o como efecto de la acción represiva del Estado. En ese contexto, en febrero de 1992, un grupo de oficiales del ejército venezolano, organizados en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), desenvolvió su tentativa de golpe de estado, bajo comando del Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frias, entonces comandante del batallón de paracaidistas. En el acto de rendición de sus fuerzas, en una alocución de 40 segundos al vivo por la TV, Chávez asumió la responsabilidad del movimiento, y afirmó que “por ahora” no había conseguido sus objetivos.

Con posterioridad al episodio de 1992, la intendencia de la capital, Caracas, ejercida por el partido de izquierda *Causa R*, convocó a una consulta popular acerca de la permanencia de Carlos Andrés Pérez en el gobierno. El resultado fue de más de 85% de los votos en contra (de Pérez). El trienio 1989-1992 había cambiado radicalmente las perspectivas políticas de Venezuela.

Después de dos años de prisión, Chávez fue amnistiado junto con sus compañeros. Durante varios años, con un pequeño grupo de seguidores, fue articulándose políticamente, hasta transformarse en el fenómeno electoral que, en 1998, llegó a la presidencia de la república, con una victoria contundente. Llegó al poder con una propuesta de refundación de la república, que pasaría por un proceso constituyente y por la renovación de todos los poderes del Estado. Realizó varias consultas electorales (referéndum, Constituyente, renovación de los poderes), todas vencidas por los bolivarianos. El discurso oficial criticaba de forma aguda el modelo “puntofijista”, rescataba la figura del Libertador Simón Bolívar, y se identificaba con los sectores más empobrecidos de la sociedad. El alto clero, los medios de comunicación, la Fedecámaras (central patronal) y la CTV (central sindical ultra-burocratizada) declararon su hostilidad militante a Chávez, y este reaccionó.

Ya en la campaña electoral, el embate simbólico contra Chávez fuera brutal, incluyendo el uso del discurso norteamericano de la “guerra fría”, hablando de la amenaza castro-comunista y cosas semejantes. *El Nacional*, *El Universal*, principales diarios, las emisoras de radio, los canales de televisão, como Venevisión, Globovisión, RCTV, y otros, no escatimaron adjetivos contra Chávez y los bolivarianos. El gobierno respondió con el “Correo del Presidente”, diario oficial de los primeros tiempos del poder chavista, y el programa radial “Aló Presidente”, transmitido semanalmente por la emisora Radio Nacional de Venezuela, y después por el canal estatal de TV, “Venezolana de Televisión”.

La emergencia del liderazgo de Hugo Chávez, sustentado por una coalición política construida improvisadamente, en la cual se integraron figuras históricas de la izquierda venezolana (como su vicepresidente, José Vicente Rangel, ex candidato presidencial del MAS) se explica en el cuadro de la crisis terminal del régimen “partidocrático” de Punto Fijo. Su victoria electoral aplastante le dio enormes medios políticos. Las viejas clases dominantes venezolanas, el propio imperialismo, ya habían notado la quiebra del “sistema” venezolano, que llevó a su viejo líder, Carlos Andrés Pérez, de AD, a la prisión, y desató una ola de escándalos bancarios en la década de 1990.

La tentativa golpista de Chávez, en 1992, expresó la crisis del conjunto del sistema. Siete años después, Chávez llegó al poder por los medios que había despreciado en 1992. No sólo en condiciones políticas cambiantes, sino también bajo una coyuntura económica internacional favorable: el precio del petróleo aumentó de 7 a 20 dólares el

barril, lo que permitió incrementar el ingreso nacional en 25%, aunque la producción cayese 9%. ¿Se trataba, con la victoria "chavista", de una reedición del nacionalismo militar-burgués latinoamericano, al estilo de la victoria peronista de 1945?

Las condiciones eran bien diferentes. En los primeros seis meses de gobierno de Chávez, la economía cayó 6%, provocando la pérdida de 500 mil empleos (el desempleo fue de 12% a 21%). Pero Chávez era el enemigo del sistema precedente, y del propio imperialismo norteamericano, lo que le garantizó la continuidad del apoyo popular. Venezuela posee condiciones excepcionales de negociación con los EEUU, pues disputa con Arabia Saudita el título de mayor suministrador de petróleo a la potencia del norte.

En la Constituyente posterior a su victoria electoral, con el vaciamiento del poder del Congreso y la Corte Suprema, lo que se consagró fue el poder unipersonal de Chávez por encima de las instituciones representativas de cualquier tipo, completado por su propuesta de extender a 6 años el mandato presidencial, con posibilidad de reelección, con la aprobación plebiscitaria de la nueva Constitución, de 395 artículos, con 72% de los votos. Mas allá de los enunciados nacionalistas (el país pasó a llamarse *República Bolivariana de Venezuela*, por ejemplo) lo que hubo fue un refuerzo del poder ejecutivo (y de la figura do presidente) por encima de todas las instituciones. Los viejos partidos burgueses (AD y COPEI) fueron barridos del escenario político, pero la propia izquierda (PCV, MAS, Causa R, y PPT, escisión de aquella) se disolvió en la coalición "chavista".

El apoyo popular se explica por el grado de corrupción y reacción del "sistema democrático" precedente, que llevó de 33% a 67% el porcentaje de venezolanos con ingreso inferior a dos dólares diarios. El empleo precario y el desempleo, por su parte, pasaron a afectar a más del 64% de los trabajadores. El director de la CIA, George J. Tenet, dio al *Select Committee on Intelligence* del Senado norteamericano una declaración reconociendo que la situación en América Latina estaba desestabilizándose, que la región fuera azotada por cinco crisis económicas, en menos de un año. Dentro de ese contexto, se mostró particularmente preocupado con Venezuela, el tercer mayor proveedor de petróleo de los EEUU, resaltando su descontento con el presidente Chávez y la "Revolución Bolivariana".

El gobierno Chávez ejerció un papel fundamental en el control de los abastecimientos por parte de la OPEP, lo que permitió elevar el precio del barril de petróleo de 10 a 25 dólares por barril desde 1999. Chávez evitó con ello un colapso presupuestario de Venezuela. Esa política requirió la supervisión estatal de las inversiones privadas en las áreas de exploración y extracción. Esta estatización parcial fue, sin embargo, acompañada por una política abierta de privatizaciones en lo restante de la economía nacional, en especial las telecomunicaciones.

El gobierno de Chávez estaba realizando una tentativa de nacionalismo económico fiscal, restringido, que se limitaba a ganar para el país la mayor cantidad posible de divisas que resultaban de la explotación del petróleo, combatiendo a la camarilla de la empresa estatal de petróleo, que invertía el dinero en el exterior, construyendo refinerías, estaciones de servicios, etc. Aún así, los ingresos de petróleo que quedaban en Venezuela finalmente iban a los bancos extranjeros, con los cuales el Estado acumuló el 50% de la deuda pública. Chávez no se planteaba el no pago de la deuda externa, ni nacionalizar los bancos, e inauguró la llamada "apertura petrolera" (posibilidad para el capital privado, especialmente extranjero, de participar en el negocio petrolero, iniialmente a travé de las actividades tercerizadas y colaterales) en Venezuela.

A pesar de que Venezuela fuese, junto con Ecuador, uno de los dos únicos países de América del Sur que tenían, en la segunda mitad de los años 1990, saldo positivo en su balanza comercial debido a las exportaciones de petróleo a los EEUU., Chávez no logró contener la crisis económica y social, agravada por la fuga de capitales, así como por las crecidas y desmoronamientos que ocurrieron a fines de 1999 y causaron enormes perjuicios, valuados entre U$S 15 y U$S 20 mil millones.

La situación en Venezuela se deterioró y, a fines de 2001, se volvió bastante inestable, indicando que un proceso de desestabilización del gobierno estaba en curso. Y, dada la sobre-valorización de la moneda venezolana - el bolívar - Hugo Chávez liberó el cambio a comienzos de 2002, abandonando el sistema de bandas, a fin de detener la sangría en las reservas internacionales que cayeron de U$S 16,1 mil millones de dólares en enero de 2001 a U$S 12,2 mil millones en diciembre, la mayor caída en una década, lo que redujo las reservas del Banco Central en 23,7%.

Cerca de U$S 700 millones se evadieron de Venezuela solamente en la primera semana de febrero de 2002. La reducción de las reservas internacionales, acompañada por la caída de los precios del petróleo, le dejó poco espacio de maniobra. Y, en medio de su peor crisis política, Hugo Chávez tuvo que hacer una completa revisión en el presupuesto de U$S 34,34 mil millones, con la reducción de gastos en un 7% y un recorte de deudas del gobierno a la mitad, un ajuste económico tan fuerte que derribó abruptamente el valor del bolívar (19% en relación al dólar) y transformó el centro de Caracas en un escenario similar al de Buenos Aires en diciembre de 2001.[118]

No menos contradictorio era el planteo de Chávez de contraponer al FMI, a la deuda externa, y al ALCA, un eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires: el gobierno brasileño (Lula) no se enfrentaba al FMI, sino a los sindicatos y a los campesinos, o sea que era un engaño ubicarlo, incluso potencialmente, en un frente antiimperialista. La unidad latinoamericana bajo la dirección de estas fuerzas era una impostura; lo mismo, que éstas puedan oponer una Alternativa Bolivariana (ALBA) al ALCAque todos los gobiernos del continente se comprometieron a firmar con Estados Unidos.

Chávez no propuso repudiar la deuda externa sino postergar su pago por cinco años, lo cual suponía que los intereses de esa deuda serían capitalizados durante este período, y que pasarían a engrosar el monto total de la deuda. La crítica de Chávez a la deuda "externa" tenía una ambigüedad, toda vez que su gobierno estaba mayormente endeudado con la banca local, o sea que su deuda con los acreedores extranjeros que dominan la banca, era "interna".

Pero Chávez también trataba de ganar para el pais la mayor cantidad posible de divisas que resultaban de la explotación, era un gobierno de “nacionalismo fiscal. EY en este punto tuvo un choque importante con el imperialismo. Aunque en Venezuela el petróleo estuviese nacionalizado, los grandes monopolios petroleros internacionales lograron encaramar una camarilla en la empresa estatal de petróleo. Esta invertía el dinero que ganaba Venezuela con el petróleo en el exterior, construyendo refinerías, construyendo estaciones de servicios, y dejaba las divisas en el exterior, reduciendo el ingreso fiscal de Venezuela.

Un estudio muy importante había llegado a la conclusión de que Venezuela ganaba más cuando la explotación del petróleo era privada que cuando lo hacía el Estado, es decir que, cuando el petróleo era yanqui, ingresaban más dólares a Venezuela que cuando los "nacionalistas" (AD) venezolanos echaron a los yanquis. Chávez decidió despedir,

---

[118] MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. Los EE.UU. y la crisis en Venezuela. *La Onda Digital*, enero de 2003.

entonces, a la plana mayor de la empresa estatal, y cambiar esa situación de saqueo. Este problema provocó el estallido de toda la clase capitalista de Venezuela, que empezó a atacar a Chávez, porque este había puesto el dedo en la llaga de como se estaba saqueando a Venezuela.

Orientado por el principio de que “el pueblo integrado como nación constituía el poder soberano”, por lo que podía romper revolucionariamente con el régimen jurídico, político o socio-económico que no se adecuase a sus aspiraciones o que fuese obstáculo a su progreso, Chávez convocó un referéndum para votar una nueva Constitución, aprobada por 71,21% de los electores, cambiando las estructuras políticas y jurídicas y el nombre del país a República Bolivariana de Venezuela. Esa Constitución rompió el modelo democrático tradicional, dentro del cual durante 42 años, dos partidos - Acción Democrática y Copei - se repartieran el poder. Y Chávez, cuyo mandato de presidente de la República fue ampliado para 6 años y confirmado a través de nuevas elecciones realizadas en 2000, reorientó la política exterior de Venezuela, estrechando relaciones con Cuba, con la cual firmó un acuerdo para la venta de 53.000 barriles diarios de petróleo a precios de mercado, así como con Irak y Libia, vistos como enemigos de los EEUU.

En 2001, el gobierno de Chávez soportó una ofensiva de "cacerolazos", al mejor estilo del *pinochetazo* de 1973, en Chile. Bajo la batuta de las grandes cámaras empresariales se preparó una movilización y un paro general de actividades, para reclamar la destitución de Chávez. La CTV, central sindical, se sumó a la convocatoria contra-revolucionaria. Chávez declaró que estaba "dispuesto a coger el fusil" y denunció que se "quiere reeditar lo que pasó en Chile con Allende".

Chávez no había resuelto ninguno de los problemas de las masas de Venezuela, ni los del subdesarrollo del país. No había afectado la relación privilegiada de Venezuela con EEUU, abasteciendo regularmente los puertos norteamericanos con petróleo, que llega 10 veces más rápido que los embarques desde el Golfo. Como nunca antes, el petróleo representaba más del 70% de las divisas que ingresaban al país, transformado en la casi exclusiva fuente de ingresos fiscales. El mercado interno venezolano se encontraba destruido, con una alta tasa de desocupación. En este cuadro estallaron durante 2001 huelgas de estatales, docentes y petroleros.

Pero cuando Chávez se delimitó del imperialismo frente al ataque a Afganistán, por primera vez, los EEUU adoptaron un tratamiento menos tolerante con la “agitación populista” y amenazaron con una ruptura. Horas antes que expiraran los poderes legislativos extraordinarios del gobierno, Chávez decretó un conjunto de medidas que atacaban los intereses de la oligarquía agraria y gravaban con mayores regalías la producción petrolera. Los planteos no implicaban una nacionalización, menos aún la "cubanización" (expropiación) que le achacaba la oposición burguesa. Incluso previa mayores créditos a quienes aumentasen la utilización productiva del suelo.

En ese momento, para Cass Ballenger, un representante republicano de Carolina del Norte, sustentador de Chávez en el Comité de Relaciones Internacionales del parlamento norteamericano, "las prudentes relaciones públicas (de Venezuela con EEUU) se han venido arruinando". Los yanquis comenzaron su presión quitándole a Venezuela "preferencias", pero sin romper los puentes.[119] En noviembre de 2001 el chavismo insinuó por primera vez medidas nacionalistas, más allá de la retórica que caracterizó casi tres años de gobierno sin ninguna reforma sustancial. Bajo Chávez, la

[119] MALAJ, Norberto. Venezuela: Los yanquis y Chávez hacen guantes. *Prensa Obrera* nº 732, Buenos Aires, 6 de diciembre de 2001.

subordinación del balance de pagos del país y del erario público a los resultados de las exportaciones petroleras, en particular a los EEUU, alcanzaron su cénit. Los anuncios de una reforma agraria y de nuevas reglas para la explotación petrolera dieron lugar, el 10 de noviembre de ese año, al "nacimiento de la contra-revolución", tras la exitosa huelga general convocada por Fedecámaras, la confederación patronal.

En inicios de 2002, no habían pasado 10 días de la multitudinaria conmemoración del aniversario de la tentativa chavista de 1992, en la cual el régimen chavista movilizó cerca de 2 millones de personas, cuando Chávez decretó un "plan de ajuste" que el FMI y el Tesoro norteamericano no dudaron en caracterizar como estando "en la dirección correcta". Se recortó brutalmente el presupuesto de gastos y se desató un impuesto al consumo popular (incluído un impuesto a las transacciones bancarias). También se declaró la libre flotación del bolívar para enfrentar la persistente caída de las reservas y la fuga de capitales, que había superado los 2 mil millones de dólares desde principios de año. La moneda se devaluó, en 24 horas, más de un 30%, anunciándose una espiral inflacionaria en los productos de primera necesidad. Chávez explicó que los coletazos de la crisis argentina habían afectado sus planes.

Frente a los primeros "cacerolazos" de la reacción, Chávez había amenazado con "desenvainar" la espada. Pero tuvo que hacer frente a la columna vertebral de la reacción ideológica del país: la Iglesia Católica. La ley agraria, que fue atacada por el 1% de la población, que controla el 60% de los campos y ranchos del país, salía al cruce de un proceso de lucha agraria ascendente, negando la adjudicación de parcelas del Estado a los grupos de “desarrapados” que invadieron fincas a partir del 1º de octubre de 2001. La ley trataba como latifundios y gravaba con impuestos extraordinarios sólo los predios inexplotados de más de 5 mil hectáreas. Tras el paro oligárquico-imperialista de diciembre de 2001, el gobierno se allanó a negociaciones parlamentarias, y la amenaza chavista de movilizar a los campesinos en defensa de los decretos-leyes nunca pasó de las palabras. La reforma inmobiliaria de noviembre, y la nueva ley petrolera nacionalista, fueron aplastadas por la Legislatura.

No es casual que el “paquetazo” de Chávez viniera de la mano de una oferta a los "opositores" para "envainar la espada", en particular, dirigida a sus pares del frente interno militar. Pero el imperialismo estaba lejos de aminorar sus presiones. Los yanquis tomaron directamente la batuta de la oposición. Todos los movimientos efectuados desde la huelga patronal del 10 de diciembre eran consultados con la embajada norteamericana en Caracas. Los yanquis necesitaban encolumnar a Venezuela, en particular, detrás del Plan Colombia.

Para esto montaron toda una serie de provocaciones sobre supuestas complicidades del chavismo con las FARC. Colombia, además de tener una vasta frontera con Venezuela, es también su principal socio comercial, después de los EEUU. La política de pinzas de los yankis tenía en cuenta que la oposición "carece de liderazgo político y representa a una coalición aún poco firme de intereses sectoriales sin un programa".[120] Los viejos partidos "mayoritarios" (Acción Democrática y el COPEI) estaban ya descartados como elenco de recambio. Y, a pesar de los crecientes pronunciamientos militares, contra Chávez, era poco, si no ninguno, el respaldo dentro del ejército para dar un golpe militar.

Con el "paquetazo", Chávez veía esfumarse la principal conquista que podía esgrimir: la baja tasa inflacionaria. La oligarquía venezolana dió un tibio apoyo a esas medidas. Dos veteranos políticos “izquierdistas” (el canciller Rangel y el ministro de Interior, Luis

[120] *The Economist*, Londres, 14 de diciembre de 2001.

Miquelena) actuaron como constructores de puentes entre Chávez y la oposición de derecha (que pasó a ser llamada de "escuálida", debido a su falta de base popular).

Los EEUU estuvieron en el centro de los preparativos para deponer al presidente Chávez, pues altos funcionarios de la Administración Bush ya se habían encontrado, diversas veces, con los dirigentes de la coalición que articulaba el golpe de estado en Venezuela. Y sus declaraciones iban en esa dirección, al punto que la agitación en Caracas recrudeció y, dos días después, el 7 de febrero, el coronel de la Aviación, Pedro Vicente Soto Fuentes, y el capitán de la Guardia Nacional, Pedro Flores Rivero, apoyados por otros militares, se rebelaron, exigiendo la renuncia de Hugo Chávez, que Donna Hrinak, entonces embajadora de los EEUU en Caracas, acusó luego de tener "simpatía" por la guerrilla colombiana. Y, mientras Chávez consiguiese dominar la rebelión, el presidente George W. Bush decidió formalizar su aislamiento, dentro del sistema interamericano y regional, al pedir que Venezuela no fuese convocada para la reunión de los países andinos, a realizarse el 23 de marzo de 2002 en el Perú. Bush demostró así que los EE.UU. no estaban más dispuestos a aceptar la inflexión de Venezuela a una especie de nacionalismo de izquierda.

Como reconoció el historiador Kenneth Maxwell, miembro del *Council of Foreign Relations* de los EEUU, después del 11 de septiembre la actitud americana se endureció, y nadie en Washington se declararía infeliz si Chávez dejase el gobierno, no sólo, por cierto, porque él se aproximara a Fidel Castro y a los jefes de gobierno de Irak, Saddam Hussein y de Libia, Muammad Kadafi, sino también porque Venezuela, dentro del Bloque Andino, pasara a constituir el contrapunto de Brasil, en la resistencia a la implantación del ALCAy se oponía a la intervención multilateral en Colombia. Y la atmósfera para un golpe de estado se conformó cuando la Central de los Trabajadores Venezolanos (CTV), controlada por los partidarios de Carlos Andrés Pérez, convocó, el 6 de abril, a una huelga general de 24 horas, por motivos salariales, contando con el respaldo de la poderosa organización patronal - Fedecámaras - y otros sectores civiles.[121]

[121] "Desde junio de 2001, por lo menos, el coronel Ronald MacCammon, agregado militar de los EE.UU. en Venezuela, y su asistente, teniente-coronel James Rogers, ya iban a examinar con los militares venezolanos la posibilidad de derribar a Chávez, según Wayne Madsen, el antiguo agente del servicio de inteligencia de la marina norteamericana. Y, en la medida en que la situación económica y la seguridad de Venezuela se deterioraron, sobre todo a partir de fines de 2001, el gobierno de George W. Bush trató de aprovechar el creciente caos en Venezuela para unir las fuerzas de oposición y proveerlas con planeamiento y recursos de inteligencia de modo de convertir la huelga de los trabajadores en la industria del petróleo en un movimiento para derribar a Chávez de la presidencia, aunque esto significase una ruptura de la legalidad constitucional y del régimen democrático. En el año 2001, los EEUU canalizaron centenas de millares de dólares para los grupos americanos y venezolanos adversos a Chávez, inclusive la CTV, a través de la *National Endowment for Democracy*, agencia creada por el Congreso, que cuadruplicó e incrementó las donaciones, elevando su presupuesto para Venezuela en más de US$ 877.000, al tiempo que las condiciones en Caracas se agravaron. Y los agentes de la CIA y de la DIA19 actuaron junto a los militares venezolanos, a los dirigentes de Fedecámaras y a los líderes sindicales, con el objetivo de coordinar la conversión de lo que sería una pequeña huelga en demostración de protesta e indignación contra los nombres designados por Chávez para integrar el cuerpo de directores de la compañía estatal de petróleo (PDVSA), con el claro objetivo de crear una atmósfera de incertidumbre en Venezuela, al paralizar su más importante industria, responsable por cerca de 80% de las exportaciones del país y por casi 15% de las importaciones de petróleo de los EE.UU., porcentaje mayor que el de Arabia Saudita. De hecho, el papel de Venezuela, con las mayores reservas de petróleo y gas fuera de Oriente Medio, se tornó crucial para la seguridad energética de los EEUU, de los que era proveedora sin interrupciones hacía más de un siglo. De esta forma, de acuerdo a Alex Volberding y Larry Birns, del *Council on Hemispheric Affairs* (COHA), si Henry Kissinger estaba en lo cierto al insistir en que cualquier amenaza externa a los depósitos de petróleo de Arabia Saudita constituiría un *casus belli* para los EEUU, lo mismo podría ser argüido con respecto a Venezuela, que era el quinto mayor exportador de

En abril de 2002 la tentativa golpista dió el paso definitivo, destituyendo a Chávez y nombrando en su lugar a Carmona, presidente de la Fedecámaras. La crisis se había agravado con la destitución de siete altos ejecutivos de la compañía Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), en virtud del conflicto en que estaban con la dirección nombrada por Chávez. Y el 10 de abril, con el objetivo declarado de obligar a Chávez a salir del gobierno, los dirigentes de la CTV y de la Fedecámaras declararon que la huelga general sería indefinida. Al día siguiente, instaron a la multitud a marchar al Palacio Miraflores, con el objetivo de exigir su renuncia. Y, en la secuencia de esa demostración de protesta y actos de violencia, en que las tropas de la Guardia Nacional intervinieron y, por lo menos 15 personas murieron y cerca de 110 resultaron heridas, por balas que partieron de agentes provocadores, francotiradores colocados en las ventanas de algunos edificios de Caracas, el golpe de estado fue perpetrado.

Del 11 al 12 de abril, luego de esos acontecimientos, tres generales prendieron a Chávez, lo llevaron para el Fuerte Tiuna, escoltado por el antiguo ministro de Defensa, José Vicente Rangel, y por el jefe de la seguridad del Palacio Miraflores, Manuel Rosendo y el general Lucas Rincón Romero, jefe del Estado Mayor del Ejército de Venezuela, anunció que renunciaría a la presidencia de la República. Pedro Carmona Estanca, presidente de Fedecámaras, asumió entonces el gobierno de Venezuela, contando con el apoyo de los medios de comunicación, TVs, radios y diarios.

Charles Shapiro, que el 9 de marzo asumiera el cargo de embajador de los EE.UU. en Caracas, visitó inmediatamente a Pedro Carmona, lo que implícitamente significó el reconocimiento de su gobierno, mientras que el FMI, anunciaba que tenía recursos financieros para Venezuela, en caso de ser necesario. El vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, dijo a la prensa que los detalles no eran muy claros, sin embargo "sabemos que la política de Chávez provocó la crisis", al intentar reprimir una demostración pacífica. De esta manera, en vez de condenar la destitución de un presidente democráticamente electo, tentó negar que en Caracas ocurriera un golpe militar, insistiendo en responsabilizar a Chávez de su propia caída.

Ari Fleischer reconoció que altos funcionarios del gobierno Bush se encontraron con varios personajes de la oposición a Chávez, pero afirmó que ellos no estimularon la intentona. Una fuente del Pentágono también confirmó que hasta el propio jefe del Estado Mayor del Ejército de Venezuela, general Lucas Romero Rincón, que se rehusó a enviar tanques para proteger el Palacio Miraflores y anunció la renuncia de Chávez, tuviera, el 18 de diciembre anterior, una reunión con el adjunto del secretario de Defensa Asistente, Roger Pardo-Maurer.

Sin embargo, en menos de 24 horas, una impresionante reacción popular, con millares de personas en las calles, desbarató la tentativa golpista, destituyendo a Carmona (que llegó a ser reconocido *de facto* por los EEUU) y reponiendo en el gobierno a Hugo Chávez. El tiroteo de los manifestantes que rodeaban Miraflores (sede del palacio de gobierno), el día que “cayó” Chávez, fue utilizado como el gran argumento para justificar el golpe de Estado. Pero, fracasado el golpe, comenzó a salir a la luz que los

---

petróleo del mundo y el tercer mayor proveedor de los EEUU, en cuyo mercado su industria energética se integraba crecientemente. Sin embargo, todo indica que los EE.UU. no sólo animaron y financiaron el golpe de estado contra Chávez. Militares americanos también participaron directamente de su ejecución. De acuerdo a diversas informaciones, en la noche del 11 al 12 de abril, el coronel Ronald MacCammon, agregado militar de los EE.UU. en Venezuela y su asistente, teniente-coronel James Rogers, permanecieron dentro de la Comandancia del Ejército, en el Fuerte Tiuna - principal unidad militar de la capital - asesorando a los generales que desobedecieron a Chávez y lo destituyeron de la presidencia de Venezuela” (MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. Los EE.UU. y la crisis en Venezuela. *La Onda Digital*, enero de 2003.).

disparos habían sido realizados por provocadores armados por los propios golpistas: "Policías de la Alcaldía de Caracas, controlada por el regidor Alfredo Peña, opositor a Chávez, hicieron uso de las armas. Los promotores del golpe colocaron tiradores en sitios estratégicos para disparar contra la manifestación opositora y también sobre la concentración que defendía la sede presidencial".[122] Los francotiradores golpistas explicaban un hecho aparentemente contradictorio: si los disparos provenían de los chavistas, ¿por qué el 90% de los muertos y heridos eran simpatizantes de Chávez?

Pedro Carmona, imaginando que el apoyo de los barrios ricos de Caracas y de las clases medias altas significaba respaldo popular, se excedió, animado posiblemente por los elementos más radicales de la oposición y se sacó la máscara de la legalidad, con la que los EE.UU. pretendieron encubrir el golpe de estado. Disolvió la Asamblea Nacional, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Y esta iniciativa suya asustó al jefe de las Fuerzas Armadas, Efraín Vázquez, que había apoyado la manifestación popular y ordenara la detención de Chávez, y le retiró el apoyo de los cuarteles. "Me salgo de la jugada" - dijo a Luis Miquilena, ex ministro de Interior y Justicia, reconociendo que fuera un error dejarse llevar por una persona que iba a conducir el país a un baño de sangre. La CTV, que no había sido consultada respecto a tales medidas, se sintió traicionada, pues, de acuerdo a lo declarado por su secretario general, Carlos Ortega, ellas atentaban contra "el derecho y la libertad del movimiento obrero".

La alianza contra Chávez, dirigida por Pedro Carmona, se desmoronó. Y, mientras las camadas más pobres de la población, favorables a Chávez, ocupaban las calles de Caracas, saqueando las tiendas, extendiéndose la agitación por las ciudades de Guarenas, Los Teques, Coro y Maracay, la brigada de paracaidistas, comandada por el general Raúl Baudel, así como otros regimientos, se sublevaron contra la presidencia de facto de Pedro Carmona, ya desafiado por William Lara, líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, que anunció, desde el interior del palacio Miraflores, que el vicepresidente Diosdado Cabello asumiría hasta la vuelta de Chávez al gobierno.[123]

La crisis política que produjo el derrocamiento y más tarde la reposición de Hugo Chávez no concluyó de inmediato. El golpe, y la reacción popular en su contra, rompieron el equilibrio que sustentó durante tres años al gobierno de Chávez. Las fuerzas armadas dejaron de constituir el respaldo monolítico del gobierno, lo cual se sumó a la progresiva disgregación de su sustento político-parlamentario, que le otorgaba una mayoría de apenas cinco legisladores. La conspiración del imperialismo norteamericano y de sus socios locales quedó al desnudo, de modo que si no lograba encauzarse en un arreglo político volvería a manifestarse en nuevas tentativas golpistas. Las masas hicieron la experiencia de su capacidad para derrotar un golpe que aparentemente había triunfado, lo que también se sumó a la experiencia del segundo *caracazo*, en 1992, cuando una insurrección popular acompañó la tentativa de golpe de

---

[122] *El País*, Madri, 21 de abril de 2002.

[123] Sobre esos episódios, ver: MAXWELL, Kenneth A América Latina joga a toalha. *Folha de S. Paulo*, 8 de abril de 2002; WILSON, Scott. Leader of Venezuela is forced to resign. *The Washington Post*. 13 de abril de 2002; AZNÁREZ, Juan Jesús. ¿Quién disparó en Miraflores? *El País*, Madrid, 20 de abril de 2002; MARQUIS, Christopher. US bankrolling is under scrutiny for ties to Chávez Ouster. *The New York Times*, 25 de abril de 2002; CAMPBELL, Duncan. American navy helped Venezuelan coup. *The Guardian*, Londres, 29 de abril de 2002; FORERO, Juan. Venezuela's chief forced to resign; civilian installed. *The New York Times*, 13 de abril de 2002; DEYOUNG, Karen. US details talks with opposition: administration insists it did not encourage a coup. *The Washington Post*, 17 de abril de 2002; MARQUIS, Christopher. US cautioned leader of plot against Chávez. *The New York Times*, 17 de abril de 2002; THOMPSON, Ginger & FORERO, Juan. Ardent populists reinstate leader to run Venezuela. *The New York Times*, 15 de abril de 2002.

Estado del mismo Chávez, al precio de mil muertos y de un abismo de sangre entre los trabajadores y la clase capitalista.

Pero el liderazgo político de Chávez salió maltrecho de la crisis. Toleró durante meses la preparación del golpe, y una vez éste consumado, ofreció su renuncia a cambio de la preservación de la Asamblea Nacional y del mantenimiento de la sucesión constitucional en el vicepresidente. Luego de derrotado el golpe repuso a los dirigentes golpistas de la empresa estatal de petróleo que él mismo había cesanteado. En segundo lugar, en relación a los explotadores y al imperialismo, su continuidad estaba más cuestionada que antes, pues observaron que su figura funcionaba como un factor de agitación popular.

Los observadores destacaron que una de las principales causas que determinaron el fracaso del golpe fue que su efímero presidente (el líder empresario Carmona) dislocó el frente golpista al disolver las instituciones del régimen chavista, y concentrar el poder en las reducidas manos de un grupo de oligarcas y derechistas. Se enajenó de este modo el apoyo de muchos renegados del chavismo, de una parte de los partidos tradicionales, y de la burocracia de los sindicatos. Lo más importante es que la política del frustrado Carmona sacó a luz la intención del imperialismo yanqui, el verdadero autor del golpe, de llevar nuevamente a América Latina a la década de las dictaduras militares. Esto colocaba en una perspectiva más general la instalación de bases militares, en especial en Ecuador, y las operaciones militares conjuntas con las fuerzas armadas locales, como las que tuvieron lugar en el norte de Salta (Argentina), la “Operación Cabañas”.

Cuando se observa el mapa de la acción del imperialismo yanqui, resulta claro que el control de los abastecimientos de energía ocupa un lugar decisivo. El gobierno de Chávez jugaba un papel fundamental en el control de los abastecimientos por parte de la OPEP. La restricción a la oferta de petróleo, sin embargo, tenía limitaciones evidentes, porque frenaba la industrialización nacional de la materia prima y producia despidos masivos de obreros petroleros. Chávez tampoco utilizó el excedente petrolero para inversiones industriales en otros campos; cuando se enfrentó a la burocracia privatista de la empresa estatal, terminó reculando (con la reposición de los cesanteados luego del fracaso del golpe). De todos modos, el golpe fue impulsado, en este plano, para reorientar la política petrolera de Venezuela a favor de la política del imperialismo yanqui.

El gobierno de Bush, sin embargo, no desistió de derrocar al presidente Hugo Chávez. El gobierno de Chávez continuó a enfrentar severa oposición “escuálida”, adversos a la Ley de Tierras, por contrariar los intereses de los latifundistas y especuladores urbanos, y a la Ley de Hidrocarburos, mediante la cual la PDVSA no más podría retener 80% de su ingreso con las exportaciones de petróleo, a título de costos operativos, en detrimento de las finanzas del Estado. Y no se puede descartar la hipótesis de que la CIA, en diciembre de 2002, manipulase esas contradicciones sociales, encorajando el paro general, que cesaron sobre todo las actividades de la PDVSA, y las manifestaciones callejeras, promovidas por la Coordinadora Democrática, con el apoyo de la prensa, a fin de exigir la renuncia de Chávez y elecciones anticipadas.

Esos acontecimientos caracterizaron una larga maniobra para desestabilizar el gobierno en Venezuela y forzar su derrumbe, dado que la vía del golpe militar, que rompiese la legalidad constitucional, no era muy factible. El general Raúl Baduel, comandante Cuarta División Blindada y Guarnición Militar de Maracay, aledaña al Batallón de Paracaidistas, rechazó varias veces pedidos para que diera un golpe y reveló a la prensa que lo inquietaba la existencia de sectores que creían "que congregar a un alto número

de personas en una manifestación era ya un instrumento válido para que el presidente salga del poder".

Pero, más allá de los roces por el petróleo o la violenta oposición de los latifundistas a un principio de reforma agraria, y hasta la pretensión por parte de los terratenientes de apropiarse de las zonas costeras colindantes a sus propiedades, el interés fundamental del golpe fue "acordonar" a Colombia desde Venezuela, con vistas a una intensificación de la guerra contra las FARC, que tendría un impacto enorme sobre toda América Latina. En estas condiciones, la presencia de un gobierno con pretensiones nacionalistas, por tímidas que fuesen, pero que rehusaba la utilización de su espacio aéreo para las operaciones del Plan Colombia, era incompatible con el imperialismo yanqui.

Durante la jornada del golpe, no solamente los francotiradores de la derecha dispararon contra la propia multitud golpista, para gatillar con una masacre el derrocamiento de Chávez; también lo hizo con el mismo fin la Guardia Nacional "chavista" que se acababa de pasar a los golpistas. Los altos mandos nombrados por Chávez (su nueva Constitución le daba el monopolio de las designaciones castrenses) cambiaron de bando; sólo entre los oficiales medios se manifestó un apoyo al gobierno constitucional. Chávez fue detenido con facilidad; en cautiverio negoció la posibilidad de su renuncia. Lo devolvió al poder una multitud de decenas de miles de trabajadores de las barriadas, que habían comenzado el asalto al palacio de gobierno, en el cual las intendencias chavistas de las barriadas jugaron un papel fundamental de movilización. La primera medida de Chávez luego de su liberación fue, sin embargo, reponer a la cúpula golpista de la empresa estatal de petróleo.

El retorno de Hugo Chávez al poder estaba muy lejos de devolver el equilibrio al país; Venezuela estaba al borde de nuevas convulsiones. El golpe fracasó como consecuencia de la fractura de los propios golpistas, que fue aprovechada por la irrupción de las masas de los barrios empobrecidos de Caracas, apoyadas por elementos chavistas del Ejército y algunos dirigentes del partido de gobierno, en particular Freddy Bernal, alcalde del barrio obrero de Libertad. Chávez no sólo no evitó la asonada: según el propio Bernal, "Chávez le dijo que tenía tres opciones: resistir en Miraflores y posiblemente morir; huir a la ciudad de Maracay, donde tropas leales a Chávez estaban desafiando al nuevo gobierno, y desatar la guerra civil, o esperar y permitir que los conspiradores lo tomaran prisionero. La tercera opción fue la que finalmente seleccionó Chávez".[124] Luego de la derrota del golpe mantuvo al frente del Ejército al general Rincón, activo participante de la asonada.

Con el regreso de Chávez, se fugaron 3.000 millones de dólares de los bancos venezolanos, lo que planteaba el peligro de una crisis bancaria como la argentina; los bonos de la deuda venezolana se derrumbaron y la moneda nacional se devaluó violentamente contra el dólar. Esta devaluación se sumó a la ordenada por el propio Chávez en febrero (25%), que en su momento fue celebrada por el FMI. Chávez no enfrentó este sabotaje capitalista. Por el contrario, aumentó la tasa de interés (con el supuesto objetivo de impedir la corrida hacia el pasaje al dólar). En consecuencia, agravó la inflación y la recesión, empujando a millones de venezolanos a la miseria. La política de Chávez frente a este sabotaje significaba una fenomenal transferencia de ingresos a favor de los bancos, que estuvieron en la primera fila de los golpistas. Mano libre al sabotaje económico capitalista, "respeto" a los golpistas en el Ejército y

[124] *The Wall Street Journal*, Nueva York, 22 de abril de 2002.

PDVSA, "revisión" de las leyes cuestionadas por los golpistas: Chávez vencía pero también reculaba.

Pero la derecha estaba herida de muerte por la impresionante movilización popular. En octubre de 2002, el "paro cívico" convocado para reclamar "la inmediata renuncia de Chávez" fue un fracaso. El comercio paró en un 50%, sólo en las grandes cadenas de supermercados y en las zonas residenciales, también en la educación y en la salud, en particular en los estados gobernados por la oposición. En muchas empresas que pararon, donde existían sindicatos opuestos a la burocracia sindical de la CTV, los trabajadores se concentraron en las puertas de las empresas exigiendo trabajar.

Los convocantes anunciaron, después de la huelga, que "abandonaban las vías no constitucionales" contra Chávez y que se proponían juntar dos millones de firmas para habilitar los mecanismos constitucionales para la convocatoria a un referéndum sobre el adelantamiento de las elecciones presidenciales. El referéndum que planteaba la oposición debería pasar varios filtros: primero, la Justicia debería validar los dos millones de firmas; luego debería ser aprobado por el Parlamento (donde Chávez contaba con 85 de los 165 legisladores).

Un fracaso aún mayor fue la "rebeldía" de un grupo de altos mandos retirados de las fuerzas armadas, que establecieron una "Venezuela liberada" en una plaza de Caracas. Ninguno de ellos tenía mandos de tropas ya que fueron expulsados de las fuerzas armadas por su participación en el golpe de abril de 2002. Las guarniciones con mayor poder de fuego y que controlaban la capital, al igual que las poderosas divisiones 3 y 4 del ejército y el batallón de paracaidistas, estaban en manos de mandos leales a Chávez. Las dificultades de Chávez no parecían, entonces, provenir de la oposición. Después del golpe, Chávez no sólo logró llegar a un acuerdo con la dirección de la petrolera PDVSA (cuya remoción fue la excusa del golpe de abril), regada con muchas ventajas salariales, sino que, además, estableció un acuerdo con el gobierno de Bush. Como nunca antes, el petróleo representaba más del 70% de las divisas que ingresaban en el país y se había transformado en la casi exclusiva fuente de ingresos fiscales.

14. EL DOBLE FRACASO DEL GOLPISMO “ESCUÁLIDO”

La masiva marcha popular de apoyo a Chávez, contra el “paro cívico”, demostró que, a pesar del fracaso económico del gobierno, Chávez seguía contando con un extraordinario apoyo de masas. Esta circunstancia, combinada con una oposición que, aunque con algún apoyo popular, se encontraba dividida, daba como resultado un gran empate político. En estas condiciones, Chávez desafió a la oposición a que llevase adelante su amenaza de lanzar una huelga general para el 21 de octubre. En la movilización opositora del 10 de octubre, los líderes de la oposición se cuidaron de realizar un llamado inmediato a la huelga general (le pusieron fecha para dos semanas después), lo que fue interpretado como un signo de debilidad. Los petroleros, los trabajadores del transporte público y el pequeño comercio anunciaron que no se sumarían a la huelga general opositora. Chávez especulaba con que un fracaso del paro alentaría la descomposición de la oposición.[125]

Fracasados los intentos de conciliación posteriores a la derrota del golpe de abril (emprendidos por Jimmy Carter y la ONU), Chávez jugó el referéndum sobre su continuidad en la presidencia como un arma de conciliación con la oposición, o al menos con una parte de ella. Mientras una parte de ésta planteaba "echar a Chávez cuanto antes", otra pretendía hacerlo por vías "pacíficas y constitucionales", es decir por la vía del referéndum que les ofrecía Chávez. Pero para ganar el referéndum la oposición estaba obligada a continuar la agitación política contra Chávez, las manifestaciones, las amenazas de huelga general y los "pronunciamientos" de los militares. Es decir, que la vía de la "conciliación" agravaría la crisis política y socavaría las posibilidades de éxito de la conciliación. Sin el fogoneo de una crisis política permanente, el referéndum podría convertirse en un plebiscito a favor de Chávez.

Y era manifiesta la división de las fuerzas armadas. Acababa de renunciar, denunciando a Chávez, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el segundo jefe en la escala militar venezolana. El Tribunal Supremo de Justicia, que respondía a una fracción chavista que se pasó a la oposición, dictaminó que en abril "no hubo intento de golpe de Estado" y absolvió a los cuatro altos jefes militares que encabezaron el levantamiento. Chávez, sin embargo, logró una "reconciliación" con el general Francisco Arias, un ex militar "bolivariano" que rompió con Chávez para encabezar la lista de la oposición en las elecciones del 2000. Chávez le ofreció a Arias la vicepresidencia del Ministerio del Interior y, aunque éste no aceptó el ofrecimiento, anunció que apoyaría a Chávez asegurando la gobernabilidad hasta el referéndum.

Pero Chávez no sólo buscaba dar sustento a su gobierno promoviendo la división de la oposición o buscando reforzar su control sobre las fuerzas armadas. También abrió una significativa apertura hacia el gobierno Bush. Chávez "aseguró al presidente Bush que Venezuela seria un proveedor confiable de petróleo, en caso de que Estados Unidos ataque a Irak",[126] y anunció que se estaba preparando un acuerdo de provisión de petróleo a los Estados Unidos de 20 años de duración. Todo esto llevó a que Estados Unidos se distanciase de la oposición. Se vieron “signos de relaciones más cálidas con el gobierno de Chávez”. Uno de ellos fue la declaración de la embajada norteamericana, señalando su "preocupación por los rumores de planes para recurrir a acciones violentas e inconstitucionales dirigidas a alterar el orden constitucional".

[125] GIARDINI, Miguel. A pesar de los altos precios del petroleo, Venezuela esta en bancarrota. *Prensa Obrera* nº 776, Buenos Aires, 17 de octubre de 2002.

[126] *O Estado de San Pablo*, 29 de septiembre de 2002.

Estas maniobras políticas revelaban que el bonapartismo de Chávez tenía bases frágiles. A pesar de contar con ingresos petroleros extraordinarios (como combinación de los altos precios internacionales y de una producción por encima de la "cuota" establecida por la OPEP), Venezuela sufría una recesión fuerte y duradera: el PIB caería 7% en 2002. La desocupación crecía en flecha, lo mismo que los índices de pobreza popular y las quiebras. Los ingresos petroleros excepcionales le permitían al gobierno financiar un enorme gasto social, pero el gasto en educación y en salud comenzó a caer.

"Tenemos un problema de caja fortísimo", declaró el ministro de Planificación, Felipe Pérez. Fracasados los intentos de obtener créditos del FMI y del BID, el gobierno estaba recurriendo al endeudamiento con la banca privada internacional, a la tasa de 16% anual, y con la banca venezolana. Pero la posibilidad de continuar por este camino estaba fuertemente condicionada: la deuda del Estado con los bancos venezolanos alcanzaba al 50% de los activos bancarios, lo que planteaba el temor a una cesación de pagos interna o a una crisis bancaria. La reticencia de los bancos a continuar financiando la deuda pública agravaba la crisis política: Chávez llamó a los "ahorristas bolivarianos" a "retirar sus fondos de los bancos que se niegan a comprar bonos de la deuda pública interna". El gobierno de Chávez se estaba viendo obligado a financiar, de una manera creciente, el déficit fiscal por la vía explosiva de la devaluación y la inflación. Después del fracaso de la tentativa golpista, la derecha se jugó a una huelga general, a finales del 2002.

La huelga general de la oposición derechista, convocada inicialmente por 24 horas y que se inició, como los últimos paros, sin pena ni gloria, se fue transformando en una huelga general por tiempo indeterminado, con un apoyo creciente, y que paralizaba casi por completo la industria petrolera, el abastecimiento interno de combustibles y las exportaciones de crudo. El núcleo de la huelga, a la que se sumaron a partir del tercer día, eran los sectores gerenciales y técnicos de la empresa estatal venezolana de petróleo; la participación obrera era sustancialmente menor.

El paro general y las manifestaciones callejeras, desencadenas el 2 de diciembre de 2002, configuraron una nueva modalidad de golpe, de modo a tornar el país ingobernable, a tal punto que no restase a Chávez otra salida sino renunciar a la presidencia. Muy sintomática fue la actitud de la Casa Blanca delante de tales acontecimientos, que amenazaban llevar el Estado venezolano al colapso y al borde de una guerra civil. En 13 de diciembre, el gobierno de los EE.UU., a través de su vocero Ari Fleischer, respaldó, abiertamente, a la oposición en Venezuela, al exhortar el presidente Chávez a convocar elecciones anticipadas, como la única forma de solucionar pacífica y políticamente la crisis. Dos días después, empero, retrocedió, aclarando que el gobierno de los EE.UU. no estaba a proponer la anticipación de las elecciones, sino la realización de un referéndum sobre la popularidad de Chávez, no previsto, igualmente, por la Constitución Bolivariana de Venezuela, de 199956.

Ese cambio de actitud resultó, en cierta medida, de la decisión de Consejo Permanente de la OEA, que resolvió, en la reunión del mismo día 13 de diciembre, "respaldar plenamente la institucionalidad democrática y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo gobierno preside Hugo Chávez Frías, y rechazar categóricamente cualquier intento de golpe de estado o alteración del orden constitucional". Pero demostró las contradicciones domésticas en que la administración de George W. Bush se debatía, bloqueada por la resolución de la OEA, y a enfrentar, de un lado, presiones de los que, como Otto Reich, insistían en la remoción de Chávez, y a temer, del otro, que la crisis en Venezuela, responsable por casi 15% del suministro de

petróleo a los EEUU, resultase en un conflicto armado, en el momento en que se preparaba la guerra contra el Irak.

El objetivo inicial de la oposición - la realización de un plebiscito no vinculante en febrero de 2003, que ya había sido rechazado por la Corte Constitucional - apenas encubría su verdadero propósito político: mantener la agitación opositora con vistas al plebiscito sobre la continuidad de Chávez, que establecía la propia Constitución "bolivariana" para octubre del 2003. Con el crecimiento de la huelga, varió también su objetivo: la oposición se olvidó del plebiscito para reclamar, directamente, el acortamiento del mandato de Chávez y el adelantamiento de las elecciones generales.

El propio Chávez había "dejado venir" la huelga del 2 de diciembre, con la idea de que una nueva paralización, débil como las anteriores (algo que efectivamente ocurrió en sus comienzos), le permitiría derrotar a la oposición por un largo tiempo. Es evidente que la extensión de la huelga, y sobre todo su crecimiento en la industria petrolera, estaba fuera de los cálculos tanto del oficialismo como de la oposición. Chávez fue tomado por sorpresa y puesto a la defensiva. Ni la denuncia de que el objetivo de la oposición era la privatización de la empresa petrolera estatal ni la militarización de las plantas y yacimientos petrolíferos lograron detener la extensión de la huelga. Frente al desafío de los derechistas, el movimiento chavista no logró producir una movilización de masas capaz de superar a la oposición.

También el imperialismo alteró su posición frente al desborde de los acontecimientos. Con el respaldo expreso de la diplomacia norteamericana, César Gaviria, secretario general de la OEA, se encontraba en Venezuela tratando de establecer un acuerdo político entre el gobierno de Chávez y la oposición para encarrilar la crisis política en el cauce constitucional, es decir llevar a la oposición al plebiscito de octubre del 2003. Pero con el crecimiento de la huelga opositora, se registró un cambio significativo: Gaviria dejó de hablar de la Constitución para referirse a una "salida democrática", es decir al adelantamiento de las elecciones.

La polarización política y la incapacidad de los dos bandos de imponer una victoria decisiva, habían puesto al Ejército - que hasta el momento respaldara a Chávez - como árbitro de la situación. Si ese respaldo se mantuviese, Chávez podría sortear la huelga; si no, se verá obligado a capitular. De todos modos, la concesión de elecciones anticipadas no sería el final de la crisis, ya que plantearía la cuestión de la salida de Chávez del gobierno.

Pero el árbitro supremo estaba fuera de Venezuela. Desde el retorno de Chávez al poder después del golpe de abril, los norteamericanos lograron arrancarle concesiones fundamentales: un acuerdo de provisión petrolera durante 20 años (con la garantía de que el suministro no se vería reducido en caso de guerra contra Irak), el corte de las exportaciones petroleras a Cuba, la autorización para el sobrevuelo del espacio aéreo venezolano por parte de los aviones militares norteamericanos que operaban contra la guerrilla colombiana, y el anuncio de la privatización de las riquísimas reservas gasíferas venezolanas. A cambio de estas concesiones, la diplomacia norteamericana comenzó a hablar del "respeto de la Constitución" y reorientó a la oposición hacia el reclamo de una salida de Chávez por la vía electoral. ¿Los norteamericanos continuarían valiéndose del espantajo de la oposición para arrancarle nuevas concesiones a Chávez o, directamente, aprovecharían el impulso de la huelga para imponer el adelantamiento de las elecciones?

Un papel fundamental cupo a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente electo de Brasil "Lula, mi hermano", como lo llamó el presidente Chávez, y el "izquierdista renovado", como lo llamaron los voceros del Departamento de Estado norteamericano y el FMI,

reveló que sus intenciones eran parte de políticas de contención de los movimientos revolucionarios de los trabajadores y el pueblo en América Latina, además de servir como instrumento para liquidar una avanzada revolucionaria en Venezuela a través de la estructuración del "grupo de amigos" para solventar la crisis venezolana.

El "grupo de países amigos de Venezuela", en realidad, como lo denunció el propio Chávez, estaba integrado por "naciones que distan mucho de ser amigas". El "grupo" estaba integrado por Estados Unidos y España, que fueron los primeros en reconocer el efímero gobierno golpista de abril del 2002; por México, que se negó a alquilarle buques petroleros a Venezuela para enfrentar la huelga de los gerentes de PDVSA; por Portugal, que acababa de suscribir junto con otros siete gobiernos europeos (entre ellos el español) una declaración de apoyo a la invasión norteamericana de Irak; y por Chile, el único país de América Latina que estableciera un acuerdo bilateral con el Nafta, el acuerdo comercial establecido entre Estados Unidos, México y Canadá. Con esta "alineación", no hay que sorprenderse de que la oposición venezolana hubiese celebrado la conformación del "grupo de amigos" como una victoria.

Ninguno de estos países, sin embargo, impulsó la creación del "grupo de amigos". Su autor ideológico y práctico era, en verdad, su sexto integrante, Brasil: Lula enunció por primera vez la idea de establecer el "grupo" en su discurso de toma de posesión de la presidencia de su país, el 1° de enero de 2003, y fue él mismo quien consiguió la aceptación de Chávez. Antes de esto, cuando todavía no había asumido como presidente, presionó a Chávez para encontrar una "salida negociada" con la oposición. Lula había recibido un pedido en ese sentido del presidente George Bush, durante su visita a la Casa Blanca.

Fue el propio Lula el que invitó al gobierno norteamericano a integrarse al "grupo de amigos" a pesar del apoyo norteamericano a la oposición venezolana; Lula defendió públicamente su participación en nombre del "pluralismo". y fue el que hizo “entender” a Chávez que no tenía otra alternativa que aceptar la participación norteamericana. El gobierno venezolano había pedido la incorporación de Cuba, Francia y Trinidad Tobago, entre otros, algo que Lula rechazó de plano. Comentando la posición de Lula frente a Chávez, un alto funcionario del gobierno de Bush señaló que "todo parece indicar que Itamaraty (la cancillería brasileña) y Lula están cada vez más en contra (de Chávez y sus defensores dentro del gobierno brasileño), añadiendo que veía eso como una señal muy positiva". Por su parte, Curt Struble, jefe del Departamento de Estado norteamericano para Asuntos Latinoamericanos, se declaró feliz porque "Estados Unidos y Brasil acaban de unirse para una tarea muy importante".

El programa "oficial" de este "grupo" era el apoyo a la mediación de la OEA, encabezada por César Gaviria. El contenido de esta mediación fue señalado por el conocido comentarista Andrés Oppenheimer: "forzar al gobierno y a la oposición para que lleguen a un acuerdo constitucional negociado, y supervisado internacionalmente, por el cual la oposición levantaría el paro a cambio de elecciones o un referéndum anticipado". En pocas palabras, lo que buscaban la mediación de la OEA y el "grupo de amigos" de Lula y Bush era la rendición del gobierno venezolano frente a los golpistas, en el preciso momento en que la huelga opositora refluía porque los obreros petroleros volvían al trabajo, la producción petrolera se recuperaba, y los bancos volvían a abrir.[127]

Después de algunas semanas, la huelga de la oposición derechista comenzó a refluir. Los dirigentes opositores habían debido convocar al bloqueo de avenidas y autopistas

[127] OVIEDO, Luis. El grupo de enemigos de Venezuela. *Prensa Obrera* nº 789, Buenos Aires, 7 de febrero de 2003.

ante la evidencia de que la circulación en las calles de la capital era intensa, de que los subtes y el transporte público funcionaban normalmente y de que la mayoría de los comercios estaba abierta. Sólo se mantenía en pie el *lock out* lanzado por los altos gerentes de la petrolera estatal PDVSA, que bloqueaba las exportaciones de crudo y el abastecimiento del mercado interno. Los opositores realizaban grandes manifestaciones, cuyo número repetía el de las anteriores, lo que significaba que su progreso se había detenido.

Lo que sostuvo en el poder a Chávez en los álgidos primeros veinte días de huelga opositora fueron las Fuerzas Armadas. Para mantener este apoyo, Chávez evitó realizar concentraciones de masas de sus seguidores, que compitieran en número con las de la oposición, algo que hubiera polarizado todavía más la situación, y planteado la perspectiva de una resolución de la crisis en la calle, lo que el alto mando militar pretendía evitar a toda costa. Esta conducta "responsable" de Chávez frente a la huelga opositora y frente al ejército dice mucho acerca de las características del régimen político "bolivariano".

Aún cuando Chávez contaba con un indiscutible respaldo entre las capas más empobrecidas de la población, el voto popular y los "círculos bolivarianos" estaban subordinados a la base política que representaban las Fuerzas Armadas. El ejército de Venezuela defendió a Chávez y se opuso a los golpistas; en algunos casos se produjeron debates de oficiales con líderes obreros en los cuarteles; eso da una idea del clima pre-revolucionario existente en la población que combatía el golpe derechista.

Cuando las Fuerzas Armadas se dividieron, en abril de 2002, y una parte osciló hacia la oposición, Chávez prefirió renunciar a empujarlas a un enfrentamiento abierto. En diciembre de ese mismo año, el eje de su política fue evitar una nueva división de las Fuerzas Armadas, aunque esto significara dejar la calle en las manos de la oposición. Es el respaldo militar lo que le permitió a Chávez arbitrar entre el imperialismo y las masas, y permitió que siguiera en pie la estrategia "democratizante" del imperialismo para el continente.

Inicialmente, la Casa Blanca había respaldado el reclamo opositor de "elecciones anticipadas", pero cuando el jefe del Estado Mayor condenó la huelga como "un ataque a Venezuela" y reclamó el "respeto a la Constitución", Estados Unidos debió sumarse a la resolución, aprobada por unanimidad en reunión de la OEA, que reclamaba "una solución pacífica, constitucional, democrática y electoral" y renunciar a insertar en la declaración la cuestión de las "elecciones anticipadas". La oposición recibió la resolución de la OEA como una severa derrota política.

Al imperialismo también le preocupaba que "la seguridad del abastecimiento petrolero de su mayor exportador fuera del Medio Oriente. Es una preocupación mucho mayor que el hecho de si Chávez permanece en el poder o es derrocado".[128] En medio de la crisis y aún cuando el gobierno norteamericano respaldaba el reclamo opositor de las elecciones anticipadas, Chávez volvió a reafirmar su voluntad de cumplir el contrato de provisión petrolera establecido con los Estados Unidos (y su disposición a no interrumpirlos incluso en el caso de que Estados Unidos atacase a Irak que, como Venezuela, era miembro de la OPEP). También en este punto, la "responsabilidad" de Chávez cimentó el apoyo de los militares.

El Alto Mando planteaba una salida negociada entre el gobierno y la oposición bajo su propio arbitraje. El general Raúl Baudel, comandante de la principal unidad militar venezolana, planteó la posibilidad de una reforma constitucional que permitiera

[128] *Stratfor*, 11 de diciembre de 2002.

adelantar la convocatoria al referéndum establecido, según la Constitución vigente, para el mes de octubre de 2003. Es decir que planteaba una "salida" que contase con el respaldo del propio Chávez. Lo mismo opinaban sectores importantes del imperialismo norteamericano: una nota editorial de *The New York Times* reclamaba a la oposición "respetar la Constitución" y esperar al referéndum constitucional.[129]

Finalmente, después de 62 días de *lock out* patronal y de sabotaje sistemático a la producción petrolera, los golpistas venezolanos declararon victoria... y abandonaron la escena. Las grandes patronales de Venezuela se batieron en retirada en medio del descrédito, el fracaso e incluso el derrotismo. En los días previos al levantamiento del *lock out*, los columnistas de los diarios (todos opositores al gobierno) rivalizaban en imputar el fracaso del sabotaje a los dirigentes oficiales de la "Coordinadora Democrática" (nombre de la coalición opositora de derecha) o a algunas de sus fracciones.[130]

El fracaso del paro patronal profundizó la situación revolucionaria, al agravar la bancarrota económica y al acentuar la movilización popular. A pesar de la tolerancia del gobierno con las manifestaciones opositoras, al punto de que no convocó a ninguna movilización popular en más de dos meses, la concentración chavista del 23 de enero de 2003 fue multitudinaria, y reflejó la disposición de lucha de los sectores más pobres y oprimidos, en especial de Caracas. Lo más importante fue el papel que jugaron importantes sectores de la clase obrera en la tarea de desbaratar el *lock out* patronal.

El proletariado forzó el funcionamiento de la gran industria pesada en el sur del país; en la ciudad industrial de Valencia, los sindicatos clasistas mantuvieron una movilización constante contra los cierres; en la refinería y en la petroquímica de Puerto La Cruz el 95% de los trabajadores concurrió a trabajar y mantuvo la producción en el 65-70% de sus niveles corrientes (o sea, en 700.000 barriles diarios), a pesar de que el personal superior adhirió al *lock out* en un 70%. Los trabajadores sacaron la conclusión de que "se rompió el mito de que solamente una elite bien preparada puede conducir la empresa".[131] Los dirigentes de la organización clasista *La Jornada* dijeron que "al impedir la paralización de la refinería logramos salvar el gobierno de Chávez de una segura caída". Los obreros de Puerto La Cruz habían sufrido en el pasado la represión del gobierno de Chávez cuando se opusieron a la privatización parcial de una empresa de fertilizantes.

El ejército intervino para enfrentar el sabotaje en la industria y en el petróleo, e incluso allanó a dos grandes monopólios que acaparaban alimentos y bebidas. En muchos cuarteles tuvieron lugar reuniones y asambleas donde se discutía la situación política sin restricciones. Luego de la derrota del golpe del 11-14 de abril de 2002, las fuerzas armadas fueron depuradas de los elementos gorilas. No podían ejercer una función de arbitraje entre el imperialismo y las masas, e impedir de este modo una guerra civil, sino apoyándose en el pueblo para contener los extremos fascistas de la oposición patronal. Esto se vió en los choques que el ejército tuvo con la guardia metropolitana de Caracas, al mando del intendente "escuálido" Peña. En el campo "escuálido" había una agitación permanente a favor del armamento, y en buena parte de los barrios golpistas existían guardias y servicios armados, sistemas de comunicaciones y servicios de emergencia. Al margen del gobierno de Chávez, los barrios populares comenzaron a hacer lo mismo.

---

[129] OVIEDO, Luis. Venezuela: el alto mando le impone a Chávez la "salida democrática". *Prensa Obrera* nº 786, Buenos Aires, 27 de diciembre de 2002.

[130] ALTAMIRA, Jorge. Colapsó el golpe gorila en Venezuela. *Prensa Obrera* nº 792, Buenos Aires, 15 de febrero de 2003.

[131] *Punto de Vista*, Anzoategui, enero de 2003.

El otro factor que contribuyó el fracaso del *lock out* fue la división de los golpistas, ya que detrás de una inestable mayoría que pretendía la remoción constitucional de Chávez se movia un sector “pinochetista”. Una gran parte de la industria, del comercio y de los servicios no fue afectada; no faltó alimentos, ni transportes, ni electricidad. La prolongación no prevista del lock out acabó golpeando mortalmente a parte de la burguesía golpista, al punto que se estima que provocó la quiebra del 30% de las empresas. El gobierno de Bush podía apoyar un *lock out* breve y de efectos ciertos, pero no la prolongación que tuvo, porque esto afectaba el abastecimiento de combustible para los EEUU, en vísperas de la guerra contra Irak. Se dio así la paradoja de que mientras el "castro-comunista" Chávez había firmado un convenio que garantizaba el abastecimiento de petróleo por 20 años, los "libre-empresistas" de la oposición desarrollaban un *lock out* que podía terminar en una gran escasez de combustible en condiciones de guerra.[132]

De un lado, la clase dominante saboteaba activamente a su propio Estado, lo que dejó a la fuerza armada, y más allá de ella al propio Chávez, como único y último factor de arbitraje, en condiciones de carecer de base en la clase que monopoliza los recursos materiales del país. Del otro lado, las masas salieron a defender un Estado que no era el suyo, y esta defensa no le reportaba ningún beneficio importante, ni tampoco alguna mejora sustancial en su nivel de vida, pero lo hicieron con sus propios métodos, lo que socavaba la estabilidad y perspectivas de ese mismo Estado. No sólo entre los obreros y los sindicatos clasistas, sino incluso en buena parte de los ministerios, el tema del día era el *control obrero*, por la perspectiva de que las empresas quebrasen masivamente, y por la razón aún más importante de que sin un control obrero no sería posible normalizar la actividad de PDVSA, la empresa estatal de petróleo y cuarta productora mundial del crudo, ante la deserción masiva del personal superior vinculado a los monopolios internacionales.

Chávez había tomado una medida nacionalista que tenía un gran valor histórico, pero no una profunda incidencia económica: la declaración del carácter público de las orillas de los mares y de los ríos, que eran acaparadas por la propiedad privada. Pero Chávez también inauguró lo que se llama la “apertura petrolera”, en Venezuela. Con Chávez las empresas extranjeras empezaron a invertir en petróleo, asociadas a la empresa estatal. Un oligarca petrolero declaró: "De Chávez nos separa el suelo, pero nos une el sub-suelo". La industria petroquímica y petrolera fue siendo abierta al capital extranjero en asociacion con PDVSA. Una empresa “argentina” muy importante, Techint, se hizo una fuerte sostenedora de Chávez, que rescató con dinero público la fuerte pérdida de la empresa siderúrgica Sidor (adquirida por Techint), cuando no pudo pagar sus deudas. El Estado decidió transformar en capital los créditos que tenía contra Techint, socializando las pérdidas del grupo.

En Venezuela tenía lugar una ofensiva de parte del imperialismo, de alcance internacional, pretendiendo liquidar los últimos vestigios de producción estatal de petróleo, en nombre de la "internacionalización" (o “globalización”). El gobierno de Chávez hizo fuertes concesiones a esta ofensiva con su "apertura petrolera", pero entró en choque con ella cuando reclamó que se incrementaran los ingresos fiscales mediante mayores regalías y un control de los llamados "precios de transferencia" de las

[132] "Los intereses petroleros han llevado a la Casa Blanca a abrazar la creación del grupo de países amigos de Venezuela, originalmente criticada por Bush. *The New York Times* aseveró que la crisis en Venezuela crea nuevas complicaciones para la campaña del gobierno de Bush para sacar del poder al presidente iraquí Saddam Hussein" (*El Nacional*, Caracas, 26 de janeiro de 2003).

exportaciones (que los jerarcas de PDVSA subfacturaban para trasladar los beneficios al exterior, a sus propias cuentas bancarias).

El colapso económico llevó al gobierno a establecer el control de cambios. Lo justificó en la necesidad de preservar las reservas, y para no aumentar los salarios como consecuencia de una devaluación. Esto último demostraba el carácter conservador del chavismo frente a la crisis, porque en Venezuela una gran parte del pueblo no llega a reunir un dólar por día y porque un aumento de salarios sería un poderoso factor de movilización. Estaba planteada la nacionalización sin indemnización de la banca y la centralización de los recursos financieros, medida elemental en un país donde la banca es una suerte de caja general de los movimientos financieros de la empresa estatal de petróleo.

El control obrero se discutió en el gobierno en términos de "autogestión", por la cual los obreros adquirirían las empresas que quebrasen con el monto de los salarios impagos, y las pondrían a funcionar como emprendimientos privados. Sería una forma de rescate parcial del capital privado, aunque incluso en esta forma la "autogestión" requeriría una nacionalización de los bancos para hacerla viable, con lo cual las empresas pasarían a girar en torno a un plan financiero único. El control obrero de las empresas en quiebra dejaba de lado, sin embargo, el problema de fondo: el control obrero de PDVSA.

El control obrero de la industria y de PDVSA, la elección de comités de control por las asambleas obreras y la formación de un comité nacional de control y gestión obreras, era incompatible con el régimen político. El chavismo se manifestó como un nacionalismo petrolero, que procura apropiarse de la renta diferencial que deja la producción de petróleo, con objetivos de industrialización y redistribución de ingresos. La nacionalización petrolera de 1976, y la incorporación de Venezuela a la OPEP, habían producido el efecto contrario, la salida de la renta petrolera al exterior, a partir de la autonomía política que adquirió PDVSA, y en lugar de la industrialización un enorme despilfarro y corruptela. El problema del limitado nacionalismo chavista es que aún así chocaba con la ofensiva capitalista internacional de arrebatar el control del petróleo a todos los estados nacionales, causa última de la guerra contra Irak.

El movimiento popular se hizo masivamente chavista, e incluso entre los sectores revolucionarios predominó la tendencia de "presionar a Chávez", sin delimitación política del nacionalismo de contenido burgués, pequeño burgués o militar. El gobierno de Chávez pasó a tener choques muy fuertes con los gorilas de Venezuela, la derecha apoyada por una parte de la izquierda. Casi todos los partidos de izquierda de Venezuela se dividieron en un ala pro Chávez y un ala anti Chávez: el ala anti Chávez de todos esos partidos de izquierda pasó a militar con los que en Venezuela se llaman los “escuálidos”, los gorilas.

El derrumbe del *lock out* golpista llevó al gorilaje “escuálido” a depositar toda su salida en el "grupo de amigos" que formaron Lula y Bush y en la mediación de Jimmy Carter, amigo personal del jefe máximo del gorilaje venezolano, Gustavo Cisneros, patrón de los medios de comunicación y de las principales empresas, e incluso sospechado de narcotraficante. El colapso del *lock out* rompió el inestable equilibrio precedente y arrastró a la sociedad a una crisis revolucionaria. Chávez es una expresión y una etapa de esa revolución. En febrero de 1989, con el "sacudón" o *caracazo* que enfrentó el ajuste brutal del entonces gobierno de Carlos Andrés Pérez; con el levantamiento popular de febrero de 1992 que encabezó Chavéz; con el golpe nacionalista derrotado de noviembre del mismo año; con la movilización revolucionaria que derrotó el golpe contra Chávez en abril de 2002; con la lucha que hizo colapsar el *lock out* oligárquico;

el pueblo y la nación venezolana entraron en un período de convulsiones revolucionarias.

La oposición política gorila al chavismo estaba politicamente muerta, con sus partidos (AD, COPEI, Proyecto Venezuela) agonizando o en proceso de liquidación. Esto dejó al chavismo dueño del escenario político, obligando a la Fedecámaras (patronal) y al propio imperialismo a aceptar la situación, aproximándose del gobierno e inclusive "infiltrándolo" (el embajador norteamericano hizo declaraciones apaciguadoras al respecto de la relación EEUU-Venezuela). La actividad golpista permaneció (por ejemplo, con el asesinato del fiscal Danilo Anderson, que investigaba la extensión y complicidades de la tentativa golpista de 2002, por el cual la prensa "escuálida" responsabilizó... ¡al gobierno Chávez!). Los "escuálidos" continuaron dueños de los diarios de circulación nacional (*El Nacional*, *El Universal*, *Ultimas Noticias*) desde los que pasaron a realizar campaña abierta contra el "totalitarismo" chavista, con todo tipo de denuncias. Chávez respondió con una Ley de Prensa, planteando la intervención estatal, censura incluída, en la divulgación de noticias. Una prensa "chavista" también comenzó a circular (diario *Vea*, semanario *Temas*) de muy mala calidad, sin conseguir competir con los medios de comunicación "escuálidos".

El imperialismo procuró capitalizar las debilidades del nacionalismo. Después del fracaso de la Coordinadora Democrática en derrotar al gobierno de Chávez, el imperialismo norteamericano y las empresas transnacionales petroleras desarrollaron un nuevo plan para apoderarse de la industria de hidrocarburos venezolana, como una estrategia mundial de controlar las reservas de energía e incidir en cambios de gobierno en Venezuela. Esto no fue posible por la movilización del pueblo y del proletariado venezolano durante el sabotaje petrolero.

Buena parte del personal "escuálido" demitido de la PDVSA y de las otras empresas estatales se recicló en empresas privadas (en el acero, por ejemplo, con Sidor, ex empresa estatal privatizada, de propiedad de la empresa argentina Techint), muchos se fueron a Miami, con el capital acumulado, donde ya poseían propiedades, para abrir sus propios negocios metropolitanos, y engrosar la colonia "gusana" anti-Chávez/Castro.

Chávez, con una inclinación verborrágica digna de dar envidia a Fidel Castro, pasó a dirigirse directamente a la población a través de largos discursos radifónicos, muy escuchados por la población, y comentados en las calles en los dias sucesivos. El esfuerzo principal del chavismo pasó a concentrarse en darse una base social y política organizada, propia. Es allí que aparecieron sus contradicciones y su potencial crisis política. Ha tenido un margen de maniobra importante, debido a la enorme desocupación, pobreza y bajo nivel de conquistas laborales preexistentes en Venezuela.

Bajo el planteo de "desarrollo endógeno", con gran publicidad, se desenvuelvieron planes como "Barrios Adentro", organización de cooperativas de trabajo, centros sanitarios barriales, entrega a trabajadores de empresas desactivadas, organización de una red de centros de distribución (Mercal) de productos cooperativos, más baratos, programa de "vuelta al campo", con entrenamiento previo, en tierras estatales o privadas improductivas y confiscadas.

A diferencia de los programas "sociales" de Lula, con los que guarda semejanza pero que, en el caso brasileño, son mayoritariamente gerenciados por ONGs empresariales (lo que en Brasil es llamado de "tercerización de la cuestión social") y benefician claramente al sector privado, en Venezuela los programas sociales son estatales, aunque ya se observó una tentativa empresarial de penetrar la red de distribución de productos populares-cooperativos.

El planteo general del chavismo fue el de una renegociación de las relaciones con el imperialismo, que incluye la nacionalización de una parte de la renta petrolera (que antes escapaba de Venezuela por via de "negocios colaterales" y "tercerizaciones", con altísimo índice de desvios y corrupción, realizados por PDVSA tanto en el país como en el exterior), con vistas a financiar programas sociales, pero que también incluye la "normalización" de las relaciones con los EEUU. Se privatizaron, por ejemplo, los llamados "yacimientos marginales", y *Citgo*, la principal red de distribución de nafta de la Costa Este de los EEUU, hasta entonces de propiedad del estado venezolano.

En todas las iniciativas "sociales", y en general en toda la vida venezolana, pasó a ser marcante y generalizada la presencia del Ejército, que pasó a ser, al parecer, el único partido político seguro de Chávez. Es necesario notar también, en los programas sociales, la fuerte presencia cubana (sobre todo, pero no sólo, médicos). Los cuadros cubanos, principalmente militares, sin embargo, no se limitan a esas iniciativas, pues también están presentes en las empresas estatales y en la organización de inteligencia del Ejército y del Estado.

El aparato o coalición política de sustento de Chávez ha tenido siempre un carácter caótico y expresa, potencialmente, las contradicciones del nacionalismo chavista. En las elecciones municipales de 2004, completamente dominadas por el chavismo, no sólo se puso de manifiesto un elevado índice de abstención. En todos los principales distritos electorales hasta cuatro candidatos, distintos y enfrentados entre si, se presentaban en nombre del "chavismo", en nombre de partidos políticos diferentes u organizados para la ocasión. No siempre el candidato apoyado oficialmente llevó la mejor en la contienda.

En el MVR, el partido de Chávez, se agrupó una burocracia que carece de autoridad política propia. Los partidos que apoyan o participan del gobierno de Chávez no están organizados en una coalición política formal. Esto acentúa las características bonapartistas del régimen, y el papel de arbitraje, entre los partidos y entre todos los escalones políticos del Estado (gabinete, gobernadores, intendentes, representación parlamentaria) ejercido personalmente por Chávez.

Esto también vale para el movimiento obrero y sindical. El chavismo (en todos sus componentes) se ha lanzó a organizar su propio aparato sindical (UNT) contra la vieja central dominada por el gorilismo (CTV). Implementó un dispositivo legal (referendum) que le permitió barrer a la burocracia "escuálida", no sólo en la empresas estatales, sino también en las privadas. En 2004, la UNT ya agrupaba a 60% del movimiento sindical, con perspectivas de crecimiento.

El movimiento en torno de la UNT es muy heterogéneo, agrupando desde sectores clasistas hasta burócratas reciclados, y su domesticación por el aparato chavista no parecía ser tarea fácil: exigiría, en primer lugar, que ese aparato tuviese existencia orgánica y estabilidad. La figura de Orlando Chirino, vinculado a la organización de iquierda OIR (después PRS) se proyectó como principal dirigente de la UNT. Esto determinó la importancia del papel de la izquierda en el proceso.

El proceso en curso no se detuvo con la derrota del paro petrolero patronal, ni con el triunfo del chavismo en el referéndum en agosto del 2004. Aumentó la creciente tensión con EEUU en la política exterior, llegando a la defensa del derecho de Irán a poseer energía nuclear propia. Esto colocó al gobierno venezolano en una posición distinta de sus "pares", o supuestos aliados, como Kirchner y Lula, que son gobiernos alineados con las políticas imperialistas en el terreno económico, diplomático y militar.

En la política interna, las contradicciones del proceso revolucionario se fueron trasladando al interior del campo bolivariano, en una marcada diferenciación entre las

demandas de las masas junto a los mejores y más combativos elementos militnates populares, que quieren “profundizar el proceso de transformaciones revolucionarias”, y la política de los “partidos del cambio”, funcionarios alcaldes, gobernadores, diputados, que pretenden frenarlo, institucionalizarlo y limitarlo en una perspectiva conciliadora. Estos sectores son los que intentaron e intentan tender puentes entre el gobierno, la Iglesia y el empresariado.

15. LA CRISIS BRASILEÑA Y LA PREPARACIÓN DEL PT/GOBIERNO

Un largo camino preparó la victoria electoral del PT, a la cabeza de una coalición con marcada presencia burguesa, en las elecciones del 2002. El Partido de los Trabajadores del Brasil surgió en 1980, en una situación que combinó la crisis de la "apertura política" del régimen militar, la irrupción del movimiento obrero (en especial las huelgas del ABC paulista) después de 15 años de retroceso, y la búsqueda de una expresión política independiente de la clase obrera por parte de centenas de activistas.

Luego de una primera participación electoral en 1982, en la que obtuvo poco más de 11% de los votos en San Pablo (y porcentajes mucho menores en los otros estados en los que se presentó), conoció un crecimiento espectacular en la década del 80, al punto de ser uno de los primeros colocados en la elección presidencial de 1989, superando a las principales formaciones burguesas (PMDB, PDS –ex-ARENA-PDT y PSDB) y sólo siendo superado en el segundo turno por un aventurero político (Fernando Collor de Mello) en quien la burguesía apostó sus fichas para evitar la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, obrero metalúrgico líder del PT.

Durante la década mencionada, Brasil experimentó una fuerte radicalización política que, en el movimiento sindical, barrió a los *pelegos* (burócratas vinculados al régimen militar) en la mayoría de los sindicatos importantes, hizo surgir la CUT (Central Única de Trabajadores) y, en el campo, vió surgir luchas de masas por la tierra (Brasil ostenta los más altos índices mundiales de concentración agraria) y al MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin-Tierra). En el PT, esa radicalización se verificó en la adopción de una perspectiva genéricamente "socialista" (el primer programa, de 1980, sin embargo, no superaba el horizonte democratizante) que, acompañada del liderazgo de Lula, significaba para las masas el poder (gobierno) de los trabajadores.

Esa radicalización, que tuvo su punto culminante en los actos de masas de la campaña presidencial de 1989, se produjo en el cuadro de serias limitaciones políticas, que ilustraban la relativa inmadurez de la vanguardia obrera, y la acción de restos de la vieja izquierda stalinista, en proceso de descomposición. El PCB (re-legalizado en 1986) ya se encontraba en la crisis profunda que lo llevaria a su desaparición política, crisis proveniente de su completo fracaso frente al golpe militar de 1964, de las escisiones sistemáticas sufridas desde entonces (la mayoría foquistas) y de la propia descomposición mundial del stalinismo. El surgimiento del PT fue en verdad el acta de defunción anticipada del PCB, cuyo tronco principal se recicló, después del fin de la URSS, como PPS, un partido abiertamente burgués.

Diversos sectores oriundos del viejo stalinismo, abrigados en las más diversas siglas, ingresaron al PT, luego de haberlo combatido en la época de su surgimiento, cuando sólo los trotskistas y el ex-MEP (actual "Fuerza Socialista", corriente del PT) apoyaron el llamado de Lula y otros sindicalistas por el PT. Vulgarmente se afirma que el PT fue producto de la convergencia de "sindicalistas, grupos de izquierda, cristianos, campesinos, intelectuales" etc., como si todos hubiesen entrado simultáneamente y en pie de igualdad, lo que es una completa tergiversación. El ingreso desordenado de la izquierda al PT se dio en el cuadro de una lucha política que determinó nuevas alianzas hasta concluir en determinada composición, programa y tendencias internas del PT.

La perspectiva socialista fue subordinada por la adopción de un programa frente-populista ("democrático y popular") y por la realización de las alianzas políticas correspondientes, primero con formaciones semi-vaciadas, y después abiertamente con partidos burgueses. El proceso mostró los límites de la radicalización política, la cual, sin embargo, provocó también la progresiva marginalización de los intelectuales democratizantes que, a inicios de la década de 80, formularon para el PT un programa

democrático y anti-socialista: ese sector concluyó abandonando el PT e integrándose, a partir de 1994, al gobierno "neoliberal" de Fernando Henrique Cardoso, FHC (y a no pocos gobiernos estaduales y municipales del mismo partido).

Las alianzas del PT con los "progresistas", hechas en nombre del "realismo electoral", hicieron que se viviera como una derrota política la victoria, en 1989, de Collor de Mello, un demagogo cuyo único "mérito" fue explotar al máximo las contradicciones políticas de las alianzas del PT para el segundo turno, en especial con el PDT de Leonel Brizola (la manipulación de los debates televisivos, en especial de la TV Globo, fue el uso de los recursos propios de la burguesía contra el candidato obrero).

Organizativamente, el frentepopulismo tomó la forma de la estructuración del partido cada vez más según criterios de intervención electoral, y cada vez menos de lucha de clases. La participación directa de los trabajadores organizados decreció a niveles insignificantes, mientras crecía la de caciques electorales y burócratas arrivistas. El peso económico de las posiciones ocupadas en el aparato estatal (actualmente el PT participa en el gobierno de siete estados y más de 400 municipios, o sea, dispone de decenas de miles de cargos asalariados en el Estado) pasó a determinar cada vez más las relaciones de fuerzas internas, a través de las afiliaciones masivas y "votos dirigidos" en los encuentros y congresos, lo que fue llevado al paroxismo en el II Congreso Nacional del PT. Todo esto materializaba una adaptación e integración crecientes del PT al Estado burgués, en condiciones bastante semejantes a lo que sucedió a la socialdemocracia europea antes de la I Guerra Mundial.

La adaptación fue también política. Uno de sus aspectos fue la "depuración" del PT de sus tendencias trotskistas, a partir de 1990, cuando *Causa Operária*, primero, y *Convergência Socialista* después, fueron excluidas, constituyendo desde entonces partidos separados del PT. Decisiva fue la intervención "de vanguardia" en esta depuración de otra tendencia supuestamente trotskista, la DS (Democracia Socialista, vinculada al Secretariado Unificado de la IV Internacional).

A partir de 1990, el PT pasó a tener una proyección internacional organizada, con la convocatoria del encuentro latinoamericano de partidos y organizaciones de izquierda, en San Pablo, que consituyó el llamado "Foro de San Pablo". No se trató, sin embargo, de una proto-internacional obrera, porque las resoluciones del Foro (independientemente de su contenido político) nunca tuvieron sino un valor moral (sin ninguna incidencia en la actividad práctica de sus miembros). Y también porque, al lado de partidos y movimientos de lucha reales, fueron convocados grupos fantasmagóricos y formaciones burguesas (como el PRD mexicano, el PDT brasileño, o el Frepaso argentino). Uno de esos partidos, el MBL de Bolivia, en 1993 integró el gobierno Sánchez de Losada, responsable por el decreto del Estado de Sitio, la prisión de centenas de militantes obreros y la tortura de militantes de izquierda.

El Foro sobrevivió como una especie de espectral Frente Popular continental, incluyendo al PC cubano, y perdiendo importancia frente a las iniciativas claramente más derechistas orquestadas por el yanqui-mexicano Jorge Castañeda (ayudado por el brasileño Roberto Mangabeira Unger, al igual que el primero profesor universitario en los EEUU). Cada vez más vacío e irrelevante para los movimientos de masas de América Latina, incluso como iniciativa meramente propagandística, se situó muy por debajo inclusive de los "encuentros" continentales impulsados por el EZLN de México.

La derechización del PT se manifestó en el papel secundario que le cupo en las movilizaciones que acabaron provocando la caída del gobierno Collor. Una de sus figuras más conocidas, la ex-intendente de San Pablo Luiza Erundina, llegó a ocupar un ministerio en el interinato presidencial del vicepresidente de Collor, Itamar Franco, en el

mismo gobierno en el que se cocinó la nueva alternativa política burguesa-fondomonetarista: el Plan Real y la candidatura de FHC (que ocupó el ministerio de economía del gobierno Itamar). El PT vaciló en adaptar una actitud opositora frente a ese gobierno, separó a Erundina (pero la readmitió posteriormente, antes que esta se alejase para incorporarse al PSB) y fue derrotado por el PSDB (FHC), nuevamente en el segundo turno, en las elecciones presidenciales de 1994 (aunque obteniendo un récord de votos, en términos absolutos y relativos).

La derechización provocó serias crisis internas. En 1993 surgió, del interior de la tendencia dirigente del partido (la "Articulación", de Lula) la Articulación de Izquierda (AE), que se transformaría en el núcleo principal del ala izquierda del PT. Sin una defnición programática clara, pero defendiendo el principio de un partido militante, el conjunto de las tendencias "de izquierda" llegaría a tener el 45% de los delegados en los siguientes eventos nacionales del PT, ocupando cargos importantes en la Dirección Nacional y en gobiernos estaduales y municipales (por ejemplo, la intendencia de Belém, capital de Pará, ocupada por la *Força Socialista*, tendencia interna del PT).

Durante el primer gobierno de FHC (94-98) los principales movimientos de lucha fueron derrotados (en especial la huelga de los petroleros), se procedió a una ola de privatizaciones y despidos en masa, así como a una creciente modificación de las relaciones laborales, instaurando diversas formas de instabilidad, flexibilización y superexplotación ("banco de horas" y otras) así como diversas modalidades de colaboracionismo clasista, en especial con la CUT (cámaras sectoriales).

El principal movimiento de lucha de los años 90, el MST, desarrolló una independencia en relación al PT mucho mayor que la de los movimientos sindicales de la década del 80: sus dirigentes critican la "izquierda institucionalizada", y llegaron a evocar la posibilidad de una intervención partidaria propia. con la alteración de las relaciones de fuerza entre las clases, no fue sorprendente que, pese a la acentuación de la miseria social (20% de desempleo en las principales capitales, caída salarial, concentración de la propiedad agraria, expulsión de millones de campesinos y asesinato de centenas de activistas y ocupantes de tierra) FHC fuera victorioso en las elecciones presidenciales de 1998 ya en el primer turno, con más del 50% de los votos (y con el PT nuevamente en segundo lugar).

Estábamos lejos, sin embargo, de una derrota histórica de los explotados. Al desgaste político del gobierno de FHC se sumó la agudización de la crisis económica mundial. La vigencia y el carácter mundial de la llamada "crisis asiática" se evidenció en la "crisis rusa" de agosto de 1998 y, a inicios de 1999, en la caída espectacular del real brasileño, que sufrió una devaluación de casi 100% en poco más de una semana. El gobierno FHC alcanzó, en los primeros meses de su segundo mandato, índices de impopularidad superiores a los de Collor de Mello en el momento de su *impeachment*. Fue gestándose un nuevo ascenso de luchas urbanas (metalúrgicos) y agrarias, que culminó en las marchas nacionales del MST y en el paro general del 10 de noviembre, cuando la consigna de "fuera FHC" ganó las calles. Está claro que no sólo la proyección política sino la propia continuidad y centralización de esas luchas estaba castrada por el carácter burocrático y pró-burgués de la dirección de las principales centrales sindicales (CUT y Fuerza Sindical).

Como sea, las primeras proyecciones electorales para 2000 (municipales) y 2002 (generales) indicaron al PT en primer lugar para las presidenciales y para algunas importantes ciudades (como São Paulo, corazón político del país). El gobierno de FHC, fracturado, lanzó una "apertura" en dirección del PT, tanto por parte del presidente cuanto del jefe del ala derecha de la coalición gubernamental (el bahiano Antonio

Carlos Magalhães, jefe del derechista PFL) so pretexto de "gobernabilidad" y "combate a la pobreza", apertura que Lula aceptó pasando por encima de cualquier instancia partidaria. Todo esto provocó nuevas crisis internas y la radicalización del ala izquierda del PT, a esta altura ya en disputa abierta con la "Articulación" no sólo en el PT, sino también en el movimiento sindical y estudiantil (donde presenta sistemáticamente listas alternativas a las de la dirección partidaria).

En esas condiciones se realizó, a fines de noviembre de 1999, el II Congreso Nacional del PT, con aproximadamente 950 delegados. Siete tesis fueron presentadas. La izquierda se presentó dividida y disminuida, lo que en parte se explica por el uso sin precedentes de maniobras de aparato, directamente apoyadas en la máquina estatal, para la elección de delegados. La tesis AE-Fuerza Socialista tuvo 21% de los votos, la de la DS 10%, y *O Trabalho* 2%. La Articulación, pese a todo, no obtuvo mayoría absoluta, sino 44%, lo que la obligó a una alianza con la derecha (Democracia Radical, DR, de José Genoíno, con 10% de los votos) para garantizar mayoría en la nueva Dirección Nacional (el candidato de la izquierda a la presidencia del partido, Milton Temer, obtuvo 33% de los votos).

Pero esa mayoría seria muy estrecha si no se hubiese reforzado por la deserción de la DS del "bloque de izquierda", para componer una "nueva mayoría", con la Articulación y la derecha, en la dirección. La DS presentó una tesis donde defendía el "control social del Estado y del mercado", y se opuso a la adopción del "fuera FHC" planteado por la izquierda, que arrastró a varios sectores de la Articulación. La DS estaba realizando su propia integración al Estado: en la intendencia de Porto Alegre, capital de Río Grande do Sul, ocupada por uno de sus principales dirigentes, practicaba una política de destrucción de la previsión social pública.

El peso significativo de la izquierda, sin embargo, obligó a la Articulación a maniobrar también con ella. La parte substancial del Congreso fue consagrada a la discusión del slogan "fuera FHC", impulsado por la izquierda y aprobado en todos los encuentros estaduales previos, con excepción de Paraná. La consigna fue considerada "golpista" por la derecha; la Articulación, en cambio, reconoció su legitimidad, aunque no su "oportunidad", con lo que consiguió excluirla sin oponérsele frontalmente. Las propuestas políticas de la izquierda (no pago de la deuda externa, re-estatización de los sectores privatizados, contra la reforma de la previsión social-jubilaciones) fueron, en cambio, rechazadas.

El Congreso del 2000 (último antes de la victoria en las presidenciales de 2002) marcó, por lo tanto, un viraje derechista. A pesar de ello, todas las corrientes hicieron un balance positivo de sus resultados, aunque por motivos diferentes y opuestos. Para la derecha (DR) hubo un avance insuficiente, pues no se formuló "un nuevo proyecto económico y político", o sea, un compromiso más claro con el capital y su Estado. Para la Articulación "lulista", lo fundamental es que se había delegado a la Dirección Nacional las cuestiones de organización y estatutos: con eso daba por descontado la aprobación de su propuesta de elección directa y abierta de las direcciones partidarias, lo que diluía a la base militante en un mar de votos obtenidos con el uso de las prebendas estatales.

Las resoluciones del Congreso hacían avanzar a la dirección del PT en el objetivo de transformarse en alternativa de gobierno fiable para la burguesía. El capital reclamaba una política de destrucción del derecho laboral y de completa privatización del sistema previsional, no simplemente que le garanticen el capitalismo. También reclamaba una reforma tributaria que facilitase el pago de la deuda externa y la salida y entrada de capitales, no simplemente que no se fuera a repudiar la deuda externa. Necesitaba

reforzar las privatizaciones ya realizadas con una mayor ampliación del mercado interno de los servicios al capital extranjero. La crisis con la que emergía el PT de su II Congreso era así más importante que la propia derechización.

En octubre y noviembre del 2002, Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), candidato del PT (Partido de los Trabajadores) venció, en segunda vuelta, las elecciones presidenciales en Brasil, con más de 52 millones de votos. La victoria de Lula, sin duda, consagraba una antigua aspiración popular: era la cuarta vez que el PT presentaba a Lula como candidato presidencial, la primera fuera en 1989, cuando Lula perdió en segunda vuelta contra el después defenestrado Fernando Collor de Mello. En las tres ocasiones anteriores, Los candidatos de la derecha (el propio Collor, y Fernando Henrique Cardoso, FHC, en los pleitos de 1994 y 1998) habían tenido todo el apoyo del empresariado y el capital financiero internacional, que rehuía cualquier posibilidad que el candidato "ex metalúrgico de izquierda" venciese.

Las condiciones políticas de 2002, determinadas por la gravedad de la situación económica del Brasil, después de la devaluación de 1999, y por la crisis política continental, comandada por la insurrección popular argentina, eran completamente diferentes. Lula se esforzó, durante todo el período previo a su victoria, en aparecer como la alternativa de centroizquierda "confiable" a la crisis que se cernía sobre el gigante de América del Sur.

Ya en 2001, la amenaza de una cesación de pagos (*default*) de Argentina se había convertido en el fantasma de la economía brasileña. Afectado por lo que serían las consecuencias del infortunio ajeno, el Banco Central de Brasil elevó la tasa de interés, iniciando un espiral sin fin, con el propósito declarado de controlar una fuga de capitales y la devaluación del real. "Se interrumpe la curva de crecimiento", reaccionó casi unánimemente la prensa brasileña. El crecimiento del PIB pasó de un 6% al 1,5 al 2% como máximo.

El reingreso de Brasil en el territorio de la crisis tenía como causa básica el quebranto provocado por la misma política que hundió a la Argentina. Es decir: se remataron a precio de banana los activos estatales, se apeló al endeudamiento que engordaba al capital especulativo y de corto plazo a costa de las finanzas estatales, y estas últimas fueron convertidas en un gigantesco subsidio al gran negocio financiero. "El cuadro de las cuentas externas del país en el primer bimestre del 2001 es pavoroso".[133] Los intereses pagados a la banca extranjera crecieron en un 40% con relación al mismo período del año anterior. La salida de beneficios y dividendos creció casi el 1000% hasta alcanzar los 700 millones de dólares en el mismo lapso. El ingreso de capital externo para inversión caería entre 30 y 40% en 2001.

La quiebra potencial de Brasil era la base de la crisis política del régimen de Cardoso. La alianza entre el partido del presidente (PSDB) y el derechista Partido Liberal estaba quebrada, el Parlamento estaba paralizado porque el oficialismo liquidó las sesiones legislativas ante la amenaza de la constitución de una Comisión Investigadora de la corrupción. El gobierno estaba en el banquillo de los acusados por coimas en los negociados de las "privatizaciones", financiamiento ilegal de las campañas electorales, operaciones de funcionarios de lavado de dinero en los paraísos fiscales y fraude en licitaciones y concesiones del Estado.

A fines de marzo de 2001 los representantes de las cámaras patronales más importantes del país manifestaron su "preocupación con la gobernabilidad y la inestabilidad política reinante". En una reunión con líderes parlamentarios, el propio Cardoso planteó que con

---

[133] *Gazeta Mercantil*, San Pablo, 25 de marzo de 2001.

las complicaciones del escenario financiero internacional "se corre el riesgo de que la crisis política se dispare a partir de la economía, como en la Argentina, y en ese caso la situación de toda la región sur de América Latina sería insostenible". El hombre sabía que su delfín para las elecciones presidenciales del 2002, el ministro José Serra, aparecía con un 7% de apoyo contra casi 30% de Lula y poco menos de 20% del también centroizquierdista Ciro Gomes. Presionado por la crisis, el propio Lula acababa de declarar que "el socialismo no está a la orden del día", enviando señales de "moderación" a la clase patronal.

El gobierno FHC se vio obligado a canjear anticipadamente títulos de deuda externa con vencimientos en los años 2003 y 2004 – por valor de 3.000 millones de dólares – por deuda con vencimiento inmediato, lo que acercó más la perspectiva de la cesación de pagos. Se desató una feroz disputa entre los bancos brasileños (que tenían en sus carteras la deuda interna) y los extranjeros (que tenían en su poder la deuda externa). En esta lucha, los bancos norteamericanos reclamaron una reestructuración de la deuda doméstica brasileña antes de la elección, que "le pegaría de lleno" a los bancos brasileños. A excepción de China, Brasil era el país que mayores inversiones directas recibiera en la década de 1990.

Después de la privatización de Telebrás, la telefonía aparecía como el sector que atraería un flujo de capitales de tal envergadura que le permitiría financiar su enorme deuda. Pero la telefonía brasileña estaba en quiebra: muchas telefónicas no habían podido cancelar sus vencimientos de deuda. Peor todavía, el colapso del pulpo de las telecomunicaciones WorldCom derrumbó la Bolsa brasileña. Embratel, la principal empresa de comunicaciones de larga distancia de Brasil, propiedad de WorldCom, cayó el 25% en una sola jornada. Con la crisis de las telefónicas y el derrumbe de Embratel-WorldCom, la crisis brasileña se agravaba extraordinariamente porque pone en evidencia que las inversiones recibidas fueron incapaces de generar los beneficios que hicieran posible el repago de la deuda, y se habían convertido en una gigantesca hipoteca.

La crisis que enfrentaba el Brasil era el punto final de una tendencia que venía de lejos: las inversiones directas venían cayendo en forma sistemática en Brasil y en toda América Latina. Después del colapso argentino, la crisis brasileña ponía fin a la "reconquista española" de América Latina y dejaba al debilitado gran capital español expuesto al copamiento de sus rivales. El golpe fundamental, sin embargo, lo recibirán los bancos norteamericanos. Con una deuda total de 370.000 millones de dólares, Brasil concentraba el 33% de la exposición de los bancos norteamericanos en América Latina.

Brasil sufría, por sobre todo, el "contagio norteamericano", con el aumento de la tasa de interés para las inversiones de riesgo que golpeaba severamente al sector de las telecomunicaciones. La sobreinversión que siguió a la privatización de las telecomunicaciones llevó, igual que en Estados Unidos y Europa, a una expansión de la capacidad instalada que no tenía posibilidades de utilización. El 2002, antes de la victoria de Lula, asistió a un verdadero desplome de la inversión: apenas un tercio del 2001.

La "locomotora" del ingreso de capitales a Brasil (la telefonía) simplemente paró. Las empresas más débiles emepezaban a caer en la cesación de pagos, lo cual hizo decir que "en Brasil llegó la hora de las consolidaciones", es decir, de las quiebras y la venta de los despojos. El objetivo del Tesoro norteamericano era desplazar a sus rivales europeos y japoneses de Brasil, apoderarse a precios de regalo de los activos brasileños y, además, forzar a la economía brasileña a integrarse a la órbita comercial y financiera del

imperialismo norteamericano. La crisis brasileña era, en este sentido, una manifestación del agravamiento de la lucha inter-imperialista mundial.

Los temores de la burguesía brasileña no estaban centrados en la posibilidad del ascenso de Lula, que se declaró partidario de las privatizaciones, del pago de la deuda externa y de una política abiertamente "pro-mercado"; su temor radicaba en la capacidad del PT para manejar la crisis que se avecinaba.

El colapso argentino fue un golpe para el comercio exterior brasileño, pues la Argentina era el destino del 30% de las exportaciones brasileñas, que desde fines del 2000 venían cayendo sostenidamente. Los bancos, en particular los europeos, estaban reduciendo su "exposición" en América Latina como consecuencia de las pérdidas sufridas en la Argentina. En los últimos meses del 2001, los activos bancarios en América Latina se redujeron en 4.900 millones de dólares.

Así como la crisis brasileña de 1999 y la devaluación del real empujaron el derrumbe argentino, éste golpeaba ahora a Brasil. Más allá del "contagio argentino", Brasil marchaba por su propia cuenta a la cesación de pagos con una deuda pública bruta de 370.000 millones de dólares. Los acreedores internacionales se habían negado a refinanciar la deuda externa de la mayoría de las grandes empresas brasileñas; las pocas que lograron hacerlo debieron aceptar poner como garantía sus ingresos por exportaciones, que serian retenidos en el exterior a disposición de los acreedores.

El gobierno y el PT, sin embargo, seguian batiendo la tecla de que "Brasil no puede quebrar". Gran parte de la monstruosa deuda pública fue contraída no para financiar al Estado, sino para absorber el exceso de dinero en los bancos vendiéndoles títulos del Estado. En la picota quedarían expuestos, también, los bancos extranjeros, con créditos a Brasil del orden de los 140 mil millones de dólares. En tercer lugar se anotarían los grupos privados que acumulaban una deuda externa de 120 mil millones de dólares. El préstamo del FMI de agosto de 2002 fue una operación de salvataje de los bancos norteamericanos Boston y Citibank.

La base para el rescate político del Estado (burgués) en el Brasil, era el Partido de los Trabajadores. Una encuesta realizada en la convención nacional del PT de Brasil arrojó algunos resultados reveladores: el 74% de sus delegados eran funcionarios del partido o del Estado (parlamentarios, concejales, miembros de gobiernos estaduales y municipales, asesores); el 65% de los delegados tenían ingresos superiores a los 10 salarios mínimos, y en algunos casos, hasta superiores a los 50 salarios mínimos. La conclusión de la encuesta fue que "la clase media domina los cuadros petistas; los dirigentes del PT son más profesionales, tienen mejor nivel de vida y mayores estudios que cuando el partido fue fundado en el ABC (el cinturón industrial) paulista el 10 de febrero de 1980".

El ascenso político de la clase media en el PT venía de lejos, pero se había acelerado en los últimos años: en la convención de 1997, los delegados que ganaban más de 10 salarios mínimos eran el 53% (en 2002 eran el 67%); el número de "políticos profesionales" era del 66% (después, del 74%). Los dirigentes petistas defendían el ascenso de la clase media diciendo que "el PT es un partido pluralista". Sus afiliados no elegían como delegados a trabajadores, campesinos, estudiantes o intelectuales sino a "políticos profesionales", es decir a burócratas. Este aparato de funcionarios del Estado y del partido, que dominaba política y financieramente al PT a través de las dietas, los presupuestos estatales y las "fundaciones", y cuya política llevaba un curso cada vez más derechista, era la expresión de una capa social pequeño-burguesa, que en el cuadro del derrumbe de las condiciones sociales de las masas del Brasil (incluida la clase

media) había resuelto su propia "cuestión social" (es decir, su ascenso y diferenciación social de las masas empobrecidas) mediante la integración al Estado capitalista.

En 2002, la campaña electoral abrió un compás de espera, que se resolvió con la victoria de la coalición encabezada por el PT. En septiembre, el gobierno de FHC suscribió un acuerdo con el FMI, que condicionaría la política de cualquier partido que venciese la elección de octubre, y lo hizo... con el acuerdo explícito de las cuatro principales candidatos presidenciales (José Serra, Ciro Gomes, Anthony Garotinho y... Lula). Lula sumó su firma al acuerdo alcanzado por el gobierno "neoliberal" de Fernando Henrique Cardoso con el FMI, cuya finalidad era, precisamente, la de trazar el rumbo de su sucesor. Lula eligió como compañero de fórmula a un elemento evangelista del Partido Liberal, José Alencar. Por esto mismo los dos líderes más reconocidos de la derecha brasilera, herederos de las dictaduras militares de los años ’60 y ’70 - el paulista Paulo Maluf y el bahiense Antonio Carlos Magalhaes - llamaron a votar por Lula en la segunda vuelta, en la que el ex metalúrgico venció con gran ventaja, y 53 millones de votos, a José Serra.

16. LOS PIQUETEROS Y LA REVOLUCIÓN LATINOAMERICANA

En 2002, la dinámica política de América del Sur estuvo dominada por la movilización argentina. La rebelión campesina, obrera y popular que sacudió a Paraguay confirmó que el "contagio" argentino no sólo era financiero sino también político.

Miles de campesinos bloquearon las rutas a Asunción con el decidido respaldo de los trabajadores de las ciudades y los estudiantes. La movilización popular, la mayor desde la caída de Stroessner, levantó un programa político: rechazo de la "ley antiterrorista", de la privatización de las rutas, de la "reforma" de la banca pública, de la aplicación del IVA agrario, de la privatización de la compañía telefónica Copaco, y contra la impunidad y la corrupción gubernamentales. Frente a la envergadura de la movilización, el gobierno de González Macchi aceptó todos los reclamos, con excepción de dar marcha atrás con la privatización telefónica, exigida por el FMI como "aval" de nuevos préstamos.

Ante el recule del gobierno, el Congreso Democrático del Pueblo (que reunía a las principales organizaciones campesinas, sindicales y de izquierda), llamó a levantar los cortes y a marchar a Asunción para imponer al Senado el rechazo de la privatización telefónica. Sin embargo, grupos de piqueteros se negaron a levantar los bloqueos y sólo lo hicieron con el compromiso de continuar la lucha hasta paralizar la venta de Copaco. La militarización de las rutas llevó a sangrientos enfrentamientos, en los que fueron asesinados dos campesinos.

Bajo la inmensa presión de los campesinos marchando hacia Asunción y la amenaza de una huelga general indefinida, el Senado terminó anulando la privatización telefónica. El FMI amenazó con cortar la "asistencia financiera" a Paraguay. La rebelión popular era la consecuencia directa del derrumbe de Paraguay, cuy a endeble estructura sufrió un golpe demoledor con la crisis argentina: no sólo las exportaciones paraguayas a Argentina cayeron un 50% sino que, además, se incrementaron las exportaciones argentinas, provocando un profundo deterioro comercial; la devaluación del guaraní fue fulminante y la corrida bancaria, que había comenzado antes de la de Argentina, se agravó como consecuencia de que muchos de los bancos paraguayos tenían activos (acciones y depósitos) en Argentina.

El fracaso de la privatización telefónica a manos de la movilización popular selló la suerte del débil gobierno de González Macchi. Paraguay pasó a oscilar entre un recambio centroizquierdista (el vicepresidente Julio César Franco, del Partido Liberal), el golpe militar, y el levantamiento obrero y campesino.

La "flotación" del peso uruguayo - y su consiguiente devaluación - que el FMI y el Tesoro norteamericano impusieron al gobierno de Batlle, era la confesión del completo fracaso de la política oficial de salvataje de la banca en quiebra. En febrero de 2002 comenzó la corrida bancaria después de que se destapara la existencia de un "agujero negro" de varios cientos de millones en el Banco Comercial. En poco menos de cinco meses, los bancos perdieron depósitos por 5.000 millones de dólares. En su esfuerzo por defenderlos, el Banco Central (BCU) perdió la mitad de sus reservas. Además, el gobierno inyectó más de cien millones de dólares en el Comercial para evitar su colapso y tomó un préstamo del Banco de la República (oficial) de 170 millones para auxiliar a otras entidades. Nada de esto, sin embargo, logró frenar el derrumbe bancario.

El salvataje fracasó porque, como en Argentina, los extranjeros se negaron tajantemente a poner un solo dólar en sus subsidiarias uruguayas: el único accionista del Comercial que accedió a poner fondos, el Crédit Suisse, no los puso en el banco sino que le otorgó un préstamo, a tasa usuraria, al Estado uruguayo para financiar su "compra" del Comercial.

En Uruguay, el derrumbe bancario condensó cuatro años de recesión aguda, con su secuela de quiebras y créditos impagos; el imparable retroceso comercial internacional; el endeudamiento generalizado, público y privado, que sólo pudo sostenerse con más deuda; el derrumbe de la recaudación fiscal y del ingreso de capitales que cuestiona el pago de la deuda externa. La crisis de la deuda externa, que en Uruguay, como en toda América Latina, venía creciendo sistemáticamente en relación al PBI, a las exportaciones y a la recaudación fiscal, golpeaba especialmente a los bancos que concentran en sus manos los títulos de la deuda y los negociados que se hacen con ellos.

Ante la evidencia de que los activos de los bancos (los títulos de la deuda y los préstamos) se desvalorizaban porque eran crecientemente impagables, los acreedores de los bancos corrían en masa a retirar sus depósitos. La "flotación" fue impuesta por el FMI como condición para el "blindaje" de 1.500 millones de dólares que recibió Uruguay para "recomponer sus reservas". El inevitable fracaso de la "flotación" planteaba la quiebra del sistema bancario uruguayo y, con él, la del propio gobierno de Batlle.

Todo el gobierno defendió públicamente, hasta horas antes de la devaluación, la política oficial; correspondía reclamar la renuncia de todo el gobierno, empezando por el propio Batlle, algo que el Frente Amplio rechazó como "un ataque a las instituciones democráticas". Pero Tabaré Vázquez, presidente del FA-EP, frenó en seco a sus parlamentarios. Les ordenó "no hacer olas" ante la "delicada situación del país"; el propio Vázquez se llamó a un escrupuloso "silencio".

El cacerolazo que conmovió a Uruguay en 2002 no cayó del cielo. Fue convocado por la Corriente de Izquierda (ala izquierda del FA) y organizaciones barriales y vecinales, y estuvo precedido por un significativo aumento de las luchas sindicales. El mes de abril fue el de mayor número de conflictos en los últimos años, con huelgas en la construcción, la enseñanza y la salud. Estas luchas provenían de la directa presión de las bases. La burocracia sindical del PIT-CNT había establecido un bloque político con la "burguesía productiva", todos los sectores patronales opuestos al gobierno.

A ese panorama de quiebra se sumaba el "estable" Chile, golpeado por la caída de sus exportaciones a la Argentina, la desaparición de los turistas argentinos y, sobre todo, las enormes pérdidas de las compañías chilenas que han participado de las privatizaciones argentinas: su capitalización bursátil ha caído en 1.600 millones de dólares como consecuencia de la devaluación. En consecuencia, se duplicaría el déficit de cuenta corriente chileno, lo que obligaría al gobierno a financiarlo con endeudamiento externo... cuando los mercados financieros se cerraban para América Latina.

En Argentina, las multitudinarias manifestaciones que se llevaron a cabo el 19 y 20 de diciembre de 2002, celebrando el primer aniversario del levantamiento popular que acabó con la presidencia de De La Rúa, recordaron que la tempestad, lejos de amainar, continuaba en apogeo. Las jornadas que derribaron a De La Rúa, significaron la convergencia de las llamadas clases medias con los piqueteros y el resto de la clase trabajadora argentina. Desde entonces el país fue escenario de una extraordinaria explosión de formas de lucha y solidaridad, desde las asambleas populares a las ocupaciones de fábricas, pasando por los comedores, las compras comunitarias, las huertas populares, etc.

La trayectoria del gobierno de Duhalde, que precedió a las jornadas de diciembre de 2002, fue marcada por el fracaso, expresado por la creciente descomposición de la economía, por la extraordinaria división de las clases dominantes, y por su impotencia para frenar el ascenso de las luchas populares. Una crisis que llevó al FMI a cambiar su tradicional papel de bombero, por el de incendiario.

Con la devaluación del peso, el gobierno buscaba incentivar las exportaciones y proteger la producción y el mercado interno, a costa de la desvalorización de los salarios y el gasto público. La devaluación contó con la complicidad del FMI y del Tesoro Norteamericano, que pretendían el abaratamiento de los activos argentinos y el desplazamiento de la competencia de los inversores europeos. Un año después el cuadro de la economía era catastrófico. El desempleo alcanzaba el 28% de la población activa y el empleo precario superaba el 20%, mientras que el poder adquisitivo de los salarios retrocedía un 25% en 7 meses. El coste de la canasta familiar se incrementó 73,8% en un año, situándose en mayo de 2002 en 650 pesos, mientras que el 70% de los asalariados gana menos de 500 pesos. Pese a una caída tan drástica de los costos salariales, 50.000 trabajadores se quedaban sin empleo cada mes.

Según las siempre conservadoras estadísticas oficiales, más del 55% de la población era considerada pobre, y más del 20% indigente. Saltó a la luz en los medios de comunicación de todo el mundo la muerte de centenares de niños, sólo en la provincia de Tucumán. En un país donde se producen alimentos para 300 millones de seres humanos, 33 niños se morían de hambre cada día. Según cifras oficiales, había 260.000 niños desnutridos, el 15,5% de la población infantil (aunque en algunos lugares como en el Gran Buenos Aires la cifra llegaba al 32% y en otros). El 70% de los niños argentinos no recibía el mínimo de la dieta adecuada, facilitando la propagación de enfermedades y parásitos.

A pesar de la devaluación, las exportaciones estaban casi estancadas, y la renegociación de la deuda externa continuaba paralizada. La caída del 13% del PIB no reflejaba las dimensiones reales del colapso. Como consecuencia de la deflación, el valor de la masa de producto había caído casi en un 50%, lo que implicaba una fuerte quiebra de capitales. No se concedían créditos bancarios de ninguna clase, las inversiones caían en picada. La devaluación, lejos de ayudar a reactivar la economía, fue un factor favorable a la desinversión y la fuga de capitales. En diciembre de 2002, el gobierno aplicó una subida generalizada de los servicios de luz, agua, gas y teléfono. El FMI y el Tesoro norteamericano exigían que la futura reestructuración de las finanzas públicas diese lugar a un excedente con el que pagar la deuda externa, y se oponían tajantemente a que se invirtiese en un plan de salvación de los empresarios argentinos y de los inversores europeos.

El otro de los dos grandes objetivos del gobierno Duhalde fue la liquidación del movimiento piquetero. En un primer momento maniobró para atraerse al sector más moderado (la FTV-CTA, D'Elía, Alderete...), mediante un acuerdo con la iglesia y las cámaras patronales a través de los consejos consultivos, mientras se reprimía al más combativo. Esta fue la finalidad de los asesinatos de Puente Pueyrredón, que en un primer momento fueron atribuidos a la violencia de los "incontrolados".

De esa forma el gobierno quería legitimar la represión y erigirse en el árbitro de la crisis. Sin embargo la provocación se derrumbó cuando todo el mundo pudo ver, a través de las cámaras de televisión, la ejecución a sangre fría de Darío Santillán y Maximiliano Kosteky, a manos de la policía. La respuesta popular fueron las movilizaciones que sucedieron entre el 27 de junio y el 9 de julio, y con la masiva ocupación de la Plaza de Mayo por las organizaciones piqueteras, junto a las asambleas populares, que exigían el castigo a los culpables (tanto los autores materiales, como a sus instigadores).

Temeroso de acabar como De La Rúa, Duhalde tuvo que retroceder, anunciando el castigo de los policías responsables y el adelanto de las elecciones al mes de marzo (y después a abril) de 2003. El retroceso del gobierno fue acompañado de nuevas victorias

(la extensión del subsidio de desempleo a dos millones de parados, la expropiación de varias empresas ocupadas, aumentos salariales e incluso la reducción de la jornada laboral para los trabajadores del metro subterráneo de Buenos Aires). El fracaso del gobierno implicaba que la burguesía tenía que replantearse la forma con la que se enfrentaba a la mayor bancarrota política y económica de la historia. Convertida la Alianza (que había gobernado con De La Rúa) en un cadáver político, la otra gran opción del sistema, el peronismo, se fragmentaba en duras batallas internas, plagadas de denuncias de los métodos mafiosos de las distintas camarillas enfrentadas.

La debilidad del gobierno se acentuaba por el derrumbe de numerosos alcaldes y gobernadores provinciales (como Miranda de Tucumán). La quiebra política del Estado capitalista no sólo se evidenciaba por el enorme descrédito del gobierno. También se reflejaba en la extraordinaria división de la burguesía argentina, inclusive la descomposición de su propio aparato represivo. En una de sus declaraciones en medio de sus interminables negociaciones con el FMI, el ministro de economía argentino, Roberto Lavagna comentó que la crisis presentaba los primeros signos de superación.

Uno de los indicios más prometedores a los que aludía era el aumento de la recaudación de impuestos. Lavagna olvidaba decir que un 38% de lo recaudado era en forma de títulos públicos completamente desvalorizados, que presentaban las empresas para poder saldar sus deudas pendientes con el Estado. En realidad la política económica de Duhalde no hacía otra cosa que impulsar el saqueo de las arcas públicas, permitiendo que las empresas saldasen sus deudas con papeles sin valor.

Los gobiernos provinciales se vieron obligados a emitir bonos que cada vez tenían menos valor, para poder hacer frente a sus pagos. El FMI exigía nuevos tarifazos, la privatización de la banca estatal. La economía argentina oscilaba entre la quiebra de la cadena de pagos (debido a la escasez de moneda) y el desbordamiento de la inflación (si el gobierno cede a la tentación de emitir más pesos).

Un sector del empresariado, representado por Cavallo, reclamó el fin de la "pesificación" (transformación de todas las deudas y activos de dólares para pesos argentinos) y la vuelta a la paridad del peso con el dólar. Una medida de este tipo sería un gran negocio para los capitalistas que pagaron sus deudas con bonos devaluados, pero llevaría a la quiebra a los deudores de los bancos (que no podrían pagar los préstamos) y plantearía la renegociación de los plazos de vencimiento de las deudas entre los banqueros y los industriales. Otro sector del empresariado defendía la pesificación, con la esperanza de que la gigantesca devaluación facilitase las exportaciones. Pero las exportaciones estaban casi estancadas a causa de la crisis internacional. Brasil, el principal receptor de las exportaciones argentinas, se encontraba en graves aprietos, no dispuesto a sacrificar la producción nacional, para ayudar a superar la situación del vecino país.

La "izquierda" del sistema no tenía alternativa. Elisa Carrió, Luis Zamora o Alicia Castro no conseguían despegar como candidatos/as. Su trayectoria política fue una vacilación constante entre el boicot y la presentación de sus candidaturas a unas elecciones en las que más de la mitad de la población manifestaba su descrédito. La popular consigna: "¡Qué se vayan todos!" expresaba el rechazo de la inmensa mayoría de la sociedad argentina a la llamada "clase política". La quiebra política revelaba el fracaso de los capitalistas argentinos y sus socios internacionales. En las semanas anteriores al "corralito" (bloqueo de depósitos), los propietarios del país, no más de 1.500 empresarios, saquearon sus arcas llevándose a puertos más seguros más de 3.000 millones de dólares que estaban depositados en los bancos. Se calculaba que la

burguesía argentina tiene más de 160.000 millones de dólares depositados en el extranjero, más que la deuda pública o el PIB delo país.

La putrefacción del Estado argentino se hacía evidente en la descomposición de su propio aparato represivo. El Subsecretario de Seguridad de Buenos Aires confesó ante la alarmante ola de crímenes en los que se había visto involucrada la policía, que las fuerzas de seguridad estaban afectadas por la complicidad con bandas mafiosas. La crisis también afectaba al aparato de Estado. La caída de los salarios y el corralito estimularon la corrupción entre sus miembros, que buscaban en la delincuencia poder sobrevivir.

A medida que la crisis se agravó, surgió una proliferación de formas de organización, lucha y solidaridad entre los explotados. Todas esas formas, nacidas al calor de la situación revolucionaria, tendieron a converger en torno al movimiento piquetero. Cientos de locales fueron ocupados y transformados en comedores populares y centros culturales, donde se discute la organización y la extensión de las luchas. Fuera de las ciudades se expropiaron tierras improductivas, convertidas en huertas colectivizadas que se encargaron de suministrar alimentos a la población hambrienta organizada en torno a las asambleas piqueteras.

En la Asamblea Nacional Piquetera celebrada en febrero de 2002, se rechazó la propuesta de convertir al movimiento en una agrupación de características ideológicas, a través de un centro coordinador de luchas populares, porque hubiera llevado a su disolución política en la burocracia de la CTA y de los partidos del llamado “centro izquierda”. Las organizaciones surgidas al calor de las luchas se transformaron en una escuela de revolucionarios. Las discusiones y los debates, lejos del diletantismo, alumbraron un proceso de clarificación política entre sus miembros. El contenido de los debates iba mucho más allá de lo económico, situándose de lleno en lo político, en la cuestión del poder, del gobierno de los trabajadores.

A lo largo de las luchas, miles de activistas fueron detenidos y torturados, muchos fueron encarcelados en espera de un juicio farsa, y decenas de ellos asesinados (Mauro Ojeda, Javier Barrionuevo, Carlos Almirón, Graciela Acosta, Maximiliano Kosteky, Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, y otros más). El reclamo de la libertad de los presos políticos (como la lucha que en octubre liberó al dirigente piquetero Raul Castells) y la exigencia del juicio y castigo a los culpables de los asesinatos, movilizaron a decenas de miles de trabajadores en todo el país. El Bloque Nacional Piquetero fue la expresión de lo más avanzado y consciente surgido del *argentinazo*. Las organizaciones locales abrieron cientos de comedores populares que se encargaron de alimentar a las masas hambrientas. A través de las movilizaciones y reclamos consiguieron arrancar al gobierno grandes cantidades de alimentos que distribuyen entre la población. Sin embargo rechazaron tajantemente convertirse en los gestores de la miseria: exigieron salario y trabajo. Los comedores populares no se diferenciaron de las fábricas ocupadas y puestas en funcionamiento por sus trabajadores: buscaron y buscan la supervivencia a través de la movilización y la lucha contra el Estado capitalista.

El Bloque Nacional, agrupando a los sectores combativos, fue desplazando a los colaboracionistas (CCC-CTA), pese al apoyo que éstos recibían del gobierno, para boicotear las movilizaciones (la CCC y la FTV-CTA se negaron a asistir a la manifestación convocada por el Bloque, la Aníbal Verón y el MIJD, y que contó con la asistencia de las Asambleas populares, el 27 de junio, en repudio por los asesinatos del Puente Pueyrredón). El 28 y 29 de septiembre de 2002 se celebró la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados en la que se reunieron más de 1500 delegados de todo el país (convocada por el Bloque, el MIJD, Barrios de Pie y la CTD

Aníbal Verón, participaron también decenas de asambleas populares, delegados de sindicatos combativos, cuerpos de delegados, fábricas en lucha, delegados de federaciones y centros estudiantiles), para discutir la situación y sus perspectivas.

La influencia del ala izquierda, el Polo Obrero (impulsado por el Partido Obrero), fue muy importante. El Bloque Piquetero desarrolló una línea política encaminada a atraer a los dos millones de desocupados integrados en los planes de trabajo del gobierno. Se exigió la mejora de sus condiciones de trabajo, su derecho a la autoorganización, cobertura sanitaria y jubilatoria, y la elección de los encargados y capataces por los propios trabajadores. También se denunció que los planes *Trabajar* estaban siendo utilizados por los dirigentes políticos burgueses y los empresarios, con la complicidad de la burocracia sindical, para destruir puestos de trabajo fijos.

El Bloque Piquetero reclamó el aumento de los salarios a 600 pesos indexados como mínimo, con el objetivo de levantar un programa de luchas que unifique los intereses de los trabajadores empleados, con los parados y precarios. Un ejemplo fue la campaña que para rebajar el horario de los trabajadores del Subte de Buenos Aires a 6 horas diarias, sin recorte salarial, con lo que se crearían cerca de 1500 puestos de trabajo en la empresa. La batalla por la unidad de los trabajadores bajo la bandera del movimiento piquetero, sólo podía llevarse a cabo con una tenaz batalla contra el control burocrático de los sindicatos, a través de la elección directa de cuerpos de delegados. Frente a los despidos y el cierre de empresas, el Bloque propuso su ocupación y puesta en funcionamiento bajo el control de los mismos trabajadores. "¡Qué se vayan todos!" y "¡Qué gobiernen los trabajadores!" fueron las consignas centrales.

Las Asambleas Populares nacidas en las jornadas revolucionarias de diciembre de 2001, organizadas en los barrios, especialmente en el Gran Buenos Aires, agrupan no sólo a trabajadores, sino también a sectores de la clase media y especialmente a la juventud. Nacieron como respuesta a la profunda descomposición del capitalismo argentino. Su relativo reflujo que reflejó el cansancio de sectores de la clase media. En su seno existían tendencias hostiles a los piqueteros, pero minoritarias. Su alianza con los piqueteros fue probada en multitud de movilizaciones. Juegan también un papel de primer orden como punto de apoyo de las fábricas ocupadas, como Brukman, Zanon, Chilavert y Grissinópoli, donde ayudaron al mantenimiento de las luchas a través del reclamo de bolsas de comida, redes solidarias y la movilización de los barrios frente a las amenazas de desalojo de la policía y de las patotas empresariales.

En un año se perdieron más de medio millón de empleos. Las inversiones empresariales desaparecieron y el PIB cayó 20% en seis meses de 2002. A pesar del menguante poder adquisitivo de los salarios, perder el trabajo en estas condiciones implicaba perder las escasas posibilidades de supervivencia del trabajador y su familia. Este es el temor que atizó la burocracia sindical para paralizar las luchas. Sin embargo el constante cierre de empresas y la imposibilidad de poder vivir con el salario fueron empujando a los trabajadores activos hacia el movimiento piquetero. Frente al cierre de 1200 empresas, centenares de ellas fueron ocupadas y puestas a funcionar por sus trabajadores, para garantizar sus empleos. En empresas como Lavalán o Parmalat, piqueteros y trabajadores de las fábricas ocupadas se enfrentaron con éxito a la policía y a los matones enviados por los empresarios.

En octubre de 2002, la resolución política del Comité Nacional del Partido Obrero describía la situación económica del país y los trabajadores sin tapujos: "*La crisis del actual proceso político traduce, en primer lugar, la incapacidad del gobierno para reagrupar a la burguesía en torno a una salida a la bancarrota capitalista. Los anuncios reiterados sobre el hecho de que la depresión productiva habría encontrado*

un "piso" se han visto desmentidos una y otra vez. La capacidad ociosa de la industria es más elevada que nunca. Las cifras publicadas la semana pasada han vuelto a mostrar una caída de la producción que niega la pretensión de haber tocado fondo. El gobierno alega, de todos modos, haber evitado la hiperinflación Pero la medicina aplicada para esta supuesta "estabilización" es una caída tan brutal del consumo que, por sí misma, inviabiliza toda reactivación capitalista. La magnitud en el retroceso del precio de la fuerza de trabajo y la desocupación en masa, implican una quiebra vertebral de las condiciones en las cuales se desenvolvió el mercado interno en el período histórico previo. La caída ha sido tan abrupta que el salario medio es ahora inferior al mínimo de todos los tiempos, registrado en el peor momento de la hiperinflación del 89. El producto por habitante ha retrocedido a valores de medio siglo atrás. No hay posibilidad de un relanzamiento de la economía sin revertir este cuadro y recomponer la masa salarial como proporción del producto interno".

En las fábricas ocupadas aparecieron también tendencias corporativistas. Sin embargo esto no desmereció el caudal revolucionario de las ocupaciones. A través de las luchas los trabajadores tomaron conciencia de que necesitaban la solidaridad de otras fábricas ocupadas, del movimiento piquetero y de la clase obrera en general, para poder oponerse con éxito al Estado y los empresarios. Frente al cierre de las empresas, las organizaciones piqueteras reclamaron su ocupación y expropiación sin indemnización a sus antiguos propietarios. Los libros de contabilidad debían ser abiertos y examinados por los representantes de los trabajadores, y debían ponerse en funcionamiento bajo el control de los mismos trabajadores de la empresa.

¿Qué es el movimiento de fábricas ocupadas? En la Argentina de 2003 ya había alrededor de 1.200 empresas vaciadas, ya sea porque habían quebrado, están en convocatoria o fueron directamente abandonadas por sus dueños. Este dato es una medida de la caducidad del régimen social. Frente a este cuadro de bancarrota comenzaron a florecer nuevas experiencias, que tienen a la clase obrera como fuerza motriz. Ante el abandono patronal los trabajadores tomaron en sus manos las conducción de la plantas, las pusieron a funcionar y garantizaron la continuidad de la producción.

Según otra información, unas 1.800, de un total de 200.000 pequeñas y medianas empresas en el país, son manejadas por sus empleados, luego de haber quedado a la deriva cuando sus titulares las dejaron en bancarrota. Este fenómeno se fue extendiendo. Lo novedoso es que además de rechazar los despidos y reclamar por los salarios caídos, los trabajadores se ponían a discutir qué hacer ante el cierre de la empresa. Por otro lado, a la par de los trabajadores, los desocupados y vecinos, a través de las organizaciones de desocupados y asambleas populares, tomaron la iniciativa de recuperar empresas inactivas y se movilizaron para ponerlas nuevamente en funcionamiento. La ocupación de Sasetru fue la expresión más avanzada de ese proceso: centenares de trabajadores de la zona, con el apoyo del Polo Obrero, reabrieron la planta de pasta que formaba parte de ese vastisimo complejo empresario, inactiva durante 19 años.

El vaciamiento general de empresas es una señal inconfundible del derrumbe de un orden social. Lo que antes era la excepción, pasó a ser la regla. Los patrones huyen de las fábricas. Ni siquiera aparecen otros candidatos dispuestos a sustituirlos. En los contados casos en que surge un capitalista interesado, la operación no es más que una pantalla para algún negocio inmobiliario o especulativo, o un proyecto de brutal racionalización. Esto pone a la orden del día la necesidad de una transformación social, en la que los trabajadores están llamados a jugar un papel protagónico. El principal

obstáculo para la producción, como lo corroboran los centenares de empresas vaciadas, es el propio capital. Los costos laborales fueron reducidos a su mínima expresión, mientras el ritmo fue llevado como contrapartida a su máximo nivel. Esta política de flexibilidad laboral extrema no sirvió, sin embargo, para que las empresas salieran a flote. Mientras los obreros vieron reducir sus condiciones de vida a niveles inauditos, los patrones vaciaban las empresas y desviaban los recursos para otros negocios, o al exterior.

Las más de 1.200 empresas abandonadas hablan de la incompatibilidad existente entre las posibilidades de producción y las relaciones de producción imperantes. Establecimientos enteros, con capacidad para emplear miles de obreros, parques de maquinarias modernos e instalaciones adecuadas, abandonados, corren el riesgo de desaparecer, mientras millones de personas no tienen trabajo, con sus demandas alimentarias, de vestimenta y de vivienda desesperantes, sin satisfacer. El problema no residía, por lo tanto, en el costo laboral sino en el "costo" empresario. Grissinópoli, Chilavert, Ghelco, Brukman, Zanón, así como las decenas de plantas en la misma condición, son "viables"; lo que las hace "inviables" es la voracidad y el parasitismo patronal. Se destruye el mito que presenta a la propiedad privada como el medio excluyente y natural de organización de la producción.

Este movimiento, de un modo general, ha sido canalizado por el "Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas" (MNER), que nuclea a gran parte de las empresas que han pasado a ser conducidas por sus trabajadores. El "Movimiento de Empresas Recuperadas" aboga por la "autogestión", o sea que la perspectiva de los trabajadores de las fábricas ocupadas es convertirse en sus dueños. Bajo esta óptica, la competencia y el mercado capitalista no serían un obstáculo insalvable; los trabajadores podrían terminar comprando, si hiciera falta, los activos de la empresa. La autoexplotación hasta el extremo de no cobrar un peso ("vivir a pan y agua"), se justificaría en función de este objetivo. Consecuentemente con ello, lo que se privilegia de las leyes de expropiación es que frenen el desalojo (todo lo demás pasa a un segundo plano) pues, a partir de ello, los trabajadores tendrían la vía despejada para encarar "autónomamente" la reconstrucción de la empresa.

El programa de las "Empresas Recuperadas" plantea la reforma de la Ley de Quiebras y la creación de un fondo fiduciario; una vez decretada la quiebra, se pretende otorgarle a los trabajadores el manejo de la empresa por el plazo de dos años. Vencidos los dos años, se vuelve al punto de partida: la patronal retoma el control total de la empresa y tiene la facultad de desalojar a los trabajadores, quienes deberían comprar la planta si decidieran continuar con su actividad. Mientras tanto, en el curso de estos dos años, la empresa continuaria bajo la tutela del juez y síndico de la quiebra, quienes están encargados de velar por los intereses de la masa de acreedores. Además de precaria, la reforma es funcional al rescate del capital: en caso de que la empresa saliera a flote, el esfuerzo obrero - expresado en la revalorización de los activos de la empresa - terminaría siendo apropiado por los acreedores.

La reforma circunscribe su acción a las empresas quebradas. El Movimiento de Empresas Recuperadas se detiene ante el altar del derecho de propiedad y no avanza un paso más, aunque nadie ignora que las empresas bajo esa condición son una minoría dentro del mapa de fábricas abandonadas. La misma limitación se registra en relación al "fondo fiduciario", cuyos recursos tendrán como contrapartida un reaseguro a cargo de las fábricas autogestionadas por sus trabajadores, quienes deberán ofrecer las garantías necesarias para asegurar la devolución de la deuda. No estamos frente a un subsidio no reintegrable sino ante un préstamo que condiciona el desenvolvimiento de la gestión

obrera y cuya entrega está atada a una serie de restricciones. Este programa estrecho y limitado conduce a reconstruir las empresas sobre bases capitalistas. Esta reconstrucción, a la corta más que a la larga, resulta incompatible con la gestión obrera.

El nucleamiento de "Empresas Recuperadas" constituye una réplica, en el ámbito de las fábricas ocupadas, del lugar que ocupan la CCC y la CTA en relación al movimiento piquetero. Así como el horizonte de ambas organizaciones es administrar los planes de empleo, es decir, un programa asistencialista, del mismo modo, el horizonte de MNER es la gestión de microemprendimientos en el marco del mercado y el sistema de explotación capitalistas.

Así como constituye un grave error hacer un fetiche de la "autogestión", constituye un error similar la "estatización", y más aun convertirla en sinónimo de socialismo. Una empresa estatal constituye una forma de propiedad burguesa. El Estado reproduce las relaciones sociales de explotación y hasta lo hace en forma más exacerbada, por su condición de representante de conjunto de la clase patronal. De la misma manera que asistimos al vaciamiento de las empresas privadas, enfrentamos el vaciamiento de escuelas, hospitales, centros culturales y asistenciales. El presupuesto estatal es una fuente de enriquecimiento para el capital privado. Una empresa estatizada no representa, por definición, una escalón superior de organización de la clase obrera frente al capital. Los atributos y cualidades de un emprendimiento obrero no pueden medirse por su forma jurídica sino por su contenido social y la perspectiva política que motoriza. La experiencia recorrida plantea impulsar la expropiación de las fábricas reivindicando la gestión obrera independiente como fase transicional del desarrollo de un doble poder.

La lucha por la expropiación de las empresas vaciadas y quebradas sólo puede ser entendida como un escalón en la lucha por el poder. La gestión obrera independiente, en que la clase obrera sustituye a la patronal en el manejo de los medios de producción, constituye un desafío al orden social vigente. El control que ejercen los trabajadores de la fábricas plantea el control del país, qué clase social debe dirigir los destinos de la nación. De lo que se trata, entonces, es de impulsar la expropiación y la gestión obrera como órganos de doble poder, que serán el laboratorio a través del cual la clase obrera irá haciendo su experiencia de poder.

Los trabajadores que tomaron en sus manos las fábricas soportaron un verdadero ahogo. Salvo casos aislados, no recibieron ningún tipo de ayuda por parte del Estado. Los subsidios multimillonarios para los bancos y grupos capitalistas en crisis y no tan en crisis contrastan con la falta de fondos para las fábricas ocupadas por los trabajadores. Esta situación convierte a las cooperativas en fácil presa de los grupos capitalistas. Aparecen en acción estudios y asociaciones de profesionales que terminan haciéndose cargo del gerenciamiento de las empresas y que preparan las condiciones para su copamiento.

Privada del apoyo sindical y discriminados por la legislación vigente, la mayoría de las fábricas autogestionadas por sus propios trabajadores no tienen más remedio que trabajar en "negro", más aún cuando están expuestos a condiciones precarias de trabajo y a grandes penurias económicas. En la Argentina pós-2001 que los trabajadores tomaron la iniciativa sin esperar el visto bueno de ninguna autoridad de turno. De la experiencia surgió un programa: ocupar toda fábrica que despida, o suspenda, o que esté en proceso de vaciamiento, y ponerla nuevamente a producir desafiando a la Justicia, al Ministerio de Trabajo, al Parlamento, al poder del Estado y todo el enjambre de leyes y reglamentaciones que están al servicio de la patronal.

La lucha por la reapertura de las fábricas debía extenderse a las plantas que habían cerrado sus persianas y permanecían inactivas hace años. Este planteamiento pasó a ser

patrimonio común del movimiento piquetero. El Bloque Piquetero, el MIJD y Barrios de Pie encabezaron el reclamo, planteando frente a las autoridades que se reabran diferentes fábricas y el auxilio del Estado a todas las empresas bajo gestión obrera, lo que concurrentemente con un plan de obras públicas, permitiría absorber la mano de obra desocupada.

El movimiento piquetero esperó el visto bueno oficial para actuar. La ocupación de Sasetru fue pionera en la materia. La recuperación de empresas estuvo limitada a empresas que venían funcionando o que habían dejado de hacerlo hace muy poco tiempo, y fueron los trabajadores que revestían como parte del plantel de la fábrica quienes tomaron la iniciativa de volver a hacerla producir. El impulso, en cambio, aquí nació "afuera". Ya no es obra de los directamente afectados, quienes, ante la amenaza de quedar en la calle, toman la determinación de tomar la fábrica y ponerla nuevamente a funcionar. La ocupación de Sasetru se inscribe en el proceso de maduración de la clase obrera, que tiene como exponentes al movimiento piquetero en general y al Polo Obrero en particular. La ocupación de Sasetru conquistó el corazón de los humildes, se transformó en una causa inmensamente popular.

Los operativos represivos fracasaron para quebrar el movimiento ascendente de lucha. Las tentativas de desalojo de esas fábricas, bajo la acción conjunta de jueces, del Ministerio de Trabajo y del aparato policial, tropezaron con la resistencia de los trabajadores, respaldados por las asambleas, el movimiento piquetero y las organizaciones populares. Lavalán, que constituyó el globo de ensayo más ambicioso y la pulseada más fuerte en la materia, terminó con un revés para la patronal y el Estado.

A pura fuerza de piquetes se barrió con la cruzada represiva. Esto no significa que el expediente represivo haya sido descartado. La burguesía y en especial los sectores más comprometidos por las expropiaciones, vuelven a la carga con la represión en toda circunstancia que consideren favorable, apuntando a imponer una salida de fuerza que ponga fin a las ocupaciones. Lo prueba la irrupción policial y posterior causa penal contra los trabajadores de Brukman, así como otros casos (Zanón).

Estamos en presencia de un fenómeno de un alcance gigantesco. El hecho de que los trabajadores tomen la conducción de las fábricas, sustituyan a los patrones y pongan las fábricas nuevamente a funcionar - y que este hecho pase a tener un carácter generalizado - es una manifestación del alto grado de conciencia y determinación de la clase obrera sobre la función histórica que está llamada a jugar. Frente al abandono y huida de los capitalistas, la clase obrera aparece, en la práctica, en el escenario vivo de los acontecimientos, como la clase capacitada para hacerse cargo de la reorganización del país, sobre nuevas bases sociales. La cuestión del poder está colocada a la orden del día. El control de las fábricas plantea el control del país. Los destinos de la nación deben pasar a manos de los trabajadores.[134]

Una inmensa concentración popular en Plaza de Mayo, el 20 de diciembre de 2003, colocó al gobierno capitalista de Kirchner en una posición defensiva frente al movimiento piquetero, esto luego de dos meses de implacables agresiones del oficialismo, las grandes patronales y el clero. El movimiento piquetero volvia a ocupar la p[laza central del país.

El movimiento piquetero es la expresión histórica más profunda que produjo el movimiento obrero argentino, por lo menos desde el *cordobazo* de 1969. Representa una organización de los desocupados que agrupa entre 200 y 300 mil personas, y

[134] HELLER, Pablo. Fábricas ocupadas y gestión obrera. *En Defensa del Marxismo* nº 30, Buenos Aires, mayo de 2003.

principalmente mujeres, esto con independencia de que esté compuesto por diferentes agrupaciones, o que incluso tengan un carácter antagónico entre sí, porque desde la primera Asamblea Nacional Piquetera, en julio del 2000, ha dejado de ser definitivamente un movimiento local o provincial y se ha convertido en nacional, incluidos los pueblos más remotos del país.

Por su número, por la duración que ya ha tenido su lucha, por su extensión geográfica, por las reivindicaciones que ha impuesto, por el impacto que ha producido entre todas las restantes clases sociales y por el alcance y contenido político de sus movilizaciones, es el esfuerzo más avanzado de organización de los desorganizados en la historia del movimiento obrero mundial. No por nada se ha convertido en la bestia negra de la burguesía y aun del imperialismo.

Pero si se considera que la desocupación en masa es, luego de la guerra, el intento más importante del capitalismo para destruir las fuerzas productivas y, fundamentalmente, al proletariado, la organización masiva de los desocupados representa una tentativa anticapitalista gigantesca para reconstruir a la clase obrera como fuerza histórica viviente. Pudo tratarse al principio de un proceso inconsciente, pero a través de la experiencia y de las luchas políticas de las tendencias que actúan en su seno fue cobrando, progresivamente o a saltos, la conciencia adecuada a su carácter.

El movimiento piquetero es una fuerza de vanguardia, más si tenemos en cuenta en ella solamente a sus agrupamientos independientes de la burguesía, como el Bloque Piquetero y la Asamblea Nacional de Trabajadores. Pero se trata de una vanguardia que labora incesantemente sobre cinco millones de trabajadores, entre desocupados, sub-ocupados, en negro o por debajo del índice de pobreza. Dentro del movimiento de las fábricas expropiadas representa a la tendencia más conciente, la que lucha por la confiscación efectiva del capital saqueador y la gestión obrera, y que combate por lo tanto la política de convertirlas en microempresas de super-explotados, o sea en tentativas de reconstruir al capital a costa de los obreros.

El movimiento piquetero ha sido desde el inicio una experiencia política; debió enfrentar desde el inicio al aparato de “punteros” y “manzaneras” del justicialismo y a la burocracia de los sindicatos. La organización de los desorganizados tuvo lugar al margen de los sindicatos y fue saboteada por la burocracia. El desarrollo de la organización de los desocupados y la realización de su reivindicación al trabajo es incompatible con la permanencia de la burocracia al frente de los sindicatos.

No por nada, tanto los ministros de Trabajo y de Interior de Duhalde como de Kirchner plantearon en varias oportunidades que la burocracia se movilizara en las calles contra los piqueteros. Desde el punto de vista, no ya de la clase obrera, sino de la historia política de Argentina, el movimiento piquetero representa una tentativa mayúscula: la emancipación política de los trabajadores de la tutela del peronismo.

La tentativa de enfrentar la destrucción de los trabajadores por parte del capitalismo (se trata de un fenómeno internacional) y de reconstruir a la clase obrera como fuerza histórica supera los límites de la sociedad capitalista, implica una completa reorganización social sobre nuevas bases. Imponer el derecho al trabajo significa chocar con el derecho de propiedad y con el Estado, porque la desocupación no desaparecerá como consecuencia de la "recuperación económica", sino de la quiebra del alargamiento de la jornada laboral y de la flexibilidad; de una profunda recuperación de los salarios; de una modificación completa del sistema impositivo, gravando al capital, y de la redistribución de los recursos en función de los intereses sociales mayoritarios.

Este programa anticapitalista no podría ser realizado por la sola acción del movimiento piquetero como vanguardia sino por un gigantesco movimiento de masas - de la masa de

desocupados, de obreros activos y de todos los sectores medios que son empujados a las filas de la clase obrera y de los completamente desposeídos. El objetivo del movimiento piquetero no es convertirse en una "fuerza electoral" sino en un movimiento de masas (incluidos los sindicatos).

El terreno de acción del movimiento piquetero es el conjunto de la lucha de clases. La crisis que se ha entablado, por ejemplo, en torno a la "reforma laboral" no puede ser de incumbencia de la burocracia ni siquiera exclusivamente de los sindicatos, porque esta crisis es una oportunidad para todo el movimiento obrero, ocupado y desocupado. Es de interés de los piqueteros y los activistas sindicales asegurar la lucha por las reivindicaciones, y el establecimiento de una Bolsa de Trabajo para incorporar a los desocupados a las empresas sobre la base de las ocho horas de trabajo y de las condiciones de convenio soberanamente pactadas, impidiendo de este modo la competencia ruinosa entre los que tienen y no tienen empleo.

La lucha por imponer una legislación realmente protectora de los trabajadores debería adquirir un carácter de masas y convertirse en una disputa de poder con los capitalistas. Serviría, además, para una unión profunda con el nuevo activismo sindical para expulsar a la burocracia de los sindicatos y constituir una verdadera central sindical. En oposición al saqueo nacional, al reclamar la ruptura con el FMI y los banqueros y que el superávit fiscal se destine integralmente a un plan de obras con prioridades establecidas por las organizaciones obreras libremente electas y bajo su control, con este programa, el movimiento piquetero pasaría a representar, sin posibilidad de competencia, la dirección del movimiento nacional.

Los piqueteros protagonizaron 2.336 piquetes en el 2002 y 1.027 entre enero y octubre del 2003. Corresponsales extranjeros cuantificaron en "más de 200.000" a los integrantes del movimiento piquetero, lo cual lo ubica “como la organización de desocupados más importante de toda la historia del movimiento obrero mundial”.[135]

[135] ALTAMIRA, Jorge. Piqueteros: de vanguardia de la lucha a movimiento de masas. *Prensa Obrera* nº 832, Buenos Aires, 7 de enero de 2004.

17. IMPERIALISMO Y CENTROIZQUIERDA

Cuando a fines de 2001 estalló la crisis argentina, la prensa internacional acuñó la frase de: “Argentina no contagia”. La afirmación tuvo una vida efímera. Pocas semanas después el sistema financiero uruguayo saltaba por los aires (en seis meses los bancos perdieron el 80% de sus reservas en dólares). Brasil ha entró también en la cuerda floja, empujado por la desbandada de los capitales internacionales. La crisis argentina se daba en una situación de profunda descomposición del orden imperialista en el continente, en Colombia, Venezuela, Ecuador...

El ascenso de Lula en Brasil, en enero de 2003, creó un nuevo polo político en el continente, empeñado de inmediato en amenguar los choques de Venezuela con el imperialismo (Lula despachó a su representante personal Marco Aurelio García a Venezuela, con ese cometido explícito), en bloquear todo desarrollo revolucionario en Bolivia e intervenir como bombero en la crisis argentina. En Argentina, en mayo de 2003, la elección del peronista Néstor Kirchner supuso un desvío a la vía revolucionaria iniciada por el *argentinazo*.

El nuevo presidente se benefició de la desistencia (presión imperialista mediante) de Carlos Menem, el otro candidato peronista, a disputar el segundo turno, por lo que resultó electo con apenas 22% de los votos válidos emitidos, o poco más de 15% del padrón electoral. Nunca un presidente constitucional había subido con tan poco apoyo electoral, en la historia del país. El grado de atomización en las elecciones, con el peronismo dividido en tres, los radicales divididos en tres, y el nuevo gobierno de Kirchner tratando de formar virtualmente un nuevo partido, con partes del Frepaso, otras del Partido Justicialista, etc., era también una demostración de que fue el derrumbe político que se manifestó en el *argentinazo*, en las abstenciones electorales, el que condicionó el ascenso de Kirchner.

Así como en otros países latinoamericanos, pero más claramente que en ninguno, lo que estaba en el fondo del problema era una quiebra de las relaciones económicas capitalistas. Para hacerlas sobrevivir, el Estado autorizó a los bancos a que sus balances no reflejasen las pérdidas, que no apareciese que tenían capital negativo: el Estado dio orden de que los capitalistas siguiesen funcionando bajo la garantía del Estado. Este es un fenómeno excepcional, que permitia ver claramente al Estado como el representante final del capitalismo. El Banco Central, que bajo Cavallo (De la Rua) tenía prohibido darle crédito a los bancos, fue autorizado a hacerlo por Duhalde. En los primeros cuatro meses del año 2002 les dio 25 mil millones de pesos. El Banco Central, institución clave del Estado, emitió dinero para rescatar al capital.

El gobierno Kirchner, sin embargo, se benefició del proceso de recuperación económica iniciado tras la catástrofe económica argentina de 2001-2003, posibilitado también por el abaratamiento sin precedentes de la fuerza de trabajo. Proclamada como antiimperialista, su política poco tuvo que ver con el enfrentamiento contra el capital financiero internacional. El gobierno de Kirchner estaba marcado por las contradicciones oriundas del *argentinazo*. Cuando Kirchner aparece realizando gestos de tipo popular estaba, en realidad, pagando un tributo de palabra al *argentinazo*, tratando de recoger el sentimiento popular que había en la rebelión, sin poder satisfacer las reivindicaciones de la misma rebelión.

En septiembre de 2003, el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional estableció el pago de la deuda con reservas, la suba de las tarifas, el congelamiento de los sueldos, las jubilaciones y los planes Jefes de Familia. La base del acuerdo era que Argentina pagaría deuda en el 2004 por el 3% del PIB, unos 4.000 millones de dólares. A esto se agregaba que, a cambio del refinanciamiento, sin quita de capital ni intereses,

de los 21.000 millones de dólares de préstamos del FMI, Banco Mundial, BID y Club de París, la Argentina pagaría los intereses de esos préstamos por otros 2.100 millones de dólares.

Julio Ramos, director de *Ambito Financiero*, principal órgano argentino de la “comunidad de negocios”, dijo: "Con caricias, con gestos, con nombramientos, con juicios a la Corte, con decapitación de cúpulas militares, dejándolos a Fidel Castro y Hugo Chávez hacer discursos demagógicos por las calles de Buenos Aires este gobierno está logrando que se acepte tremendo esfuerzo del país de pagar 4.000 millones de dólares, cuando hasta no hace mucho esa cifra era el déficit y no el superávit".[136] El acuerdo sellado con la Argentina le aseguró al Fondo Monetario convertirse en el único acreedor externo del país que seguiría indemne a las consecuencias del *default* declarado a fines de 2001. No sufriría quitas en lo que quiere cobrar: tampoco estiramiento de plazos ni recortes de tasas de interés.

La renegociación de la deuda en *default* terminaría siendo un gran negocio para la banca y fondos de pensión internacionales porque les permitiría comprar a valores bajísimos los bonos argentinos en poder de los jubilados italianos, alemanes o japoneses. Se estima que la tasa de beneficio de los que comprasen los nuevos bonos argentinos a los arruinados jubilados italianos, alemanes o japoneses podría ser del orden del 10 al 12% anual, con tasas internacionales del 2%. La función del gobierno de Kirchner, con demagogia nacionalista y centroizquierdista, era pagar la enorme deuda pública y facilitar ahora el rescate de la gran burguesía argentina endeudada. Por eso en el acuerdo figuró también el compromiso del gobierno argentino en ayudar a las empresas privadas a pagar y refinanciar sus deudas.[137]

En definitiva, los “antiimperialistas” Duhalde y Kirchner pagaron, en 2002-2003, 35.000 millones de dólares al capital financiero internacional, pese al *default*. El fuerte superávit comercial creado por la devaluación fue utilizado para pagar la deuda y facilitar un nuevo ciclo especulativo aprovechando la abundancia de dólares del comercio exterior. La política de Lavagna (ministro de Economía)-Kirchner era la misma que la de Lula-Palocci. Aun así, la presión del gran capital por aumentar el superávit fiscal argentino tenía el objetivo de "normalizar" la deuda en *default*.

El superávit del 3% del PIB, comprometido con el FMI, significaba un compromiso de 13.000 millones de pesos al año; como consecuencia del aumento del PIB, en moneda constante, previsto para el 2004, ese compromiso se convertiría ese año en 14.000 millones de pesos y en moneda del 2004 en 15.500 millones. Pero mientras en el 2002 representaban unos 3.800 millones de dólares, a 3,5 pesos el dólar, y en el 2003, unos 4.300 millones de dólares, en el 2004 significarían unos 5.500 millones de dólares, o sea un 75% por arriba del 2002. Esta es la "firmeza" de la que Kirchner hacía gala frente al Fondo Monetario Internacional.

El gobierno Bush tenía, ciertamente, profundas razones para preocuparse con América Latina. Colin Powell, frente al Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, observó, a principios de febrero de 2002, que los EEUU iban a vender más para América Latina y el Caribe que para la Unión Europea y que su comercio era mayor dentro del NAFTA que con la Unión Europea y Japón juntos. “Vendemos más al Mercosur que a la China” - dijo Colin Powell, al resaltar que América Latina y el Caribe eran el mercado que más crecía de los EEUU, razón por la cual el presidente Bush

[136] *Ámbito Financiero*, Buenos Aires, 11 de septiembre de 2003.

[137] MAGRI, Julio. Kirchner lo hizo: 4.000 millones de dólares en intereses y 20.000 millones en salida de capital. *Prensa Obrera* nº 817, Buenos Aires, 18 de septiembre de 2003.

estaba en lo cierto al concentrar su atención sobre ese hemisferio, y en los esfuerzos para crear el ALCA.

Todo esto indicaba, según Powell, que el gobierno Bush se movía en la dirección cierta, no obstante los problemas en Argentina, Colombia, Venezuela y en otras partes. Venezuela mereció una mención especial, al declarar Colin Powell que las acciones del presidente Hugo Chávez preocupaban a la Administración Bush, debido a sus comentarios sobre la campaña contra el terrorismo, así como al hecho de no haberla apoyado tanto como podría haber hecho y elegir para visitar algunos de los "lugares más extraños" (Irak y Cuba), calificados como "estados parias" por los EE.UU.

A partir finales de 2001, el gobierno Bush proclamó la "guerra infinita": los atentados terroristas crearon la justificación para leyes que atentan contra los derechos civiles de la población norteamericana, y para operaciones militares en amplia escala en todo el mundo. El rechazo de los EEUU en adherir al Tratado Penal Internacional y el esfuerzo para firmar tratados bilaterales para excluir soldados (y autoridades) americanos de su alcance, podían ser interpretados como una aceptación implícita de genocidios pasados y futuros. La adopción de la lucha contra un "terrorismo internacional" difuso y omnipresente, las acusaciones a diversos países de ser conniventes con el terrorismo, abrieron la caja de Pandora que permite el uso unilateral de la fuerza en carácter preventivo, alegando legítima defensa, como en Irak. Se generaron las condiciones para mantener a la población americana en estado de miedo permanente y el clima político para aprobar una legislación restrictiva de los derechos civiles, al punto de institucionalizar y generalizar el espionaje y la denuncia.

La esencia de la cruzada del imperialismo yanqui contra el terrorismo consiste en convertir en delito cualquier forma de resistencia contra un régimen de opresión e incluso de oposición política consecuente que adquiera un carácter de masas. Los funcionarios norteamericanos, por ejemplo, reclamaron sistemáticamente la penalización de las movilizaciones piqueteras en Argentina. Tanto los gobiernos de Estados Unidos como de Gran Bretaña han establecido medidas de excepción contra los derechos ciudadanos que fueron declarados inconstitucionales en las cortes de Justicia.

Bajo la definición de terrorismo y, más aún, de la necesidad de prevenirlo, una nueva ley británica permite arrestar a cualquier sospechoso, por medio de "órdenes de control", que deben ser confirmadas por la Justicia con posterioridad. De este modo, el gobierno se convierte en órgano judicial, o sea que se autoriza la liquidación de derechos políticos.

La agenda contra el terrorismo, como fue consagrada en la reunión internacional de Madrid, estableció una colaboración obligada entre servicios de inteligencia, o sea, la dominación del servicio del Estado más poderoso sobre el del más débil, es decir una sujeción colonial. El nuevo comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Bantz Craddock, consideró que "la inestabilidad política y el populismo radical representan amenazas significativas a la seguridad". Estas caracterizaciones convertían a Hugo Chávez y a Evo Morales, así como a cualquier piquetero o a quien ocupa una empresa, en un terrorista.

Los convenios militares con los EEUU (firmados, por ejemplo, por el gobierno Kirchner) convirtieron en terrorista a cualquiera que lanzase una bomba molotov, no importa si lo hacía en represalia por los disparos o gases lacrimógenos de una guardia de seguridad privada. Lo mismo para quien secuestra un medio de transporte, por ejemplo trasladando el vehículo de trabajo a una manifestación sindical o popular. En estos casos, según el convenio, la acción no sería tipificada de política o gremial ni por lo tanto amparada como una defensa de derechos económicos o políticos colectivos. Las

colectas de solidaridad con otros pueblos, por ejemplo la Intifada palestina o la resistencia iraquí, serían actos terroristas, no así las contribuciones norteamericanas al Estado o colonos sionistas ni el bombardeo de Irak o Libia.

Se suprime el derecho de asilo y el refugio político a toda persona sobre la que, aunque no sea terrorista, existan “motivos fundados” que puedan revestir esa condición, definida a su vez en términos de resistencia o como expresión de ‘populismo radical’. Se establece una legislación de excepción a las normas constitucionales, con la justificación de la lucha contra el terrorismo.

El imperialismo mundial pretende instaurar el gobierno de los servicios de inteligencia y convertir a las constituciones en hojas de parra, en mayor medida de lo que ya son. Pero lo que importa para América Latina es que el establecimiento del estado de sitio con ropaje constitucional lo llevan adelante gobiernos nacionales y populares e incluso socialistas e izquierdistas. Es decir que comportan la asociación del progresismo, de la capa superior de la pequeña burguesía de izquierda y de la burocracia sindical en el establecimiento de una suerte de terrorismo de Estado que es justificado por la necesidad de combatir el terrorismo. El establecimiento de un Estado de excepción destruye cualquier posibilidad de mejoramiento social o de alguna tentativa de redistribución del ingreso, porque ella requiere autonomía del estado, aunque sea mínima, respecto al imperialismo.

Mientras masacraba al pueblo de Afganistán, el imperialismo norteamericano amenazaba a los pueblos de América Latina con nuevas agresiones y matanzas. El primer "blanco" eran los explotados colombianos. El "coordinador de contraterrorismo" del Departamento de Estado, Francis Taylor, amenazó con "utilizar la fuerza (militar) contra las organizaciones insurgentes en territorio colombiano". No se refería a la utilización de la fuerza militar colombiana contra las FARC o el ELN (que ya se encontraba combatiendo), ni al "asesoramiento" de esas fuerzas por "expertos" del Pentágono o la CIA (lo que también ya estaba ocurriendo), ni tampoco, al suministro de helicópteros de combate y agentes químicos (que también estaba ocurriendo). Taylor amenazaba con la intervención directa de las tropas y la maquinaria bélica norteamericana "como estamos haciendo en Afganistán".

No se trataba, sin embargo, de una opinión individual: el parlamentario Zell Miller, del partido demócrata, es decir, del otro partido al que pertenece Taylor, calificó a Colombia como "el país más peligroso y terrorista del mundo". Para que no queden dudas, "el Pentágono anunció que creará un Comando para las Américas dirigido contra las guerrillas izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Ejército de Liberación Nacional".

Además, "la frontera de Argentina, Paraguay y Brasil, dice Miller, es un sitio sin ley donde miembros de Hamas, Hezbollá y otros grupos vinculados a Osama Bin Laden probablemente planifican sus próximos atentados terroristas". La intervención militar en la "triple frontera", además de "sitiar" a Colombia, pondría tropas yanquis en Argentina, donde el mismo Miller temía las consecuencias de un "inminente colapso financiero".

El antecedente era la realización del Operativo Cabañas 2001, en Salta, que tuvo como "hipótesis" una "situación insurreccional".[138] Pero le permitiría, también, "rodear" a Brasil y a Uruguay, donde se esperaban victorias del PT y del FA en las próximas

[138] El Cabañas 2002 se desarrollaria en Chile. Consistió en ejercicios de mantenimiento de la paz en un país imaginario "en el cual se reafirman las políticas de cooperación regional de países sudamericanos". De los 1.200 efectivos participantes 700 eran argentinos, 200 norteamericanos, 40 bolivianos, 45 brasileños, 45 chilenos, 40 ecuatorianos, 40 paraguayos, 45 peruanos y 45 uruguayos. Los únicos países sudamericanos excluidos fueron Colombia y Venezuela.

elecciones presidenciales. Todo esto serviría, a su vez, para "cercar" a Venezuela, que "tiene un presidente que es hostil a Estados Unidos". Todo el continente eral blanco de la agresión imperialista porque, para Miller, "desde el extremo de América del Sur hasta Tijuana, El Paso y otras ciudades de la frontera norteamericana fluye un oleoducto (sic) de drogas ilegales y de armas".

William Pfaff, uno de los analistas más reputados de Washington, dijo que "durante una reciente reunión, en Washington, escuché explicar a un miembro de la comunidad académica universitaria que había comenzado una nueva era. Que los Estados Unidos y sus aliados, después de Afganistán, debían proseguir hasta derrocar a otros regímenes de Estados terroristas, sustituyéndolos por nuevos gobiernos, y luego intervenir en los Estados desposeídos, donde la pobreza y el desorden generan fanatismo y antinorteamericanismo. El académico hablaba de una guerra que los Estados Unidos jamás podrá ganar".

Cuando el golpe de 2002, los EEUU estaban preparados para reconocer el gobierno de Pedro Carmona. Dado que la Carta Democrática Interamericana condenaba cualquier ruptura de la legalidad, Phillip Chicola, funcionario del Departamento de Estado, pidió que la transición conservase las formas constitucionales, o sea, que la Asamblea Nacional y la Corte Suprema aprobasen la renuncia de Chávez, y nuevas elecciones, con observadores de la OEA, fuesen convocadas para dentro de un plazo razonable.

No obstante, los sectores más conservadores y radicales del *Opus Dei*, representados por el contra almirante Carlos Molina Tamayo y el multimillonario Isaac Pérez Recau, indujeron a Pedro Carmona a firmar un decreto, mediante el cual él se reservó la facultad de destituir gobernadores y prefectos electos, derogó la Constitución aprobada mediante referéndum, y disolvió la Asamblea Nacional, prometiendo convocar a elecciones "libres y democráticas", en un plazo de un año. Al mismo tiempo, anuló las leyes económicas y sociales aprobadas legalmente por el gobierno de Chávez e, inmediatamente, ordenó la interrupción del suministro de petróleo a Cuba.

Con esa medida, de las primeras adoptadas en las pocas horas en que ocupó la presidencia de Venezuela, Pedro Carmona atendió el interés del secretario asistente de Estado para los Asuntos del Hemisferio, Otto Juan Reich, cuyo equipo fuera constituido con extremistas cubano-americanos, residentes en Miami, como recompensa por los votos dados a Bush en la elección presidencial de 2000. Otto Reich, telefoneó a Pedro Carmona manifestándole pronto y urgentemente, el interés del gobierno Bush en que fuese mantenida la "apariencia de la continuidad democrática ".

En otras palabras, el golpe de estado debía preservar una envoltura constitucional. Informado de la disolución de la Asamblea Nacional, de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, entre otras medidas, Reich instruyó al embajador de los EEUU en Caracas, Charles Shapiro, para que expresase a Pedro Carmona su preocupación con tales medidas , que caracterizaban abiertamente un golpe de estado y, según The New York Times, lo llamó por teléfono e intercedió para que no disolviese la Asamblea Nacional, argumentando que eso provocaría un clamor popular.

En Argentina, un año después de su acuerdo con el FMI, Kirchner suspendió el acuerdo... para mejor continuar con él. Como consecuencia de la “suspensión” Kirchner y Lavagna se comprometieron a pagar los vencimientos de capital con el FMI hasta fines del año 2004, un dinero que en el acuerdo suspendido no se pagaba sino que se refinanciaba. Como consecuencia de la “suspensión”, Argentina pagó al Fondo más de 2.000 millones de dólares hasta el fin de ese año. La postergación por parte del FMI de la revisión del acuerdo con la Argentina y la suspensión posterior de ese mismo acuerdo

por parte de Argentina, volvieron a poner de manifiesto la inviabilidad del pago de la deuda externa.

En estas condiciones, la única forma de salvar las relaciones con el FMI era suspendiendo el acuerdo, e incluso hacerlo mediante un acuerdo escrito que suspenda el acuerdo. Para proteger a la "recuperación" argentina, que favorecia a los capitalistas, de las sacudidas que provoca la crisis de la deuda, se pagaron más de tres mil millones de dólares del bolsillo de los trabajadores. Se trataba de una operación de rescate, de un recurso último. La inversión siguió ausente, apenas equivale al reemplazo del equipo existente, y no podría reaparecer cuando era claro que no habría financiamiento internacional. El consumo estaba aplastado por la miseria. Pero en Caleta Olivia (ocupación petrolera), Aceros Zapla, Tucumán, los trabajadores obtuvieron importantes victorias, tanto reivindicativas como políticas. Las luchas y las victorias reforzaron la cohesión de los trabajadores.[139]

[139] ALTAMIRA, Jorge. FMI: una "suspensión" para pagar más. *Prensa Obrera* nº 863, Buenos Aires, 12 de agosto de 2004.

18. EL GOBIERNO DE LULA Y LA CRISIS DEL PT

Con la asunción de Lula, el gabinete del Partido de los Trabajadores quedó integrado bajo el comando de hombres de confianza del gran capital. Al frente del mismo, nombrado mientras Lula visitaba al "compañero Bush" en Washington, quedó Antonio Palocci, "hombre del mundo empresarial y los bancos (que) comprende perfectamente bien que el gobierno de Lula será tan capitalista como el de Cardoso".[140] Pocos días después, Lula "se encargó personalmente de presentar a Henrique Meirelles como "compañero presidente" del Banco Central. El "compañero" Meirelles había sido hasta hace cinco meses presidente mundial del *BankBoston*, con sede en Estados Unidos, donde llevó una vida regia con un salario anual de siete dígitos en dólares. Meirelles había sido elegido diputado federal en la lista del partido... de Fernando Henrique Cardoso.

Tampoco se trataba de una excepción: en el otro ministerio clave para los patrones, el PT colocó al dueño del monopolio de la industria alimenticia Sadia, Luiz Fernando Furlan, que en las últimas elecciones había votado por el candidato de Cardoso, José Serra. La poderosa Federación de Industrias del Estado de San Pablo declaró inmediatamente su apoyo a Furlan. El tercer ministro designado para completar el "área económica", como ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, fue Roberto Rodrigues, representante de una corporación de grandes productores rurales (Asociación Brasileña de *Agrobusiness*) y dueño de un ingenio azucarero. Después de designar al médico petista Antonio Palocci, reconocido por la administración "neoliberal" de Ribeirao Preto, como ministro de Economía, Lula designó a Henrique Meirelles, representante de los banqueros norteamericanos, y diputado electo del derechista PSDB, como presidente del Banco Central. Meirelles, Rodrigues y Furlan ERAN afiliados declarados del PSDB, de Serra y de FHC, vapuleado en noviembre de 2002 en las urnas.

Como además en el mismo gabinete se integraron los ex candidatos presidenciales, Gomes y Garotinho, está claro que el gobierno de Lula se conformó de entrada como un gran frente nacional de la burguesía y el gran capital sobre la base de una plataforma común, el propio acuerdo con el FMI. Algo que se revelaba también en las declaraciones que el titular del organismo prodigaba a la gestión de Lula, dos meses y medio después de su debut, presentándola "con entusiasmo" como paradigma de la política del Fondo Monetario Internacional.

El gobierno de Lula no dio lugar a un gobierno del PT. Como Lula no tenía mayoría parlamentaria, el PT estaría obligado a chocar con el Congreso, lo que podría desarrollar una situación revolucionaria. Pero Lula hizo lo contrario: para conseguir mayoría parlamentaria convocó a todos los partidos políticos que se quebraron en Brasil, cuya quiebra permitió que el PT llegase al gobierno. Mientras los partidos tradicionales se derrumbaban, incapaces de dirigir el país (por eso ganó el Partido de los Trabajadores), el PT buscó reconstruir bajo su dirección el sistema político quebrado, haciendo un acuerdo en el Congreso con todos los partidos tradicionales. Lula era toda una regresión política en la crisis.

Pero su acceso a la presidencia con la política señalada revelaba su verdadera función en el escenario político. Una función que en la última elección fue puesta de manifiesto como nunca porque la dirección del PT se empeñó en sacrificar a numerosos candidatos estaduales en función de los candidatos burgueses que formaban la base "suprapartidaria" de sustentación del gobierno Lula. En Paraíba, en Roraima, en Minas Gerais, en San Pablo, en Minas, en Rio de Janeiro y hasta en Rio Grande do Sul, donde

[140] *Clarín*, Buenos Aires, 1º de diciembre de 2002.

el PT era gobierno, sus candidatos no fueron apoyados por la dirección del partido, que sí llegó a los acuerdos más variados con elementos de otros partidos, incluidos los de la derecha.

La cúpula del PT construyó un bloque político para manejar al propio PT y para hacerlo jugar como respaldo de izquierda los acuerdos firmados con sectores de la burguesía. En Rio de Janeiro el PT fue utilizado para catapultar al candidato presidencial, el también pastor evangélico Anthony Garotinho. El PT carioca desapareció de la superficie. En muchos municipios fue loteado entre elementos de la burguesía que saltaron del barco de los partidos burgueses en situación de naufragio, para buscar un nuevo instrumento de fraude contra el pueblo. En los Estados donde el PT es más débil, como es el caso de Roraima, el partido fue entregado con acuerdo de la dirección nacional a un gran empresario local. En otros Estados la candidaturas eran formales, como en Bahía, en Paraíba, Minas, etc. En la campaña electoral, Lula aparecía, en esos Estados, acompañando a los candidatos rivales del PT.

Líder histórico del ala izquierda petista, Raúl Pont, ex intendente de Porto Alegre, vinculado al llamado Secretariado Unificado de la IV Internacional, apoyó la incorporación de los líderes patronales de la industria y el campo al gabinete lulista: "Muchos propietarios empresariales y rurales son concientes de que el modelo volcado a lo financiero no da para más y saben que ellos también deberán hacer un esfuerzo", dijo. La izquierda del PT apoyaba el gobierno "productivo capitalista" de Lula. Pont declaraba que su corriente "exige participación en el gobierno,[141] pero si no lo logramos, no vamos a abrir una guerra dentro del partido". Además, "ninguna de las corrientes del partido que no responden a Lula vamos a hacer ninguna ruptura, ni quebrar el bloque parlamentario. Mucho menos irnos del partido". Los fiscales de la izquierda petista se habían transformado en los garantes del gabinete capitalista con el cual debutaba el PT.

Los resultados electorales tradujeron de un modo muy claro esta política de destrucción del PT. Aunque Lula ganó con el 62% de los votos y lo hizo en todos los Estados a excepción de Alagoas, el PT no ganó ninguna gobernación salvo la de Mato Grosso do Sul. Más grave aún, el PT perdió el estado de Rio Grande do Sul, que se habían convertido en emblema de lo que sería un gobierno nacional del PT. La "larga marcha" de Lula hacia la presidencia reposó en el fortalecimiento del PT como un aparato de funcionarios del Estado y a base de pactos sin límites a la derecha. Con casi 200 mil cargos políticos de la administración gubernamental para cubrir luego de la asunción de Lula, la izquierda del partido podría quedarse "tranquila". En cualquier caso la función de armar el carro con la derecha para alcanzar la victoria para Lula, presentándola como lo que no era, sirvió para adornar con oropeles inclusive revolucionarios el hecho de que la izquierda del PT ha conquistado 28 diputados nacionales, dos senadores y varios cargos en las legislaturas provinciales (estaduales).

Mientras toda la izquierda y centroizquierda internacional se consagró a registrar la paciente construcción del PT a lo largo de más de una década, y hasta de presentarla como un "modelo" universal, la realidad es que el ex obrero metalúrgico devenido en presidente se consagró sobre la consumación del cadáver de lo que alguna vez se presentó como partido "*dos trabalhadores*". Es claro, entonces, que Lula no construyó una mayoría para ganar la elecciones sino que armó una coalición con la gran banca y el imperialismo para asegurar la llamada gobernabilidad del Estado, es decir, a costa de los intereses de la mayoría electoral.

[141] Lo que conseguiría, con la participación de Miguel Rossetto, otro “trotskista”, en el clave Ministerio del Desarrollo Agrario.

Los festejos por los primeros cien días del gobierno de Lula tuvieron ciertamente un carácter “clasista”: los que descorcharon las botellas fueron los patrones y el gran capital financiero. Brindaron por el metalúrgico devenido en presidente como "alumno modelo del FMI". "Se pensaba que era un monstruo y resultó ser, con todo respeto, una mascota", confesó Odair Abate, analista jefe del *Lloyds Bank*. "Los hombres de negocios entendieron que Lula no es un peligro sino una solución", remató el director de Relaciones Internacionales de la poderosa Federación de Industrias de San Pablo. El secretario del Tesoro del gobierno de Bush, de visita en Brasil luego de la masacre en Irak, se deshizo en elogios a la política económica oficial.

¿Y la izquierda? ¿Porqué se irían del partido si no había discrepancias con el norte estratégico de la dirección oficial? La actitud de la izquierda petista se mantuvo dentro de los límites de este acuerdo fundamental. La actitud más audaz la protagonizó Heloisa Helena, senadora del PT, otra de las representantes del Secretariado Unificado, que se opuso a la convalidación parlamentaria del nombramiento del banquero designado para presidir el Banco Central, así como del apoyo del PT a que la presidencia del Senado fuera entregada a un derechista de la oligarquía nordestina, José Sarney. ¿En qué consistió la oposición? En retirarse al momento de votar, pactada con la derecha del PT, que no se perdió de todos modos la oportunidad de amenazarla con sanciones. Al respecto, un politicólogo de la Fundación Getulio Vargas calificó la situación como la de "un teatro donde los radicales del PT critican para que alguien del gobierno responda y eleve sus credenciales junto a la sociedad y el mercado financiero".[142] En el medio de este "teatro" Lula anunció que recortaría los planes sociales en 4 mil millones de dólares para pagar la deuda externa, que aumentaría los intereses para permitir mayores lucros a los bancos, que su primera reforma será un recorte draconiano de las jubilaciones, que los salarios públicos serán disminuidos, y que Brasil contribuiría con Colombia en la "lucha contra el terrorismo".[143]

Como conclusión de los cien días, el gobierno hizo aprobar en el Congreso una "enmienda constitucional" que abría las puertas a un Banco Central autónomo bajo la dirección del hombre de confianza del sistema financiero y ex ejecutivo en jefe del *Bank of Boston*. La prensa brasileña festejó que la izquierda del PT votara junto a los dirigentes de la derecha partidaria. El gobierno también aumentó la tasa de interés básica, haciendo la delicia de los bancos que, en medio de una enorme crisis económica estaban lucrando como nunca: según los balances oficiales, sus ganancias crecieron un 30% en el 2002, hasta llegar a los 10 mil millones de reales, y siguieron incrementándose con el gobierno de Lula. En abril de 2003, el gobierno volvió a tomar créditos externos pagando cuatro veces más que en el mercado norteamericano.

La economía se mantenía estancada y el crecimiento de la producción por habitante para 2003 sería nulo. El desempleo subió un 10% en los tres primeros meses del año y el gobierno anunció que no sólo no reajustaría los salarios sino que privatizaría las jubilaciones, con un recorte en los haberes de todos los empleados públicos. Pero el 8 de abril, más de 100 mil estatales cumplieron una huelga general con protestas y movilizaciones en todo el país para reclamar contra la liquidación del sistema previsional y por el aumento de salarios. Bajo el llamado de la Asociación Nacional de

[142] *O Estado de S. Paulo*, 11 de febrero de 2003.

[143] RIEZNIK, Pablo. El gobierno capitalista de Lula: la "etapa superior" del PT. *En Defensa del Marxismo* nº 30, Buenos Aires, mayo de 2003.

Docentes de Enseñanza Superior (Andes), más de 20 universidades nacionales también paralizaron sus actividades.

Al cabo de poco más de tres meses, el gobierno anunció un proyecto de Ley de Pautas Presupuestarias que perpetuaba los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado por Cardoso. "Si hasta ahora la supuesta 'transición' tenía como justificación retórica la 'pesada herencia' del gobierno anterior, el equipo económico del gobierno pretende ahora acabar con la polémica. Fija un horizonte de dos mandatos presidenciales para la adhesión lulista al esquema de la ortodoxia, tan a gusto del Fondo Monetario Internacional y de las instituciones financieras".[144]

El gobierno pretendía lograr un 5% de superávit primario (el superávit existente antes de los pagos de los intereses de la deuda pública)en el presupuesto nacional a costa de las jubilaciones, los salarios y los más diversos programas sociales. El ajuste fiscal revelaba el nivel de la bancarrota del país. La reducción del "riesgo Brasil" y la baja del dólar no eran un reflejo de estabilidad sino de la crisis mundial, pues la recesión y la guerra de Irak promovieron un movimiento especulativo de capitales árabes hacia los títulos "basura" de Brasil. ¿La justificación de estas medidas por parte de Lula?: "Vamos a hacer que este país aprenda a ganar dinero como un verdadero país capitalista, para que la gente pueda gastarlo como socialista".

El 8° Congreso Nacional de la Central Única de Trabajadores (Concut), celebrado en San Pablo entre 3 y 7 de junio de 2003, era esperado con gran expectativa: además de ser el primer congreso de la central en la "era Lula", estaba puesto bajo la presión de la catarata de reformas reaccionarias –en especial la previsional, la laboral y la sindical-desencadenadas por el "gobierno popular", en estricto cumplimiento de los acuerdos con el FMI. Según una prestigiosa columnista del órgano de la "comunidad de los negocios", *Gazeta Mercantil* , estamos en "2003, el año del ajuste económico".

Un "ajuste" con una caída del 10% del salario medio de los trabajadores en 2002 (4% sólo en marzo), un desempleo que superaba, oficialmente, el 20% en las principales capitales del país, un reajuste salarial ridículo y ofensivo de 1% a los funcionarios públicos (después de más de un lustro sin reajuste, con una inflación en torno de 100% y una desvalorización cambiaria de 200% en cinco años), con la mayoría de los sindicatos del sector privado no consiguiendo reponer, en las convenciones colectivas, ni siquiera las pérdidas salariales recientes (y debiendo aceptar los reajustes en "cómodas cuotas"), un crecimiento espectacular del "empleo informal", esto es, de la explotación sin límites (sin ninguna contribución previsional ni impuestos laborales para la patronal), con jornadas de trabajo situadas entre las 70 y 80 horas semanales, "empleo" que ya es responsable por 60% de los puestos de trabajo en Brasil (sólo en San Pablo, fue responsable por 77% de los puestos de trabajo creados en 2003).[145]

Y, para concluir, con un aumento de los lucros bancarios de casi 19%, bajo el "gobierno popular", gracias a tasas de interés estratosféricas y a una desenfrenada especulación sobre los títulos públicos, lo que motivaba, lógicamente, la "patriótica" protesta del "capital productivo", que mantenía (y aumentaba) sus propios lucros, mediante la superexplotación expuesta (la capacidad ociosa de la industria estaba en sólo 10%, y las exportaciones comenzaron a superar récordes históricos). Mientras los pagos de la deuda pública (inclusive la externa) también batían todos los récordes, el salario mínimo fijado por el "presidente obrero" era de R$ 240 (menos de 80 dólares), al mismo tiempo que impulsaba una reforma previsional que expropiaba las jubilaciones de los

---

[144] *Folha de San Pablo,* 10 de abril de 2002.

[145] *O Estado de S. Paulo,* 3 de junio de 2003

funcionarios públicos, impone un descuento de 11% a los ya jubilados, y reducía las pensiones entre 30 y 50%.

El otro motivo de expectativa era que nada menos que once de los ministros de Lula tenían su origen la CUT, además de otros 66 ex sindicalistas "cutistas" que ocupaban funciones en el primer escalón del gobierno. Lula llegó a afirmar que "con tantos sindicalistas en el poder, ya no tenemos a quién echarle la culpa, en el caso de que no se haga lo que debe ser hecho". La reflexión fue hecha en el local en que se decidió, y anticipó, la línea que prevalecería en el Concut, la Asamblea Anual de la OIT (brazo "sindical" corporativo de la ONU), donde Lula llamó a "repensar el papel del movimiento sindical" para que ahora "pudiese sentarse en la mesa de negociaciones (para) firmar todos los acuerdos que el país precisa". Toda la incógnita del Concut se restringía a saber qué grado de resistencia encontraría esta línea reaccionaria en las "bases" de la central.

Para la burocracia dirigente de la CUT, entonces, lo primero era restringir al máximo la participación de las bases. Y llevar adelante, ahora en directo interés propio, la línea que en la década de 1990 llevó a la CUT a desarticular al movimiento obrero frente a los gobiernos "neoliberales" de Fernando Collor y Fernando Henrique Cardoso, en nombre de la "participación de los trabajadores" en las "cámaras sectoriales", con representantes del gobierno, los empresarios y los sindicatos: la CUT participó en 14 de las 26 que funcionaron bajo los gobiernos derechistas de Sarney y Collor, de las que sólo tres sellaron acuerdos, con beneficios mínimos y efímeros para los trabajadores; al mismo tiempo en que se condenó al aislamiento y la derrota a la huelga de los petroleros de 1994, se aisló las luchas de los funcionarios públicos federales y estaduales al final de la década, y se bloqueó estratégicamente la alianza entre los obreros y los campesinos sin tierra, éstos el más importante movimiento de lucha en la década de 1990 y en la virada del siglo.

El congreso comenzó con un acto público en las puertas de su local, en el que un millar de trabajadores (muchos delegados al Concut) protestaron contra la reforma previsional, y contra la connivencia de la dirección de la central con las propuestas gubernamentales, y plantearon la independencia de clase frente al gobierno de coalición con la burguesía y el imperialismo: hablaron Zé Maria (dirección de la CUT y del PSTU, Partido Socialista de los Trabajadores Unificado)); Luiz Carlos Lucas; por Andes, Osvaldo Coggiola, por Adusp; y varios oradores de sindicatos del sector público y de corrientes de izquierda.

Al inicio del congreso se conocieron las cifras del mismo: 2750 delegados presentes, representando 3317 sindicatos (¡menos de un delegado por sindicato!), muchos de ellos no elegidos directamente por las bases, sino indirectamente, en congresos estaduales de representantes, donde el peso de los aparatos es mucho mayor, sin hablar de los "sindicatos-sello": compárense esas cifras con los 5054 delegados, representando 911 sindicatos, del congreso de fundación de la CUT (en agosto de 1983), o con los 6244 delegados, representantes de 1143 sindicatos, del 3° Concut, de 1988. Los participantes del acto se dirigieron después al recinto del congreso, superando las "esquemas" (matones) de seguridad de la burocracia, donde entonaron coros contra las reformas y la política gubernamental, para buena parte de los delegados de la tendencia mayoritaria, la Articulación Sindical "lulista".

Durante el primer día del congreso, representantes del gobierno (el propio Lula) y del PT se hicieron presentes. José Genoíno (presidente del PT y responsable por la "caza de brujas" contra los "disidentes" del partido), Marta Suplicy (intendente de San Pablo) y, sobre todo, Ricardo Berzoini, ex sindicalista bancario y Ministro de la Previsión Social, simplemente no pudieron hablar, tamaños los silbidos que llevaron de la platea. No

sucedió lo mismo con el discurso de Lula. Este, sin embargo, hizo un discurso defensivo, en el que se manifestó “militante de la CUT”, y pidió “paciencia”, pues el gobierno llevaba apenas “cinco meses en el vientre de la madre”.

El desarrollo del congreso dejó claro que las corrientes mayoritarias apoyaban todas las políticas gubernamentales, proponiendo apenas “correcciones” (“enmiendas”) que eran ,en realidad, *pour la gallerie*. El sindicato del nuevo presidente pre-nombrado (por el propio Lula, en declaración pública) de la CUT, Luiz Marinho, de los metalúrgicos del ABC, publicó un boletín en el Concut, afirmando que “corrientes dentro de la Central no aceptan el debate y quieren la retirada del proyecto de Reforma de la Previsión”, o sea, la defensa abierta de la política oficial, en nombre del “debate”.

De manera vergonzosa, todas las posiciones históricas, hasta formales, de la CUT, fueron cayendo en las votaciones: fueron rechazados el apoyo a las ocupaciones de tierra, la lucha contra los proyectos privatizadoras de reforma (inclusive las privatizaciones realizadas por el gobierno derechista anterior), la ruptura con el FMI, el no pago de la deuda externa, el plebiscito acerca de la adhesión al ALCA, etc. De plan de lucha, mejor ni hablar.

Las cifras de delegados de las tendencias presentes, y sus alineamientos, eran aproximadamente las siguientes: Artsind 53% (1450 delegados), CSC (del PC do B, stalinista) 14% (370 delegados), CSD (de la DS, Secretariado Unificado) 8% (220 delegados), estas las corrientes pró-gubernamentales abiertas, que conformarían una lista única para la elección de la dirección de la central. En el campo opositor el bloque Fortalecer a CUT tenía 16% (unos 440 delegados, con unos 100 de *O Trabalho*; 32 de la CST, corriente de la diputada petista disidente Luciana Genro; una centena también, respectivamente, de la Articulación de Izquierda -AE- y de la Fuerza Socialista, que dirigía la intendencia de Belém y tenía al líder petista de la Cámara de Diputados,; menos delegados de la alicaída ASS, Alternativa Sindical Socialista, tendencia “sindicalista de izquierda”).

Este bloque constituiría una lista “de izquierda”, para competir con Marinho (y, sobre todo, por puestos en la Ejecutiva de la CUT) junto con el MTS (tendencia sindical del PSTU, morenista) que tenia 7% (unos 190 delegados). Fuera de esos bloques, otras corrientes de izquierda tenían algunos delegados (MTL, 14 delegados; LBI, 5; CEDS, 4; PCO, 3; OMP –ex PT-, 2; POR, 1; LOI, 1), que se dividieron entre el apoyo a la lista “de izquierda” y el llamado al voto nulo o en blanco.

La lista “opositora” resultó de un forcejeo burocrático: *O Trabalho* recusaba una lista con el MTS (PSTU) por estar éste “fuera del PT y contra el gobierno” (el cual era, para esos “trotskistas”, un “gobierno en disputa”, lo mismo que para las otras corrientes de *Fortalecer*). Lo que inclinó a favor de la lista única “de izquierda” fue el riesgo de no alcanzar el cociente mínimo para entrar en la dirección (de 20%, en el caso de dos listas).La “unidad de la izquierda” no se hizo sobre la base de ningún programa. Votaron en la elección de la dirección nacional 2632 delegados: la lista gubernamental *Unir a CUT*, con Luiz Marinho, obtuvo 1950 votos (74,1%); la “opositora” *CUT Independente e Democrática*, con Jorge Luis Martins, 661 votos (25,1%); blancos y nulos, 21 (0,8%). El llamado al voto nulo no superó los límites de los pequeños grupos que lo defendieron, el desplazamiento de votos del “lulismo” hacia la oposición fue mínimo.

Para completar, al final del congreso, el líder del MST (campesinos son tierra) João Pedro Stédile, llamó a “no gastar energía haciendo oposición al gobierno, sino

movilizando a los trabajadores para hacer los cambios que el país precisa",[146] un remache innecesario, en la mejor hipótesis, pues el congreso acababa de votar, con 75% de su composición, el apoyo, con críticas menores, a la política del gobierno Lula. El único punto en que la CUT declaró total divergencia con el gobierno fue la cuestión de las tasas de interés, en lo que se hizo eco del reclamo, por su rebaja, de las centrales patronales (en especial la Fiesp, federación industrial de San Pablo); posición, por otro lado, que también era la del CDES (Consejo de Desarrollo Económico y Social, nombrado por el gobierno, de composición mayoritariamente patronal) en el que la CUT participaba con 14 miembros.

Una CUT "integrada" a la política reaccionaria del gobierno Lula (y al propio gobierno), cada vez más burocratizada y desconectada del movimiento de los trabajadores, en especial de sus sectores más explotados ("informales" y desempleados), fue el saldo del 8° Concut; al mismo tiempo que una incapacidad de defender esas posiciones a través de una lucha política abierta, substituida por maniobras de aparato, y una rabia y disposición de lucha latentes inclusive en los sectores que apoyaban al gobierno.

El 11 de junio, finalmente, 40 mil empleados públicos manifestaron en Brasilia, en las propias "barbas" del gobierno, y fue convocada una huelga general del sector público. La primer huelga nacional contra el gobierno Lula, de los empleados estatales, comenzó el 8 de julio de 2003, y contó con una fuerza que sorprendió a la opinión pública, la gran prensa, el gobierno, y hasta a sus propios organizadores. Se trataba de una huelga general de estatales, por tiempo indeterminado, por la retirada del PEC (Proyecto de Enmienda Constitucional) n° 40, que eliminaba derechos previsionales históricos conquistados por los trabajadores brasileños, y abría para el gran capital financiero un "mercado" previsional (*via* fondos de pensión) de 70 mil millones de dólares anuales.

La "reforma" atacaba a 6 millones de empleados públicos, eliminaba la jubilación integral del sector público, aumentaba la edad mínima para la jubilación, imponía una tasa de 11% a los haberes de los jubilados, eliminaba la paridad entre los salarios de los estatales y los haberes jubilatorios, descontaba 30% de las pensiones viudas e hijos menores, etc., todo para crear, de inmediato un "mercado" de R$ 50 mil millones para los bancos (y calculado en R$ 670 mil millones hasta 2010), al mismo tiempo que promulgaba una amnistía de las deudas previsionales del gran capital, de R$ 150 mil millones, renegociadas con un plazo de... 99 años, en suma, un pingüe negocio tanto para el capital "productivo" como para el financiero.

Al mismo tiempo en que el gobierno "de los trabajadores" hablaba en "justicia previsional", y en eliminar las jubilaciones millonarias de algunos estatales (principalmente jueces y funcionarios legislativos, en total menos de 1% de los jubilados estatales), poniendo todas las jubilaciones (públicas y privadas) bajo un "techo máximo" común de R$ 2400, 800 dólares (pero no unificando los sistemas previsionales), el adalid de la reforma en la Cámara de Diputados, un diputado de la derecha recientemente exonerada del gobierno, declaraba sin pelos en la lengua que el objetivo de la reforma era el "equilibrio fiscal", que pasaba por el pago puntual de la deuda externa, según acordado con el FMI.

El carácter reaccionario de la reforma "lulista", que sorprendió hasta a la prensa y los partidos burgueses (que llegaron a presentar en la Cámara enmiendas para "suavizar" la reforma del PT) hizo caer como un castillo de cartas la vasta y cara campaña de propaganda del gobierno, pintando a los estatales como "privilegiados", responsables

[146] *Folha de S. Paulo*, 8 de junio de 2003.

por el déficit fiscal del Estado brasileño: con escasos recursos fue posible esclarecer, para vastos sectores de la población, que la mayoría de los estatales (para no hablar de los jubilados del sector privado) recibía una jubilación de miseria, que 40% de los trabajadores brasileños trabajan "en negro" (sin aportes previsionales patronales), que el gran capital practica una evasión fiscal y previsional de niveles estratosféricos y, principalmente, que el principal responsable por la crisis de las cuentas nacionales es el pago de los encargos financieros (internos y externos, todos "estatizados" después del Plan Brady), que consumían nada menos que 70% del presupuesto nacional.

MONTO TOTAL DE LA DEUDA EXTERNA DE BRASIL (EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

1990	123.438,5000
1991	123.910,4000
1992	135.948,8000
1993	145.725,9000
1994	148.295,2000
1995	159.256,2000
1996	179.934,5000
1997	199.997,5000
1998	241.644,0700
1999	241.468,1606
2000	236.156,3460
2001	226.067,2532
2002	227.689,3880
2003	235.414,1278
2004	220.182,3148

Fuente: Banco Central do Brasil. Boletim. Seção Balanço de Pagamentos (BCB Boletim/BP), In: *http//www.ipeadata.gov.br*.

Las acusaciones salvajes a los trabajadores estatales (hechas por el Partido "de los Trabajadores") fueron cayendo cada vez más en el ridículo. Fracasó también el gran dispositivo contra la huelga, la regimentación de los empleados estatales a través de la CUT que, en su reciente Congreso Nacional, había aceptado, en sus líneas generales, el proyecto gubernamental. La CUT no apoyó (al contrario, criticó) la perspectiva de la huelga de los estatales. Todos estos obstáculos fueron superados por la CNESF (coordinación nacional de los empleados estatales federales) que reunía once sindicatos nacionales, con un papel decisivo del sindicato nacional de profesores universitarios (ANDES) y del sindicato nacional de los empleados de la previsión social.

En los estados se configuraron coordinaciones de los estatales estaduales (la de San Pablo publicó un periódico de esclarecimiento a la población, con un tiraje de un millón de ejemplares). La posición de la ANDES fue aceptada por la CNESF: huelga general por tiempo indeterminado hasta el retiro del proyecto gubernamental de la agenda del Congreso Nacional. En sus primeros días, la huelga ya abarcaba a más de 50% de los

estatales federales, pero con picos del 80 al 100% en algunos sectores y, principalmente, en las grandes capitales (paró hasta la sede central del Banco Central, en Brasilia): una victoria política impresionante de la lucha política de los sectores clasistas en el interior del movimiento sindical.

La huelga también fue preparada por la crisis “por arriba”: los poderosos *lobbys* parlamentarios del Poder Judicial y Legislativo, y de los militares, ya habían conseguido abrir brechas para sus propios regímenes previsionales, aceptadas por el gobierno en una reunión sigilosa (con la participación de la CUT) realizada el 23 de junio, con varios ministros y jefes de las bancadas parlamentarias. Pero la crisis “por arriba” fue apenas un aliciente para el imparable movimiento “por abajo”, preparado por meses de trabajo del activismo y el sindicalismo clasista.

Paralelamente, las ocupaciones de tierra, protagonizadas por el MST (campesinos sin tierra) y otros movimientos agrarios, habían crecido 147% en relación al año precedente: la conjunción, sólo objetiva, del campesinado y los estatales, prefiguraba una irrupción de masas, y tendía a crear una gran crisis nacional, creada por el movimiento independiente de los trabajadores. El gobierno de los “52 millones de votos” comenzaba a caminar encima del vacío, acusado de “cobardía” por la derecha, y de *pelego* (traidor) por los trabajadores clasistas. El Ministro de Economía Antonio Palocci, declaró que el retroceso en la reforma previsional (y, eventualmente, en la impositiva) tornaría inviable su gestión: Lula, mientras tanto, salió a dar una vuelta por Europa, donde presidió una reunión de la “Tercer Via” junto al “laborista” Tony Blair, buscando en éste lo mismo que éste buscó en la proximidad con Lula: un poco de oxígeno para sobrevivir a su respectiva tormenta política interna.

Los ex burócratas sindicales que se aprestaban a transformarse en grandes burgueses a través de la gestión de los fondos (principalmente los agrupados en la consultora Gushiken & Asociados, atrincherados en el Ministerio de la Comunicación, ejercido por el propio ex *pelego* bancario Luiz Gushiken) estaban al borde del colapso nervioso. El próximo asalto era la extensión y profundización de la huelga de los estatales en todo el país. Y el siguiente, el de la unificación con el conjunto de la clase obrera y los campesinos en lucha, sobre la base de un programa antiimperialista y anticapitalista: no pago de la deuda externa, expropiación del latifundio, nacionalización de las empresas privatizadas y de las empresas en débito con el Estado, aumento general de salarios, jubilaciones iguales a los salarios tanto en el sector público como en el privado sobre la base de una previsión social estatal única y bajo control obrero. Pero ese paso nunca fue dado.

Las manifestaciones de decenas de miles de personas, de todo el país, en las calles de Brasilia, fueron decayendo. El Congreso Nacional, escandalosa compra de votos mediante (la bancada del PT no llegaba ni a 20% del total de diputados) votó favorablemente el proyecto privatizadora de previsión social del gobierno Lula. La huelga de los estatales fue quedando aislada, reducida finalmente a sólo los profesores universitarios del sector público, y los fiscales impositivos. Finalmente, la huelga fue levantada. El gobierno Lula jugó todo su capital político en esta pulseada, y obtuvo una victoria, pero bien costosa.

Porque la huelga contra la reforma previsional inició la crisis del PT, que llegaría a su ápice en 2005.[147] El PT inició un proceso interno contra dos diputados (Luciana Genro y Joao Batista Araujo, "Baba") y una senadora (Heloisa Helena) que anunciaron,

[147] COGGIOLA, Osvaldo. La crisis en el PT de Brasil. *En Defensa del Marxismo* n° 31, Buenos Aires, agosto de 2003.

inicialmente, su intención de votar contra la reforma previsional. Los tres legisladores pertenecían a corrientes internas de izquierda del PT, fueron provisoriamente separados de sus responsabilidades en la bancada parlamentaria petista, y amenazados de expulsión. Otros dos diputados que habían anunciado actitud semejante, Joao Paulo Fontes y Lindbergh Farias fueron, recule mediante, "perdonados" (Fontes sería finalmente expulsado). La crisis de los legisladores "disidentes" se proyectó como una crisis nacional, con titulares y páginas enteras de los diarios, lo que puede parecer sorprendente para un partido con más de un centenar (106) de parlamentarios nacionales (en la Cámara de Diputados y el Senado) y una enorme base legislativa, gracias al apoyo de la derecha tradicional a los proyectos ultra-reaccionarios del gobierno "popular". La razón estriba en que la crisis ilustraba, no ya la derechización, sino la descomposición del PT como partido político y expone la fragilidad del gobierno de los "52 millones de votos".

En la votación de la reforma del artículo 192 de la Constitución, destinada a abrir espacio legal para la "independencia (privatización)" del Banco Central (un objetivo fuertemente exigido por el FMI), la aplastante mayoría de la Cámara votó a favor del proyecto, 442 de los 513 diputados. Pero 35 diputados del PT votaron por el proyecto declarándose previa y formalmente contra la idea. Lo mismo hicieron, en otro documento, 21 diputados "moderados" del PT. O sea, de 92 diputados, el PT sólo contó con 36 votos "voluntarios" para un proyecto del propio Lula. Quien votó masivamente a favor fue la ex alianza derechista del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Los dos diputados "radicales" también votaron a favor de la reforma exigida por Lula y el FMI. "Babá" declaró que "voto de forma afirmativa, obligado por la disciplina partidaria, pero contrariando mis convicciones políticas. Declaro mi total oposición al contenido de esta propuesta, porque se trata de una imposición del FMI, un atentado contra la soberanía de la nación",[148] lo que no le impidió declarar después que votaría contra la reforma previsional, contrariando la lógica expuesta.

La divulgación de un video, con un discurso de Lula de 1987, en el que criticaba las mismas propuestas que ahora defendía, y trataba a los nuevos "aliados" del PT de ladrones, canallas y criminales, fue invocada por José Genoino, presidente del PT, como un "factor extremadamente agravante", lo que suponía que la simple divulgación de un material de dominio público (o sea, ni siquiera de una opinión) constituía una falta grave.

La crisis había tomado carácter público cuando la senadora por el estado de Alagoas, Heloisa Helena, manifestó públicamente su desacuerdo con el nombramiento de Meirelles para el Banco Central (el Banco Central, próximamente "autónomo", está presidido por el ex presidente del Bank of Boston, uno de los principales acreedores del país, designado para ese puesto por Lula) y también con las reformas reaccionarias encaminadas por Lula al Congreso, afirmando su disposición para votar en contra, para hacerlo inclusive junto con parlamentarios de otros partidos y hasta para cuestionar judicialmente reformas que hiriesen derechos constitucionales. La sección brasileña del Secretariado Unificado de la IV Internacional se movilizó rápidamente para acallar a su "disidente". Votada la reforma fondomonetarista, la prensa destacó mucho más el voto favorable de los "radicales", que el voto de los 440 diputados restantes, o que el propio contenido de lo votado.

En su primera declaración después del ascenso de Lula, la Dirección Nacional del PT afirmó: "En el montaje del gobierno se definió una configuración de centroizquierda,

[148] *Combate Socialista* n° 2, San Pablo, abril de 2003.

con clara hegemonía de la izquierda, definida por la fuerte presencia del PT y sus aliados tradicionales. Además de los partidos de izquierda -PT, PC do B, PV, PMN, PCB, PSB, PDT y PPS- y los partidos de centro -PTB, PL y sectores del PMDB- el gobierno está marcado por un matiz no partidario importante, representado por los ministros de Agricultura e Industria y Comercio. Ese matiz expresa la tentativa de construcción de una alianza con el empresariado nacional".

Esta completa tergiversación, que comenzaba por la calificación "de izquierda" para aparatos vacíos del reaccionario clero evangélico y del oportunismo burgués en todos sus matices, ocultaba el papel central del capital financiero internacional en el gobierno Lula. En junio de 2002, antes de las elecciones, en la *Carta ao Povo Brasileiro*, la dirección del PT se comprometió con las leyes de "responsabilidad fiscal" y el superávit primario; el pago de la deuda externa; la sumisión plena al FMI. Esos compromisos facilitaron el apoyo de importantes sectores del capital a la candidatura de Lula, y su propia victoria electoral, después de tres derrotas sucesivas. En los últimos años, en la administración de municipios y estados, el PT y el Frente Popular se sometieron a fondo a las "reglas del mercado". Defendió esa opción como necesaria a la "gobernabilidad", debido al control de la presidencia de la República por la derecha burguesa.

Ahora, proponía la defensa de la gobernabilidad del gobierno de Brasil, debido a su no-control de la situación político-económica mundial. El gobierno petista en Rio Grande do Sul fue un buen ejemplo: mantuvo el congelamiento salarial de los empleados públicos y la restricción de gastos e inversiones sociales, pero pagó religiosamente la deuda, fue aprobado con distinción por los organismos financieros internacionales y reprobado por el electorado obrero del sur, lo que llevó a la victoria del derechista Germano Rigotto, del PMDB, partido de la pasada coalición, derrotada nacionalmente.

Para proseguir la austeridad fiscal y presupuestaria, con la definición de un superávit primario de 4,25% del PIB, se cortaron en 2003 14 mil millones de reales del presupuesto, afectando principalmente los "gastos sociales". Para expandir las exportaciones, se buscó un financiamiento de las mercaderías nacionales, para tornarlas más competitivas en el mercado mundial, en condiciones en que la economía mundial está estancada y el parque productivo brasileño en profundo atraso relativo. Para financiar las exportaciones, el gobierno Lula mantuvo la última maxi-devaluación de FHC, el real depreciado desvalorizó los salarios, deprimió la capacidad de compra nacional, empujó las exportaciones, retrotrajo las importaciones, todo para felicidad de los acreedores internos y externos del país. Las inversiones en saneamiento, asentamientos rurales, mantenimiento de caminos, salud, educación, etc. fueron prácticamente interrumpidas.

El superávit primario de la Unión, Estados, municipios, y empresas estatales superó los 15,4 mil millones de reales exigidos por el FMI, en el primer año del gobierno Lula. El capital financiero profundizó su parasitismo, repitiendo en el 2003 la fiesta realizada en el 2002, cuando la rentabilidad del sistema bancario llegó al 24,5%, mientras la de las empresas no-financieras se mantuvo en 1%. En ese contexto, se encogió la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, aumentando la parte del capital: el salario mínimo fue fijado en 240 reales para 2003 -67 euros u 80 dólares-, después que Lula prometiera duplicarlo.

Antes de las elecciones, José Dirceu, futuro ministro de la Casa Civil, defendió la concesión de autonomía administrativa al Banco Central, insistente reivindicación del capital financiero, esclareciendo las garantías dadas a Henrique Meirelles cuando fue invitado para presidente del Banco Central. La "independencia del Banco Central" consiste en que la gran autonomía de que ya goza el Banco Central brasileño es

insuficiente: para los dueños del capital mundial, ella es muy informal, inestable, no completamente adecuada para tomar decisiones económicas de acuerdo con las órdenes del capital financiero internacional; por eso proponía, ahora, la independencia absoluta del Banco Central frente a las leyes y las autoridades brasileñas.

Dos cosas importantes estaban por detrás de la propuesta: 1) la moneda brasileña estaba derritiéndose; 2) el crédito externo continuaba cerrado, la conexión con el sistema financiero internacional semi-interrumpida. Con esa carencia de refinanciamientos para la deuda externa, la posibilidad de que ocurriese una incapacidad de "honrar" los pagos externos era más que concreta, o sea, una "reestructuración" de la deuda externa (e interna), una cesación de pagos. El tamaño de la crisis económica mundial no daba espacio para que las economías dominadas de América Latina mantengan sus monedas nacionales intermediando los flujos de capitales externos. Los bancos centrales de las dos mayores economías de América del Sur serian reformados, transformados en departamentos subalternos de la *Federal Reserve* (Fed), el Banco Central de los Estados Unidos .

El Banco Central tomó, en 2003, una decisión acerca de la tasa de interés básica de la economía brasileña, después de una mini-guerra en el interior de la burguesía y del propio gobierno de Lula. La decisión garantizaba una tasa de interés real del 18% anual. Con esta medida, el tándem Lula-Meirelles pretendía converger con una tendencia de corto plazo de la especulación financiera mundial: en 2003, los *hedge funds* destinados a los "mercados emergentes" tuvieron una captación líquida de 1.930 millones de dólares, un número cuatro veces superior al registrado en 2002 (en 2000 y 2001 la captación fue negativa), se pasó de un flujo negativo (retirada) de -655 millones de dólares (en 2000), a uno positivo de 1.930 millones. Se trataba, sin embargo, A su servicio se pusieron medidas como la reforma previsional (que busca "abrir" un mercado de aproximadamente 70 mil millones de dólares para los fondos de jubilación privados) o la nueva ley de quiebras, que dio prioridad objetiva a los acreedores financieros en la liquidación de las empresas quebradas.

El gobierno de Lula actuaba como ariete de la fracción especulativa del capital financiero. Pero, debido a sus frágiles bases políticas (carencia de una mayoría parlamentaria propia y de control sobre los principales presupuestos estaduales), esto podía llevarlo a una crisis política antes de lo que imaginaba. Al aumentar la tasa de interés básica, el gobierno hizo la delicia de los bancos que, en medio de una enorme crisis económica, pasaron a lucrar como nunca.

En ese cuadro de crisis, la posibilidad de que un voto contrario, sin ningún efecto legislativo, de apenas dos diputados, abriese una perspectiva -incluso parlamentaria- independiente del PT, para su base electoral, alarmaba a la burguesía brasileña, demostrando que el gobierno Lula era un gigante con pies de barro: la prensa del gran capital celebró el voto favorable de "Babá" y Luciana Genro como una victoria estratégica. Frente a la amenaza de sanciones, los "disidentes radicales" hicieron una defensa jurídica, convocando juristas y "notables" para defender el "derecho de opinión". La dirección del PT ha continuó sus ataques.

Heloisa Helena, sin embargo, había sido elegida senadora por Alagoas, uno de los Estados más pobres de la Unión, con el 56% de los votos, o sea, que poseía una base política más que suficiente para opinar y votar lo que fuese. Ocho de los 14 senadores y 36 diputados del PT, se pronunciaron por escrito en defensa de los "disidentes" (aunque votando también en favor de las "reformas" de Lula). Luciana Genro encaró su defensa "recordando el contrato histórico del PT con el pueblo brasileño, con los cambios en

favor de los más pobres". En el PT se estableció una clara división de tareas para "domesticar" a los "radicales".

El PSTU, a su vez, lanzó la propuesta de "construir un nuevo partido" con los disidentes. La repercusión de la crisis del PT obedecía a que se conjugaba con una acentuación de las pendencias entre las fracciones de apoyo al oficialismo, frente al derrumbe de la producción industrial y al aumento de la desocupación. La valorización del real, mientras se desvaloriza el dólar, aumentó las dificultades de las exportaciones brasileñas. En resumen, se conjugaban la descomposición del PT con las evidencias de una crisis potencial de gobierno.

La lucha por la tierra recomenzó también con ocupaciones en los más diversos Estados. La Pastoral de la Tierra, vinculada al MST, denunció que los *fazendeiros* estaban armándose para impedir la reforma agraria, lo que fue confirmado (o, mejor, confesado) por una carta enviada al Congreso Nacional por el MNP (Movimiento Nacional de Productores), en la cual se afirmaba que: "Sin otra salida, los productores pueden también tomar decisiones al margen de la ley para defender sus propiedades", o sea, practicar asesinatos sistemáticos, como ya está sucediendo. El MST, a su vez, denunció que "la creación del PCR (Primer Comando Rural) demuestra, claramente, para la opinión pública, quiénes son los bandidos" (el PCR fue fundado por los latifundistas imitando el nombre y la estructura del PCC, Primer Comando de la Capital, principal organización del crimen y del narcotráfico en el país).

Después de las suspensiones, el PT concluyó expulsando a los “disidentes” parlamentarios, y a sus corrientes internas. Se abrió una polémica acerca de la formación de un nuevo partido entre éstas y el PSTU: el “partido único de la izquierda excluida”, sin embargo, no se concretó, y los disidentes, con al menos media docena de corrientes de izquierda de diversos matices, concluyeron conformando el PSOL (Partido Socialismo y Libertad).

19. BOLIVIA 2003: LA REVOLUCIÓN DE FEBRERO

La miseria previsional de Bolivia propició el gran paso de las luchas después de la “guerra del agua”: en marzo y en noviembre del 2001, los jubilados iniciaron marchas desde la población de Caracollo pidiendo la nivelación de sus rentas a 800 bolivianos como mínimo. Después de una semana de caminata, una delegación del gobierno, a cargo del entonces viceministro de coordinación Abel Martínez, negoció con los jubilados. Lograron la nivelación de sus rentas a 800 bolivianos, con mantenimiento del valor indexado al dólar. Este nuevo acuerdo recibió críticas incluso del mismo gobierno. El ministro titular de Hacienda, José Luis Lupo, se molestó y pidió el cambio de Martínez. La nueva medida, dijo, aumentaría el déficit fiscal por pensiones, que cada año es de 300 millones de dólares. El gobierno dijo que era un compromiso "difícil de cumplir". La Ley de Mantenimiento de Valor estableció que todas las transacciones nacionales, como el pago de impuestos, y entre ellos el de rentas, se actualizasen según las UFV, es decir en función de la inflación.

Los rentistas salieron perjudicados, por cuanto el dólar subió en 10 por ciento, mientras la inflación era del 2.2%, con 8 puntos de diferencia. El gobierno por su déficit fiscal no pudo pagar el Bonosol (un bono de asistencia social para las familias sin ingresos), y decidió disminuir las rentas de los ancianos elaborando el artículo 2334, quitando alrededor de 90 bolivianos por renta, para 110.000 rentistas. Los jubilados no aceptaron porque 1800 bolivianos, monto asignado a cada jubilado por el Bonosol, era un engaño: “si se divide entre todo el año, sale a cuatro bolivianos por día y eso no alcanza ni para el pan del desayuno en muchos hogares” (8 bolivianos = 1 dólar), fue la declaración de un jubilado. La tenaz lucha de los rentistas conmovió a la opinión pública boliviana.

Ya en agosto del 2002, cuando Gonzalo Sanchez de Losada, Goni (del MNR) fue elegido presidente por el Congreso después de haber obtenido, a la Kirchner, poco más del 20% de los votos válidos emitidos, estaba claro que “el gobierno que surge será un gobierno de crisis, minoritario y puesto en jaque político desde el inicio”.[149] En junio de ese año, con 20,94 % de los votos, el Movimiento Al Socialismo, partido liderado por Evo Morales,[150] obtuvo el segundo lugar; el primer colocado, el MNR con 22,45 %,

---

[149] COGGIOLA, Osvaldo. Bolívia: viraje político. *Prensa Obrera*, Buenos Aires, agosto de 2002; y también en *Trinchera* (por un Partido Obrero), La Paz, 12 de agosto de 2002.

[150] Líder del movimiento cocalero desde 1986, cuando éstos se unificaron en una Federación, Evo Morales Ayma emigró en 1978 para el Chapare, saliendo de la provincia de campesinos quechuas de Sur Carangas, en el departamento minero de Oruro. En 1978, Morales ingresó en el ejército comandado por Padilla, militar sucesor del golpista Bánzer, siendo que, como soldado, participó en la represión a los campesinos y a los cocaleros yungueños, en las grandes movilizaciones populares. En el mismo año salió del ejército y fue al Chapare para plantar la hoja de coca, pues solamente en esas regiones “podría progresar” (entrevista en: *Hoy*, 15 de enero de 1995). Hasta 1986, cinco sindicatos disputaban el control organizacional de los productores de coca: Evo Morales los unificó en una federación con dirección única. Luego de su victoria electoral del 2002, según: ORDUNA, Víctor (*La democracia cambia de color*. De abril a Evo, La Paz, 2002): “A mediados de 2000, después de obtener unos resultados inferiores a lo esperado en las municipales del 99, Evo pensó en dejar la jefatura del MAS en manos de un relevo con mejores opciones de cara a las nacionales del 2002. Incluso poco antes de ser proclamado como candidato a la presidencia, en febrero, el cocalero tenía serias dudas sobre su perfil presidenciable y miedo, mucho miedo a lo que se venía... Aquella intentona fracasada —a mediados de 2001— de conformar una Coordinadora de Movilizaciones Única Nacional (Comunal) ha sido reflotada por un día de sufragios alocados. El triunfo electoral de un dirigente cocalero al que se lo dio por muerto más de siete veces es el epílogo de lo que ha venido sucediendo en el país desde abril de 2000... Lo que la COB nunca pudo hacer lo ha hecho Evo Morales y sus seguidores: convocar la voz de los nuevos marginados, esos que ya no se ajustan al esquema proletario, ni a las oxidadas trompetas cobistas.... La gran virtud de Evo ha sido sumar. Ahora tiene bajo su batuta a los cocaleros del Chapare y de los Yungas, a las federaciones campesinas, a los colonizadores, a parte de los Indígenas del Oriente, a las Bartolinas, a

obtenía una "victoria" apretada, distante de simbolizar el poder de otrora del Movimiento Nacionalista Revolucionario.

El partido gubernamental, la ADN del finado dictador Hugo Bánzer y del presidente Jorge Quiroga, había sido barrido del escenario político. Dos semanas antes de las elecciones, las encuestas daban como vencedor, con 27% de los votos, a la NFR de Manfred Reyes Villa, ex intendente de Cochabamba que prometía, entre otras cosas, duplicar los salarios de militares y policías (las huelgas salariales castrenses han sido un gran factor de crisis en los últimos años). La NFR cayó en el pleito a poco menos del 20%, siendo derrotada en su bastión, Cochabamba, por el MAS, que obtuvo 33% de los votos en la ciudad de la "guerra del agua" y de la Coordinadora. El primer lugar obtenido por el MNR de Sánchez de Losada, con menos del 22% de los votos, fue poco más o menos que el producto inesperado de una carambola matemática.

En la semana previa a la elección, el embajador estadounidense, el "gusano" cubano-americano Manuel Rocha, amenazó al país con restricciones económicas si votaba por Evo Morales: "Quiero recordarle al electorado boliviano que si elige a los que quieren que Bolivia vuelva a ser un exportador de cocaína, ese resultado pondrá en peligro el futuro de la ayuda de los Estados Unidos a Bolivia", dijo al final de un discurso en el Chapare. El presidente de la República, Jorge Quiroga, se encontraba al lado del diplomático cuando éste lanzó las amenazas. Morales agradeció a Rocha por reforzar su candidatura: "Yo creo que es el último toque que hace mi jefe de campaña, le agradezco mucho". En las calles, la gente lanzaba comentarios irreproducibles contra el "virrey" yanqui.

Anteriormente, la predecesora de Rocha, Donna Hrinak, había dicho que los bolivianos "no tenían cojones" al percatarse de que un caso de narcotráfico investigado por la agencia antidrogas de Estados Unidos no era tramitado con agilidad por jueces y policías. El propio Departamento de Estado yanqui (a través de su portavoz, Charles Barclay) expresó oficialmente su preocupación por el resultado de las elecciones bolivianas. Con el segundo lugar en votos y en número de parlamentarios, el MAS y su candidato -el diputado uninominal con mayor votación nacional, 85 % en su región- fueron al segundo turno en el Congreso para elegir al nuevo presidente de la República, siendo derrotados por la coalición de partidos burgueses derechistas. El resultado de las elecciones nacionales del 30 de junio configuró un nuevo mapa político. La votación del líder cocalero Evo Morales y del dirigente campesino Felipe Quispe, superó el porcentaje obtenido por el "ganador" de los comicios.

El MAS de Evo Morales era una corriente que se basaba acentuadamente en la acción directa y la movilización campesina. Desde el punto de vista estratégico, sin embargo, sus posiciones eran sólo democratizantes. El MAS obtuvo una rotunda victoria política: resultó segundo en la votación general; ganó en Cochabamba, Oruro, La Paz y Potosí; obtuvo 35 parlamentarios y puso a Evo Morales en la segunda vuelta de las presidenciales. Que un dirigente sindical cocalero, impulsor de los cortes de ruta y los bloqueos de caminos, expulsado del parlamento y "excomulgado" por el embajador norteamericano, obtuviera esta votación excepcional, no sólo en el campo sino también entre los obreros, los jóvenes y las masas empobrecidas de las ciudades, provocó una conmoción política que se extendió más allá del país del Altiplano. Su ascenso electoral, como el del MIP del dirigente campesino Felipe Quispe, que obtuvo una votación excepcional en el Altiplano paceño, apareció directamente ligado a las grandes

---

gente del Movimiento Sin Tierra, a Centrales Obreras Departamentales, a Federaciones de Fabriles, a la Coordinadora del Agua, a los ayllus del norte de Potosí y a un sin número de sectores gremiales que van desde jubilados sin jubilación hasta padres de familia".

luchas de los campesinos cocaleros contra la erradicación del cultivo en el trópico cochabambino, a la "guerra del agua" de abril de 2001 en Cochabamba (contra la privatización del servicio) y al gran bloqueo campesino de La Paz de septiembre/octubre de 2001. Desde el punto de vista de su programa, sin embargo, el MAS integró el amplio marco centro-izquierdista latinoamericano.

El MAS se declaró partidario de la "condonación de la deuda externa": "No estamos aquí para romper con nadie; son importantes las relaciones internacionales pero no aceptamos políticas de hambre. Si Estados Unidos quiere relaciones, bienvenido, pero con mutuo respeto".[151] El MAS, entonces, no planteaba romper con el FMI (sino negociar "defendiendo la soberanía boliviana"), ni repudiar la deuda externa (sino su "condonación"). En esta cuestión clave, el MAS retomaba una consigna lanzada por la Iglesia Católica. La condonación de la deuda, como su moratoria o su renegociación, restablece la relación de dominación nacional sobre una nueva base. Para el MAS, "la gendarmería de la economía mundial tiene que analizar seriamente esa condonación porque no es posible que la pobreza sea un negocio para el Banco Mundial, para el FMI, tampoco la corrupción". Por este camino, llegó a plantear un relanzamiento del endeudamiento: "Queremos entablar nuevas relaciones internacionales para que las ayudas (es decir, los nuevos préstamos) sean apoyos a políticas nacionales".

Uno de los ejes del programa del MAS fue "recuperar las riquezas naturales del país para los bolivianos". La privatización fue el motor de algunas de las mayores puebladas continentales, como la "guerra del agua" de Cochabamba, el Arequipazo peruano, la lucha de los campesinos paraguayos contra la privatización telefónica, o las movilizaciones campesinas en Ecuador. ¿Mediante qué métodos, sin embargo, el MAS se proponía "recuperar las riquezas nacionales"? No dijo si indemnizaría a los pulpos privatizadores, como establecen los contratos; o los expropiaría sin pago. En el primer caso, la "recuperación" del gas y del petróleo se convertiría en una hipoteca imposible para Bolivia, que debería pagar a precio de oro sus propios yacimientos. No bastaba que las empresas fuesen estatales. El MAS no planteaba la dirección y el control obrero de las empresas nacionalizadas, sino la integración a ellas del capital "boliviano" (bajo la forma de cooperativas, empresas locales, etc.). "Como ha fracasado el capitalismo de Estado -dijo Evo Morales- ahora les toca a los pueblos crear sus empresas autogestionarias, empresas colectivas. El Estado tiene que fortalecer estas empresas".[152]

El objetivo estratégico del MAS era "recuperar la democracia secuestrada por el neoliberalismo", para lo cual planteó "una Asamblea Popular Constituyente, para que el pueblo defina la nueva estructura del Estado", o sea que se limitaba a la reforma de la Constitución Política del Estado. El planteo de la Constituyente en Bolivia tiene dos fuentes: los nacionalistas que pretenden transplantar al Altiplano la experiencia chavista; y las comunidades indígenas que, por medio de la reforma constitucional, pretenden "reconstruir la identidad" quechua, aymará y guaraní de la nación boliviana y establecer el ayllu, la primitiva comunidad indígena, como la base constitutiva del nuevo Estado. El MAS no levantaba un programa de expropiación del latifundio reconstituido después de la reforma agraria de 1953, ni tampoco, un programa que entroncase la lucha campesina con la lucha del proletariado.

Los campesinos cocaleros del trópico cochabambino, muchos de los cuales son ex mineros que debieron emigrar en busca de una nueva forma de subsistencia, después de

---

151 Evo Morales, en *El Diario*, Cochabamba, 12 de julio de 2002.

152 *Página 12*, Buenos Aires, 12 de julio de 2003.

una lucha sañuda por la manutención de sus fuentes trabajo y de la minería estatal,[153] libraron y libran una lucha a muerte contra la erradicación forzosa de sus cultivos, contra la militarización de sus territorios, la persecución de sus cuadros sindicales y la ingerencia imperialista en Bolivia. Han denunciado que la supuesta "campaña antidrogas" no es más que la cobertura de un operativo de expropiación masiva de los campesinos para, como denuncia Morales, "reconvertir los cultivos en función de las necesidades de las empresas multinacionales, transformar a los campesinos en obreros rurales, y dejar el terreno libre a los gasoductos, oleoductos y al camino interoceánico". El MAS transformó esta lucha social en una reivindicación de la hoja de coca, "hoja milenaria (y) bandera nacional en la defensa de nuestra dignidad y de nuestra soberanía". Pero la coca ha permitido a los campesinos bolivianos desde hace siglos sobrellevar largas y brutales jornadas de trabajo con una alimentación escasa y pobre; si algo simboliza la coca no es la dignidad sino la miseria a que han sido sometidos históricamente el campesino y el indígena boliviano.

Para Filemón Escobar, ex trotskista elegido senador por el MAS, este partido "es un instrumento político de las organizaciones sindicales, porque quienes han entrado en la campaña han sido ellas, sobre todo las centrales campesinas. El MAS es apenas el brazo partidario del vasto mundo sindical". La función de un sindicato obrero es defender las condiciones de contratación de los trabajadores; o sea que tiene una función restringida al cuadro de las relaciones sociales de producción. Como "brazo partidario del vasto movimiento sindical", el MAS era un partido de centroizquierda.[154] Para el tumultuoso torrente de luchas populares que busca una salida al derrumbe capitalista de Bolivia por medio de la acción directa, y que se expresó en la votación del MAS, existió desde el principio una contradicción insoluble con el programa y la política centroizquierdistas. Las responsabilidades políticas asumidas por el MAS, como consecuencia de su victoria electoral, pondrían esta contradicción al rojo vivo.[155]

Con el segundo lugar en votos y en número de parlamentarios, el MAS y su candidato - el diputado uninominal con mayor votación nacional, 85 % en su región - fueron al segundo turno en el Congreso para elegir al nuevo presidente de la República, siendo derrotados por la coalición de partidos burgueses derechistas. El resultado de las elecciones nacionales del 30 de junio configuró un nuevo mapa político. La votación del líder cocalero Evo Morales y del dirigente campesino Felipe Quispe, superó el porcentaje obtenido por el “ganador” de los comicios.

No tardaron cuatro meses para que el “nuevo” gobierno se viese sometido a una nueva insurrección popular, desde enero de 2003. Los jubilados del país decidieron, entonces, iniciar una marcha de protesta contra la ley 2434, dictada el 21 de diciembre de 2002.[156]

---

[153] Lucha que fue traicionada por la burocracia sindical cobista, ver: Juan Carlos Montenegro. *Estaño, Liquidación de Comibol y Ocupación de las Minas*, La Paz, octubre de 1986.

[154] La idea del partido sindical es antipartidaria: Filemón Escóbar la ha desarrollado desde hace dos décadas, por lo menos, después de su ruptura con el POR, llamando a los trabajadores a que “salgan de la minoria de edad en la que los mantienen los partidos, y sacando las consecuencias políticas de sus propias prácticas, se vayan haciendo *cobistas*, es decir, militantes *por cuenta propia*” (Filemón Escóbar. *Testimonio de un Militante Obrero*, La Paz, HISBOL, 1984).

[155] OVIEDO, Luis. Caracterización del MAS de Evo Morales. *Prensa Obrera* n° 764, Buenos Aires, 6 de agosto de 2002.

[156] La mayoría de los marchistas eran ex mineros, viudas de mineros que reciben la jubilación de sus difuntos esposos e hijos y nietos de este mismo sector, jóvenes que vinieron marchando representación de sus ancianos padres, madres y abuelos imposibilitados de marchar; en menor cantidad se sumaron fabriles y constructores que constituyeron una pequeña masa de gente. Existe una generación de ex mineros, el llamado movimiento sándwich, a quienes les fue cortada su jubilación por el decreto de relocalización

Esa ley eliminaba el régimen compensatorio inversamente proporcional en las rentas de los jubilados. Los jubilados marcharon hasta la localidad de Patacamaya, en el año 2001, para lograr este acuerdo. La ley 2434 eliminaba la cláusula correspondiente al Art. 50 de la Ley de Pensiones, que dice que se haría una compensación anual en las rentas a partir del año 2002. El sistema inversamente proporcional, que fue el que se aprobó en la gestión de "Tuto" Quiroga, significaba que todos los jubilados tenían derecho a recibir el reembolso de la inflación de la moneda nacional respecto al dólar, que en 2002 ascendió al 10%.[157]

El 14 de enero de 2003, los jubilados cambiaron la marcha por los bloqueos: la carretera Oruro-La Paz estuvo cerrada por tres horas. La Policía no se animó a desbloquear la vía "por temor a lastimar". Cansados de esperar a que el Gobierno respondiese favorablemente su pedido de anular el artículo 3 de la Ley de Actualización y Mantenimiento de Valor, los más de 8.000 jubilados que se encontraban en Calamarca decidieron suspender la caminata y bloquear la carretera que conecta la ciudad de La Paz con Oruro y el interior del país. La decisión fue asumida por las Federaciones Departamentales de Jubilados y Rentistas, corroborada por el dirigente de la Federación de ex Trabajadores sin Jubilación, Félix Cañari Pacajes: "Los bloqueos relámpago han sido una decisión que la han tomado las diferentes federaciones departamentales". Cañari informó también que Calamarca fue declarada base del movimiento de los rentistas, y que no se moverían de allí. Casi de forma espontánea, cientos de ancianos se pusieron a bloquear la carretera, así como todos los accesos y salidas a Calamarca. Los jubilados también recibieron el apoyo de los pobladores de la zona. El bloqueo se extendió, aproximadamente, tres horas. Los efectivos policiales y militares miraban impotentes la acción de los jubilados. El capitán de Policía Alfredo Arce y el secretario general de la Confederación de Jubilados y Rentistas, Walter Quintana, cruzaron algunas palabras. "La función de la Policía es la de resguardar el orden público", dijo el jefe policial, mientras el dirigente de los jubilados acusó a los uniformados de haberlos provocado al ingresar a Calamarca. Arce respondió: "Ustedes están realizando una marcha no un bloqueo de caminos".

Quintana le explicó al uniformado que esa población fue declarada como base del movimiento de los jubilados y rentistas del país: "Cuando vemos tropas que nos afrentan, entonces la gente reacciona y baja a la carretera. Nosotros no hemos alterado el orden público. Esto no se hubiera producido si ustedes no estuviesen acá", refutó. Mientras esto ocurría en Calamarca, en la ciudad de La Paz cientos de rentistas salieron a las calles para movilizarse en apoyo de sus compañeros. Los rentistas se congregaron en la plaza San Francisco desde la mañana. Cerca del mediodía, la ciudad estaba prácticamente paralizada. Daniel Ordóñez, secretario general de la Federación de Rentistas Mineros de Cochabamba, dijo que no se irían de la ciudad de La Paz en tanto no se solucionase el problema generado por las propias autoridades.

21060, es decir que no pudieron cumplir con los años que les faltaba para jubilarse y se quedaron sin nada aunque muchos trabajaron hasta 15 años en la mina; también estos compañeros vinieron marchando. Muchos comenzaron a trabajar a los 12 años de edad, son jubilados actualmente con tan sólo 34, 35, 36, 37 años, otros comenzaron a los 17. Los hijos de mineros cuentan cómo sus padres comenzaron a trabajar a los 10 años y se jubilaron a los 27, mueren jóvenes por el mal de mina, silicosis, una especie de tuberculosis, el mineral les destruye los pulmones y escupen sangre.

[157] La dolarización de la economía boliviana es un hecho, la mayoría de los precios y tarifas en la economía están indexados al dólar ó en muchos casos se pagan en dólares, más del 90 por ciento de los depósitos en los bancos están en dólares. La hiperinflación de mediados de los años 80 destruyó la estructura de los precios relativos en pesos bolivianos, pero simultáneamente, al generar un elevado grado de dolarización, sentó las bases para que el sistema de precios se reconstruyera en la moneda extranjera.

Finalmente, una violenta intervención puso fin a la marcha rentista. Los jubilados fueron metidos por la fuerza a buses y luego llevados a las ciudades. El gobierno dijo que la acción "protegía la salud de los ancianos": los ancianos fueron trasladados en autobuses a La Paz, Oruro y Llallagua, entre otros destinos. Los uniformados utilizaron la fuerza para imponerse ante la resistencia que ofrecieron muchos jubilados. Gritos, golpes y protesta se mezclaron mientras al menos medio millar de policias obligaban a los ancianos y ancianas a ingresar a los buses para luego ser trasladados a los centros urbanos. Algunos policías y militares no tuvieron ninguna consideración con las personas de la tercera edad que se resistieron a ingresar a los buses, algunos del Servicio Nacional de Caminos. Mientras la confusión y la represión se prolongaba, muchos pobladores de Calamarca, que se solidarizaron con los ancianos, también fueron objeto de la represión policial-militar. Todo comenzó cuando un camión militar ingresó a la población altiplánica con tropas militares. Este hecho despertó la inquietud en filas de los jubilados, quienes rodearon el vehículo. Ante este hecho los uniformados lanzaron dos granadas de gas lacrimógeno que dispersó al grupo de ancianos. Se vivieron momentos de tensión cuando los viejos mineros amenazaron con dinamitar la carretera, cosa que no ocurrió, pero bloquearon la vía por algunos minutos.

Los marchistas lanzaron una advertencia: "Si nuevamente somos vejados por las fuerzas del orden, no nos quedaremos de brazos cruzados". En el traslado de los manifestantes, hubo un accidente:[158] once muertos dejó el choque de dos buses; seis eran rentistas. La indignación cundió. Maestros, pequeños prestatarios, constructores, fabriles y ex trabajadores mineros se sumaron a la protesta. Los marchistas llegaron a La Paz: desde Patacamaya, el 18 de enero, concluyó con gran apoyo popular la marcha contra el gobierno. La marcha partió a la mañana desde Senkata en su última etapa. Miles de rentistas caminaron por calles alteñas y paceñas recibiendo abrazos y gritos de apoyo.

El llanto y la explosión de dinamita precedían sus pasos. Antes de partir, los rentistas mineros rezaron por las familias de los jubilados que murieron en el accidente. Los ancianos se arrodillaron en inmediaciones de la plaza San Francisco y lloraron la muerte de sus compañeros. Luego, los manifestantes recorrieron casi todo el centro paceño coreando estribillos como: "Muera Carlos Mesa (vicepresidente) el asesino" o "Goni, Mesa, los mismos asesinos". Calificaron al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada como "criminal" y responsabilizaron a Mesa de las muertes de los jubilados. La partida de los ancianos fue bulliciosa. "No nos rendiremos, nuestra lucha es justa y seguiremos pelando por nuestros derechos", gritaban desde las ventanas de los ómnibus.

La movilización se generalizó luego de una tentativa de imponer un impuesto de 12, 5% sobre todos los salarios y rentas superiores a 840 bolivianos (120 dólares) para generar el superávit fiscal exigido por el FMI para pagar la deuda externa. Iniciada con un bloqueo campesino de la ruta entre Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, en enero, los cortes de ruta y la insurrección popular rápidamente se extendieron a todo el país, generalizándose en las jornadas del 12 y 13 de febrero. El "impuestazo" puso al país en estado de rebelión, imprimiendo un giro en la situación política. Los enfrentamientos provocaron 35 muertos y 205 heridos, muchos de ellos por las balas militares, con decenas de edificios públicos, de empresas, de sedes de partidos oficialistas, destruidos. El "argentinazo" se extendía a Bolivia.

En medio de protestas y movilizaciones parciales, la policía de La Paz se amotinó y se auto-acuarteló en dependencias cercanas a la Casa de Gobierno en repudio al

[158] En Panduro el chofer del ómnibus que llevaba a jubilados de Calamarca a Oruro quiso adelantar a un vehículo, pero se encontró con otro en el carril contrario. De los 57 heridos, 11 murieron.

impuestazo y en reclamo de aumento salarial. La rebelión policial se extendió rápidamente a Potosí, Sucre, Tarija y Santa Cruz. En el interior, también comenzaban las movilizaciones, los bloqueos y los cortes de ruta. Ante el crecimiento de la movilización, el miércoles el gobierno desplegó al ejército en el centro de La Paz. "El ejército llegó a la Plaza Murillo a matar", denunció un policía rebelado. La fractura de las instituciones armadas del Estado, el levantamiento de los policías en el cuadro de un levantamiento popular, y su enfrentamiento con el ejército, eran síntomas inconfundibles de la aguda descomposición del aparato del Estado y del inicio de una revolución.

Cuando el ejército retrocedió, La Paz fue copada por los trabajadores y los estudiantes enfurecidos por la matanza; la movilización se extiende todavía al jueves. El centro del poder político se convirtió en un campo de batalla. Mientras los trabajadores y los estudiantes avanzaban y peleaban, en medio de una nube de gases, los vendedores de ediciones extra de los periódicos gritaban: 'El ejército mata al pueblo para defender al gringo'. Las ediciones se acababan pronto. Los francotiradores operaron y asesinaron a un estudiante que junto con otros cientos de compañeros intentaba llegar a la Plaza Murillo. Bajo una lluvia de gases y la represión militar que causó seis nuevos muertos en esta jornada, la movilización popular atacó las sedes del poder político (la Vicepresidencia, los ministerios de Trabajo y de Hacienda), las sedes de los partidos de la coalición gubernamental y los símbolos de la opresión imperialista (Burger King, Aguas de Illimani, bancos y financieras).

No hubo saqueos. Las movilizaciones entraron a los ministerios y a la Vicepresidencia, de donde sacaron computadoras y documentos que fueron apilados para ser quemados: "La gente no deja que nadie se lleve nada. Algunos lo intentan pero son perseguidos al grito de 'son chorros' (...) Los propios manifestantes frenan a los ladrones obligándolos a lanzar a las improvisadas fogatas los objetos robados bajo el lema 'el pueblo no roba' (...) Una dulcería de la calle Yanacocha es asaltada. Más tarde se devolverían los dulces y demás artículos". La descripción que hizo la propia prensa paceña de los sucesos, fue un claro reflejo del carácter políticamente conciente de la masa movilizada. Mientras la Vicepresidencia y los ministerios de Trabajo y Hacienda ardían en La Paz, en el interior se repetían las movilizaciones, las marchas sobre los centros del poder político local, los ataques a las sedes de los partidos gobernantes y los bloqueos de caminos.

Empujado por la crisis económica y las exigencias del FMI, el gobierno atacó no sólo a los asalariados, sino a su propia base social en las capas medias, empujándola a la oposición: trasladó el principal escenario de conflicto social a las ciudades y dividió a la burguesía, ya que los empresarios y los exportadores vieron estas medidas como un nuevo ataque a sus intereses y destinadas a favorecer tan sólo a los bancos y a las empresas "capitalizadas" (privatizadas).

El acuartelamiento de los policías en el GES de La Paz (seguido por otras guarniciones como en Santa Cruz) añadió un componente a la caldeada situación. En el motín se verificaba el descontento de la tropa mal paga y maltratada, la oficialidad afectada por el impuestazo, y hasta las camarillas corruptas dispuestas a bloquear el proyecto de "reforma policial" del gobierno. El efecto fue explosivo, acelerando los acontecimientos. El 12 de febrero de 2003 fue visible la parálisis del aparato represivo del Estado, fracturado con el combate entre los policías y el Ejército enviado por Sánchez de Losada a reprimirlos, lo que abrió una amplia brecha para que la movilización de masas comenzara a colarse, con el gobierno y la maquinaria del Estado prácticamente inmovilizados. Ya había más de una decena de muertos y un centenar de heridos, la mayoría en la guerra entre policías y militares en Plaza Murillo.

Al lanzar el Ejército contra la policía, Sánchez de Losada buscaba imponer una salida autoritaria, represiva, ante la marea ascendente de protestas, pero debió retroceder apresuradamente cuando ya era tarde, sólo para que la derrota no fuera mayor, intentando conjurar el levantamiento en marcha. Comenzaban los ataques a los símbolos del poder político y económico: varios edificios estatales, las sedes de los partidos del gobierno (MNR, MIR, UCS, ADN), oficinas de financieras y de empresas privatizadas.

Las acciones tenían un claro contenido político, evidenciado en los objetivos mismos, en las consignas y en que los manifestantes no permitían que actuaran saqueadores. La declaración de asueto por el gobierno para el 13 trató de impedir el paro nacional, mientras la movilización en La Paz reunía a mas de 10 mil personas: en Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, se realizaban marchas y también ataques a las sedes de los partidos de gobierno. Las fuerzas militares apostadas en Plaza Murillo recurrieron a la criminal táctica de los francotiradores como provocación, para aterrorizar a los manifestantes y crear un clima sangriento que impidiera el desarrollo de la movilización. Los primeros heridos y víctimas fatales eran jóvenes, trabajadores de salud que cumplían su deber, y obreros.

Hubo una guerra entre los efectivos militares, en el Palacio del Quemado, y los policias apostados en la Cancilleria y el GES. El ejército controlaba mitad de la Plaza Murillo, la otra mitad estaba en manos de la policia y del pueblo amotinado. La munición usada era de guerra, mataron a un policia del cuerpo de bomberos. A pesar de los intentos del Mayor Vargas y del general Hugo Tellería, de evitar mayor derramamiento de sangre, no fue posible contener a las partes, el ejército continuó disparando contra los policias y civiles. A las 17 horas del jueves 13, Goni, que había huido de incógnito, se presentó en la TV, anunciando el retiro del impuestazo. El pueblo había triunfado![159]

Al mismo tiempo, los dirigentes de las organizaciones populares se encargaban de disminuir las proyecciones del paro, negando continuidad a la lucha. Evo Morales, del MAS, y la COB, reiteraron el pedido de “que se vaya Goni”. La constitución del Estado Mayor del Pueblo, en enero, con el MAS de Evo Morales (verdadero vencedor de las elecciones del 2002), el MIP de Felipe Quispe Mallku, la COB y los “movimientos sociales” (como la “coordinadora” de Cochabamba, de Oscar Olivera, y otros), que parecía delinear una situación de doble poder, se revelaba inútil, en la mejor hipótesis, o simplemente la constitución de un freno preventivo para evitar “desbordes” populares: “De más en más enfrentados con la confrontación abierta (los movimientos sociales) fueron superados por la multitud revoltosa en los acontecimientos del 13 de febrero: fué ella, en realidad, la que casi derribó al gobierno”.[160]

Al atardecer del 14, la policía volvía a las calles -durante toda la noche se había gestionado un acuerdo- y comenzaba a detener no sólo a rateros y saqueadores, sino a quienes volvían a sus casas después de la movilización y a cualquier joven que estuviera a mano. Por eso, la movilización retrocedió, como lo demostró el reducido impacto del paro nacional de 48 horas de la COB durante el 17 y 18. Pero el gobierno había salido herido de muerte, y el día 19 tuvo que anunciar públicamente el retiro del impuestazo, además de una reorganización de gabinete, con la remoción de cuatro ministros.

La sobre-vida de Goni, sin embargo, le permitió encarar el proyecto entreguista estratégico exigido por el imperialismo para garantizar el pago de la deuda externa, la

[159] Una reconstrucción minuciosa de los acontecimientos de febrero se encuentra en: PINTO PARABÁ, Miguel. *Lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de Febrero*. La Paz, Central Obrera Departamental, 2003.

[160] CHÁVEZ, Walter. Eruption annoncé du volcan bolivien. *Le Monde Diplomatique*, Paris, mayo de 2003.

completa colonización económica de Bolivia, y para perseguir objetivos estratégicos más amplios, que también estaban presentes en el cerco a Venezuela y en la guerra contra Irak: la venta del gas boliviano al consorcio multinacional Pacific LNG. La salida buscada por las clases dominantes era la exportación de gas por vía marítima a los Estados Unidos, que ha encontrado con ello una buena forma de amarrar los intereses de varios grupos económicos y de poder en la región.

Las transnacionales del petróleo presionaron para que Mejillones fuese elegido como el puerto de exportación de gas a los Estados Unidos. La española Repsol-Ypf, las británicas Gas y British Gas y British Petroleum y Total, se han constituido en el verdadero factor de poder en el país alrededor de las cuales giran los grupos oligárquicos intermediarios del negocio, una elite tecnocrática dominante y muchos dueños de medios de comunicación que desean asegurar el fabuloso negocio para esas transnacionales, proteger los intereses energéticos de los Estados Unidos. El Estado boliviano se ha transformado en sucursal de las compañías petroleras.

Desde antes de junio del 2002, 90% del pacto estaba cerrado: la firma del negocio dependía de una decisión política del virtual presidente electo Gonzalo Sánchez de Lozada. El territorio seria alquilado en comodato por 99 años, el área total negociada sería mayor de 600 hectáreas. El gasoducto desembocaría en un pedazo de costa chilena aún por definir, donde también se instalaría un complejo petroquímico y turístico. Los impuestos del negocio serían percibidos por el Fisco boliviano. La única exigencia para cerrar las conversaciones era la solicitud del gobierno boliviano de acceder -vía comodato, es decir, arriendo- a una franja costera, en la que pretende desarrollar un complejo turístico. La histórica reivindicación nacional boliviana de salida al Pacífico seria usada para dar base a la mayor entrega de su historia.

El proyecto Pacific LNG -que integraban las petroleras Repsol-YPF, British Gas y Pan American Energy- incluye la construcción de un gasoducto desde Bolivia hasta un puerto chileno del Pacífico. En dicho terminal, el hidrocarburo seria licuado y llevado en barco hasta México, donde se volverá a gasificar para suministrarlo a California, en Estados Unidos. Uno de los aspectos fundamentales de la negociación fue el debate de si un acuerdo de este tipo era objeto de un nuevo tratado entre ambos países (que no tienen relaciones diplomáticas, debido al contencioso boliviano por la salida al Pacífico, Bolivia siendo el único país latinoamericano sin salida, directa o indirecta, a uno de los dos océanos). Se llegó a la conclusión que bastaba con un convenio binacional, el cual debía ser ratificado por el Congreso chileno. En el acuerdo se especificará que los terrenos en territorio chileno serán inscritos por los bolivianos en el Conservador de Bienes Raíces chileno, bajo la figura de comodato y por un período de 99 años.

En el caso del transporte del gas, se utilizaría como referente el Tratado de 1957, acordado para la exportación de petróleo hacia Arica. Los integrantes del consorcio manifestaron desde el primer día su preferencia por un puerto chileno, porque esto implicaría ahorros por entre US$ 300 millones y US$ 500 millones anuales. Los plazos entre el consorcio privado y el grupo de empresas que distribuirá la energía en Estados Unidos -que encabeza la compañía Sempra Energy- fueron, sin embargo, dilatándose. Según la prensa, el gas era uno de los tres temas esenciales para lograr un “pacto de gobernabilidad”, junto con la revisión del proceso de privatizaciones, con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), de Jaime Paz Zamora, y la Nueva Fuerza Republicana (NFR), de Manfred Reyes Villa.

Perú, sin embargo, ofrecía condiciones más ventajosas que Chile (apoyado por los EEUU) para el embarque del gas. David Grenlee, embajador de los EEUU en Bolivia, denunció un supuesto “golpe de estado” de la izquierda para tomar el poder. Manfred

Reyes Villa denunció que, por detrás de ello, se ocultaba el acuerdo Goni-EEUU para preparar un auto-golpe.

Vale resaltar que Bolivia, con 52,4 billones de pies cúbicos, tiene la segunda mayor reserva latinoamericana de gas natural (la primera es Venezuela, con 147 billones), con un aumento de once veces en los últimos cinco años, actualmente sólo exportado al Brasil, que compra 17 millones de metros cúbicos/dia[161] (cifra insignificante comparada con la proyectada por los EEUU). Rusia es el país con las mayores reservas mundiales (1700 billones de pies cúbicos), pero los mayores consumidores, EEUU y Japón, tienen menos del 10% de las reservas rusas. La producción y consumo de gas natural es la que exhibe, entre todas las fuentes energéticas, los más altos índices de crecimiento mundial, de casi 4% anual, habiendo pasado de 53 trillones de pies cúbicos en 1980, a 104 billones en 2004, con 167 billones proyectados para 2020.[162]

En Bolivia, las 52 cuencas de reserva de gas certificadas como probadas y probables, se encontraban en manos de compañías extranjeras.[163] Brasil pagaba 1,10 dólares por BTU (unidad térmica) de gas (los consumidores bolivianos pagan 5,48 dólares): la Pacific LNG, con el contrato previsto, pagaría 0,70 dólares por BTU.[164]

A esto se agregaba la privatización del agua. En La Paz, desde que el consorcio francés Aguas del Illimani (*Lyonnaise des Eaux*) pasó a administrar su distribución, su precio pasó de 2 a 12 bolivianos. La mayor parte de la población, que no pudo afrontar este aumento, reemplazó las duchas por instalaciones sanitarias comunes, y pagas. La privatización vino acompañada de un deterioro del servicio, relacionado con los despidos efectuados para reducir los costos. En su campaña publicitaria, el consorcio prometió priorizar la mejora del servicio y la extensión de la red. La realidad es muy distinta: los desperfectos son cada vez más frecuentes por la falta de mantenimiento y las reparaciones llevan más tiempo. Se llegaba a recurrir a los viejos pozos para asegurar el funcionamiento de los comercios: "Hoy en día, es un lujo tener agua en la ciudad de El Alto", señaló un trabajador despedido por Aguas del Illimani.

Otro choque con los EEUU se anunciaba en torno a la recuperación del plantío de coca, debido al completo fracaso del plan de cultivos substitutivos, que hizo caer la cultura cocalera en 90% entre 1998 y 2001: "El gobierno americano ya está preocupado con la producción de coca en Bolivia, que subió 23% el año pasado, desde su punto mínimo en 2001, por causa del rápido replantío. Bolivia permanece la tercera mayor productora mundial, con Colombia y Perú".[165]

El cuadro de crisis, miseria creciente, e intervención económica y política directa del imperialismo yanqui, preparaba una nueva explosión popular, que ya se avizoraba en movilizaciones parciales, y en la propia protesta de la burguesía boliviana (que obligó a Goni a nombrar un Secretario de Estado para la revisión de las privatizaciones, cortina de humo, en realidad, para la gran entregada del gas). La crisis boliviana se internacionalizaba con la intervención de los EEUU, y el embrollo con Chile y Perú sobre el Pacífico, en vísperas de desplome económico del primero, y de crisis política

[161] Gás natural: contrato com a Bolívia pode ser prorrogado. *Gazeta Mercantil*, San Pablo, 23 de mayo de 2003.

[162] ECHAZU ALVARADO, Luis Alberto. *La venta del gas, control yanqui, un gran negocio para las transnacionales y un saqueo para Bolivia*. La Paz, agosto de 2002.

[163] PERELMAN FAJARDO, Juan. Un dilema entre soberanía y miseria: el gas boliviano. *Trinchera* nº 21, La Paz, 12 de agosto de 2002.

[164] ANTEZANA, Osvaldo. Bolivia tiene el gas, pero el negocio es de otros. *Trinchera* nº 20, La Paz, 20 de junio de 2002.

[165] *The Wall Street Journal*. Nueva York, 14 de mayo de 2003.

galopante del gobierno de Alejandro Toledo en el segundo (sin hablar de la proximidad de la crisis argentina).

El trasfondo de las medidas impulsadas por Sánchez de Losada (impuestazo de febrero, luego entrega del gas) era la completa crisis del capitalismo y del Estado boliviano: las privatizaciones no habían revertido sino acentuado la crisis fiscal y fueron incapaces de promover ningún crecimiento económico sostenido. Las empresas debían pagar el 25% por concepto de Impuesto a las utilidades pero, luego de algunos ajustes a la tasa efectiva, las capitalizadas sólo pagaban el 14%, en promedio, y las petroleras menos del uno por ciento. La fuga de capitales se acentuara en 2003: oficialmente, más de 300 millones de dólares de las "capitalizadas" estaban fuera del país.

Con la privatización del sistema de jubilaciones, el Estado dejó de recoger contribuciones, teniendo que bancar sin ellas a los pensionistas amparados en el antiguo sistema: el déficit, que en 1997 era de 321,1 millones de bolivianos, subió de inmediato a 1364,4 millones, luego a 1876,5 millones, cuando el Estado comenzó a emitir bonos para cubrir el déficit: sólo en 2002, el Tesoro tuvo que pagar 2807,3 millones de bolivianos (5,1% del PIB) para pagar las rentas (con un déficit anual superior a 400 millones). Las AFPs son propietarias del 50% de las empresas privatizadas: a pesar de eso, el total de sus recaudaciones equivale a sólo 4,82% del ingreso fiscal y a 0,66% del PIB. Los capitalistas bolivianos se encontraban en completa bancarrota: ocho de cada diez empresas no pueden hacer frente a sus deudas. Tampoco las pueden rescatar el Estado o los bancos. La deuda externa, varias veces "perdonada", aunque no supere el 20% del producto bruto boliviano, era suficiente como para destruir las finanzas públicas.

Por su profundidad, el desarrollo de la revolución boliviana recogía el conjunto de las contradicciones históricas seculares de un país situado en el corazón geográfico y político de América del Sur. A más de medio año del levantamiento popular de febrero de 2003, el completo impasse político del movimiento obrero y popular boliviano había impedido un desenlace, no digamos revolucionario, sino siquiera democrático a la crisis nacional provocada por la política del gobierno del MNR, quien contaba, según las deformadas encuestas de los institutos, con el apoyo sólo del 9% de la población. Esto no impidió la continuidad de la imparable crisis gubernamental, lo que obligó a “Goni” a ampliar la base política del gobierno MNR-MIR-UCS, a través de una reformulación del gabinete, incoporando al ex “opositor” NFR (Nueva Fuerza Republicana) de Manfred Reyes Villa, un ex militar populista-derechista, lo que dió lugar a una mini-crisis política motivada por el reparto del botín gubernamental.

El gobierno tuvo que crear dos nuevos ministerios, para satisfacer los apetitos monetarios de nuevos y viejos aliados. Aun así, el NFR, que el 20 de julio había solicitado cuatro carteras, como precio para sostener a la moribunda coalición de gobierno, se tuvo que conformar finalmente con tres (pero también con 15 vice-ministerios), además de la estratégica prefectura de La Paz, para dotar al gobierno de una mayoria en el Congreso Nacional (senadores y diputados).

Votado con un programa de reversión de las privatizaciones, el NFR sustentó (a cambio de unos -cuantos- dólares) al gobierno entreguista de Goni, en su intención de llegar al fin de su mandato, en 2007. La “gran” prensa,[166] no pudiendo ocultar el sarcasmo popular frente a la desvergonzada negociación –“cuoteo”- que presidió la formación de

[166] Hasta 2003 de propiedad de Raúl Garáfulic, un fascista ex-paramilitar de la dictadura de Banzer, que hizo su fortuna a golpes de robos y asesinatos, y que se fué a la quiebra, siendo tragado por el grupo español multinacional Prisa: todo un símbolo de la pujante “libre iniciativa” de la burguesía boliviana.

la nueva coalición, parafraseando la expresión "megacoalición", que dió nombre al gobierno del finado Hugo Bánzer, bautizó como "pegacoalición" al nuevo gobierno MNR-NFR-MIR-UCS.[167]

Con la rebelión popular boliviana, a caballo de la derrota de la intentona golpista en Venezuela a manos de la movilización de los trabajadores, y de la continuidad del Argentinazo, se ampliaba el campo de la revolución latinoamericana.[168] Y no dejó de ser irónico el "argumento" con el que el gobierno de Sánchez de Lozada intentó hacer pasar el impuestazo: si no se reduce el déficit fiscal –amenazaba– llegaremos a la situación de la Argentina. En realidad, con el impuestazo, el propio gobierno abrió las puertas para un Argentinazo en el Altiplano.

El hundimiento del gobierno planteaba una crisis de poder. El respaldo de la OEA, Duhalde, Bush, el FMI y Lula al "gobierno constitucional" tenía por objetivo evitar una victoria popular. El MAS, el principal partido de la oposición, reclamó que la vicepresidenta del Senado se hiciese cargo del gobierno y convocase a una Asamblea Constituyente "para refundar Bolivia". La COB respaldó esa posición. Con esta consigna evitaba plantear que el poder pasase a manos de él mismo y de las organizaciones populares.

El acuerdo para salvar al gobierno de Goni no se limitaba a la "pegacoalición". Las Fuerzas Armadas se habían erigido en árbitros de la situación, obteniendo del gobierno un increíble decreto que legalizaba el trabajo esclavo de los conscriptos, luego del escándalo provocado por el descubrimiento del uso de centenas de clases (conscriptos) en la propiedad particular de un miembro del Estado Mayor, conocido como el caso del "mocororó" (colecta de ricino).

Se multiplicaban, también, las denuncias de maltrato de soldados por los oficiales, con castigos y golpizas que los dejan inválidos, y en algunos casos les han provocado la muerte. Además de legalizar el trabajo esclavo, el gobierno había abierto la cancha para la militarización del país, editando una nueva Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, en el propio Código Penal, que ampliaba las penas para incitadores de bloqueo o bloqueadores de ruta, hasta ocho años.[169]

Pero la crisis no podía ser combatida con la pura represión. La pieza contrarrevolucionaria central tenía como centro a la Iglesia Católica y su propuesta de "Reencuentro Nacional", propuesto a través de un documento a todos los partidos políticos. Reeditando las "siete mesas para el diálogo" de inicios de 2003, ahora institucionalizadas y con la participación de "todos", el "Reencuentro" se perfilaba como un "Gran Acuerdo Nacional" destinado a asegurar la sobrevivencia del gobierno del MNR hasta el 2007. El documento de la Iglesia tenía como su eje el reclamo de "impedir conflictos sociales y crear las condiciones de normalidad de tránsito y transporte" (o sea, que fracasó por completo, y que era la variante "pacífica" de la militarización).

---

[167] "Pega", en la jerga política boliviana, designa a las prebendas oriundas de los cargos estatales. Según un comentario, "el banquete no termina ahí. La fiesta incluye, además, las comisiones en el Congreso y los más de un centenar de cargos del Poder Judicial, que comprenden el nombramiento de ministros en la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, junto a fiscales del ministerio público. Se trata de una torta donde todos quieren sacar tajada" (*Punto Final*, Cochabamba, 27 de julio de 2003).

[168] MARTÍN, Jorge. Bolívia: Una rebelión contra todos los regímenes en América del Sur. *Prensa Obrera* nº 790, Buenos Aires, 20 de febrero de 2003.

[169] Ver: Ley contra los bloqueos, *La Prensa*, La Paz, 3 de agosto de 2003; La ley contra bloqueadores será resistida con bloqueos, *Idem*, 2 de agosto de 2003.

Como no podía ser de otro modo, el principal interés de la prensa se volvía hacia la participación (y acuerdo) del MAS (y del MIP) con el "Reencuentro". El MAS (que inicialmente amenazó con siquiera participar de las reuniones) cuestionó, lógicamente, el "modelo económico", pero también declaró que "no ve elementos insalvables",[170] a lo que el MNR se hizo eco, declarando que, con el "Reencuentro", "ya tendrá condiciones de gobernabilidad".[171] Paradojalmente, los principales cuestionamientos al documento de la Iglesia provenían del imperialismo (por el tema de las drogas) y del propio MNR (porque el documento proponía mecanismos para "revisar las capitalizaciones" y "eliminar la corrupción").

Después de las movilizaciones de febrero, uno de los principales dirigentes del MAS, el ya nombrado Filemón Escobar, mantuvo reuniones con dirigentes sindicales afirmando abiertamente la necesidad de sustentar la "gobernabilidad" de Goni hasta 2007, cuando el MAS vencería las elecciones presidenciales, después de vencer las municipales en 2004, y las departamentales, dando como ejemplo la conquista gradual del gobierno por el PT del Brasil.

Otro teórico, ya entonces vinculado al MAS, Álvaro Garcia Linera, también defendió abiertamente el "pacto social" después de la crisis revolucionaria de febrero. Garcia Linera teorizaba ahora desde páginas más abiertamente encuadradas por la burguesía, acerca de la caducidad de la "vieja izquierda vanguardista", de la "recuperación de recursos públicos por la sociedad, estatales y no estatales" (o sea, la privatización "autogestionada", es decir, gestionada por las ONGs); y también se refería, demagógicamente, a los "nuevos liderazgos indígenas", que "tienen ciertas posibilidades de ser presidentes de la República, por via electoral o por via del levantamiento social" (o sea, que la perspectiva máxima de una revuelta social sería el actual régimen político, la revolución está descartada), proponiendo al "poder indígena" "acompañar su presencia gubernamental (legislativa, municipal y ejecutiva) con una revolución radical de los sistemas técnicos y organizativos del poder estatal" (la "radicalidad" se agotaba, portanto, en declarar al quechua y al aymara lenguas oficiales de la institucionalidad del Estado colonial), en "una estrategia de poder capaz de unificar lógica partidaria y lógica comunal, tanto en las calles y carreteras en contra del Estado como dentro del Estado".[172]

"Esa práctica política multicultural, derechos especiales de representación, para los grupos históricamente desfavorecidos, no valora a los indígenas como seres soberanos que se pueden valer de sí mismos y por sí mismos, sino que considera que necesitarían una sobreprotección paternal... La propuesta de Álvaro Garcia Linera no anula el sistema de partidos, sino que éste se multiculturalizaría por medio de los derechos especiales de representación; (sus) posiciones autonomistas son compatibles con la forma de economia del capital y la forma política liberal. Suenan más bien a una política de los Estados naciones. Podemos sospechar, inclusive, que serán las nuevas formas de las políticas multiculturales de los Estados nacionales a lo largo del tercer milenio".[173]

El MIP, a su vez, basado en el liderazgo carismático de Felipe Quispe Mallku, convocó para finales de julio de 2003 a un bloqueo de las rutas del Altiplano, claramente

---

[170] *La Razón*, La Paz, 29 de julio de 2003.

[171] *La Prensa*, La Paz, 4 de agosto de 2003.

[172] GARCÍA LINERA, Álvaro. Radiografía de las nuevas izquierdas. *Le Monde Diplomatique*, La Paz, julio de 2003.

[173] PATZI, Félix. Miserias de la multiculturalidad y las propuestas de autonomías indígenas. *El Juguete Rabioso*, La Paz, 6 de julio de 2003.

boicoteado por el MAS. El bloqueo, sin embargo, fracasó,[174] porque no estaba inscripto en una estrategia de lucha (formalmente fue convocado para “dar cumplimiento a los 72 puntos negociados con Banzer”) sino que obedecía a una disputa burocrática por el control de la central campesina (CSUTCB) con dirigentes vinculados a Evo Morales (Germán Coquehuanca - a quien Mallku llamó en público de “índio de mierda”, olvidando su propia ideologia política - y Román Loayza) desafavorable a Quispe: “cuando ocurrió, Felipe Quispe se sumió en la desesperación y para reflotar su imagen convocó al bloqueo”.[175]

De un modo general, “el MAS o el MIP, en pocos meses de gestión, no sólo han dado muestras de una ineficiencia escandalosa en el Congreso, sino que ni siquiera son capaces de sintonizar con el sector al que supuestamente representan: el sector campesino. Felipe Quispe llamó loteadores a los sin tierra del Altiplano y el partido de Evo Morales, que hoy por hoy anda ya enfrascado en una campaña electoral por los munizípios, prefirió enfrascarse en una trama conspirativa para apropiarse del liderazgo de la CSUTCB; los sin tierra de todo el país marchan al margen, buscando nuevas afinidades y liderazgos en su lucha”.[176]

Esto adquiría gran importancia, porque el histórico fracaso de la reforma agraria iniciada en 1953 estaba llevando a una nueva y profunda ola de luchas campesinas, sobre la base de que el 87% de las tierras del país (28 millones de hectáreas) está en manos de 7% de propietarios de dotaciones agrícolas. Los campesinos tienen sólo 4 millones de hectáreas (13%), según datos oficiales.[177]

En la COB (Central Obrera Boliviana) la disputa por la CSUTCB fue pretexto para aplazar interminablemente el XII Congreso, a ser realizado en Oruro en julio de 2003: “La COB está en su peor crisis. Esa forma de sindicalismo pactista o negociador, asumida por los dirigentes, empeoró su situación, coadyuvando a la profundización de la crisis”.[178] El abierto gubernamentalismo “neoliberal” de los dirigentes de la década del 90 llevó a la conformación de un gran bloque opositor, el Bloque Sindical Antineoliberal, que controlaba varias Federaciones de Fabriles (inclusive la de La Paz), y tenia a 300 de los 900 delegados al Congreso de la COB.

Ese bloque, sin embargo, carecía de definiciones políticas, y también recicló a elementos reaccionarios: la lista antiburocrática de las elecciones de fabriles La Paz (papeleta blanca) calificó a la dirección de la Federación local de “pro-patronal, que ha llevado al movimiento fabril a un pacto con nuestros verdugos, sin lograr ni cuatro marraquetas para nuestro sector”. El Congreso, sin cambiar nada, a no ser a la Ejecutiva y su Secretario, se realizó sobre la base de dinamitazos mineros que desalojaron a los partidarios de Mallku, que bloqueaban el edificio de su realización.

Gonzalo Trigoso, vinculado al Bloque, desarrolló la teoria, como balance de los acontecimientos de febrero, de que, para la victoria revolucionaria, “no basta que la tropa se rebele; se ha visto la necesidad de que jefes y oficiales deben estar junto de su tropa... (Debemos) incorporar a nuestra doctrina de liberación los resultados y

---

[174] “Solo hubo uma interrupción, a un kilómetro de Huarina, donde medio centenar de pobladores prácticamente pidió permiso para la inauguración del bloqueo y se fue sin enfrentarse a las fuerzas del orden” (*La Razón*, La Paz, 29 de julio de 2003).

[175] CÁCERES, Sergio. ¿Porqué fracasó el bloqueo? *El Juguete Rabioso*, La Paz, 3 de agosto de 2003. Ver también: ORDUNA, Víctor. El bloqueador impotente. *El Juguete Rabioso,* La Paz, 25 de julio de 2003.

[176] PRADO, Fernando. La crisis del MAS y el MIP. *El Juguete Rabioso*, La Paz, 6 de julio de 2003.

[177] *El Deber*, Cochabamba, 5 de agosto de 2003.

[178] La mala hora del Comité Ejecutivo de la COB. *Alerta Laboral* 28, La Paz, junio de 2003.

conocimientos obtenidos”.[179] En síntesis, una “revolución antineoliberal” con participación (dirección) de la oficialidad militar y policial, una vuelta al ciclo militar nacionalista.[180]

La revolución boliviana se combinaba con la explosiva situación del Perú. En mayo de 2003, después de tres semanas de huelga docente, de cortes de caminos de los campesinos, de huelgas de los judiciales y la salud y de manifestaciones estudiantiles, Alejandro Toledo decretó el estado de sitio, el desalojo de las rutas y la reapertura de los colegios por la fuerza armada: jugaba todo el destino de su gobierno a quebrar por la vía de la represión la movilización popular en curso.

Toledo no fue solo al estado de sitio: el conjunto de las cámaras patronales, la Iglesia y los partidos patronales (con la tibia excepción del APRA) salieron a declarar que "había que poner orden". Pero, por sobre todo, Toledo contó con el respaldo efectivo del alto mando del Ejército, que cumplió fielmente las órdenes de desalojar a balazos las rutas, los puentes y las escuelas.

En el primer día de vigencia del estado de sitio, las Fuerzas Armadas masacraron a los estudiantes que habían ocupado la universidad en Puno (al sur del país); ocuparon escuelas y el Ministerio de Justicia (sus trabajadores estaban en huelga) y desalojaron violentamente a los campesinos de las rutas. En ese primer día, las fuerzas represivas asesinaron a un estudiante en Puno e hirieron de bala a cientos de trabajadores en todo el país.

Pero aun con el sólido respaldo de la burguesía y tan brutal demostración de fuerza, el estado de sitio fracasó. La huelga docente se mantuvo en pie, las escuelas continuaron desiertas, las manifestaciones estudiantiles y las marchas docentes continuaron, y la represión desató una ola de repudio popular al gobierno. Ante la continuidad de la huelga docente y el repudio popular al estado de sitio, la CGTP (que había anunciado que "estudiaba" la convocatoria de una huelga general para... julio) convocó a una marcha nacional para el 3 de junio. En las provincias del sur del país, los gobiernos locales llamaron a "paros cívicos" en repudio al estado de sitio para la misma fecha.

La evidencia de que el fracaso del estado de sitio estaba arrastrando al abismo al gobierno de Toledo hizo sonar las alarmas para la burguesía. Las cámaras patronales forzaron al gobierno a convocar de urgencia el "Acuerdo Nacional" (en el que participaban el gobierno, los partidos parlamentarios, las cámaras patronales, la burocracia sindical y la Iglesia), en el que se aprobó, a puertas cerradas, lanzar una "mediación" de la Iglesia para darle una salida al empantanamiento de la huelga docente. En declaraciones previas, las cámaras patronales, que apenas cuatro días antes reclamaban "que se ponga orden", plantearon la necesidad de levantar el estado de sitio y llegar a un acuerdo con los docentes.

En la misma reunión, las cámaras patronales y especialmente la Iglesia reclamaron la suspensión de la marcha nacional de la CGTP "para que pueda trabajar el mediador". La Iglesia temía que una represión de la marcha desatase una rebelión popular todavía mayor.

---

[179] TRIGOSO, Gonzalo et al. *Balance Jurídico Social del Motín Policial*. La Paz, 2003, pp. 44-45.

[180] Guillermo Lora teorizó ésto, ya hace tiempo, como parte de una supuesta “excepcionalidad boliviana”, que conferiría un carácter distintivo a sus Fuerzas Armadas, lo que llevó a Juan Pablo Bacherer a concluir en que se operara la transformación del POR (Partido Obrero Revolucionario) en una “secta nacionalista”.

20. BOLIVIA 2003: LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE

El camino abierto por la insurreción popular de febrero, contra el "impuestazo", lejos de haberse cerrado, se había profundizado. El viernes 19 de setiembre fue un día de gran movilización, que fue reflejo, a su vez, del profundo debilitamiento y aislamiento del gobierno, el cual trató de evitar, por todos los medios, de llegar al enfrentamiento. Su centro fue la lucha de los pobladores de Warisata, donde los campesinos defendieron el bloqueo de caminos contra la política hambreadora y proimperialista del gobierno MNR-NFR-MIR-UCS, en especial la entrega del gas boliviano a los EEUU. El bloqueo fue objeto de una provocación asesina por parte de las Fuerzas Armadas. El sábado 20, un operativo policial-militar, en Warisata, ordenado por la embajada norteamericana, se saldó con la muerte de dos uniformados y al menos cinco civiles, demostrando que en ese momento de profundo agotamiento de las ficciones democráticas (justicia, "estado de derecho"), el único sostén real del gobierno se reducía al ejército.

Estaba cada vez es más claro que el poder real ya no lo ejercía Sánchez de Losada, que el poder real que le sostenía se iba centrando en la cúpula castrense, cuyo margen de maniobras era también limitado (si se diera la exportación del gas por Chile, el ejército perdería una gran parte de su razón de ser ante los ojos de los trabajadores); en todo caso, una respuesta militar precisaba de una careta civil, aún no claramente perfilada. El día 22, en un intento de mostrar la fortaleza política que ya no tenía, el gobierno decidió convocar al patético show de la firma del Reencuentro Nacional: el gobierno estaba casi acorralado.

La crisis de dirección se evidenciaba en la participación, en dicho Reencuentro, de la corriente que fuera depositaria de la esperanza popular en el cambio, el MAS de Evo Morales. El Reencuentro fue sólo una maniobra de corto alcance, impulsada por la Iglesia, para dar un oxígeno suplementario al gobierno asesino del Goni, ya odiado por toda la población trabajadora. El resultado del Reencuentro no fue la imposición (parcial) de algunas reivindicaciones populares, sino la masacre de trabajadores en Warisata.

Lo sucedido en Warisata fue el primer episodio de una insurrección de vastas proporciones, en un momento que resumia las contradicciones acumuladas por la sociedad boliviana a lo largo de su historia, de extrema debilidad de las expresiones políticas de la izquierda y más aun de la derecha. El uso de las fuerzas armadas, como recurso de disuasión y de orden era también limitado; cualquier enfrentamiento que sucediese iría desgastando la capacidad de respuesta del "ejército boliviano". La crisis económica, golpeando fuertemente a la clase media, determinó que el gobierno perdiese definitivamente cualquier apoyo social. Una expresión de la completa descomposición gubernamental fue el surgimiento, en sectores de la clase media, del reclamo de uso de métodos de guerra civil contra los trabajadores en lucha, apelando a una pseudo-ideologia racista y fascista (cuya irrupción hizo evidente en Santa Cruz del a Sierra y Tarija).

En este escenario, el problema de la entrega del gas a las transnacionales, de bandera de lucha antiimperialista, podía transformarse en una ofensiva contra todo el régimen político. Esto no haría sino acentuar la lucha de clases, ya en un sentido político, de profundo cuestionamiento no sólo a la política económica sino al régimen en su integridad. El gobierno no había dudado, una vez más, en mancharse de sangre. Los pobladores de Warisata mostraban el camino a seguir, la movilización, la organización y la lucha.

El 19 de septiembre 150 mil personas manifestaron en La Paz y en las principales ciudades en rechazo de la entrega del gas al monopolio encabezado por los imperialistas

ingleses y españoles. Jaime Solares, principal dirigente de la COB, le dió un mes de plazo al gobierno para anular los decretos de entrega y amenazó con una huelga general en un futuro indeterminado. Desde antes, los campesinos de la región de Warisata, organizados en la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos (CSUTCB) encabezada por Felipe Quispe, cortaban las rutas de la región por reclamos sectoriales, la liberación de campesinos presos y, también, contra la entrega del gas.

Se trataba de un corte parcial y limitado, y se habían entablado negociaciones entre el gobierno y los dirigentes campesinos. La política de Goni apuntó a la división del movimiento mediante la oferta de negociaciones por separado. El 20 de septiembre, mientras algunos ministros negociaban con la CSUTCB, el gobierno (a instancias de la embajada norteamericana) ordenó el desalojo por parte del Ejército del bloqueo de Warisata: el resultado fue la masacre de seis campesinos (entre ellos una niña). Aunque la dirección de la CSUTCB continuó negociando con el gobierno hasta el 27 de septiembre (una semana después de la masacre de Warisata), ya no había negociación posible. La masacre desató una rebelión general de los campesinos, que salieron masivamente a cortar rutas y bloquear caminos en toda la zona del Altiplano.

Se estaban dando procesos de unificación de las direcciones de los sectores en lucha, bajo la dirección de la COB. En octubre, el conflicto y el paro de actividades se generalizaron, provocando finalmente la caída del gobierno. Con la caída de Sánchez de Lozada, sostenido hasta el último momento por el imperialismo norteamericano, la OEA y los gobiernos democratizantes y de centroizquierda de América del Sur, concluyó el primer asalto de la revolución boliviana, con una incuestionable victoria popular. Todas las salidas que buscaban mantener el gobierno de Goni, inclusive obligándolo a concesiones extremas (convocatoria de una Constituyente, derogación de la Ley de Hidrocarburos y convocatoria de un referendum sobre la venta del gas, etc., que el propio Sánchez de Lozada llegó a admitir para salvar la piel) fueron hechas añicos en las calles, caminos y campos, por los fabriles, mineros, campesinos y estudiantes en lucha, que exigieron la caida de Goni como condición primera e insoslayable.

Bajo la presión de las bases movilizadas, la dirección de la CSUTCB se vio forzada a abandonar las negociaciones con el gobierno y a decretar el bloqueo general de rutas y caminos hacia La Paz; también la COB se vio obligada a llamar a la huelga general y a apoyar el bloqueo general de caminos. Al reclamo de la anulación de la entrega del gas se sumaba ya el de la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. En esta fase de la lucha no participó el MAS, el propio Morales se encontraba en el exterior (de donde regresó recién el 6 de octubre).

El MAS no se sumó a la huelga general, a la que consideró "prematura" y hasta "precipitada", ni a los bloqueos de caminos. La negativa de los cocaleros del Chapare y las federaciones campesinas controladas por el MAS para ingresar a las movilizaciones se convirtió en una aliada del gobierno, siendo muy duramente criticada por los activistas obreros y campesinos en lucha. El paro de actividades y los combates se trasladaron rápidamente de la ciudad de El Alto a La Paz, Oruro, Cochabamba, el Chapare, Sucre, Potosí. Los bloqueos de caminos se generalizaron y el aparato productivo fue casi totalmente bloqueado. La huelga se transformó en insurrección.

Goni tuvo que abandonar su sueño anunciado de sobrevivir en la presidencia decretando el Estado de Sitio, calificado de “delirante” por los políticos bolivianos y la embajada yanqui. Las organizaciones que comandaron la movilización, y sus líderes, habían anunciado que si Lozada no renunciaba, el pueblo boliviano se volcaría sobre la Plaza San Francisco para apresar al Presidente. La victoria se cobró un duro precio: más de 80

muertos y desaparecidos, centenas de heridos, prisiones. Pero los sacrificios no serán en vano, los caídos no serán olvidados, y su memoria será la garantia contra las inevitables (y ya anunciadas) traiciones que acechan a la revolución boliviana en sus próximos pasos.

La improvisada salida provisoria, con la constitución de un gobierno encabezado por el vicepresidente Carlos Mesa, consagrado en el Congreso Nacional, con la presencia de los enviados de Argentina y Brasil, fue armada con la directa participación de la embajada de los EEUU, que la había rechazado inicialmente para sostener a rajatablas a Goni, es decir, fue armada por los instigadores y alimentadores de las masacres populares de las semanas pasadas. El gobierno del "intelectual"-presidente nació, por lo tanto, con sus ropas y la banda presidencial manchadas de sangre, el pueblo boliviano lo sabe en demasía. La huelga general de la COB continuaba, planteando el fin definitivo de la entrega del gas a los EEUU. Los campesinos del Altiplano mantuvieron el bloqueo de caminos, hasta la satisfacción de sus reivindicaciones (contenidas en un pliego de 72 puntos acordados durante el gobierno del general Bánzer) y liberación de todos los presos.

Carlos Mesa se proclamó "jefe de un gobierno de transición", y solicitó al Congreso que evaluase la posibilidad de convocar elecciones generales ("Quiero proponer formalmente al Congreso Nacional la consideración de un tiempo de transición histórica que nos permita convocar elecciones transparentes, creíbles y efectivas para consagrar un nuevo presidente", o sea, que Mesa sabe no ser "efectivo y creíble"), durante su discurso en el Legislativo. Propuso abrir un proceso que permita a los bolivianos "dar respuesta a los desafios", con un referéndum vinculador sobre la política de gas y la convocatoria de una Asamblea Constituyente que reforme la Carta Magna. Esas propuestas requererían la reforma de la Constitución. Mesa se declaró "presidente de un gobierno de transición histórica ", abriendo el paraguas para no ser volteado de inmediato. Dijo también que es preciso "entender el país a partir de etnias" como los quechuas, los aymaras y los guaranis, "que construyeron con su sangre una historia de desigualdad que estamos obligados a reparar".

Evo Morales, a su vez, pidió "tiempo para el nuevo presidente". El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) pidió tiempo para que Carlos Mesa pudiese organizar su trabajo y su gabinete: "Pienso que es importante darle un tiempo, un respiro a Carlos Mesa. Que se organice, que organice su gabinete y sus representantes", declaró. Y también: "Carlos Mesa expresó el pensamiento del pueblo boliviano", con la convocatoria de elecciones anticipadas. En respuesta, Carlos Mesa pidió "paciencia" a los "sectores sociales".

De acuerdo con la Constitución boliviana, Mesa debería gobernar hasta 2007, pero los EEUU, la burguesia boliviana y sus partidos (inclusive la "izquierda"), y hasta el propio Mesa, saben que eso es imposible, que cualquier intento en ese sentido provocaría una revolución social, por eso precisan reformar la Constitución para poner una barrera "democrática" inmediata a la revolución, "democracia" que tendrá el apoyo de los fascistas, empezando por el carnicero Bush y su vampira-asesora, Condoleeza Rice, que ahora hipócritamente reconocen al que rompió con el Goni, después de haber declarado que sólo el Goni representaba a la democracia "legítima" en Bolivia.

Frente a estos planes comenzó a levantarse un duplo poder, con el poder organizado por los obreros, campesinos y juventud en lucha. En El Alto, la ciudadela obrera de un millón de habitantes, vecina a La Paz, se organizó el poder obrero con las asambleas barriales y juntas vecinales, 562 de ellas con un comité coordinador, ollas populares en cada manzana y barrio. Asambleas y juntas tenían poder para autorizar manifestaciones, marchas y otras demostraciones. Todas las comisarias de policía de El Alto habían sido

destruídas, ningún policia que no sostuviese la revolución era admitido en la ciudad. El gobierno obrero existía potencialmente en El Alto.

Según Jorge Altamira,[181] la insurrección boliviana tenía una enorme densidad histórica, porque los bolivianos saben que el saqueo del gas significa una nueva lápida a su posibilidad de existencia nacional. La Ley de Hidrocarburos (Ley 1689), aprobada el 30 de abril de 1996, disponía que el "derecho de explorar y explotar los campos de hidrocarburos y de comercializar sus productos" se ejerce por YPFB pero bajo la condición de celebrar "necesariamente contratos de riesgo compartido"; de manera más clara todavía, afirma que "quienes celebren contratos (...) adquieren los derechos de prospectar, explotar, extraer, transportar y comercializar la producción obtenida"; finalmente, determina que el Estado no podrá negarse a la cesión de los derechos y obligaciones de un contrato, de un socio cesante a otro nuevo, siempre y cuando "la nueva empresa tenga la capacidad técnica y financiera que le permita cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato".

Es decir, que la forma real que adquiere el derecho propietario -su uso, disfrute o usufructo mediante su explotación y posterior venta- era atribución privativa de las empresas transnacionales y no del Estado. Así, la propiedad de los hidrocarburos, reconocida constitucionalmente al Estado, no pasaba de ser una declaración lírica, pues el Estado no es soberano – como lo sería el propietario de cualquier bien - en las decisiones relativas a su usufructo. No era el gas lo único que estaba en juego, sino la reestructuración de la historia boliviana sobre nuevas bases sociales e históricas.

Según Álvaro García Linera, en cambio, la rebelión de febrero y la insurreción de octubre de 2003 habrían sido "un eslabón mas de un nuevo ciclo de rebelión indígena que desde hace tres años atrás viene reapropiándose de territorios aymara, expulsando funcionarios estatales y reconstruyendo un tipo de poder político comunal basado en los ayllus y sindicatos... la reactivación de la memoria de una especie de parentesco ampliado entre aymaras de todas partes que, sin haberse conocido, se sienten partícipes de una misma historia, de un mismo sufrimiento y un mismo destino". Lo más interesante, para Garcia Linera, seria que "lo nuevo hoy quizá este por el lado de la subordinación de ciertas instituciones estatales y de sus recursos (municipios y diputados parlamentarios) a la lógica de la acción colectiva comunal". El indigenismo concluye, entonces, en que el Estado semicolonial, el actual régimen político, podria ser subordinado a la "rebelión aymara", a condición de que la titularidad del poder político pasasen a manos de sus representantes.

En esas condiciones, la ausencia de una dirección revolucionaria es un producto del desarrollo político del movimiento obrero y campesino, de sus limitaciones políticas. Las direcciones que se presentaron, en medio de la lucha, como instancias superadoras de la izquierda democratizante, como la COB de Jaime Solares y la COD del El Alto, comenzaron, después, a girar lentamente a la derecha, eliminando la posibilidad de realizar ampliados con la participación de delegados de las juntas vecinales y organizaciones sociales y políticas que están en la lucha, arguyendo situaciones de seguridad frente a posibles detenciones.

Se ignoró la necesidad de una línea política con participación de las bases luchadoras y con derecho a voz de las organizaciones políticas que están en la pelea, lo cual permitiria consolidar e impulsar el desarrollo revolucionario; de establecer mecanismos de ollas comunes para solventar las condiciones de mantenimiento de los vecinos y del

[181] ALTAMIRA, Jorge. *Ahora es cuando*, la bella y certera consigna de la revolución boliviana. *Prensa Obrera* nº 821, Buenos Aires, 16 de octubre de 2003.

conjunto del movimiento, concreción de redes de solidaridad intersectorial entre vecinos y gremiales para la provisión de alimentos y otros insumos, que permitiesen una fase de resistencia complementada por una ofensiva centralizada por un comando político.

En distintas intervenciones, según la prensa boliviana, "los maestros urbanos y rurales, los campesinos, los constructores, los trabajadores de la salud, los mineros, los fabriles, los carniceros, los gremiales, las Centrales Obreras departamentales, los universitarios, los periodistas y otros sectores sociales identificaron que la 'dispersión' del conflicto es producto de la falta de una 'estrategia revolucionaria de poder' con dirección única, coherente y nacional". Pero incluso entre quienes estuvieron de acuerdo en criticar el electorerismo de Quispe y Evo Morales, no fue posible establecer una política común sobre un planteo de poder frente a la crisis actual.

Los acuerdos que se alcanzaron hablaban de fortalecer la huelga y los bloqueos, pero no lograron establecer el objetivo estratégico de la lucha. Solares de la COB y De la Cruz de la COD del El Alto terminaron cediendo en salidas de corte constitucional al régimen. El primero ha terminado planteando que ante la renuncia del presidente sea la corte suprema de justicia la que se haga cargo del poder transicional, es decir nada menos que uno de los pilares fundamentales del régimen podrido y asesino; por su parte el segundo ha planteado que sea el vicepresidente el que quede al mando del país, sin comprender que Mesa expresa sólo la imposibilidad de resolver los problemas que han desencadenado el conflicto.

El gobierno de Mesa era apenas el taparrabos del dominio del imperialismo yanqui y su embajada, que con él se preparaba para la transición hacia un gobierno centroizquierdista "étnico".

Dejando claro que la represión de setiembre-octubre fue directamente comandada por el imperialismo norteamericano, denunció *Pulso* que existía "una especie de comando militar estadounidense que ha tomado el mando de las "Fuerzas Armadas de la Nación". La Embajada de Estados Unidos en Bolivia no sólo ha articulado el 'apoyo internacional' al presidente ficticio [se refiere al derrocado Goni], no sólo ha convocado a los medios de comunicación 'en nombre de la democracia', sino que 'aporta', además, con cuatro hombres que operan en el país, tres en el Estado Mayor del Ejército, en el Gran Cuartel de Miraflores, y uno en la propia embajada de la avenida Arce. Uno de los tres hombres que opera en el Cuartel de Miraflores es una suerte de coordinador político-militar; se ocupa de concentrar y procesar la información con destino al ejército boliviano y, fundamentalmente, a la Embajada de Estados Unidos. El segundo de esos militares ejerce la coordinación general de las tres fuerzas militares bolivianas; de él ha surgido la idea, por ejemplo, de movilizar soldados *cambas* [sureños] a El Alto'. El tercero de esos hombres se ocupa de eso que, en términos militares, se llama logística, abastecimiento de municiones y alimentación de las tropas bolivianas que están bajo su mando (el aprovisionamiento estadounidense llega en aviones Hércules, desde Miami).

Y proseguía: "El cuarto de esos hombres opera en la embajada de la avenida Arce, es el Agregado de Defensa de Estados Unidos, el que se relaciona directamente con el Ministro de Defensa de Bolivia, Carlos Sánchez Berzaín, el comodín perfecto, el nexo entre la Embajada y la residencia presidencial, donde vive y 'manda' el presidente ficticio. A partir de esta verdadera ocupación del poder que sostiene [al gobierno], las Fuerzas Armadas, es que se explican las crecientes versiones de un 'cabreo' militar en marcha, un cabreo de uniformados que todavía lucen la banderita boliviana en algún lugar de su uniforme. Ése es el ámbito del poder real". En El Alto fueron descubiertos los cadáveres de ocho soldados, que habrían sido fusilados por los oficiales, por negarse a tirar contra el pueblo insurreccionado.

Todo ese poder militar de los EEUU en América Latina nada seria, entretanto, sin las maniobras políticas, en el centro de las cuales se encuentra el centroizquierda de América del Sur. Diputados bolivianos manifestaron que Lula era el único político regional capaz de mediar una negociación, y un corresponsal brasileño,[182] "pescó" al canciller de Goni, Carlos Saavedra, telefoneando a su embajador en Brasil para decirle: "Insista con Brasil, inisista con Lula, para hablar con Evo Morales"; el gobierno asesino se aferraba a Lula y al MAS para salvar la vida (literalmente). Hormando Vaca Diez, presidente del Congreso boliviano, agradeció la "intermediación vital" de Brasil y Argentina. Hasta poco antes de la caída de Goni, sin embargo, Itamaraty apoyaba al asesino ("El gobierno brasileño exhorta enfáticamente a que se establezcan canales de diálogo entre el gobierno constitucional del Presidente Sánchez de Losada y las fuerzas de oposición, a fin de encontrar soluciones pacíficas para la crisis", decia una nota oficial),[183] y cambió de caballo en medio del rio, para evitar una insurrección victoriosa y transformarse en el artífice n° 1 de la "transición institucional", así como lo hizo también el gobierno argentino.

Uno de los factores que llevaron a la radicalización de la entrega del gas a los EEUU por el gobierno de Goni, fue la presión de la Petrobrás por la revisión a la baja (en precio y volumen adquirido) del contrato de compra de gas boliviano por el Brasil ("En enero, la Petrobrás mantuvo la suspensión de pagos de 100 millones de dólares, para presionar a los bolivianos a reducir el precio, poniéndose en *default*"),[184] pese a que el Brasil posee un crónico problema energético. Al servicio de esa presión mezquina, que revivió las infamias de las poderosas oligarquias regionales contra Bolivia, estuvo el alardeado descubrimiento de nuevas reservas gasíferas por el Brasil, en la cuenca de Santos. En septiembre de 2003, la garrafa de gas boliviano le explotó a Lula en las manos.

Las burguesías locales en centros como Tarija, Cochabamba y Santa Cruz comenzaron a desarrollar planteos autonomistas para aprovechar en beneficio de cada uno de estos sectores los recursos de su región. Bolivia pasó a ser una nación en vías de desintegración nacional. Las rebeliones populares mostraron, al contrario, la voluntad de los explotados a reconstruir la nación sobre nuevas bases sociales. El consorcio Pacific LNG, que organizó el megaproyecto de exportación del gas boliviano (con un valor estimado de unos 7 mil millones de dólares) está compuesto por Bechtel, Amoco, British Petroleum y Repsol-YPF, empresas estadounidenses, británicas y españolas, o sea, de las mismas potencias imperialistas que invadieron a Irak.

¿Por qué los obreros no tomaron el poder en octubre? Porque los jefes de las masas (COB incluída) no sólo avalaron sino que incluso reclamaron la maniobra del traspaso del mando a Mesa, apoyando el golpe de Estado "constitucional" orquestado por el imperialismo, la Iglesia y el centroizquierdismo latinoamericano. Los enviados de Lula y Kirchner, convencidos por las jerarquías católicas de la imposibilidad de seguir sosteniendo a Goni, utilizaron a Evo Morales, Solares, Quispe, para asegurarse que las masas no derrocaran al gobierno capitalista. Luego se pasearon del brazo de Mesa diciendo que el programa del "nuevo" gobierno representaba en un 80% su propio programa. Fue así que levantaron la huelga general, los bloqueos de caminos, abandonaron las calles, y otorgaron una "tregua" al gobierno que busca seguir

[182] *Folha de S. Paulo*, 17 de octubre de 2003.

[183] *Correio Braziliense*, 14 de octubre de 2003.

[184] *Correio Braziliense*, 15 de octubre de 2003.

entregando el gas, reprimiendo a los cocaleros, atacando las condiciones de vida populares.

Durante más de un mes de rebelión popular, el imperialismo y los empresarios reclamaron que el gobierno se mantuviera a sangre y fuego contra las masas, que "restableciera la autoridad" del Estado, y el ejército cumplió con salvajismo con este mandato. En ese período ni Lula, ni Kirchner, ni Chávez, se pronunciaron contra la masacre. La salvaje represión y la heroica resistencia del pueblo en cada calle y en cada barrio, en cada ruta y en cada poblado, a piedra y palo enfrentando al ejército y la policía dirigidos por la embajada norteamericana, otorgó a la rebelión una profundidad y extensión gigantescas, y aceleró la maduración política y organizativa de las masas (huelga general, juntas vecinales como organismos de doble poder, destrucción de las comisarías, etc.).

La situación estaba madura no ya para tirar a un títere para que el imperialismo lo sustituyese por otro, sino para derrocar a los capitalistas y establecer un gobierno obrero y campesino. En 2003, los explotados de América del Sur estaban dominados políticamente, y crecientemente desmoralizados, por el desvío democrático impuesto al “argentinazo”, y por la desilusión provocada por el derechismo del gobierno Lula en Brasil, otrora esperanza de América Latina. Los explotados bolivianos, con su acción heroica, quebraron el equilibrio imperialista-centroizquierdista del sub-continente: la primavera de los pueblos latinoamericanos recomenzaba en Bolivia.

21. EL DESBARRANQUE DEL GOBIERNO LULA

Frente a las crisis boliviana y argentina, los choques de Venezuela con el imperialismo, Brasil, bajo el gobierno Lula, jugó el papel de bombero continental, con pleno apoyo de George W. Bush y el gobierno de los EE.UU. Lo que lo jaqueó en esa condición fue su sorprendentemente rápida crisis interna.

Después de la caída abrupta del PIB del país en 2003, Brasil experimentó una recuperación económica en 2004, con lo que el PT cantó victoria y comenzó a preparar tranquilamente la reelección de Lula en 2006. Pero 2005 le reveló una más que desagradable sorpresa, con la revelación de escándalos de corrupción de dimensiones también continentales.

Comenzada en mediados de mayo, con la "simple" denuncia de una propina de R$ 3.000 recibida por un director de Correos, la catarata de denuncias de corrupción del gobierno, el parlamento, el PT y la "clase política" en su conjunto, superó, en apenas dos meses, todos los límites de la imaginación: se supo que el PT recibió (por lo menos) R$ 48 millones de grandes empresas para financiar su campaña electoral, que ya bajo el gobierno Lula recibió (sólo de tres bancos!) R$ 121 millones,[185] y que, con raras excepciones, todos los parlamentarios y dirigentes de la corriente mayoritaria del PT metieron la mano en la lata, en cifras millonarias, para no hablar de los "aliados progresistas" (PMDB y PL, principalmente).

Era una crisis de todo el régimen político, pues hasta la "oposición" derechista (PSDB), vio revelado el financiamiento de sus campañas electorales en varios estados (principalmente en Minas Gerais) por las mismas empresas que financiaron al PT y hasta con los mismos intermediarios (el supuesto "publicitario" Marco Valerio). El canal corrupto fue construido en la gestión del gobernador Eduardo Azeredo, del PSDB, candidato a la reelección, y financiado por el omnipresente Marcos Valério.

"La agencia de publicidad DNA, una de las empresas del *Carequinha* [Marcos Valério] de Minas, consiguió un préstamo de R$ 11,7 millones en el Banco Rural. Repasada a la coalición liderada por Azeredo, el dinero irrigó tanto la campaña del gobernador como la de 70 candidatos (!) a la Cámara de Diputados", informó el periodista Augusto Nunes. Eduardo Azeredo no era otra cosa que el presidente del PSDB. Ya estábamos, por lo tanto, como afirmó el comentarista Jânio de Freitas, en el "pasaje de la crisis política a la crisis institucional".[186]

La crisis brasileña parecía agravarse cada día, con la revelación de la implicación de los dirigentes del PT en los esquemas de corrupción y prevaricación. La crisis no se restringía al PT, pues involucraba prácticamente a todo el espectro de "la política" y a todos los partidos, y también al gran capital privado, lo que exigía que se investigase y castigase con el mismo rigor a las fuentes de los dineros de campaña y a los responsables activos y pasivos del tráfico de influencia y de la práctica de lavado de dinero.

Con la confirmación de que el mensualazo existía y el Ministro de la Casa Civil, José Dirceu, junto con el ex presidente del PT, José Genoíno, comandaban el esquema, se evidenció que el Presidente Lula estaba igualmente enterado: como responsable del esquema del mensualazo, o como cómplice pasivo, era inminente el *impeachment* del presidente y, en el PT, el colapso del llamado Campo Mayoritario, sector del PT alineado a Lula, que controlaba el 60 % de la dirección nacional del partido.

---

[185] *Folha de S. Paulo*, 20 y 21 de julio de 2005.

[186] *Folha de S. Paulo*, 24 de Julio de 2005.

Se hizo evidente que la corrupción era el método necesario de gobierno de un frente de colaboración de clases (Frente Popular). Su derrumbe, total, planteaba una crisis de poder. Debido a la crisis, se profundizó también la política de cooptación y colaboración de clases. A ese objetivo obedeció la nominación del dirigente sindical Luiz Marinho para ministro de Trabajo, confirmando la completa integración de la CUT al Estado. Y también abriendo una crisis en la central: la gota de agua fue la recusa de Marinho), afiliado al PT, de nombrar su vicepresidente como presidente, cuando dejó la presidencia de la CUT para asumir su cargo (ministerial). El vice da CUT era Wagner Gomes, del PC do B.

Con la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de los correos, el escándalo del "mensualazo", la caída del ministro-jefe de la Casa Civil, José Dirceu, y la caída catastrófica de la dirección del PT, la crisis política brasileña entró en un tramo inédito, obligando a Lula da Silva a una reforma ministerial que, al mismo tiempo que se inclinó más hacia la derecha, evidenció el desvanecimiento del proyecto político del PT. Para *O Estado de São Paulo*, "el presidente dio muestras de comprender que la conquista de un nuevo mandato ya no puede ser más su proyecto prioritario": lo que se planteaba era la simple supervivencia del propio gobierno.

La Bolsa festejó con una notable recuperación el anuncio de la renuncia del jefe de gabinete y mano derecha de Lula. Al día siguiente, el ministro de Economía, Antonio Palocci, anunció un ambicioso plan de exenciones fiscales para empresas exportadoras e inmobiliarias. Palocci fue uno de los ministros denunciados por el diputado Roberto Jefferson en el festival de corrupción.

Sólo el tiempo y los vaivenes de la crisis política esclarecerían la amplitud de esta corruptela, pero queda claro que era un método de gobierno. Obligado por su política a pactar con los representantes parlamentarios de la clase capitalista, los políticos del PT tuvieron que aceptar su slogan: "dar para recibir". Que este procedimiento no les haya causado repugnancia es un síntoma de que no dejaban de cobrar su parte. Después de todo, las infladas cuentas publicitarias que Marcos Valerio pasaba a Delubio Soares (el tesorero del PT) no necesariamente tenían que ir en su totalidad a los bolsillos de los "aliados". La llamada "caja 2" de los partidos, y del PT, ya es orgánica o, como puntualizó un periodista, "es una extraña caja 2, pues el dinero tiene origen identificado y destino contabilizado".[187]

El régimen de compra de diputados y negociados tiene como base el capital financiero, que alcanzó beneficios históricos con el gobierno del partido llamado "de los trabajadores". Itaú, Bradesco y Banespa no sólo festejaron beneficios históricos para la historia financiera del Brasil, sino que registraron los más grandes lucros bancarios de América, incluidos los EEUU. A mediados de junio, una reunión de los principales banqueros del país y de la "oposición" (PSDB) concordó en que las denuncias de corrupción debían ser controladas, para no "afectar la economía". "Los inversores no ven claramente cuál sería el rumbo abierto por los acontecimientos", dijo el *Financial Times*, portavoz del gran capital financiero internacional.

De todos modos, lo que importaba ya no era la corrupción sino las líneas de salida a la crisis política. El ex presidente F. H. Cardoso (FHC) vio la oportunidad para hacer la proposición de que Lula desestime su propia reelección, en 2006, a cambio de ponerles un freno a las investigaciones. Detrás de la propuesta, un sector del gobierno de Bush creyó ver la posibilidad de provocar un giro en la política de Brasil con Venezuela y avanzar en la desestabilización de Hugo Chávez. Pero el conjunto de los capitalistas y

[187] OLIVEIRA, Ribamar. Caixa 2. *O Estado de S. Paulo*, 25 de julio de 2005.

del imperialismo no lo veía de la misma manera, y temía que una caída de Lula provocase la desestabilización, sí, pero de Brasil. El activo más importante con que contaba Lula, frente al capital, era haber tenido éxito en desmovilizar al movimiento obrero, paralizar al movimiento campesino, fragmentar a la izquierda y dejar el campo libre para un gigantesco programa de austeridad contra las masas.

No hizo falta ser perspicaz para comprender que "el PT es el epicentro de la crisis política que sacude al gobierno del presidente Lula".[188] La caída de la dirección petista dio lugar a un golpe que, por el papel del PT en el gobierno, fue el equivalente de un golpe de estado. Lula intervino personalmente para que fuese nombrado presidente del partido Tarso Genro, ex ministro de educación, pasando por encima del reglamento partidario, que prevé en ese caso la asunción de un vice-presidente (Marta Suplicy o Valter Pomar, en este caso). Los representantes de la "izquierda petista" se retiraron de la reunión de la Dirección Nacional cuando fue anunciado el nombre del nuevo presidente.

Dentro de la burocracia petista, de todos modos, la situación era de implosión. Una parte de la bancada parlamentaria desobedeció la orden de bloquear la conformación de una CPI en el Congreso. Se proyecta la perspectiva de un gobierno de Lula cada vez más distante de su propio partido. El gerente de los fondos de pensión, Luiz Gushiken, había sugerido en la Dirección Nacional del PT que Lula saliese del PT y gobernase como "sin partido", para ampliar su margen de maniobra. La descomposición del PT y de su gobierno fondomonetarista se impone a todos los protagonistas de la crisis.

Dirceu era agente de la gran burguesía y los monopolios que reclamaban una mayor desvalorización del real. Palocci, "blindado", es un agente del gran capital financiero internacional. Según el analista Tarcísio Holanda, existía la posibilidad de *impeachment* del presidente, y "el PSDB espera que Lula llegue al final sangrando de tal modo que desista de la intención de luchar por la reelección". La alternativa "sería construir una candidatura capaz de garantizar la continuidad del programa petista: el nombre contemplado sería el de Antonio Palocci, cuya sensatez y equilibrio son reconocidos hasta por la oposición".[189]

Para evitarlo, lo que quedó del gobierno de Lula (con la presencia cada vez más importante del derechista PMDB) intentó imprimir un rumbo semejante, procurando sellar alianzas con la Fiesp (principal central patronal) y llegando a enarbolar el plan de Delfim Netto, ex ministro de Economía de la dictadura militar, de "déficit nominal cero", que elevaría sin techo previsible el superávit primario, transformando el Estado brasileño en un rehén directo del capital financiero internacional, y de las tasas de interés fijadas por la FED (Banco Central) de los EEUU.

La política de ajsute fiscal y supeávit primario record, sin emabrgo, no había producido una reducción sustancial de la deuda externa:

El Campo Mayoritario pensó en postergar las elecciones internas del PT, previstas para mediados de septiembre de 2005. En caso de victoria de la izquierda, Lula, presionado de todos los lados, podría pensar en salir del PT y buscar otro partido, o quedarse sin partido hasta cerca de las elecciones de 2006.

La CPI era un mecanismo para contener la crisis política del gobierno Lula y escamotear el verdadero carácter del acuerdo entre los partidos burgueses. Una farsa montada por los partidos de los empresarios y banqueros en la cual las mismas personas que estaban recibiendo el "mensualazo" de Marcos Valério en el Banco Rural, se

[188] *Valor Econômico*, San Pablo, 1 de Julio de 2005.

[189] *Diário do Nordeste*, 13 de julio de 2005.

colocaban en la posición de jueces de los que estaban juntos en el mismo esquema. El esquema de corrupción utilizado por el PT era la continuación de la corrupción montada por el PSDB y los viejos buitres de la política burguesa. En realidad, era su versión modernizada, pues, mientras el derechista FHC (predecesor de Lula) pagaba los servicios de los deputados en cada votación (enmienda de la reelección; Enmienda Constitucional n. 20, de reforma de la previsión social) como trabajo por piezas (o a destajo), el gobierno del PT instituyó, con el mismo fin y con el mensualazo, la corrupción "asalariada" de los "representantes del pueblo".

El Supremo Tribunal Federal, las Comisiones de Ética, las CPIs, el Fiscal General da República, se transformaron en negociadores de un *acordão* (acuerdazo) en el Congreso Nacional, para librar de la destitución o la cárcel a los envueltos en las investigaciones sobre corrupción, principalmente Lula: la burguesía procuraba "blindarlo". El "mercado" amaba a "Lulinha": "Con críticas de la izquierda, Lula es festejado en el mercado. En el *site* de la *Bloomberg*, se destacó "*o maior salto no mundo*", dado por las acciones (títulos) brasileños; "la expectativa es que la investigación no alcanzará a Lula o Palocci". Para el estratega del Barclays Capital: - "Si él (Lula) fue afectado, el ministro está mas fuerte como principal consejero de Lula". Y del analista del UBS: "Antes, el mercado se preocupaba de que Lula llegase al poder. Ahora, se preocupa si él sale".[190] Como dijo Paul Krugman, "al mercado no le gustaría que esto acabase".[191]

Brasil batió el record de pago de intereses a los banqueros en el primer semestre de 2005. Fueron R$ 80 mil millones 120 millones, el mayor monto semestral registrado por el Banco Central desde el inicio de la serie histórica, en 1991. La economía hecha por el sector público (Unión, Estados, municipios y empresas estatales) también fue record (sumó R$ 60 mil millones). Ese monto, el superávit primario, fue totalmente utilizado para pagar la cuenta de intereses de la deuda. Faltaban, sin embargo, todavía, poco más de R$ 20 mil millones para completar el pago anual de intereses.[192] Ningún capitalista quería el fin de un gobierno que conseguía desviar R$ 10 mil millones por mes del Tesoro público para pagar los intereses de la deuda, correspondientes a 6,43 % del PIB de Brasil.

Cuanto más aumentaba esa sangría de los recursos públicos, más aumentaba la deuda pública, las tasas de interés y las coimas. En 2004, el superávit primario de R$ 81 mil millones (4,6% do PIB) no fue suficiente para pagar los intereses de la deuda pública, de R$ 128 mil millones. El Banco Central contrató entonces préstamos por otros R$ 47 mil millones: para vender en el "mercado" sus nuevos títulos aumentó la tasa básica de interés (llamada tasa *Selic*; la del Brasil es la más alta del planeta, 13% real) aumentando así el monto de la deuda y los intereses adeudados. Las elevadas tasas de interés practicadas en Brasil elevaron en aproximadamente R$ 67 mil millones el endeudamiento del gobierno federal a lo largo del primer semestre de 2005. En el mes de junio, la deuda contraída por el Tesoro Nacional y el Banco Central, por medio de la emisión de títulos, sumaba R $ 905,51 mil millones, un récord. 56,6% de esos papeles corregidos por la tasa Selic, fijada por el Banco Central en 19,75% anual, la más elevada desde 2003.

La propuesta de déficit nominal cero significaba que el superávit primario debería subir hasta aproximadamente 10 % do PIB. Fue lanzada por Delfim Netto: se llegó a plantear una invitación para que el ex ministro de Economía de la dictadura militar ocupase el

[190] *Folha de S. Paulo*, 29 de julio de 2005.

[191] *Idem*, 31 de julio de 2005.

[192] *O Estado de S. Paulo*, 30 de julio de 2005.

Ministerio de Planeamiento. Con la crisis del régimen político, se obviaban los actos criminales de los "representantes públicos", en nombre de un interés más grande: "Con las instituciones políticas debilitadas y en ausencia de una fuerza que se destaque por la credibilidad y capacidad, el salvavidas de salvación del momento parece ser lo que se llama "partido de la economía" – aquel en el cual, bajo el manto de la gestión técnica, disputas político-partidarias se disuelven en nombre de un interés mayor".[193] El programa del "partido de la economía", se resumía a la destrucción de las condiciones de vida de la población trabajadora y la fragmentación de la unidad nacional.

La Iglesia "progresista", la burocracia de la Central Única de los Trabajadores (CUT), la dirección de los Sin Tierra (MST) y de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) publicaron una *Carta al Pueblo Brasileño* para denunciar el "golpe de la derecha" contra Lula, que se escondería bajo el disfraz de la campaña contra la corrupción. La *Carta...* convocaba a "defender al gobierno" que había reforzado la presencia de esa misma derecha en el gabinete y reafirmado la política fondomonetarista. Con la crisis, la política de desgaste de la militancia popular alcanzó su ápice. La *Carta...* se pronunciaba "contra la desestabilización política del gobierno y contra la corrupción: por cambios en la política económica, por la prioridad a los derechos sociales", y llevaba las firmas de la CUT, del MST, de la UNE, de la CMP, además de decenas de ONG y otros "movimientos sociales".

En el medio de la crisis, el gobierno de Lula trató de "estabilizarse", abriéndose más para la derecha, y "blindando" la política económica a través del refuerzo ("blindaje") de su principal representante, Palocci. Ese era el rumbo del gobierno: la defensa del gobierno conducía a los "movimientos sociales" a tornarse cómplices de la orientación neoliberal y derechista, que promovía la corrupción que se declaraba querer combatir. En verdad, la propia corrupción es un producto de esa orientación, pues es el único método posible para gobernar con los representantes del gran capital internacional y nacional, bajo las recetas del FMI. Defender el gobierno de una supuesta "c0onspiración de derecha", en nombre de un "proyecto de cambio", significaba olvidar que el gobierno de Lula encabezaba, no un proyecto de cambio progresivo, sino de regresión social e histórica de Brasil.

Los cambios que introdujo Lula en el gobierno reforzaron al ala que representaba las posiciones del FMI y de los grandes bancos internacionales. El gobierno de Brasil era más que un rehén. El sostenimiento de la deuda pública dependía cada vez más del ingreso de capitales. Brasil no gozaba de los beneficios de un *default*, como Argetina, por eso continuó pagando las viejas tasas de interés, mayores que las que pagaba Argentina, y que crecían todavía más en dólares como consecuencia de la revaluación de la moneda brasileña.

¿Y la izquierda del partido? Sus profundos lazos con la administración directa e indirecta del Estado; el miedo de perder las posiciones y privilegios parlamentarios; la ausencia de programa, mas allá de la retórica moralizante y la defensa de medidas desarrollistas burguesas, llevaron a la izquierda petista al impasse, sufriendo ahora las secuelas de la revelación de la corrupción. Optó por la defensa del gobierno de Lula, contra la "derecha", planteándose como alternativa "moral" dentro del partido, con vista a obtener mejores posiciones para la disputa electoral de 2006. En su documento dirigido a la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, firmado conjuntamente por todas las tendencias de izquierda del partido, se llega a decir que "paradójicamente, nunca un gobierno hizo tanto contra la corrupción".

---

[193] *O Estado de S. Paulo*, 30 de julio de 2005.

El Partido Socialismo y Libertad (PSOL), formado por diputados y una senadora expulsados del PT, y militantes que renunciaron al partido, caracterizó el argumento de una amenaza de golpe como una excusa. Pero el gobierno de colaboración de clases había entrado en una crisis terminal, las masas necesitaban una salida, incluso porque ellas votaron a este gobierno burgués de un partido "de trabajadores". El PSOL planteaba "unificar las luchas que están en curso en este momento con la necesaria lucha por la investigación criteriosa de las denuncias y el castigo de los culpables". El patrimonio principal del PSOL es el carisma de su principal dirigente, Heloisa Helena, a quien las encuestas acreditaban entre el 5% y el 9% de la intención de votos para Presidente. Para concurrir a elecciones, Heloisa debería dejar su banca de senadora, con lo que su partido se quedaría sin su principal expresión parlamentaria.

Las luchas internas en ese partido debilitaron su poder de atracción, no ha desarrollado una alternativa al PT, más allá de reclamar el retorno a sus posiciones originales. La respuesta de que "son todos lo mismo" (derecha y PT) no resolvía nada, incluso porque los trabajadores no ponían en el mismo plano a Lula con la derecha. El planteo del PSOL de unir la lucha por las reivindicaciones populares con la lucha "contra la corrupción y el FMI", con el agregado de votar al PSOL en el 2006, era una evasiva inmovilista.

Algo parecido planteaba el PSTU. En su hoja de junio, defendió "la instalación de la CPI ya, contra las maniobras del gobierno por impedirla". Después de esta confesión de fe parlamentaria, pasó a defender la "prisión y confiscación de los bienes de corruptos y corruptores", y una "investigación independiente, paralela a la de la CPI". O sea, que el problema seria "lavarle la cara" al régimen, utilizando consecuentemente sus propios métodos. En ese marco, el PSTU podría progresar electoralmente, y sobre todo con su propia central sindical y estudiantil, debido a que su actividad se centraba en proponer la ruptura con la CUT y la UNE, creando organizaciones paralelas.

El término de este proceso debería formularse como salida a la crisis abierta en el poder, y por la intervención de las propias masas. Se había agotado una experiencia de más de dos décadas. La burguesía quería usar la crisis del gobierno del PT para desmoralizar a las masas y sus organizaciones completamente. Era necesaria una política propia de los trabajadores y una línea de acción: que el PT rompa con la burguesía, expulse a los corruptos y fondomonetaristas, eche a los ministros capitalistas y del FMI, y adopte un plan de reorganización bajo la dirección de la clase obrera. Para viabilizar estos propósitos era necesario disolver el congreso corrupto no representativo y plantear la convocatoria a una Constituyente impuesta por la movilización popular. A la izquierda brasileña se le presentó la oportunidad de abrir una gran deliberación política sobre la salida a la actual situación, un debate que replantease los términos en que los trabajadores y explotados pueden desarrollar una alternativa propia, independiente de la burguesía y sus representantes.

Se verificó, sin embargo, la orfandad de la izquierda frente a la crisis política. El desmoronamiento del PT no podía reducirse a una caracterización institucional o ideológica, puesto que planteó una amenaza al desarrollo de todo el movimiento obrero, campesino y popular de los últimos veinte años. Era necesario ofrecer una salida en función de esta amenaza, y no en función de un rescate hipotético del PT. El PT capituló mucho antes de gobernar, frente a los límites insalvables del Estado burgués. Pero esos límites no se superan con un giro en la política económica, como postuló la izquierda del PT, que en la práctica significaría devaluación y *default*, o sea una catástrofe para las masas. Tampoco lo superaba una "investigación criteriosa", a cargo de un parlamento de ladrones, combinada con 'las luchas'.

Para gobernar, la clase obrera debe romper, primero, cualquier sometimiento a la burguesía y, segundo, quebrar el aparato de Estado que se opone a la dominación de los trabajadores. En la situación concreta que enfrentaban los trabajadores en Brasil, esto significaba expulsar a los ministros capitalistas del gobierno, lo que incluye a todos los que se transformaron en sus agentes directos, y segundo, disolver el Congreso, el cual no representaba el mandato popular que llevó a Lula a la presidencia y era un obstáculo a cualquier gobierno popular. Estas consignas ofrecían una salida popular a la crisis política y ponían de manifiesto una estrategia, a saber, que el agotamiento de las ilusiones en el PT debía llevar a un gobierno obrero y campesino.

En América Latina, el gobierno de Lula (a través de Petrobrás) fue el principal "bombero" de la insurgencia de masas contra las multinacionales en Bolivia, así como de la resistencia antiimperialista en Venezuela, sin hablar de su fallido papel de sustituto de las tropas colonialistas yanquis en Haití. En retribución, el Parlamento paraguayo votó el permiso de asentamiento de tropas norteamericanas en la región de la Triple Frontera: Brasil quedaría rodeado de tropas de los EEUU, por el Sur (Paraguay) y por el Norte (Plan Colombia).

Las corrientes políticas que hicieron de furgón de cola del fraude petista, negándose a caracterizar el frente de colaboración de clases que había armado con la patronal y el imperialismo, y que sólo dejaron el partido cuando fueron echados, no consiguió trazar una línea de acción concreta frente a la crisis, que la burguesía quiso hacer desembocar en una definitiva desmoralización de las masas y de sus organizaciones. En Brasil se creó una crisis de poder, frente a la cual sólo se movilizó la burguesía.

Al final del primer semestre de 2005, la capacidad media de compra de los trabajadores creció apenas 2-3%, en relación al año anterior, manteniéndose 25-30% debajo de la de 1997. El desempleo, en San Pablo, después de elevarse a 20,7% en abril de 2004, reculó hasta 16,7% en enero de 2005, para elevarse nuevamente hasta 17,3% en marzo. Lo que mantuvo la capacidad de pago del Brasil, el incremento sistemático de las exportaciones, además del ingreso de capital especulativo, sufrió la presión conjunta de la revalorización y la dinámica más lenta del comercio mundial.[194] Con la "apertura unilateral", acentuada bajo Lula, las tarifas de importación brasileñas cayeron de 55% a 12%, en promedio.

A esto se agregó el cuello de botella de la falta de infraestructura para las exportaciones, agravada bajo el gobierno Lula, en el que las inversiones llegaron – política de beneficio del capital financiero mediante – a su nivel más bajo de las últimas tres décadas: "Brasil ocupa la 90ª posición entre 180 países, con 202 km de caminos por 1000 km2 de área. Seria necesario construir 9800 km de caminos por año, durante 30 años, para alcanzar el promedio de América Latina".[195] Una crisis económica comprometería la capacidad de pago del Brasil, plantearía una fuga de capitales y un *default*, transformando la crisis institucional en catástrofe, abriendo la posibilidad de una crisis revolucionaria.

En 2006, la campaña electoral comenzó con una naturaleza claramente plebiscitaria de la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato declarado del capital financiero nacional e internacional. La candidatura de la derecha (Geraldo Alckmin, PSDB, gobernador de San Pablo) poseía más la intención de "marcar espacio" para una crisis o desgaste futuro del gobierno de Lula. La crisis política vivida durante siete meses del 2005, con la revelación de la corrupción imperante en toda la bancada parlamentaria y

[194] JANK, Marcos S. O vôo de galinha do comércio externo. *O Estado de S. Paulo*, 7 de junio de 2005.

[195] LANG, Wilson. Os holofotes sobre a corrupção e o apagão da infra-estrutura. *Folha de S. Paulo*, 27 de julio de 2005.

el alto escalón del PT (y aliados), fue “cerrada” con la intervención directa de los representantes del imperialismo norteamericano: “Los problemas enfrentados por el presidente Lula traen perspectivas negativas para el avance del libre mercado en América Latina, y para los intereses de los EEUU en la región”, advirtió en agosto de 2005 *The Wall Street Journal*.[196] En octubre y noviembre de 2005 el representante del Tesoro yanqui (John Snow) y el propio Bush visitaron Brasil y se pronunciaron claramente en defensa del gobierno Lula.

En sendos editoriales, los principales voceros burgueses también se pronunciaron en ese sentido: “*Si no echan juicio en su guerra insana por el poder, el PT y el PSDB caminarán juntos hacia el cadalso*”;[197] “*Un viraje en la política económica, una ruptura con la responsabilidad fiscal, y a favor del aumento de gastos en el año electoral de 2006, seria un deplorable retroceso*”.[198] Con semejante coro, la filósofa “marxista” oficial del PT, Marilena Chauí, creyó llegado el momento de romper “corajudamente” el criticado “silencio de los intelectuales”, para, seis meses después del inicio de la crisis, declarar que ésta no pasaba de una farsa montada por los medios.

El propio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, afirmó que esperaba que Lula no renunciase, porque "eso sería pésimo para todos".[199] Cardoso no quería el fin del PT: "Esta era una crisis que empezó en el PT y ahora llega al gobierno. Pero lo más grave no es el presidente, porque éste se cambia con elecciones. Lo grave es qué va a pasar con el PT, que forma parte del sistema político de Brasil. Aún es temprano para evaluar si este partido continuará en el futuro como un articulador de sectores importantes de la sociedad o si ya perdió esa capacidad. Esto me preocupa más que el año y medio que le resta al gobierno. Un año pasa rápido".

Cardoso confirmó que había una crisis de poder: "Nuestro sistema de organización del poder está basado en dos posibilidades: PT y PSDB. Alrededor de esos dos partidos se agrupan las otras fuerzas y es eso lo que permite la alternancia. Si el PT pierde esa capacidad como polo de la alternancia, no hay partidos que puedan llenar su espacio. Puede abrirse entonces un camino populista en función de eso y de la pobreza, o porque no hay condiciones para satisfacer a todo el mundo". O sea, que el PT era y es un funcional "polo de alternancia" para la derecha.

---

[196] *The Wall Street Journal*, Nueva York, 12 de agosto de 2005.

[197] *O Globo*, Rio de Janeiro, 18 de noviembre de 2005.

[198] *Folha de S. Paulo*, 19 de noviembre de 2005.

[199] *Clarín*, Buenos Aires, 31 de agosto de 2005.

22. LA CRISIS BRASILEÑA SE CIERRA... Y SE ABRE

La destitución, primero del gabinete, y después (en diciembre de 2005) de la propia Cámara de Diputados, del ex "hombre fuerte" del gobierno y el PT, José Dirceu, tuvo el claro objetivo de cerrar la crisis a través de un "chivo expiatorio". En su momento, el propio Palocci fue considerado como reemplazante del derrumbado José Dirceu en la coordinación política del gobierno; lo que no se concretó para no sembrar dudas sobre la continuidad de la política económica. Palocci, "blindado", era un agente del gran capital financiero internacional. Fue uno de los ministros denunciados por el diputado Roberto Jefferson en el festival de corrupción: fueron los propios corruptos los que decidieron los cambios en el equipo de gobierno de Lula.

A mediados de junio de 2005, una reunión de los principales banqueros del país y de la "oposición" (PSDB) concordó en que las denuncias de corrupción debían ser controladas, para no "afectar la economía": "Los inversores no ven claramente cuál sería el rumbo abierto por los acontecimientos", dijo el *Financial Times*, portavoz del gran capital financiero internacional. Todos los elementos que configuraron la crisis, sin embargo se mantienen en pie, como una espada de Damocles que pesa sobre Lula, y que lo transforman, en caso de victoria electoral, en un títere del gran capital. El presidente de la Orden de Abogados del Brasil, Roberto Busato, declaró sin ambages que "Lula sabia exactamente de todo el esquema [de corrupción] y estaba de acuerdo con su existencia".[200]

Y se supo que "la lucha de tres fondos de pensión con el banquero Daniel Dantas [del Banco *Opportunity*, uno de los grandes agentes de las privatizaciones efectuadas bajo el gobierno derechista de F. H. Cardoso] dividió al gobierno Lula, y estuvo en el origen de los escándalos que provocaron la crisis política".[201] La disputa era por el control da Brasil Telecom, y enfrentó a los tres principales fondos de pensión vinculados a empresas estatales (Previ, Petros y Funcef, del Banco do Brasil, Petrobrás y Caja Económica Federal, respectivamente), representados por el ministro Luiz Gushiken, y los grupos *Opportunity*, *Citigroup* y Telecom Italia, representados por Dirceu.

O sea, que se trató no sólo de una disputa inter-burguesa, sino en el interior del propio capital financiero, en la que fue (provisoriamente) victorioso el frente de los fondos de pensión, otro de los grandes beneficiarios del proceso privatizador de la década de 1990 (y que pertenece al grupo de los mayores inversores institucionales de la bicicleta financiera internacional).[202]

Con base en ello se llegó a un precario arreglo político para rescatar al gobierno de Lula, que incluyó la victoria de Ricardo Berzoini (candidato de la dirección partidaria "lulista") en las elecciones internas del PT; la elección de Aldo Rebelo (del PC do B, agente de Lula) a la presidencia de la Cámara de Diputados; el entierro melancólico de las CPIs (comisiones parlamentarias de investigación) dedicadas a investigar los esquemas de corrupción; la confirmación de la política económica y de su ministro, Antonio Palocci –respaldado inclusive por la oposición derechista–, también acusado de

---

[200] *Folha de S. Paulo*, 26 de diciembre de 2005.

[201] *Valor Econômico*, San Pablo, 14 de septiembre de 2005.

[202] El gobierno Lula, con la Reforma de la Previsión Social de 2003, tornó posible la creación de los "fondos cerrados" de jubilación en la mayoría de los sectores, a ejemplo de los existentes en la Petrobrás y el Banco del Brasil, beneficiando a ex burócratas sindicales que aspiran a transformarse en burgueses a través de la gestión de los fondos (principalmente los agrupados en la consultora Globalprev, atrincherados en el Ministerio de la Comunicación, ejercido por el propio ex *pelego* bancario Luiz Gushiken).

liderar diversos esquemas de corrupción en la ciudad de la que fuera intendente, Ribeirão Preto. El acuerdo no habría de durar mucho.

Las coimas y chanchullos que vaciaron al PT fueron la consecuencia de un método de gobierno: la coalición con una derecha de ladrones.[203] El PT participó de una colaboración abierta con el capital y el imperialismo, con el argumento de que evitaba el colapso social y hacia viable su propia gestión. El presidente del Citibank explicó que cuando Lula aceptó un acuerdo de conjunto con la banca internacional, ésta le renovó los créditos de comercio exterior, cuya suspensión habría provocado un colapso en Brasil.[204]

La nueva dirección petista, electa en elecciones internas al final de 2005, en un acuerdo de mayoritarios e "izquierdistas" opositores, tentando salvar un mínimo de autonomía para un aparato político cada vez más vacío, emitió el 11 de noviembre de 2005 un pronunciamiento contra el ajuste fiscal y la política económica. La nueva coordinadora política del gobierno, substituta del defenestrado "Zé" Dirceu, Dilma Rousseff, calificó el "ajuste fiscal de largo plazo" de Palocci de "rudimentario y suicida", pidiendo que se abriesen un poco las canillas del gasto estatal, y abriendo una crisis de gabinete en la que, inicialmente, el propio Lula la apoyó. A lo largo de una semana, Palocci pendió de un hilo, lo que puso en peligro la propia estabilidad política del gobierno.

La corrupción no definió el carácter de la crisis, porque del lado "opositor" a Lula había un número mayor de corruptos que en el oficialismo. La crisis política fue desencadenada como consecuencia de la paralización de la reforma ministerial que Lula debía haber implementado en marzo de 2005 para incorporar nuevos partidos y sectores al gobierno y conformar de ese modo una mayoría legislativa estable. El PT no solamente había llegado al gobierno en el marco de un frente burgués sino que no podía gobernar sin la ampliación creciente de su frente con la burguesía, es decir sin producir el vaciamiento político completo del gobierno "petista".

Se desarrolló, entonces, una crisis política enfrentando a dos polos de la burguesía. La clase capitalista no se conformaba con la política fondomonetarista y antiobrera del gobierno encabezado por el PT; reclamaba también el control institucional del gobierno y el fin de cualquier pretensión de autonomía política por parte del aparato dirigente del PT: se había puesto en marcha un operativo para condicionar la tentativa de reelección de Lula en 2006.

Con la crisis, la desintegración del PT se hizo irrevocable. El resultado de la interna partidaria provocó la salida en masa de numerosos cuadros, incluidos más de una decena de diputados y senadores que, casi todos, fueron a engrosar las filas del PSOL. Lula no votó, lo que constituyó claramente un intento de quedar con las manos libres para llegar a cualquier clase de arreglo con la oposición en el parlamento sin condicionamientos del PT. Cargado de deudas impagables, contraídas para financiar "por izquierda" las campañas del partido y el bolsillo de sus dirigentes, el PT habría sido una creación oportunista construida en torno a la figura de Lula, no en torno a un programa y a cuadros formados por ese programa.

El PT se había convertido desde hace mucho en un grupo de interés, como lo prueba su acervo de funcionarios públicos: más de 400 intendentes, 3.600 "diputados" municipales (*vereadores*), tres gobernadores, 90 diputados nacionales y más de 150 diputados estaduales (provinciales), todos con su cohorte de asesores y secretarios, sin

[203] En un país en que, según levantamientos oficiales, 58% del PIB (!) corre "en negro" (Ver: LINCE, Leo. Caixa dois, fome zero. *Correio da Cidadania*, San Pablo, 3 de septiembre de 2005.

[204] *Financial Times*, Londres, 24 de julio de 2004.

hablar del aparato del gobierno federal (Lula) y sus miles de “cargos de confianza”. El aparato sindical (CUT) tiene más de 100 mil personas “liberadas” (del trabajo) y más de 20 mil directamente empleadas. La máquina partidaria del PT, a su vez, emplea más de 50 mil funcionarios. Un verdadero ejército de “dependientes”. El desmoronamiento del PT debe medirse a la escala de una construcción política de más de un cuarto de siglo; toda ella dirigida a preparar el acceso de una representación de los explotados al gobierno del Estado capitalista, con la pretensión de dirigirlo mediante una inyección de moral y reglas éticas. Acabó en un desastre cuando apenas pasaron poco más de dos años.

La izquierda brasileña no consiguió caracterizar la crisis política como un enfrentamiento entre dos polos de la burguesía. Una intervención independiente de las masas sólo podía ser preparada y organizada señalando el camino para derrotar al principal enemigo, la derecha parlamentaria burguesa, por medio de la movilización popular y de una delimitación total y completa del aparato dirigente del PT y del gobierno burgués de Lula. La desintegración del PT no produjo una modificación de los marcos ideológicos y programáticos que el PT dejó establecidos en Brasil al tiempo de su fundación, en especial cuando se acentuó el reflujo de las luchas populares, aunque ocurriesen importantes luchas, lamentablemente aisladas (bancarios, metalúrgicos de Volkswagen, empleados públicos federales, profesores universitarios). Debido a la crisis, se profundizó también la política de cooptación y colaboración de clases. La quiebra del PT no produjo una ruptura, sino una continuidad, o sea, un intento de salvar a las perspectivas democratizantes de su propio derrumbe. La importancia de la crisis es que abría un período de efervescencia entre los sectores politizados de la intelectualidad y entre los obreros más avanzados.

El consenso provisorio en torno de Lula reflejó un acuerdo en el interior del capital financiero, en especial en sus sectores más concentrados. No era para menos. En 2003-2004, Lula – Palocci pagaron casi R$ 300 mil millones a los tenedores de la deuda pública (mientras aplicaban menos de mil millones para la reforma agraria, o cinco mil millones para la manutención de las universidades públicas) gracias a un superávit fiscal primario de 7% del PIB (el FMI le exigía 3,75%, y el gobierno había fijado una meta de 4,25%) que, aun así, no contuvo el aumento del déficit nominal (que incluye el pago de los intereses de la deuda) ni de la propia deuda, que estaba en R$ 900 mil millones en diciembre del 2003, y alcanzó el trillón de reales en 2006. El gobierno Lula reforzó su alianza con los especuladores financieros internacionales, como probó la masiva suscripción de un bono en reales en el mercado internacional.

La fiesta de los acreedores, en primer lugar los bancos “nacionales”, fue total. El banco Itaú anunció, en mediados de 2005, el mayor beneficio de la historia bancaria nacional para un semestre: casi R$ 2.500 millones; la semana siguiente, el Bradesco le mató el record, anunciando lucros superiores a R$ 2.600 millones. ¿Y los industriales (que, de tiempos en tiempos, emiten algún graznido contra los altos intereses financieros)? La Vale do Rio Doce (CVRD), principal empresa privada, anunció, para el mismo semestre, lucros de... R$ 5.100 millones. La Petrobrás, “estatal” semi-privatizada y que cotiza en Bolsa... R$ 9.900 millones. Allí, y en los cofres de los acreedores internacionales, estaba el botín del saqueo del Estado, también alimentado por la “renuncia fiscal” (subsidios) estatales a los capitalistas, que en 2005 creció 12%, alcanzando el record histórico de R$ 27 mil millones. En la base del edificio se encuentra la superexplotación de los trabajadores: el ingreso de los asalariados cayó 13% en 2004, comparado con 2002; es casi R$ 123 menor, en términos reales, de lo

que era al final de aquel año.[205] Y el empobrecimiento general del país: bajo el gobierno Lula, el PIB ha crecido en promedio2,5% anual, abajo por lo tanto del crecimiento demográfico de la población.

La reducción del "riesgo Brasil" y la baja del dólar no fueron un reflejo de "estabilidad", sino de la crisis mundial, pues la recesión y la guerra de Irak promovieron un movimiento especulativo de capitales árabes hacia los títulos de Brasil. El gobierno volvió a tomar créditos externos pagando cuatro veces más que en el mercado norteamericano. Un freno de la especulación internacional con la deuda brasileña provocaría una quiebra como la de Argentina en diciembre de 2001. Como los precios internacionales, altos, y las tasas de interés internacionales, bajas, siguieron ofreciendo la posibilidad de obtener beneficios extraordinarios, la tendencia a la devaluación y al “desarrollismo” no ganó fuerza en el seno de la clase capitalista.

En 2006, el gobierno pagó de modo anticipado US$ 15,5 mil millones al FMI. Este pago anticipado de parte de la deuda externa del Brasil debe ser visto conjuntamente con la mayor tasa de interés real del mundo, con el superávit primario record de 4,97% del PIB y con el superávit comercial de US$ 44 mil millones de la balanza comercial en 2005. Todos estos números no son bases de soberanía nacional del país, sino de su recolonización. Pocos días después hubo el lanzamiento anticipado, en 2005, de US$ 3,5 mil millones en títulos de la deuda externa que sólo estaban previstos para 2006. En 2005 fueron hechas emisiones de títulos de la deuda en el exterior por US$ 8 mil millones, consideradas un gran éxito.

Las emisiones fueron realizadas con tasas de interés entre 8% a 12,75% anual. Como el real se desvalorizó apenas 2,4% frente al dólar entre septiembre de 2005 y enero de 2006, fue garantizado un rendimiento de cerca de 10% anual, en dólares. Y como el real se valorizó 13,4% frente al dólar en 2005, los títulos de la deuda interna garantizaron un rendimiento de nada menos que 35% anual para los inversores extranjeros. Comparándose el cronograma inicial de pagos al FMI con la anunciada economía de US$ 900 millones, de intereses “ahorrados” con el anticipo, verificamos que el costo financiero de la deuda con el FMI era de cerca de 4% anual.

Por lo tanto, Brasil anticipó y acelero su endeudamiento en títulos de la deuda externa al costo de 10% anual en dólares, aumento su endeudamiento “interno” al costo real de 13% anual (siendo que los inversores externos ganaron 35%) y anticipó el pago de deudas al FMI, cuyo costo era de 4% anual. Un gran negocio (para el capital financiero internacional). Y el FMI pasó a exigir el fin del “crédito dirigido”, préstamos con intereses menores para la pequeña agricultura y la compra de casas. Rodrigo Rato, director del FMI, trató del asunto directamente con Lula: que los préstamos con base en fondos de contribuciones públicas fuesen prestados directamente por bancos comerciales. El sector económico del gobierno anticipó su acuerdo. Carlos Lessa, presidente del BNDES (Banco de Desarrollo), que criticó la idea, fue derribado por Lula.[206]

Y la fiesta continuó. Los inversores extranjeros que deseasen entrar en el mercado brasileño quedarían exentos del 15% del impuesto a los réditos al invertir en deuda pública federal. Las reacciones fueron “muy positivas”: la Bolsa subió notablemente y el dólar bajó a su mínimo desde 2001. La medida hará perder al erario público 153,3 millones de reales en 2006; 165,2 millones en 2007 y 179,2 millones en e12008. A pesar de la euforia “algunos analistas económicos brasileños dieron un toque de

[205] FALCÃO, Luiz. Trabalhador brasileiro está mais pobre. *A Verdade,* Belo Horizonte, enero de 2006.

[206] TORRES FREIRE, Vinicius. A nova idéia fixa do FMI. *Folha de S. Paulo*, 12 de janeiro de 2006.

atención, al recordar que el incentivo a la participación externa en los títulos de la deuda interna trae a la memoria los fantasmas de las crisis de Rusia y Argentina en 1998 y en 2001 respectivamente”, afirmando que "la participación excesiva de los extranjeros en la deuda interna de ambos países alimentó la vulnerabilidad que hizo sucumbir a sus economías cuando los inversores, desconfiados, emprendieron una fuga masiva de capitales".[207] Los “inversores” estaban sin problemas: en 2004, las multinacionales enviaron al exterior, como remesa de lucros US$ 7,6 mil millones, casi 36% más que en 2003. En febrero de 2005, batieron todos los récords precedentes (US$ 1,35 mil millones). [208]

En el crucial capítulo agrario, el gobierno Lula superó todas las expectativas (negativas). En el cuadro de una pseudo-reforma agraria, ha aumentado la concentración de tierras. En un universo de 5 millones de propiedades, 26000 (menos de 1%) detentan 46% de las tierras. En 2006, había 4.600.000 familias sin tierras, 200 mil acampados del MST. Y Lula terminaba su gobierno con una medida inédita: la municipalización del ITR (Impuesto Territorial Rural). El gobierno recogió de ITR apenas R$ 280 millones durante 2004. Eso equivale al Imposto sobre Propiedad Territorial Urbana (IPTU) de apenas un barrio de San Pablo, y es pagado por 270 mil propietarios, que controlan 298 millones de hectáreas: menos de un real por hectárea por año.

El 31 de diciembre de 2005, para entrar en vigor el año fiscal de 2006, Lula promulgó la nueva ley de ITR, que dejó de ser un impuesto para la reforma agraria, para ser un impuesto a ser cobrado, fiscalizado e recogido por las Prefecturas Municipales, que podrán usar el dinero como les parezca. Los latifundistas, eufóricos: pagaban poco, y ahora bastará hacerse amigo del intendente para pagar todavía menos. Habiendo adoptado un programa para promover el agro-negocio (que recibe el 90% de créditos agrícolas) y servir al capital financiero, gastando más en pagos de deuda en un mes que en educación, salud y reforma agraria en un año, financiando la minería y el petróleo, el PT acabó patrocinando la corrupción, la cooptación, el enriquecimiento y el clientelismo.

El perdedor más grande del régimen de Lula ha sido el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), que continuó apoyando al gobierno a pesar de las cifras de activistas campesinos asesinados, de que decenas de miles de ocupantes de tierra han sido forzosamente desahuciados. Durante lo más álgido del escándalo de corrupción, Lula hizo más explícita su unión ampliada con los partidos de la derecha de los terratenientes y especuladores, y el MST se unió a los burócratas cooptados de los sindicatos, organizando una manifestación pro Lula y contra la "desestabilización" y la corrupción. El MST tiene, aun así, más de 40.000 ocupantes de tierras desplazados que se añaden a las 200.000 familias que viven en tiendas de plástico a las orillas de las carreteras.

En América Latina, las tropas brasileñas que encabezaron la “misión” de la ONU en Haití fueron acusadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA de ser cómplices de masacres realizadas por la policía haitiana e incluso de participar activamente en una campaña de terror contra los partidarios del ex presidente Jean-Bertrand Arístide. Entre las acciones denunciadashabía el asesinato de presos políticos en las cárceles, y las razzias en las grandes villas que rodean a la capital, con helicópteros y carros blindados, para “cazar” a los partidarios de Arístide. Se denunció también el funcionamiento de “escuadrones de la muerte”, financiados por los Estados

---

[207] Brasil mima con medidas fiscales a los inversores extranjeros. *El País*, Madrid, 18 de febrero de 2006.

[208] GUEDES, Odilon. Economia no governo Lula: arrocho e concentração. *Correio da Cidadania*, San Pablo, 21 de enero de 2006.

Unidos y que actúan bajo la “cobertura” de las “fuerzas de paz”. El comandante en jefe de las tropas brasileñas de ocupación concluyó suicidándose.

La continuidad del gobierno Lula (no “del PT”) era, para el imperialismo, la garantía de la continuidad de la política económica y, sobre todo, de su política internacional de contención de la revolución y la lucha antiimperialista en América Latina, especialmente en las condiciones creadas por la victoria de Evo Morales en Bolivia, y de crisis general de la política internacional de los EEUU, en especial en Medio Oriente.

La izquierda, ciertamente, criticó “la desindustrialización en curso, hoy somos una economía exportadora de *commodities* y una plataforma de valorización financiera”.[209] Faltó señalar el completo fracaso de esa política para resolver los problemas elementales del equilibrio fiscal del Estado, del continuo y creciente endeudamiento público, como ya fue descrito, y el deterioro general de las cuentas públicas: la deuda del Tesoro Nacional creció, en 2005, de 32,9% hasta 34% del PIB; la del Banco Central, que estaba negativa en 0,5%, fue para 0,2% positivo del PIB; una expansión conjunta, en sólo un año, de 1,7% del PIB, llegando a plantear un “agotamiento del Estado”.[210] O sea, que la política reaccionaria del gobierno Lula, en todos los planos, se insertó en el contexto general de la crisis de la producción capitalista, a escala mundial.

La izquierda del PT, que la primera vuelta de las elecciones internas obtuvo más del 50% de los votos, en sus diversas tendencias (pero parte de ellas se retiraron después del partido) se planteó una perspectiva seguidista, con argumentos cada vez más descabellados. Un dirigente de esa izquierda, Valter Pomar, afirmó en un artículo que: “Consolidar y profundizar el giro a la izquierda en el continente es uno de los motivos por los cuales debemos luchar por un segundo mandato presidencial. Hay otros motivos: lo que hicimos en el gobierno; lo que dejamos de hacer, pero que podremos realizar en un segundo mandato; y, principalmente, la onda reaccionaria que resultaría de una eventual victoria de los partidos neoliberales”. Eso “exigirá una campaña que apueste en la polarización social, política y programática entre el campo democrático y popular, y las fuerzas neoliberales, que trate de la herencia dejada por los gobiernos tucanos [denominación del PSDB, del ex presidente F. H. Cardoso] y conservadores, que ataque las alternativas programáticas presentadas por el PSDB-PFL, que reconozca las realizaciones y los limites del gobierno Lula”.

Encontrar “realizaciones” en el medio de una política declaradamente orientada por el gran capital, y para peor salpicada de corrupción, es como buscar una aguja en un pajar. Y cualquier perspectiva crítica está excluida, pues “un balance completo del gobierno Lula es una tarea para el futuro, sea porque el gobierno todavía no concluyó su mandato; sea porque el ángulo de ese balance dependerá en parte del resultado de la elección de 2006... Este balance deberá tener en cuenta el contexto histórico en que actuamos, marcado por la hegemonía neoliberal, por la crisis del socialismo, por una secular deuda social y democrática, así como por el reflujo de las organizaciones y de la lucha de la clase trabajadora, inclusive desde el punto de vista ideológico... Es preciso reafirmar lo obvio: en un país y en un mundo que siguen bajo la hegemonía del capital financiero, del imperialismo y de las ideas neoliberales, nuestra presencia en el gobierno, con todas sus limitaciones, es objetivamente positiva, porque desplazamos fuerzas políticas y sociales que ocupaban el gobierno durante el *tucanato*, o porque

---

[209] ARANTES, Paulo (entrevista). Governo não será expulso, mas reciclado como sócio menor. *Correio da Cidadania*, San Pablo, 3 de setiembre de 2005.

[210] ROMERO, Cristiano. Esgotamento do Estado entra na agenda. *Valor Econômico*, San Pablo, 8 de febrero de 2006. Los encargos con la deuda pública, que en 2006 suman US$ 65 mil millones, han reducido en 40% el presupuesto federal.

detuvimos o retardamos procesos que estaban en curso en el gobierno anterior (el programa de privatizaciones, la represión a los movimientos sociales, la adhesión acelerada al Alca)”.[211]

El gobierno de Lula ciertamente “desplazó” fuerzas políticas (en crisis) pero lo hizo para servir a las mismas fuerzas (clases) sociales. No revirtió las privatizaciones realizadas, avanzó en otras (remate de las cuencas petroleras, detectadas por la estatal Petrobrás), destrabó las empantanadas negociaciones sobre el ALCA(que no avanzó debido a los acuerdos bilaterales y a la crisis de la política yanqui para el continente) y ciertamente realizó la más profunda privatización de la historia del país, con la Reforma Previsional, que ha puesto al servicio del gran capital la más grande fuente de acumulación de capital privado con base en fondos públicos extraídos del salario de los trabajadores.[212]

La verdad es que nunca hubo un “gobierno del PT”, pues “en el mismo instante en que asumió el poder, Lula impidió al PT ser gobierno. Del PT sólo tuvieron acceso a cargos de gobierno los que renegaron todo señal de petismo y adhirieron a las doctrinas política, económica y administrativa practicadas por el gobierno de la hermandad PSDB/PFL [derecha histórica del Brasil, gobernante hasta el ascenso de Lula]. El gobierno Lula formó su propia hermandad con el PL de Valdemar Costa Neto, el PP malufista, el PTB de Roberto Jefferson [todos corruptos denunciados y condenados], el PDT no-pedetista y la corriente oficialismo eterno del PMDB”.[213]

El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) fue formado por diputados y una senadora (Heloísa Helena) que fueron expulsados del PT cuando se negaron a votar la reforma privatista de las jubilaciones. El PSOL aspiró a un rédito electoral de la crisis. Obtuvo las adhesiones de nuevos parlamentarios afectados por el derrumbe político y moral del PT, incluido un senador que debió renunciar enseguida, luego de que fuera comprobada su propia participación en los esquemas de corrupción de Marcos Valerio. En realidad, el fin de la llamada “verticalización” (que prohibía que partidos enfrentados en las elecciones nacionales se aliasen en las disputas estaduales) en la Cámara de Diputados, contra el voto del PT, en febrero de 2006, planteó la posibilidad de una “pulverización” (multiplicación) de candidaturas presidenciales, favoreciendo al PSOL. Un debate sobre elaboración programática se abrió, en el que no se superó el nivel de un programa “realizable”, basado en el corte de las tasas de interés y la inducción a la inversión productiva, acompañada de medidas “sociales”.

Una perspectiva de crisis en el PSOL se abrió alrededor de la cuestión de las alianzas, pues coexisten en el partido desde sectores partidarios de la alianzas políticas más diversas y opuestas.[214] El PSOL carecía, hasta 2006, de una real estructura partidaria, y

---

[211] POMAR, Valter. *Mesmo que Tardia,* texto inédito (2006).

[212] La reforma sólo benefició al gran capital financiero, al que se le ha abierto el gigantesco filón de los fondos jubilatorios, sin resolver ninguno de los problemas económicos alegados por el gobierno: supuestamente ahorraría R$ 49 mil millones, en los próximos 20 años, mientras el gobierno alega un supuesto déficit previsional de R$ 70 mil millones... anuales (sin hablar de los R$ R$ 150 mil millones anuales en concepto de pago de la deuda pública). Además, el gobierno abrió el bolso presupuestario (en R$ 2 mil millones) para comprar los votos de la derecha, mayoritaria en la Cámara, para obtener la aprobación de la ley

[213] FREITAS, Janio de. Aniversário da queda. *Folha de S. Paulo*, 14 de febrero de 2006.

[214] En el Foro Social Mundial de Caracas, el PSOL de RS (Rio Grande do Sul), influenciado por una de las fracciones del MST argentino, distribuyó una declaración proclamándose “bolivariano”, y defendiendo formulaciones como “oponerse al intercambio desigual, fortaleciendo formas de complementación económica que combatan la subordinación del valor de uso al valor de cambio”,

actuaba como acuerdo de tendencias, cada una con sus propias publicaciones (y ninguna publicación oficial del partido). El PSOL no es el receptáculo de la vanguardia obrera clasista, pero su eventual crecimiento electoral agudizará su potencial crisis interna.

El PSTU (LIT), a su vez, presentó un recurso al Ministerio Público (fiscalía del Estado) para investigar la corrupción gubernamental en la perspectiva de producir un juicio político contra Lula. Dijo que había que "concientizar de que Lula es el responsable de la corrupción": esto colocó al PSTU a remolque de la ofensiva del polo capitalista de copamiento del gobierno y de la demagogia de la conspiración golpista del Congreso. En junio de 2005, el PSTU defendió el planteo de "instalación de la CPI ya, contra las maniobras del gobierno por impedirla". Después pasó a defender la "prisión y confiscación de los bienes de corruptos y corruptores", y una "investigación independiente, paralela a la de la CPI". Posteriormente, comenzó a plantear "¡Fuera todos!",[215] ignorando su caracterización anterior de que "la juventud y los trabajadores creen todavía en Lula".

Ninguna de las dos principales fracciones de la izquierda fuera del PT consiguió remontar la retórica de la corrupción y de la crítica "desarrollista" al "ajuste". Ambas impulsaron, en agosto (a través de CONLUTAS, proto - central sindical liderada por el PSTU) y después en octubre de 2005 (a través de la Asamblea Popular de Izquierda, vinculada al PSOL, principalmente) movilizaciones en Brasilia, de oposición al gobierno, de carácter minoritario y claramente propagandístico (esto es, no insertas en un plan de lucha y una perspectiva de unificación y movilización independientes del conjunto de los explotados).

En abril de 2006, finalmente, la misma derecha que lo aplaudió durante 39 meses, lo bajó a Antonio Palocci, el ministro de Economía del gobierno de Lula, que el propio presidente había definido como el hombre más importante de su gobierno. Para hacerlo, le bastó levantar la tapa de la última de sus numerosas trapisondas, con la publicación, por la revista *Época* (vinculada a la TV Globo), de un simple saldo bancario, obtenido ilegalmente por un hombre del PT, presidente del principal banco público del país, con el objetivo de perjudicar a un empleado de la casa "clandestina" en Brasilia, donde Palocci y sus compinches habían instalado un escritorio de venta de influencia y negocios estatales, y de celebración de bacanales (el detalle no es secundario, porque muestra el punto al que llegó la corrupción burguesa en el ámbito del partido "de los trabajadores").

Luego de darle un puntapié en el traste, la derecha que lo echó y el gobierno que lo "desblindó" saludaron su desempeño al frente del ministerio, debido a la "estabilidad" económica conquistada, al precio de una deuda pública récord de más de un billón de reales (o 500 mil millones de dólares), equivalente a más del 56% del PIB; del record de beneficios obtenido por el capital financiero, los más altos del mundo y de toda la historia del Brasil (sólo en el año 2005, el peso de los bancos en el PIB brasileño subió de 6,5% a 8,1%, superando a la construcción, el comercio y la agropecuaria; cada punto porcentual del PIB equivale a 17,5 mil millones de reales, o más de 8 mil millones de dólares); del record de 25% alcanzado por el desempleo y el subempleo (con casi 11% de desempleo abierto en las capitales); del pago de intereses record de las deudas externa e interna, comprometiendo 60% del presupuesto y expropiando el excedente nacional, y de otras hazañas más. El hombre, y sus colaboradores inmediatos, quedaron

---

"integrar políticamente a los gobiernos progresistas (de América Latina)", la "integración de los pueblos" (o sea, un amplio conjunto de pavadas oportunistas), y al propio ALBA de Chávez.

[215] *Opinião Socialista* n° 230, San Pablo, 7 de septiembre de 2005.

bajo investigación policial. Su substituto, Guido Mantega, amenazó con bajar as tasas de interés a niveles "civilizados", para recibir inmediatamente un tirón de orejas, y ser inmediatamente esclarecido de que el Banco Central (al que pertenece el Copom, Comité de Política Monetaria) no se reportaba más a su ministerio, sino directamente al presidente. En la práctica, la conducción económica ha quedado bajo el control del presidente del BC, Henrique Meirelles, agente directo del gran capital financiero, ex presidente mundial del *Bank of Boston*, y diputado electo por el PSDB, el principal partido de oposición burguesa a Lula, partido que estuvo a punto de pedir el *impeachment* del presidente. La oposición tucano-pefelista (del PSDB y el PFL) comandaba el gobierno y la oposición.

En un ejercicio de política-ficción, la izquierda petista (la Articulación de Izquierda) atribuyó la caída de Palocci a una batalla "trabada y vencida por la ministra Dilma Roussef, con el apoyo de la dirección nacional petista y el discreto estímulo del propio presidente". O sea, una victoria imaginaria de la "izquierda", que anunciaría un segundo mandato (de Lula) "pos-neoliberal, democrático, popular y, quien sabe, socialista".[216] Para ilustrar el "progresismo"de la ministra Dilma, baste saber que, tras cartón de la caída de Palocci, la Petrobrás, que la Roussef (ex ministra de Minas y Energía) dejó bajo el cuidado de un ahijado suyo, inició una guerra de presiones sobre Bolivia, contra cualquier amenaza de nacionalización o mayor tasación impositiva del gas por parte del gobierno de Evo Morales. Amenazó con suspender todas las inversiones de la "estatal" semi-privada brasileña en el Altiplano.

El vacío político no fue ocupado por la lucha de clases, debido a la desmovilización del movimiento obrero y popular provocada por el gobierno y, sobre todo, por sus aliados izquierdistas, dirigentes del movimiento sindical y campesino. El centro político se desplazó al campo electoral, a las elecciones generales (presidente, gobernadores, diputados y senadores) de octubre de 2006. Pero en ese campo se expresaría toda la crisis. Al previsible crecimiento de la candidatura de la derecha (Geraldo Alckmin, del PSDB y gobernador de San Pablo, hombre del Opus Dei, nada menos, ladeado por los ex "progresistas" Fernando H. Cardoso y José Serra, este candidato al gobierno de San Pablo por el mismo partido) se sumó la inevitable crisis, profundizada, del PT, reducido a la inmovilidad y a un papel decorativo.

Y la crisis también campeó en la izquierda excluida del PT. El PSTU lanzó la propuesta de un "frente de izquierda" (PSTU, PCB y, sobre todo, el recién legalizado PSOL), pero el propio PSOL se cortó solo con el lanzamiento de su candidatura presidencial (Heloísa Helena) y de candidaturas propias a los gobiernos de los principales estados (incluido San Pablo, con Plínio de Arruda Sampaio), esto sin haber definido todavía su programa. El propio PSOL era un acuerdo precario de tendencias de las más diversas, ya en crisis interna por los temas más diversos (su congreso fue postergado, y transformado en conferencia electoral por la dirección "partidaria", motivando protestas de buena parte de sus tendencias). Ninguna tendencia de izquierda extra-PT planteó la cuestión elemental de la unidad electoral clasista, con candidaturas definidas por asambleas abiertas obreras y populares. La crisis brasileña se evidenció como el fiel de la balanza del desarrollo político en América del Sur.

---

[216] POMAR, Valter. *Palocci caiu: o paloccismo cairá com ele?* Documento, 28 de marzo de 2006.

23. MISERIA DEL CENTROIZQUIERDA E IMPASSE DEL NACIONALISMO

En 2004, la salida de Argentina de la situación de *default* fue presentada como la consolidación de la política "antiimperialista" de Kirchner. Pero la "salida del *default*" fue un buen negocio... para los acreedores. El "soberano" pago en bonos en pesos, se basó en que, según las principales consultoras, el peso seguiría apreciándose. Los bonos en pesos ajustables tendrían entonces un mayor valor en dólares. El presidente del Banco Morgan declaró: "Tengo trabajando conmigo a 50 doctores en economía y ninguno encuentra una rentabilidad tan alta como la que ofrecen los bonos en pesos (indexados) en Argentina. 10% anual en dólares no se consigue ni en Turquía; en Brasil tal vez ganamos un 7%, pero hoy el riesgo es mayor".[217] Además del Morgan, Merrill Lynch compró 6.000 millones de dólares en bonos argentinos.

La política de Kirchner-Lavagna era mucho más que un plan de pago: era la renovación formal de la hipoteca de la deuda sobre la economía argentina. Al mejor estilo de la reestructuración de la deuda hecha por Menem y Cavallo con el Plan Brady (1993), la supuesta "quita récord" no era otra cosa que la satisfacción de uno de los objetivos estratégicos del capital financiero en Argentina: "normalizar" los pagos de deuda comprometiendo el porvenir de generaciones.

Fue la propuesta de valorización y la caída del dólar lo que produjo el acuerdo con los acreedores. Esta valorización impidió establecer el monto final de la deuda externa que debería pagar Argentina, ni cuál sería la cuenta de intereses que habrá que pagar semestral o anualmente. Los bonos pesificados que se entregaron a los bancos a partir de 2002, cuando el dólar estaba a cuatro pesos, aumentaron de valor en 7.325 millones de dólares, en dos años, como consecuencia del ajuste por inflación y la caída del dólar a 2,90. En 2004 habría aumentado otros mil millones de dólares.

Kirchner dijo que aplicaria una quita del 75% a los US$ 81.200 millones en défault, que asi se transformarian en US$ 20.300 millones. Pero, en vez de canjear deuda por ese monto, emitió deuda por US$ 43.200 millones (más del doble), porque se sumaron los intereses no pagados desde diciembre de 2001 hasta el 30 de junio de 2004, los mismos intereses que Kirchner juró que jamás se iban a reconocer. Entre el default de diciembre de 2001 y la oferta de Kirchner, la deuda era apenas 13,9% menor, cuando la economía argentina, recesión y devaluación mediante, resultaba, medida en dólares, 42% menor.

Los pequeños ahorristas europeos fueron estafados por sus bancos, pues compraron los bonos argentinos a su valor nominal. Pero los "fondos buitres" especularon con la depreciación de esos bonos después del default y compraron bonos 10% o 15% de su valor nominal. La oferta del gobierno les permitió duplicar o triplicar el valor de esos bonos, que ya estaban cotizando cerca del 30% de su valor nominal, poco antes del anuncio de la salida del default por Kirchner.

Con el *kirchnerismo* la Argentina se encontró atrapada por el capital financiero, sin la mentada autonomía nacional. Las exigencias financieras internacionales fueron mucho más allá de un incremento del superávit fiscal. Se pretende que la Argentina reingrese a un mecanismo de endeudamiento internacional y de entrega de recursos nacionales. Esta posibilidad choca con la tendencia al enrarecimiento y encarecimiento del crédito internacional.[218]

A fines de 2005, e imitando al gobierno de Lula, Argentina procedió al pago adelantado de la deuda pendiente de diez mil millones de dólares con el FMI, un desfalco de la

[217] *Página/12*, Buenos Aires, 1º de marzo de 2005.

[218] ALTAMIRA, Jorge. 'Salida del default' ¿o la mayor estafa de la historia argentina? *Prensa Obrera* nº 889, Buenos Aires, 3 de marzo de 2005.

riqueza nacional, una variante agravada de los 14.000 millones que ya fueron desembolsados desde principios de 2002. El cinismo oficial inscribió el pago en una llamada política de 'desendeudamiento'. La deuda nacional se incrementó, en 2005, en seis mil millones de dólares como consecuencia del ajuste que sufrió por la incidencia del 12% de la inflación. El pago adelantado al FMI representó, con sus 30.000 millones de pesos, cinco años del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Esto significa que se descartó la posibilidad de usar ese dinero para resolver enormes problemas de subsistencia y de inversión. Faltando agua en el Norte y con cortes de luz en la Capital, Kirchner entendió prioritario pagarle a los usureros.

A diferencia de Brasil, que le devolvió al FMI el mismo monto que éste le había prestado, y que incluso lo sacó de la misma cuenta en que el FMI la había depositado, el monto que devolvió Kirchner no existía más, había sido gastado para fugar capitales en 2001. Los dólares que entregó Kirchner fueron duramente arrancados al consumo de los trabajadores, ya que salen de una exportación extraordinaria de la producción nacional. No existe desendeudamiento cuando la deuda con el FMI se sustituye por otra deuda con el Banco Central. Pero mientras la obligación con el Fondo tenía un interés del 4% anual, la que se contrajo con el Banco Central implicó una tasa de interés de 9% al año. Kirchner tuvo también que violar la carta orgánica del Banco Central, la cual pone un techo del 12% de la recaudación impositiva para prestarle al gobierno.[219]

Aun así, en 2006, el continuado avance electoral del centroizquierda en el continente siguió testimoniando la liquidación creciente de la vieja partidocracia latinoamericana. La socialista Michelle Bachelet ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, con el 46% de los votos. La *Concertación* obtuvo, además, el 52% de los votos para parlamentarios, la mayoría de los cuales pertenecieron al Partido Socialista. La Democracia Cristiana (el otro partido de la Concertación) sólo logró seis bancas. Dentro de los límites políticos del proceso chileno podría decirse que el electorado se inclinó hacia la izquierda.

El resultado electoral, sin embargo, diseñó un principio de crisis política, en la medida en puso en cuestión el sistema electoral binominal establecido en la Constitución por Pinochet – y religiosamente mantenido desde entonces por los "demócratas" – que impide cualquier representación parlamentaria fuera de la alternancia derecha-Concertación. Los resultados electorales mostraron el agotamiento de este sistema, pues la Democracia Cristiana se derrumbó, y el PS concentró la mayoría de los diputados de la Concertación. En la DC existe una corriente que quiere libertad para hacer frentes con la derecha, lo que obligaría al PS, eventualmente, a reconstruir con el PC una suerte de Unidad Popular. Esta tendencia explicó que la candidata Bachelet fuese dejada virtualmente sola por las jerarquías del gobierno frente al desafío de la segunda vuelta de las elecciones.

Así, en el país donde "no pasaba nada", las elecciones dejaron al descubierto un principio de crisis del régimen político. La campaña electoral estuvo dominada, en parte, por las manifestaciones de la crisis social. El crecimiento de la miseria, la concentración de la riqueza y el fracaso del régimen previsional fueron los principales temas en debate. Chile registra los mayores índices de diferenciación social, de horas trabajadas y de consumo de drogas psicotrópicas de América Latina. - El éxito de Chile es un producto de los medios, que reflejan los intereses de las grandes empresas multinacionales y quieren vender ese modelo a los demás países de América del Sur. Es

---

[219] ALTAMIRA, Jorge. El pago al FMI es un desfalco contra Argentina. *Prensa Obrera* nº 929, Buenos Aires, 22 de diciembre de 2005.

producto de la propaganda. ¿Cual es el “modelo chileno”, tan ensalzado? Chile es un país que tiene una deuda externa de US$44,8 mil millones, que representa alrededor ¼ de su PIB, estimado en US$185,1 mil millones. Sus exportaciones siguen siendo principalmente cobre y algunas *commodities*. La deuda pública es de 8,1% del PIB, 18.2% de su población vive debajo de la línea de pobreza y la tasa de desempleo es de 8%.

De los siete millones de afiliados al régimen previsional privado, apenas aporta la mitad (el resto son desocupados o trabajadores en negro). Los que se jubilan, cobran una miseria. Una masa creciente de los jubilados del sistema privado no llegan a cobrar la jubilación mínima establecida por el Estado en un nivel de miseria. El Estado se ha comprometido a pagar a cada jubilado del sistema privado un subsidio equivalente a la diferencia entre el haber que le paga el fondo privado y la jubilación mínima de ley. Como los que deberán reclamar esa diferencia crecen sistemáticamente, una fracción creciente de las finanzas públicas debe ser destinada a la financiación de las jubilaciones privadas. Distintas proyecciones estiman que, en pocos años, el déficit previsional podría ser explosivo. Sin embargo, el “secreto” del “milagro chileno” radica en este saqueo a los trabajadores, porque ofreció a los capitalistas una masa de capital gratuita que se acerca a los cien mil millones de dólares.

Cualesquiera sean las ilusiones que algunos sectores populares albergan en Bachelet, su eventual gobierno seria una agencia del imperialismo, al igual que sus antecesores, aunque deberia lidiar con condiciones de crisis social y políticas completamente nuevas. En mayo de 2006, una gran rebelión estudiantil “saludó” la nueva situación política. Más de 650 estudiantes secundarios detenidos fue el resultado de la violenta represión policial del 4 de mayo, cuando los jóvenes intentaban llegar al Ministerio de Educación.

La masiva movilización reclamaba por el fin de la jornada escolar completa, el uso ilimitado del pase (boleto) escolar y la gratuidad de la PSU (Prueba de Selección Universitaria). La imposibilidad de viajar en cualquier horario con la tarifa preferencial de estudiante y el costo de la PSU, limitan el ingreso a la universidad de todo un sector de la población. La represión autorizada por la Intendencia “socialista” de la Región Metropolitana, garantizó la libre circulación con gases, guanacos y palos. Con la misma furia arremetieron el 1º de Mayo contra cientos de manifestantes que protestaban contra la flexibilización laboral; Bachelet prometió la máxima sanción que prevé la ley a los “revoltosos”.

Las continuadas movilizaciones populares acabaron derrubando al gobierno de Lucio Gutiérrez, en Ecuador, en abril del 2005. La designación de su vice, Alfredo Palacio, birló nuevamente la posbilidad de una victoria popular en uno de los países más radicalizados en el radicalizado contexto andino. En 2006, sin embargo, una nueva ola de politizado ascenso popular cuestionó directamente el alineamiento del país con la política yanqui a través de la firma de un acuerdo bilateral. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, emitió un comunicado que reflejó la situación:

“*Hemos visto con mucha preocupación como el gobierno transitorio del Dr. Alfredo Palacio, en contradicción con el compromiso realizado al asumir el poder en abril del año pasado, continúa con la misma política de gobierno del ex Presidente Lucio Gutiérrez, entregando los recursos naturales, sobre todo agua y petróleo, a las corporaciones transnacionales; comprometiendo al país en la guerra civil del hermano país de Colombia; hipotecando el pedido nacional de Asamblea Nacional Constituyente y “Que se vayan todos!” por compromisos con las oligarquías y los caudillos políticos; entregando la economía del país a los tenedores de bonos de la deuda y al FMI; y, en*

un acto que lesiona a la soberanía nacional, comprometiendo al país en un proceso sin retorno con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

(...) Los diferentes gobiernos se han comprometido con políticas neoliberales que han destruido nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestra naturaleza. Han apoyado a la guerra, a la devastación ecológica, al irrespeto a los derechos humanos, a la concentración de la riqueza, a la entrega de nuestros recursos. Por ello, la CONAIE, cumpliendo el mandato de sus bases, ha decidido:

1.- Empezar las movilizaciones nacionales en diferentes provincias del país demandando al gobierno nacional su retiro inmediato de todas las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; un pronunciamiento firme por la paz y contra la guerra, anulando de manera inmediata el convenio que entrega la Base de Manta al ejército norteamericano; la expulsión de la empresa petrolera Oxy, y la nacionalización del petróleo; y la convocatoria urgente a la Asamblea Nacional Constituyente.

2.- Instruir a las organizaciones provinciales a que continúen las movilizaciones, tomas de carreteras, asambleas populares y marchas hacia Quito, para demandar el cumplimiento de los compromisos que el actual régimen asumió en su condición de gobierno transitorio.

3.- Convocar al pueblo ecuatoriano a defender la soberanía nacional y evitar la imposición colonialista que se pretende realizar con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos;

4.-Instruir al bloque de diputados del Movimiento Pachakutik, para que realicen las alianzas y gestiones necesarias para el enjuiciamiento político al gobierno de Alfredo Palacio, por traición a la Patria, su destitución inmediata y la conformación de un gobierno que convoque de manera urgente a una Asamblea Nacional Constituyente,

Quito, 13 de marzo de 2006".

La CONAIE había reconstruido su base de masas (tras la debacle producida por su apoyo a la presidencia del populista Lucio Gutiérrez, en 2002) y su alianza con los sindicatos urbanos fue efectiva para la derrota del ALCA, respaldado por los EEUU, y la cancelación de los contratos de hidrocarburos de Occidental Petroleum (Oxy), compañía petrolera estadounidense.

2006 también se inició con una rebelión popular en Haití. Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles, ocuparon edificios y levantaron barricadas en repudio a las maniobras de la ONU y la Comisión Electoral para birlarle el triunfo a René Préval, un aliado del ex presidente Aristide. La represión de las fuerzas de la ONU – balas de plomo contra multitudes desarmadas –se cobró muertos y heridos. La pueblada dominó partes enteras de la capital, en particular las grandes barriadas populares. La exigencia de los manifestantes era que fuese reconocida, en forma inmediata y sin condiciones, la victoria de Préval en las elecciones del 7 de febrero.

Los primeros cómputos le otorgaban a Préval una votación del 60%. Poco a poco, comenzó a caer. La Comisión Electoral, en un hecho inédito a escala internacional, contabilizó los votos en blanco (4%). Gracias a estas argucias – y a la manipulación de los votos, según denunciaron dos miembros de la Comisión Electoral – a Préval se le reconoció "oficialmente" el 49%. Todo esto para forzar una "segunda vuelta" contra un candidato (Leslie Manigat) que no llegó al 11% de los votos. El triunfo abrumador de Préval, un antiguo aliado del depuesto Aristide, sería la manifestación más rotunda del fracaso de la ocupación. Con su fracaso a cuestas, la ONU le extendió el mandato a las tropas de ocupación, coordinadas por el Ejército brasileño, por otros seis meses.

El repudio popular a los ocupantes, que se manifestó en el voto, fue la consecuencia de que – con la presencia de las "fuerzas de paz" de la ONU y de los gobiernos centroizquierdistas de América Latina – la miseria, la represión, el hambre, los asesinatos y la prostitución infantil (la "nueva esclavitud" en Haití) crecieron geométricamente. El objetivo del fraude electoral era forzar a Préval a aceptar un gobierno de coalición con los derrotados. Es decir, a desconocer los resultados, a anular en la práctica las elecciones y armar "a dedo" un gabinete para que continuasen gobernando los mismos que el pueblo repudió.

Pero la rebelión popular, en repudio al fraude electoral, puso nervioso al propio candidato ganador. Preval esquivó cualquier compromiso preciso con respecto a las demandas populares, pero, en cambio, ha sido muy explícito en sus señales con relación a los factores de poder. Un punto crucial está referido a la ocupación militar. Preval declaró que creía que las fuerzas de ocupación de la ONU deberían quedarse mientras sea necesario", algo que entra en colisión con el reclamo del Lavalas (el partido de Aristide, que es la mayor organización política del país, apoyada por los nucleamientos y grupos armados organizados en los barrios que fueron los protagonistas del levantamiento popular). Preval rompió con Aristide y formó su propio partido, *L'Espwa*.

El partido Lavalas se convirtió en el blanco principal de una campaña que buscaba diezmarlo. El plan avanzaba, luego, en elecciones amañadas. La ocupación militar continuaría como resultado de la "voluntad de las autoridades legítimamente constituidas". Haití carece de ejército y de fuerzas armadas, y la policía es un organismo sin capacidad para imponer su autoridad, que en muchos casos actúa en complicidad con bandas parapoliciales.

La continuidad de las tropas extranjeras estuvo al servicio de asegurar una corriente de inversiones capitalistas que, si bien es incipiente, arrancó desde la época del gobierno de Aristide. Aristide se fue adaptando a estas aspiraciones del capital, aunque debido a la presión popular no llevó estas tendencias hasta el final. Bajo su último mandato, abrió zonas francas, que a la par de brindar enormes beneficios y exenciones impositivas al capital, son un terreno fértil para la superexplotación de los trabajadores. Esto ha comenzado a atraer inversores, especialmente en el ramo textil, provenientes de la vecina República Dominicana. Esta zona franca es un complemento de la explotación inhumana que se viene haciendo de la mano obra haitiana dentro de las propias fronteras dominicanas, usufructuando la inmigración ilegal.

El "gobierno de coalición" de Haití fue parido en la galera de Lula. Lula y su canciller, Celso Amorim, consultaron su propuesta con Kirchner y la Cancillería argentina. Entre todos, lograron que Condoleezza Rice la aceptara a regañadientes, ante el peligro de que la misión militar haitiana empezara a desintegrarse, como les ocurrió en Irak. Organizaciones adictas al gobierno –el Movimiento Democrático Popular (*Modep*), la organización campesina *Tet Kole* y la asociación de jóvenes *Sildarite Art Jen* (SAJ)– "se oponen a la ocupación extranjera, que apunta a mantener el país bajo el yugo de las grandes potencias".[220]

Las elecciones parlamentarias venezolanas del 4 de diciembre de 2005 marcaron un momento crucial en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. El partido del presidente Chávez, el Movimiento de la Quinta República, ganó aproximadamente el 68% de los escaños del congreso y con otros partidos progubernamentales, se repartió a

[220] HELLER, Pablo. Haití, después de la insurrección. *El Obrero Internacional* nº 6, Buenos Aires, marzo de 2006.

todos los representantes. La concurrencia a las elecciones del congreso fue, sin embargo, del 25%.

La afirmación estadounidense de que la baja participación fue resultado del boicot de la oposición respaldada por los EEUU era, no obstante, falsa. En los barrios de la burguesía y la clase media alta la participación estuvo por debajo del 10%, mientras que en los barrios populares llegó a haber colas para emitir el voto. Con cerca de la mayoría de los pobres como votantes y más del 90% de los votos a favor del partido de Chávez y de una legislatura totalmente chavista, quedó abierta la vía para una consolidación, a partir del completo dominio del aparato estatal, del chavismo.

El boom petrolero, sin embargo, no inmunizó a Venezuela de convulsiones y crisis. Uno de los epicentros de la crisis se registra en el campo. El carácter parasitario de la burguesía venezolana puede medirse por el sencillo hecho de que un país tan rico en tierras importa el 70% de los alimentos. La burguesía ha vivido a expensas del petróleo. El campo permanece en una abrumadora proporción ocioso e improductivo. El 75% de las tierras están en manos del 5% de los propietarios. La población agraria ocupa a sólo el 14% de los habitantes.

Chávez anunció medidas de reforma agraria, que se limitaron a autorizar la expropiación de tierras sin cultivar superiores a 5.000 hectáreas, y a condición de que sus dueños no puedan acreditar títulos de propiedad. Se trata de un universo muy estrecho de explotaciones, pero todavía es muy poca la tierra asignada y ninguna la expropiada. El empantanamiento en que se encuentra la reforma ha desatado ocupaciones de tierras y la reacción de los terratenientes, que contratan sicarios (asesinos a sueldo) o cuentan con la colaboración de parte del aparato estatal local. Se ha puesto en marcha una articulación de los campesinos en la Conferencia Campesina, patrocinada por el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora.

El quebranto industrial no le va a la zaga. 40% de las 11.000 firmas industriales ha ido a la bancarrota desde que Chávez es presidente. Se puso sobre el tapete la cuestión de las empresas paralizadas, inactivas y quebradas. Chávez denunció la existencia de 700 empresas cerradas; estaban siendo investigadas 1.149. En el acto inaugural del Encuentro Latinoamericano de Empresas Recuperadas, Chávez anunció la expropiación de dos empresas, la siderúrgica Sideroca y una central azucarera. Dos meses antes, habían sido expropiadas la papelera Invepal y la productora de válvulas Inveval.

En los casos nombrados, el decreto de expropiación indemnizó a los propietarios y transfiere el 51% de las acciones de la empresa al Estado, y el otro 49% a una cooperativa integrada por sus trabajadores. En Invepal, el Estado venezolano desembolsó varios millones de dólares. Los trabajadores deberían comprar su parte con un porcentaje de la producción. Los niveles salariales del trabajador venezolano son extremadamente bajos. La remuneración promedio no alcanza a los 440.000 bolívares (alrededor de 200 dólares). Las empresas recuperadas no son la excepción.

La "cogestión", por su parte, en su corta existencia, ya ha dado lugar a conflictos entre la burocracia estatal y los trabajadores, en particular en Inveval. Si bien el decreto gubernamental decía que la conducción debía quedar reservada a los trabajadores, lo cierto es que está en manos de funcionarios estatales que designan a los gerentes y toman las decisiones relevantes. En los conflictos que se están suscitando, emerge la exigencia de que se expropien las empresas y se establezca una cogestión paritaria (grupo Polar, segundo grupo empresario local; las transnacionales Heinze, que cuenta con una procesadora de tomates, y Parmalat, que posee dos plantas, entre otras).

Aunque la cogestión estatal-obrera ha sido muy publicitada, el gobierno se ha inclinado por esta opción sólo como excepción y cuando se han agotado otras variantes. La línea

dominante es procurar una suerte de cogestión obreros-empresarios privados. A las empresas privadas que operan de esta forma se les otorgan créditos baratos, se refinancian sus deudas con el Estado y se les da tratamiento privilegiado en las compras del Estado, así como una generosa eximición de impuestos. Estas prebendas explican que Fedecámaras (la Unión Industrial venezolana) haya saludado la iniciativa de la cogestión y que numerosos empresarios se hayan anotado para acogerse a sus beneficios.

Con el agravamiento de la crisis, Chávez comenzó a hablar de "la revolución en la revolución" y del "socialismo del siglo XXI", pero no pasó de los umbrales de un rescate del capital por medio de subsidios y de la cogestión. La acción emprendida por Chávez para recuperar la capacidad de decisión del Estado venezolano en el uso de sus recursos petroleros está limitada por este horizonte social. Por otro lado, los ingresos del petróleo circulan monetariamente por los bancos venezolanos, 100% extranjeros, que han acumulado el 50% de la deuda pública. El gobierno paga puntualmente esta deuda, girando un promedio del 8% del PBI.

La libertad de que goza el capital mina las medidas que el gobierno establece en diferentes planos para reencauzar la economía. El control de cambios y de precios se ve socavado por el mercado negro y por la remarcación de precios. La inflación ha trepado al 23% anual, mientras los sueldos permanecen congelados. Nada retrata posiblemente mejor los límites de esta nueva experiencia política nacionalista que este virtual congelamiento de los salarios. En este contexto, el papel de las llamadas "misiones" (campaña de movilización masiva de recursos humanos y materiales volcados a las barriadas y zonas más carenciadas, para la alfabetización, salud, asistencia social) se circunscriben a mitigar los aspectos extremos de la pobreza.

En distintas industrias estatales, en particular en la industria petrolera, y también privadas, hubo una importante experiencia de control obrero durante el paro patronal de fines de 2002. Los trabajadores desafiaron el *lock-out* patronal y no permitieron que se parara la producción, como en el caso de las refinerías de Puerto La Cruz y El Palito. Pasaron por encima de los directivos comprometidos con la conspiración. Después, las autoridades procuraron recuperar la plenitud de la conducción en las industrias estratégicas.

El gobierno puso en marcha una reestructuración de PDVSA y desplazó a los directivos golpistas, pero también desarticuló el control obrero, volviendo a la jerarquía de mando, con gerentes nombrados por el Ministerio. Con la asunción de la nueva Junta Directiva, a partir de principios de 2005, se asistió a una escalada de carácter derechista. Se ha puesto en marcha una campaña de despidos, traslados arbitrarios, listas negras y persecución de activistas, y son desplazados gerentes que se opusieron en su momento al golpe.[221]

Pero una alternativa de izquierda comienza a gestarse, a partir de movimientos de lucha independientes, como el Frente Ezequiel Zamora, importante organización campesina. Este movimiento llegó a Miraflores, en junio de 2005, con 7.500 campesinos de 15 estados venezolanos, para repudiar la cooptación de campesinos a través de la Coordinadora Campesina chavista. Bloquea carreteras para obtener sus reivindicaciones, y está organizando un movimiento o partido político (MBP) que ya intervino en el estado de Apure, alcanzando a elegir un alcalde en la localidad de Guastalito, contra el candidato de Chávez del MVR.

---

[221] HELLER, Pablo. Venezuela: ¿el "socialismo del siglo XXI"? *El Obrero Internacional* nº 5, Buenos ires, enero de 2006.

Estiman que una parte importante de la abstención del 4 de diciembre pasado (75%) se debió a la frustración popular por promesas y reivindicaciones incumplidas, por parte de los "reformistas" del Movimiento de la V República, el partido oficial. De allí derivan la necesidad de una organización política independiente de campesinos, estudiantes y obreros.

Los grupos de izquierda, organizados principalmente en los nuevos sindicatos con orientación de clase, en cooperativas basadas en barrios y comunidades, movimientos campesinos y en empresas autogestionadas por trabajadores y movimientos, comenzaron a presionar para una profundización de las estatizaciones y una inversión mayor en empresas productivas locales, con vistas a reducir el 50% de la población activa que permanece desempleada o subempleada. Al mismo tiempo, atacaron la selección verticalista de los candidatos electorales.

Surgieron conflictos entre los activistas de masas en los barrios y sindicatos y los funcionarios municipales y provinciales corruptos, sobre todo en la asignación de fondos estatales. En medio de eso, es Chávez quien denuncia el imperialismo norteamericano y se reúne con los líderes iraníes, y es Chávez también quien firma acuerdos económicos con el neoliberal Uribe de Colombia y loa a los Lula. En este cuadro y bajo esta experiencia política debía y debe desarrollarse una izquierda clasista independiente del chavismo.[222]

En febrero de 2006, se anunció que "*officials from Argentina, Brazil and Venezuela are meeting in Caracas to lay the foundations for a jointly-financed gas pipeline. The 8,000km (5,000 miles) pipeline would provide Venezuelan gas to much of South America. It will cut across the Amazon rainforest and run all the way to the southern tip of the continent, and its price tag is $20bn. The difficulty of the proposed construction is reflected in the size of the government delegations involved in the meeting in Caracas. Some 20 engineers and economists representing Argentina, Brazil and Venezuela have spent the past day discussing the route of the pipeline, its cost and environmental impact on the Amazon rainforest. Venezuela's Energy Minister, Rafael Ramirez, told the BBC the project would contribute towards political and economic unity in South*

---

[222] Para Noam Chomsky: "*What's happening is something completely new in the history of the hemisphere. Since the Spanish conquest the countries of Latin America have been pretty much separated from one another and oriented toward the imperial power… For the first time, they are beginning to integrate and in quite a few different ways. Venezuela and Cuba is one case. MERCOSUR, the trading association now including many Latin American countries, which is still not functioning very much, is another case. Venezuela just joined MERCOSUR, which is a big step forward for it and it was greatly welcomed by the presidents of Argentina, Brazil. For the first time the Indian population is becoming politically quite active. They just won an election in Bolivia, which is pretty remarkable. There is a huge Indian population in Ecuador, even in Peru, and some of them are calling for an Indian nation. Now they want to control their own resources… That's very new. If the United States loses the economic weapons of control, it is very much weakened. Argentina is just essentially ridding itself of the IMF, as they say. They are paying off the debts to the IMF. The IMF rules that they followed had totally disastrous effects. They are being helped in that by Venezuela, which is buying up part of the Argentine debt. Bolivia will probably do the same… All of this is happening against the background of very substantial popular movements, which, to the extent that they existed in the past, were crushed by violence, state terror, Operation Condor, one monstrosity after another. That weapon is no longer available. Furthermore, there is South-South integration going on, so Brazil, and SouthAfrica and India are establishing relations. And again, the forces below the surface in pressing all of this are international popular organizations of a kind that never existed before*" (CHOMSKY, Noam [entrevista a Bernie Dwyer]. What's happening is something completely new in the history of the hemisphere. In: http://www.antiterroristas.cu/, marzo de 2006).

America. Argentina and Brazil are quietly confident that Venezuela with its oil riches may end up paying more than half of the costs".[223]

La crisis política brasileña, se tiñó con ribetes de barbarie, en 2006, con la llamada "crisis de seguridad", en la que el comando del crimen organizado, PCC (Primer Comando de la Capital), pasó a atacar abiertamente a la policía, una acción que, en apenas tres días, produjo ya más de 100 muertos, en ambos lados. Quien afirme que el episodio, iniciado en San Pablo pero ya extendido a otros estados, nada tiene que ver con la crisis histórica del Brasil, no ve u olvida que el PCC, que demostró ser capaz de un poder de movilización y de fuego equivalente al de una fuerza armada regular, recluta sus miembros principalmente entre la juventud más pobre de las grandes ciudades, en las que el índice de desempleo de la juventud supera holgadamente el 30%. Entre Río y São Paulo hay cerca de 2,3 millones de jóvenes, entre 14 y 24 años, que no terminaron la educación básica. En ese contingente se encuentran el 80% de los asesinos y de los asesinados de esas ciudades.

El 15 de mayo de 2006, San Pablo amaneció paralizada tras una nueva serie de ataques, en la tercera jornada consecutiva. Sólo en la madrugada del 15, 90 autobuses y 13 bancos fueron incendiados. Los motines se extendieron a 50 cárceles donde los presos retenían en torno de 250 rehenes. Lula aprovechó para proponer la militarización del conflicto, con la oferta de enviar fuerzas federales, incluyendo tropas del Ejército, para "restablecer el orden" en San Pablo. Claudio Lemos, gobernador de San Pablo, lo rechazó. Se prepararon para desplegarse en el principal estado de Brasil unos 4.000 efectivos de la Fuerza Nacional de Elite, así como de la Policía Federal, de los cuerpos de inteligencia, y de las Fuerzas Armadas.

El jueves 11 de mayo, 765 presos fueron trasladados a la cárcel de Presidente Venceslao, 620 kilómetros al oeste de San Pablo. El viernes ocho líderes fueron llevados al Departamento de Investigaciones sobre el Crimen Organizado, al norte de esa ciudad. Entre ellos estaba el líder del PCC, Marcos Willians Herba Camacho, *Marcola*, trasladado a la cárcel de Arthur Bernardes, a 600 kilómetros al oeste de la capital paulista, una de las de máxima seguridad del país.

El Primer Comando de la Capital fue creado en agosto de 1993, en la cárcel de la Casa de Custodia de Taubaté, a 130 kilómetros de San Pablo. Su nacimiento se debió, según sus miembros, a la necesidad de "combatir la opresión dentro del sistema presidiario". La declaración era una respuesta al asesinato de 111 presos, el 2 de octubre de 1992, en la cárcel de Carandirú. La rebelión de mayo de 2006 se habría desatado por un "desacuerdo" entre el PCC y el gobierno del estado de San Pablo. Las autoridades habrían querido desarticular la fuerza del Primer Comando mediante el traslado de sus principales jefes a una prisión de máxima seguridad del interior. Marcola tiene 38 años y pasó más de la mitad de su vida en la cárcel. Tiene el cuerpo marcado de tantos abusos sufridos en los Institutos de Menores donde estuvo alojado.

Si el conflicto inicial con la dirección del PCC (en prisión) tuvo todas las características de un "ajuste de cuentas por quiebra de contrato", la rebelión posterior en las cárceles tomó como eje la lucha contra la condición infrahumana en que son mantenidos las centenas de miles de presos y detenidos en Brasil, originados en su casi totalidad en las clases más pobres (en Brasil existe, inclusive, un régimen especial y diferenciado de detención para los presos que posean graduación universitaria).

---

[223] MORSBACH, Greg. South America unveils pipeline. In: http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/americas/4766568.stm, 3 de febrero de 2006.

El conflicto, en el que la policía respondió utilizando el asesinato vengativo a mansalva, evidenció también la completa independencia de los cuerpos represivos en relación a los representantes "civiles" del Estado, y la descomposición de los aparatos policiales y militares de represión, infectados hasta los tuétanos por la corrupción y la coparticipación en las actividades criminales. La mini-guerra civil, que provocó hasta un toque de queda en San Pablo, tuvo todas las características de una guerra entre aparatos competidores, de un conflicto inter-mafioso. Pero afectaba a toda la población trabajadora, lo que habla de un proceso de descomposición social avanzado.

En los días previos, el 8 de mayo, la influyente OAB (Orden de Abogados del Brasil) decidiera no dar curso al pedido de impeachment del presidente Lula, por su participación en el escándalo de corrupción parlamentaria y gubernamental. Con la ventaja que tenía en las encuestas electorales, esto significaba dar el visto bueno a la reelección de Lula. Pero esto estaba lejos de cerrar la crisis. No sólo porque faltaba definir el candidato a vicepresidente y, consecuentemente, las alianzas políticas del PT para la disputa electoral. La propia OAB encaminó, sin impeachment, un pedido de investigación parlamentaria de las actividades criminales de Lula.

En realidad, toda la crisis pasaba al PMDB, que por su número de gobernadores, diputados, intendentes, consejeros municipales, constituye el mayor aparato político del país, potencialmente decisivo en cualquier elección. En la convención pre-electoral del PMDB venció la tesitura de no presentar candidato propio en el pleito presidencial de octubre, defendida por el ala pro-gobierno del partido. Pero esto plantea la perspectiva de una completa división del PMDB en la campaña electoral, entre la candidatura de Lula y la de la derecha declarada (PSDB, que presenta la candidatura del ex gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, responsable directo por el caos bárbaro instalado en San Pablo a partir del día 12).

El impasse político brasileño reflejó la profunda división de la burguesía local, del gobierno, y del propio imperialismo, llevada al paroxismo por el conflicto de Petrobrás-Bolivia, analizado en el próximo capítulo. La explotación del gas boliviano beneficiaba a Petrobrás porque se lo vendía a sí misma a un precio muy bajo, en perjuicio del fisco boliviano (menos de 3 dólares por millón de BTU, contra 12 dólares en el mercado internacional) para luego revenderlo en Brasil. El reclamo de Bolivia de aumentar el precio en un 65% cortaba este negocio. La nacionalización boliviana tuvo el efecto adicional de poner a la luz la situación de quiebra potencial de Petrobrás, cuyo valor ha sido afectado por las medidas tomadas en Venezuela y Bolivia.

La presión extraordinaria del gobierno de Lula sobre Evo Morales, para que reculase, reveló el carácter profundamente pro-imperialista de la izquierda democratizante que tomó al PT como modelo. Salvó la honra del Brasil el que el Sindicato Petrolero de San Pablo defendiese a Bolivia contra presión de su propio país sobre la nación del Altiplano. Y regístrese que el importante Sindicato Petrolero de Sergipe, en su asamblea general celebrada en Aracaju el 5 de mayo (para la elección de sus delegados al CONAT) se pronunció por: "Apoyar la lucha del pueblo boliviano por la nacionalización del petróleo y el gas; proponer que la Conlutas apoye y se integre a la Campaña Internacional por la Nacionalización sin Indemnización del Petróleo y el Gas en toda América Latina".

El mismo 8 de mayo el gobierno envió su "paquete sindical" al Congreso, conteniendo el reconocimiento oficial de la media docena de centrales sindicales (CUT, CGT, CAT, CGTB, SDS y Fuerza Sindical) existentes en el país, y la creación del Consejo Nacional de las Relaciones Laborales, con participación sindical, lo que da un carácter orgánico-institucional al colaboracionismo clasista en que se basa el gobierno de

“centroizquierda”. Las centrales se apresuraron en reivindicar para si los 20% del Impuesto Sindical hoy enviados al Ministerio de Trabajo (el Impuesto Sindical es cobrado obligadamente a todos los trabajadores registrados, sindicalizados o no, y consiste en la donación del valor completo de una jornada de trabajo), lo que aumentaría espectacularmente su recaudación. Y pensar que la CUT (vinculada al PT), la más importante de las centrales, nació luchando contra la “estructura sindical corporativista” y el Impuesto Sindical...

Con las centrales reconocidas por el Estado, en función de su “representatividad”, esto les garantiza poder legal para negociar salarios a espaldas de los sindicatos y organizaciones de base, y de las asambleas de trabajadores. La burocratización y la intervención estatal en las organizaciones obreras van de manos dadas. La llamada “reforma sindical” está siendo implementada por Medida Provisoria, una especie de decreto-ley, esto es, substraída a cualquier debate político.

En este cuadro se reunió, del 4 al 7 de mayo, el CONAT (Congreso Nacional de los Trabajadores), en Sumaré, convocado por la Conlutas (Coordinación Nacional de Luchas), un acuerdo de sindicatos minoritarios en ruptura con la CUT por la completa integración de ésta al Estado. El CONAT reunió a unos 3000 delegados, con amplia mayoría del PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado), y representación minoritaria del PSOL y pequeñas organizaciones de izquierda. La intención original de proclamar la Conlutas como nueva central sindical tropezó con la resistencia, principalmente, del PSOL (o, mejor dicho, de las corrientes del PSOL interesadas en el asunto), lo que llevó a la proclamación de una nueva “entidad nacional”, de naturaleza sindical, estudiantil y popular, pero con estatutos, congresos, dirección, etc.

La cuestión de fondo en el debate era si la Conlutas, con esta nueva naturaleza (ya no es más una simple “coordinadora”) se integraría al proceso de reforma sindical, reivindicando su reconocimiento como central (y participando, lógicamente, de la repartija de fondos que ya se anuncia). Pero este debate, esbozado de manera oblicua en el Congreso (donde sólo se votó la “formalización” de la entidad) fue también realizado en al aire, en un evento donde predominó el aparatismo, el elemento estudiantil y el “sindicalismo de clase media”, en detrimento de la expresión (minoritaria) de la lucha y la organización de los trabajadores. Así, el debate “organizativo” estuvo al margen de un debate político general, sobre la situación política brasileña, latinoamericana e internacional, y del abordaje de las tareas generales e inmediatas del movimiento obrero.

Para el PSTU, el CONAT era también un elemento de presión sobre el PSOL para llevarlo a un “frente clasista” en las elecciones de octubre, en que el dirigente (del PSTU) Zé Maria de Almeida ocupase la candidatura a vice de la carismática candidata a presidente Heloísa Helena (del PSOL). Aunque diversas asambleas previas se habían pronunciado en ese sentido, el propio PSTU retiró la cuestión del debate y la votación en el CONAT. La despolitización conciliadora del debate no trajo ningún rédito, ya que el PSOL, casi simultáneamente, proclamó casi todas sus candidaturas, ignorando el “frente clasista”. Para vicepresidente de Heloísa se proclamó a Cézar Benjamín, un intelectual de poco peso (inclusive intelectual), ex PT, ex PMDB, que ni siquiera es afiliado al PSOL, e identificado con la defensa de posiciones nacionalistas burguesas (incluido el “fortalecimiento de las Fuerzas Armadas”), en suma, un elemento que ni siquiera olía a clasismo. La intervención electoral del PSOL se desvirtuó, por lo tanto, de cualquier fisonomía clasista.

El cuadro de inmovilismo político y social, que la Conlutas pretendió quebrar con métodos básicamente aparatescos, comienza sin embargo a ser quebrado “desde abajo”.

La Volkswagen, principal firma automovilística e industrial del país, anunció un plan de despido de casi 6.000 de sus 22 mil trabajadores. Por sus efectos en la cadena productiva (auto-partes), comercial y familiar, la medida antiobrera de la Volks afecta a 600 mil personas. Masivas asambleas han respondido a la patronal. Pero en vez de la huelga general de todo el sector metalúrgico, la burocracia de la CUT y Fuerza Sindical impulsó huelgas escalonadas a partir de la última semana de mayo. Un frente de ruptura del acuerdo patronal-gubernamental-sindical, sin embargo, se abrió.

En el momento de cerrar estas líneas, el 30 de mayo de 2006, en su Conferencia Nacional (Brasília), el PSOL lanzó oficialmente la candidatura presidencial, para las elecciones de octubre de ese año, de Heloísa Helena, senadora, acompañada (vice) por César Benjamín, un intelectual de pocos votos y parco intelecto, que se distinguió en los últimos años por posiciones nacionalistas fuertemente burguesas, incluido el fortalecimiento del Ejército brasileño (para que no hubiera dudas, editó volúmenes y compartió tribunas despobladas con ex funcionarios de la dictadura militar, que no ocultan sus saudades por ese régimen asesino).

Al mismo tiempo, el PSOL informó que "fueron acatadas las condiciones puestas por el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados (PSTU) para la composición de un frente de izquierda, al lado también del Partido Comunista Brasileño (PCB)". Dígase que éste último no pasa de un fantasma caricatural del viejo PCB (del que la gran mayoría de sus fuerzas construyó el PPS, un partido abiertamente burgués-oligárquico), ya completamente adaptado a la democracia burguesa.

La cuestión no fue pacífica, ya que el PSOL informó que "a pesar de algunas divergencias internas, los delegados indicaron que el PSOL abdicase de disputar el senado en los estados de San Paulo, Río de Janeiro y Rio Grande do Sul, además del gobierno de Minas Geraes, para apoyar a los candidatos del PSTU" (lo que significa que había sectores partidarios de un frente más explícito con la burguesía, sin la molesta presencia de "los trotskistas"). Las chances electorales de esos candidatos son iguales a cero, lo que significa que, dado el tamaño del país, el PSTU aceptó el papel de mini-vagón de cola del frente con la "menos que sombra de la burguesía nacional", que impulsa el PSOL, y da soporte a la candidatura presidencial de Heloísa Helena, a la que las encuestas adjudican entre 6% y 8% de las intenciones de voto presidenciales.

El PSTU "va al frente" festejando que "la dirección del PSOL felizmente reculó de la propuesta de alianza nacional con el PDT", pero quejándose de que "su dirección nacional definió que buscaría incluir en el frente "segmentos de otros partidos que se colocan en la oposición, con un discurso de izquierda, y que puedan desplazarse de las alternativas presentadas por sus propios partidos". En las discusiones (del PSTU) con la dirección del PSOL fueron citados Pedro Simon (PMDB), Luiza Erundina (PSB), Fernando Gabeira (PV), João Fontes (PDT), entre otros. La idea seria buscar el apoyo de los sectores "éticos"de estos partidos burgueses.

En cuanto al programa "el PSOL reafirma la necesidad de reformular las políticas públicas y tratar temas fundamentales, como la cuestión de la deuda pública y su auditoria; la promoción del crecimiento económico con o combate a la miseria y el desempleo; la lucha en torno a los derechos básicos como educación, salud, habitación, reforma agraria y cultura. Heloísa afirmo que su campaña trabajará por la reconstrucción de la democracia con desarrollo económico sustentable e inclusión social". También se menciona "el ataque radical a la corrupción; el fin de los foros privilegiados y de los sigilos bancario y fiscal".

El PSOL propone "suspender el pago de los intereses de la deuda externa... el pago a los grandes especuladores". Y también que "las áreas estratégicas, como petróleo y

telecomunicaciones, estén bajo control del pueblo brasileño” (o sea, del Estado, no bajo control obrero). “Distribución de ingreso, aumento inmediato de los salarios” (¿cuánto? Porque allí está todo el problema) también están en el programa del PSOL. No será difícil encontrar todos estos puntos en los versos electorales del PT y los partidos burgueses. La “auditoria con suspensión” de la deuda externa es impulsada por sectores de la Iglesia Católica y otras, a nivel internacional. Se trata de un planteo de reformulación del dominio imperialista en condiciones de bancarrota de las naciones atrasadas, que ganó más actualidad después del default argentino de 2001.

Del “frente de izquierda” fue además excluido el PCO, ni siquiera invitado. El PSTU había realizado actos públicos en las capitales del país, reclamando la candidatura a vice para su dirigente Zé Maria de Almeida, y ninguna alianza con burgueses en las fórmulas electorales. A la vista de los resultados, se puede medir el éxito de esa campaña.

Aliándose a la mini-sobra de la burguesía, el PSOL explicitó su vocación política. Aceptando un pseudo-frente de izquierda, después de haber hecho campaña pública por un frente clasista, el PSTU manifestó todas sus limitaciones políticas. La integración del PSTU a un frente de características democratizantes y nacionalistas, por su programa y por sus candidatos, no fue una cuestión de táctica electoral, puesto que reforzó la tendencia a la liquidación de la independencia de clase y del socialismo que está presente en la izquierda brasileña.

24. EL *TSUNAMI* DE EVO MORALES

En mayo-junio de 2005, una nueva insurrección popular en Bolivia derribó al gobierno de Carlos Mesa y a la tentativa de golpe parlamentario (que impondría al presidente del Senado, el derechista Hormando Vaca Diez), con lo que la revolución boliviana entró en una nueva etapa. La ascensión del presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé, no significó una victoria popular, sino que expresó las limitaciones políticas de las masas insurreccionadas para imponer un desenlace revolucionario a la situación.

Bolivia atraviesa, desde la insurrección de octubre de 2003, una etapa revolucionaria. Es una etapa que no surgió de repente, sino que fue la culminación de luchas de masas de características excepcionales en el campo y con relación a la estatización del servicio de agua, en primer lugar en Cochabamba, explotado por la norteamericana Bechtel. El eje del proceso revolucionario es la nacionalización del petróleo y del gas. En las vísperas de la insurrección de 2003, el gobierno de entonces se aprestaba a cerrar un acuerdo de exportación de combustibles a México y Estados Unidos, a través de puertos chilenos, que serían reconvertidos en gas licuado en su destino. Para la masa del pueblo boliviano la consumación del proyecto significa una gigantesca confiscación de recursos y el entierro definitivo de cualquier posibilidad de progreso social. La ínfima renta prevista en los contratos petroleros apenas alcanzaría para colmar el déficit fiscal boliviano durante un corto período de tiempo.

El gobierno de Mesa, que sucedió al Goni, sólo expresó, como el propio gobierno de Rodríguez, el crónico déficit político de las masas bolivianas para transformar su capacidad insurreccional en toma del poder por los explotados. En julio del 2004, el precario régimen de Mesa, cuya estabilidad dependió por entero del apoyo o la tregua que le brindaron las direcciones políticas y sindicales de las masas (MAS, Pachakuti, COB, CSTUCB) reunió fuerza suficiente como para aprobar, en plebiscito fraudulento, una nueva ley entreguista de los hidrocarburos, encubierta tras una fraseología nacionalista-fiscalista.

La trampa "democrática" tuvo poco aliento. En 2005, frente al agravamiento de la pauperización popular, las masas bolivianas no se limitaron a replantear sus reivindicaciones elementales (salario, tierra, trabajo) sino que retomaron enteramente la agenda de octubre de 2003, la nacionalización de todos los recursos naturales y la defensa de la unidad del país (contra las tentativas secesionistas de las oligarquías de Tarija y Santa Cruz de la Sierra) como base para una existencia nacional independiente. El gran bombero de la situación revolucionaria, el MAS de Evo Morales, quedó superado por los acontecimientos (uno de sus dirigentes declaró: "Las bases nos superaron. Queríamos marchar por el aumento de los royalties, pero el pueblo quiere la nacionalización").

Junto con el papel del MAS, que pretendía explícitamente garantizar el final del mandato de Mesa en el 2007, saltó por los aires el papel intermediario-bombero de los Lula y los Kirchner, en defensa de los intereses de la semi-privatizada Petrobrás y de Repsol, o sea, del gran capital petrolero internacional. Con la asunción a la presidencia del titular de la Corte Suprema, el poder político en Bolivia se había convertido en una nulidad perfecta.

El presidente del Senado había acariciado la idea de reemplazar a Mesa y desatar una represión en gran escala, pero la tentativa fue ahogada en la raíz, de un lado por una gran movilización popular, que rodeó la ciudad de Sucre, donde había ido a refugiarse el Congreso, y del otro lado, por la decisión del gobierno de Bush y de sus cómplices de Argentina y Brasil, de dominar el levantamiento popular por medios democratizantes.

Influyó en esta orientación la incertidumbre acerca de si el ejército sería capaz de ejercer el gobierno en forma duradera, en el caso de un golpe.

Ninguna tentativa democratizante podria soslayar que, para las masas bolivianas, los hidrocarburos se habían convertido en una cuestión de vida o muerte. Las sucesivas victorias populares contra la privatización del agua y otros recursos habían desarrollado una conciencia nacional que ya no podrá ser erradicada sin una contrarrevolución. Y la larga crisis desnudó el rol de intermediario de Evo Morales, entre los trabajadores y el imperialismo. El problema era crear una alternativa política, cuestión en la cual la izquierda combativa y revolucionaria boliviana se mostró incapacitada.

Si las alternativas capituladoras poseían todavía vigencia política, sin embargo, ello también se debía a las propias limitaciones del movimiento obrero y campesino, que debían ser superadas políticamente. La gran heterogeneidad del movimiento popular, en el que ejercen hegemonía planteos divisionistas de carácter indigenista (que oponen la "lucha étnica" a la lucha de clases) o sindicalista (que se oponen a la organización política independiente en nombre de la autonomía de la COB o los sindicatos agrarios) era la base en la que se apoyaba el papel de las direcciones políticas capituladoras o traidoras. La evolución política de la lucha popular dependía de los distintos escenarios que se presentasen.

Lo principal, sin embargo, es que la revolución boliviana, como eje de la revolución latinoamericana, planteaba una tarea de fondo para la vanguardia obrera de todo el mundo: una campaña internacional por la nacionalización sin indemnización, y bajo control obrero, de toda la industria petrolera y energética de América Latina, desde México hasta la Argentina. Esta sería la única base posible para la unidad antiimperialista del continente, o sea, para su independencia nacional, contra las maniobras divisionistas y expropiadoras de los imperialismos yanqui y europeo.

El planteo nacionalista del presidente venezolano Hugo Chávez, la formación de Petrosur como compañía energética, con los gobiernos de Brasil y Argentina, tropezaba con su carácter limitado y, sobre todo, con la política pro-imperialista de los gobiernos de Lula y Kirchner, gran defensor del capital financiero internacional y de la privatización blanca de Petrobrás, puntual pagador de la deuda externa, el primero; agente de los intereses de la petrolera española Repsol, el segundo. El papel del chavismo como freno nacionalista a la revolución boliviana entraba también en contradicción con sus choques con el imperialismo yanqui, proyectando la crisis boliviana al escenario y a la diplomacia internacionales, abriendo un nuevo frente de crisis política internacional. Con la nacionalización sin pago de todos los vitales recursos naturales del continente, éstos serian puestos al servicio de las necesidades del pueblo trabajador, sacados de la voracidad lucrativa de los grandes pulpos energéticos internacionales.

Esta no es una tarea sólo latinoamericana. Un papel especial en la campaña deberia estar reservado a la vanguardia obrera de los EEUU, oponiéndose a las maniobras del petrolero Bush, planteando la expropiación de los grandes grupos petroleros, y a las tentativas imperialistas de progresiva penetración militar en América Latina (base ecuatoriana de Manta, Plan Colombia, enclaves militares en Chapare, Yunga y Trinidad, en Bolivia, entre otros). Y también a la vanguardia obrera europea, oponiéndose y denunciando a British Petroleum, Shell, Total, Repsol y otros grupos, explotadores de los pueblos latinoamericanos y de otras regiones del mundo, defensores de una "unidad europea" que les permita actuar articuladamente en todo el mundo contra las naciones explotadas y oprimidas.

El completo vacío político boliviano adelantó las elecciones para 2006. El MAS de Evo Morales apareció como la única alternativa política estructurada frente al descalabro de la partidocracia liquidada por el proceso revolucionario desde el año 2000 en adelante. La izquierda que criticaba las limitaciones y capituaciones del MAS, estructurada básicamente alrededor de las cooordinadoras populares de El Alto y de ciertos sectores sindicales (Bloque Antineoliberal) y fabriles de La Paz, la COB, la FEJUVE o la COR alteña, mostró una total incapacidad, incluyendo un cretinismo antiparlamentario que el viejo POR hizo mucho por inocular en la vanguardia combativa, para estructurar una alternativa propia, lo que fue dejando el campo libre a la fórmula Evo Morales – Álvaro Garcia Linera.

Lo máximo que la izquierda anti-MAS llegó a parir fue lo siguiente:

"DECLARACIÓN DE LA PRIMERA CUMBRE OBRERO POPULAR

En la antesala de las Elecciones Nacionales y Prefecturales que se desarrollaran en Bolivia, los trabajadores y los movimientos sociales reunidos en la ciudad de El Alto, considerado como el cuartel de la Revolución Boliviana en el Siglo XXI, declaramos lo siguiente:

1.- Los trabajadores bolivianos y los movimientos sociales de Bolivia ahora más que nunca estamos convencidos que las Elecciones Nacionales y Prefecturales que fueron convocadas para desarticular la lucha tenaz de los explotados del país, no resolverán los problemas que estrangulan a los bolivianos ni defenderán la soberanía y la dignidad del país. La pobreza, el hambre y la desocupación seguirán sumiéndonos.

2.- Concientes de que a la luz de nuestras luchas recientes que se caracterizan por poner contra la pared al neoliberalismo y no poder traducir estas luchas en la toma del poder, los trabajadores y movimientos sociales de Bolivia tenemos la elemental obligación de articular y consolidar la Asamblea Nacional Popular Originaria como un órgano de poder. La Asamblea Constituyente que proyecta el actual gobierno no tiene otro objetivo que salvar los intereses de las transnacionales.

3.- A estas alturas los trabajadores y explotados de nuestro país estamos seguros que ninguno de los candidatos que tienen opciones para controlar el poder vía elecciones se atreverán a recuperar nuestros recursos naturales, por tanto no nos queda otro camino que suspender el cuarto intermedio resuelto en las jornadas de mayo-junio para concretar los siguientes objetivos.

o Nacionalización sin indemnización de los hidrocarburos y de los recursos naturales.

o Anulación total del DS 21060

o Profundización y concretización del instrumento político de los trabajadores aprobado en el Ampliado Nacional de la COB.

o Lucha por la vigencia del salario mínimo vital con escala móvil y la garantía de la estabilidad laboral. No permitiremos la anulación del fuero sindical por los gobiernos de turno.

o Recuperación de las empresas de los servicios públicos a favor del pueblo.

o Defensa intransigente por la unidad de la nación, lucha contra las maniobras de división de la oligarquía de Santa Cruz y Tarija bajo el pretexto de la autonomía.

o Extradición inmediata del genocida de Gonzalo Sánchez de Lozada y su encarcelamiento junto a sus colaboradores en Chonchocoro. 4.- Los explotados y los movimientos sociales estamos concientes que para concretar nuestros objetivos inmediatos, que nos llevarán hacia la instauración de un gobierno de obrero-campesino, sólo podemos confiar en la acción directa de masas y nuestros propios

instrumentos de lucha. Por esa razón tenemos la elemental obligación de fortalecer la COB, CODes, CORes, los sindicatos de base y las organizaciones populares identificados con la lucha del pueblo boliviano.

5.- Los trabajadores bolivianos nos declaramos en estado de alerta ante cualquier intento de intervención del imperialismo y el ruido de sables.

6.- Los trabajadores y los movimientos sociales convocamos a los explotados de todos los confines de la patria a construir las Asambleas Populares Regionales en marzo del 2006. Los representantes de esos organismos deben designar sus delegados para concretar y fortalecer la Asamblea Nacional Popular Originaria que se reunirá el 10 de abril de 2006 en la ciudad de El Alto.

En esta lucha, los explotados sólo tenemos que perder nuestras cadenas de explotación y humillación.

El Alto, 10 de diciembre de 2005".

Con direcciones que se tomaban vacaciones con cuartos intermedios lo único que se ofrecía en la lucha electoral era Evo Morales, que no planteaba la nacionalización sin pago de los hidrocarburos. Después de frases altisonantes, que apenas ocultaban la impotencia, la "cumbre" proclamaba un nuevo cuarto intermedio, hasta abril del 2006... La declaración prometía el escarmiento si se llegaban a escuchar ruidos de sables, pero se tomaba vacaciones hasta abril de 2006. Era una adaptación pasiva a las elecciones; incluso a una victoria electoral de "Tuto" Quiroga (el candidato del imperialismo), no digamos de Morales.

Criticando el desvío electoral, no llamaban al boicot y a desbaratar las elecciones: no se podía venir de una tregua de seis meses y anunciar un boicot real efectivo. Si el que rechaza un proceso electoral, no lo boicotea, se está adaptando pasivamente al resultado electoral y, por lo tanto, a todos los embustes del proceso y del resultado de las elecciones. Entre mayo-junio de 2005 y abril de 2006, la "cumbre" se dio once meses de tregua en un período revolucionario.

Las masas, mayoritariamente, iban a votar al MAS, cuando la dirección del MAS no escondía que postulaba (el "capitalismo andino", teorizado por García Linera) un compromiso con el imperialismo,[224] y cuando a la izquierda del MAS no había más que charlatanes. Las elecciones, ciertamente, no eran la salida a la crisis planteada por las insurrecciones de 2003. El intento de Morales de llegar a un compromiso sobre el

[224] García Linera, vicepresidente por el MAS, declaró que "el socialismo no es viable en Bolivia", porque "el 70% de los trabajadores en las ciudades son de economía familiar". "Usted no construye el socialismo sobre la base del 95% de la población agrícola que vive en una economía tradicional comunitaria". García Linera propone, como alternativa al socialismo supuestamente inviable, "un tipo de capitalismo andino", donde "las potencialidades familiares, indígenas, campesinas, son equilibradas, son articuladas en torno a un proyecto de desarrollo nacional y de modernización productiva". El modelo para Bolivia, agrega, es "un Estado fuerte en hidrocarburos, en inversión extranjera, en inversión privada local, economía familiar artesanal y microempresarial, y economía comunitaria. No es ni siquiera", remata, "un régimen mixto". García Linera, como se ve, concibe la transformación de Bolivia en los marcos locales – no cree que el proceso revolucionario actual tendrá consecuencias incluso más allá de América Latina. Pero un socialismo autárquico no solamente es inviable en Bolivia. García Linera postula un "capitalismo andino", lo cual es un contrasentido, porque anticipa que no pretende alcanzar al capitalismo desarrollado, pero tampoco escapar a la presión que éste ejerce por su monopolio mundial. Plantea servirse de un Estado fuerte y de la inversión extranjera para congelar la economía precapitalista de Bolivia, no para hacerla transitar a un estado histórico superior; en esto consiste el indigenismo del MAS. Estamos, entonces, ante un programa históricamente reaccionario. Un programa que parece no tener en cuenta que un Estado fuerte, en Bolivia, es imposible si no se erige a costa del capital extranjero, cuyo dominio no deja espacio para otra cosa. (Las declaaciones de Garcia Linera fueron reproducidas en *Econoticias Bolivia*, 30 de agosto de 2005).

petróleo pondría al desnudo que las limitaciones de la refundación de YPFB: se debía oponer, incluso electoralmente, a ese intento, la nacionalización sin pago, de modo que las masas, que en el referendo votaron el programa de Morales-Mesa, llegasen a la conclusión de que ese programa era una quimera y que no habría alternativa entre la dominación de los monopolios y la nacionalización sin pago. Bolivia se encontraba en la encrucijada de superar de una vez y para siempre la impasse revolucionaria que vive desde la guerra del Chaco y desde la revolución de 1952.

En noviembre de 2005, el MAS venció ampliamente las elecciones generales bolivianas, con más del 50% de los votos,un resultado que muchos consideraron inesperado. En vísperas de la elección un desabastecimiento de gas licuado anunció el juego de las petroleras. El origen inmediato de la crisis era la ley de hidrocarburos, cuya posible modificación seria parte de la agenda del nuevo gobierno. Lo que no se conocía es si esa modificación seria para "ablandar" la norma o, en cambio, para "endurecerla" con vistas a una posible nacionalización. Fue sintomática la declaración del candidato a vicepresidente por el MAS, Álvaro García Linera: "En enero [de 2006] – cuando asuma el nuevo gobierno – se va a acabar la jauja y las empresas deberán subordinarse a un plan energético nacional; si no pueden abastecer el mercado interno que se vayan". Fue evidente en el acto de proclamación del binomio masista, en la Plaza San Francisco, que la nacionalización era la consigna que con más fervor cantaba el público asistente al acto electoral.

El MAS no es un partido, como el PT de Brasil. Tampoco es una coalición de partidos, como el Frente Amplio de Uruguay. El MAS es una coalición de “movimientos sociales” diversos, y hasta contradictorios, nucleados en torno a la Confederación de Cocaleros de Bolivia. No tiene cuadros partidarios con ascendiente propio entre las masas o incluso predicamento dentro del propio MAS. Los intentos de “institucionalizar” al MAS fracasaron, uno tras otro. “No hay costumbre de trabajo en comisiones. El parlamentario Antonio Peredo quiso organizar una comisión de relaciones internacionales, pero no funcionó. Tampoco la que intentó el dirigente Iván Iporre, para asuntos internos. Tampoco una comisión legislativa que ensayaron los congresistas. En 2002, cuando se postuló a la presidencia, Evo Morales designó una comisión política. Se reunió una vez. Ahora funciona otra, con más organicidad, pero puede ser cambiada por el jefe. Nunca fue revelada públicamente la identidad de sus miembros”.[225]

La asamblea del MAS es un mecanismo de convalidaciones de lo que Morales decide, más que de dirección. En las asambleas locales del MAS, bullen elementos de izquierda, hasta revolucionarios. Morales no cuenta con una burocracia partidaria disciplinada, como Lula en Brasil; tampoco con una estructura política con experiencia de gestion en el Estado, como el proprio PT y el Frente Amplio en Uruguay. Evo Morales, en persona, debería enfrentar los problemas.

La victoria abrumadora del MAS de Evo Morales modificó la situación política en Bolivia y América Latina. Morales se acercó al 60% de los votos, cuando las encuestas pre-electorales le habían dado, a lo sumo, el 35%. Hubo una participación excepcional de la clase social que se caracteriza por un escaso entusiasmo por los procedimientos electorales: los campesinos. También hubo un vuelco de la clase media. Una movilización electoral tan impresionante se convierte por sí misma en un factor político, porque traduce una voluntad colectiva.

[225] *El Comercio*, Lima, 25 de diciembre de 2005.

Los enviados extranjeros, por ejemplo, suponían que los partidos capitalistas que enfrentaban al MAS conseguirían una mayoría en el Congreso –especialmente en el Senado. El imperialismo quedó privado de un recurso político que descontaba. Cuando Salvador Allende ganó, en 1970, la mayoría parlamentaria nacional-democristiana lo avaló para la presidencia solamente después que la Unidad Popular de Chile firmara el 'acta democrática' que condicionaba su gestión política.

La magnitud de la victoria electoral del MAS y el confinamiento de los opositores a una piadosa minoría explican la caída de las acciones de Repsol, al día siguiente, en la Bolsa de Madrid, a pesar de que Morales ha sido el artífice de la ley vigente de hidrocarburos que bloquea la nacionalización de los monopolios petroleros (Morales y sus asesores del MAS redactaron el planteo que el ex presidente Mesa llevó al referendo sobre los recursos energéticos de mediados de 2004). El planteo del MAS se limitaba a la pretensión de elevar la imposición sobre el petróleo y a forzar la prioridad del tendido de redes de gas natural en las principales ciudades bolivianas.

El *tsunami* electoral de Evo Morales dejó al desnudo, otra vez, la impotencia de los "izquierdistas" bolivianos. La base de la COB votó en masa a Morales, al igual que la base de la Central campesina de Quispe. Estas no se hacen cargo de que llamaron a sabotear la victoria de Morales, proponiendo el voto en blanco.

Los resultados electorales, sin embargo, le dieron al imperialismo importantes recursos políticos. La derecha se hizo del gobierno de Santa Cruz de la Sierra y de otros departamentos petroleros. En los meses previos, la derecha, amenazando con la secesión de estas regiones, había impuesto que estas autoridades fueran designadas por el voto, aún contrariando a la Constitución boliviana, que establece que es una función del poder central. Este conflicto político se junta con las presiones del gobierno de Bush para que se ratifique la legislación que penaliza el cultivo de coca.

En las elecciones se impuso la línea de compromiso con el imperialismo que encarnaron Evo Morales y el MAS desde antes, incluso, de la insurrección de octubre de 2003. El resultado electoral remata una estrategia guiada por la necesidad de un compromiso entre la presión de las masas, por un lado, y del imperialismo, por el otro. El éxito de esta estrategia fue facilitado por la incapacidad de los izquierdistas, de un parte, y por el trabajo de los Kirchner y compañía del otro. Pero el desenlace electoral marcaba el fin de las posibilidades de esta estrategia.[226]

Evo Morales asumió la presidencia el 22 de enero en medio de enormes expectativas populares, reflejadas en la multitudinaria asistencia a los actos centrales, como la ceremonia indígena en Tiwanaku. La importante presencia de mandatarios (Lula, Chávez, Kirchner, Lagos, etc.) y delegaciones extranjeras, entre las que se destacó Thomas Shannon, Subsecretario de Asuntos Latinoamericanos del gobierno de Estados Unidos y del Principe de Asturias en representación del Estado español, refrendó el apoyo internacional. Millones de trabajadores, campesinos, indígenas y sectores de clase media habían otorgado un contundente triunfo electoral al MAS. El contenido fundamental del clima de gran "fiesta democrática" y "unidad nacional" fue convocar a la "moderación", la "paz social".

En su primer discurso como presidente, Evo Morales reiteró las propuestas del programa masista. Fue un discurso crítico en la forma, reivindicando a los pueblos indígenas y los movimientos originarios, prometiendo un "gobierno de las mayorías" y una "revolución democrática y cultural". Evo atacó al neoliberalismo, a sus viejos

[226] ALTAMIRA, Jorge. Transición en Bolivia. *Prensa Obrera* n° 932, Buenos Aires, 2 de febrero de 2006.

representantes y la corrupción. Convocó a apoyar el “cambio en democracia” a la oposición y a la “comunidad internacional”. Apeló a los empresarios y agroindustriales, propuso a EEUU un pacto para combatir el narcotráfico e insinuó discutir el ALCA; al mismo tiempo que planteó algunas reformas parciales, como el recorte del sueldo presidencial y las dietas parlamentarias y medidas de contra la corrupción.

En cuanto a la Constituyente, Evo propuso que se reuniese el 6 de agosto de 2006 “para refundar el país”, “unir a los bolivianos respetando la diversidad” y lograr un nuevo pacto social. Evo no abundó en su política para los hidrocarburos, aunque insistió en que Bolivia “necesita socios, no dueños” apelando a nuevas inversiones. Lo que el MAS denominaba “nacionalización” era la renegociación de contratos con las petroleras, con aumento de impuestos, y mayor intervención estatal, recomponiendo YPFB. En cuanto a las “capitalizaciones”, el MAS aceptaba la “seguridad jurídica”, comprometiendo el respeto a la privatización de servicios y empresas públicas. Evo habló de distribución de tierras, pero asegurando que no se tocaria las grandes propiedades “productivas” del Oriente.

Evo Morales aceptó continuar la privatización del yacimiento de hierro de El Mutún, en Santa Cruz, y ensalzó al Comité Cívico de este departamento, grandes representantes de la reacción. Evo y Álvaro García Linera reafirmaron el respeto a la “seguridad jurídica” y la “estabilidad macroeconómica”, mientras que líderes empresarios como Roberto Mustafá, presidente de la CEPB, se pronunciaron por un entendimiento con el nuevo gobierno. Este manytuvo el bloque con representantes del MSM de Juan del Granado (el alcalde de La Paz que “cohabitó” con el MNR y aplicó los planes del BID), los “pequeños empresarios”, las ONG ligadas a la iglesia y al imperialismo europeo. Los gobiernos de Europa recibieron garantías para sus capitales en la gira de Evo, que reiteró el respeto al capital extranjero, rechazando cualquier expropiación y pidiendo nuevas inversiones en Francia (propietaria de Total y Aguas del Illimani) y España (propietaria de REPSOL, SABSA y otras empresas, en Bolivia).

La oligarquía boliviana, las petroleras y el imperialismo ganaron un importantísimo punto de apoyo para defender sus exigencias con la conquista de las prefecturas de Santa Cruz y Tarija por parte de la derecha. El surgimiento de este virtual “doble poder” en el oriente boliviano fue directa consecuencia de la capitulación de Morales, que aceptó la elección directa de los prefectos (algo que no se encuentra establecido en la Constitución) y la sobre-representación de las provincias orientales en el Senado.

El vicepresidente electo, García Linera, calificó el poder ganado por la oligarquía como “un contrapeso que la población nos ha colocado, una señal sabia del electorado”.[227] Se trataba de una señal de la tendencia del nuevo gobierno a la conciliación con la reacción. La agenda de la burguesía cruceña – que no se refiere sólo a sus intereses petroleros sino también al muy poderoso lobby agroexportador de la soja – choca frontalmente con la de Morales. Las provincias orientales reclaman una “descentralización” que significaria la transferencia a los gobiernos locales de una parte sustancial de los recursos del Estado.

El 28 y 29 de abril de 2006, Hugo Chávez, de Venezuela, Evo Morales, de Bolivia y Fidel Castro, se reunieron en La Habana y suscribieron un acuerdo para la construcción de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y los Tratados de Comercio entre los Pueblos. Estos últimos eran una propuesta de Bolivia que plantea “que son instrumentos de intercambio solidario y complementario entre los

[227] *El Deber*, Santa Cruz de la Sierra, 20 de diciembre de 2005.

países destinados a beneficiar a los pueblos en contraposición a los Tratados de Libre Comercio que persiguen incrementar el poder y el dominio de las transnacionales".

El acuerdo firmado entre los tres países contempló la complementación productiva, el intercambio de paquetes tecnológicos, la coordinación y colaboración para eliminar el analfabetismo, inversiones de interés mutuo, planes culturales conjuntos, cooperación en el tema comunicacional, intercambio de conocimientos científicos y técnicos. Venezuela prestaria ayuda a Bolivia en el sector energético y minero, daria 5000 becas para estudiantes bolivianos, y 30 millones de dólares para atender necesidades de carácter social y productivo, etc. Por su lado, Bolivia se comprometió a contribuir con la exportación de productos que fuesen necesarios a Cuba y Venezuela.

En mayo de 2006, el nuevo gobierno de Evo Morales anunció la nacionalización de los hidrocarburos, y ocupó militarmente las plantas de la mayor operadora local, la "brasileña" Petrobrás. "Esta es la hora de la tercera y definitiva nacionalización de los hidrocarburos, antes nuestra patria nacionalizó los pozos petroleros explotados por la Standard y por la Gulf Oil, ahora se recuperan las riquezas naturales en manos de las empresas transnacionales, se acabó la ley de capitalización de los gobiernos que entregaron nuestros recursos, ahora recuperamos la soberanía del país", dijo Evo Morales, acompañado por su gabinete de ministros y representantes de los movimientos sociales. Las fuerzas armadas y la policía nacional ocuparon 52 estaciones hidrocarburíferas en todo el país, para ponerlas bajo administración de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB).

Según el gobierno, los volúmenes, precios, comercialización, industrialización y destinos del petróleo, gas y derivados serian decididos por YPFB. Morales hizo un llamado al personal boliviano que trabajaba para las empresas transnacionales a sumarse a la decisión y apoyar la refundación de la empresa estatal. Y convocó a las empresas a que se adecuasen a las decisiones soberanas del gobierno. En las ciudades de El Alto y La Paz, multitudes detuvieron el festejo por el 1º de Mayo y entonaron el himno nacional. El vicepresidente, Alvaro García Linera desde palacio de gobierno, llamó a la movilización de todos los bolivianos, "en esta medida tenemos que jugarnos la vida los bolivianos, tenemos que defenderla, no vamos a aceptar presión de ninguna empresa, gobierno o traidor, la patria renace y con esta decisión honramos a nuestros muertos, y defenderemos la soberanía de los bolivianos".

La anunciada nacionalización de los hidrocarburos fue la aplicación a fondo de la ley 3058, aprobada en 2005 por el Congreso boliviano y el gobierno del ex presidente Carlos Mesa, en medio a una gigantesca rebelión popular. Esa ley otorgaba 180 días para que las transnacionales petroleras, que operaban ilegal e inconstitucionalmente en Bolivia - según dictamen inapelable del Tribunal Constitucional - firmasen nuevos contratos para poder seguir explotando las riquezas naturales del país. Esa ley ofrecía legalizar la actividad de las petroleras, impidiendo su expulsión reclamada por algunos sindicatos, a cambio de un aumento nominal de impuestos hasta un 50%. El decreto de nacionalización de Morales daba un nuevo plazo de 180 días para que las petroleras se ajustasen a esa ley, que entrega al Estado el control y propiedad formal de los hidrocarburos, pero que otorga a las transnacionales la propiedad real y los mayores beneficios derivados de la explotación, comercialización, exportación e industrialización del gas y el petróleo.

El 7 de abril del 2005, el Tribunal Constitucional declaró sin validez jurídica los 78 contratos con los que Repsol, Petrobrás, Total, Enron, Shell, British Petroleum, Vintage y otras transnacionales explotaban las reservas de gas y petróleo de Bolivia, valuadas en por lo menos 150 mil millones de dólares, las segundas en importancia de

Sudamérica. Según los cálculos del gobierno de Morales, con la aplicación del decreto de "nacionalización" el Estado boliviano obtendría un ingreso de aproximadamente 750 millones de dólares, generados por la recepción de impuestos y regalías, incluidos los ingresos extraordinarios temporales por el alza de impuestos en los megacampos de gas, además de la limitada participación estatal en la cadena productiva. Hasta entonces los ingresos generados anualmente superaban los 3.500 millones de dólares, que se traducían en su mayor parte en utilidades para las petroleras, dados los bajísimos costos de operación, producción y comercialización.

Los expertos y algunos altos funcionarios del gobierno admitieron a la prensa que el decreto 28701 de "nacionalización" de Morales no tenía nada de nuevo con relación a la Ley de Hidrocarburos 3058, con la excepción de la creación de impuestos transitorios y la compra del 3% de acciones en dos empresas petroleras y del 17% en la de transportes. En 2005, Evo Morales y los sindicatos marchaban hacia La Paz para echar abajo la Ley de Hidrocarburos 3058. El ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, dijo en conferencia de prensa que el principal aporte del "Decreto Héroes del Chaco" residía en el aumento fiscal en los megacampos de hidrocarburos. Evo Morales, en definitiva, no estaba nacionalizando los hidrocarburos, sino intentando obtener para el Estado boliviano un pedazo menor de la gigantesca renta del gas y el petróleo, que estaban cotizando a uno de los precios más altos de la historia.

Chávez, en Venezuela, impulsó "contratos de asociación" (formación de empresas mixtas con mayoría de PDVSA). Las petroleras se resistieron a aceptar en Bolivia el mismo tipo de contrato que aceptan firmar en Venezuela. La razón es que Bolivia no es Venezuela: el desarrollo capitalista llevó en Venezuela a la creación de una empresa estatal que hoy los pulpos no pueden ignorar; en Bolivia, la "refundación" de tal empresa lesionaría los intereses concretos de las petroleras. En Venezuela hay un Estado que tiene un mayor poder de arbitraje frente al capital internacional que el Estado boliviano; cuando PDVSA estuvo a punto de ser vaciada, el gobierno de Chávez reconstruyó esa capacidad de arbitraje.

El gobierno boliviano planteaba apropiarse del 82% del valor de la producción petrolera, incluida la refinación, por medio de medidas impositivas y de una participación mayoritaria en el capital. Aún con todas esas limitaciones, en reunión en Puerto Iguazú con los presidentes del Mercosur, el presidente Lula dejó en claro que este planteo era inaceptable para Brasil, por lo que se llegó al compromiso de las negociaciones previstas durante seis meses. Petrobrás no aceptaba siquiera una modificación importante del precio del gas que Bolivia vendía a Brasil, porque no podría repasarlo a los precios de consumo final, ni tampoco aceptaría un subsidio significativo del Estado. Esto puso al desnudo que Petrobrás no es una empresa nacional sino una "estatal de mercado", controlada por las Bolsas de Nueva York y San Pablo, por lo que no podía admitir una caída de su nivel de reservas ni de sus beneficios, sin romper con sus accionistas. Petrobrás es un caso claro de corrupción social de una empresa nacionalizada, por eso entró en contradicción con la nacionalización boliviana.

El canciller de Brasil, Celso Amorim, manifestó la "incomodidad" del presidente Lula con el único presidente sudamericano que apoyó la nacionalización: dijo a la prensa que el apoyo de Hugo Chávez a la decisión boliviana "colocaba en riesgo no sólo el gasoducto - que debe llevar gas de Venezuela a Argentina, pasando por Brasil-, sino la propia integración sudamericana". El presidente de Petrobrás, José Sergio Gabrielli, se mostró mucho más enérgico rechazando la nacionalización, adelantando que la empresa dejaría de invertir en Bolivia y advirtiendo que podía recurrir a los tribunales de Nueva York. También hubo una declaración diplomática del gobierno de Lula, reconcociendo

el derecho de Bolivia sobre sus recursos naturales. Evo Morales reaccionó diciendo que Petrobrás "chantajeaba" a Bolivia y que la empresa había trabajado ilegalmente en su país.

El problema de fondo era que Petrobrás no era una empresa brasileña.[228] Dejó de serlo en bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, cuando el Estado brasileño pasó a controlar apenas el 37% de las acciones de la empresa, en tanto el 49% están en manos de estadounidenses y el 11% en manos de testaferros en Brasil. Pero en los años 1990, Petrobrás se volcó a Bolivia y a conquistar reservas de petróleo en otros países sudamericanos, inclusive con importantes negocios en Nigeria. Para Carlos Lessa, Petrobrás "está más preocupada en atender a los especuladores de la Bolsa de Nueva York que de actuar como institución del Estado nacional brasileño".[229]

Petrobrás controlaba el 20% del PIB boliviano, donde invirtió 1.500 millones de dólares desde 1997, representa la mitad de los impuestos recaudados en Bolivia, respondía por el 100% de la refinación de petróleo y el 57% del gas boliviano. La mitad del gas importado Brasil procedía de Bolivia, un suministro vital para la industria paulista. Y son brasileños buena parte de los terratenientes que producen soja en el departamento de Santa Cruz, Brasil tiene intereses muy importantes en Bolivia. Pero también los tenía en otros países de América Latina. Petrobrás tiene importantes inversiones en Ecuador, en Argentina (donde en 2005 sus ganancias crecieron un 145%) y en Uruguay. Otras empresas brasileñas siguen los pasos de Petrobrás, la segunda empresa en tamaño del continente.

El partido tomado por Kirchner junto a Lula, a su vez, no era solamente por Repsol, sino también por la metalúrgica Techint, a la que prometió subsidiar la construcción del gasoducto del norte (o sea con gas boliviano) con más de 200 millones de pesos. Pero con Techint, Petrobrás y Repsol estaban los monopolios del mundo: Total, British Gas, Chevron, Pan American, o sea los que lucran con las guerras de Bush. Lula y Kirchner, finalmente, son la rueda de transmisión en la que confían los Bush, los Blair, los Zapatero para contener a Bolivia en sus aspiraciones nacionales. En este arco iris de "progresistas" defensores de los monopolios, no podía faltar el "socialismo" español; Zapatero "advirtió a La Paz sobre las consecuencias". El agente de la monarquía hispana hubiera empleado otro lenguaje, claro, si se hubiera tratado de un choque con Bus.

El carácter de la nacionalización boliviana quedó determinado por las negociaciones realizadas bajo esas presiones. Bolivia estableció una regalía del 18% e impuestos directos del orden del 32%, lo que le daría ingresos de unos 700-800 millones de dólares al año. Por otro lado, YPFB recibiria, a título gratuito, la administración de los Fondos de Capitalización (jubilación privada), que ya participaban con entre un 30 y un 50% del capital en las sociedades petroleras privatizadas (Andina, Chaco, Transredes). Todo esto no alcanzaba para refundar YPFB, porque los mayores ingresos debían cubrir la crisis fiscal y porque los Fondos de Capitalización están comprometidos al pago de jubilaciones. Bolivia tampoco puede capitalizarse significativamente a partir de los bajos volúmenes de producción; para explotar sus enormes reservas se requiere poder financiar grandes inversiones.

Esto llevaba a la conclusión de que la vía elegida, para 'refundar' YPFB ofrecía posibilidades limitadas. Sin hablar de los limites adicionales impuestos por la

---

[228] Repsol, en Argentina, se pone el nombre "argentino" de YPF: la realidad es que Petrobrás no es brasileña y Repsol-YPF no es argentina.

[229] *Valor Econômico*, San Pablo, 10 de mayo de 2005.

negociación con Lula, Kirchner y Zapatero, agentes de las petroleras. El asesor de Lula, Marco Aurelio García, confesó que Brasil intentó impedir la nacionalización boliviana (en "diez visitas que hice a Bolivia") con el ofrecimiento de "infraestructuras", y de una "inversión de 6.500 millones de dólares". A la luz de los límites propios de la nacionalización y de las maniobras de los negociadores argentino-brasileños, la única vía para empezar a reconstruir efectivamente una empresa estatal en las condiciones de pobreza social y fiscal de Bolivia seria la expropiación de todos los pozos y activos que fueron privatizados. Se trata de yacimientos que fueron descubiertos por YPFB y que fueron privatizados a precios de remate, lo que significó una confiscación al revés, o sea del patrimonio estatal por los pulpos internacionales.

La explotación del gas boliviano fuera la fiesta de Repsol y Petrobrás porque se lo vendían a sí mismas a un precio muy bajo, en perjuicio del fisco boliviano (menos de 3 dólares por millón de BTU, contra 12 dólares en el mercado internacional) para luego revenderlo en Argentina y Brasil. El reclamo de Bolivia de aumentar el precio en un 65% cortaba ese negocio. Si la explotación del combustible estuviera nacionalizada en Sudamérica, los costos y los beneficios se armonizarían entre los países que estuvieran adheridos a un plan de industrialización común de sus economías. Mientras los presidentes de centroizquierda (Kirchner, Lula y Rodríguez Zapatero) rechazan la propuesta de Morales de incrementar los ingresos fiscales a costa de las transnacionales, el reaccionario congreso de Estados Unidos aprobó una ley para aumentar la parte del gobierno de los EEUU en los beneficios petroleros hasta 20.000 millones de dólares.[230] Mientras EEUU paga seis dólares por mil metros cúbicos de gas, Lula y Kirchner han puesto objeciones al aumento del precio hasta cinco dólares por mil metros cúbicos.

La nacionalización boliviana tuvo el efecto adicional de poner a la luz la situación de quiebra potencial de Repsol e incluso de Petrobrás. En el voraz mercado internacional no alcanza con registrar ganancias para quedar a flote, ni anotar pérdidas para quebrar. Repsol gana mucho, pero sus reservas registradas son menguantes y su rédito no es suficiente para reponerlas. La nacionalización boliviana creó un escenario de posibilidad política para una campaña por la nacionalización (expropiación) de los recursos estratégicos en América Latina.

Venezuela aportó con asesores y respaldo político a la nacionalización resuelta por Bolivia. El diseño final de la nacionalización boliviana tomó como modelo el de Venezuela, o sea una asociación pública-privada con mayoría estatal. El problema es que YPFB no existe, mientras PDVSA es una empresa establecida con enormes recursos. Otro problema es que Chávez impulsa una asociación petrolera latinoamericana con Lula y Kirchner, que quieren poner límites a la nacionalización boliviana compatibles con los intereses de Repsol y Petrobrás. Hugo Chávez y Evo Morales firmaron más de 20 acuerdos en los setores de hidrocarburos y petroquímica. La inversión venezolana en el sector petrolero de Bolivia seria de más de US$ 1,5 mil millones.

Morales también ha anunciado un programa de reforma agraria basado en la expropiación de tierras subutilizadas, que excluirá las grandes propiedades agroindustriales, productivas y provechosas, de los fértiles llanos de Santa Cruz. Se propone distribuir tierras estatales menos fértiles y alejadas de los mercados y las carreteras. En el ámbito laboral, su promesa de doblar el salario mínimo de 50 a 100 dólares al mes ha sido reemplazada por un incremento de sólo 6 dólares.

---

[230] *Financial Times,* Londres, 20 de mayo de 2006.

25. VENEZUELA Y COLOMBIA EN LA ENCRUCIJADA CONTINENTAL

La política imperialista para América Latina encontró cada vez más obstáculos, y entró cada vez más en crisis, en el nuevo siglo. En Venezuela, la estrategia de Washington del "todo o nada" fracasó reiteradamente. Las nacionalizaciones bolivianas (y el retiro de la concesión a la Oxy en Ecuador) han profundizado una crisis que era ya manifiesta, en América Latina, y una crisis internacional con la Unión Europea y con Estados Unidos.

América Latina ha ingresado en la crisis mundial por la vía de la cuestión energética y del muro de separación que construye Bush en la frontera con México. La nacionalización boliviana tiene una proyección internacional. La reaparición del nacionalismo burgués o pequeño burgués en América Latina es un forzado cambio de frente impuesto a la burguesía nativa como consecuencia de la crisis generada en el período precedente, la cual produjo una hecatombe social, insurrecciones y caídas de gobiernos. Expresa claramente el agotamiento de una etapa de globalización, aunque el nacionalismo burgués es incapaz de neutralizar las tendencias fundamentales del capital mundial. Es un resultado de la presión de las masas empujadas a la lucha por la miseria social. No tiene un ápice de keynesiano ni recupera el "Estado social".

Las "misiones" organizadas por Chávez son operaciones de socorro social, no se inscriben en una transformación del Estado. Este nacionalismo procura, antes que nada, restablecer la capacidad de arbitraje del Estado. Explota una coyuntura económica de elevados precios de las materias primas; sus movilizaciones de masas son aisladas y defensivas. Incluso las grandes movilizaciones del chavismo son siempre una reacción a las provocaciones de la derecha. Está por atrás del viejo nacionalismo en los planteos de reorganización social y de movilización de masas.

El gobierno Bush (con el apoyo del Congreso demócrata) se lanzó una desesperada política para derribar a Chávez, empujó a la confederación sindical burocrática, CTV, con apoyo financiero y "asesoramiento" del AFL-CIO, a una huelga general en 2001 que fracasó y llevó a la formación de una nueva confederación que redujo a la CTV a un aparato impotente. En abril de 2002, los EE.UU. respaldaron un golpe militar que fue derrotado en 47 horas por un levantamiento popular masivo, apoyado por oficiales militares, que tuvo como consecuencia la retirada forzosa del ejército de centenares de oficiales.

De diciembre de 2002 a febrero de 2003, funcionarios respaldados por los EE.UU. y su entorno en la compañía estatal de petróleo, PDVSA, organizaron un cierre patronal y paralizaron la economía de forma temporal. Trabajadores e ingenieros leales a Chávez, apoyados por el gobierno, rompieron el cierre patronal y todos los principales funcionarios y empleados que se habían implicado en el mismo fueron despedidos, lo cual tuvo como consecuencia un redireccionamiento de las rentas del petróleo.

Los EEUU canalizaron grandes fondos del *National Endowment for Democracy* hacia una ONG para financiar un referéndum que revocara a Chávez en el 2004. El referéndum cayó derrotado por 16 puntos de margen (el 58% contra el 42%), lo cual llevó a la desmoralización, apatía y despolitización de los votantes de la derecha. En la elcción al congreso de 2005, dado que las encuestas predecían otra derrota electoral de Chávez, Washington presionó a sus ONG y a su clientela política para que se retirase de las urnas y pidiese la abstención, con el resultado de la pérdida completa de cualquier esfera institucional de influencia, la marginación de su electorado político y el giro inevitable de la clase empresarial a negociar directamente con los congresistas de Chávez en lugar de hacerlo a través de la oposición. El gobierno Bush fracasó en su tentativa de evitar que un nuevo eje político se constituyera en Venezuela, afectando a toda América Latina.

El 15 de agosto del 2004 el referéndum revocatorio para derribar a Chávez fue aplastado por la movilización de las masas. El referéndum revocatorio fue el tercer intento de la clase dominante venezolana, respaldado por el imperialismo estadounidense, de derrocar a Chávez y aniquilar toda potencial amenaza que pudiera representar para Venezuela y toda Latinoamérica. Pero todos los intentos contrarrevolucionario (el golpe militar del 11 de abril del 2002, los dos largos meses de "huelga" patronal junto con el intento de sabotaje económico al final del mismo año y el referéndum revocatorio) han sido bloqueados por la acción de las masas pobres.

Chavéz buscó un modo de acomodar a la oposición, invitándoles a trabajar junto con él para reconstruir el país. Ante la presión de los trabajadores y los pobres se fue distanciando en dirección opuesta, llamando socialista por primera vez a la revolución bolivariana, llevando a cabo las primeras nacionalizaciones de su régimen, al mismo tiempo que incrementaba tanto su retórica antiimperialista, anti-estadounidense y sus actividades en la región. Este giro hacia la izquierda alarmó a la clase capitalista venezolana y al imperialismo que temieron que las masas, cuyas expectativas seguían creciendo, radicalizasen aún más a Chávez. La secretaria de gobierno de EEUU, Condoleezza Rice, describió a Chávez como "la mayor amenaza para toda la región".

Las crecientes relaciones económicas de Chávez con Cuba, para la que Venezuela provee petróleo a precios subsidiados, ha conseguido romper parcialmente el embargo estadounidense y tenderle al régimen de Fidel Castro un salvavidas económico, ausente desde la desaparición de la Unión Soviética. Chávez fue considerado el mayor obstáculo en la estrategia de EEUU para convertir Colombia en su base de poder dentro de la región. Chávez también buscó otros mercados internacionales para exportar el petróleo venzolano, firmando acuerdos con China, Rusia, Irán y otros países de América Latina.

Aun asi, en diciembre de 2004, las fuerzas colombianas, junto con sectores de las fuerzas de seguridad venezolanas, intervinieron directamente en Venezuela secuestrando al líder de las FARC. Para algunos representantes de la oposición, no les queda otra alternativa más que convivir con Chávez. "Tenemos que morder el polvo de la derrota" dijo el gobernador del estado de Zulia pocos días antes del referéndum. “Las dos Venezuelas han de reconciliarse, Venezuela no puede seguir en conflicto”, declaró el líder de Fedcamaras.

Las fuerzas de la oposición “escuálida” en Venezuela quedaron totalmente divididas, con una parte abogando por la abstención y la otra pidiendo una lucha electoral. Después de las elecciones de octubre del 2004, pasaron a controlar tan solo 2 de los 23 estados del país, perdiendo el control de la capital, Caracas. En las elecciones locales y municipales, celebradas el 7 de agosto de 2005, ganaron menos del 20% de los escaños. En los sondeos, Chávez ha estado obteniendo niveles de aprobación de hasta el 70%, algunos de los más altos de su presidencia. Durante el Festival Internacional de la Juventud habló de permanecer en el poder hasta el 2030. Su confianza se vio fortalecida por las victorias electorales sobre la oposición y los altos precios del crudo en los mercados mundiales.

El petróleo representa actualmente el 85% de las exportaciones de Venezuela, un cuarto de su PIB y más de la mitad de los ingresos del gobierno. En 2004, las exportaciones del petróleo generaron un ingreso de 29 mil millones de dólares, bastante por encima del los 22 mil millones en 2001. Este masivo flujo de divisas permitió a Chávez mantener y aumentar los gastos en las "misiones", los programas de reforma del bienestar social que comenzaron en 2003, y están orientados sobre todo hacia las capas más pobres. Los beneficios son visibles en las calles de las áreas más pobres de Caracas. Una nueva reluciente clínica de salud o el supermercado estatal Mercal, que vende alimentos

básicos subsidiados, resaltan entre los desmoronados edificios e infraestructuras de los ranchitos.

De acuerdo con las estimativas del gobierno, 300.000 venezolanos han salido del analfabetismo (9% de ellos mayores de 10 años), dos millones han sido incorporados a las clases de educación primaria, secundaria y universitaria, y 17 millones tienen acceso a los cuidados primarios de atención sanitaria pública, gracias a las misiones. A pesar de eso, millones de venezolanos siguen sumergidos en la pobreza. Desde el 54% (1999) el porcentaje de hogares pobres subió hasta el 60% en el 2004.

Aunque el gobierno controle los precios de los alimentos básicos, la inflación varía entre 15% y 20% y una de cada dos personas no tiene una vivienda adecuada. El desempleo es el principal problema social. Ha habido un incremento de empleo a través de iniciativas como "Vuelvan Caras", creación de puestos de trabajo por parte del estado, principalmente en cooperativas y pequeñas empresas. Sin embargo, un 14% de la población sigue sin trabajo, y millones están obligados a la explotación y la inseguridad del sector llamdo “informal” (superexplotado).

La alta tasa de abstención (70%) en las elecciones locales y municipales de agosto de 2005 fue una advertencia. El nivel de abstención en las áreas pro-chavistas fue muy alto, a pesar de que el mismo Chávez había enfatizado la importancia de un alto apoyo de su seguidores. Activistas “chapistas” no vieron con buenos ojos la sustitución burocrática de activistas locales por candidatos desconocidos dentro de las comunidades. Los partidos pro-chavistas percibidos como más radicales ganaron más votos en algunas zonas.

El descontento por lo general no está dirigido hacia Chávez, sino hacia la "burocracia" que lo rodea y que con su ineficiencia, corrupción y consciente sabotaje actúa como freno. Chávez tuvo un desplazamiento hacia la izquierda en respuesta a la presión de las masas: firmó un decreto para poner a la papelera Venepal en bancarrota en manos del gobierno, después de que los trabajadores y la comunidad local iniciasen una lucha, ocupando la fábrica y pidiendo su nacionalización.

En una encuesta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos, el 47,8% de los encuestados declaró que preferirían un gobierno socialista mientras que solo un 22,7% optó por uno capitalista. Chávez habla vagamente del "socialismo en el siglo XXI" como una "nueva" clase de socialismo, pidiendo a la gente despojarse de sus viejos conceptos del significado del socialismo. ¿Podría Chávez llegar a ser un "segundo Fidel Castro"? Plantear el problema en esos términos es incorrecto e inútil: se tratatde determinar las condiciones políticas para la organización y la lucha (victoriosa) independiente de las masas trabajadores en Venezuela, junto a sus hermanos de clase de América Latina y del mundo entero.

En su desplazamiento hacia la izquierda, en parte, Chávez respondió limitadamente a la radicalización de las masas. Un sector de la clase capitalista venezolana se inclinó hacia el ala pro-capitalista del movimiento bolivariano, para ponerle un freno y hacer retroceder los logros de la clase trabajadora, y para allanar el camino para la victoria contrarrevolucionaria. El ala pro-capitalista del movimiento bolivariano dejó clara su definición del "socialismo": economía mixta en la que existen algunas cooperativas y empresas estatales pero donde la principal palanca económica descansa en manos de las clases capitalistas venezolana y extranjera.

Chávez habló sobre la investigación y la expropiación de entre 136 y 1.149 compañías capitalistas. No obstante, la mayoría de ellas estaban ya en bancarrota o a punto de estarlo. El Ministro de Industria declaró claramente que la nacionalización tendrá lugar

tan solo en casos extremos, que no habría una ola de expropiación, y que las fábricas capitalistas podrían "coexistir con la producción social".

La toma de 13.000 hectáreas de áreas ganaderas pertenecientes a Lord Vesty marcó el comienzo de la reforma agraria. Anteriormente, solamente tierras estatales habían sido distribuidas a los pobres de zonas rurales. Pero después, solamente tierras improductivas fueron tomadas en consideración para la expropiación por el gobierno. No obstante, 158 campesinos han muerto desde que la Ley Agraria fue aprobada en el 2000, demostrando así como hasta limitadas reformas son brutalmente resistidas por los patrones, a veces ayudados por paramilitares derechistas colombianos.

Las cooperativas están siendo promovidas como embriones de la sociedad socialista. En los últimos seis años 79.000 cooperativas han sido creadas especialmente en los sectores agrario y de servicios. Han tenido efecto positivo sobre la reducción del desempleo, pero esto solamente puede ser temporal. Estas cooperativas están competiendo en el mercado capitalista con empresas privadas y serian devastadas en una crisis económica. En la realidad, muchas cooperativas funcionan igual que las compañías privadas, explotando a la mano de obra y negando los derechos de los trabajadores. Hay numerosos ejemplos de empresarios privados que disfrazan sus compañías de cooperativas para obtener capital público.

Del mismo modo, Chávez está fomentando la gestión conjunta de industrias estatales, y ahora privadas. "Esto es revolución. Esto es socialismo", declaró mientras ofrecía créditos a bajo interés a pequeños empresarios de compañías privadas que accediesen a incluir representantes de trabajadores en sus juntas directivas: "Existe una interpretación distorsionada de lo que significa la gestión conjunta. La idea es incorporar a los trabajadores en la gestión y no en la propiedad e impedir tensiones innecesarias y contradicciones", dijo al diario *El Nacional*.

Además de las cooperativas, Chávez ha creado una línea aérea, una compañía telefónica, una estación de televisión y supermercados estatales que venden productos de consumo básico hasta un 30% más baratos que en el sector privado. Todos estos son intentos de rivalizar con los monopolios privados existentes. Al mismo tiempo, dejando los grandes monopolios privados, bancos, instituciones financieras, periódicos, en manos privadas, es imposible planear democráticamente la economía para satisfacer las necesidades de las masas. La clase capitalista permanecería en su posición para sabotear la economía y minar las conquistas.

Ha habido cierta reorganización en lo alto del ejército, el poder judicial, el colegio electoral y otras instituciones estatales. Pero sin la elección y el derecho a revocar a todos los oficiales del estado, se pueden generar nuevos puntos de reacción capitalista incluso entre los oficiales pro-chavistas. El mismo Chávez ha alentado la empresa conjunta del capital extranjero y la industria estatal del petróleo, PDVSA.

De hecho, las multinacionales ya representan el casi 50% de la producción total de petróleo, mientras la producción de PDVSA ha bajado la mitad desde que Chávez fue elegido por primera vez en el 1998. Chávez llegó a un acuerdo sobre armas con el gobierno español, el Ministro de Asuntos Exteriores de España defendió el acuerdo contra la critica de los EEUU diciendo: "El papel de España en Venezuela de poner freno a los sueños de Chávez de extender la revolución bolivariana a otros países de la región podría ser satisfactorio para Washington".[231]

Durante una huelga de trabajadores del Metro de Caracas, uno de los consejeros de Chávez pidió la prohibición de los huelgas en el sector público. Chávez amenazó con

[231] *El País*, Madrid, 9 de mayo de 2005.

enviar a la Guardia Nacional para enfrentar a los huelguistas. Aun así, elementos del control de los trabajadores ya existen en algunos lugares. En ALCASA, la planta estatal de aluminio, por ejemplo, los trabajadores elijen a los gerentes, los que, no obstante, siguen cobrando su propio sueldo anterior y pueden ser sustituidos.

Una reunión nacional de trabajadores convocada para discutir el tema de la gestión conjunta y el control de los trabajadores llegó al siguiente acuerdo: "Incluir en las propuestas para la gestión conjunta revolucionaria que las compañías deben ser de propiedad estatal, sin distribución de acciones a los trabajadora, y que cualquier beneficio será distribuido de acuerdo con las necesidades de la sociedad a través de los consejos de planificación socialista. Se debe entender como consejos de planificación socialista a cuerpos que implementan las decisiones tomadas por los ciudadanos en las asambleas".

Por iniciativa de Chávez fue creada Telesur, una compañía de televisión continental, Petrosur y Petrocaribe, tratados con varios países de Latinoamérica y del Caribe dedicados a la exportación, explotación y refinamiento del petróleo. También ha usado las divisas del petróleo para comprara títulos públicos de Argentina, Ecuador, y más recientemente, Bolivia, “en solidaridad contra los mercados internacionales de dinero”.

Chávez es acusado por el imperialismo por exportar la revolución a otros países latinoamericanos. Pero cuando los trabajadores de las plantas de petróleo en dos estados de Amazona en Ecuador declararon la huelga, demandando que más recursos fuesen invertidos en las comunidades locales que las petroleras extranjeras fuesen expulsadas del país, Chávez se puso del lado contrario a la huelga prestando petróleo al gobierno Ecuatoriano para compensar la "interrupción" en el suministro que estaban causando los huelguistas.

El Foro Social Mundial celebrado en Caracas en 2006, evidenció todas las contradicciones y fisuras de la “nueva izquierda” latinoamericana. La marcha inicial no superó las 15.000 personas, y en el Foro no participaron las 60.000 previstas. Hubo una pobre presencia de la izquierda europea, que no presta a Chávez el apoyo que proporcionó a Porto Alegre, patrocinado por Lula. Pero, al mismo tiempo, el trío organizador (brasileños, cubanos y venezolanos) presentó figuras secundarias. El gobierno de Venezuela mandó funcionarios menores a mantener la “mística” del Foro. Los delegados haitianos, al igual que los colombianos, llevaron fuertes denuncias sobre la represión política en sus países.

En medio de la invasión imperialista a Irak, en una etapa de insurgencia y giro a la izquierda en América Latina, el Foro Social perdió vigencia, con sus mentores en los gobiernos como un factor de contención de la rebelión popular y las luchas, enviando tropas a Haití por cuenta y orden del imperialismo yanqui o firmando tratados de inversión con EEUU, como Uruguay. Por esta situación de raquitismo, la presencia de las organizaciones de lucha al interior del Foro cobró mayor peso específico. Las denuncias contra Lula arrancaron fuertes aplausos en la Asamblea Inicial de los Movimientos Sociales. Lo mismo el reclamo del retiro incondicional de las tropas en Haití. También la denuncia de la base norteamericana en Paraguay. Una intervención del PO, en esa misma asamblea, denunciando el pago al contado al FMI de Kirchner y Lula, y la invasión a Haití, y con la propuesta de un Frente Internacional de Lucha por la nacionalización del petróleo y la banca, bajo gestión de los trabajadores, fue aplaudida en tres oportunidades en los tres minutos de duración.

Chávez, desde su acto en un estadio (el Poliedro, ante 10.000 personas), intervino en el debate. Planteó que “sería terrible que el Foro se convierta en un festival anual de turismo revolucionario” y llamó a “acordar un programa de acción para impulsar estas

luchas (antiimperialistas) en América Latina". Chávez planteó su posición: "Han intentado clasificarnos en dos izquierdas. Los locos somos Fidel y yo, mientras Lula y Tabaré son estadistas". Pero concluyó, tras las risas, que "todos juntos propinaremos una derrota a la derecha". Rescató así a los más cuestionados en el Foro.

Los documentos que salieron del Foro hablaron contra las deudas externas, pero a favor de los gobiernos que las pagaban al contado; denunciaron el militarismo, pero apoyaron a los Estados que invadían Haití; daban por muerto el ALCA, mientras 29 tratados de libre comercio ya estaban firmados. No salió una sola de las mociones de acciones internacionales por el retiro imperialista de Irak, de Haití, y otras mociones vertidas en la asamblea final de las organizaciones sociales.

La mayor expresión independiente y de lucha se expresó en "la marcha de la luchas": unos dos mil manifestantes campesinos, aborígenes y otros movimientos de lucha, que recorrieron cuatro kilómetros. Los convocantes fueron los movimientos venezolanos Frente Campesino Ezequiel Zamora, Movimiento 13 de Abril, la Red de Medios Alternativos (con presencia numerosa) y organizaciones aborígenes que resisten la implantación expulsiva de una mina de carbón en el estado de Zulia. También estuvieron los campesinos de Yaracuy, que denunciaron al INTI, ente agrario nacional, "por defender a los terrófagos usurpadores de tierras campesinas, indemnizando a los supuestos dueños, reconociéndoles falsa propiedad que la cuarta república no se atrevió a avalar", "por tratarse el 2006 de un año electoral".

La combativa marcha culminó en un acto, donde se denunció que la tierra sigue siendo de los terratenientes, que los burócratas del Estado no cumplen las promesas, que la banca sigue en manos privadas y que la deuda externa se paga puntualmente.[232] El 25 de mayo fueron detenidos por el Ejército venezolano miembros de la Dirección Nacional y de la Dirección Regional de Barinas del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ), mediante un allanamiento sorpresivo.

El FNCEZ venía sosteniendo conversaciones con el gobierno de Chávez en relación con el reclamo de incumplimiento de acuerdos realizados con los campesinos, luego de varias movilizaciones que realizaron a Caracas, por la efectiva aplicación de la Ley de Tierras y contra la falta de acciones contundentes de las fuerzas de seguridad del Estado para enfrentar la ola de crímenes cometidos por sicarios contratados por latifundistas y ganaderos, y los asesinatos efectuados por paramilitares procedentes de territorio colombiano y reagrupados en zonas de Venezuela.

Los campesinos luchan contra la aplicación del artículo 471 del Código Penal que criminaliza las ocupaciones de tierras, en contraposición con la lucha por la revolución agraria y contra el latifundio. Stalin Borges, Coordinador Nacional de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y uno de los que encabezan la Corriente Sindical Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma (CCURA), se pronunció contra la detención. El II Congreso de la central obrera emitió un pronunciamiento solidario con los campesinos del FNCEZ y exigió su inmediata liberación.[233]

El chavismo plantea el ALBA, en choque con el ALCA y con los tratados comerciales que impulsan los EEUU. Plantea una integración latinoamericana en torno al eje energético, lo que no incluye la asociación con el capital extranjero, y privilegia la asociación con Petrobrás, una "estatal"-testaferro de los fondos de inversiones internacionales. También se incorporó al Mercosur, que es una asociación de grandes

---

[232] PITROLA, Nestor. Caracas: La crisis del Foro Social Mundial. *Prensa Obrera* nº 935, Buenos Aires, 2 de febrero de 2006.

[233] *www.aporrea.org*, 25 de mayo de 2006.

capitales. Más que un planteo de unidad política de América Latina, el ALBA resulta un instrumento de protección internacional de la política nacionalista venezolana. O sea una internacionalización de PDVSA de signo nacionalista, en oposición a la que intentó hacer la derecha venezolana cuando estalló el lock out de 2003.

Las elecciones en Colombia del 28 de mayo de 2006 fueron una victoria aparente del imperialismo contra el régimen de Chávez, pues el escrutinio, válido para el mandato 2006 – 2010, reeligió a Álvaro Uribe, con 7.363.297 votos (62% de electores). El candidato de la derecha y del imperialismo ganó con amplia mayoría, a pesar de la histórica abstención, de 55%. Sin embargo, Carlos Gaviria, candidato del Polo Democrático Alternativo, obtuvo la segunda votación con 2.608.914 sufragios, rompiendo el récord histórico de la izquierda en las elecciones presidenciales. El candidato del Partido Liberal, Horacio Serpa, obtuvo 1.400.582 de votos, el más bajo en la historia de uno de los partidos burgueses que han gobernado por décadas.

El poder político de Colombia se recompuso parcialmente. Las elecciones de 2006, por otro lado, fueron sepultureras del decadente bipartidismo (liberal-conservador) que gobernó al país por más de un siglo. El Polo Democrático Alternativo, de centroizquierda, se convirtió en la segunda fuerza política del país, y en alternativa de gobierno. Reelecto Álvaro Uribe, continuará la política represiva. La política de "salida negociada" del conflicto militar, aceptando el arbitraje imperialista, sobre todo europeo, ha llevado a las FARC a perder terreno militar, en las ciudades (donde se practicó, en los barrios periféricos, una política de asesinatos sistemáticos por parte del Ejército y las fuerzas paramilitares) y también en sus tradicionales bastiones del campo.

Con Uribe volvió y ganó la política de privatizaciones. El TLC con los EEUU seria aprobado, seguramente, por un Congreso identificado con su patrón. El imperialismo yanqui se aseguró, en principio, al más fiel aliado de la región, quinta columna en la lucha contra el "terrorismo" o los comunistas disfrazados, como los llama ahora, y principal conspirador contra la República Bolivariana de Venezuela. Continuarán, igualmente, ahora bajo erl "Plan Patriota", nueva denominación del Plan Colombia, las extradiciones, se extenderá la pobreza y miseria, seguirá la política de desplazamiento forzado, y el asesinato y persecución.

Carlos Gaviria afirmó que si ganaba las elecciones, las FARC aceptarían el llamado a negociar el "intercambio humanitario" (de rehenes, en primer lugar Ingrid Betancourt), dispuestos a jugar, nuevamente, la carta de la "solución política negociada al conflicto armado". Con Uribe, se acentua la polarización política, los EEUU pretenden cerrar el cerco sobre Chávez, se aceleran los tiempos políticos del enfrentamiento.

26. UNA CRISIS CONTINENTAL GENERAL

Al respecto de la intervención yanqui, “en América Latina, eso no es novedad. Todos saben más o menos de la intervención norteamericana. En los EEUU, en Canadá y en la Unión Europea, sin embargo, las personas no están informadas y ese tema no es discutido. Todos piensan que se trata de una ayuda democrática. Es un secreto”, según el canadiense Jonah Gindin, idealizador del *In the Name of Democracy*.[234] La iniciativa unió periodistas, activistas, estudiantes e investigadores y se propuso desenmascarar el proyecto de “promoción de la democracia” del gobierno norteamericano. El grupo divulgó un estudio rastreando los tentáculos de la Casa Blanca en los países de América Latina Según él, los Estados Unidos gastarían aproximadamente US$ 2,5 billones con la “promoción de democracia” en el ciclo de elecciones latinoamericanas en el 2006. Fundaciones e instituciones norteamericanas, sumadas, están en 22 países de la región.

Además, los yanquis pretenden tener bajo su control absoluto el negocio del narcotráfico. La reaparición de Afganistán como primer productor mundial de opio (la base de la heroína) después de su ocupación por los norteamericanos ha vuelto a confirmarlo. Para controlar el negocio – y para evitar un crecimiento de la producción que derrumbaría los precios y, por sobre todo, los beneficios – el imperialismo ha recurrido a la militarización de los países productores y a la represión de sus campesinos. Mientras esta política continúe – en Colombia, en México, en Perú – no existe la menor posibilidad de acuerdo entre el imperialismo y el gobierno de Morales. Con la bandera de la legalización de la coca, Morales obtuvo el 93% de los votos en el Chapare, la principal región productora.

La cuestión de la coca lleva, directamente, a la del Ejército. El imperialismo se ha valido de la llamada “lucha antidrogas” para disciplinar y penetrar profundamente en los ejércitos latinoamericanos y en sus servicios de inteligencia. Morales anticipó que las fuerzas armadas dejarian de encargarse de la destrucción de cocales ilegales. Juan Ramón Quintana, un ex militar que asesora a Morales y es uno de los candidatos al Ministerio de Defensa, denunció que “la fuerza especial (del Ejército) de lucha contra el narcotráfico es una agencia de la DEA”, la agencia antidrogas norteamericana. Quintana denunció que el Ejército y los servicios de inteligencia, “en lugar de cuidar la seguridad del Estado boliviano, cuidan la de Estados Unidos, con el enorme riesgo que esto implica para la seguridad del Estado”.[235]

En América Central, las perspectivas se vieron afectadas por la “integración” de la izquierda guerrillera de los años 1980. La integración de los ex guerrilleros, reconvertidos en demócratas, en el cuadro de la dominación imperialista de América Latina, fue impresionante, como dio cuenta la crisis del Frente Farabundo Martí (FMLN) de El Salvador. José Luis Merino, un importante dirigente del FMLN, no tuvo empacho en afirmar que "en las presidenciales del año pasado, el Frente tuvo un planteamiento desde su candidatura y su equipo de campaña que nunca se diferenció del planteamiento de la derecha".[236]

Refiriéndose a la fracción del FMLN denominada de "renovadores", que ejerció la dirección efectiva del Frente en los últimos años, Merino fue muy lejos: "Ellos tienen un rumbo distinto, metas distintas. Y conocemos aquí compromisos por la vía de Europa, por la vía de Norteamerica y por la vía de las propias fuerzas políticas internas donde sus amarres y compromisos andan por rumbos totalmente distintos a los intereses de la

[234] *www.inthenameofdemocracy.org*

[235] *Clarín*, Buenos Aires, 28 de diciembre de 2005.

[236] *Propuesta*, Buenos Aires, 29 de junio de 2000.

nación y del pueblo. Son grupos del FMLN que se suman a la ola mundial neoliberal que aplasta y destruye los intereses de los pueblos y los pone en función de las grandes transnacionales".

En resumen, por boca de sus propios dirigentes, tuvimos una sorpresiva confesión de que el FMLN fue, en los últimos años un agente directo del imperialismo y del gran capital contra el pueblo salvadoreño. Merino opuso a estos planteamientos la campaña electoral municipal del FMLN de principios de 2000 que, afirmó, "estuvo dominada por un contenido revolucionario". Héctor Silva, candidato ganador de la intendencia de San Salvador por el FMLN, explicó los Alcances de ese "contenido revolucionario": después de su victoria declaró que "este triunfo abre las puertas para una concertación de mi gobierno con el presidente Francisco Flores (derechista) y con la empresa privada" y que "tenemos que aprender a vivir con Estados Unidos (ya que) "cada vez tenemos más experiencias positivas en nuestra relación con los norteamericanos".[237]

En Nicaragua, después de la revolución del 1979 que derribó al dictador Anastasio Somoza, los sandinistas (FSLN) tomaron control del aparato del gobierno. Nacionalizaron el 40% de la economía, pero el resto permaneció en las manos de la clase capitalista, que hizo uso de este poder para sabotear la economía. Junto con la resistencia clandestina, llevada a cabo por el imperialismo estadounidense, la economía se desmoronó en una profunda crisis, la tasa de inflación subió hasta 3600%, y el nivel de vida cayó un 90%. Con las masas agotadas y desmoralizadas por la crisis económica, la derecha (Violeta Chamorro) derrotó a los sandinistas en las elecciones del 1990, e implantó desde entonces su política en contra de los trabajadores. La victoria electoral de Daniel Ortega (FSLN), en 2006, se encuadró dentro se encuadró dentro de la solución capitalista centroizquierdista a la crisis de la derecha, como en el resto de América Latina.

La política de la izquierda centroamericana (y no sólo ella) estuvo y está en gran medida condicionada por la política internacional del castrismo, así como por la propia evolución interna de Cuba en el último período. Cuba avanza hacia el capitalismo desde su condición de estado obrero deformado con un gobierno bonapartista, basado en el poder de las fuerzas armadas, y un régimen político híbrido donde instituciones que se asemejan a las de la democracia burguesa (Asamblea Nacional) se mezclan con comités locales y regionales que no gozan de ningún poder – que actúan más como órganos consultivos – y los sindicatos, integrados, subordinados y carentes de toda independencia respecto del estado.

Incluso el poder del partido gobernante es limitado y está subordinado al poder superestatal del Consejo de Estado, que no es electo directamente por la población, sino que se compone de miembros designados por la élite gobernante, semi-independiente incluso de los principales comités regionales y de base del Partido Comunista Cubano. Estas superestructuras burocráticas y el carácter bonapartista del estado, del régimen y del gobierno posibilitaron un rápido avance hacia la reintroducción de normas mercantiles, del doble mercado de cambio (explotado por la burocracia para fines de enrqiquecimiento privado), en suma, hacia la restauración capitalista según el "modelo chino", en pequeña escala (si comparado con aquél).

La marcha de la economía cubana en los últimos años vino acompañada de un aumento del déficit comercial y de la cuenta corriente. Esto ha despertado temores entre los acreedores de que la recuperación económica de la isla caribeña se desacelere. El PIB de la isla creció 5,6% en 2000, pero nuevas cifras de un informe del Banco Central,

[237] *El País*, Madrid, 14 de marzo de 2000.

mostraron que el déficit comercial creció 9,1% por ciento, y el déficit de la cuenta corriente creció 48,8%, respecto a 1999. Según un informe del Banco Central, la fuente más fiable sobre la marcha de la economía, el déficit comercial de 2000 fue de US$ 3.173 millones, comparado con US$ 2.909 millones en 1999. El déficit de cuenta corriente fue de US$ 687,1 millones, comparado con $461,8 millones en 1999. La economía cubana creció en 1999 en 6,2%, mientras que el déficit comercial aumentó 7,4% y el déficit de cuenta corriente creció 16%, según cifras del gobierno. Muchos países periféricos tienen altos déficit y deudas, pero, al contrario que Cuba, pueden acceder a financiamiento a largo plazo.

Debido al embargo norteamericano y al no pago de sus deudas, Cuba tiene un acceso muy limitado a los créditos. La isla aún se está recuperando de la crisis sufrida tras el colapso hace una década del “bloque socialista”, que produjo una caída del 35% del PIB entre 1989 y 1994. Hasta 1998 se produjo una recuperación lenta e irregular, y a partir de esa fecha tuvo ya lugar un crecimiento más sostenido, gracias a un auge en el sector turismo. “La economía cubana fue capaz de crecer en medio de una coyuntura muy adversa, al deteriorarse la relación de intercambio en un 22%. Sólo por el aumento del precio del combustible, el país pagó aproximadamente US$ 500 millones más por la misma cantidad de petróleo importado en 1999", dijo el informe. El Banco Central dijo que, a pesar de que el déficit de cuenta corriente equivale al 2,5% del PIB, este porcentaje seguía siendo menor que de la mayoría de los países latinoamericanos.

Pero diplomáticos de algunos países acreedores de Cuba señalaron que la isla ya tiene una deuda de más de US$11.000 millones, y que casi no tiene acceso a préstamos a largo plazo para cubrir su déficit. “Han aumentado otra vez su deuda a corto y medio plazo y han estado retrasando sus pagos, y eso no se puede hacer siempre", dijo un diplomático occidental. El Banco Central señaló que los ingresos por turismo y otros servicios fueron de US$2.336 millones, comparados con US$2,163 millones en 1999. Y las divisas enviadas por familiares en el extranjero y otras transferencias de dinero fueron de US$ 842 millones, frente a US$ 799 millones en 1999.

“El déficit de la cuenta corriente, que ascendió a 687,1 millones de pesos, fue financiado por el superávit de 716.5 millones de pesos en la cuenta de capital y financiera”, dijo el informe. “Mantiene la misma estructura de períodos anteriores, en que los resultados negativos de las balanzas de bienes y de renta superan los resultados positivos que presentan la balanza de servicios y las transferencias corrientes netas". El Banco Central también señaló que las reservas de Cuba, un secreto cuidadosamente guardado, habían aumentado en US$ 29,4 millones

Las limitadas pero importantes conquistas de la revolución cubana, independencia nacional; propiedad estatal de importantes sectores de la economía; asistencia médica y educación universal y gratuita (ambas, sin embargo, cada vez con menos recursos efectivos para su vigencia real) y la vivienda como un derecho, no un privilegio; eliminación del sistema de alquileres, son las conquistas que necesitan ser defendidas contra el imperialismo y los reaccionarios “gusanos”, pero esto exige una nueva una revolución política para que la clase obrera y los oprimidos de Cuba ejerzan el poder directamente a través de sus propias instituciones y garanticen que se detenga el retroceso de la revolución, viabilizado por el gobierno de Fidel Castro con la reintroducción del capitalismo y de la diferenciación de clases.

Fidel Castro es el único líder indiscutible entre los cubanos, ha designado como su heredero a su hermano Raúl, fuertemente resistido por haber sido el encargado de la represión en distintas épocas, y el encargado de llevar a cabo las purgas en el partido y en las organizaciones “de masas.” La revolución no tiene heredero y no cuenta con una

clase obrera independiente que pueda tomar la decisión de revolucionar el sistema político y encender la energía de la clase obrera y los oprimidos cubanos y latinoamericanos. Sin ese elemento, y sin un partido revolucionario, todas las conquistas de la revolución están en riesgo de perderse. Eso sería un retroceso de enormes dimensiones para las masas latinoamericanas y para el pueblo cubano.[238]

En América Latina, la cuestión de los hidrocarburos han pasado al centro de la escena. En 2002 el imperialismo organizó un sabotaje de dos largos meses contra Venezuela, que tenía por objeto dejar en pie los planes de vaciamiento de PDVSA que habían dejado en marcha los gobiernos que antecedieron al de Chávez. A mediados de los años 90, el gobierno de Menem, en Argentina, con la complicidad del actual presidente Kirchner, entonces gobernador de la provincia petrolera de Santa Cruz, remató virtualmente la empresa YPF, sobre la base de una valuación del barril de petróleo de diez dólares.

En Colombia, la defensa de la privatización a ultranza de la explotación privada del petróleo ocupa un lugar tanto o más importante que cualquiera de los otros objetivos contrainsurgentes del Estado. En Ecuador, los recursos excedentes de la empresa estatal de petróleo iban a parar hasta hace pocas semanas a un fondo especial para el pago de la deuda externa; el procedimiento era, al mismo tiempo, objetivamente, un modo de vaciar a la empresa estatal y privatizar por completo la explotación del recurso. En Perú la explotación del gas y del petróleo se van transformando en un negocio fundamentalmente privado.

En Brasil, Petrobrás, aunque estatal, se encuentra controlada por la Bolsa, donde cotizan sus acciones; más de un tercio de su capital pertenece a fondos norteamericanos. Independientemente de esto, la empresa brasileña emula lo que se intentó hacer con PDVSA tes de Chávez, usarla como canal de salida de capital al exterior por medio de su internacionalización. Hay una presión por la privatización de la mexicana Pemex, a la que se la ha hecho incurrir en los déficits que son el preludio de la privatización. Incluso fuera de América Latina, la codicia del capital por el gas se ha acrecentado como consecuencia de la posibilidad de enviarlo licuado al mercado de los Estados Unidos. Es lo que haria Perú a partir de Camisea y lo que estaba previsto para Bolivia, a través de un puerto chileno.

La lucha de las masas bolivianas recogió la experiencia más que secular de un país que estuvo en el centro de la lucha de los pueblos del continente por la independencia nacional de América Latina. En 1879, la Guerra del Pacífico, que privó a Bolivia de su salida al mar, fue el complemento de la sangrienta guerra contra el Paraguay, ambas producto de las conspiraciones de las oligarquías continentales (especialmente argentina y brasileña), junto al imperialismo colonialista inglés, para promover la balcanización del continente y la entrega de sus recursos naturales (en ese caso, nitrato y guano).

Durante el siglo XX, Bolivia se levantó una y otra vez para recuperar sus recursos naturales y su independencia nacional. La revolución de 1952 – con su eje en la nacionalización de las minas de estaño y la reforma agraria – primera revolución obrera de América Latina, demostró que, en nuestra etapa histórica, las tareas básicas de la democracia y la independencia política de los países latinoamericanos (y atrasados y oprimidos en general) sólo pueden ser realizadas por los obreros y campesinos en lucha, como parte de la revolución socialista mundial, en un proceso sin solución de continuidad (revolución permanente).

[238]ALVAREZ, Gina. *Medio Siglo de Historia de Cuba*. Documento, agosto de 2003.

Iniciado el siglo XXI, Bolivia tomó la delantera de América Latina, con la “guerra del agua” de agosto del 2000, que impidió la privatización de ese recurso natural básico en manos del gran capital imperialista, tal como acontece en otros países de la región. La actual situación boliviana reconoce sus antecedentes inmediatos en las insurrecciones de febrero y octubre del 2003, que tumbaron al gobierno pro-imperialista de Gonzalo (Goni) Sánchez de Losada (del partido “nacionalista” MNR), responsable por la completa entrega de los recursos petroleros y gasíferos del Altiplano al gran capital financiero internacional.

La nacionalización de los hidrocarburos por parte del gobierno boliviano sacudió la realidad política del Altiplano y de Sudamérica. La nacionalización es, dentro de sus propios límites, una respuesta forzada por la nueva realidad insurgente en Bolivia. Las privatizaciones de la llamada década neo-liberal no aportaron nada al desarrollo de la sociedad boliviana y dejaron planteada la perspectiva de la desintegración nacional. Las “guerras del agua” primero, a partir de 2000, y la insurrección de octubre de 2003, más tarde, pusieron en la superficie una rebelión social contra las formas de producción colonialistas. Sin la reapropiación de sus recursos naturales a Bolivia la amenazaba la extinción.

El fracaso de la ocupación de Irak por los EEUU acabó con su propósito fundamental, que era la privatización a ultranza de sus hidrocarburos. En el gobierno de Bush se impusieron los grupos petroleros que defienden la existencia de la Opep, esto para mantener elevados los precios y los beneficios del petróleo.[239] En el mismo sentido comenzó a operar Rusia al expropiar al principal pulpo local, Yukos, y absorberlo en las operaciones de la estatal Gazprom. La misma tendencia se observa en África. En lugar de la pura apertura quedó establecido en forma transitoria un modelo de competencia entre empresas estatales para atraer inversiones privadas. El barril de petróleo por encima de 70 dólares provocó, en lugar de una competencia entre Estados para atraer inversiones, una competencia entre los monopolios para ganarse los favores de los Estados.

---

[239] En el "informe Cheney" de mayo de 2001, se establecían dos "altas prioridades": la diversificación de las fuentes de abastecimiento y el mayor acceso a los recursos del Golfo Pérsico. Irak "posee vastas áreas prometedoras pero inexploradas. Esos campos pueden albergar las mayores reservas no descubiertas de petróleo, muy por encima de las reservas inexploradas de Asia Central, Africa y Alaska". Un comentarista norteamericano, sin embargo, informó que "para esta administración, el control del petróleo iraquí sería un mero subproducto de una transformación regional mucho más vasta": el establecimiento de "nuevas forma de democracia y un nuevo sistema económico desde el norte de África a Afganistán y Pakistán". En este orden de "ideas", el general de la Fuerza Aérea, Thomas McInerney, llegó a afirmar que "un año después de la caída de Saddam, Irán se sacará de encima a los mullahs". Pero, decía *The Nation*, "las ambiciones imperiales de Bush se apoyan en arenas movedizas y finalmente se hundirán con seguridad. No se puede sostener un imperio desde la posición débil de un deudor, tarde o temprano los acreedores cortarán el chorro. Esta humillante lección fue aprendida por Gran Bretaña a principios del siglo pasado y Estados Unidos enfrenta el mismo problema. La ambición norteamericana de dirigir el mundo está pesadamente hipotecada". Por esta razón, un sector del propio imperialismo criticó las aventuras "unilaterales" de Bush, le reclamó que "actúe con el Consejo de Seguridad y los aliados", y denuncia como una "fantasía utópica" sus intentos de "reorganizar el mundo". El conocido tira-bombas Thomas Friedman llegó a afirmar que cualquier intento norteamericano de invadir y ocupar unilateralmente Irak no sería más que "una trampa" tendida por Europa, Rusia y China: "No creo que Estados Unidos esté en condiciones de hacerlo sin la cobertura de la ONU o de los aliados de la OTAN para ayudar en el pago de los costos de la guerra". Mientras continuaban los bombardeos contra las defensas antiaéreas iraquíes, la Casa Blanca, según el *New York Times*, estaba desarrollando un detallado plan para instalar un gobierno militar norteamericano en Irak, que tomaba como modelo la ocupación de Japón de la posguerra. En la fase inicial, Irak sería gobernado por un comandante militar norteamericano. Bajo este plan, el gobierno central, y particularmente la industria petrolera, serian administrados por el ejército norteamericano, “hasta que sea creado un gobierno democrático; un proceso que puede tomar varios años".

La crisis que se desarrolló en América Latina, a partir de la recuperación nacional de PDVSA, en 2002, es subalterna a la crisis internacional. La totalidad de las petroleras se habían acomodado a los planteos de asociación del gobierno venezolano, e incluso cuando éste aumentó sus exigencias, sólo se retiraron efectivamente la francesa Total y la italiana ENI (Exxon vendió sus activos a Repsol). La nacionalización boliviana buscó substituir las viejas privatizaciones por el esquema internacional de asociación Estado-petroleras, pero representa una diferencia sustancial. De un lado, es la respuesta retardada a una crisis revolucionaria pasada y afecta al conjunto de la realidad boliviana. De otro lado, abre una crisis en América del Sur, donde el negocio petrolero está dominado por miembros menores de los monopolios – Repsol y Petrobrás, pero que son estratégicos para los gobiernos de Lula y de Kirchner.

Los acontecimientos bolivianos de 2006 evidenciaron una crisis de conjunto en América Latina, aunque su eje fuera la energía. Una crisis eminentemente internacional, que provocaria choques sociales y políticos de grandes dimensiones, planteando una campaña por la nacionalización sin indemnización de los recursos estratégicos en Argentina y toda América Latina, y por su unidad política sobre bases socialistas. La nacionalización sin pago no constituye un planteo arbitrario o caprichoso. La restitución del enorme patrimonio acumulado sobre la base de la explotación y el sacrificio de las masas no puede ser rescatado por medio de un mayor sacrificio aún. La nacionalización no tiene por objeto trasladar el capital de una rama de la producción (la nacionalizada) a otra sino servir a una reestructuración social sobre nuevas bases. Por eso es la única que puede ofrecer una nueva perspectiva histórica.

La lucha por los recursos bolivianos decidirá la que se libra en toda América Latina. En este aspecto, es necesario destacar que las experiencias estatistas burguesas en la materia y los gobiernos nacionalistas han operado en la crisis boliviana a favor del imperialismo y de la privatización. El papel de Petrobrás y del gobierno capitalista de Lula contra la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos, está muy por delante de lo que haya hecho el gobierno de Bush. La burguesía brasileña goza de un poder de arbitraje sin igual, porque influencia como ningún otro la política de la provincia de Santa Cruz de la Sierra e incluso sus movimientos pretendidamente secesionistas.

Petrobrás estuvo a la cabeza de las presiones contra la nacionalización y luego viabilizó los acuerdos políticos que pusieron fin a la crisis que provocó la caída de Mesa, cuando decidió, la primera, allanarse a la nueva ley de hidrocarburos de Bolivia. Un papel igual jugó la española Repsol, que no actúa sino en connivencia con Kirchner, y Techint, que participa del negocio del fluido por medio de la fabricación de los caños sin costura para los ductos, aunque también tiene inversiones gasíferas. Una función de extorsión a Bolivia cumplió el gobierno peruano de Toledo, que reunió a los ministros del cono sur del continente para discutir la posibilidad de que Camisea sustituya a Bolivia en la provisión de gas para Chile y Argentina. La nacionalización del petróleo boliviano plantea, entonces, una lucha continental, que al mismo tiempo no puede dejar de ser una lucha por la nacionalización integral del petróleo de Argentina, Perú y Brasil y la gestión obrera de los hidrocarburos.

El rol de cada cual en la crisis boliviana pone de manifiesto el carácter ilusorio de la propuesta del presidente Chávez, de conseguir la independencia energética de América del Sur por medio de una alianza de PDVSA, Petrobrás y Enarsa, ésta un engendro de Kirchner para desviar recursos del presupuesto nacional hacia una caja controlada por sus compinches. Chávez quiere un Petrosur saltándose la tarea de la expropiación de los pulpos petroleros y su transformación en empresas de gestión obrera. Una reciente

tentativa de formar Petrocaribe terminó en fracaso ante la oposición de Trinidad Tobago, por exigencia de los yanquis y los ingleses.

Aunque Chávez recuperó la autonomía nacional para PDVSA (este es el aspecto fundamental del contenido nacional del chavismo), es necesario señalar que los pulpos internacionales ya son responsables de la tercera parte de la producción de petróleo en Venezuela y los que quedarían a cargo de la explotación del combustible pesado del Orinoco, a partir de nuevos procedimientos de destilación. Una inversión de la tendencia internacional de los precios del petróleo colocaría seguramente a Venezuela bajo una dependencia, incluso extrema, de las inversiones de las compañías extranjeras. La línea de compromiso con el imperialismo que ha seguido Evo Morales corresponde integralmente a la política del mismo Chávez. Pero con esta política, ni Venezuela conseguirá la independencia energética de América Latina, ni Bolivia sus hidrocarburos.

Una vez colocada la cuestión de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia en su contexto, resulta claro que está planteada la nacionalización de los hidrocarburos en toda América Latina y en cada uno de sus países. En torno a la nacionalización de los hidrocarburos en todo el continente se pondría en marcha el propio objetivo de la unidad política continental, la unión socialista de América Latina.

La dimensión política del conflicto en torno a los hidrocarburos escapa completamente a quienes, de modo oportunista, pretenden reducirla a sólo uno de sus aspectos: "De hecho, tanto Hugo Chávez como Evo Morales están simplemente modernizando y poniendo al día las relaciones en sus países productores de hidrocarburos con los estándares mundiales actuales. En cierto sentido, están normalizando las relaciones contractuales ante unos beneficios inesperados excepcionales por parte de las empresas, que son posibles gracias a acuerdos fraudulentos conseguidos por mediación de altos funcionarios corruptos. La brutal reacción de los gobiernos de los EE UU y la UE, y de sus transnacionales de la energía, es el resultado de un hábito de pensamiento que concibe sus excepcionales privilegios como una norma del desarrollo capitalista y no el resultado de sus tratos con funcionarios venales. Por consiguiente, se resistieron a la normalización de las relaciones capitalistas en Venezuela y Bolivia, en las que empresas conjuntas comparten sus beneficios entre el sector público y los inversores privados, práctica común en la mayor parte de los países".[240] En resumen, aquí "no pasa nada": para el sociólogo norteamericano, autor del fragmento citado, la explotación imperialista seria, increíblemente, "*el resultado de un hábito de pensamiento que concibe sus excepcionales privilegios como una norma del desarrollo capitalista*". Seria bueno que el autor se preguntase acerca de sus propios hábitos de pensamiento.

[240] PETRAS, James. América Latina, la Unión Europea y los Estados Unidos: las nuevas polaridades. In: *www. rebelión.org*, 26 de mayo de 2006; del mismo autor, y en el mismo diapasón, ver: "Novos ventos da esquerda" ou palavras ao vento de uma nova direita?. In: *www.rebelion.org*, 30 de mayo de 2006.

27. ENERGIA, INTEGRACIÓN Y DESINTEGRACIÓN

Desde inicios del nuevo siglo existió una ambiciosa propuesta “integradora” de América del Sur, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) lanzada en setiembre de 2000 por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, buscando una integración regional a la medida de “los mercados”. El proyecto preve la reformulación de la estructura de comunicación y logística de América del Sur en diez “ejes integradores”. Veamos cuáles son los principales.

Del “eje interoceánico central” hacen parte cinco países de la región: Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. Abarca ocho de los nueve Departamentos de Bolivia, (excepto Pando); cinco Estados de Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Paraná, Río de Janeiro y San Pablo), la primera región de Chile, todo el Paraguay y las províncias de Arequipa, Moquegua y Tacna deI Perú. El “eje de Capricornio” está conformado por la región norte de Argentina, Rio Grande do Sul (Brasil), la región norte de Chile y la región suroccidental de Paraguay. La red vial del Eje atraviesa significativas barreras naturales de la región (la Cordillera de los Andes, los ríos Pilcomayo, Paraguay, Paraná, Uruguay).

Esta conformación limita y concentra los flujos de transporte a través de un pequeño número de pasos de altura y puentes para la interconexión y el transporte entre los países. El “eje Perú-Brasil-Bolivia” abarca la macrorregión sur del Perú; Bolivia y Brasil. El potencial del eje está relacionado a la posibilidad de constituirse en una zona de tránsito para las exportaciones brasileras (Cuiabá, Manaos, Porto Velho y Rio Branco) hacia el océano Pacífico. Los pasos de fronteras son deficientes o inexistentes y de hecho existe muy poco o nulo intercambio formal. El “eje del Amazonas” está configurado por tres grandes sistemas: la costa, la sierra andina y la selva amazónica. Como centros de interés logístico o urbano se destacan en la configuración Colombia, Perú y Brasil: la relevancia global es de 1/3 de la biodiversidad, 1/5 del agua dulce y 2/5 de las selvas tropicales sobrevivientes de todo el planeta, así como su sistema fluvial de 20.000 km de vías navegables.

El “eje del escudo guyano” no se encuentra actualmente articulado como un eje de desarrollo, sino que se encuentra dividido en regiones relativamente aisladas unas de otras y con patrones muy distintos de desarrollo (Región Oriental de Venezuela, Guyana-Surinam, el estado de Amapá, Brasil, y el corredor Manaos-Boa Vista en los estados de Roraima y Amazonas, Brasil). La desarticulación del eje se refleja en la carencia de infraestructura que permita el acceso a los amplios territorios existentes y la interconexión entre los principales centros de concentración y actividad económica.[241] En resumen, los “ejes” están configurados en función de los recursos naturales y de las plataformas de exportación que existen o existirían en función de su explotación para el mercado mundial, no en función de la integración económica interna de América del Sur.

El centroizquierda “nacional y popular” en el poder no se contrapuso a la “integración” neoliberal. Bajo sus gobiernos se produjo una mayor desintegración nacional de América Latina. Se quebró el Pacto Andino, el Mercosur hizo agua más que antes, las naciones latinoamericanas se desintegraron más que nunca. Y esto ocurrió cuando gobiernan Lula, Tabaré Vázquez, Kirchner, Evo Morales, los nacionalistas, los centroizquierdistas, los progresistas. Bajo su gobierno, América Latina se divide. Estas

[241] In: *www.iirsa.org.* Los otros ejes son: el andino (que coincidiria con los países de la casi extinta CAN, Comunidad Andina de Naciones), ele eje andino del sur, el eje del sur, y el eje hidrovia Paraguay-Paraná (MORALES, David et al. *IIRSA: a Nova Integração da Infraestrutura na América do Sul*. San Pablo, PROLAM-USP, 2005).

corrientes políticas son incapaces de dar una lucha eficaz contra el imperialismo y de unir a América Latina. La conclusión es que sólo un gobierno de trabajadores será capaz de unir a América Latina, a sus obreros y campesinos, y por primera vez, conquistar la plena independencia y las posibilidades de un desarrollo independiente.

El decreto de Evo Morales en 2006 estuvo muy lejos de nacionalizar el petróleo boliviano. Es precisamente lo que quería decir cuando afirmaba que no había expropiación; la explotación seguía en manos de los monopolios. El decreto de Evo Morales ni siquiera recuperaba el patrimonio de YPFB, que fuera confiscado en oportunidad de la privatización debido a las condiciones leoninas con que fue entregado a sus apropiadores: Repsol, Total, British Gas y Chevron. Bolivia pretende modificar los contratos con los pulpos y apropiarse de una parte considerablemente mayor de la renta petrolera. La nacionalización de Morales convierte a los contratos de privatización y a los de concesión en contratos de operación, donde los pulpos trabajan por cuenta y orden de la empresa fiscal, YPFB.

El Estado boliviano pretende, de este modo, controlar los precios y el comercio de los combustibles; sobre esta base contractual, el decreto estipula un reparto de la ganancia y de la renta del petróleo del 82/18% a favor del Estado. Para esto se establece una modificación del sistema impositivo, pero por sobre todo una participación mayoritaria de YPFB en el capital de las empresas. Se trata de una tentativa de poner coto al fraude fiscal y cambiario de las empresas e intentar orientar las inversiones para construir una red de gasoductos y una industrialización de la materia prima. Dada la debilidad del Estado boliviano para reunir el capital nacional necesario para semejante empresa, el proyecto de desarrollo que emerge implica una asociación en gran escala al capital extranjero, o sea una recolonización del país bajo otras formas. Bolivia es para el capital internacional una plataforma de exportación.

¿De dónde sacaría Evo Morales los recursos para llevar la participación del Estado en las operaciones petroleras a más del 50% del capital y para quedarse con los Fondos de Pensiones que han invertido en las petroleras? El llamado "sistema de capitalización" había otorgado a los ciudadanos una participación en las privatizaciones a través de Fondos especiales. Para controlar la producción de las empresas petroleras que se beneficiaron con la privatización, Evo Morales debía estatizar los fondos de la capitalización. Evo Morales prometió una auditoría que valuaría en términos de costos el capital de las petroleras, así como las ganancias que han acumulado. Esto podría permitir una nacionalización integral sin indemnización de muchos grupos, en especial los que privatizaron a YPFB. Solamente algunas nacionalizaciones burguesas en América Latina tuvieron esta osadía.

Con el alta de los precios del petróleo y del gas, los monopolios continuarian teniendo un futuro en Bolivia, donde los costos de diverso tipo son bajísimos. Y Bolivia podría conseguir una salida al mar, como Argentina consiguió superar los conflictos de límites con Chile cuando los monopolios mineros se pusieron de acuerdo para repartirse la explotación de la cordillera. El problema para esta perspectiva no es el decreto de nacionalización sino la vulnerabilidad del gobierno boliviano y del propio Estado a las presiones populares, incluidas las que toman la forma de insurrecciones.

La cuestión de los hidrocarburos bolivianos está subordinada a la crisis política de América Latina y a las tendencias revolucionarias que anida. La renegociación de los contratos tendrá lugar en el marco de una desintegración de las relaciones políticas latinoamericanas, a partir de las presiones de Estados Unidos con los tratados de libre comercio; el hundimiento del proyecto de Confederación Sudamericana de Brasil, para controlar los negocios mineros y de infraestructura; la declinación del Mercosur; y la

fragilidad, en última instancia, de todos los gobiernos del subcontinente. El TCP – de Cuba, Bolivia y Venezuela – no llega a ser un punto de partida alternativo para esta crisis de conjunto.

PDVSA estableció un contrato de asociación con Repsol para la explotación de la cuenca del Orinoco; este contrato es el modelo al cual el gobierno de Chávez pretende ajustar todas las concesiones a las empresas extranjeras, que ya extraen el 30% de la producción venezolana (una proporción que viene aumentando sistemáticamente). El proyecto de Petrosur, el cartel de las estatales petroleras de América del Sur que promovió Chávez, plantea una asociación con el capital extranjero. Por eso rechazó una YPFB (Bolivia) que eventualmente expropiase los monopolios, pero le dio la bienvenida a la argentina Enarsa, que no es más que una pantalla de la entrega del Mar Argentino a Repsol.

En el país de Chávez, los inmensos yacimientos petrolíferos del Orinoco, las mayores reservas del mundo, continuan estando en manos del capital extranjero. La controversia sobre las medidas económicas de Chávez gira en torno a un incremento en los impuestos y las regalías que va del 15% al 33%, porcentajes que siguen siendo inferiores a los abonados por las compañías petroleras en Canadá, Oriente Próximo y África.

En Argentina, Repsol y otras sobreexplotaron los pozos que les entregó la YPF argentina, y no han aportado reservas nuevas significativas. Repsol logró transformarse en una firma petrolera a partir de una empresa de estaciones de servicio, descapitalizando a Argentina, o sea invirtiendo en el exterior la mayor parte de las ganancias obtenidas en el país. En el campo de la energía se pone claramente de manifiesto la imposibilidad de salir de la crisis argentina mediante transformaciones superficiales sobre las viejas bases.

La cuestión del gasuducto que uniria Puerto Ordaz, en Venezuela, con Buenos Aires, atravesando toda América del Sur, totalizando más de 10 mil kilómetros, con vistas a crear la autosuficiencia e independencia energética del subcontinente, planteada por Chávez, con apoyo (formal) de los gobiernos brasileño, boliviano y argentino, no es una cuestión sólo técnica, sino que se subordina al panorama de conjunto. El gas venezolano es tres veces más caro que el boliviano en el Cono Sur, y no puede competir en precios con el GNL suministrado por vía marítima. Expertos señalan que la demanda de Argentina y Brasil no ameritaria una inversión de más de US$ 20 mil millones El supergasoducto del Sur subió en un corto periodo su valor original de 10 mil millones de dólares a más de 24 mil millones.[242]

Se ha estudiado que colocar 1 millón de BTU de gas en territorio argentino, sin llegar a Buenos Aires, costaria más de 8 dólares, sin incluir el precio del gas a boca de pozo: esto no podría desplazar del mercado a Bolivia, que vende a 3,5 dólares el millón de Btu a brasileños y argentinos. Puerto Rico y República Dominicana, clientes de Venezuela como consumidores de gas, están instalando plantas de regasificación para adquirir gas en otros países en tanquerosmetaneros, que lo colocará en sus puertos. También Chile está instalando unidades de regasificación para recibir gas de Indonesia por vía marítima para no depender de Argentina como único suplidor. Si Brasil requiere gas adicional tiene a Bolivia como suplidor natural. Argentina, otro comprador de gas boliviano, tiene un desabastecimiento latente, y ha contratado 84 taladros que buscan petróleo y gas, para asegurar el suministro.

Otro ingrediente que torpedea el gasoducto es la reactivación del anillo energético,

[242] La utopía de un supergasoducto sin gás. *El Nacional*, Caracas, 20 de febrero de 2006.

auspiciado por países gasíferos de la región, utilizando las tuberías actuales y haciendo conexiones entre los países de la región (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay y Paraguay). Aunque los gobiernos tengan fraternas relaciones diplomáticas, Perú tiene el campo de Camisea y otros menores, y Bolivia los campos de Tarija y otros en Camiri y la zona de Santa Cruz, competidores del gas venezolano. Bolivia es el único país que puede liderar ese anillo energético, con 32 TCF (trillones de pies cúbicos) de reservas, Perú sólo tiene 8 TCF y aunque Argentina tenga 21 TCF, no puede liderarlo, pues consume 45% del gas que produce. El precio del gas boliviano derribaria cualquier otro suplidor sin tener que hacer inversión alguna.



Bajo el régimen capitalista, la cuestión de los precios (mercado) obstaculiza cualquier integración energética de América Latina. Brasil construye un gasoducto de 346 kilómetros desde Urucú a Manaos y otro desde Coari al mismo punto, y trabaja en otro gasoducto a Porto Velho. La demanda de Brasil no ha crecido en los últimos 3 años y tiene previsto incrementar 424 millones de pies cúbicos diarios la producción. La producción argentina de gas es de 4.300 millones de pies cúbicos por día, declinando desde 2002, y se registra un incremento del consumo. Eso explica la necesidad de importar gas de Bolivia porque, a su vez, Argentina exporta a Chile y Uruguay.

Venezuela arrastra un déficit de gas y no puede hablar de exportaciones hasta después del 2010. Su Plan de Negocios calcula una producción de 11.500 millones de pies cúbicos diarios, un incremento de 5.200 millones de pies cúbicos diarios. Los volúmenes que recibirá de la Plataforma Deltana; los proyectos Urdaneta (golfo de Venezuela y norte de Falcón) y Mariscal Sucre, están comprometidos nacionalmente, con la excepción de la Plataforma Deltana, que exportará 70% de su producción. Más de 70% del gas de la Plataforma Deltana está firmado para la exportación hacia Estados Unidos y Europa, por las empresas Chevron, Statoil y Total.

Las reservas de Venezuela, unas 132 TCF (trillones de pies cúbicos), son de gas asociado a petróleo, dependiendo de la producción de crudos, y está comprometido por contratos ya firmados. No habrá integración e independencia energética si no se procede a la total expropiación de los recursos naturales de América del Sur de manos de los

monopolios, en todas las fases de la producción y distribución, y a su integración en un plan económico único, en el marco de la unidad socialista de América Latina.

A ello se suma el descalabro del Mercosul. Su cumbre de 2005, que reunió a Kirchner y Lula, debía poner en marcha la Cláusula de Adaptación Competitiva para limitar o restringir las importaciones desde Brasil de ciertos productos que estarían desplazando a la producción argentina: la medida quedó postergada. La burguesía brasileña se opone. Techint (Argentina) y sus satélites pretenden que el Mercosur deje de ser una Unión Aduanera y se transforme en una zona de libre comercio, lo que haría avanzar un acuerdo con Estados Unidos. Un ALCA siderometalúrgico le daría acceso al mercado norteamericano y pondría trabas al ingreso de productos desde China, más peligrosos para la burguesía argentina que las mercancías brasileñas.

El otro tema fue la incorporación de Venezuela como socio pleno, pero se acordó incorporarla como socio "en estado de adhesión". Sin haber resuelto los antagonismos existentes, el Mercosur se compró choques nuevos. A este escenario se sumó Uruguay, donde Tabaré Vázquez impulsó la firma del Tratado de Protección de Inversiones con Estados Unidos, un acuerdo que brindó garantías y seguridad jurídica a los emprendimientos de empresas de ese país. A 20 años de la firma de los acuerdos entre Alfonsín y Sarney, el balance señalaba que el Mercosur marchaba a su disolución.

28. LA REVOLUCIÓN LATINOAMERICANA

El nuevo siglo replanteó los problemas históricos de América Latina bajo una forma simultáneamente nueva y familiar (histórica). La derrota del lock out patronal en Venezuela, a principios de 2003, fue un punto de viraje en la situación de América Latina. Desarticuló a la burguesía en Venezuela; puso de manifiesto un salto enorme en la movilización de masas; quebró el frente de *países amigos* que había armado el imperialismo norteamericano para reencauzar la situación en Venezuela, marcó una derrota muy grande para el imperialismo. En este nuevo cuadro internacional se desarrollaron las insurrecciones en Bolivia y los levantamientos en Ecuador y Perú.

Este proceso se contrapuso a la otra línea de desarrollo político en América Latina: la que representan los gobiernos de centroizquierda que gobiernan en función del imperialismo, como Lula, Tabaré Vázquez y la Concertación de Chile. Entre los campos contradictorios existen vasos comunicantes. Al mismo tiempo, se ha estructurado una crisis en las relaciones internacionales entre este bloque de países, debido a las nacionalizaciones en Bolivia, por la crisis del Mercosur, y por el choque por las papeleras en Uruguay. El cuadro de conjunto de América Latina reviste un carácter transicional.

El curso pro-imperialista del PT de Brasil fue un golpe político descomunal que la corriente que defiende la llamada antiglobalización capitalista ha preferido ignorar. El "antiglobal" se caracteriza a sí mismo como *movimientista* ("movimiento de movimientos"), es decir que se opone a la construcción de un partido internacional, y más aún si es clasista. Carece de un planteo de poder y evita los medios para luchar por el poder. Es funcional al poder capitalista establecido. Niega la posibilidad de las situaciones revolucionarias engendradas por la descomposición del capitalismo. Denuncia las tentativas de convertirlas en revoluciones y en la vía histórica para la toma del poder por la clase obrera. Su ala "trotskista" (el llamado Secretariado Unificado de la IV Internacional) añade, de su propia cosecha, que la época revolucionaria mundial iniciada con la revolución de octubre ha concluido. Este planteo viene del eurocomunismo, en 1970, y antes de él de la teoría stalinista del "socialismo en un solo país".

La experiencia del gobierno del PT marcó la bancarrota de todas las corrientes políticas del Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo se ha convertido en el principal factor de contención de las luchas de los trabajadores y de desmoralización política de los luchadores. En Brasil, ha formado el gobierno de mayor concentración de representantes capitalistas directos de toda la historia del país. En la crisis revolucionaria boliviana jugó un papel decisivo para encaminar a las direcciones existentes a aceptar una salida constitucional, e incluso se ha transformado en un nexo directo entre Evo Morales y el imperialismo.

El Foro no ha asumido siquiera una posición de defensa incondicional del gobierno de Chávez, en Venezuela, por el contrario, ha sido el vehículo para la mediación del imperialismo en la crisis venezolana. Adelantándose incluso al gobierno argentino, el de Brasil se encuentra en la primera fila de la ocupación militar de Haití. Lo que ocurre con el PT repite lo ocurrido, como ya vimos, con los ex frentes guerrilleros o ex partidos stalinistas en Centroamérica, en especial el FSLN, de Nicaragua, y el FMLN, de El Salvador.

El destino del PT brasileño confirma la naturaleza proimperialista de la pequeña burguesía profesional que se ha pasado del foquismo al democratismo, de un lado, y el carácter potencialmente contrarrevolucionario de la burocracia que se fue formando en los sindicatos, del otro. Desde un punto de vista programático, pone en evidencia el

carácter proimperialista de los planteos democratizantes, es decir que postulan la posibilidad del progreso social en los marcos constitucionales de los países oprimidos, o sea de los que por la ausencia de independencia nacional y de un desarrollo capitalista interno no han conquistado las premisas históricas de la democracia.

El PT se transformó en un partido totalmente confiable para la burguesía y el imperialismo al cabo de un prolongado período de integración de sus cuadros y burocracia al Estado, lo cual fue embellecido, por la teoría de moda, como la expresión de una "gran capacidad de construcción política". La participación política de la izquierda democratizante en las instituciones del Estado capitalista se ha vuelto a revelar como un poderoso factor de degeneración política. La participación parlamentaria y municipal del Partido Obrero, desde la Constituyente de Santa Cruz en 1995 y de las elecciones del 2001 en Salta y Buenos Aires, ha servido para la utilización revolucionaria de las instituciones estatales y para el desarrollo de la conciencia y de la organización revolucionarias.

La bancarrota política del PT dio lugar a un proceso de diferenciación dentro de la izquierda democratizante, de reducida amplitud. Tampoco se trató de una diferenciación socialista, porque no critica los fundamentos programáticos democratizantes ni los condicionamientos políticos oportunistas que dieron origen al PT (desplazar a los trabajadores de una lucha de masas al campo electoral y encuadrar al proletariado en la normalización institucional iniciada por las dictaduras militares). Se encontró ausente también en esta diferenciación la comprensión del carácter potencialmente revolucionario de la situación de Brasil en su conjunto. La dirección del PT dio como finalidad fundamental de su ascenso al gobierno impedir la situación revolucionaria que podría engendrar una bancarrota financiera. O sea combatir el "peligro" de un *argentinazo*, que luego se vió confirmado en Bolivia.

En la crisis política que ha provocado en la izquierda latinoamericana y en el movimiento obrero el gobierno pro-imperialista del PT (con una nueva edición en el gobierno del Frente Amplio en Uruguay) es todavia minoritario el polo político revolucionario que plantea la expulsión de los ministros capitalistas de los gobiernos que encabece la izquierda; la ruptura con el FMI y el repudio a la deuda externa; la nacionalización de la banca, de los grandes monopolios y de los latifundios bajo control obrero; el enfrentamiento del sabotaje capitalista mediante la ocupación de las empresas y la gestión obrera; el reemplazo de las organizaciones armadas de la burguesía por la organización armada de los obreros y de los campesinos; y una acción continental de lucha por los Estados Unidos Socialistas de América Latina.[243]

En México asomó la crisis de las relaciones de inmigración y fronterizas con Estados Unidos. Las marchas realizadas en defensa de los inmigrantes "ilegales" en los EEUU en 2006, masivas y sostenidas por la población del sur del coloso imperial, inclusive de origen anglosajón, se integran en el despertar político antiimperialista de América Latina. En vez de válvula de escape de la crisis mexicana y centroamericana, la inmigración se va transformando en medio de transporte directo del resurgir antiimperialista del subcontinente en la propia ciudadela del imperialismo. En medio de la crisis por la inmigración, Bush ordenó el despliegue de 6.000 soldados en la frontera mexicana al sur del Río Bravo. El anuncio tuvo como telón de fondo el estancamiento de las reformas migratorias en el parlamento y las masivas manifestaciones populares por la legalización de los 12 millones de "sin papeles" que viven en los Estados Unidos.

[243] ALTAMIRA, Jorge. Tesis Programáticas para la IV° Internacional. *En Defensa del Marxismo* n° 33, Buenos Aires, abril de 2004.

Las mismas grandes empresas (Lockheed Martin, Northgroup Grumman, Raytheon, Ericsson y Boeing) que participan en la "reconstrucción" de Irak y Afganistán, se inscribieron como contratistas en la operación "asegurar la frontera", que incluye la construcción de un "muro virtual" y de centros de detención de migrantes, bajo un contrato de dos mil millones de dólares.

Para el dispositivo represivo se apela a la Guardia Nacional, veterana en Irak, lo que significa más masacres, en una región en la que en 2005 se registraron 400 muertes violentas o en circunstancias no aclaradas de personas que intentaron alcanzar la frontera. En los EEUU hay un sector que reclama la criminalización de los inmigrantes, incluso con la construcción de un muro en la frontera con México. Y también los que, en alianza con los demócratas, impulsan una reforma "integradora" basada en blanqueos limitados y permisos de trabajo temporarios ("trabajadores huéspedes"). Detrás de esta reforma se encolumnaron buena parte de los empresarios.

La política anti-migratoria pone en riesgo la extraordinaria fuente de beneficio capitalista que brinda la barata mano de obra inmigrante. No sólo por su explotación directa sino porque colabora con el abaratamiento general de la fuerza de trabajo norteamericana. Un estudio concluyó que en los últimos años el flujo migratorio provocó una depreciación del 8% del salario nativo estadounidense en los empleos menos calificados. La legalización parcial, precaria y temporaria preservaría este abaratamiento de la fuerza de trabajo y crearía una fuerza laboral permanentemente excluida de representación sindical y política. La crisis en torno de la reforma migratoria, y las manifestaciones multitudinarias antigubernamentales de la comunidad latina, son un reflejo de gran crisis política en los intestinos del gigante.[244]

Máxime cuando ello se combina con la creciente crisis política en México. La represión contra los campesinos de Atenco, en mayo de 2006, donde resultó un joven asesinado, cientos de detenidos, una treintena de detenidas violadas durante su traslado a prisión, palizas brutales contra manifestantes inermes, ingreso ilegal a cientos de viviendas, con robos y destrucción. La masacre fue armada desde la presidencia Fox y su círculo más estrecho: ante las pruebas y evidencias, el gobierno solamente admitió que hubo "excesos". Los campesinos de Atenco, hace algunos años, habían derrotado el intento de Fox de expropiar sus tierras para construir un aeropuerto.

En abril de 2006 se produjo la masacre de los mineros de Sicartsa, siderúrgica ubicada en el estado de Michoacán. En el intento de desalojo de la planta fueron asesinados dos trabajadores. Los mineros se encontraban en huelga contra el desplazamiento de la dirección de su sindicato por parte del gobierno. Su secretario general, Napoleón Gómez Urrutía, fue "desconocido" por el gobierno después de denunciar la responsabilidad estatal en la masacre de Pasta de las Conchas, donde 65 mineros murieron en un accidente industrial. Todo esto en vísperas de elecciones presidenciales.[245]

Lo ocurrido con el gobierno Lula y con el PT, en Brasil, ha sido fundamental. El partido que acabó, en función gubernamental, como una agencia del capital financiero internacional, fue la manifestación más completa de la construcción de un partido "plural", simultáneamente socialista y democrático. Para la inmensa mayoría de la izquierda fue la expresión de la superación de la tendencia orgánica a su fragmentación, y para un sector de ella la superación también de la crisis de dirección del proletariado.

Pero el gobierno de Lula no ha sido solamente la demostración de la perspectiva proimperialista que encierra la experiencia democratizante, no revolucionaria. Lo que

[244] VILLAR, Matias. Bush contra México. *Prensa Obrera* nº 947, Buenos Aires, 24 de mayo de 2006.

[245] OVIEDO, Luis. México es um volcán. *Prensa Obrera* nº 946, Buenos Aires, 18 de mayo de 2006.

fue la experiencia "plural" más desarrollada no fue otra cosa que el método de dominación política de un conglomerado de la pequeña burguesía nacionalista o ex stalinista, y de la fracción más importante de la burocracia de los sindicatos. La variedad de tendencias de izquierda que acompañaron esta experiencia hasta el final, procuraron aprovechar el marco del PT para escalar posiciones al interior del partido, en los parlamentos y en los sindicatos.[246] El lugar político especial que alcanzó Lula en las masas y el país lo convirtió en incuestionable para la inmensa mayoría de las tendencias que actuaban en su seno. El PT y Lula fueron apoyados en todas sus tentativas de frente popular, o sea de colaboración de clases, y más aún al final cuando ya se había aliado con un gran industrial y firmado el acuerdo que pedía el FMI a todos los candidatos.

La experiencia del PT desmiente a quienes apoyan a los frentes populares y a sus gobiernos, suponiendo que son la antesala segura de la irrupción de las masas y de la revolución social. Pero tanto el caso de Lula como el de Tabaré Vázquez muestran lo contrario: son instrumentos eficaces para estrangular las luchas populares antes de llegar al gobierno, y luego consiguen profundizar el reflujo popular, incluso traicionando sus compromisos con el pueblo y ejecutando una política pro-imperialista en toda la regla. La función de colaboración de clases, que caracteriza al frente popular, se manifiesta también en los movimientos nacionalistas, que se empeñan con todo en regimentar a las masas, incluso cuando juegan un rol progresivo en un estadio de lucha antiimperialista.

El gobierno de Lula ha logrado remontar la crisis que lo tuvo al borde de la caída. Las manifestaciones de lucha de las masas todavía tienen un carácter parcial y fragmentario y no han logrado revertir este escenario. Este gobierno, que debutó como una experiencia "plural", democrática e incluso internacionalista, es el principal ariete del imperialismo y de la gran burguesía de América Latina, contra los procesos nacionales de Venezuela y Bolivia.

Pese a la importancia de los procesos nacionales que encabezan el chavismo o el gobierno del MAS boliviano, se trata de políticas capitalistas y de asociación con el capital internacional. Pretenden mostrar que se puede disciplinar al capital internacional a los objetivos nacionales – una ilusión que refleja el margen de maniobra que ofrecen los altos precios del gas y del petróleo al nacionalismo militar venezolano y al nacionalismo pequeño burgués y campesino de Bolivia. Como movimientos de contenido capitalista, se empeñan en disciplinar al proletariado y regimentarlo en el plano político y sindical, incluso organizando una amplia base de apoyo social no proletaria. La independencia nacional de América Latina depende de una revolución popular dirigida por la clase obrera; toda la experiencia histórica ha demostrado que no puede ser la consecuencia de un proceso de transformaciones internas del Estado capitalista bajo la dirección de alguna de las variantes de la pequeña burguesía.

---

[246] E insiste com esa política, véase el balance del Congreso del PT de abril del 2006, realizado por un conocido dirigente de la izquierda de la CUT: "*O Encontro Nacional do PT, realizado de 28 a 30 de abril, teve como seu principal resultado a consolidação inquestionável do velho Campo Majoritário. Desde o PED, realizado em setembro de 2005, a parte da antiga esquerda do PT que ficou no partido, se esmerou para dizer que tinha mudado a correlação de forças internas e que o Campo Majoritário havia virado minoria. Este foi o centro dos argumentos das tendências Democracia Socialista (DS) e da Articulação de Esquerda (AE) - além de Brasil Socialista -BS e Fórum Socialista - FS - para se manter submissos às diretrizes de Lula e à essência neoliberal do seu governo. Alegaram que, junto com a tendência "Movimento PT" (MPT) e com os grupos palacianos da ex-prefeita Marta Suplicy havia uma nova maioria no partido. A esquerda consequente, que resolveu sair do PT e construir uma alternativa de esquerda ao social-liberalismo petista, sempre afirmou que este era um discurso falacioso, que não resistia nem às contas matemáticas*" (ALMEIDA, Jorge. *Encontro do PT Consolida Velho Campo Majoritário*. Documento, 11 de mayo de 2006).

El débil estado boliviano, que pretende desarrollar una política capitalista, no tiene condiciones de imponer una efectiva asociación a los poderosos capitales internacionales. Para transformar al país es necesario que gobiernen los trabajadores con los instrumentos políticos de un régimen proletario. Si el socialismo no pone el acento en la crítica al Estado capitalista, o sea su incapacidad para transformar las condiciones sociales del atraso y de la dependencia nacional, la crítica a las nacionalizaciones que ese estado ejecuta se limitan al grado de estatización de esas nacionalizaciones. La tendencia de la izquierda latinoamericana a sustituir el socialismo por el estatismo es cosa de todos los días: es populismo. Una intervención del Estado, en condiciones sociales explosivas, está obligada a asumir formas limitativas del capital. Las medidas intervencionistas que han debido adoptar Chávez, Morales, el ecuatoriano Palacios, Kirchner, muestran el choque potencial que el intervencionismo estatal representa para el capital.[247]

En las elecciones peruanas del 2006, más allá de su derrota para el aprista Alan Garcia, candidato presidencial del mayor (en realidad, único) aparato político del país, el APRA, el coronel nacionalista Ollanta Humala fue la novedad,[248] y pretendió situarse en la onda de los gobiernos de Lula, Evo Moales, Kirchner, Chávez. La cuestión minera ocupa el lugar central en la política peruana, con una movilización popular contra los monopolios imperialistas. La campaña electoral se desarrolló en el contexto de un creciente descontento, teniendo como blanco las operaciones de empresas extranjeras. Varias empresas internacionales fueron objeto de movilizaciones en 2005, incluyendo al grupo anglo-australiano BHP Billinton, a la norteamericana Newmont y a la británica Monterrico. Todos ellos fueron forzados a suspender operaciones o retirar proyectos.

La burguesía, y en particular los grandes grupos mineros internacionales que operan en Perú, recelaron que Humala pretendiese "renegociar los contratos" mineros vigentes. Gracias a las colosales exenciones impositivas y las condiciones establecidas en los contratos firmados en la época de Fujimori, Perú se convirtió en uno de los destinos preferidos por los grandes pulpos mineros internacionales y en uno de los mayores productores mundiales de minerales: es el tercer productor mundial de cobre y el quinto de oro (acaba de desplazar de ese puesto a Rusia). El gran capital minero domina enteramente la economía peruana (y a su régimen político). El candidato a vicepresidente de Humala, Gonzalo García, director del Banco Central, explicó que su eventual gobierno iría respetar los contratos "por un tiempo".

Humala fue presentado por sus detractores como un émulo del general Velazco Alvarado, que encabezó un régimen militar nacionalista que debutó en 1968 nacionalizando el petróleo y realizando una reforma agraria. En 1975, Velazco fue derrocado por otro general (Morales Bermúdez) y el régimen militar terminó como

[247] ALTAMIRA, Jorge. *América Latina, Seminário de Discusión*. Documento, 27 de mayo de 2006.

[248] Garcia obtuvo el 53.52 % de los votos, frente al 46.48% de Ollanta Humala Taso, del Partido Unión por el Perú, UPP (inexistente dos años antes) en el pleito que definió el presidente para el periodo 2006-2011. Los 14 departamentos de la sierra centro y sur apoyaron a Humala, al que Garcia extendió la mano: "Aquí el único derrotado ha sido Chávez", dijo de inmediato a su victoria. Ollanta Humala llamó a las fuerzas de izquierda, movimientos regionales y organizaciones sociales, a formar un gran Frente Nacionalista. Conquistó la primera minoría en el unicameral Congreso de la República con una bancada de 45 representantes, frente a los 36 del Partido Aprista. De los 24 departamentos, Humala ganó en 14 y García sólo en 10, entre ellos Lima y los principales departamentos de la costa. Para la Confederación Campesina del Perú el triunfo de García facilita la posibilidad de ratificar en el Congreso el Tratado de Libre Comercio, TLC, con los EEUU. En los departamentos de las comunidades campesinas andinas, Ollanta Humala ganó con notables diferencias, como en Ayacucho, donde obtuvo más del 80% de los votos.

agente del imperialismo. Más bien, Humala tenía semejanzas con Lucio Gutiérrez, el coronel ecuatoriano que hizo campaña como "nacionalista" para gobernar con el FMI (y terminar volteado por una rebelión popular).

En Ecuador, la CONAIE hizo una huelga general con corte de rutas "hasta que el gobierno de Alfredo Palacios se retirase de las negociaciones con Estados Unidos para la firma del Alca", exigiendo la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que se anulase la base militar de Estados Unidos y la rescisión del contrato con la petrolera Oxy. Impusieron parcialmente su programa, mediante el bloqueo de once de las 22 provincias del país.

Desde que asumió en abril de 2005, Palacios enfrentó una ola de huelgas y rebeliones campesinas, que lo obligaron a cambiar cuatro veces de ministro de Gobierno. Palacios afirmó que la protesta popular es "un intento criminal para derribar las instituciones de la democracia", y que "la firma del Alca es innegociable": tuvo que tragarse sus palabras. En la última década, los trabajadores ecuatorianos derribaron tres gobiernos (Bucaram, en 1997; Mahuad, en 2000; y Gutiérrez, en 2005). Pero esta enorme disposición de lucha, sin embargo, tiene el corsé de su dirección política, que cada vez encuentra un argumento para apoyar al sucesor del derrocado e incluso integrarse al gobierno.

Es la cuestión de la dirección política de las masas explotadas la que está planteada. La frustración de las enormes luchas de las masas latiunoamericanas en el siglo en curso, o el carácter limitado de las medidas de los gobiernos efectivamente nacionalistas, como Chávez y Morales, se explican en este cuadro de conjunto, en el que el conflicto nacional se procesa en el cuadro de una aguda lucha de clases y una no menos aguda lucha política en el seno del movimiento de los explotados, dimensión que escapa por completo a quienes, en afán supuestamemnte simplificador, todo reducen a que "el conflicto se produce entre, por una parte, líderes nacionalistas democráticamente elegidos que defienden una economía mixta que les permita financiar los servicios sociales, y, por otra parte, la construcción imperial de EE UU y la UE y sus políticas intervencionistas destinadas a prolongar la edad de oro del saqueo de economías privatizadas y no reguladas, y sus privilegios consistentes en un bajo nivel fiscal en la explotación de los recursos energéticos".[249]

Hace más de 60 años, la IV Internacional planteaba un objetivo estratégico: "América Central [incluía México, *nda*] y del Sur podrán arrancarse del atraso y la esclavitud solamente uniendo sus estados en una poderosa federación. Pero la retrasada burguesía sudamericana, agencia venal del imperialismo extranjero, no está llamada a cumplir esta tarea, sino que lo hará el joven proletariado sudamericano, el líder elegido de las masas oprimidas. La consigna para la lucha contra la violencia y las intrigas del imperialismo mundial y contra la sangrienta actividad de las camarillas compradoras será entonces: los *Estados Unidos Soviéticos de Centro y Sud América*".[250]

El norte estratégico propuesto superaba, planteando en términos de lucha antiimperialista y de lucha de clases, la aspiración de unidad continental ya formulada por el pensamiento democrático, nacionalista, y socialista, precedente, en nuestro continente. La revolución latinoamericana contemporánea, iniciada por el poderoso movimiento que en el período entre-guerras sacudió desde México (con la revolución de 1910-1919) hasta Argentina, pasando por la extraordinaria insurrección de El Salvador

[249] PETRAS, James. *Art. Cit.*

[250] Manifiesto de la IV Internacional sobre la guerra imperialista y la revolución mundial proletaria. *Apud*: TROTSKY, Leon. *Sobre la Liberación Nacional*. Bogotá, Pluma, 1976.

(1932), fue retomado en la posguerra por la revolución boliviana, primera revolución obrera de las Américas.

La revolución cubana (1959-61) demostró, en las propias barbas del imperialismo yanqui, que las tareas pendientes de la revolución democrática (independencia nacional efectiva, revolución agraria) sólo se podrían realizar por la vía de la revolución socialista. El Che Guevara fue alzado hasta la condición de símbolo mundial de la lucha revolucionaria, por representar esa conclusión de hierro.

La contrarrevolución sangrienta de las décadas de 1960-1970 [que aceleró la conquista militar y la colonización de América Latina, tal como sucedió cuando el golpe militar dirigido por EEUU en Brasil (1964), seguido por invasiones (República Dominicana en 1965) y subsiguientes golpes militares en Bolivia (1971), Uruguay (1972), Chile(1973), y Argentina (1976)] impuso un retroceso ideológico y político sin precedentes a la izquierda del continente, cuyos paladines (con las escasas excepciones del caso) comenzaron a presentarse como los adalides de la "democracia", pavimentando el camino que llevaría al centroizquierda y al "neoliberalismo de izquierda" de la década de 1990 y del presente siglo. Se dice que "la izquierda revolucionaria, debilitada por haber sido la víctima principal de los regímenes de terror del Cono Sur, acabó siendo presa fácil de las propuestas de la democracia liberal", pero esto sería, en la mejor hipótesis, apenas descriptivo, y el propio autor de la frase acaba como "presa" también, al afirmar que "el fracaso [de la Unidad Popular en Chile], así como la derrota de la guerra de guerrillas y del régimen sandinista, concluyó el período histórico inaugurado por el triunfo de la revolución cubana de 1959".[251]

El desbarranque capitalista (y corrupto, como lo demostró la experiencia del gobierno del PT en Brasil) del centroizquierda latinoamericano, la vigencia momentánea del remedo del viejo nacionalismo (en los casos boliviano, peruano, y especialmente venezolano), ocuparon el vacío dejado por el fracaso retumbante de las representaciones políticas directas del gran capital en el poder, y por la incapacidad de la izquierda de superar, a través del balance de su fracaso en la década de 1970, su base social y su programa pequeño burgués, ambos cuales la llevaran a un nivel insospechado de degeneración política en la última década del siglo XX y en lo que va del presente siglo, lo que fue realizado con el pretexto, según las palabras del mismo autor, de "construir un modelo hegemónico alternativo al neoliberalismo". El "presupuesto participativo", que el autor presenta como la vía regia hacia ese modelo, no fue otra cosa sino la plataforma política de la completa adaptación de la izquierda al capital.

La teoría de los "nuevos movimientos sociales" fue la base del *movimientismo* que, en nombre de la "crisis de la forma partido", justificó la adaptación ideológica y política de la izquierda. Y, aquí también, la represión pasada (mas que el fin del llamado "bloque socialista" en 1989-91) sirve como atenuante (en verdad, como justificativa): "La crisis de la *forma clase* de los movimientos sociales fue precedida por el ciclo de la más violenta contrarrevolución de América Latina".[252]

Hasta hoy se insiste en que los "nuevos movimientos sociales" (NMSs) fueron nada menos que la superación del marxismo: "Los NMSs constituyen tanto una crítica de la regulación social capitalista, como una crítica de la emancipación social socialista,

---

[251] SADER, Emir. A esquerda latino-americana no século XXI. In: LEHER, Roberto y SETUBAL, Mariana. *Pensamento Crítico e Movimentos Sociais*. San Pablo, Cortez, 2005, pp. 320-321.

[252] TISCHLER, Sérgio. A forma classe e os movimentos sociais na América Latina. In: LEHER, Roberto y SETUBAL, Mariana. *Pensamento Crítico e Movimentos Sociais*. San Pablo, Cortez, 2005, p. 116.

como fue definida por el marxismo. A través de la identificación de las nuevas formas de opresión que superan las relaciones de producción, siquiera siendo específicas de ellas, como la guerra, la polución, el machismo, el racismo y el productivismo; y de la defensa de un nuevo paradigma social, más basado en la cultura y en la calidad de vida que en la riqueza y el bienestar material, los NMSs denuncian, con una radicalidad sin precedentes, los excesos de regulación de la modernidad".

Sería inútil explicar al autor que esas formas de opresión (la guerra, la polución, el machismo, el racismo y el productivismo), y también la lucha contra ellas, son muy anteriores al nacimiento, inclusive, de los teóricos de los NMSs, concebidos como contrapuestos a la lucha de clases y el marxismo.

Sólo desde una posición social y personalmente satisfecha y conservadora se puede afirmar que, en el continente donde la pobreza absoluta y relativa, la concentración y polarización económicas, crecen más que en ningún otro, "para los NMSs, lo que es visto [por el marxismo] como factor de emancipación (el bienestar material, el progreso tecnológico de las fuerzas productivas) se transforma en factor de regulación".[253]

En América Latina, la crisis mundial de la producción capitalista se combinó con el retroceso histórico relativo del subcontinente, que inclusive la precedió, confiriendo localmente a esa crisis una forma particularmente destructiva, con ejemplos variados de barbarie, que han ido desde la represión sangrienta hasta las diversas formas de descomposición social, rural o urbana.

La creciente resistencia antiimperialista está llevando a un intervencionismo creciente de los EEUU, que prepara el camino parea una eventual intervención militar, momentáneamente descartada debido a la propia crisis interna del más importante centro imperialista. Comenzando a fines de la presidencia de Bill Clinton, y crecientemente durante el gobierno Bush, los EEUU han incrementado su presencia militar en América Latina. El Plan Colombia y más tarde la Iniciativa Andina, fueron esencialmente estrategias de guerra, que sirvieron para enfatizar la nueva contraofensiva imperial. Washington destinó 1.500 millones de dólares en ayuda militar a los militares colombianos y a sus suplentes paramilitares. Cientos de miembros de las Fuerzas Especiales fueron enviados a dirigir las operaciones en el terreno. Pilotos mercenarios estadounidenses, de firmas privadas, fueron subcontratados para participar en la guerra química en los campos de cultivo de coca de Colombia. Las fuerzas paramilitares se multiplicaron bajo la protección y la promoción del comando militar. El espacio aéreo, la costa, marítima y los estuarios fluviales, fueron colonizados por las fuerzas armadas de EE.UU. Se establecieron bases militares en El Salvador, Ecuador y Perú para dar apoyo logístico. Funcionarios de los EEUU establecieron una presencia operativa directa en el Ministerio de Defensa en Bogotá.

La resistencia de las masas latinoamericanas a la superexplotación capitalista y a la colonización imperialista ha sido enconada en las últimas décadas, y especialmente en lo que va del siglo XXI. La bancarrota del centroizquierda y el impasse del nacionalismo confirman cada día más que, para superar el drama histórico de América Latina, es preciso "hacer la revolución tomando el poder", al contrario de lo que afirman los corifeos tardíos del zapatismo, y tomar el poder para destruirlo, extinguiéndolo, y para, aliados a los trabajadores metropolitanos, destruir las clases dominantes de los propios centros imperialistas del capital financiero. La misión específica de la

[253] SOUSA SANTOS, Boaventura. Os novos movimentos sociais. In: LEHER, Roberto y SETUBAL, Mariana. *Pensamento Crítico e Movimentos Sociais*. San Pablo, Cortez, 2005, p. 177.

revolución latinoamericana, en el contexto de la revolución mundial, es la de tender el puente entre las masas oprimidas del mundo semicolonial y los trabajadores del principal centro del imperialismo capitalista, los EEUU.

Para elaborar un programa, y construir una organización, susceptibles de encarar esta inmensa tarea histórica, la vanguardia latinoamericana debe superar las no superadas taras de la "vieja izquierda" (stalinista, socialdemócrata o nacionalista) y las taras suplementarias creadas por la izquierda reciente, heredera mal arrepentida de aquella. Tarea difícil, pero no imposible, para que el continente del mayor crisol étnico y cultural ya creado por la historia, se transforme también en ejemplo mundial de emancipación humana.

BIBLIOGRAFIA

ABASCAL Y MACÍAS, Rafael. Reingeniería del gobierno foxista. *El Financiero*, México, 30 de septiembre de 2000.

ACOSTA, Alberto. Retos de la *glocalización* para América Latina. *La Insignia*, Madrid, enero del 2003.

Agenda Zamorana. *Contra el Imperialismo y el Reformismo*. Caracas, 2006.

AGGIO, Alberto. A emergência de massas na política latino-americana e a teoria do populismo In: AGGIO, Alberto y LAHUERTA, Milton. *Pensar o Século XX*. San Pablo, Unesp, 2003.

AKCELRUD, Isaac. *Reforma Agrária*. San Pablo, Global, 1989.

ALBUQUERQUE, Edu Silvestre de. *Que País é Esse?* Pensando o Brasil contemporâneo. San Pablo, Globo, 2005.

ALCÁNTARA SÁENZ, Manuel. Algunas cuestiones específicas de la transformación política en América Latina. La elite parlamentaria latinoamericana y el continuo izquierda-derecha. In: HOFMEISTER, Wilhelm y THESING, Joseph (eds.). *Transformaciones de los Sistemas Políticos en América Latina*. Buenos Aires, CIEDLA, 1995.

ALGRANATI, Clara. Lutas sociais e "neoliberalismo de guerra II na América Latina. In: LEHER, Roberto y SETUBAL, Mariana. *Pensamento Crítico e Movimentos Sociais*. San Pablo, Cortez, 2005.

ALMEIDA FILHO, Niemeyer. O debate atual sobre a dependência. *Revista da SEP* n° 16, San Pablo, diciembre de 2004.

ALMEIDA, Jorge. *Encontro do PT Consolida Velho Campo Majoritário*. Documento, 11 de mayo de 2006.

ALMEIDA, Paulo Roberto. *Mercosul: fundamentos e perspectivas*. Brasília, Editora Grande Oriente do Brasil, 1998.

ALTAMIRA, Jorge. 'Salida del default' ¿o la mayor estafa de la historia argentina? *Prensa Obrera* nº 889, Buenos Aires, 3 de marzo de 2005.

ALTAMIRA, Jorge. *América Latina, Seminario de Discusión*. Documento, 27 de mayo de 2006.

ALTAMIRA, Jorge. Bolivia: llamamos a votar por Evo Morales y el MAS. *El Obrero Internacional* n° 4, Buenos Aires, diciembre de 2005.

ALTAMIRA, Jorge. Colapsó el golpe gorila en Venezuela. *Prensa Obrera* nº 792, Buenos Aires, 15 de febrero de 2003.

ALTAMIRA, Jorge. *El Argentinazo*. Buenos Aires, Rumbos, 2002.

ALTAMIRA, Jorge. El pago al FMI es un desfalco contra Argentina. *Prensa Obrera* nº 929, Buenos Aires, 22 de diciembre de 2005.

ALTAMIRA, Jorge. FMI: una "suspensión" para pagar más. *Prensa Obrera* nº 863, Buenos Aires, 12 de agosto de 2004.

ALTAMIRA, Jorge. Piqueteros: de vanguardia de la lucha a movimiento de masas. *Prensa Obrera* nº 832, Buenos Aires, 7 de enero de 2004.

ALTAMIRA, Jorge. Tesis Programáticas para la IV° Internacional. *En Defensa del Marxismo* n° 33, Buenos Aires, abril de 2004.

ALTAMIRA, Jorge. Un Fox en el gallinero. *Prensa Obrera*, Buenos Aires, 27 de julio de 2000.

ALVAREZ GÁNDARA, Miguel. Chiapas: nuevos movimientos sociales y nuevo tipo de conflictos. In: SEOANE, José (org.). *Movimientos Sociales y Conflicto en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

ALVAREZ, Carlos G. Las reformas liberales de los servicios públicos. In: ESTAY REYNO, Jaime. *La Economía Mundial y América Latina*. Tendencias, problemas y desafíos. Buenos Aires, CLACSO, 2005.

ALVAREZ, Gina. *Medio Siglo de Historia de Cuba*. Documento, agosto de 2003.

ALZUGARAY, Carlos. De Bush a Bush: balance y perspectivas de la política externa de los Estados Unidos hacia Cuba y el Gran Caribe. In: GOMEZ , José Maria. *América Latina y el (Des)orden Global Neoliberal*. Hegemonía, contrahegemonía, perspectivas. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

ANTEZANA, Osvaldo. Bolivia tiene el gas, pero el negocio es de otros. *Trinchera* nº 20, La Paz, 20 de junio de 2002.

AQUINO, Italo de. *No Haiti, Lula é Operário Padrão do Imperialismo*. Documento, San Pablo, octubre de 2005.

ARANTES, Paulo (entrevista). Governo não será expulso, mas reciclado como sócio menor. *Correio da Cidadania*, San Pablo, 3 de setiembre de 2005.

ARAUJO BARRETO, Vânia. *A Continuidade Neoliberal do Governo Lula em Perspectiva Macrosociológica*. Documento, Florianópolis, mayo de 2006.

AZNÁREZ, Juan Jesús. ¿Quién disparó en Miraflores? *El País,* Madrid, 20 de abril de 2002.

BADARÓ MATTOS, Marcelo. Novas bases para o protagonismo sindical na América Latina: o caso brasileiro. In: LEHER, Roberto y SETUBAL, Mariana. *Pensamento Crítico e Movimentos Sociais*. San Pablo, Cortez, 2005.

BALP, José. Anatomía del megafraude. *Umbral* nº 12, México, marzo de 1999.

BARBOZA RODRÍGUEZ, Porfirio. Innovar la administración pública. *El Financiero,* México, 15 de septiembre de 2000.

BARRAL, Welber. *O Brasil e a OMC: os Interesses Brasileiros e as Futuras Negociações Multilaterais.* Florianópolis, Diploma Legal, 2000.

BASTO LUPI, Ande Lipp Pinto. *Soberania, OMC e Mercosul*. San Pablo, Aduaneiras, 2001; MACHADO, João Bosco. *Mercosul.* Processo de integração: origem, evolução e crise. San Pablo, Aduaneiras, 2000.

BASTOS, Élide Rugai. *As Ligas Camponesas.* Petrópolis, Vozes, 1984.

BECERRIL, Isabel. Gobierno foxista, amigable, pero mantendremos la distancia. *El Financiero,* México, 15 de septiembre de 2000.

BERGEN SCHMIDT, Ernst F. Objetivos e desafios da economia paraguaia. *Diplomacia, Estratégia, Política* nº 3, Brasília, abril de 2005.

BERMÚDEZ, Ismael. Mercosur en la crisis internacional. In: BORON, Atilio, GAMBINA, Julio y MINSBURG, Naum (orgs). *Tiempos Violentos*. Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

BID - UNIÓN EUROPEA. *América Latina en el Siglo XX*. Washington, 1998.

BID. *Desarrollo más allá de la Economía*. Progreso económico y social en América Latina. Informe 2000. Washington, 2000.

BIZZOZERO, Lincoln. Las relaciones MERCOSUR - Unión Europea. Una nueva modalidad de participación de las regiones en la mundialización. In: GOMEZ , José Maria. *América Latina y el (Des)orden Global Neoliberal*. Hegemonía, contrahegemonía, perspectivas. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

BLANCO, Daniel. Los dos alzamientos que conmovieron a Bolivia. *En Defensa del Marxismo* n° 29, Buenos Aires, enero de 2001.

BOEKER, Paul H. (org.). *Transformações na América Latina*. Privatização, investimento estrangeiro e crescimento. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1995

BONFIGLIO JR., Paulo L. Integração Hemisférica: a ameaça da ALCA ao Mercosul. *Anais do VI Encontro de estudantes e Graduados de Relações Internacionais CONESUL*. Santa Cruz de la Sierra, 2000.

BONILLA, Adrián. Percepciones de la amenaza de seguridad nacional de los países andinos: regionalización del conflicto colombiano y narcotráfico. In: GOMEZ , José Maria. *América Latina y el (Des)orden Global Neoliberal*. Hegemonía, contrahegemonía, perspectivas. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

BOUZAS, Roberto y FFRENCH-DAVIS, Ricardo. La globalización y la gobernabilidad de los países en desarrollo. *Revista de la CEPAL*. Número extraordinario , Santiago de Chile, octubre 1998.

BOWDEN, Mark. Los planes militares de EE UU en Colombia. *El País*, Madrid, 8 de julio de 2000.

BRONSTEIN, A. S. Reforma laboral en América Latina, entre garantismo y flexibilidad. *Revista Internacional del Trabajo*, vol. 116, n°1, Ginebra, 1997.

BRUNNER, José Joaquin. Educación superior en una sociedad global de la información. 1999. In: *http://www.geocities.com/brunner_cl/bogota.html0.*

BUITRAGO, Jaime. Álvaro Garcia Linera: el capitalista de PAT. *Correo del Sur*, La Paz, 30 de agosto de 2005.

BULMER-THOMAS, V. *Historia Económica de América Latina*. México, Fondo de Cultura Económica,

CACCIAMALI, Maria Cristina y BANKO, C. *Desafíos de la Política Social en América Latina.* Caracas, UCV/PROLAM-USP/PUCSP, 2002.

CACCIAMALI, Maria Cristina y KON, Anita (org.). *Costos Sociales de las Reformas Neoliberales en la América Latina*. Caracas, PUCSP/PROLAM-USP/FACES-UCV, 2000.

CACCIAMALI, Maria Cristina. Labor reform and adjustment of the labor market in Brazil and Argentina. In: EISEN, Robert. *Supranational Cooperation and Integration.* Goods and services vs. information. Frankfurt, Peter Lang, 2002.

CACCIAMALI, Maria Cristina. Processo de informalidade, flexibilização das relações de trabalho e proteção social na América Latina. *Cadernos PUC Economia,* n° 11, San Pablo, 2001.

CÁCERES, Sergio. ¿Porqué fracasó el bloqueo? *El Juguete Rabioso*, La Paz, 3 de agosto de 2003.

CAMARGO, Aspásia. A questão agrária: crise de poder e reforma de base. In: Boris Fausto (org.). *História Geral da Civilização Brasileira*. Tomo III, vol. 3 (O Brasil Republicano), San Pablo, Difel, 1984.

CAMARGO, Sonia de. Área de Livre Comércio das Américas: o labirinto latino-americano. In: GOMEZ, José Maria. *América Latina y el (Des)orden Global Neoliberal*. Hegemonía, contrahegemonía, perspectivas. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

CAMPBELL, Duncan. American navy helped Venezuelan coup. *The Guardian*, Londres, 29 de abril de 2002.

CANO, Wilson. *Soberania e Política Econômica na América Latina*. San Pablo, UNESP/UNICAMP, 2000.

CARDOSO, Fernando H. Esquerda e populismo na América Latina. *O Estado de S. Paulo*, 4 de junio de 2006.

Carta dos presidentes Hugo Chávez e Tabaré Vázquez aos presidentes dos países da América do Sul. *Diplomacia, Estratégia, Política* nº 3, Brasília, abril de 2005.

CASAS, Juan Carlos. *Um Novo Caminho para a América Latina*. Rio de Janeiro, Record, 1991.

CASTAÑEDA, Jorge (entrevista). *El País*, Madrid, 31 de mayo de 2000.

CASTAÑEDA, Jorge. Bem me quer, mal me quer. *Folha de S. Paulo*, Caderno Mais! 28 de mayo de 2006.

CASTAÑEDA, Jorge. Latin America’s turn to the left. *Foreign Affairs* vol. 85, n° 3, Nueva York, mayo-junio de 2006.

CASTELLANOS Antonio, GONZÁLEZ Roberto y LOMAS Emilio. Factores coyunturales sostienen el auge económico. *La Jornada*, México, 4 de septiembre de 2000.

CASTELLS, Manuel . La ciudad de la nueva economía. *La Factoría* nº 12, junio-septiembre 2000. In: *http://www.lafactoriaweb.com/articulos/castells12.htm.*

CECEÑA, Ana Esther. El zapatismo: de la inclusión en la nación a la nación en que quepan todos los mundos. In: GOMEZ , José Maria. *América Latina y el (Des)orden Global Neoliberal*. Hegemonía, contrahegemonía, perspectivas. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

CEDLA. *Legitimando el Orden Neoliberal.* 100 días de gobierno de Evo Morales. La Paz, CEDLA, marzo de 2006.

CEPAL. *América Latina y el Caribe en la Transición Hacia una Sociedad del Conocimiento*. Una agenda de políticas públicas. Santiago de Chile, 2000.

CEPAL. *Anuário Estadístico de América Latina y Caribe*, 2001.

CEPAL. Balance Preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2000. Santiago de Chile, 2000. In: *http://www.eclac.cl/publicaciones/DesarrolloEconomico/3/LCG2123/bpe-2000.pdf*

CEPAL. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2000. Santiago de Chile, 2000. In: *http://www.cepal.org.*

CEPAL. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 1998-1999*. Santiago de Chile, 1999.

COGGIOLA, Osvaldo (org.). *América Latina e a Globalização*. San Pablo, PROLAM/USP – Scortecci, 2004.

COGGIOLA, Osvaldo. América Latina: mudanças políticas recentes. *Estudos* nº 18, San Pablo, Universidad de San Pablo, diciembre 1990.

COGGIOLA, Osvaldo. Bolívia: viraje político. *Prensa Obrera*, Buenos Aires, agosto de 2002.

COGGIOLA, Osvaldo. Brasil: la cuestión agraria y la lucha del MST. *En Defensa del Marxismo* n° 22, Buenos Aires, enero de 1999

COGGIOLA, Osvaldo. La crisis en el PT de Brasil. *En Defensa del Marxismo* n° 31, Buenos Aires, agosto de 2003.

COGGIOLA, Osvaldo. La crisis mexicana y la guerrilla zapatista. *En Defensa del Marxismo* nº 10, Buenos Aires, diciembre 1994.

COGGIOLA, Osvaldo. Movimentos operários e socialistas na transição da Monarquia à República. *Estudos* nº 12, San Pablo, FFLCH-USP, julio de 1989.

COGGIOLA, Osvaldo. *O Governo Lula*. Da esperança à realidade. San Pablo, Xamã, 2004.

COLETTI, Claudinei. Avanços e impasses do MST e da luta pela terra no Brasil nos anos recentes. In: SEOANE, José (org.). *Movimientos Sociales y Conflicto en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

Colombia, la narcotización de sus procesos. *http://www.geocities.com/manesvil/narcotic.html.*

CORNEJO RAMIREZ, Enrique. A economia peruana: balanço, perspectivas e propostas. *Diplomacia, Estratégia, Política* nº 3, Brasília, abril de 2005.

CORNEJO, José F. ¿El fin de América Latina? *La Insignia*, Bruselas, setiembre 2002.

CORRÊA LIMA, Sérgio Mourão. *Tratados Internacionais no Brasil e a Integração*. San Pablo, San Pablo: Editora LTR, 1998.

CORREIA DE ANDRADE, Manuel. *A Questão Agrária e as Formas de Luta dos Camponeses pela Posse da Terra*, mim., sdp.

COSTA NETO, Canrobert. Políticas Agrária na Bolívia (1952-1979). Reforma ou revolução? San Pablo, Expressão Popular, 2005.

COURIEL, A. Globalización y democracia en América Latina. *Revista de la CEPAL*. Número extraordinario, Santiago de Chile, octubre 1998.

COURIEL, Alberto. Uruguai: critérios básicos para uma proposta de esquerda. *Diplomacia, Estratégia, Política* nº 3, Brasília, abril de 2005.

CUEVA, Agustín. *El Desarrollo del Capitalismo en América Latina*. México, Siglo XXI, 1981.

CUIDO BEJAR, Rafael. La transición política y el sistema político en formación en EI Salvador. In: HOFMEISTER, Wilhelm y THESING, Joseph (eds.). *Transformaciones de los Sistemas Políticos en América Latina*. Buenos Aires, CIEDLA, 1995.

CURZIO, Leonardo. O México no século XX: da revolução à democratização. In: AGGIO, Alberto y LAHUERTA, Milton. *Pensar o Século XX*. San Pablo, Unesp, 2003.

CUT (Central Única dos Trabalhadores). *Cartilha de Política Agrícola.* San Pablo, 1989.

CHAVES TEIXEIRA, Ana Claudia. E ALBUQUERQUE, Maria do Carmo. Orçamentos participativos: projetos políticos, partilha de poder e alcance democrático. In: DAGNINO, Evelina et al (org.). *A Disputa pela Construção Democrática na América Latina*. San Pablo, Paz e Terra, 2006.

CHÁVEZ, Víctor. El gabinete de Vicente Fox. *El Financiero*, México, 30 de septiembre de 2000.

CHÁVEZ, Walter. Eruption annoncé du volcan bolivien. *Le Monde Diplomatique*, Paris, mayo de 2003.

CHOMSKY, Noam [entrevista a Bernie Dwyer]. What's happening is something completely new in the history of the hemisphere. In: *http://www.antiterroristas.cu/*, marzo de 2006.

CHOSSUDOVSKY, Michel. *A Globalização da Pobreza*. Impactos das reformas do FMI e do Banco Central. San Pablo, Moderna, 1999.

DAVID, B.A. Atlas dos beneficiários da Reforma Agrária. In: João P. Stédile (org.). *A Reforma Agrária e a Luta do MST*. Petrópolis, Vozes, 1997.

DE LA PEÑA, Guillermo. Os novos intermediarios étnicos, o movimento indígena e a sociedade. In: DAGNINO, Evelina et al (org.). *A Disputa pela Construção Democrática na América Latina*. San Pablo, Paz e Terra, 2006.

DELGADO, Guilherme C. *Capital Financeiro e Agricultura no Brasil*. San Pablo, Icone, 1985.

DENIS, Jean-Claude. A quem serve o Mercosul? *A Verdade* n° 47, San Pablo, marzo de 2006.

Departamento de Estado dos EUA/Bureau de Assuntos Públicos. *Democracia na América Latina e no Caribe*. A promessa e o desafio. Relatório Especial n° 158, Washington DC, março 1987.

DEVLIN, Richard y FFRENCH-DAVIS, Ricardo. Towards an evaluation of regional integration in Latin America in the 1990s. *Working Paper* nº 2, diciembre 1998, Buenos Aires, Serie INTAL-ITD. In: *http://www.iadb.org/intal/publicaciones/devlin.pdf*

DEVOTO, Fernando. Para uma história da Argentina no século XX. In: AGGIO, Alberto y LAHUERTA, Milton. *Pensar o Século XX*. San Pablo, Unesp, 2003.

DEYOUNG, Karen. US details talks with opposition: administration insists it did not encourage a coup. *The Washington Post*, 17 de abril de 2002.

DIAS CARCANHOLO, Marcelo. A falsa via chilena: lógica, contradições e limites do modelo. *Revista da SEP* n° 15, San Pablo, diciembre de 2004.

DIEGUES JÚNIOR, Manuel. *Establecimientos Rurales en América Latina.* Buenos Aires, Eudeba, 1967.

DILLON SOARES, Gláucio Ary. *A Questão Agrária na América Latina*. Rio de Janeiro, Zahar, 1976.

DOS SANTOS, Theotônio. *La Teoría de la Dependencia*. Balance y perspectivas. Buenos Aires, Plaza & Janés, 2003.

DRINOT SILVA, Perú es una incógnita. *Le Monde Diplomatique/El Dipló*, Buenos Aires, abril de 2006.

DURÃO BARROSO, José Manuel (entrevista). Europa teme populismo nefasto na América Latina. *Folha de S. Paulo*, 3 de junio de 2006.

DUTRA DE OLIVEIRA, José E. Bóias-frias: uma realidade brasileira. *ACIESP* nº 30, San Pablo, CNPq, 1981.

ECHAZU ALVARADO, Luis Alberto. *La venta del gas, control yanqui, un gran negocio para las transnacionales y un saqueo para Bolivia*. La Paz, agosto de 2002.

EMMERICH, Gustavo Ernesto. Tratados de libre comercio y acuerdos de complementación o integración económica vigentes y en negociación en América. *Araucaria*, Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, n º 11, México, primer semestre de 2004.

ESCOBAR, Filemón. *Testimonio de un Militante Obrero*, La Paz, HISBOL, 1984.

ESTAY REYNO, Jaime. América Latina en las negociaciones comerciales multilaterales y hemisféricas. In: ESTAY REYNO, Jaime. *La Economía Mundial y América Latina*. Tendencias, problemas y desafíos. Buenos Aires, CLACSO, 2005.

ESTENSORO, Luis. América Latina e a crise econômica mundial. *Estudos* n° 39-40, San Pablo, Universidad de San Pablo, mayo de 1994.

FALCÃO, Luiz. Trabalhador brasileiro está mais pobre. *A Verdade*, Belo Horizonte, enero de 2006.

FAVARO, Orietta. Protesta social y representación en las provincias argentinas. Orietta. In: SEOANE, José (org.). *Movimientos Sociales y Conflicto en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

FAVRE, Henri. Chiapas 1993: intento de análisis de una situación de insurrección. *Cuadernos Americanos* nº 91, México, UNAM, enero-febrero de 2002.

FAZIO, Carlos. En gestación, un nuevo poder: la meta, el Estado empresarial. *La Jornada*, México, 26 de agosto de 2000.

FAZIO, Carlos. Fox, el primer presidente empresario. *La Jornada*, México, 28 de agostob de 2000.

FERGUSON, Niall. Quer uma encrenca histórica? Olhe para o Sul. *Los Angeles Times / O Estado de S. Paulo*, 15 de febrero de 2006.

FERNANDES, Bernardo M. Formação, especialização e territorialização do MST. In: João P. Stédile (org.). *A Reforma Agrária e a Luta do MST*. Petrópolis, Vozes, 1997.

FERNÁNDEZ BAEZA, Marioi]. La transformación del sistema político chileno desde 1990. In: HOFMEISTER, Wilhelm y THESING, Joseph (eds.). *Transformaciones de los Sistemas Políticos en América Latina*. Buenos Aires, CIEDLA, 1995.

FERRER, Aldo, La globalización, la crisis financiera y América Latina. In: BORON, Atilio, GAMBINA, Julio y MINSBURG, Naum (orgs). *Tiempos Violentos*. Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

FERRER, Aldo. América Latina y la globalización. *Revista de la CEPAL*. Número extraordinario , Santiago de Chile, octubre 1998.

FERRER, Aldo. La globalización, la crisis financiera y América Latina. *Comercio Exterior* vol. 49, nº 6, México, junio 1999.

FFRENCH-DAVIS, Ricardo e GRIFFITH-JONES Stephany. *Os Fluxos Financeiros na América Latina*. Um desafio ao progresso. San Pablo, Paz e Terra, 1997.

FFRENCH-DAVIS, Ricardo. *América Latina y el Caribe*. Políticas para mejorar la inserción en la economía mundial. Santiago de Chile, CEPAL y Fondo de Cultura Económica, 1998.

FIGUEROA IBARRA, Carlos. Militarización, crimen y poder invisible en Guatemala: el retorno del centauro. In: SEOANE, José (org.). *Movimientos Sociales y Conflicto en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

FILHO, Aziz. Bolivia expulsa EBX. *Istoé*, San Pablo, 3 de mayo de 2006.

FORERO, Juan. Venezuela's chief forced to resign; civilian installed. *The New York Times*, 13 de abril de 2002.

FREITAS, Janio de. Aniversário da queda. *Folha de S. Paulo*, 14 de febrero de 2006.

FUENTES, Carlos. A morte do medo. *O Estado de S. Paulo*, San Pablo, 13 de julio de 1997.

FURTADO, Celso. *Subdesenvolvimento e Estagnação na América Latina*. Rio de Janeiro Civilização Brasileira, 1968.

GAMBINA, Julio C. et al. Liberalización de la economía argentina ¿ruptura o continuidad? In: ESTAY REYNO, Jaime. *La Economía Mundial y América Latina*. Tendencias, problemas y desafíos. Buenos Aires, CLACSO, 2005.

GANDÁSEGUI, Marco A. América Latina y el imperialismo en el siglo XXI. In: ESTAY REYNO, Jaime. *La Economía Mundial y América Latina*. Tendencias, problemas y desafíos. Buenos Aires, CLACSO, 2005.

GARCÍA GALLEGOS, Berta. Un coronel contra la "vieja política". *Le Monde Diplomatique* n° 43, Edición Cono Sur, Buenos Aires, enero de 2003.

GARCÍA LINERA, Álvaro. Radiografía de las nuevas izquierdas. *Le Monde Diplomatique*, La Paz, julio de 2003.

GARCIA LINERA, Avaro. Os movimentos indígenas na Bolívia. *Diplomacia, Estratégia, Política* nº 3, Brasília, abril de 2005.

Gás natural: contrato com a Bolívia pode ser prorrogado. *Gazeta Mercantil*, San Pablo, 23 de mayo de 2003.

GIANNETTI, Eduardo. *Proálcool, Energia e Transporte*. San Pablo, FIPE, 1981.

GIARDINI, Miguel. A pesar de los altos precios del petroleo, Venezuela esta en bancarrota. *Prensa Obrera* nº 776, Buenos Aires, 17 de octubre de 2002.

GIARRACCA, Norma. La protesta agrorrural en la Argentina. In: SEOANE, José (org.). *Movimientos Sociales y Conflicto en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

Glifosato: the deadly herbicide. *http://www.pearson-college.uwc.ca/pearson/ensy/mega/esmega99/laura/glif.htm.*

GLOBERMAN, Steven e WALKER, Michael. El TLC. Un enfoque trinacional. México, Fondo de Cultura Económica, 1994.

GOMEZ, José Maria. El segundo FSM de Porto Alegre y los desafíos del movimiento social global contrahegemónico. In: GOMEZ , José Maria. *América Latina y el (Des)orden Global Neoliberal*. Hegemonía, contrahegemonía, perspectivas. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

GONZÁLEZ AMADOR, Roberto y CASTELLANOS, Antonio. El crecimiento causó concentración de la riqueza y más pobres. *La Jornada*, México, 21 de agosto de 2000.

GONZALEZ POSSO, Dario. Guerra biológica en Colombia. Las falacias del "control biológico". *http://www.asambleaporlapaz.f2s.com/documentos/PlanColombia-GuerraBiologica.html.*

GORENDER, Jacob. *Gênese e Desenvolvimento do Capitalismo no Campo Brasileiro.* Porto Alegre, Mercado Aberto, 1987.

GOTT, Richard. *À Sombra do Libertador*. Hugo Chávez Frias e a transformação da Venezuela. San Pablo, Expressão Popular, 2004.

GOYOS JR., Durval de Noronha *A OMC e os Tratados da Rodada do Uruguai*. San Pablo, Observador Legal, 1995.

GRAZIANO DA SILVA, José. *Para Entender o PNRA.* San Pablo, Brasiliense, 1985.

GRAZIANO DA SILVA, José. *Questão Agrária*. San Pablo, Brasiliense, 1994.

GRAZIANO NETO, Francisco. *Questão Agrária e Ecologia*. San Pablo, Brasiliense, 1985.

GRAZIANO, Francisco. *Qual Reforma Agrária?* San Pablo, Geração Editorial, 1996.

GREIDER, William. *O Mundo na Corda Bamba.* Como entender o crash global. San Pablo, Geração Editorial, 1998.

GRIER, Robin M. Political cycles in nontraditional settings: theory and evidence from the case of Mexico. *The Journal of Law and Economics*. Washington, Volume XLIII (1), abril de 2000.

GROBART SUNSHINE, Fabio. Siglo XXI: retos para América Latina de cara a Ia sociedad basada en el conocimiento. In: ESTAY REYNO, Jaime. *La Economía Mundial y América Latina*. Tendencias, problemas y desafíos. Buenos Aires, CLACSO, 2005.

Grupo Civil de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia en Ecuador. Peligros del uso de *Fusarium oxysporum* en fumigaciones previstas por el Plan Colombia. Consecuencias en Ecuador. *http://www.geocities.com/Eureka/Network/2251/plancolombia2.htm.*

GUEDES, Odilon. Economia no governo Lula: arrocho e concentração. *Correio da Cidadania*, San Pablo, 21 de enero de 2006.

GUIDOLIN, Benedito. *Mercosul e Blocos Econômicos*. San Pablo, STS, 1999.

GUNDER FRANK, André. *Lumpenburgusia: Lumpendessarollo*. México, Editora Era, 1971.

GUREVICH, Luis. Ecuador, "aliado estratégico" de los Estados Unidos. *Prensa Obrera* nº 795, Buenos Aires, marzo de 2003.

GWARTNEY, J, LAWSON, R y SAMIDA, D. *Economic Freedom of the World: 2000 Annual Report*. Vancouver, The Fraser Institute, 2000.

HARNECKER, Marta. *Os Desafios da Esquerda Latino-americana*. San Pablo, Expressão Popular, 2005.

HELLER, Pablo. Fábricas ocupadas y gestión obrera. *En Defensa del Marxismo* nº 30, Buenos Aires, mayo de 2003.

HELLER, Pablo. *Fábricas Ocupadas*. Buenos Aires, Rumbos, 2004.

HELLER, Pablo. Haití, después de la insurrección. *El Obrero Internacional* nº 6, Buenos Aires, marzo de 2006.

HELLER, Pablo. Venezuela: ¿el "socialismo del siglo XXI"? *El Obrero Internacional* n 5, Buenos ires, enero de 2006.

HEREDIA, Mariana. Política y liberalismo conservador a través de las editoriales de la prensa tradicional en los años '70 y '90. In: LEVY, Bettina (org.). *Crisis y Conflicto en el Capitalismo Latinoamericano*. Buenos Aires, CLACSO, 2002.

HERMANSON, Jeff y DE LA GARZA TOLEDO, Enrique. El corportaicismo y las nuevas luchas en las maquilas de México. In: DE LA GARZA TOLEDO, Enrique (org.). *Sindicatos y Nuevos Movimientos Sociales en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2005.

HERNÁNDEZ, Rafael. *Mirar a Cuba.* Ensayos sobre cultura y sociedad civil. La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1999.

HERRERA ZÚÑIGA, René. La transformación de sistema político en Nicaragua. In: HOFMEISTER, Wilhelm y THESING, Joseph (eds.). *Transformaciones de los Sistemas Políticos en América Latina*. Buenos Aires, CIEDLA, 1995.

HEVIA DE LA JARA, Felipe. A institucionalização da participação cidadã: análise dos marcos legais da participação na América Latina. In: DAGNINO, Evelina et al (org.). *A Disputa pela Construção Democrática na América Latina*. San Pablo, Paz e Terra, 2006.

Historia de América en el Siglo XX. Segunda posguerra: nacionalismo, liberación y guerra fría. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1986.

HOFMAN, Albert. *The Economic Development of the Twentieth Century*. Northampton, Edward Elgar Publishing, 1999.

HOFMEISTER, Wilhelm. Bolivia: La reforma de la revolución. In: HOFMEISTER, Wilhelm y THESING, Joseph (eds.). *Transformaciones de los Sistemas Políticos en América Latina*. Buenos Aires, CIEDLA, 1995.

HOFMEISTER, Wilhelm. Transformación de los sistemas políticos en América Latina: resumen de las experiencias y conclusiones en el marco de la cooperación internacional. In: HOFMEISTER, Wilhelm y THESING, Joseph (eds.). *Transformaciones de los Sistemas Políticos en América Latina*. Buenos Aires, CIEDLA, 1995.

HOMEM DE MELO, Fernando. *O Problema Alimentar no Brasil*. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1983.

HURTADO, Osvaldo. Os problemas de governabilidade na democracia equatoriana. *Diplomacia, Estratégia, Política* nº 3, Brasília, abril de 2005.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). *Censos Agropecuários*, años 1950, 1960, 1970 y 1975.

IEFE. *Costos y Perspectivas de la Industria Automotriz*. Buenos Aires, mayo de 1999

IGLESIAS, Nydia. Fox abroad: visions of the future. *Review of the Economic Situation of Mexico*. Nueva York, Volume LXXVI, n° 897, septiembre de 2000.

INCLÁN, Isabel. Política y economía: México no es Coca-Cola, pero la experiencia empresarial ayuda. *El Financiero*, México, 21 de agosto de 2000.

IÑIGO CARRERA, Juan. La crisis de la representación política como forma concreta de reproducirse la base específica de la acumulación de capital en Argentina. *Revista da SEP* n° 15, San Pablo, diciembre de 2004.

IÑIGO CARRERA, Nicolás y COTARELO, Maria Celia. Argentina, diciembre de 2001: hito en el proceso de luchas populares. In: SEOANE, José (org.). *Movimientos Sociales y Conflicto en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

ISUNZA VERA, Ernesto. Prestação de contas e projetos políticos no contexto da transição política mexicana. In: DAGNINO, Evelina et al (org.). *A Disputa pela Construção Democrática na América Latina*. San Pablo, Paz e Terra, 2006.

ITU. *Indicadores de Telecomunicaciones de las Américas 2000*. Ginebra, Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2000.

IZAGUIRRE, Inés. Algunos ejes teórico-metodológicos en el estudio del conflicto social. In: SEOANE, José (org.). *Movimientos Sociales y Conflicto en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

JANK, Marcos S. O vôo de galinha do comércio externo. *O Estado de S. Paulo*, 7 de junio de 2005.

JIMÉNEZ LAZCANO, Mauro. Fox: una nueva forma de hacer las cosas. *Macroeconomía* n° 86, México, 15 de septiembre de 2000.

KATZ, Claudio. A narco-economia na América Latina. *Estudos* n° 39-40, San Pablo, Universidad de San Pablo, mayo de 1994.

KIRKMAN, George. It’s more than just being connected. A discussion of some issues of information technology and international development. *Development E-commerce Worshop*, Massachussets, MIT, agosto 1999.

KLACHKO, Paula. La conflictividad social en la Argentina de los '90: el caso de las localidades petroleras de Cutral Có y Plaza Huincul (1996-1997). In: LEVY, Bettina (org.). *Crisis y Conflicto en el Capitalismo Latinoamericano*. Buenos Aires, CLACSO, 2002.

KLEIN, Herbert (entrevista). Uma trama delicada. *Folha de S. Paulo*, Caderno Mais! 28 de mayo de 2006.

KORNBLITH, Miriam. Crisis y transformación del sistema político venezolano. In: HOFMEISTER, Wilhelm y THESING, Joseph (eds.). *Transformaciones de los Sistemas Políticos en América Latina*. Buenos Aires, CIEDLA, 1995.

KRUSE, Tomás. La “guerra del agua” en Cochabamba. In: DE LA GARZA TOLEDO, Enrique (org.). *Sindicatos y Nuevos Movimientos Sociales en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2005.

La alternativa semipresidencial. ¿Un camino posible en Latinoamérica? In: HOFMEISTER, MARTÍNEZ OCAMICA, H. Gutenberg. Wilhelm y THESING, Joseph (eds.). *Transformaciones de los Sistemas Políticos en América Latina*. Buenos Aires, CIEDLA, 1995.

La ley contra bloqueadores será resistida con bloqueos, *La Prensa*, La Paz, 2 de agosto de 2003.

La mala hora del Comité Ejecutivo de la COB. *Alerta Laboral* 28, La Paz, junio de 2003.

La utopía de un supergasoducto sin gás. *El Nacional*, Caracas, 20 de febrero de 2006.

LACKISCH, Carlota. La inconclusa transición paraguaya.. In: HOFMEISTER, Wilhelm y THESING, Joseph (eds.). *Transformaciones de los Sistemas Políticos en América Latina*. Buenos Aires, CIEDLA, 1995.

LAHMEYER LOBO, Eulália Maria. *América Latina Contemporânea*. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1970.

LAHUERTA, Milton. O século XX brasileiro: autoritarismo, modernização e democracia. In: AGGIO, Alberto y LAHUERTA, Milton. Pensar o Século XX. San Pablo, Unesp, 2003. BRAUN, Herbert. Honra, amnésia, maldade e reconciliação na Colômbia. In: AGGIO, Alberto y LAHUERTA, Milton. Pensar o Século XX. San Pablo, Unesp, 2003.

LAMOUNIER, Bolivar. El Brasil de los anos 80 a los 90. De la crisis aguda a las presentes perspectivas de estabilidad política y reforma económica. In: HOFMEISTER, Wilhelm y THESING, Joseph (eds.). *Transformaciones de los Sistemas Políticos en América Latina*. Buenos Aires, CIEDLA, 1995.

LANG, Wilson. Os holofotes sobre a corrupção e o apagão da infra-estrutura. *Folha de S. Paulo*, 27 de julio de 2005.

LARA CORTEZ, Claudio. Liberalización y subordinación de los servicios públicos a la lógica del capital en los páises del Cono Saur. In: ESTAY REYNO, Jaime. *La Economía Mundial y América Latina*. Tendencias, problemas y desafíos. Buenos Aires, CLACSO, 2005.

Las víctimas de la guerra química en Colombia. *Clarín*, Buenos Aires, 2 de febrero de 2001.

Latin America: the return of populism. *The Economist*, Londres, 15 de abril de 2006.

LAVAGNA, Roberto. A Argentina, rumo a outra dimensão de país. *Diplomacia, Estratégia, Política* nº 3, Brasília, abril de 2005.

LEMOINE, Maurice. Bolivia: the military plan and wait. *Le Monde Diplomatique*. English edition, febrero de 2006.

LEMOINE, Maurice. Nouvelles guérrillas dans le Guerrero mexicain. *Le Monde Diplomatique*, París, noviembre 1998.

LENIN Vladimir I. *O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia*. San Pablo, Nova Cultural, 1988.

LEVY, Bettina. Una introducción a los estudios actuales sobre la política, el conflicto y el estado en América Latina y el Caribe. In: LEVY, Bettina (org.). *Crisis y Conflicto en el Capitalismo Latinoamericano*. Buenos Aires, CLACSO, 2002.

Ley contra los bloqueos, *La Prensa*, La Paz, 3 de agosto de 2003.

LINCE, Leo. Caixa dois, fome zero. *Correio da Cidadania*, San Pablo, 3 de septiembre de 2005.

LOMAS, Emilio. La verdadera herencia de Zedillo. *La Jornada*, México, 4 de septiembre de 2000.

LOPEZ MAYA, Margarita. Insurrecciones de 2002 em Venezuela: causas e implicaciones. In: SEOANE, José (org.). *Movimientos Sociales y Conflicto en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

LORA, E y BARRERA, F. A decade of structural reform in Latin America: growth, productivity, and investment are not what they used to be. *Working Paper Green Series* n° 350. BID.

LORENC VALCARCE, Federico. Agenda política, producción de sentido y conflictos sociales en la Argentina. EI último año del gobierno de Menem. In: LEVY, Bettina (org.). *Crisis y Conflicto en el Capitalismo Latinoamericano*. Buenos Aires, CLACSO, 2002.

LOWENTHAL, Abraham F. e TREVERTON, Gregory F. (org.). *América Latina en un Mundo Nuevo*. México, Fondo de Cultura Económica, 1996.

LUCENA, Héctor. La crisis política en Venezuela: repercusiones y respuestas del movimiento sindical. In: DE LA GARZA TOLEDO, Enrique (org.). *Sindicatos y Nuevos Movimientos Sociales en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2005.

MADDISON, Angus. *La Economía Mundial 1820-1992*. Análisis y estadísticas. París, Perspectivas OCDE, 1997.

MAGRI, Julio. Kirchner lo hizo: 4.000 millones de dólares en intereses y 20.000 millones en salida de capital. *Prensa Obrera* nº 817, Buenos Aires, 18 de septiembre de 2003.

MAINWARING, Scott. *Igreja Católica e Política no Brasil (1916-1985).* San Pablo, Brasiliense, 1989.

MALAJ, Norberto. Venezuela: Los yanquis y Chávez hacen guantes. *Prensa Obrera* nº 732, Buenos Aires, 6 de diciembre de 2001.

MANSELL, R. y WEHN, U. *Knowledge Societies*. Information technology for sustainable development. Nueva York, Oxford University Press, 1998.

MARCANO, Cristina y BARRERA, Alberto (entrevista). Sin el petróleo, Chávez no estaría en el poder. *El País*, Madrid, 6 de mayo de 2006.

MARIRRODRIGA, Jorge. Latinoamérica se rearma. *El País*, Madrid, 29 de abril de 2006.

MARQUIS, Christopher. US bankrolling is under scrutiny for ties to Chávez Ouster. *The New York Times*, 25 de abril de 2002.

MARQUIS, Christopher. US cautioned leader of plot against Chávez. *The New York Times*, 17 de abril de 2002.

MARTIN, Hans-Peter e SCHUMANN, Harald. *A Armadilha da Globalização*. San Pablo, Editora Globo, 1999.

MARTÍN, Jorge. Bolívia: Una rebelión contra todos los regímenes en América del Sur. *Prensa Obrera* nº 790, Buenos Aires, 20 de febrero de 2003.

MARTINS, Carlos Eduardo. Neoliberalismo e desenvolvimento na América Latina. In: ESTAY REYNO, Jaime. *La Economía Mundial y América Latina*. Tendencias, problemas y desafíos. Buenos Aires, CLACSO, 2005.

MAURO, Frédéric. *Nova História e Novo Mundo.* San Pablo, Perspectiva, 1982.

MAXWELL, Kenneth A América Latina joga a toalha. *Folha de S. Paulo*, 8 de abril de 2002.

MAXWELL, Kenneth. Fora do eixo. *Folha de S. Paulo*, Caderno Mais! 28 de mayo de 2006.

MEDEIROS, Carlos Aguiar. Globalização e a inserção internacional diferenciada da Ásia e América Latina. In: FIORI, José Luiz. *Poder e Dinheiro*. Uma economia política da globalização. Petrópolis, Vozes, 1997.

MEDINA, R. D. Jóvenes y empleo en los noventa. 2001. In: *http://www.ilo.org/centerfor*.

MESSARI, Nizar. Existe um novo cenário de segurança internacional? In: GOMEZ , José Maria. *América Latina y el (Des)orden Global Neoliberal*. Hegemonía, contrahegemonía, perspectivas. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

MÉSZAROS, István. Bolívar e Chávez: o espírito da determinação radical. *http://resistir-info/*, 1° de mayo de 2006.

MIDDLEBROOK, Kevin J. e RICO, Carlos. *The United States and Latin America in the 1980s*. Contending perspectives of a decade of crisis. Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1986.

MOLS, Manfred. Transformación política en México. In: HOFMEISTER, Wilhelm y THESING, Joseph (eds.). *Transformaciones de los Sistemas Políticos en América Latina*. Buenos Aires, CIEDLA, 1995.

MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. Los EE.UU. y la crisis en Venezuela. *La Onda Digital*, enero de 2003.

MONTENEGRO, Juan Carlos. *Estaño, Liquidación de Comibol y Ocupación de las Minas*, La Paz, octubre de 1986.

MONTÚFAR, César. Hacia un nuevo marco interpretativo de Ia asistencia internacional para el desarrollo. In: GOMEZ , José Maria. *América Latina y el (Des)orden Global Neoliberal*. Hegemonía, contrahegemonía, perspectivas. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

MORA JIMÉNEZ, Henry. Los acuerdos de inversión en los tratados de libre comercio: de vuelta al AMI. EI caso del TLC entre Estados Unidos y los países de Centroamérica. In: ESTAY REYNO, Jaime. *La Economía Mundial y América Latina*. Tendencias, problemas y desafíos. Buenos Aires, CLACSO, 2005.

MORAIS, Fernando et al. *Transamazônica.* San Pablo, Brasiliense, 1970.

MORALES, David et al. *IIRSA: a Nova Integração da Infraestrutura na América do Sul*. San Pablo, PROLAM-USP, 2005.

MORI-CHILE. Latinobarómetro 1996 a 1999/2000. In: *http://www.latinobarometro.cl*.

MORSBACH, Greg. South America unveils pipeline. In: *http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/americas/4766568.stm*, 3 de febrero de 2006.

MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). *Uma Concepção de Desenvolvimento Rural*. s.d.p.

MUÑOZ, Alma E. Fox, tercer momento salinista de la economía neoliberal. *La Jornada*, México, 13 de julio de 2000.

NAVARRO DE TOLEDO, Caio. *O Governo Goulart e o Golpe de '64.* San Pablo, Brasiliense, 1984.

NAVARRO, Zander. Sete teses equivocadas sobre as lutas sociais no campo. In: João P. Stédile (org.). *A Reforma Agrária e a Luta do MST.* Petrópolis, Vozes, 1997.

NOGUEIRA BATISTA JR., Paulo. *O Brasil e a Economia Internacional*. Rio de Janeiro, Elsevier, 2005.

NOLTE, Detlef. De "la larga agonía de la Argentina Peronista" a la "Reconversión Menemista". In: HOFMEISTER, Wilhelm y THESING, Joseph (eds.). *Transformaciones de los Sistemas Políticos en América Latina*. Buenos Aires, CIEDLA, 1995.

O'DONNEL, Guillermo, SCHMITTER, Philippe e WHITEHEAD, Laurence. *Transitions from Authoritarian Rule*. Latin America. Baltimore, The Woodrow Wilson International Center, 1986.

OCAMPO, José. La economía latinoamericana en el 2000. *Notas de la CEPAL* nº 14, enero 2001.

OLIVEIRA, Ariovaldo U. de. *A Geografia das Lutas no Campo*. San Pablo, Contexto, 1988.

OLIVEIRA, Ribamar. Caixa 2. *O Estado de S. Paulo*, 25 de julio de 2005.

OLVERA, Alberto e PANFICHI, Aldo. Para uma outra leitura da dispouta pela construção democrática na América Latina. In: DAGNINO, Evelina et al (org.). *A Disputa pela Construção Democrática na América Latina*. San Pablo, Paz e Terra, 2006.

OPPENHEIMER, Andrés. Del neoliberalismo al neonacionalismo. *El Nuevo Herald*, Miami, 3 de enero de 2002.

OPPENHEIMER, Andrés. *Ojos Vendados*. Estados Unidos y el negocio de la corrupción en América Latina. Buenos Aires, Sudamericana, 2001.

ORDUNA, Víctor. El bloqueador impotente. *El Juguete Rabioso*, La Paz, 25 de julio de 2003.

ORDUNA, Víctor. *La democracia cambia de color*. De abril a Evo. La Paz, 2002.

ORELLANA AILLON, Lorgio. *Nacionalismo, Populismo y Régimen de Acumulación en Bolivia*. Hacia una caracterización del gobierno de Evo Morales. Documento, La Paz, febrero de 2006.

ORTÍZ PINCHETTI, José Agustín. Informe final. *La Jornada*, México, 3 de septiembre de 2000.

OVIEDO, Luis. América Latina: cuadro de situación. *En Defensa del Marxismo* n° 28, Buenos Aires, octubre de 2000.

OVIEDO, Luis. Caracterización del MAS de Evo Morales. *Prensa Obrera* 764, Buenos Aires, 6 de agosto de 2002.

OVIEDO, Luis. Colombia: con una consigna de poder, la situación sería revolucionaria. *Prensa Obrera* nº 715, Buenos Aires, 25 de mayo de 2000.

OVIEDO, Luis. El grupo de enemigos de Venezuela. *Prensa Obrera* nº 789, Buenos Aires, 7 de febrero de 2003.

OVIEDO, Luis. México es um volcán. *Prensa Obrera* nº 946, Buenos Aires, 18 de mayo de 2006.

OVIEDO, Luis. *Una Historia del Movimiento Piquetero*. Buenos Aires, Rumbos, 2004.

OVIEDO, Luis. Venezuela: el alto mando le impone a Chávez la "salida democrática". *Prensa Obrera* nº 786, Buenos Aires, 27 de diciembre de 2002.

PADILLA, Abdel y STEFANONI, Pablo. *¿Cuál es el Juego de las Petroleras?* Documento, La Paz, noviembre de 2005.

PALACIOS, Ariel. Kirchner, ambíguo mas popular. *O Estado de S. Paulo*, 29 de mayo de 2006.

PALMER, Doug. La crisis argentina es un reto al ALCA: la ruptura con su modelo económico conspira contra el libre comercio hemisférico. *El Nuevo Herald*, Miami, 4 de enero de 2002.

PALOMINO, Hector et al. A política e o político nos movimentos sociais na Argentina. In: DAGNINO, Evelina et al (org.). *A Disputa pela Construção Democrática na América Latina*. San Pablo, Paz e Terra, 2006.

PALOMINO, Héctor. Los sindicatos y los movimientos sociales emergentes del colapso neoliberal en Argentina. In: DE LA GARZA TOLEDO, Enrique (org.). *Sindicatos y Nuevos Movimientos Sociales en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2005.

PANDOLFI, Lia. Nordeste: movimentos sociais. *Terra Firme* nº 2, Río de Janeiro, 1985.

Partido Obrero (Comisión Internacional). La agenda revolucionaria en Bolivia. *El Obrero Internacional* n° 5, Buenos Aires, enero de 2006.

Partido Obrero Revolucionario. *Perspectivas da Luta Revolucionária na Bolívia*. Resoluções do Congresso do POR boliviano. San Pablo, Massas, 2006.

PASSOS GUIMARÃES, Alberto. A estrutura produtiva da agricultura brasileira. *Novos Rumos* nº 6/7, San Pablo, 1988.

PATZI, Félix. Miserias de la multiculturalidad y las propuestas de autonomías indígenas. *El Juguete Rabioso*, La Paz, 6 de julio de 2003.

PAZ MARTE, Salvador. Armas biológicas: una muestra de la criminalidad del Plan Colombia. *http://home1.swipnet.se/~w-3481/sept_2/0922_criminal.html*.

Paz Verónica Milet. El Grupo de Rio en el nuevo escenario internacional. In: GOMEZ , José Maria. *América Latina y el (Des)orden Global Neoliberal*. Hegemonía, contrahegemonía, perspectivas. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

PEÑA, Sérgio de La. México: a crise de 1995 em perspectiva histórica. In: *Economia e Sociedade* n° 9, Instituto de Economia da UNICAMP, Campinas, diciembre de 1997.

PERELMAN FAJARDO, Juan. Un dilema entre soberanía y miseria: el gas boliviano. *Trinchera* nº 21, La Paz, 12 de agosto de 2002.

PETRAS, James. “Novos ventos da esquerda” ou palavras ao vento de uma nova direita?. In: *www.rebelion.org,* 30 de mayo de 2006.

PETRAS, James. A bizarre beginning in Bolivia. *Counterpunch*, Nueva York, primera semana de febrero de 2006.

PETRAS, James. América Latina, la Unión Europea y los Estados Unidos: las nuevas polaridades. In: *www. rebelión.org,* 26 de mayo de 2006.

PINHEIRO GUIMARÃES, Samuel. *ALCA e Mercosul: riscos e oportunidades para o Brasil*. Brasília, IPRI/FUNAG, 1999.

PINTO DE ALMEIDA, Elizabeth Accioly. *Mercosul e União Européia: estrutura jurídico-institucional*. Curitiba, Juruá, 2002.

PINTO PARABÁ, Miguel. *Lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de Febrero*. La Paz, Central Obrera Departamental, 2003.

PINZÓN SÁNCHEZ, Alberto. Operación geoestratégica global de EEUU para anexar a América Latina. In: *www. altercom. org*.

PITROLA, Nestor. Caracas: La crisis del Foro Social Mundial. *Prensa Obrera* n 935, Buenos Aires, 2 de febrero de 2006.

PNUD. *Relatório de Desenvolvimento Humano,* 2002. In: *www.unpd.org*.

POCHMANN, Márcio. Desafios atuais do sindicalismo brasileiro. In: DE LA GARZA TOLEDO, Enrique (org.). *Sindicatos y Nuevos Movimientos Sociales en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2005.

POMAR, Valter. *Mesmo que Tardia*. Documento, 2006.

POMAR, Valter. *Palocci caiu: o paloccismo cairá com ele?* Documento, 28 de marzo de 2006.

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A geograficidade do social: uma contribuição para o debate metodológico sobre estudos de conflito e movimentos sociais na América Latina. In: SEOANE, José (org.). *Movimientos Sociales y Conflicto en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

PRADO, Fernando. La crisis del MAS y el MIP. *El Juguete Rabioso*, La Paz, 6 de julio de 2003.

QUERO, Morgan.Una periferia que puede ser centro: sociedad civil y gobernabilidad en Tepoztl. In: LEVY, Bettina (org.). *Crisis y Conflicto en el Capitalismo Latinoamericano*. Buenos Aires, CLACSO, 2002.

QUIJANO, Anibal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LEHER, Roberto y SETUBAL, Mariana. *Pensamento Crítico e Movimentos Sociais.* San Pablo, Cortez, 2005.

RAFFI, Jean-Pierre. Bolívia, Equador: alguns problemas da revolução na América Latina. *A Verdade* n° 45-46, San Pablo, enero de 2006.

RAMIREZ DE RINCÓN, Marta L. O verdadeiro desafio do atual processo de paz na Colômbia. *Diplomacia, Estratégia, Política* nº 3, Brasília, abril de 2005.

Reform and revolution in Venezuela. *International Socialism* n° 109, Londres, invierno de 2006.

REID, Michael. A ALCA e o Plano B. *Valor Econômico*, San Pablo, 6 de noviembre de 2002.

REYES HEROLES, Federico. Adiós a los dioses. *Reforma*, México,25 de julio de 2000; SOTO, Luis. Agenda confidencial. *El Financiero,* México, 15 de septiembre de 2000.

RHON DÁVITA, Francisco. Estado y movimientos étnicos en Ecuador. In: SEOANE, José (org.). *Movimientos Sociales y Conflicto en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

RIEZNIK, Pablo. El gobierno capitalista de Lula: la "etapa superior" del PT. *En Defensa del Marxismo* nº 30, Buenos Aires, mayo de 2003.

RIEZNIK, Pablo. La deuda eterna: el "Plan Brady" o la pequeña historia de una gran entrega. *Razón y Revolución* nº 2, Buenos Aires, primavera de 1995.

RIOETT, Riordan. Brazil’s transition to democracy, *Current History* 88 (536), marzo 1989.

RIQUELME, Quintín. Los conflictos sociales en el contexto de la democracia paraguaya. In: SEOANE, José (org.). *Movimientos Sociales y Conflicto en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

ROCHLIN, James F. *Redefining Mexican “Security”*. Society, state, and region under NAFTA. Boulder, Lynne Riener Publishers, 1997.

RODRÍGUEZ LÓPEZ, Leticia. PRD: falló Zedillo. *El Financiero*, México, 2 de septiembre de 2000.

RODRÍGUEZ, Gloria. Empresas recuperadas: otra respuesta de trabajadores en situación de conflicto laboral. In: SEOANE, José (org.). *Movimientos Sociales y Conflicto en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

ROITMAN ROSENMANN, Marcos. Conflito e crise no pensamento social latino-americano. In: LEHER, Roberto y SETUBAL, Mariana. *Pensamento Crítico e Movimentos Sociais*. San Pablo, Cortez, 2005.

ROMERO, Cristiano. Esgotamento do Estado entra na agenda. *Valor Econômico*, San Pablo, 8 de febrero de 2006.

ROSADO DUQUE, Juan Bernardo. El sindicalismo colombiano: actor social en medio de la guerra, y el temor a la libertad. In: DE LA GARZA TOLEDO, Enrique (org.). *Sindicatos y Nuevos Movimientos Sociales en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2005.

ROUQUIÉ, Alain. *O Extremo Ocidente*. Introdução à América Latina. San Pablo, Edusp, 1992.

RUIZ MEZA, Pablo. De ganar Fox, caería en la tentación del autoritarismo. *El Financiero*, México, 26 de junio de 2000.

SADER, Emir. A esquerda latino-americana no século XXI. In: LEHER, Roberto y SETUBAL, Mariana. *Pensamento Crítico e Movimentos Sociais*. San Pablo, Cortez, 2005.

SADER, Emir. Brasil: una historia de pactos entre elites. In: BORON, Atilio, GAMBINA, Julio y MINSBURG, Naum (orgs). *Tiempos Violentos*. Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

SALAMA, Pierre. Sobre las relaciones del mercado financiero y laboral en América Latina. In: BORON, Atilio, GAMBINA, Julio y MINSBURG, Naum (orgs). *Tiempos Violentos*. Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

SALAZAR ORTULLO, Fernando. El Plan Dignidad y el militarismo en Bolivia. El caso del Trópico de Cochabamba. In: SEOANE, José (org.). *Movimientos Sociales y Conflicto en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

SALUDJIAN, Alexis. Trajetórias de crescimento e volatilidade econômica no Mercosul. *Revista da SEP* n° 14, San Pablo, junio de 2004.

SÁNCHEZ DASA, Germán. La estructura productiva mexicana en el marco de la reproducción neoliberal en América Latina. In: ESTAY REYNO, Jaime. *La Economía Mundial y América Latina*. Tendencias, problemas y desafíos. Buenos Aires, CLACSO, 2005.

SANCHEZ, Juan Carlos. Piqueterismo: una realidad compleja. *ALAI-Amlatina*, Buenos Aires, 22 de febrero de 2005.

SARAVIA LÓPEZ, Alejandra. Evidencias de Ia relación medio ambiente-economía en el caso latinoamericano. In: ESTAY REYNO, Jaime. *La Economía Mundial y América Latina*. Tendencias, problemas y desafíos. Buenos Aires, CLACSO, 2005.

SARNEY, José. Vinte anos de democracia. *Diplomacia, Estratégia, Política* nº 3, Brasília, abril de 2005.

SEOANE, José. Rebelião, dignidade, autonomia e democracia. Do Sul vêm as vozes que compartilhamos. In: LEHER, Roberto y SETUBAL, Mariana. *Pensamento Crítico e Movimentos Sociais*. San Pablo, Cortez, 2005.

SERBIN, Andrés. Sociedad civil, movimientos sociales y globalización en América Latina. In: GOMEZ , José Maria. *América Latina y el (Des)orden Global Neoliberal*. Hegemonía, contrahegemonía, perspectivas. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

SHANIN, Theodor. *Naturaleza y Lógica de la Economía Campesina.* Barcelona, Anagrama, 1976.

SHIFTER, Michael. In search of Hugo Chávez. *Foreign Affairs* vol. 85, n° 3, Nueva York, mayo-junio de 2006.

SINGER, Paul. *Dominação e Desigualdade.* Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1981.

Sistema Económico Latinoamericano (SELA). El FMI, el Banco Mundial y la Crisis Latinoamericana. México, Siglo XXI, 1986.

SKIDMORE, Thomas. *Brasil: de Getúlio a Castelo.* Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988.

SOLOMON, Robert. *Dinheiro em Movimento.* Rio de Janeiro, Record, 2001.

SONNLEITNER, WILLIBALD. Indianidad, violencia revolucionaria y democratización electoral entre los tzotziles y tzeltales de Los Altos de Chiapas, México. In: LEVY, Bettina (org.). *Crisis y Conflicto en el Capitalismo Latinoamericano*. Buenos Aires, CLACSO, 2002.

SOUSA SANTOS, Boaventura. Os novos movimentos sociais. In: LEHER, Roberto y SETUBAL, Mariana. *Pensamento Crítico e Movimentos Sociais*. San Pablo, Cortez, 2005.

SOUZA MARTINS, José de. Luchas agrarias em Brasil. In: Pablo González Casanova (org.). *Historia Política de los Campesinos Latinoamericanos*. México, Siglo XXI, vol. 4, 1985.

SOUZA MARTINS, José de. *Os Camponeses e a Política no Brasil*. Petrópolis, Vozes, 1986.

STÉDILE, João Pedro. O MST e a questão agrária. *Estudos Avançados* 11 (31), San Pablo, IEA-USP, 1997.

STÉDILE, João Pedro. A luta pela Reforma Agrária. *Revista ADUSP* nº 9, San Pablo, junio 1997.

STÉDILE, João Pedro. Entrevista. *Universidade e Sociedade* nº 13, San Pablo, s.d.p.

STRANGE, Susan. *Dinero Loco*. El descontrol del sistema financiero global. Barcelona, Paidós, 1998.

SUÁREZ MONTOYA, Aurelio. Crítica al Área de Libre Comercio para las Américas. *InvestNews*, Bogotá, 2003.

SVAMPA, Maristela y PEREYRA, Sebastian. La experiencia piquetera: dimensiones y desafíos de las organizaciones de desocupados en Argentina. *Revista da SEP* n° 15, San Pablo, diciembre de 2004.

SZMERCSÁNYI, Tamás. O desenvolvimento da produção agropecuária (1930-1970). In: Boris Fausto (org.). *História Geral da Civilização Brasileira*. Tomo III, vol. 4 (O Brasil Republicano), San Pablo, Difel, 1984.

TAVARES, Maria da Conceição. A questão agrária. *Folha de S. Paulo*, 27 de abril de 1997.

The copper rush: Chile struggles to meet soaring demand. *Financial Times*, Londres, 26 de mayo de 2006.

THE WORLD BANK. *World Resources*. Nueva York, 1998.

THOMPSON, Ginger & FORERO, Juan. Ardent populists reinstate leader to run Venezuela. *The New York Times*, 15 de abril de 2002.

THORTENSEN, Vera. *OMC – Organização Mundial do Comércio: as Regras do Comércio Internacional e a Rodada do Milênio*. San Pablo, Aduaneiras, 1999.

TISCHLER, Sérgio. A forma classe e os movimentos sociais na América Latina. In: LEHER, Roberto y SETUBAL, Mariana. *Pensamento Crítico e Movimentos Sociais*. San Pablo, Cortez, 2005.

TOKATLIAN, Juan Gabriel. Colombia: más inseguridad humana, menos seguridad regional. In: GOMEZ, José Maria. *América Latina y el (Des)orden Global Neoliberal*. Hegemonía, contrahegemonía, perspectivas. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

TOKMAN, V. y MARTINEZ, D. *Flexibilización en el Margen*. La reforma del contrato de trabajo. Lima, Organización Internacional del Trabajo, 1999.

TOPALOV, Christian. *Estruturas Agrárias Brasileiras*. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1978.

TORRES FREIRE, Vinicius. A nova idéia fixa do FMI. *Folha de S. Paulo*, 12 de janeiro de 2006.

TOURAINE, Alain. La prioridad fue la ruptura del viejo sistema. *La Nación*, México, 16 de julio de 2000.

TOUSSAINT, Eric. *A Bolsa ou a Vida*. San Pablo, Objetiva, 2002.

TRIGOSO, Gonzalo et al. *Balance Jurídico Social del Motín Policial*. La Paz, 2003.

TROTSKY, Leon. *Sobre la Liberación Nacional*. Bogotá, Pluma, 1976.

URQUIDI, Victor L. e THORP, Rosemary. *América Latina en la Economía Internacional*. México, Fondo de Cultura Económica, 1976.

URRUTIA, Miguel (ed.). Financial Liberalization and the Internal Structure of Capital Markets in Asia and Latin America. Tokyo, The United Nations University, 1988.

VAKALOULIS, Michel. Antagonismo social e ação coletiva. In: LEHER, Roberto y SETUBAL, Mariana. *Pensamento Crítico e Movimentos Sociais*. San Pablo, Cortez, 2005.

VALENZUELA, Raul. Transformación del sistema político peruano. In: HOFMEISTER, Wilhelm y THESING, Joseph (eds.). *Transformaciones de los Sistemas Políticos en América Latina*. Buenos Aires, CIEDLA, 1995.

VAN BEBBER RIOS, Rodrigo. Estado-Nación y conflicto mapuche: aproximación al discurso político de los partidos políticos chilenos. In: LEVY, Bettina (org.). *Crisis y Conflicto en el Capitalismo Latinoamericano*. Buenos Aires, CLACSO, 2002.

VARGAS LLOSA, Mario. Con Evo Morales, Ollanta Humala y Hugo Chávez, la raza se vuelve ideología. *La Nación*, Buenos Aires, 20 de enero de 2006.

VARGAS, Humberto y CÓRDOVA, Eduardo. Bolivia: un país de re-configuraciones por una cultura de pactos políticos y de conflictos. In: SEOANE, José (org.). *Movimientos Sociales y Conflicto en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

VARGAS-HERNÁNDEZ, José G. La transición económica y política del estado mexicano en el umbral del siglo XXI: del estado empresario al 'estado de empresarios'. *Colección de Papers Instituto Internacional de Gobernabilidad*. Paper nº 37. *http://www.iigov.org*.

VELIZ, Cláudio. *América Latina: Estruturas em Crise*. San Pablo, Ibrasa, 1978.

VERGOPOULOS, Kostas. *A Questão Agrária e o Capitalismo*. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977.

VILLAR, Matias. Bush contra México. *Prensa Obrera* nº 947, Buenos Aires, 24 de mayo de 2006.

VILLARROEL NIKITENKO, Miguel. La acción colectiva en Bolivia. Cambio y transformación de los conflictos sociales 1970-1998. In: LEVY, Bettina (org.). *Crisis y Conflicto en el Capitalismo Latinoamericano*. Buenos Aires, CLACSO, 2002.

VIOTTI DA COSTA, Emília. *Da Monarquia à República.* San Pablo, Difel, 1966.

VITULLO, Gabriel. Participación electoral, comportamiento político y desestructuración social en Argentina y Brasil. In: LEVY, Bettina (org.). *Crisis y Conflicto en el Capitalismo Latinoamericano.* Buenos Aires, CLACSO, 2002.

WILSON, Scott. Leader of Venezuela is forced to resign. *The Washington Post*. 13 de abril de 2002.

YÁÑEZ, Carlos. La inversión extranjera directa en América Latina, la gobernabilidad y el desarrollo institucional. Catalunya Global nº 2, 2000. In: *http://www.iigov.org/iigov/cpd/cg2/inici.htm.*

ZEMELMAN, Hugo. Conhecimento social e conflito na América Latina. In: LEHER, Roberto y SETUBAL, Mariana. Pensamento crítico e Movimentos Sociais. San Pablo, Cortez, 2005.

ZEMELMAN, Hugo. Hacia una estrategia de análisis coyuntural. In: SEOANE, José (org.). *Movimientos Sociales y Conflicto en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2004.

ZIBECHI, Raul.Os movimentos sociais latino-americanos: tendências e desafios. In: LEHER, Roberto y SETUBAL, Mariana. *Pensamento Crítico e Movimentos Sociais.* San Pablo, Cortez, 2005.

ZULUAGA NIETO, Jaime. Colombia: entre la democracia y el autoritarismo. In: SEOANE, José (org.). *Movimientos Sociales y Conflicto en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2004.